TABLA DE CONTENIDO

I. OBJETO DE LA DECISIÓN. 4

II. IDENTIFICACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS POSTULADOS. 5

1. Identificación e individualización de los postulados. **5**

2. Antecedentes y requerimientos por la justicia ordinaria. **5**

III. ANTECEDENTES PROCESALES. 9

1. Contextualización. **11**
1.1. Origen del Bloque Héroes de los Montes de María. ---------- 11
1.2. Estructura del Bloque Héroes de los Montes de María. ---------- 18
1.3. Hechos de connotación cometidos por el Bloque Héroes de los Montes de María. ---------- 24
1.4. Relación con políticos locales, regionales y nacionales. ---------- 29
1.5. Financiamiento. ---------- 30
1.6. Permanencia de los postulados LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO y JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA en el Bloque Héroes de los Montes de María. ---------- 32

IV. CONSIDERACIONES. 34

1. Competencia. **34**

2. Requisitos de elegibilidad. **34**
2.1. Desmovilización y desmantelamiento en cumplimiento de acuerdo con el Gobierno Nacional. ---------- 35
2.2. Bienes entregados producto de la actividad ilegal. ---------- 38
2.3. Menores de edad reclutados colocados a disposición del instituto colombiano de bienestar familiar. - 44
2.4. Tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito del grupo armado. ---------- 44
2.5. Cese de toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquiera otra actividad ilícita. ---------- 46
2.6. Que se liberen las personas secuestradas, que se hallen en su poder. ---------- 46

3. De la terminación anticipada del proceso por sentencia anticipada. **47**
3.1. Fundamentación. ---------- 47
3.2. Verificación de los presupuestos necesarios para acceder a la solicitud de terminación anticipada del proceso por sentencia anticipada. ---------- 49

V. CARGOS IMPUTADOS Y ACEPTADOS POR LOS POSTULADOS. 56

1. Preliminares. **56**

2. De los cargos en particular. **60**
2.1. Concierto para delinquir. ---------- 60
2.2. Patrón de macrocriminalidad de homicidios selectivos y múltiples. ---------- 62
2.3. Patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado. ----------103
2.4. Patrón de macrocriminalidad de desaparición forzada. ----------148

3. Alegatos de conclusión. **167**
3.1. Fiscalía General de la Nación. ----------167
3.2. Defensa de los postulados. ----------168
3.3. Representantes de víctimas. ----------169
3.4. Procuraduría General de la Nación. ----------170

VI. DOSIFICACIÓN PUNITIVA. 170

1. De los delitos en particular. **184**
1.1. Concierto para delinquir. ---------- 185
1.2. Homicidio en persona protegida. ---------- 191
1.3. Desaparición forzada. ---------- 194
1.4. Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil. ---------- 197
1.5. Secuestro simple. ---------- 200

2. Conclusión acerca de la pena ordinaria. **201**

VII. DE LA ACUMULACIÓN JURÍDICA DE PENAS. 203

VIII. DE LA PENA ALTERNATIVA. 209

IX. DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO. 217

1. Casa de UBER ENRIQUE BANQUÉZ MARTÍNEZ, Ubicada En El Conjunto Villa Carolina - El Edén, Lote No. 9, Cartagena (Bolívar). ID 60001 BMM. **222**

2. Finca VERAKA (ASOJUVENTUD). ID 60175 BMM. ---------- 224

3. Apartamento y garaje No. 10 de NELSON STANP BERRIO. ID 60210 BMM. **227**

4. Finca CIENAGUITA 1. ID 60172 BMM. **229**

5. Finca CIENEGUITA 2. ID 60173 BMM. **232**

6. Finca LOS PÁJAROS. ID 60174 BMM. **234**

ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN. 237

X. DEL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE CARÁCTER EXCEPCIONAL A LAS VÍCTIMAS. 242

1. Preliminares. **247**
1.1. Fundamentos de la responsabilidad civil extracontractual. ---------- 247
1.2. El hecho victimizante. ---------- 248
1.3. El daño ---------- 249
1.4. Relación de causalidad entre el hecho y el daño ---------- 251
1.5. Del deber general de reparación. ---------- 251
1.6. Las víctimas ---------- 253
1.7. La reparación integral ---------- 260
1.8. La prueba ---------- 280

2. Trámite incidental. **284**

3. De las liquidaciones en concreto. **286**
3.1-ABOGADO: Dr. EMERSON RAFAEL ROCHA OSORIO ---------- 287
3.2-ABOGADA: Dra. NOHEMÍ BENÍTEZ RIBERO ---------- 322
3.3-ABOGADO: Dr. RAFAEL ENRIQUE ARTETA ARTETA ---------- 326
3.4-ABOGADA: Dra. IRMA SOFIA DE LA OSSA SALCEDO ---------- 330
3.5- OTRAS MEDIDAS DE REPARACIÓN. ---------- 334
MEDIDAS SOLICITADAS ---------- 334
DE LO RESUELTO POR LA SALA ---------- 334

4. Dimensión colectiva del daño. **336**

4.1. Intervención de la Procuraduría General de la Nación.----------336
4.2. Consideraciones de la Sala sobre la dimensión colectiva del daño.----------343

5. Actos de Contribución a la Reparación Integral......**348**

6. Prohibición de la doble reparación......**350**

XI. RESUELVE 350

Magistrada Ponente
CECILIA LEONOR OLIVELLA ARAUJO

Radicado Sala: 08-001-22-52-003-2020-84986
Aprobada por Acta No. 010.

Barranquilla, veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

I. OBJETO DE LA DECISIÓN.

Procede esta Sala de Conocimiento de Justicia y Paz a proferir la sentencia anticipada que en derecho ha encontrado correspondiente dentro del presente proceso, seguido en contra de los postulados a la Ley de Justicia y Paz **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** (alias "Daniel") y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** (alias "El Ñato"), quienes formaron parte del extinto Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, en adelante AUC, injerencia que tuvieron en la región de los Montes de María[1], ello conforme a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 18 de la Ley 975 de 2005, modificado por la Ley 1592 de 2012, así como en el artículo 36 del Decreto Reglamentario 3011 de 2013, *"Por el cual* se *reglamentan las leyes 975, de 2005, 1448 de 2011 y 1592 de 2012"*, compilado en el artículo 2.2.5.1.2.3.2 del Decreto 1069 de 2015, *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho"*, una vez sustentada la solicitud de terminación anticipada del proceso por sentencia anticipada por parte de la Fiscalía Doce de la Dirección de Fiscalías Delegadas Nacional Especializada de Justicia Transicional[2], en respaldo a la petición que invocara en el mismo sentido la defensa de los postulados[3], y evacuado a plenitud el incidente de reparación integral a las víctimas de carácter excepcional.

---

[1] Recordando aquí que LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO, lo hizo en las poblaciones de: San Pablo, Buenavista y Aguas lindas (Bolívar), San Onofre y Sincelejo (Sucre), entre otros; y JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA, en el Golfo de Morrosquillo departamentos de (Sucre y Córdoba), San Onofre (Sucre), Tierralta (Córdoba), Cartagena departamento de (Bolívar), entre otros. (Documentos obrantes en la carpeta digital reseñadas bajo el rotulo "Hojas de vida").

[2] Para ese momento, a cargo de la Dra. Jeannette Virginia Cabarcas Castillo.

[3] Abogada Marcela Valbuena Useche, en sustitución de la señora abogada defensora de confianza Beatriz Eliana Quintero Benítez

.

II. IDENTIFICACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS POSTULADOS.[4]

1. Identificación e individualización de los postulados.

1.1. **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** (alias "Daniel"), se identifica con la cédula de ciudadanía No. 78.381.077 expedida en San Andrés de Sotavento (Córdoba), nació en esa misma municipalidad el diecisiete (17) de mayo de 1982, hijo de MARLENA CASTILLO y ÁNGEL ESQUIVEL GÓMEZ (fallecido), de estado civil soltero.

1.2. **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** (alias "El Ñato"), se identifica con la cédula de ciudadanía No. 92.447.350 expedida en San Onofre (Sucre), nacido en ese mismo municipio el dieciséis (16) de mayo de 1977, hijo de JUAN JOSÉ REVOLLO QUEFFES y ROSAURA PATERNINA RÍOS, estado civil en unión libre con LUZ NEYDA BERRIO RODRÍGUEZ. Como señal particular registra tatuaje en el hombreo derecho con la figura del bien y el mal y los nombres "María Alejandra" y "Laura Vanesa" además presenta cicatriz de labio leporino y paladar hendido.

2. Antecedentes y requerimientos por la justicia ordinaria.[5]

La Fiscalía General de la Nación en desarrollo de la audiencia de sustentación de solicitud de terminación anticipada del proceso por sentencia anticipada precisó los registros de anotaciones de los postulados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** (alias "Daniel") y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** (alias "El Ñato"), que se relacionan a continuación[6].

---

[4] Sesión de audiencia del 23 de abril de 2021, audio 08001225200320200000100_20210423_01, Rec. 29:50

[5] Conforme al audio Audiencia de Sustentación de la Solicitud de Sentencia Anticipada Audio 08001225200320200000100_20210628_01, rec. 1:31:58. Sesión del 28 de junio del 2021.

[6] De acuerdo con el informe de investigador de campo FPJ-11 de fecha 7 de mayo de 2021, signado por MIRYAM OCHOA GONZÁLEZ Técnico Investigador II, miembro del Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI de la Fiscalía General de la Nación, de análoga manera, en la parte final del aludido informe se anexa pantallazo del oficio No. S-20210204916/SUBINGRAIC-1.9 de fecha 7 de mayo de 2021, suscrito por el Patrullero HEITON LUIS PADILLA GUARDIOLA Analista Criminal SIJIN – MEBAR, de la Policía Nacional Dirección de Investigación Criminal *e INTERPOL MEBAR.* También, decisiones aportadas en el expediente digital, de las cuales se deja registro a pie de página en este acápite, y que hacen parte de las carpetas anexas de la actuación, allegadas mediante archivos magnéticos en desarrollo de la vista pública.

LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO CC: 78381077

SENTENCIA CONDENATORIA - VIGENTE			
OFICIO:	12412 del 20/09/2011	**INSTANCIA:**	0
PROCESO:	2004002571479	**CONDENA:**	
AUTORIDAD:	JUZGADO EJECUCION PENAS EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS 2 ,	**BENEFICIO:**	
MPIO/DPTO:	TUNJA, BOYACÁ	**DELITO:** HOMICIDIO AGRAVADO, HOMICIDIO ART. 103 CP.	
FEC. DECISIÓN:			
OBSERVACIÓN: J2 PENAL CTO SINCELEJO IMPUSO PENA PRIV-LIB DE 33 AÑOS. SOL ANTEC. VIG J2 EPMS TUNJA R/DAS/2011-910469. SOL ANTEC. MISMO RD			

LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO CC: 78381077

SENTENCIA CONDENATORIA - VIGENTE			
OFICIO:	SIN NRO. del 14/04/2011	**INSTANCIA:**	0
PROCESO:	20040025700	**CONDENA:**	
AUTORIDAD:	JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO 2 ,	**BENEFICIO:**	
MPIO/DPTO:	SINCELEJO, SUCRE	**DELITO:** HOMICIDIO ART. 103 CP.	
FEC. DECISIÓN:			
OBSERVACIÓN: 10-06-05 CONDENO 13 AÑOS PRISION.			

LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO CC: 78381077

SENTENCIA CONDENATORIA - VIGENTE			
OFICIO:	0 del	**INSTANCIA:**	0
PROCESO:	2005002100	**CONDENA:**	
AUTORIDAD:	JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO 1 ,	**BENEFICIO:**	
MPIO/DPTO:	SINCELEJO, SUCRE	**DELITO:** HOMICIDIO ART. 103 CP.	
FEC. DECISIÓN:			
OBSERVACIÓN: 06-05-05 CONDENA 25 AÑOS PRIS,CONOCIO J/2 PCTO SINCEL,FS5 ,FS6 SCC SINC.JEPMS 2 VPAR*07-19740 EL 15-01-10 ACUMULA (NO INFORMA LA 2)TOTAL 33 AÑOS(INPEC VPAR P72H R857639-06,R/476403/07.P72 R/1170254-10 APLAZ.MISMO S/A P72H RDAS 379682-11 APLAZ CLARID ACUM			

LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO CC: 78381077

ORDEN DE CAPTURA VIGENTE			
OFICIO:	012 del	**NRO. O.C.:**	10563
PROCESO:	721	**FECHA O.C.:**	12/01/2012
AUTORIDAD:	UNIDAD NAL. DE FISCALIA DE DERC. HUMANOS 1	**DELITO:** ACCESO CARNAL VIOLENTO ART. 298 C.P MOD ART 2 LEY 360/97 (VIGENTE), DESPLAZAMIENTO FORZADO (VIGENTE), HOMICIDIO AGRAVADO (VIGENTE), HURTO AGRAVADO (VIGENTE)	
MPIO/DPTO:	BOGOTA D.C. (CT), CUNDINAMARCA		
MOTIVO O.C:	INDAGATORIA		
OBSERVACIÓN: OBSERVACIONES: BR / BR / PRÓRROGAS: BR / BR / BR / BR / VENCIMIENTO: BR / BR /			

LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO CC: 78381077

ORDEN DE CAPTURA VIGENTE			
OFICIO:	672463 del	**NRO. O.C.:**	672463
PROCESO:	41691	**FECHA O.C.:**	04/06/2004
AUTORIDAD:	FISCALIA ESPECIALIZADA 3	**DELITO:** HOMICIDIO (VIGENTE)	
MPIO/DPTO:	SINCELEJO (CT), SUCRE		
MOTIVO O.C:	INDAGATORIA		
OBSERVACIÓN: OBSERVACIONES: CAPTURADO 18102004 CTI BR / BR / PRÓRROGAS: BR / BR / BR / BR / VENCIMIENTO: BR / BR /			

LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO CC: 78381077

ORDEN DE CAPTURA VIGENTE			
OFICIO:	3601500 del	**NRO. O.C.:**	3601500
PROCESO:	43389	**FECHA O.C.:**	07/06/2004
AUTORIDAD:	FISCALIA ESPECIALIZADA 3	**DELITO:** HOMICIDIO (VIGENTE)	
MPIO/DPTO:	SINCELEJO (CT), SUCRE		
MOTIVO O.C:	INDAGATORIA		
OBSERVACIÓN:	OBSERVACIONES: BR / BR / PRÓRROGAS: BR / BR / BR / BR / VENCIMIENTO: BR / BR /		

LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO CC: 78381077

ORDEN DE CAPTURA VIGENTE			
OFICIO:	0010563 del 12/01/2012	**NRO. O.C.:**	0
PROCESO:	721	**FECHA O.C.:**	
AUTORIDAD:	FISCALIA ESPECIALIZADA UNIDAD NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 30	**DELITO:** ACCESO CARNAL VIOLENTO ART. 205 CP., DESPLAZAMIENTO FORZADO ART 180 CP., HOMICIDIO AGRAVADO, HURTO AGRAVADO	
MPIO/DPTO:	BOGOTÁ D. C., BOGOTA D.C.		
MOTIVO O.C:			
OBSERVACIÓN:	FECHA DE DECISION: 17/01/2012. PARA INDAGATORIA		

LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO CC: 78381077

ORDEN DE CAPTURA VIGENTE			
OFICIO:	360001500 del 07/06/2004	**NRO. O.C.:**	0
PROCESO:	43389	**FECHA O.C.:**	
AUTORIDAD:	FISCALIA SECCIONAL UNIDAD SECCIONAL DE FISCALIAS 6	**DELITO:** HOMICIDIO ART. 103 CP.	
MPIO/DPTO:	SINCELEJO, SUCRE		
MOTIVO O.C:			
OBSERVACIÓN:	OC NO 360001500 DE 07/06/04.		

LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO CC: 78381077

MEDIDA DE ASEGURAMIENTO VIGENTE			
OFICIO:	321 del 28/10/2019	**NRO. MEDIDA:**	0
PROCESO:	080012252001201984986	**FECHA MEDIDA:**	23/10/2019
AUTORIDAD:	TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA DE JUSTICIA Y PAZ 0	**DELITO:** DESAPARICION FORZADA (VIGENTE), DESPLAZAMIENTO FORZADO (VIGENTE), HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA (VIGENTE)	
MPIO/DPTO:	BARRANQUILLA (CT), ATLANTICO		
TIPO:	VIGILANCIA ELECTRONICA		
OBSERVACIÓN:	BR / PRÓRROGAS: BR / BR / BR / VENCIMIENTO: BR / BR /		

LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO CC: 78381077

MEDIDA DE ASEGURAMIENTO VIGENTE			
OFICIO:	SIN NRO. del	**NRO. MEDIDA:**	188
PROCESO:	721	**FECHA MEDIDA:**	25/02/2013
AUTORIDAD:	FISCALIA GENERAL DE LA NACION 0	**DELITO:** CONCIERTO PARA DELINQUIR ART. 186 C.P. MOD. ART. 8 LEY 365/97 ()	
MPIO/DPTO:	BOGOTA D.C. (CT), CUNDINAMARCA		
TIPO:	MEDIDA DE ASEGURAMIENTO		
OBSERVACIÓN:	UNI. NAC. DE FIS. DERECHOS HUMANOS Y DER. INTERNACIONAL HUMANITARIO BR / PRÓRROGAS: BR / BR / BR / VENCIMIENTO: BR / BR /		

JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA CC: 92447350

SENTENCIA CONDENATORIA - VIGENTE			
OFICIO:	1962 del	**INSTANCIA:**	1a Instancia
PROCESO:	38	**CONDENA:**	,PRISIÓN: 19 años 6 meses
AUTORIDAD:	JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO 1 ,	**BENEFICIO:**	SUBROGACIÓN CONCEDIDA
MPIO/DPTO:	SINCELEJO (CT), SUCRE	**DELITO:**	DESAPARICION (VIGENTE)
FEC. DECISIÓN:	29/12/2011		
OBSERVACIÓN: DE IGUAL MANERA INDICAN QUE EN SEGUNDA INSTANCIA LA CONDENA SERA DE 11 AÑOS Y 3 MESES Y LA MULTA DE 750 SMLMV			
ESTADO PENA: SENTENCIA CONDENATORIA			

JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA CC: 92447350

SENTENCIA CONDENATORIA - VIGENTE			
OFICIO:	1038 del	**INSTANCIA:**	1a Instancia
PROCESO:	45	**CONDENA:**	
AUTORIDAD:	JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO 1 ,	**BENEFICIO:**	NO REPORTADA
MPIO/DPTO:	SINCELEJO (CT), SUCRE	**DELITO:**	CONCIERTO PARA DELINQUIR ART. 186 C.P. MOD. ART. 8 LEY 365/97 (VIGENTE), VIOLACION ILICITA DE COMUNICACIONES ART. 288 C.P (VIGENTE)
FEC. DECISIÓN:	04/06/2009		
OBSERVACIÓN: RADICADO 2004-00045, IMPONER MULTA DE 2000 SMLMV PARA EL AÑO 2004 A FAVOR DEL TESORO NACIONAL, CONFIRMA LA SENTENCIA TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO SALA DE DECISION PENAL. TELEFONO DEL JUZGADO 2754780 EXT 1080.			
ESTADO PENA: SENTENCIA CONDENATORIA			

JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA CC: 92447350

SENTENCIA CONDENATORIA - VIGENTE			
OFICIO:	0 del	**INSTANCIA:**	0
PROCESO:	2008031	**CONDENA:**	
AUTORIDAD:	JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO 0 ,	**BENEFICIO:**	
MPIO/DPTO:	SINCELEJO, SUCRE	**DELITO:**	HOMICIDIO ART. 103 CP., SECUESTRO SIMPLE ART. 168 CP.
FEC. DECISIÓN:			
OBSERVACIÓN: SENT 30/12/08 CONDENA 18 AÑOS 11 MESES DE PRISION,NIEGA SUBROGADO PENAL.(CARCEL DE V/DUPAR P/72H RAD 948250/09).			

JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA CC: 92447350

SENTENCIA CONDENATORIA - VIGENTE			
OFICIO:	0 del	**INSTANCIA:**	0
PROCESO:	200400045	**CONDENA:**	
AUTORIDAD:	JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO 0 ,	**BENEFICIO:**	
MPIO/DPTO:	SINCELEJO, SUCRE	**DELITO:**	CONCIERTO PARA DELINQUIR ART. 340 CP., VIOLACION ILICITA DE COMUNICACIONES ART. 192 CP.
FEC. DECISIÓN:			
OBSERVACIÓN: SENT 21/03/05 CONDENA 6 AÑOS 6 MESES DE PRISION,NIEGA SUBROGADO PENAL.(CARCEL DE V/PAR P/72H RAD 702396/07)			

JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA CC: 92447350

MEDIDA DE ASEGURAMIENTO VIGENTE			
OFICIO:	0884892 del 05/04/2005	**NRO. MEDIDA:**	0
PROCESO:	168325	**FECHA MEDIDA:**	05/04/2005
AUTORIDAD:	FISCALIA ESPECIALIZADA UNIDAD ESPECIALIZADA 5	**DELITO:**	CONCIERTO PARA DELINQUIR ART. 340 CP., DESAPARICION FORZADA ART 165 CP., HOMICIDIO ART. 103 CP.
MPIO/DPTO:	CARTAGENA DE INDIAS, BOLÍVAR		
TIPO:			

JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA	CC: 92447350

MEDIDA DE ASEGURAMIENTO VIGENTE			
OFICIO:	321 del 28/10/2019	**NRO. MEDIDA:**	0
PROCESO:	080012252001201984986	**FECHA MEDIDA:**	23/10/2019
AUTORIDAD:	TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL SALA DE JUSTICIA Y PAZ 0	**DELITO:**	DESAPARICION FORZADA (VIGENTE), DESPLAZAMIENTO FORZADO (VIGENTE), HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA (VIGENTE)
MPIO/DPTO:	BARRANQUILLA (CT), ATLANTICO		
TIPO:	VIGILANCIA ELECTRONICA		
OBSERVACIÓN:	BR / PRÓRROGAS: BR / BR / BR / VENCIMIENTO: BR / BR /		

III. ANTECEDENTES PROCESALES.

1. Ante el Despacho de Control de Garantías del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla[7], se llevó a cabo la Audiencia de Formulación de Imputación Parcial de Cargos durante el día 23 de octubre de 2019[8] en contra de los postulados LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (alias "Daniel") y JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA (alias "El Ñato"), a quienes les fueron imputados un total de 49 cargos[9] por los cuales se les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, la cual le fue sustituida únicamente a JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA en su momento, en tanto que, el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO todavía no cumplía los requisitos para la sustitución[10].

2. Por reparto efectuado el 18 de febrero del 2020, la actuación adelantada en contra de los postulados LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (alias "Daniel") y JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA (alias "El Ñato") fue asignada al despacho No. 003 de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a cargo de la suscrita Magistrada Ponente, por solicitud que elevara la Fiscalía Doce de la Unidad Nacional Especializada de Justicia Transicional de esta ciudad, a fin de adelantar Audiencia Concentrada de Formulación y Aceptación de Cargos[11].

3. En consideración a las instrucciones impartidas por la declaratoria de la Emergencia Sanitaria como consecuencia de la propagación de la pandemia por el COVID-19 o CORONAVIRUS en el Territorio Nacional y de conformidad con el

---

[7] Presidido por el señor Magistrado Dr. Carlos Andrés Pérez Alarcón.
[8] Acta No. 116-2019.
[9] 32 cargos a ESQUIVEL CASTILLO y 17 cargos a REVOLLO PATERNINA.
[10] Acta del despacho de Control de Garantías Acta No. 116-2019.
[11] Acta Individual de Reparto obrante en el cuaderno del Despacho "Solicitud de Audiencia Concentrada de Formulación y Aceptación de Cargos" folio 79.

Acuerdo PCSJA20-11546 del 25 de abril de 2020 emitido por el Consejo Superior de la Judicatura, y demás disposiciones concordantes y complementarias, la Magistratura solicitó al Centro de Documentación Judicial –CENDOJ- de la Rama Judicial, coordinar la transmisión simultánea y virtual de la diligencia a fin de garantizar la participación de partes e intervinientes.

4. En sesiones de 19, 21, 22, 23 y 26 de abril del 2021, tuvo lugar la Audiencia Concentrada de Formulación y Aceptación de Cargos, de acuerdo con lo normado en el artículo 19 de la Ley 975 de 2005, modificado por la Ley 1592 de 2012, y en el Decreto 1069 de 2015, en las cuales la señora Fiscal del momento expuso los aspectos atinentes a la contextualización, génesis y georreferenciación del grupo armado organizado al margen de la ley, así como los requisitos de elegibilidad y las hojas de vida de los postulados.

5. En desarrollo de la sesión de audiencia del 26 de abril de 2021, la señora representante del ente acusador manifestó que, de acuerdo con la solicitud presentada por los postulados, respaldadas por su abogada defensora, desistía de la audiencia inicialmente peticionada a la Magistratura con el propósito de presentar y sustentar en su lugar la terminación anticipada del proceso por sentencia anticipada, con fundamento ello en el artículo 18 de la Ley 975 de 2005, modificado por la Ley 1592 de 2012, y el artículo 2.2.5.1.2.3.2 del Decreto 1069 de 2015[12].

6. Conforme a lo precedente, mediante decisión del 15 de noviembre de 2022, la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, resolvió, entre otras cosas:

> *PRIMERO: ACCEDER a la solicitud de TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO POR SENTENCIA ANTICIPADA solicitada por la Fiscalía Doce Delegada de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, con relación a los postulados: JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA (alias "El Ñato") y LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (alias "Daniel"), quienes formaron parte del extinto Bloque Héroes de los Montes de María de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia AUC, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión, y por los hechos que hacen parte de esta actuación.*

[12] Audiencia de solicitud de terminación anticipada del proceso por sentencia anticipada que se desarrolló los días 28, 29 y 30 de junio; 1 y 2 de julio de 2021.

SEGUNDO: DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en el acápite intitulado de "otras decisiones", de esta providencia.

TERCERO: En firme esta decisión DISPÓNGASE la apertura y adelantamiento del incidente de reparación integral a las víctimas de carácter excepcional.

(...)".

7. Como consecuencia de la anterior decisión, se procedió a la instalación del incidente de Reparación Integral de carácter excepcional, de conformidad con lo normado en el artículo 2.2.5.1.2.3.2 del Decreto 1069 de 2015, el cual se desarrolló en sesiones de audiencia virtuales durante los días 15, 16, 17 y 23 de marzo de 2023.

1. Contextualización[13].

Los referentes contextuales relacionados con el surgimiento, desarrollo, consolidación y estructura del Bloque Héroes de los Montes de María han quedado suficientemente plasmados en sentencias proferidas en el marco del proceso penal especial de Justicia y Paz[14].

No obstante, lo anterior, se considerarán los elementos probatorios aducidos por el ente acusador durante el trámite procesal a efectos de realizar un recuento sucinto sobre el modo de actuar y las dinámicas de ese grupo armado organizado al margen de la ley, así como las circunstancias modales en que se perpetraron los hechos delictivos que hacen parte de este proceso y que fueron aceptados por los aquí postulados y que configuran los patrones de macrocriminalidad que documenta la presente sentencia.

1.1. Origen del Bloque Héroes de los Montes de María.

[13] Sesión de audiencia del 21 de abril de 2021, audio 08001225200320200000100_20210421_01, Rec. 1:17:30.
[14] Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, decisión del 29 de junio de 2010, rad. 110016000253200680077, M.P. Uldi Teresa Jiménez López, con decisión de segunda instancia de la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia del 27 de abril de 2011, rad. 34547, M.P. María Del Rosario González De Lemos. Decisión del 20 de noviembre de 2014 de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, rad. 11 001 22 52 000 2014 00027, M.P. Léster M. González R., con decisión de segunda instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del 24 de octubre de 2016, rad. 46075, M.P. José Luis Barceló Camacho. Decisión del 15 de junio de 2016 de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, rad. 2006 80848, M.P. Ricardo Rendón Puerta, con decisión de segunda instancia de la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia del 10 de abril de 2019, rad. 48726, M.P. José Francisco Acuña Vizcaya.

La subregión de los Montes de María está conformada por los municipios de San Jacinto, San Juan Nepomuceno, María La Baja, Córdoba, Zambrano, El Guamo y El Carmen de Bolívar en el departamento de Bolívar y San Onofre, Ovejas, Chalán, Colosó, Morroa, Toluviejo, Los Palmitos y San Antonio de los Palmitos en el departamento de Sucre. En total, la subregión de los Montes de María tiene una extensión de 6.297 km^2, de los cuales 3.719 km^2 corresponden al departamento de Bolívar y 2.578 km^2 al de Sucre.

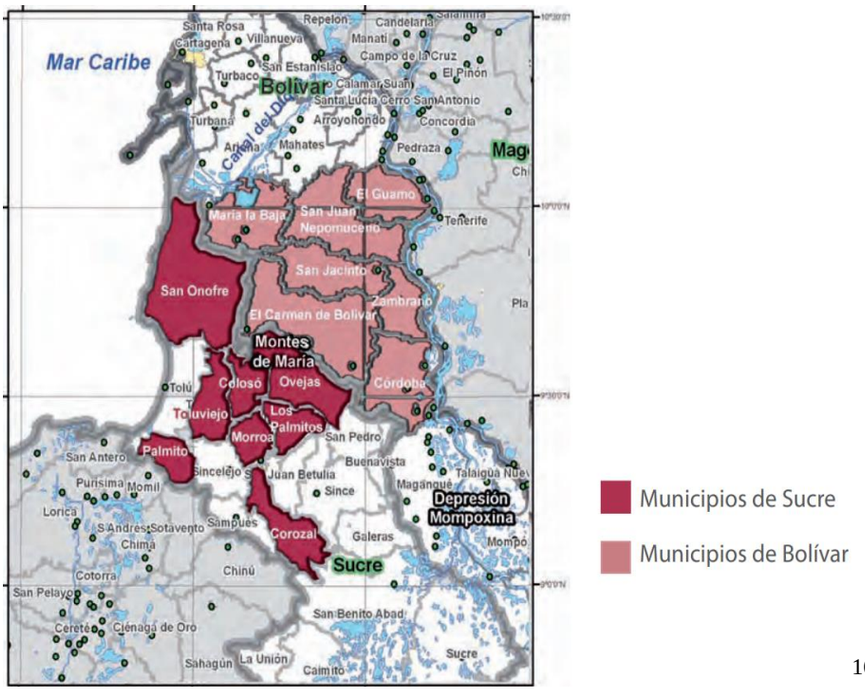
De igual forma los Montes de María se divide en las siguientes zonas: *i)* zona montañosa, que se encuentra localizada entre la Transversal del Caribe y la Troncal de Occidente y está conformada por los municipios de Chalán, Colosó, Morroa, Ovejas y Los Palmitos. Esta zona está propiamente comprendida en la Serranía de San Jacinto, prolongación de la Serranía de San Jerónimo. *ii)* Zona Troncal del Río Magdalena, ubicada al occidente de los Montes de María, correspondiendo toda su extensión a los municipios de El Guamo, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Zambrano y Córdoba. Y *iii)* Zona Pie de Monte Occidental, localizada entre la carretera Troncal de Occidente (sector El Viso-Sincelejo) y el río Magdalena. Correspondiente a los municipios de María La Baja, San Onofre, Toluviejo y San Antonio de Palmitos[15].

Subregión de los Montes de María Departamentos Sucre y Bolívar.



[15] Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, sentencia del 20 de noviembre de 2014, M.P. Léster M. González R.

Municipios de la subregión de los Montes de María.



16

Para el año de 1993 los hermanos CARLOS y VICENTE CASTAÑO GIL, enviaron desde Urabá un comando integrado por alias "Baltazar", alias "Maicol", alias "Cara é Palo", alias "Tony" y alias "El Capi", como comandantes del grupo conocido como la "Sección Sucre", con la finalidad de contrarrestar el accionar de los grupos guerrilleros en el departamento de Sucre, especialmente a los frentes 35 y 37 de las FARC al mando de Martin Sombra, el Bloque Jaime Bateman Cayón del ELN y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Coetáneamente se referencia en esa época el surgimiento de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada para la Defensa Agraria CONVIVIR[17] instituidas como grupos de seguridad privada que permitía a los ganaderos y terratenientes ejercer la defensa de sus intereses mediante la organización de pequeños grupos de personas armadas para enfrentar a la subversión en procura de restablecer la seguridad, que dio lugar al surgimiento de los primeros grupos de autodefensas, los cuales crecieron de manera directamente proporcional al crecimiento y fortalecimiento de los grupos subversivos, cuya expansión se dio en los departamentos del Cesar, Magdalena y Córdoba en cabeza de SALVATORE MANCUSO GÓMEZ alias "mono Mancuso" o "Santander Lozada", los hermanos CARLOS y VICENTE CASTAÑO y RODRIGO TOVAR PUPO alias "Jorge 40".

---

[16] PNUD, Área de paz, desarrollo y reconciliación. *Los Montes de María: Análisis de la conflictividad*. Colombia 2010. En: https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/COL/00058220_Analisis%20conflcitividad%20Montes%20de%20Maria%20PDF.pdf

[17] Creadas por los decretos: 2453 de 1993, 356 de 1994 y la Resolución 368 de 1995.

Para marzo de 1997 en el territorio nacional operaban 414 de esas cooperativas, de las cuales 5 se ubicaban en el departamento de Bolívar y otras 5 en Sucre, que tenían como objeto prevenir o detener perturbación a la seguridad y tranquilidad individual.

Por su parte, SALVATORE MANCUSO GÓMEZ recibió la invitación de JAIRO PINEDA para que se instalara en El Guamo departamento de (Bolívar), toda vez que, si bien él contaba con un pequeño grupo para cuidar su finca, tenía que sucumbir al accionar de la guerrilla de las FARC, para lo cual le ofreció en donación unas tierras, y otras se las vendió a un precio muy bajo. Fue así como el mentado MANCUSO GÓMEZ adquirió en el departamento de Bolívar la finca San José, extendiéndose luego a las fincas Las Pampas, Chimborazo, Carare, El Bongo, Totumo, La Marquesa, Villa Amalia y Mata é Perro, que fueron administradas por hombres de su confianza como alias "Darío", "Bateman", EDWIN MANUEL TIRADO MORALES alias "El Chuzo", y desde enero de 1998 por SERGIO MANUEL CÓRDOBA ÁVILA alias "El Gordo" o "120", quien había sido su escolta personal y hombre de confianza en la ciudad de Montería, quien a partir del 1° de enero de 1999 asumió el mando militar en la zona hasta su captura el 31 de Julio de 2002 en Cartagena; por su parte, en Córdoba Tetón y Magangué (Bolívar), se instaló inicialmente alias "Omega", quien posteriormente fue reemplazado por LUIS FRANCISCO ROBLES MENDOZA alias "Amaury".

De los hechos criminales acontecidos en esa época se destaca el sucedido el 30 de noviembre de 1996 en el municipio de El Guamo (Bolívar) en el que resultaron muertas cuatro personas, hecho que se le atribuyó al grupo de autodefensas que delinquía en esa zona; luego, el grupo ilegal que operaba en Sucre, el 4 de diciembre de 1996, incursionó en el corregimiento de Pichilín asesinando a cuatro personas; y en el municipio de Colosó causaron la muerte de 11 habitantes, generando varios desplazamientos.

Debido a que los pequeños grupos enviados por los hermanos CASTAÑO eran intermitentes y el grupo de MANCUSO GÓMEZ instalado en El Guamo (Bolívar) se limitaba a cuidar fincas y a desplegar su accionar hacia el norte del departamento, se promovió para el año 1997 una reunión para rediseñar la

estrategia de un grupo con vocación de permanencia, la cual se produjo en la Finca Las Canarias de propiedad de MIGUEL ÁNGEL NULE AMÍN ubicada en la zona rural de Sincelejo (Sucre), presidida por SALVATORE MANCUSO GÓMEZ y CARLOS MAURICIO GARCÍA FERNÁNDEZ alias "Rodrigo" o "Doble Cero", a la cual asistieron más de medio centenar de personas entre ganaderos, banqueros, comerciantes, miembros de los gremios de la producción, de los cuales se destacan: FRANCISCO JAVIER PIEDRAHITA, ganadero y caballista antioqueño que había constituido un grupo de CONVIVIR registrado en el mes de marzo de 1996 con el nombre de "Nuevo Amanecer", y su hombre de seguridad RODRIGO ANTONIO MERCADO PELUFO; también SALOMÓN FERIS CHADID alias "08"; ÁNGEL DANIEL VILLAREAL, ex alcalde y ex presidente de la Asamblea de Sucre; VÍCTOR GUERRA DE LA ESPRIELLA, creador de la CONVIVIR "Orden y Desarrollo", en enero de 1997; así como EDWAR COBOS TÉLLEZ, administrador agropecuario de la hacienda Las Melenas, quien el 24 de agosto de 1995 había sido sujeto secuestro, y quien debió soportar por parte de la guerrilla de las FARC el incendio de la hacienda que administraba y la muerte del ganado a su cargo.

Escuchada la exposición de MANCUSO GÓMEZ y alias "Doble Cero", los asistentes, especialmente FRANCISCO JAVIER PIEDRAHITA, concluyeron que el modelo de las autodefensas que había tenido éxito en Córdoba, el cual obedeció a integrar a nativos conocidos de las regiones con sentido de pertenencia con el fin de darle sentido de propiedad y familiaridad al proyecto, debía consolidarse en Sucre, lo que fue acogido por los presentes; así mismo, se propuso que el comandante del nuevo grupo permanente fuera RODRIGO ANTONIO MERCADO PELUFO alias "Cadena", quien luego de hacer curso de comandante en la escuela de La "Acuarela" o "Treinta y Cinco", recibió el mando de parte de alias "Tonny", quien hasta entonces había dirigido el grupo Sucre, constituyéndose bajo su mando la nueva "Compañía Sucre" del Bloque Norte, operando en Tolú, Toluviejo, San Onofre, en Sincelejo y en San Antonio de Palmito y con entradas esporádicamente a las poblaciones de María La Baja y a El Carmen de Bolívar (Bolívar); así mismo, se acordó implementar las CONVIVIR en las áreas de injerencia, con miras a recoger información y brindársela a las Fuerzas Armadas, así como prestar sus hombres para *"ajusticiar"* a quienes estuvieran comprometidos con organizaciones subversivas[18].

[18] Versión Libre del 15 de mayo de 2007, vertida por el postulado Salvatore Mancuso Gómez.

Para el día 18 de abril de 1997 se dio la conversión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá ACCU[19] en las Autodefensas Unidas de Colombia AUC.

En noviembre de 1998 se suscitó acercamientos entre EDWAR COBOS TÉLLEZ alias "Diego Vecino" y CARLOS CASTAÑO lo que le permitió al primero formar parte del proyecto promovido por la llamada casa CASTAÑO y asumir el mando político y social de las de las Autodefensas en las zonas de influencia en el departamento de Sucre, mientras que RODRIGO MERCADO PELUFO alias "Cadena" se mantuvo como comandante militar y financiero, ubicados en la estructura al mismo nivel.

Más adelante, la compañía Sucre inicialmente comandada por alias "Cadena" creció en número de integrantes y después se dio a conocer como el Frente Sucre. Luego, para el año 2000 esa agrupación armada ilegal se conoció como frente Montes de María o Golfo de Morrosquillo, desprendiéndose el grupo de María la Baja que le fue confiado a UBER ENRIQUE BANQUÉZ MARTÍNEZ alias "Juancho", quien fungió como segundo de alias "Cadena" con 20 hombres a su mando.

A su turno, el grupo de El Guamo, que había constituido MANCUSO GÓMEZ y que estaba bajo el mando de SERGIO MANUEL CÓRDOBA ÁVILA alias "El gordo" o "120" desde el primero de enero de 1999, había extendido su área a San Juan de Nepomuceno, San Jacinto, Calamar, Arroyohondo, San Cristóbal, Soplaviento, Mahates, San Estanislao, Villanueva y Cartagena (Bolívar). Precisamente fue en la capital del departamento de Bolívar en donde fue capturado CÓRDOBA ÁVILA el 31 de julio de 2002, por lo que toda la zona comandada por él pasó a ser responsabilidad de EDWAR COBOS TÉLLEZ y así fue como se ordenó fusionar el grupo de El Guamo con el grupo de María la Baja y se creó el frente Canal del Dique que quedó bajo el mando de UBER ENRIQUE BANQUÉZ MARTÍNEZ alias "Juancho", quien a partir de ese momento pasó a ser conocido como "Juancho Dique".

[19] Que se había generado en el 1991 como un grupo armado conformado principalmente por campesinos víctimas de los embates de la subversión, bajo la dirección de Fidel Castaño Gil, quien fuera sucedido posteriormente por su hermano Carlos Castaño Gil.

A partir de ese momento, quedaron constituidos dos frentes: el frente Montes de María bajo el mando de alias "Cadena", con puesto de mando en la finca "El Palmar" en San Onofre (Sucre), y el frente Canal del Dique bajo la responsabilidad de alias "Juancho Dique", con puesto de mando en el municipio de María la Baja. Adicionalmente, en los municipios Bolivarenses de Magangué, Zambrano, Córdoba Tetón y el Carmen de Bolívar tenía injerencia el grupo de Zambrano al mando de LUIS FRANCISCO ROBLES MENDOZA alias "Amaury" o "07", quien estaba subordinado a RODRIGO TOVAR PUPO alias "Jorge 40", comandante del Bloque Norte, grupo que se financiaba, entre otras cosas, sustrayendo combustible a través de una válvula clandestina del poliducto de Ecopetrol que cruzaba por esa zona y que vendían a las estaciones de gasolina de Magangué y Sincelejo.

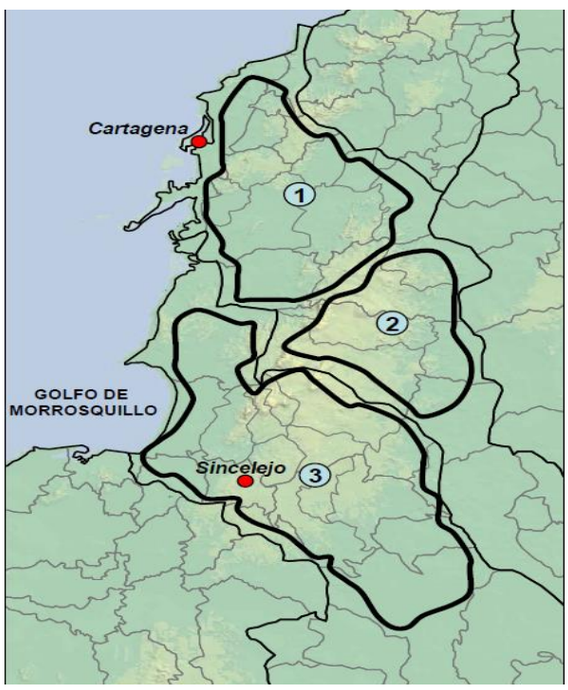
El 23 de febrero del año 2002 ocurrió un acontecimiento que cambió la dinámica de esos grupos ilegales cuando alias "Amaury" ordenó dar muerte a varios funcionarios del entonces Departamento Administrativo de Seguridad DAS en Magangué (Bolívar), lo que obligó al grupo que él dirigía a abandonar la zona por la presión ejercida por las autoridades. A raíz de ese episodio alias "Amaury" se refugió en los territorios dominados por alias "Jorge 40", comandante del Bloque Norte, dejando la zona sin presencia de integrantes de las autodefensas. Tal situación llevó a que VICENTE CASTAÑO GIL dispusiera la restructuración de la organización señalando que el río Magdalena debería ser el límite para las estructuras de las autodefensas, la comandada por alias "Jorge 40" al margen derecho y en la margen izquierda operaría EDWAR COBOS TÉLLEZ alias "Diego Vecino", quien se extendería hacia el occidente. Con el propósito de cumplir dicha orden, el 28 de octubre de 2002 alias "Juancho Dique" y alias "Diego Vecino" citaron a WILLIAM ALEXANDER RAMÍREZ CASTAÑO alias "Román" o "Darío" a una finca cerca al Canal del Dique y le ordenaron recibir un personal del Bloque Norte y desplazarse hacia la zona de Córdoba Tetón (Bolívar), lugar al que arribó el 30 de octubre del año 2002. En esa fecha se efectuó un empalme con alias "01" y desde este momento RAMÍREZ CASTAÑO asumió el mando del grupo y designó como comandante político a LEONARDO FLÓREZ ROJAS alias "Chichi", "Beto", Barbitas" o "Montoya", y el frente Montes de María envió alrededor de 30 combatientes para reforzar el grupo.

Luego, EDWAR COBOS TÉLLEZ alias "Diego Vecino" dispuso que WILLIAM ALEXANDER RAMÍREZ CASTAÑO alias "Darío" o "Román" pasara a comandar un grupo encargado de operar en el centro del departamento de Bolívar y en algunos municipios de Sucre, al cual le asignó el nombre de frente Centro de Bolívar y Sabanas de Sucre, ante lo cual RAMÍREZ CASTAÑO adoptó el alias de "Román Sabanas", extendiendo el actuar ilegal de ese grupo a los municipios sucreños de Galeras, Sincé, San Pedro y Buenavista.

Así las cosas, EDWAR COBOS TÉLLEZ creó bajo su comandancia el bloque Héroes de los Montes de María, conformado por los frentes Montes de María, Canal del Dique y Centro de Bolívar y Sabanas de Sucre, a partir de octubre del año 2002. Luego, al año siguiente, al inicio de los diálogos con el Gobierno Nacional y con la firma de los acuerdos de Santa Fe de Ralito, el Bloque Héroes de los Montes de María se desmovilizó el 14 de julio del 2005 en el corregimiento de San Pablo, comprensión municipal de María la Baja (Bolívar), con 594 combatientes, quienes hicieron entrega de 364 armas.

1.2. Estructura del Bloque Héroes de los Montes de María.

De acuerdo con lo antes expuesto, la estructura del bloque Héroes de los Montes de María corresponde a la siguiente:



1.2.1. Frente Canal del Dique[20].

Permaneció al mando de este grupo UBER ENRIQUE BANQUÉZ MARTÍNEZ alias "Juancho Dique", quien dividió el frente en varios grupos de acuerdo con las zonas asignadas. Operó en Cartagena de Indias, El Guamo, San Juan de Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Turbaco, Arjona, San Estanislao de Kostka (Arenal), Santa Rosa, Clemencia, Soplaviento, Calamar, Santa Catalina, Arroyohondo, Mahates y María la Baja del departamento de Bolívar.

Para el año 2003, militarmente era el más grande, con aproximadamente 260 hombres, y funcionaba la escuela de entrenamiento dirigida por el postulado ALEXI MANCILLA GARCÍA alias "Zambrano", quien era el segundo al mando.[21]

Este Frente, para el momento de la desmovilización, se encontraba conformado por los siguientes grupos que operaron en el departamento de Bolívar:

a. Grupo liderado por a. "El Chino", quien tenía a su cargo 45 hombres, que operaban en los municipios de Arjona, Arenal, Turbana, Santa Catalina, Clemencia y Villanueva.

b. El grupo dirigido por alias "Convivir", que estuvo hasta diciembre del año 2002, y "Alberto", bajo la estructuración y en compañía de alias "Never", "Anillo" y "Walter", permaneció con 12 hombres en la zona correspondiente a los municipios de Turbana, Turbaco y los corregimientos de Pasacaballos, Rocha y Puerto Badel.

c. El grupo de alias "Tasta", compuesto por 50 hombres, en donde se encontraba como financiero alias "Bigote", permaneció en la zona geográfica conocida como El Guamo, Zambrano, Calamar y la vereda Yucalito.

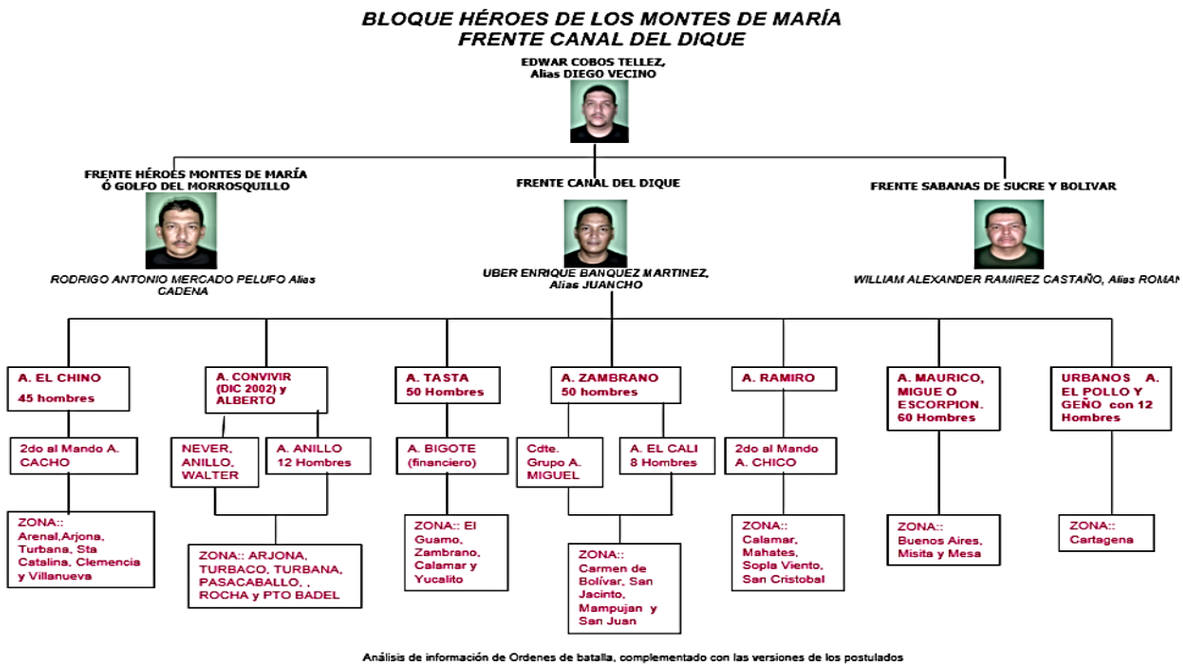
d. El grupo comandado por ALEXI MANCILLA GARCÍA alias "Zambrano" con los dos subalternos en línea de mando alias "Migue" y alias "El Cali", constituido por 50 hombres, abarcó los municipios del Carmen de Bolívar, San Jacinto, Mampuján y Sanjuán Nepomuceno.

[20] Número 1 en el mapa.
[21] Decisión del 15 de junio de 2016 de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, rad. 2006 80848, M.P. Ricardo Rendón Puerta.

e. El grupo al mando de alias "Ramiro" y como segundo comandante de ese grupo a alias "Chico", operó en los municipios de Mahates, Calamar, Soplaviento y San Cristóbal[22].

f. En la ciudad de Cartagena delinquió un grupo urbano bajo el mando de alias "El Pollo" y de alias "Geño" con 12 hombres a su cargo.

g. En la zona de Buenos Aires, Mesa y Mesita, permaneció un grupo de 60 hombres bajo el mando de alias "Mauricio", "Migue" o "Escorpión".



23

1.2.2. Frente Centro de Bolívar y Sabanas de Sucre[24].

Tal y como quedó reseñado, como consecuencia de la masacre de los funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, el 23 de febrero del año 2002, surgió este frente bajo la comandancia de WILLIAM ALEXANDER RAMÍREZ CASTAÑO alias "Román Sabana" o "Darío" y en segunda línea de mando fungió LEONARDO FLÓREZ ROJAS alias "Chichi", "Beto", Barbitas" o "Montoya". Este frente operó en: Magangué, Zambrano y Córdoba Tetón en el departamento de Bolívar; en el departamento de Sucre, en las poblaciones de San pedro, Buenavista, Galeras, y, por pocos días, en Sincé bajo la responsabilidad de

[22] Ibidem.
[23] Ídem.
[24] Número 2 en el mapa referido al inicio de esta sección.

alias "Cadena", al igual que Betulia y Roble. Adicionalmente, alias "Román Sabana", en sus versiones libres, admitió que, con relación al municipio de Ovejas, operó solo en los corregimientos de Canutal y Canutalito.

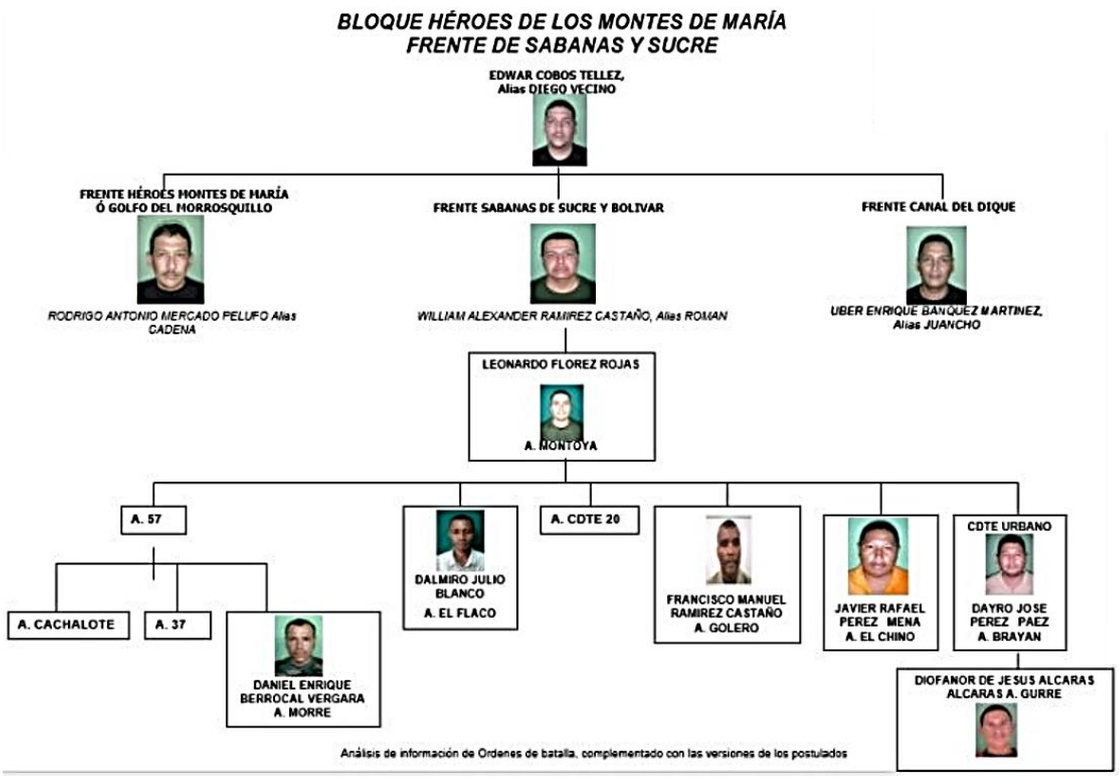
Este frente se organizó con los siguientes grupos:

a. Grupo rural liderado por alias "57", que tenía a su mando a alias "Cachalote" a alias "37" y a DANIEL ENRIQUE BERROCAL VERGARA alias "El morro".

b. Grupo rural comandado por alias "Comandante 20", quien tenía en su misma línea a DALMIRO JULIO BLANCO alias "El flaco" y a FRANCISCO MANUEL RAMÍREZ CASTAÑO alias "El golero".

c. Grupo rural, cuyo jefe era JAVIER RAFAEL PÉREZ MENA, alias "El Chino".

d. Grupo urbano, con DAVID JOSÉ PÉREZ PÁEZ, alias "Brayan" a la cabeza, quien tenía como subalterno a DIOFANOR DE JESÚS ALCARAS ALCARAS, conocido con el alias de "Gurre".



1.2.3. Frente Héroes de los Monte de María o Golfo de Morrosquillo[25].

Siempre estuvo este Frente al mando de RODRIGO ANTONIO MERCADO PELUFO alias "Cadena", quien contó con aproximadamente 260 hombres con injerencia en Sincelejo, Corozal, San Onofre, Sampués, Betulia, El Roble, Los Palmitos, Tolú, Coveñas, Toluviejo, San Antonio de Palmitos, Ovejas, Morroa, Chalán y Colosó en el departamento de Sucre. En el departamento de Córdoba controlaba los municipios de San Antero, Chinú, San Andrés de Sotavento, Tuchín, Purísima, Chimá y Momil. Alias "Cadena" contó con un grupo de personas de confianza a su cargo a quienes les asignaba labores especiales entre los que se encuentran SAMIR ANTONIO OTERO DE LA OSSA alias "Computador", alias "Convivir", alias "El Chino", alias "El Gato" y alias "Barretico".

Este frente se organizó de la siguiente manera:

a. El grupo de seguridad a cargo de MANUEL DE JESÚS CONTRERAS BALDOVINO alias "Peluca", y dentro de sus miembros se encontraban alias "Convivir", "El Gato", "El Rolo", "Verruga", "Mono Candela" y "El Diablo", entre otros.

b. Grupo de Palmira la Negra, conformado por tres escuadras y comandado, entre los años 2001 y 2005, por CESAR AUGUSTO MORALES BENÍTEZ, alias "Raquel".

c. Grupo de Palmito, entre 1999 y 2000 la comandancia la ejercía alias "El Negro Julio". Entre los años 2002 a 2005, estuvo bajo el mando de JOSÉ OSWALDO TAVERA BLANCO alias "El Paisa", encontrándose en este grupo también GREGORIO ENRIQUE MARTÍNEZ VELILLA alias "El Tigrillo", JOSÉ HERIBERTO NAVARRO MARTÍNEZ alias "Mano Quemá" y a CARLOS ENRIQUE VERBEL VITOLA alias "Caliche".

d. Grupo de Corozal, comandando por WILLIAM SERPA VERGARA alias "Serpa" o "W".

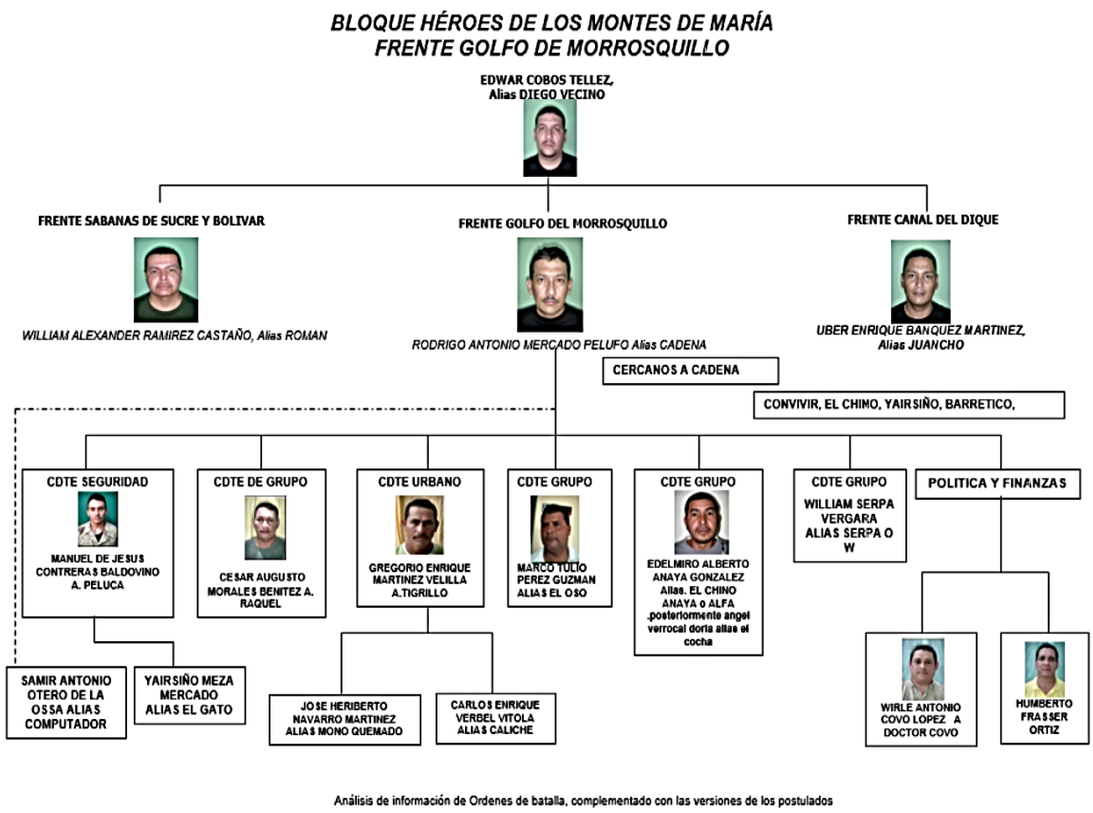
[25] Número 3 en el mapa referido al inicio de este acápite.

e. Grupo de Sincelejo, bajo el mando de JULIO AQUILES MATEUS FEBLES alias "El Gocha", entre 1999 y 2000; y por EDELMIRO ALBERTO ANAYA GONZÁLEZ a. "El Chino Anaya" o "Alfa", entre 2002 al 2004.

f. Grupo de San Onofre, comandado por ALEX CABARCAS entre 1999 y 2000 y alias "Julio Paraco" entre 2001 y 2005. La base de alias "Cadena" fue San Onofre y contó con un Grupo Urbano a cargo de alias "Julio Moto".

Así mismo, en las zonas rurales, entre el 2001 y 2004, operó como comandante MARCO TULIO PÉREZ GUZMÁN alias "El Oso"; sin embargo, tras su captura, dirigió el grupo, entre 2004 y 2005, JAIRO BARRIOS DÍAZ. También perteneció a ese grupo EDELMIRO ALBERTO ANAYA GONZÁLEZ alias "El Chino Anaya" y ÁNGEL MIGUEL BERROCAL DORIA alias "El Cocha". En esta estructura armada ilegal militaron los postulados en contra de quien se profiere la presente sentencia **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO y JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA**.

g. Grupo de política y finanzas, compuesto por WIRLE ANTONIO COBO LÓPEZ alias "Doctor Cobo" y HUMBERTO FRASSER ORTIZ.



1.3. Hechos de connotación cometidos por el Bloque Héroes de los Montes de María.

Las Autodefensas Unidas de Colombia AUC implementaron estrategias para el control territorial en la subregión de los Montes de María, con los propósitos de desalojar a la subversión y conformar en Sucre, el Sur de Bolívar, Córdoba y Urabá un eje territorial para impedir la comunicación de los frentes de la guerrilla del interior del país con los de la Costa Atlántica. Para tal efecto, perpetraron entre los años 1998 y 2000: 53 acciones armadas en El Carmen de Bolívar; 15 en San Jacinto; 12 en Zambrano; 24 en Chalán; y 48 en Ovejas, para un total de 185 homicidios. Toda esa violencia fue conforme ellos lo vieron justificada bajo el argumento de la instauración de un régimen de seguridad y la eliminación de la guerrilla. Sin embargo, sus víctimas fueron ante todo personas de la sociedad civil: líderes campesinos, líderes estudiantiles, sindicalistas, comunales de derechos humanos e indígenas que abanderaban reivindicaciones a favor de sus sectores particulares y que iban en contra de los intereses de los grupos de poder.

También, sobre los daños que colectivamente causó la organización armada al margen de la ley, se tiene que si bien bajo el ideario de controlar la influencia subversiva en una amplia zona del territorio nacional propinaron bajas en combates, lo cierto es que también causaron la muerte de manera sistemática a miembros de la población civil que eran tildados por esa organización ilegal de guerrilleros, milicianos o auxiliadores de la guerrilla, u otros considerados como delincuentes comunes, habitantes de la calle, integrantes de la organización LGBTI, etc., sin que a las víctimas se les hubiese brindado la posibilidad de defenderse, perpetrándose ejecuciones extrajudiciales y operaciones como la mal llamada “limpieza social”.

En el curso de tales operaciones se ejecutaron crímenes selectivos, muchos de los cuales correspondieron a homicidios acaecidos de manera selectiva en las poblaciones de los Montes de María, en su mayoría ejecutados por integrantes de grupos especiales de Autodefensas que se denominaban “los urbanos”, y, como práctica recurrente, varios de los cuerpos de las víctimas fueron a parar a fosas comunes.

Por otro lado, cabe destacar que, tal y como lo ha documentado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, varios fueron los intereses de las autodefensas en Los Montes de María[26]:

- De la alianza con el narcotráfico obtuvieron los recursos para financiar sus ejércitos, a cambio de prestar sus servicios militares para posibilitar el tránsito de la droga hacia el golfo de Morrosquillo. Como parte de esa misma alianza cometieron masacres –como las que ocurrieron en San Onofre entre 1999 y 2000–, lugar en el que tenían interés tanto los amos del paramilitarismo como los señores del narcotráfico por su cercanía al golfo. Las masacres sirvieron para crear terror y dominar a la población, así como para despojar de sus fincas y obligar al desplazamiento forzado a los campesinos que poseían tierras en las que estaban interesados.

- Igualmente, en alianza con algunos miembros de la clase política, usaron las armas para forzar a la población a votar por los candidatos con quienes tenían acuerdos, hicieron nombramientos de funcionarios públicos y saquearon las arcas de varios municipios, acorde a las denuncias de investigadores y medios de comunicación.

- De análoga manera, como fruto de su relación con algunos grandes propietarios, expulsaron a los campesinos que habían comprado las tierras que el INCORA les obligó a vender y a otros que poseían tierras de su interés, según han revelado investigadores de la región.

- Y de su acercamiento y vínculos con algunos agentes de la fuerza pública asesinaron y expulsaron a líderes sociales y aniquilaron organizaciones sociales que habían consolidado un tejido social fuerte entre los sectores populares, según documentaron investigadores y líderes sociales y se ha confirmado en los procesos de justicia y paz.

Los mecanismos utilizados por los grupos paramilitares para obtener control del territorio fueron principalmente el desplazamiento forzado, el terror y el control sobre la población: un control económico ejercido sobre los estratos medio y bajo a través de actividades financieras especulativas (las personas recibían préstamos

[26] PNUD, Área de paz, desarrollo y reconciliación. *Los Montes de María: Análisis de la conflictividad*. Colombia 2010. En:https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/COL/00058220_Analisis%20conflcitividad%20Montes%20de%20Maria%20PDF.pdf

quedando comprometidas con sus deudores), y un control social ejercido mediante las restricciones a la movilidad, la violencia contra las mujeres, el terror y el establecimiento de normas que la gente se veía forzada a acatar, entre otros. Así mismo, tal y como se verá al momento de analizar los cargos en particular, los grupos de autodefensas que operaron en los Montes de María acudieron también a la estigmatización, al tildar a miembros de la población civil como, por ejemplo, por estar según ellos, apartados de los cánones religiosos por practicar brujería, o como colaboradores de la guerrilla, llegando hasta los predios en donde habitaban las víctimas a quienes obligaban a salir de las zonas de influencia en plazos determinados, so pena de acabar con sus vidas.

Muchas veces, las órdenes dadas a los pobladores para desplazarse fueron indeterminadas y generales, esto es, no estuvieron dirigidas necesariamente a personas determinadas; y, en otros casos, también se ha documentado que los desplazamientos se produjeron por el miedo generado a raíz de la comisión coetánea de otros delitos de significancia, como lo fueron los homicidios colectivos y selectivos, desapariciones forzadas, amenazas, extorsiones, destrucciones y apropiaciones de bienes protegidos, etc., produciendo en los lugareños temores fundados al punto de verse compelidos a salir despavoridos de sus territorios dejando abandonadas sus pertenencias.

Otra forma de control fue la cooptación del Estado. En su alianza con la clase política, los señores de la guerra incidieron ampliamente en el manejo del Estado. Por una parte, participaron en los procesos electorales estableciendo alianzas con los políticos, *"con un doble y contradictorio propósito: en primer lugar, les interesa apoyar y hacer acuerdos con candidatos, o llevar candidatos propios a las administraciones locales, los cuales, una vez elegidos, les generan beneficios; en segundo término, siendo el símbolo más importante del régimen y de la democracia representativa, las elecciones constituyen para algunos actores ilegales un objetivo de su acción militar"*[27].

Lo anterior se evidenció en la región en las campañas de los años 2002 y 2006, cuando, mediante mecanismos de presión y amenazas, la población fue forzada a votar por el candidato que contaba con el apoyo de los paramilitares. Algunos relatos sobre las elecciones en San Onofre describieron cómo el puesto de votación

[27] Velásquez c. y Fabio E. (2009). Las otras caras del poder. Territorio, conflicto y gestión pública en municipios colombianos. Foro Nacional por Colombia y GTZ.

era controlado por los paramilitares y el votante recibía un tarjetón ya marcado. En ese momento, San Onofre ya había sido sometido a dos masacres.

La alianza con políticos y algunos partidos no solo les dio acceso al Estado, sino que generó compromisos por parte de la autoridad política local en la perspectiva de favorecer sus intereses por medio de mecanismos como la adjudicación de contratos o el manejo de la nómina. La cooptación del Estado, ampliamente investigada y denunciada en esa región, comenzó por las personerías y alcaldías.

Precisamente, conforme a la Fiscalía General, en las versiones libres de desmovilizados del Bloque paramilitar Héroes de Montes de María, ellos brindaron los nombres y apellidos de los funcionarios que fueron beneficiarios suyos en al menos cuatro municipios de la zona, tales fueron: El Guamo, El Carmen de Bolívar, San Jacinto y San Juan Nepomuceno, hechos y circunstancias que por competencia le corresponde investigar al ente de persecución penal como su receptor.

La incidencia que tuvieron los actores armados en Los Montes de María se infiere de varias investigaciones, entre ellas un estudio realizado por Foro por Colombia[28] en el municipio de Ovejas, en donde los paramilitares ejercieron presión para la contratación o inversión y recibieron protección e impunidad.

La impunidad del fenómeno paramilitar cobijó a Los Montes de María. La debilidad institucional facilitó el dominio territorial por parte de estos grupos, su infiltración profunda en la vida política y la cultura de la sociedad y dejó una huella por la crueldad con que atacaron y despojaron a la población[29].

Conforme lo documenta la Fiscalía General de la Nación, en el año 2022 para los fines de esta sentencia y sin perjuicio de los datos que correspondan a la actualidad, nos informa el ente investigador que en la base de datos del Sistema de Información de Justicia y Paz SIJYP, para ese año 2022 y para abril de 2016, se encontraron reportes de hechos atribuibles al Bloque Héroes de los Montes de María, discriminados por delitos, de la siguiente manera:

Homicidios: 8.044
Desaparición forzada: 2.100

[28] Ibidem.
[29] PNUD, Área de paz, desarrollo y reconciliación. *Los Montes de María: Análisis de la conflictividad*. Cita *ut supra.*

Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil: 11.074
Acceso carnal violento: 152
Actos sexuales violentos en persona protegida: 1
Prostitución o esclavitud sexual: 1
Extorsión: 63
Exacción o contribuciones arbitrarias: 34
Reclutamiento ilícito: 10
Hurtos: 816
Destrucción y apropiación de bienes protegidos: 1

Tal y como se registró líneas arriba, a más de los múltiples homicidios selectivos, una de las principales estrategias a la que acudió Bloque Héroes de los Montes de María sustentada en el uso y propagación del terror como instrumento de control sobre el territorio y la población fue la comisión sistemática de homicidios colectivos, masacres, que se registraron año tras año de la siguiente manera[30]:

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
5	2	15	19	14	8	5	1

De las anteriores, se destacan como las masacres de mayor impacto las siguientes:

NOMBRE DE MASACRE	**DD/MM/AA**	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO/LUGAR**	**OCCISOS**
Masacre de El Salado	23/03/1997	Bolívar	El Carmen de Bolívar, Corregimiento de El Salado	4
Masacre de Coloso (Hospital)	03/11/1998	Sucre	Coloso, casco urbano	6
Masacre de las Piedras	10/01/1999	Sucre	Toluviejo, Corregimiento de Las Piedras	8
Masacre de Capaca	16/08/1999	Bolívar	Zambrano, vereda Capaca	12
Masacre de San Isidro y Caracolí	10/11/1999	Bolívar	El Carmen de Bolívar, Corregimiento de San Isidro y Caracolí	10
Masacre de El Salado	16/02/2000	Bolívar	El Carmen de Bolívar, Corregimiento de El Salado	62
Masacre de Mampuján Las Brisas	11/03/2000	Bolívar	San Juan Nepomuceno, veredas de Mampuján y Las Brisas	12
Masacre de Palo Alto	30/04/2000	Sucre	San Onofre Corregimiento de Palo Alto	5

[30] Informe de investigador de campo No. 0023_/O.T.6349 del 25 de febrero de 2011.

Masacre de Coloso (Curva del Diablo)	24/08/2000	Sucre	Coloso, Sector Conocido Como Curva del Diablo	6
Masacre de Chinulito o El Parejo	13/09/2000	Sucre	Coloso Corregimientos de Chinulito y El Parejo	11
Masacre de Macayepo	14/10/2000	Bolívar	El Carmen de Bolívar, Corregimiento de Macayepo	7
Masacre de Chengue	17/01/2001	Sucre	Ovejas, Corregimiento de Chengue	27
Masacre de Retiro Nuevo	19/04/2001	Bolívar	María La Baja, Corregimiento de Retiro Nuevo y Los Bellos	4
Masacre de Puerto Badel y Matunilla	22/05/2001	Bolívar	Turbana (Corregimiento de Matunilla) Arjona (Corregimiento de Puerto Badel)	6
Masacre Barrio Los Laureles de Sincelejo	24/10/2001	Sucre	Sincelejo, barrio Los Laureles	6
Masacre de Piscicultores de La Peñata	12/08/2003	Sucre	Vía Vereda San Jorge	5

De los violentos hechos antes referidos, se destaca en el presente asunto el cargo imputado y aceptado por el postulado **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO**, que hace parte del patrón de desplazamiento forzado, conocido como la masacre de Piscicultores de La Peñata, que tuvo ocurrencia el 12 de agosto del 2003 en el corregimiento del mismo nombre, circunscripción del municipio de Sincelejo (Sucre), en el que se registraron 5 víctimas de homicidio y un sinnúmero de personas desplazadas forzadamente a raíz de estos crímenes perpetrados por miembros de las otrora Autodefensas Unidas de Colombia.

1.4. Relación con políticos locales, regionales y nacionales.

Por cuenta de los apoyos brindados por los integrantes del Bloque Héroes de los Montes de María, resultaron varios funcionarios vinculados con el fenómeno conocido como parapolítica. Así, treinta y siete (37) personas se vieron vinculadas con ese flagelo: tres alcaldes y tres exalcaldes, diez exconcejales, cuatro exdiputados, un gobernador (también fue embajador en Chile) y tres exgobernadores, tres representantes y tres exrepresentantes a la Cámara, tres senadores (uno de ellos también embajador en Perú) y cuatro exsenadores, tal y como se detalla a continuación, para el momento del registro, se inserta a la decisión el gráfico con los datos correspondientes así: [31]:

[31] Moncada, Juan José. *"Restitución colectiva de tierras en Colombia. Una propuesta para cumplir con éxito la devolución de tierras en los 143 municipios de mayor despojo"*. Fundación Forjando Futuros FFF, Instituto Popular de Capacitación IPC, Bogotá, 2012. En: http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/ipc/20170809054619/pdf_765.pdf

Tabla con funcionarios vinculados con parapolítica:

Departamentos	Municipios	Funcionarios vinculados	Cargo	Entidad pública	Estado del proceso
Bolívar	El Carmen de Bolívar	Carmen Alicia de la Barrera	Ex concejal	Concejo municipal	Investigada detenida
	REGIÓN BOLÍVAR	Carlos Julio Galvis Anaya	Senador	Senado de la República	Investigado detenido
		Fernando Tafur	Representante	Cámara de representantes	Investigado
		Javier Cáceres	Ex senador	Senado de la República	Condenado
		José María Imbeth	Representante	Cámara de representantes	Condenado
		Jorge Castro Pacheco	Ex senador	Senado de la República	Condenado
		Libardo Simancas	Ex gobernador	Gobernación	Investigado detenido
		Miguel Ángel Rangel Sosa	Ex representante	Cámara de representantes	Condenado
		Vicente Blel	Ex senador	Senado de la República	Condenado
Sucre	Coloso	Manuel David Ruiz	Ex alcalde	Alcaldía	Investigado detenido
	Ovejas	Edwin Mussi	Alcalde	Alcaldía	Investigado detenido
	San Onofre	Celia Rosa Blanco	Ex concejal	Concejo municipal	Investigada
		Concepción Curi Guerrero	Ex concejal	Concejo municipal	Investigada
		Edgar Benito Rebollo	Alcalde	Alcaldía	Investigado
		Felipe Goenaga Rodríguez	Ex concejal	Concejo municipal	Investigado
		Guillermo Gómez Balseiro	Ex concejal	Concejo municipal	Investigado
		Jader Abud Jabid Chávez	Ex concejal	Concejo municipal	Investigado
		Jorge Blanco	Ex alcalde	Alcaldía	Condenado
		José Andrés Julio Blanco	Ex concejal	Concejo municipal	Investigado
		Pablo Vásquez Gómez	Ex concejal	Concejo municipal	Investigado
		Pedro Claver Gómez Blanco	Ex concejal	Concejo municipal	Investigado
		René Torrente Taján	Ex concejal	Concejo municipal	Investigado
	Tolú viejo	Miguel Carrasquilla	Ex alcalde	Alcaldía	Investigado detenido
	REGIÓN SUCRE	Álvaro García Romero	Ex senador	Senado de la República	Condenado
		Ángel Villareal	Ex diputado	Asamblea Departamental	Condenado
		Eric Morris Taboada	Ex Representante	Cámara de representantes	Condenado
		Jairo Merlano	Senador	Senado de la República	Condenado
		Jassik Farak Mendoza	Ex diputado	Asamblea Departamental	Investigado detenido
		Jorge Anaya	Ex gobernador	Gobernación	Condenado
		Jorge Visbal Martelo	Senador y ex embajador	Senado de la República y embajada en Perú	Investigado detenido
		José María Conde	Representante	Cámara de representantes	Condenado
		Miguel Nule Amín	Ex gobernador	Gobernación	Investigado detenido
		Muriel Benito Rebollo	Ex Representante	Cámara de representantes	Condenada
		Nelson Stamp Berrío	Ex diputado	Asamblea Departamental	Condenado
		Salvador Arana	Gobernador-ex embajador en Chile	Gobernación	Condenado
		Sergio Tapias	Alcalde	Alcaldía	Condenado
		Walberto Estrada	Ex diputado	Asamblea Departamental	Condenado

1.5. Financiamiento.

El narcotráfico se constituyó en un factor fundamental en la expansión de las autodefensas en Colombia y del Bloque Héroes de los Montes de María. Sobre el particular, EDWAR COBOS TÉLLEZ alias "Diego Vecino" refirió en varias de sus salidas procesales como postulado a la ley de Justicia y Paz, que a partir de octubre de 2001 VICENTE CASTAÑO GIL le entregó la responsabilidad de cobrar un *"impuesto de gramaje"* a los narcotraficantes que sacaban droga por el

Golfo de Morrosquillo y, en general, en sus áreas de influencia, por manera que el 50% de lo recaudado era enviado a VICENTE CASTAÑO GIL y el 50% restante era utilizado para la financiación del Bloque, para lo cual se crearon unas comisiones dedicadas a realizar dicha actividad[32].

De igual manera, el grupo armado organizado al margen de la ley se financió con el cobro de cuotas extorsivas a los ganaderos, comerciantes, empresarios y finqueros[33]. Así, a los comerciantes de Sincelejo y municipios cercanos, como Corozal, Sampués, San Juan de Betulia y Morroa, se les exigía una cuota de acuerdo con sus finanzas, cifras que podrían oscilar entre $50.000 a $1.600.000 y que eran cobradas mensual o anualmente[34]. Igualmente, a las empresas Coca Cola y Postobón, como a los camiones que transportaban pan, se les exigía una cuota a fin de permitirles transportar sus productos por las zonas de influencia del grupo armado ilegal[35].

Otra modalidad consistió en el cobro a comerciantes de yuca de los municipios de Sincelejo, Corozal y San Juan de Betulia, de una cuota de $50.000 por cada camión cargado, lo cual ocurrió en el año 2003, época de abundancia de este producto agrícola[36]; así mismo, a los finqueros y ganaderos se les cobraba $10.000 por hectárea bajo el pretexto de una política de seguridad.

En versión libre el postulado UBER ENRIQUE BANQUÉZ MARTÍNEZ alias "Juancho Dique", refirió que a las empresas de palmas de aceite de la zona nunca les cobró cuotas extorsivas, toda vez que, según información, ellos ya habían arreglado con los máximos cabecillas del grupo armado ilegal; sin embargo, en una ocasión le hicieron entrega de unos fusiles para la causa antisubversiva.

En cuanto hace al hurto de combustible como otra fuente de financiamiento, se tiene que se ejecutó por integrantes del Frente Centro de Bolívar y Sabanas de Sucre del Bloque Héroes de los Montes de María en los Municipios de Magangué y Córdoba (Bolívar). Para tal efecto, se instalaron válvulas en los tubos del oleoducto Caño Limón Coveñas[37]; también se acudió al hurto de camiones que transportaban ACPM, los cuales eran llevados hasta la zona controlada por UBER

[32] Versión libre de Edwar Cobos Téllez del 23 de noviembre de 2011.
[33] Ello conforme las Versiones libres de Yairsiño Meza Mercado alias "El Gato" y de Uber Banquéz Martínez alias "Juan Dique" el 16 de marzo de 2012.
[34] Informe de Policía Judicial de Justicia y Paz No. 063 de agosto 9 de 2012.
[35] Versión libre de Edward Cobos Téllez del 12 de julio de 2011.
[36] Versión Libre de Luis Fernando Barreto Martínez del 14 de junio de 2011.
[37] Al respecto se refirió el postulado Luis Ramon Sánchez Sanguino en versión libre del 16 de noviembre de 2010.

ENRIQUE BANQUÉZ MARTÍNEZ alias "Juancho dique", para ser usado ese combustible en beneficio propio.

Adicionalmente, el Frente Golfo de Morrosquillo del Bloque Héroes de los Montes de María, en cabeza de RODRIGO MERCADO PELUFO alias "Cadena", creó la Cooperativa de Municipalidades de la Sabana COOPSABANA, la cual fue constituida el 25 de Julio de 2003, fungiendo como representante legal HUMBERTO FRASSER, con la connivencia de los entonces alcaldes de Toluviejo, San Onofre, Coveñas, Tolú y San Antonio de Palmito, cuyo fin era encargarse de las interventorías de las grandes obras que se desarrollaban en esos municipios, así como asesorar a las alcaldías, consultorías, veedurías, arriendo de muebles e inmuebles, entre otros[38].

1.6. Permanencia de los postulados LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO y JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA en el Bloque Héroes de los Montes de María[39].

1.6.1. LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (alias "Daniel"), ingresó a las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, entre el 15 al 20 abril del año 2002 en San Blas, sur de Bolívar, luego de haber sido reclutado por alias "Jean Carlos" del Bloque Central Bolívar, estructura en donde ejercían como comandantes alias "Cóndor", alias "Don Carlos", quien era el comandante político, alias "Peruano", quien fungía como comandante militar, y alias "Julián", quien era comandante general. En este bloque estuvo de abril de 2002 hasta el 10 de enero del 2003, desempeñándose como patrullero, luego en febrero del año 2003 al 19 de octubre de 2004, fue miembro del Bloque Montes de María fungiendo como su comandante fue los alias "El Paisa" y "Cadena" que respondía al nombre de RODRIGO MERCADO PELUFO, como comandante militar y alias "Diego Vecino", es decir, EDWAR COBOS TÉLLEZ como comandante general del mencionado Bloque, en esta facción paramilitar se desempeñó como radio chispa hasta que fue capturado el 19 de octubre de 2004 por el delito de homicidio.

1.6.2. JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA (alias "El Ñato"), ingresó a las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, en enero de 1999 luego de haber sido contactado por MANUEL ESQUIVEL alias "Blanca Nieves", perteneció al bloque Héroes de Los Montes de María, estuvo bajo la comandancia de

[38] Versión libre de Edwar Cobos Téllez del 2 a 6 de mayo de 2011, y versión libre de Yairsiño Meza Mercado del 5 de mayo de 2009.
[39] Sesión de audiencia del 23 de abril de 2021, audio 08001225200320200000100_20210423_01, Rec. 27:25.

RODRIGO MERCADO PELUFO alias "Cadena", grupo en el que el segundo comandante era UBER BANQUÉZ MARTÍNEZ alias "Juancho Dique", fue capturado el 7 de mayo de 2004 en San Onofre (Sucre). En ese grupo desempeñó los roles de puesto de radio, urbano y segundo comandante de la urbana.

Finalmente, **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** se desmovilizaron voluntariamente estando privados de la libertad ambos como exintegrantes del Bloque Héroes de los Montes de María de las AUC como consecuencia de los diálogos con el Gobierno Nacional, en actos que se llevaron a cabo el 14 de Julio del año 2005 en el corregimiento de San Pablo, municipio de María La Baja (Bolívar).

Conclusión.

Los aspectos descritos en este acápite[40] permiten concluir, principalmente, que el bloque Héroes de los Montes de María de las otrora Autodefensas Unidas de Colombia fue: *i)* un grupo armado al margen de la ley organizado de manera jerárquica que, en una etapa de su desarrollo, se consolidó con los frentes Canal del Dique, Centro de Bolívar Sabanas de Sucre y Montes de María o Golfo de Morrosquillo, con mandos responsables encargados de impartir directrices y órdenes que se transmitían por toda la línea de mando y eran cumplidas por cualquiera de los subalternos; *ii)* ejerció control territorial y político en zonas específicas de la subregión de los Montes de María, de los departamentos de Sucre y Bolívar; y *iii)* tuvo una estructura vertical militar y financiera.

Así mismo, lo hasta aquí expuesto denota que los actos violentos perpetrados por el bloque Héroes de los Montes de María correspondieron a un ideario y a políticas de grupo, los cuales, tal y como se verá en sección subsiguiente, constituyeron patrones de macrocriminalidad que han sido develados en el proceso penal especial de Justicia y Paz; por lo tanto, dado que las conductas criminales desarrolladas por cada uno de los integrantes respondieron a políticas criminales de la organización y no a conductas secularizadas, las mismas deben ser investigadas como lo fueron y sancionadas bajo un enfoque de criminalidad masiva.

Finalmente, se destaca que los aquí postulados formaron parte del bloque Héroes de los Montes de María y desempeñaron diferentes roles de importancia, que, sumados a los aportes de los demás armados ilegales, permitieron alcanzar los

[40] Así como los referentes contextuales que han quedado detallados en las sentencias proferidas en el proceso penal especial de Justicia y Paz en contra de postulados que militaron en el otrora bloque Héroes de los Montes de María, aludidas al inicio de este apartado.

objetivos perseguidos por el grupo armado organizado al margen de la ley en sus zonas de injerencia.

IV. CONSIDERACIONES.

1. Competencia.

De acuerdo a los lineamientos establecidos en el Acuerdo PSAA11 8035 de 2011[41], emanado del Consejo Superior de la Judicatura, así como a lo establecido por la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia[42], la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla tiene competencia territorial para conocer y decidir lo deprecado por la Fiscalía Doce de la Dirección de Fiscalía Delegada Nacional Especializada de Justicia Transicional, en tanto que, tal y como quedó referenciado en acápite precedente, el actuar ilegal de los postulados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** al interior del extinto bloque Héroes de los Montes de María de las AUC, se circunscribió, principalmente, a varias poblaciones de los departamentos de Bolívar y Sucre, en donde se ubican la mayoría de las víctimas que resultaron serlo del actuar de ese grupo armado organizado al margen de la ley.

Por ello, se itera, la competencia, teniendo en cuenta además lo preceptuado en el Acuerdo No. PSAA06-3321 de 2006[43], recae en esta Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.

2. Requisitos de elegibilidad[44].

Tal y como lo establece la ley 975 de 2005, los postulados al proceso de justicia transicional deben cumplir con una serie de requisitos a efectos de incorporarse a

---

[41] Que fija la competencia territorial en la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla para adelantar la etapa de Juzgamiento de los procesos de que trata la Ley 975 de 2005 en relación con los hechos punibles cometidos en la jurisdicción de los siguientes Distritos Judiciales: Archipiélago de San Andrés Islas, ***Cartagena (exceptuado el Circuito de Simití)***, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, ***Sincelejo*** y Valledupar (exceptuando el Circuito de Aguachica).

[42] Decisión del primero de febrero de 2012, rad. 38177, M.P. María del Rosario González Muñoz; también decisión del 28 de febrero de 2018, rad. 52195, M.P. Fernando León Bolaños Palacios.

[43] "Por el cual se crean los Circuitos Judiciales Administrativos en el Territorio Nacional" y en donde se establece *"El Circuito Judicial Administrativo de Cartagena, con cabecera en el municipio de Cartagena y con comprensión territorial sobre todos los municipios del departamento de Bolívar"*, y determina *"El Circuito Judicial Administrativo de Sincelejo, con cabecera en el municipio de Sincelejo y con comprensión territorial sobre todos los municipios del departamento de Sucre"*.

[44] Sesión de audiencia del 22 de abril de 2021, audio 08001225200320200000100_20210422_01, Rec. 1:04:25.

este especial ordenamiento y mantenerse en él, como lo son los previstos en los artículos 10 y 11 *ejusdem* respecto de los cuales se ha señalado que: *"los requisitos de elegibilidad son dinámicos, sujetos a alteración, de análisis paulatino durante todas las etapas del proceso, no se estiman satisfechos en un solo instante y declarado su cumplimiento, no mantienen vocación de permanencia para todos los momentos subsiguientes del trámite"*[45].

Así lo advertido, los requisitos de elegibilidad comportan para los postulados el mantenimiento de una actitud sincera durante el trámite procesal, en garantía de la verdad, la justicia, la reparación, y, sobre todo, la no repetición de hechos atentatorios de los más altos valores esenciales para la convivencia pacífica y el orden justo; así mismo, se constituyen en una salvaguarda para el proceso de Justicia y Paz, en tanto que deben ser observados en todo momento por los postulados, como consecuencia del sacrificio que ha hecho el Estado y la sociedad frente a caros principios cultivados desde tiempo inmemorial, como son la igualdad y la proporcionalidad, por cuenta de la concesión de generosas prebendas y beneficios punitivos a los desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, con el fin de alcanzar una paz estable y duradera, al punto que la normativa prevé la *"Obligación general de las entidades públicas de informar sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad en el marco de sus competencias"*[46].

Por lo tanto, es menester en esta oportunidad verificar que, con relación a los aquí postulados, estén dados esos presupuestos, como requisitos de procedibilidad, sin lo cual no sería posible proseguir con el análisis de los demás aspectos que conforman esta sentencia.

2.1. Desmovilización y desmantelamiento en cumplimiento de acuerdo con el Gobierno Nacional[47].

La desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia inició en el mes de diciembre del año 2002 con una fase exploratoria, en la que se efectuaron diálogos con el Gobierno Nacional dirigidos a un cese de hostilidades, que permitió que el 14 y 15 de julio del año 2003 en Tierralta (Córdoba), en compañía del Alto Comisionado para la Paz, los miembros de la Comisión Exploratoria del Gobierno

[45] Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, radicado 2006 810099, sentencia del 30 de octubre de 2013. M.P. Eduardo Castellanos.
[46] Artículo 2.2.5.1.1.7 del Decreto 1069 de 2015.
[47] Sesión de audiencia del 22 de abril de 2021, audio 08001225200320200000100_20210422_01, Rec. 1:06:08.

y Delegados de la Iglesia, se reunieron con representantes de las Autodefensas Unidas de Colombia y suscribieron el "Acuerdo de Santa Fe de Ralito para contribuir a la Paz de Colombia". El propósito de ese proceso de Paz era avanzar hacia su reincorporación a la vida civil y contribuir al fortalecimiento del Estado Social de Derecho.

Una vez suscritos los acuerdos, se inició el proceso de organización para las desmovilizaciones de las estructuras de las Autodefensas, fue así como en el año 2005 el Bloque Héroes de los Montes de María gestionó ante el Gobierno Nacional su desmovilización, obteniendo la expedición de la resolución 159 del primero de julio de 2005 mediante la cual se reconoció la representación legal de ese grupo organizado al margen de la ley en cabeza de EDWAR COBOS TÉLLEZ alias "Diego Vecino"; así mismo, el Gobierno en aras de facilitar dicha desmovilización, expidió la resolución No. 163 del 5 de julio del 2005, mediante la cual se dispuso la creación de una zona de ubicación temporal para la desmovilización del Bloque Héroes de los Montes de María en un predio conocido como "Pepe", ubicado en el corregimiento de San Pablo comprensión municipal de María La Baja (Bolívar), otorgando el término de 2 meses para concretar la desmovilización.

Fue así como el 14 de julio de 2005, bajo el mando de EDWAR COBOS TÉLLEZ, se desmovilizó el Bloque Héroes de los Montes de María con 594 integrantes, en ese acto y en presencia del Gobierno Nacional, de los observadores y facilitadores para el proceso de Justicia y Paz, ese grupo ilegal hizo la correspondiente entrega de las armas. De los 594 desmovilizados, 76 se encontraban privados de la libertad por hechos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo organizado al margen de la ley, y solo 143 solicitaron al Gobierno Nacional su postulación.

Conforme a la información ofrecida por el entonces Alto Comisionado para la Paz, el armamento entregado en la desmovilización por el Bloque Héroes de los Montes de María fue destruido en un proceso de fundición que se llevó a cabo el 13 de diciembre del año 2007 en la Siderúrgica Nacional ubicada en el municipio de Sogamoso (Boyacá), el cual correspondió a: cinco (5) ametralladoras, una (1) carabina, cinco (5) escopetas, doscientos cincuenta y tres (253) fusiles, cincuenta y un (51) pistolas, veintitrés (23) revólveres, seis (6) subametralladoras, siete (7) lanzagranadas, trece (13) tubos de lanzamiento y (1) un cañón, para un total de trecientas sesenta y cinco (365) armas.

Tal y como ha quedado reseñado, la desmovilización de los postulados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** como exmiembros del grupo armado organizado al margen de la ley Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC se produjo voluntariamente junto a 594 exintegrantes de esa estructura como consecuencia de los diálogos con el Gobierno Nacional, en actos que se llevaron a cabo el 14 de Julio del año 2005 en el corregimiento de San Pablo, municipio de María La Baja (Bolívar), efectuándose los actos administrativos para su postulación a la Ley de Justicia y Paz de la siguiente manera:

Postulado	**Postulación Ministerio del Interior y de Justicia.**	**Inicio formal al procedimiento de Justicia y Paz.**
LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO	Oficio del 10 de enero de 2014 dirigido al entonces Fiscal General de la Nación.	Mediante acta de reparto de la Fiscalía General de la Nación No. 1490, correspondiéndole al Despacho 10 de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz.
Versiones libres que ha rendido durante el trámite de Justicia y Paz.		
Año.	**Mes.**	**Día.**
2017	Octubre	9, 10,11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27.
2018	Febrero	5, 6, 7, 8 y 9.
2019	Marzo	7 y 8.
	Mayo	8 y 9.
	Noviembre	18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29.
2021	Febrero	10, 11, 12, 17, 18, 24 y 25.
	Marzo	17, 18, 19, 24, 25 y 26.
	Abril	7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30.

Postulado	**Solicitud de Postulación.**	**Postulación Ministerio del Interior y de Justicia.**	**Inicio formal al procedimiento de Justicia y Paz.**
JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA	Mediante escrito del 28 de julio de 2010.	Oficio del 16 de agosto de 2011 dirigido a la entonces Fiscal General de la Nación.	El 29 de agosto de 2011, con el acta de reparto de la Fiscalía General de la Nación No. 1108, correspondiéndole al Despacho 11 de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz.
Versiones libres que ha rendido durante el trámite de Justicia y Paz.			
Año.	**Mes.**	**Día.**	
2013	Marzo	18 y 19.	
	Septiembre	16, 17, 18, 19 y 20.	
2016	Diciembre	5 y 6.	
2017	Febrero	13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 y 24.	
	Abril	17, 18, 19, 20 y 21	
	Mayo	15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 26.	
	Junio	29 y 30.	
	Julio	10, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27 y 28.	
	Septiembre	18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29.	
	Octubre	23, 24, 25, 26 y 27.	
2018	Enero	24, 25, 26, 29, 30 y 31.	
	Febrero	1, 2, 7, 8 y 9.	
	Abril	26 y 27.	
	Mayo	21, 22, 23, 24 y 31.	
	Junio	1.	
2019	Marzo	7 y 8.	
	Noviembre	18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29.	
2020	Mayo	5, 6 y 7.	

	Junio	8, 9, 10, 11, 23, 24, 25 y 26.
	Julio	13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30 y 31.
	Agosto	18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28.
	Septiembre	28, 29 y 30.
	Octubre	1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30.
	Noviembre	3, 4 y 5.
2021	Enero	27, 28 y 29.
	Febrero	10, 11, 12, 17, 18, 24 y 25.
	Marzo	17, 18, 19, 24, 25 y 26.
	Abril	7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30.

2.2. Bienes entregados producto de la actividad ilegal.[48]

Dentro de los requisitos de elegibilidad la ley exige al grupo armado organizado al margen de la ley la entrega de bienes y recursos para cumplir con el fin de reparar a las víctimas, siendo este uno de los mayores compromisos a efectos de que los postulados logren la concesión de la pena alternativa que prevé la Ley 975 de 2005.

Se aportaron certificaciones adiadas 26 de abril de 2021, allegadas vía correo electrónico a la Fiscalía Delegada para la presente actuación, suscritas por la Dra. LIZ MARY JURADO PORTO Fiscal (64) Sesenta y Cuatro Especializada de apoyo a la Fiscalía (35) Treinta y cinco del Grupo Interno de Trabajo de Persecución de Bienes de la Dirección Nacional de Justicia Transicional, en las que se documentó la situación de los postulados LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO y JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA de la siguiente manera: *"Que el señor LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO identificado con la cédula de ciudadanía No. 78.381.077, a quien corresponde en Justicia Transicional el radicado número 110016000253201384986 es postulado a la ley de Justicia y Paz, como miembro del bloque Montes de María de la Autodefensas Unidas de Colombia-AUC, en donde fue conocido con el alias de DANIEL.*

1. El postulado referido rindió versión el día 9 de septiembre de 2016, sobre el tema específico de bienes, donde manifestó No tener bienes para ENTREGAR, OFRECER o DENUNCIAR.

2. Mediante oficio 314 radicado 20195860025741 del 23 de mayo de 2019 la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos, informó que consultados los sistemas misionales de información SPOA y SIJUF, que maneja esa dirección, se establece que NO hay ningún registro a nombre de LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO cedulado número 78.381.077 en el que funja en calidad de indiciado,

[48] Sesión de audiencia del 22 de abril de 2021, audio 08001225200320200000100_20210422_01, Rec. 1:26:10. Expediente digital Carpeta anexos EMP informe Grupo de Persecución de Bienes Fiscalías 64 y 35 de la Dirección de Fiscalía Nacional de justicia Transicional.

sobre investigaciones penales por los delitos de competencia de esa dependencia".

Igualmente, informan, *"Que el señor JUAN CARLOS REBOLLO PATERNINA identificado con la cédula de ciudadanía No. 92.447.350, expedida en San Onofre (Sucre) a quien corresponde en Justicia Transicional el radicado número 110016000253201184547, es postulado a la ley de Justicia y Paz, como miembro del bloque Montes de María de la Autodefensas Unidas de Colombia AUC, en donde fue conocido con el alias de EL ÑATO.*

1. El postulado referido rindió versión el día 8 de septiembre de 2016, sobre el tema específico de bienes y manifestó dar por cerrado el ciclo de versiones en el tema de bienes, además no tener bienes para ENTREGAR u OFRECER, empero, DENUNCIÓ los siguientes:

1.1. UNA CABAÑA EN RINCÓN DEL MAR. ACTIVIDAD PROCESAL DESARROLLADA: Se dio apertura al carpetario con ID 60189, mediante orden de cumplimiento 0115 del 28 -06-2019 se ordenó su archivo, tratándose de un bien que fue despojado transitoriamente, el que luego por la presencia de la Armada Nacional en la zona, su propietaria fue restablecida en el ejercicio pleno del derecho de dominio.

1.2. UNA GALLERA EN VERRUGAS SUCRE. ACTIVIDAD PROCESAL DESARROLLADA: Se dio apertura al carpetario con ID 60186, enviado a la UAEGRTD mediante orden de cumplimiento 029 del 20 -04-2018.

1.3. UNA FINCA DE CADENA EN AGUAS NEGRAS. ACTIVIDAD PROCESAL DESARROLLADA: Se dio apertura al carpetario con ID 102184, mediante orden de cumplimiento 0398 de fecha 14-11-2019 se ordena su archivo por duplicidad con el carpetario ID 60202 (con solicitud de medida cautelar).

1.4. UNA FINCA A LA ENTRADA DE LA ARENA. ACTIVIDAD PROCESAL DESARROLLADA: Se dio apertura al carpetario con ID 102185 actualmente se encuentra en estado de investigación.

1.5. FINCA LA 70. ACTIVIDAD PROCESAL DESARROLLADA: Se dio apertura al carpetario con ID 60185, archivado mediante orden de cumplimiento No 081/2018, el derecho de dominio regreso a los primigenios propietarios razón por la cual no tiene objeto, por inexistencia de materia la continuación de la presente investigación cuya suerte no puede ser otra que su archivo definitivo.

1.6. UNA FINCA DE CADENA EN LA ENTRADA DE LA PELONA DE SAN ONOFRE. ACTIVIDAD PROCESAL DESARROLLADA: Se dio apertura al

carpetario con id 102186, mediante orden de cumplimiento 0332 del 15-10-2019, se ordenó remitir ello a la UAEGRTD, de la cuidad de Sincelejo.

2. Mediante oficio DECLA -20210-242 radicado 2019195860019701 del 29 de abril de 2019 la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos, informó que consultados los sistemas misionales de información SPOA y SIJUF, que maneja esa dirección, se establece que no hay ningún registro a nombre de JUAN CARLOS REBOLLO PATERNINA identificado con cedula de ciudadanía número 92.447.350, en el que funja en calidad de indiciado, sobre investigaciones penales por los delitos de competencia de esa dependencia."

Además, hizo constar en las aludidas certificaciones que una vez realizada la consulta en la base de datos de esa Dirección no se registra que se hubiese adelantado trámite de extinción de dominio en el que aparezcan relacionados bienes enlistados, entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO y JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA.

De análoga manera, la Fiscalía con posterioridad allegó al expediente digital un informe fechado 9 de marzo de 2023, signado por la Dra. LIZ MARY JURADO PORTO Fiscal (64) Sesenta y Cuatro Especializada de apoyo a la Fiscalía (35) Treinta y cinco del Grupo Interno de Trabajo de Persecución de Bienes de la Dirección Nacional de Justicia Transicional, en el que se registra información respecto de la situación actual de algunos de los mencionados bienes que fueron denunciados por el postulado JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA en la anterior certificación detallando lo siguiente: *"Se procede a rendir un informe de los bienes denunciados por los postulados que son objeto de este proceso, bienes que no cumplen con el encuadramiento objetivo al que apunta el código de extinción de dominio, por manera que lo jurídico en estos casos fue finalizar o dar por clausurado la investigación por vía de archivo y remisión por competencia a la Unidad Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras.*

No.	***ID BIEN***	***NOMBRE DEL BIEN***	***ESTADO ACTUAL***
1.	*ID 60189*	*UNA CABAÑA EN RINCÓN DEL MAR*	*Mediante orden de cumplimiento 0115 del 28 -06-2019 se ordenó su archivo*
2.	*ID 60186*	*UNA GALLERA EN VERRUGAS SUCRE*	*Enviado a la UAEGRTD mediante orden de cumplimiento 029 del 20 -04-2018.*
3.	*ID 102184*	*UNA FINCA EN AGUAS NEGRAS*	*Mediante orden de cumplimiento 0398 de fecha 14-11-2019 se ordena su archivo por*

			duplicidad con el carpetario ID 60202 (con solicitud de medida cautelar).
4.	*ID 102185*	*FINCA A LA ENTRADA DE LA ARENA*	*Mediante orden de cumplimiento 0142 del 10-12-2021 se ordenó su archivo.*
5.	*ID 60185*	*FINCA LA 70*	*Archivado mediante orden de cumplimiento No. 081/2018.*

La señora representante del ente acusador en desarrollo de la audiencia de solicitud de sentencia anticipada, indicó, además, que se registran bienes reportados por la Sub Unidad de Bienes y Persecución de la Fiscalía General de la Nación entregados en cabeza del máximo representante del Bloque Héroes de los Montes de María al momento de la desmovilización postulado EDWAR COBOS TÉLLEZ alias "Diego Vecino" de la siguiente manera:

1. VEHÍCULOS ENTREGADOS EN LA DESMOVILIZACIÓN.

TIPO DE VEHÍCULO	MARCA	MODELO	COLOR	No. CHASIS.
CAMIONETA DOBLE CABINA Y PLATÓN	TOYOTA HILUX	2004	BEIGE	9FH33UNG848003830
CAMIONETA CABINADA	TOYOTA BURBUJA	2001	GRIS	8XA11UJ8019016275
CAMIONETA DOBLE CABINA Y PLATÓN.	FORD RANGER XLT	2004	GRIS	8YTZB45E348A24094
CAMIONETA CABINADA	TOYOTA PRADO	2004	GRIS	20049FH11VJ9549008844

2. BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN LA DESMOVILIZACIÓN.

BIENES INMUEBLES		
No.	INMUEBLE	UBICACIÓN
1	FINCA RABO LARGO	MUNICIPIO DE CÓRDOBA - BOLÍVAR
2	FINCA TOLODA	MUNICIPIO DE CÓRDOBA - BOLÍVAR
3	FINCA SAN ROQUE	MUNICIPIO DE CÓRDOBA - BOLÍVAR
4	FINCA SAN ROQUE II	MUNICIPIO DE CÓRDOBA - BOLÍVAR
5	FINCA PROVIDENCIA	MUNICIPIO DE CÓRDOBA - BOLÍVAR
6	FINCA LAS ESTRELLAS	MUNICIPIO DE CÓRDOBA - BOLÍVAR
7	FINCA LA CONSTANCIA	SAN ONOFRE – SUCRE
8	FINCA EL PALMAR	SAN ONOFRE – SUCRE
9	LOTE DE 14 HECTÁREAS	LA PELONA VÍA QUE CONDUCE DE SAN ONOFRE A RINCÓN DEL MAR
10	CASA FINCA	SAMPUÉS - SUCRE

11	FINCA EL DESPEJE	CORREGIMIENTO DE VARSOVIA DE TOLÚ VIEJO - SUCRE
	LOTE de 2.500 Mt2	VEREDA MACHUCA DE TIERRA ALTA – CÓRDOBA
	FINCA LA 70 DE 350 HECTÁREAS	SALIDA A SAN ONOFRE HACIA MARÍA LA BAJA
	FINCA LA CIENAGUITA I	MUNICIPIO DE CÓRDOBA - BOLÍVAR
	FINCA LA CIENAGUITA II	MUNICIPIO DE CÓRDOBA - BOLÍVAR
	FINCA LOS PÁJAROS	MUNICIPIO DE CÓRDOBA - BOLÍVAR
	CASA DE RODRIGO MERCADO PELUFFO	VEREDA MACHUCA DE TIERRA ALTA – CÓRDOBA
	FINCA LAS PAMPAS	EL GUAMO – BOLÍVAR
	FINCA EL CHIMBORAZO	EL GUAMO – BOLÍVAR
	EL EMBARCADERO DE GANADO DE 3 HECTÁREAS.	EL GUAMO – BOLÍVAR
	FINCA VILLA VERENA	VÍA MORROA A SABANA - SUCRE
	FINCA EL BEQUE	FRENTE A LA FINCA CASA BLANCA DE PROPIEDAD DE ALIAS MERENGUE
	FINCA LOS ÁNGELES	TOLÚ – SUCRE
	FINCA	MACAYEPO – BOLÍVAR
	FINCA	SAN ADRES DE SOTAVENTO – CÓRDOBA
	PARCELA LA PALMERA	VÍA PALMIRA A SAMPUÉS
	FINCA	ENTRADA A BODEGA VÍA AL BEQUE
	FINCA LA LIZAMA	ENTRE TOLÚ VIEJO Y SAN ONOFRE
	FINCA LA PALMERA	EN MONTEBELLO EN LA ENTRADA A PITA

3. PREDIOS URBANOS ENTREGADOS AL MOMENTO DE LA DESMOVILIZACIÓN DEL BLOQUE MONTES DE MARÍA.

PREDIOS URBANOS		
NO.	INMUEBLE	UBICACIÓN
1.	CASA DE RODRIGO MERCADO PELUFFO	CORREGIMIENTO DE SANTA FE DE RALITO TIERRALTA – CÓRDOBA
2.	PREDIO URBANO	CARRERA 38 NO. 25-13 URBANIZACIÓN VENECIA NO. 1 MANZANA C SINCELEJO
3.	PREDIO URBANO	CARRERA 4 NO. 23-55 SINCELEJO
4.	PREDIO URBANO	CARRERA 31 A NO. 31 D-20 SINCELEJO
5.	PREDIO URBANO	CARRERA 9 NO. 27 D- 80 SINCELEJO
6.	PREDIO URBANO	CASA CORREGIMIENTO DE BERRUGAS SAN ONOFRE
7.	PREDIO URBANO	CASA CORREGIMIENTO DE BERRUGAS SAN ONOFRE
8.	PREDIO URBANO	CALLE 29 NO. 20-20 SAN ONOFRE
9.	LOTE DE TERRERO URBANO	CORREGIMIENTO BERRUGAS SAN ONOFRE
10.	LOTE DE 500 METROS	SAN ONOFRE – SUCRE

11.	SOCIEDAD TRANSPORTADORA REGIONAL LTDA.	ENTREGADA POR EDWAR COBOS TÉLLEZ Y UBER BANQUÉZ MARTÍNEZ
12.	COMERCIALIZADORA LA SABANA	ENTREGADA POR EDWAR COBOS TÉLLEZ
13.	LOTE DE PARQUEADERO DE LOS TAXIS BLANCOS	SINCELEJO – SUCRE
14.	HOTEL DONDE FUNCIONAN LOS TAXIS BLANCOS	SINCELEJO – SUCRE
15.	CARNICERÍA TROPICAL	SINCELEJO – SUCRE
16.	CABAÑA EN RINCÓN DEL MAR	SAN ONOFRE – SUCRE
17.	CABAÑA	COVEÑAS – SUCRE
18.	CASA DE RODRIGO CADENA	RINCÓN DEL MAR SAN ONOFRE – SUCRE
19.	LOCALES DE VENTA DE PESCADO	RINCÓN DEL MAR SAN ONOFRE – SUCRE
20.	CASA EN CONJUNTO VILLA CAROLINA	CARTAGENA – BOLÍVAR
21.	CASA	SALIDA DEL GUAMO HACIA SAN JUAN NEPOMUCENO – BOLÍVAR
22.	CASA	EN EL CENTRO DEL GUAMO – BOLÍVAR
23.	LOTE EN LA ENTRADA DEL BARRIO LA SELVA	SINCELEJO – SUCRE
24.	CASA URBANIZACIÓN DE COMFASUCRE	COVEÑAS – SUCRE
25.	EL PALACIO ROSADO	SINCELEJO – SUCRE
26.	LOCAL EN EL MERCADO PUBLICO	SINCELEJO – SUCRE
27.	APARTAMENTO BARRIO VENECIA	SINCELEJO – SUCRE
28.	CASA BARRIO BOSTON	SINCELEJO – SUCRE
29.	LOTE DIAGONAL A LA CRUZ ROJA	SINCELEJO – SUCRE
30.	CASA EN EL BARRIO FORD	SINCELEJO – SUCRE
31.	APARTAMENTO	SINCELEJO – SUCRE
32.	CABAÑA VÍA AL FRANCES	TOLÚ – SUCRE
33.	CABAÑA PASANDO EL PUENTE DE MADERA	TOLÚ – SUCRE
34.	CABAÑA	TOLÚ – SUCRE
35.	EMISORA NTS	SINCELEJO – SUCRE
36.	CASA	PROVIDENCIA – SUCRE
37.	LOTE DE 3 HECTÁREAS	CARTAGENA – BOLÍVAR
38.	LOTE BARRIO EL RECREO	CARTAGENA – BOLÍVAR
39.	LOTES VARIOS BARRIO EL RECREO	CARTAGENA – BOLÍVAR
40.	LOTE BARRIO 13 DE JUNIO	CARTAGENA – BOLÍVAR

41.	LOTE BARRIO SAN JOSÉ DE LOS CAMPANOS	CARTAGENA – BOLÍVAR
42.	LOTE BARRIO VILLA ROSITA	CARTAGENA – BOLÍVAR
43.	PREDIO LA GALLERA 19 DE MARZO	SAN ONOFRE – SUCRE

Con el objeto de detectar bienes con fines de reparación a las víctimas que estén en cabeza de los postulados con grado de comandancia y otros, el ente de persecución penal ha informado que se han librado órdenes de policía judicial, al igual que se ha dispuesto establecer cómo están conformados sus núcleos familiares, a fin de ubicar bienes que puedan servir para garantizar el derecho a la reparación de las víctimas.

2.3. Menores de edad reclutados colocados a disposición del instituto colombiano de bienestar familiar[49].

La Fiscalía tiene documentado que al momento de la desmovilización el Bloque Héroes Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, no reportó menores en sus filas, lo cual quedó confirmado en el oficio No. 1310000 suscrito por el entonces director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Cartagena, en el que se indicó que *"revisados los archivos y bases de datos en el sistema de información del programa de desvinculados, no se reportaron adolescentes que hubiesen manifestado pertenecer al grupo en mención".*

Empero, lo anterior, mediante labores de investigación que han quedado documentadas en los informes de miembros de Policía Judicial adscritos a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, se logró constatar que el Bloque Héroes de los Montes de María sí tuvo menores de edad en sus filas antes del acto de desmovilización, algunos de los cuales ingresaron a ese grupo armado ilegal siendo menores, pero que al momento de su desmovilización ya contaban con la mayoría de edad.

2.4. Tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito del grupo armado[50].

No obstante que al momento de la agrupación de las diferentes estructuras en el movimiento nacional conocido como Autodefensas Unidas de Colombia AUC se estableció como uno de sus preceptos *"No involucrar sus frentes en actividades del narcotráfico"* y que *"Cualquiera de las Fuerzas aliadas que resultara*

[49] Sesión de audiencia del 22 de abril de 2021, audio 08001225200320200000100_20210422_01, Rec. 1:45:12.
[50] Sesión de audiencia del 22 de abril de 2021, audio 08001225200320200000100_20210422_01, Rec. 1:59:50.

involucrada con el narcotráfico asumiría su responsabilidad independientemente del Movimiento Nacional", lo cual quedó determinado al momento en los diálogos sostenidos con el Gobierno Nacional para efectos de la desmovilización[51] y en la "Quinta Cumbre Nacional de Autodefensas" en la que se acordó *"Desligar a la organización de los vínculos existentes con el narcotráfico"* con la "depuración" al interior de las AUC de aquellos cabecillas e integrantes que estuvieran vinculados con el narcotráfico y ejecutaran acciones indiscriminadas sin autorización del Estado Mayor de la Organización, lo cierto es, que el factor fundamental en la expansión paramilitar en Colombia y más específicamente del Bloque Héroes de los Montes de María fue el narcotráfico como una de las principales fuentes de financiamiento tal y como ha quedado documentado en el proceso penal especial de Justicia y Paz.

Sobre el particular, tal y como se referenció en acápite precedente de esta decisión, se refirió EDWAR COBOS TÉLLEZ alias "Diego Vecino", quien, en su calidad de comandante general del Bloque Héroes de los Montes de María, señaló que a partir de octubre de 2001 VICENTE CASTAÑO GIL le entregó la responsabilidad de cobrar los "impuestos" a los narcotraficantes que sacaban la droga por el Golfo de Morrosquillo, lo cual aconteció hasta el 14 de julio del 2005 cuando se produjo la desmovilización. Antes, esa actividad estuvo a cargo de EVER VELOZA alias "HH", quien, según sus propias manifestaciones, y tal como viene reseñado en precedencia en el cuerpo de esta sentencia, el cobro de ese "impuesto" se manejaba de la siguiente manera: el 50% le era enviado a VICENTE CASTAÑO GIL y el otro 50% era utilizado para la financiación del bloque, para lo cual, dentro de la organización, existieron unas comisiones dedicadas a realizar el cobro del impuesto al narcotráfico.

La posición geográfica y su ubicación estratégica a orillas del mar Caribe, de los departamentos de Sucre y Bolívar, fue aprovechada por las traficantes como puntos de salida de sus mercancías ilegales hacia los mercados internacionales, principalmente hacia los Estados Unidos.

Conclusivamente, el ente acusador indicó sobre el particular que no existe información que permita establecer que el Bloque Héroes de los Montes de María se creó con la finalidad del tráfico de estupefacientes, en tanto que su génesis se

[51] Documento de recomendaciones de la Comisión Exploratoria del 25 de junio de 2003.

suscitó con un ideario antisubversivo, pero durante su trasegar delictivo tuvo vínculos con el narcotráfico de donde derivó su mayor fuente de financiamiento.

2.5. Cese de toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquiera otra actividad ilícita[52].

Conforme a las labores de verificación e investigación adelantadas por los Despachos Fiscales que han tenido a su cargo la documentación del bloque Héroes de los Montes de María, y de acuerdo con los informes reportados por las Direcciones Seccionales en el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía Ley 600 SIJUF, no se encontraron postulados relacionados con investigaciones por delitos atentatorios de los mecanismos de participación democrática; así mismo, consultado el Sistema de Información de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005, de la Fiscalía, no se encontraron registros de víctimas que señalen o relacionen a postulados del bloque Héroes de los Montes de María como autores o participes de dichos delitos, todo ello con posterioridad a su desmovilización.

Adicionalmente, efectuada la desmovilización del bloque no se presentaron interferencias al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas por parte de integrantes de ese grupo armado ilegal en las zonas en donde tuvieron injerencia.

Particularmente, en cuanto hace a los postulados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO y JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** la Fiscalía indicó que no se cuenta con información acerca de que hubiesen delinquido luego de su desmovilización en el corregimiento de San Pablo, municipio de María La baja, el día 14 de julio de 2005[53].

2.6. Que se liberen las personas secuestradas, que se hallen en su poder[54].

Conforme ha quedado documentado en las sentencias proferidas en el proceso penal especial de Justicia y Paz[55], las labores de investigación del ente acusador han concluido que el bloque Héroes de Los Montes de María no participó en la comisión de conductas punibles relacionadas con la privación ilegal de la libertad,

[52] Sesión de audiencia del 22 de abril de 2021, audio 08001225200320200000100_20210422_01, Rec. 1:56:55.
[53] Información que se encuentra soportada en el informe de policía Judicial No. 9299676 suscrito por el investigador JOSE ENRIQUE FINCE MEJÍA.
[54] Sesión de audiencia del 22 de abril de 2021, audio 08001225200320200000100_20210422_01, Rec. 2:05:24.
[55] Decisiones del 20 de noviembre de 2014 de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, rad. 11 001 22 52 000 2014 00027, M.P. Léster M. González R. y del 15 de junio de 2016 de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, rad. 2006 80848, M.P. Ricardo Rendón Puerta,

como delito que correspondiera a una política y práctica de grupo, en tanto que se consideraba que ese ilícito no se identificaba con los fines de esa organización; no obstante, se ha documentado que el secuestro fue un delito conexo en muchas ocasiones a los punibles de extorsión, homicidio, desaparición forzada, etc., de ahí que al momento de la desmovilización no se hubiesen encontrado en poder de este grupo personas secuestradas.

3. De la terminación anticipada del proceso por sentencia anticipada.

3.1. Fundamentación[56].

El fundamento legal para la terminación anticipada del proceso penal especial de justicia y paz por sentencia anticipada aparece recogido actualmente en el parágrafo del artículo 18 de la Ley 975 de 2005, modificado por la Ley 1592 de 2012, así como en el artículo 36 del Decreto Reglamentario 3011 de 2013, *"Por el cual* se *reglamentan las leyes 975, de 2005, 1448 de 2011 y 1592 de 2012"*, compilado en el artículo 2.2.5.1.2.3.2 del Decreto 1069 de 2015, *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho".*

La honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en decisión del 30 de septiembre de 2015[57], precisó que de la normativa antes referida es posible determinar cuatro requisitos para la procedencia de la terminación anticipada del proceso por sentencia anticipada de la siguiente manera:

> *"i) Que al postulado o los postulados se les haya formulado imputación.*
>
> *ii) Que los hechos imputados se enmarquen en un patrón de macro criminalidad que haya sido objeto de precisión y esclarecimiento en algún fallo proferido en el contexto de Justicia y Paz.*
>
> *(…)*
>
> *Tanto el artículo 18 de la Ley 975 de 2005 como el 36 del Decreto 3011 de 2013, que regulan la terminación anticipada del proceso en este contexto, exigen que el patrón de macro criminalidad invocado para el efecto haya sido «esclarecido» en un fallo, y esclarecer no es otra cosa que «poner en claro, dilucidar un asunto»[58], (…).*

[56] Sesión de audiencia del 28 de junio de 2021, audio 08001225200320200000100_20210628_01, Rec. 34:00.
[57] Radicado 46721, M.P. Dr. Eugenio Fernández Carlier.
[58] Cita de la Corte. Diccionario de la Real Academia Española, vigesimosegunda edición.

iii) Que en esa misma sentencia hayan sido identificados los daños y perjuicios ocasionados a las víctimas con ocasión de las conductas delictivas cometidas en el marco de ese patrón de macro criminalidad.

(…)

En ese orden, de encontrarse que en la sentencia que sirve como soporte para la terminación anticipada del proceso no fueron decididas las pretensiones indemnizatorias de la totalidad de las víctimas identificadas, lo procedente será tramitar un incidente de reparación excepcional.

iv) Que el postulado o los postulados expresamente soliciten la terminación anticipada de la actuación seguida en su contra ante el Fiscal del caso y, si este se opone al pedido, ante el funcionario judicial competente, de acuerdo con el estadio procesal en que se encuentre el trámite".

Así mismo, la mencionada máxima autoridad de la justicia ordinaria ha señalado que, en procura de demostrar los anteriores requisitos, la Fiscalía *"debe allegar junto con la petición, la información y soportes que permitan evidenciar la realización de la versión libre y de la imputación, acompañado de prueba que permita a la sala de conocimiento verificar que los hechos ocurrieron, que el postulado participó en su comisión, el contexto en el que se desarrollaron y el conjunto de actividades criminales, prácticas y modos de la actividad delictiva dentro del cual se enmarca cada hecho punible imputado, a efectos de establecer que sí corresponden al patrón develado"*, en tanto que *"la naturaleza abreviada de la terminación de la actuación no exime a la Fiscalía de la carga de aportar el sustento probatorio básico que permita afirmar que las conductas imputadas sucedieron en el marco del patrón esclarecido ni exonera a la sala de conocimiento del deber de ejercer control material para establecer el aludido nexo y la responsabilidad del postulado, pues la sola confesión no es suficiente para demostrar esos aspectos".* Así entonces, *"no por ser anticipada la sentencia deben dejarse de consignar los hechos legalizados, sus autores, determinadores y móviles, menos aún su relación con el patrón macro criminal develado en la sentencia base, aspectos esenciales para satisfacer la exigencia normativa del artículo 18 de la Ley 975 de 2005"*; además, *"[l]a manifestación de voluntad de los postulados de ser sentenciados anticipadamente, encauzada procesalmente a través de la Fiscalía, no comporta prescindir de la labor judicial dirigida a comprobar el sustento fáctico y probatorio de la condena que se pretende, pues*

ello se desprende de preceptos constitucionales aplicables a cualquier actuación punitiva, tales como los previstos en los artículos 6 y 29 de la Carta Política"[59].

3.2. Verificación de los presupuestos necesarios para acceder a la solicitud de terminación anticipada del proceso por sentencia anticipada.

En decisión del 15 de noviembre de 2022[60], la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, verificó el cumplimiento de los presupuestos para acceder a la solicitud de terminación anticipada del proceso, concluyéndose con relación a cada uno, en términos generales, lo siguiente:

i) Respecto al requisito que se refiere a que a los postulados se les hubiese formulado imputación, se constató que, en efecto, en sesión de audiencia desarrollada ante el Despacho de Control de Garantías de esta Sala de Justicia y Paz, el día 23 de octubre de 2019[61], en contra de los postulados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** se les imputaron un total de 49 cargos por los cuales se les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, la cual ya les fue sustituida a los dos postulados.

De acuerdo con lo antes indicado, se tiene que, de las imputaciones realizadas a estos postulados, la Fiscalía presentó y mantuvo ante la Sala de Conocimiento el total de 49 cargos[62], que, estos corresponden: al punible de concierto para delinquir; a los delitos que hacen parte de los patrones de macrocriminalidad de homicidio, desplazamiento forzado y desaparición forzada.

ii) Con relación al aspecto que tiene que ver con que los hechos imputados se enmarquen en un patrón de macro criminalidad que haya sido objeto de precisión y esclarecimiento en algún fallo proferido en el contexto de Justicia y Paz, se indicó que, conforme a lo señalado por el ente acusador, la sentencia que sirve de fundamento para deprecar la solicitud de sentencia anticipada es la proferida por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 20 de noviembre de 2014 en contra de SALVATORE MANCUSO

[59] Decisión del 7 de marzo de 2018, rad. 51413, M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa.
[60] La cual se entiende incorporada a la presente sentencia, conforme a lo contemplado en la parte final del párrafo quinto del artículo 2.2.5.1.2.3.2 del Decreto 1069 de 2015.
[61] Acta No. 116-2019.
[62] Respecto de los cuales la Magistratura verificó la aceptación libre, voluntaria y espontánea del postulado, debidamente asesorados por su abogada defensora.

GÓMEZ, EDGAR IGNACIO FIERRO FLORES, JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, UBER ENRIQUE BANQUÉZ MARTÍNEZ, JOSÉ GREGORIO MANGONES LUGO, JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ, LEONARDO ENRIQUE SÁNCHEZ BARBOSA, SERGIO MANUEL CÓRDOBA ÁVILA, MIGUEL RAMÓN POSADA CASTILLO, JULIO MANUEL ARGUMEDO GARCÍA, HERNANDO DE JESÚS FONTALVO SÁNCHEZ y OSCAR JOSÉ OSPINO PACHECO, exintegrantes de los bloques Catatumbo, Norte, Córdoba y Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC[63].

Particularmente, la Sala homóloga de Bogotá, al referirse en concreto al denominado Bloque Héroes de los Montes de María, en el cual militó UBER ENRIQUE BANQUÉZ MARTÍNEZ (alias "Juancho Dique") en calidad de comandante del frente Canal del Dique, detalló los aspectos relacionados con: *i)* georreferenciación y caracterización; *ii)* requisitos de elegibilidad; y *iii)* patrones de macro criminalidad.

En lo relativo a los patrones de macrocriminalidad que guardan relación con el presente asunto, siguiendo los derroteros plasmados en la normativa transicional, declaró esa Magistratura la acreditación de los siguientes aspectos:

i) Masacres y homicidios selectivos, bajo la consideración que, mediante una metodología deductiva, se logró determinar que *"a partir de los datos y de las informaciones que han sido recolectadas, fueron corroboradas las distintas prácticas macro criminales y la sistematicidad y generalidad con las que masivamente fueron victimizados los civiles. Se identificó así mismo que tales prácticas se dieron en cumplimiento de las políticas del grupo orientadas al sometimiento irrestricto de la población civil, de las regiones, sus territorios, su economía, su cultura, su política y su administración, para lo que estas organizaciones concibieron como medios idóneos el arrebatar a las poblaciones todos y cada uno de sus derechos fundamentales, mediante incontables homicidios en personas protegidas, Desaparición forzada de personas, Desplazamientos de población, civil, Delitos de violencia de género, Reclutamiento ilícito, desaparición forzada y otras graves violaciones que se dieron en condiciones de conexidad"* documentándose por parte de la Unidad Nacional de Fiscalías Para la Justicia y la Paz *"la masiva, generalizada y sistemática victimización producto de atentados contra la vida, en cuanto a que respecto del Bloque Montes de María se encuentran documentados 1.875 víctimas directas".*

[63] Radicado 11 001 22 52 000 2014 00027, M.P. Lester M. González R.

ii) Desplazamiento forzado de población civil, bajo el entendido que la *"[u]nidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz, registra 39.664 hechos que afectaron 72.510 víctimas aproximadamente, atribuibles a los Bloques Norte, Catatumbo, Córdoba y Montes de María, [que] permite establecer los Modus Operandi, Prácticas y Políticas; que sumado a otras variables, nos lleva a explicar el Patrón de Macrocriminalidad del Desplazamiento Forzado",* atribuyéndose al bloque Montes de María en esa sentencia *"261 registros (145 Colectivos y 116 Individuales) para los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre".*

iii) Desaparición forzada, considerando que: *"[c]omo resultado del análisis realizado a la información aportada se establece que existía un patrón de comportamiento utilizado por parte del Grupo Organizado Armado Ilegal - Bloques Norte, Montes de María, Catatumbo y Córdoba, tanto de enfrentamiento con su enemigo natural (Guerrilla) el cual se denominó lucha antisubversiva con el 74.9% (2.608 Casos) y como forma de control sobre la población civil en las zonas y recursos conquistados control social, territorial y de recursos (869 casos); las cuales generaban temor e inseguridad, todas estas en forma reiterada, lo que determinó un desplazamiento masivo de la población como un hecho generalizado y sistemático, que tiene graves consecuencias sobre individuos y núcleos familiares, quienes son obligados a salir de la zona donde habitan contra su voluntad, afectando sus nexos y vínculos familiares y sociales entre otros, siendo la más afectada la población civil como consecuencia del conflicto armado",* acreditándose *"609 casos que involucraron Desapariciones forzadas de personas, con un total de 999 víctimas directas en lo que se visibilizan prácticas reiteradas y sistemáticas atadas al modus operandi que soportan que esta práctica criminal por igual se constituyó como una tendencia macro por parte de la organización armada ilegal"*, resultando como víctimas de este patrón atribuidas al Bloque Montes de María un total de 150.

Adicionalmente, en ese fallo la Sala de Justicia y Paz de Bogotá con relación a los patrones de macrocriminalidad esclarecidos, resolvió:

"*II.1.: DECLARAR que en presente proceso conforme a lo motivado, se acredita la estructura de PATRONES MACRO-CRIMINALES que se evidenciaron mediante los delitos de HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA, DESAPARICIÓN FORZADA, DELITOS DE VBG, (…) y DESPLAZAMIENTO FORZADO DE POBLACIÓN CIVIL, a los que se adecuaron las acciones desplegadas de manera sistemática y generalizada por los postulados SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, SERGIO MANUEL CÓRDOBA ÁVILA, JULIO MANUEL ARGUMEDO GARCÍA,*

JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, UBER ENRIQUE BANQUÉZ MARTÍNEZ, HERNANDO DE JESÚS FONTALVO SÁNCHEZ, LEONARDO ENRIQUE SÁNCHEZ BARBOSA, JOSÉ GREGORIO MANGONEZ LUGO, MIGUEL RAMÓN POSADA CASTILLO, OSCAR JOSÉ OSPINO PACHECO, JOSÉ BERNARDO LOZADA ARTUZ, EDGAR IGNACIO FIERRO FLÓREZ en sus condiciones de Comandantes de los desmovilizados Bloques Norte, Catatumbo, Córdoba y Montes de María de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia AUC. II.2.: DECLARAR que los PATRONES MACRO CRIMINALES acreditados se corresponden con graves, sistemáticas y generalizadas violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDDH) y contra el D.I.H. II.3.: DECLARAR que los PATRONES MACRO CRIMINALES se corresponden simultáneamente con graves, sistemáticas y generalizadas violaciones al Derecho Internacional Humanitario. II.4.: DECLARAR que la correspondencia que se señala en el numeral Segundo se evidencia en el presente proceso con ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil, que se tradujeron en la ejecución de asesinatos y actos que atentaron contra la integridad física de personas; Deportación o traslado forzoso de población; privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; Tratos inhumanos y degradantes y experimentos biológicos en persona protegida; Tortura; Violación; esclavitud sexual; acceso carnal violento; Actos sexuales abusivos; prostitución forzada o esclavitud sexual; Actos sexuales violentos en persona protegida; embarazo forzado;, esterilización forzada; y Desaparición forzada de personas. II.5.: DECLARAR que la correspondencia que se señala en el numeral tercero se evidencia en el presente proceso simultáneamente con la ejecución de Homicidios múltiples y selectivos en persona protegida, Lesiones personales en persona protegida, Tortura en persona protegida, Detención ilegal y privación del debido proceso sobre persona protegida, Destrucción y apropiación de bienes protegidos, Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, Reclutamiento Ilícito, Exacción o contribuciones arbitrarias y Desaparición forzada de personas, II.6.: DECLARAR que los PATRONES MACRO CRIMINALES acreditados en el proceso se corresponden igualmente con graves, sistemáticas y generalizadas y diversas formas de violencia que involucraron además atentados al DERECHO FUNDAMENTAL DE LA DIGNIDAD HUMANA".

Como consecuencia de lo anterior, se legalizaron los cargos y se condenó, entre otros, a UBER ENRIQUE BANQUÉZ MARTÍNEZ quien militó en el Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, mismo de militancia de los aquí condenados ESQUIVEL CASTILLO y REVOLLO

PATERNINA, *"por su participación en los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada, destrucción y apropiación de bienes protegidos, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, secuestro simple, violación de habitación ajena, exacción o contribuciones arbitrarias".*

El fallo proferido por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá fue objeto de apelación por parte del señor representante del Ministerio Público y de algunos representantes de víctimas con relación a la no satisfacción de la garantía a la verdad dada *"la superficialidad con que se manejó la reconstrucción de patrones y contextos"*, así como por asuntos atinentes al incidente de reparación integral, respecto de lo cual la honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en proveído del 24 de octubre de 2016[64], sostuvo que a pesar de que *"[a]siste la razón en varias de las quejas del Ministerio Público, pues en verdad que el manejo del trámite y del discurso por parte del Tribunal no es el más acertado en aras de la construcción histórica de lo acaecido que, a la par, sirva a las víctimas como restablecimiento de su derecho a la verdad"*, y pese a los reproches expuestos por los apelantes, en el sentido de que *"el Tribunal no argumentó a profundidad respecto de que el accionar delictivo del grupo armado ilegal no pudo haberse desarrollado, o al menos no con la violencia y atrocidades de que da cuenta el proceso, sin la participación activa u omisiva, la complacencia, la connivencia de muchos sectores de la sociedad"*, dichas circunstancia no eran suficientes para decretar *"la nulidad como se pretende".*

Sin que el Alto Tribunal hubiese efectuado referencias adicionales con relación a aspectos atinentes al actuar macro criminal y a los patrones desarrollados por los grupos armados organizados al margen de la ley a los que pertenecieron los postulados ahí encausados, y resolvió: *i)* declarar *"la nulidad parcial de todo lo actuado, a partir inclusive de la última sesión de la audiencia del incidente de reparación integral, exclusivamente respecto"* de unas determinadas víctimas, hechos y peticiones. *ii) "Revocar parcialmente el fallo del 20 de noviembre de 2014, proferido por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, exclusivamente"* con relación a la concesión de perjuicios respecto de puntuales personas, y excluir a específicas víctimas de la decisión de primera instancia. *iii) "Modificar parcialmente el fallo del 20 de noviembre de 2014, proferido por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, exclusivamente"* con relación a algunos aspectos relacionados a las órdenes, gestiones, coordinaciones,

[64] Radicado 46.075, M.P. Dr. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO.

reconocimientos y pagos que debe efectuar la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas conforme a lo indicado en la decisión de segunda instancia. *iv) "Adicionar el fallo del 20 de octubre de 2014, proferido por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá"* respecto a las inserciones de ciertos cargos como legalizados; a la adición de un postulado como penalmente responsable de algunos delitos; y, a la inclusión de determinados aspectos respecto de las víctimas, entre otros. Y *v) "**Confirmar**, **en todo lo demás, la sentencia del 20 de noviembre de 2014, mediante la cual una Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó"***, entre otros, a UBER ENRIQUE BANQUÉZ MARTÍNEZ.

Así las cosas, de acuerdo al contenido de esta decisión de segunda instancia, encontró esta Sala de Conocimiento de Justicia y Paz que, tal y como lo indicó la señora Fiscal en su momento, la sentencia emanada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, cobró firmeza en cuanto al esclarecimiento que se efectuó de los patrones de macrocriminalidad de, entre otros: desaparición forzada, desplazamiento forzado y homicidios en persona protegida -selectivos y múltiples-, de ahí que, inclusive, confirmara la condena impuesta por la comisión de delitos constitutivos de esos patrones a ÚBER ENRIQUE BANQUÉZ MARTÍNEZ, quien reiteramos militó en el Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, mismo de militancia de los aquí condenados LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO y JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA

Ahora bien, en cuanto hace a estos postulados, se tiene que, tal y como quedó expuesto, pertenecieron a la estructura armada ilegal bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, a quienes se les efectuó la imputación de cargos de la manera como se detalló en acápite precedente, los cuales, tal y como indicaron las partes e intervinientes, se encuadran en los patrones de macrocriminalidad de *desaparición forzada, homicidios selectivos y múltiples y desplazamiento forzado*, mismos que fueron esclarecidos en la macrosentencia antes aludida, cumpliéndose con ello lo preceptuado en el artículo 2.2.5.1.2.3.2 del Decreto 1069 de 2015[65].

iii) En lo tocante a que en la sentencia que sirve de base a la Fiscalía se hayan identificado los daños y perjuicios ocasionados a las víctimas con ocasión de las conductas delictivas cometidas en el marco del patrón de macrocriminalidad, se

[65] Que, en cuanto a la terminación anticipada del proceso, en el párrafo quinto señala: *"La Sala de Conocimiento verificará que el postulado solicitante hizo parte de un patrón de macrocriminalidad ya esclarecido en una sentencia de justicia y paz (…)".*

tiene que, conforme a lo expuesto por la señora Fiscal de entonces, se estableció que de los hechos imputados a los aquí postulados se desprenden 245 víctimas, quienes no fueron incluidas en la macrosentencia que ha servido de base para esta sentencia anticipada, de las cuales hay 70 víctimas con representación judicial y 175 sin representación judicial[66].

En observancia a lo precedentemente expuesto, resulta necesario recordar aquí, que en desarrollo de la vista pública y oral la Magistratura Ponente advirtió muy claramente a la señora representante del ente acusador para ese entonces acerca de la situación suscitada con las víctimas; inclusive, en el acápite *"IV. OTRAS DECISIONES"* del auto adiado 15 de noviembre de 2022, mediante el cual se accedió a la solicitud de terminación anticipada del proceso por sentencia anticipada, se instó a esa la Fiscalía Delegada, a efectos de *"cumplir con los requisitos para el proferimiento de la sentencia que en derecho corresponda"*, para que:

"Tal como viene advertido, se peticiona a la Fiscalía que, conjuntamente con los abogados representantes de víctimas, actualice y consolide la información respecto de quiénes se van a esgrimir pretensiones reparatorias en el trámite incidental, la cual debe remitirse con la suficiente antelación al Despacho que preside la suscrita Magistrada ponente. Además, se solicita a la Coordinación de los Representantes Judiciales de Víctimas de la Defensoría del Pueblo Regional Atlántico, que, de acuerdo con el cuadro de víctimas remitido por el Despacho Fiscal, efectúe las labores que se consideren pertinentes a fin de garantizar a las víctimas que aún no cuenten con asistencia jurídica, su representación judicial a fin de procurar por su derecho a la reparación integral dentro del trámite incidental de carácter excepcional en lo que resultare posible."

iv) En lo que tiene que ver con el aspecto atinente a que el postulado expresamente hubiese solicitado la terminación anticipada de la actuación seguida en su contra ante el Fiscal del caso, en efecto se constató que la señora representante del ente de persecución penal al inicio de la vista pública de sustentación de la solicitud de terminación anticipada del proceso puso en conocimiento de la audiencia que **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** formalizaron su deseo de acogerse a la institución jurídica de la sentencia anticipada; ante lo cual, la Magistratura verificó con los postulados que la

[66] El listado total de las víctimas fue leído por la señora Fiscal en desarrollo de la vista pública. Audio 08001225200320200000100_20210701_01, rec. 35:59.

expresión de su voluntad hubiese sido libre, voluntaria, espontánea y con la debida asistencia de su defensor[67].

Expuesto lo anterior, dado que en el presente caso están dados los presupuestos para emitir sentencia de carácter anticipada, se procede a continuación al análisis de cada uno de los casos imputados y aceptados por los postulados.

V. CARGOS IMPUTADOS Y ACEPTADOS POR LOS POSTULADOS.

1. Preliminares.

Antes de proceder a la exposición y análisis de los cargos que hacen parte de los patrones de macrocriminalidad que fueron expuestos por el ente acusador en la audiencia de sustentación de la solicitud de terminación anticipada del proceso por sentencia anticipada[68], encuentra la Sala necesario destacar algunos aspectos preliminares que se tendrán en cuenta al abordar el estudio de estos cargos.

1. Con relación a aquellos casos en los que los postulados han referido que las víctimas presuntamente hicieron parte de las autodefensas, esta Sala ha sido del criterio según el cual de no existir sentencia debidamente ejecutoriada en la que se hubiese establecido con grado de certeza su pertenencia al grupo armado ilegal, y, por ende, su responsabilidad por el delito de concierto para delinquir, debe darse preeminencia al derecho constitucional de presunción de inocencia, por manera que en aquellos casos en que *"exista alguna duda sobre la membresía de un individuo en un grupo armado organizado (y por tanto sobre su carácter de persona no protegida),* ***será considerado como persona protegida*** *(destaca la Sala)"*[69], de tal manera que, en esos casos, la adecuación típica corresponderá a la de homicidio en persona protegida[70]. Tal consideración, obviamente, también debe tenerse en cuenta para los hechos en los que los postulados injustamente señalaron víctimas de hacer parte de grupos guerrilleros, como justificación para perpetrar atentados en su contra, y respecto de las cuales el ente acusador no hubiese derruido su presunción de inocencia.

---

[67] Sesión de audiencia del 26 de abril del 2021, audio 08001225200320200000100_20210426_02, rec. 24:39
[68] Que se desarrolló en las sesiones del 26, 28 y 29 de abril; 30 de junio; 1 y 2 de julio y 15 de noviembre de 2021.
[69] "LA PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE PERSONA PROTEGIDA DURANTE LOS CONFLICTOS ARMADOS", supervisado por el profesor Héctor Olásolo Alonso. En: https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/12298.
[70] En extenso ver lo señalado por la Sala en las sentencias proferidas en contra de ROLANDO RENÉ GARAVITO ZAPATA, del 11 de julio de 2016 (pág. 127), y JHON JAIRO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ (pág. 134), del 11 de septiembre de 2017, Magistrada Ponente Dra. CECILIA LEONOR OLIVELLA ARAUJO.

2. A fin de comprobar la ocurrencia de los delitos que hacen parte de los cargos imputados y la responsabilidad que le corresponde a los postulados en los mismos, la Sala ha tenido en cuenta los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía Doce de la Dirección de Fiscalía Delegada Nacional Especializada de Justicia Transicional aportados virtualmente en desarrollo de la diligencia y que hacen parte del expediente digital[71], de los cuales se corrió traslado a los intervinientes, quienes no expresaron alguna objeción, lo cual no obsta para que, en casos de falencias o escases probatoria se aprecie, en lo pertinente, los elementos aportados por los señores representantes judiciales de víctimas en desarrollo del Incidente de Reparación Integral de Carácter Excepcional. Así las cosas, y si aún con todo ello se advierten casos en los que la actuación no registre, aunque sea mínimamente, los elementos que permitan a la Sala arribar al convencimiento acerca de la ocurrencia de los delitos y de la responsabilidad del postulado, no se podrá impartir legalización de esos cargos[72].

En consonancia con lo anterior, se reitera, la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia[73] ha precisado que en procura de probar los aspectos señalados en la normativa y en la jurisprudencia para acceder a la culminación anticipada del proceso transicional:

> *"la Fiscalía debe allegar junto con la petición, la información y soportes que permitan evidenciar la realización de la versión libre y de la imputación,* ***acompañado de prueba que permita a la sala de conocimiento verificar que los hechos ocurrieron, que el postulado participó en su comisión, el contexto en el que se desarrollaron y el conjunto de actividades criminales, prácticas y modos de la actividad delictiva dentro del cual se enmarca cada hecho punible imputado, a efectos de establecer sí corresponden al patrón ya develado*** (resaltas por fuera del texto original)*"*, dado que *"[l]a naturaleza abreviada de la terminación anticipada no exime a la Fiscalía de la carga de aportar el sustento probatorio básico que permita afirmar que las conductas imputadas sucedieron en el marco del patrón esclarecido ni exonera a la sala de conocimiento del deber de ejercer control material para establecer el aludido nexo y la responsabilidad del postulado, pues* ***la sola confesión no es suficiente para demostrar esos aspectos*** (se destaca)*"*; además, *"[l]a manifestación de*

[71] Obrantes en el expediente digital en la carpeta llamada "EMP".
[72] Cabe señalar que, tal y como lo muestran los registros de la actuación, la Magistratura requirió en varias oportunidades a la Fiscalía delegada para este caso a fin de que allegara de manera completa el sustento probatorio de todos los cargos que son objeto de sentencia.
[73] Decisión del 7 de marzo de 2018, rad. 51413, M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa.

voluntad de los postulados de ser sentenciados anticipadamente, encauzada procesalmente a través de la Fiscalía, no comporta prescindir de la labor judicial dirigida a comprobar el sustento fáctico y probatorio de la condena que se pretende (…), pues ello se desprende de preceptos constitucionales aplicables a cualquier actuación punitiva, tales como los previstos en los artículos 6 y 29 de la Carta Política".

Inclusive, la máxima autoridad de la justicia ordinaria ha enfatizado que *"resulta trascedente el aporte de elementos materiales de prueba que sustenten los cargos atribuidos, pues no basta la sola confesión del postulado para dar por demostrado tanto la ocurrencia de los hechos como su probable participación en los mismos y por ende su consiguiente responsabilidad penal"*; así entonces, deberá la versión de los postulados ser objeto de análisis cuidadoso de tal manera que a la Sala no le asalte duda acerca de que lo versionado corresponde a la realidad de lo acontecido en consecuencia de la responsabilidad de los postulados frente a los mismos, advertido, además, que no se satisface la condición aludida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, con el mero enunciado de los elementos de convicción, sino que, se insiste, se hace necesario su entrega y aporte para que obren en la actuación, porque *"la ausencia de esos medios de prueba [comporta] la imposibilidad de proferir sentencia"* [74].

3. La Sala se ceñirá a la forma y términos en que se imputaron los cargos a los postulados ante el Despacho de Control de Garantías, en tratándose de una etapa procesal primordial prevista por el legislador para el proceso penal especial de Justicia y Paz, que presupone, entre otras cosas, la previa aceptación de su responsabilidad, conforme con sus versiones libres y confesiones, y la iniciación formal de la investigación penal.

Es de recordar que el proceso penal especial de Justicia y Paz, prescribe el adelantamiento de unas etapas preclusivas respeto a la garantía fundamental del debido proceso, acorde a lo reglado en la Ley 975 de 2005, modificada por la Ley 1592 de 2012, y sus normas complementarias, de ahí que la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia hubiese enfatizado en que *"el debido proceso no admite excepciones, ni siquiera respecto del juzgamiento regulado en la Ley de Justicia y Paz, pues precisamente dentro de sus principios rectores no sólo se incluyó el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas,*

[74] Adiada 5 de agosto de 2020, rad. 55135, M.P. Eugenio Fernández Carlier.

sino también el respeto al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados, como se contempla en el artículo 4º de dicha normatividad: (…) Por lo tanto, el procedimiento regulado en la Ley de Justicia y Paz no puede adelantarse de cualquier manera, sino sometido a las pautas que determinan la Constitución y la ley"[75].

En consonancia con lo anterior, la aludida máxima Corporación de la justicia ordinaria ha sostenido que: *"la Fiscalía General de la Nación ostenta en el proceso de Justicia y Paz regido por la Ley 975 de 2005, la titularidad de la acción penal; de ahí que no puedan, ni la judicatura ni las demás partes, imputar hechos o cargos que previamente no hayan sido expuestos y discernidos por el ente instructor, y además, confesados y aceptados por los postulados"*; de tal manera que al Tribunal no le está dado, por un lado, *"legalizar cargos que no fueron confesados, imputados y por los que tampoco se acusó a los postulados, por lo tanto, no se investigaron ni debatieron dentro de este proceso"*, y, por otro, legalizar cargos por hechos que no ocurrieron o respeto de los cuales no se demostró su ocurrencia[76].

Por lo antes expuesto, en manera alguna la Sala puede pretermitir la imputación de los cargos, ni subrogarse las facultades inherentes al Magistrado de Control de Garantías, es por ello que con relación a los delitos, circunstancias de menor o mayor punibilidad, hechos o cargos que no hubiesen sido imputados ***no se podrá impartirá legalización***, con las consecuencias que se derivan para el incidente de reparación integral a las víctimas de carácter excepcional, lo cual no obsta para que la Fiscalía efectúe su imputación en una oportunidad ulterior en aras de garantizar los derechos de las víctimas, todo esto como lineamientos generales para el proferimiento de nuestras sentencias para el caso presente se estudiará si hay algún caso en que se encuadre estas directrices o disposiciones legales y jurisprudenciales y a ello se atendrá la Sala.

Sentado lo anterior, a continuación, la Sala procederá a exponer el delito de Concierto para delinquir, así como los cargos que conforman los patrones de macrocriminalidad de homicidios selectivos y múltiples, desaparición forzada y

[75] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 17 de abril de 2013, rad. 4.559, M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández.
[76] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 17 de junio del 2015, rad. 43195, M.P. Patricia Salazar Cuellar.

desplazamiento forzado, respecto de los cuales se efectuará el análisis correspondiente por parte de la Sala.

2. De los cargos en particular.

2.1. Concierto para delinquir[77].

Tal y como se referenció en la decisión del 15 de noviembre de 2022, mediante la cual esta Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, verificó el cumplimiento de los presupuestos para acceder a la solicitud de terminación anticipada del proceso por sentencia anticipada, la Fiscalía General de la Nación imputó el cargo de concierto para delinquir, de conformidad con el artículo 340 de la Ley 599 de 2000, solo respecto del postulado **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA**, en los siguientes términos:

Víctima Directa	Fecha	Departamentos	Municipio	Delito y grado de participación
El Estado	Desde 25 septiembre 2004 al 14 Julio de 2005[78]	Sucre, Bolívar y Córdoba	Cartagena	Autor de concierto para delinquir (Art. 340 del C.P.)

En lo que hace al postulado **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** no le fue imputado el delito de concierto para delinquir en razón a que este postulado presenta sentencia proferida dentro del radicado No. 041-2013, por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Cartagena, Bolívar, de fecha 11 de agosto de 2015, en contra de LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO a la pena principal de prisión de (3) años y (8) meses como autor responsable del delito de concierto para delinquir agravado.

Análisis de la Sala.

De acuerdo con lo reseñado, y conforme a lo referido en los acápites intitulados *"2. Antecedentes y requerimientos por la justicia ordinaria"* y *"1.6. Permanencia de los postulados LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO y JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA en el Bloque Héroes de los Montes de María"* de esta decisión, se tiene que la Fiscalía General de la Nación imputó y mantuvo para efectos de la sentencia el cargo con el delito de concierto para delinquir en contra del postulado **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA**, el cual se encuentra suficientemente demostrado.

[77] Sesión de audiencia del 29 de junio de 2021, audio 08001225200320200000100_20210629_03, Rec. 58:50.
[78] Este postulado presenta sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo, Rad. 2004-00045 del 31 de marzo de 2005, la cual cobijó el periodo de que va de enero de 1999 al 24 de septiembre de 2004.

En efecto, se tiene que el postulado hizo parte del Bloque Héroes de los Montes de María de las AUC, al cual se vinculó voluntariamente, desempeñando diversos roles esenciales para alcanzar los fines de ese grupo armado organizado al margen de la ley, participando activamente en la comisión de múltiples delitos desarrollados dentro de un ámbito territorial, para lo cual se valió en todo momento de armas de fuego y material de intendencia.

Por manera que, establecida la existencia de la organización criminal, integrada por una pluralidad de personas bajo un acuerdo de voluntades, con conocimiento de la forma cómo estaba dada su articulación, es claro que **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** fue conocedor de las finalidades que perseguía el grupo armado ilegal al que perteneció, y, en razón a ello, pidió ser acogido por la Ley 975 de 2005, manifestando su voluntad de cumplir en todo momento con las obligaciones previstas en la normativa transicional, por lo cual pasó a ser postulado por el Ministerio del Interior y de Justicia.

Lo expuesto, permite radicar en cabeza del aludido postulado responsabilidad por el delito endilgado el cual resultó agravado en tanto que durante su militancia en el grupo no solo promovió y organizó el concierto para delinquir, sino que también, bajo la concurrencia de pluralidad de voluntades cometió delitos de homicidio, desplazamiento forzado, desaparición forzada, entre otros. En efecto, **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** llevó a cabo acciones y desempeñó roles de importancia para el mantenimiento, fortalecimiento o funcionamiento del grupo armado ilegal, tal como ha quedado descrito en el cuerpo de esta sentencia, el postulado desempeñó los roles de puesto de radio, urbano y segundo comandante de la urbana dentro del Bloque Héroes del Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC.

Con todo, se confirman los presupuestos que jurisprudencialmente ha delineado la Honorable Corte Suprema de Justicia para endilgar responsabilidad por el delito de concierto para delinquir a este postulado, que además, en estos casos, constituye crimen de lesa humanidad, los cuales corresponden a: *i)* las actividades ilegales desarrolladas por el postulado, que no solo derivaron en la comisión de punibles comunes sino además en crímenes de Lesa Humanidad, llevados a cabo de manera sistemática y generalizada en contra de la población civil y en desarrollo y con ocasión del conflicto armado, los cuales se irán detallando más adelante, *ii)* el ingreso y permanencia del postulado en las estructuras de las Autodefensas Unidas

de Colombia, se dio de manera voluntaria, y *iii)* a sabiendas de la naturaleza criminal de esa organización.

Adicionalmente, como ha quedado documentado, el postulado se valió de armas de fuego y material de intendencia para la ejecución de los delitos acaecidos con ocasión y en desarrollo del conflicto armado al interior del bloque Héroes de los Montes de María; sin embargo, los punibles de fabricación tráfico y porte de armas de fuego o municiones de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Militares, contenidos en los artículos 365 y 366 del Código Penal, se entienden subsumidos en el delito de concierto para delinquir agravado, conforme lo ha dejado precisado la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia[79].

Por todo lo anterior, la Sala no puede llegar a una conclusión diferente a que se encuentra acreditada la ocurrencia del delito de Concierto para Delinquir Agravado, en la forma y términos antes expuestos, y, sin lugar a dudas, la responsabilidad de **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** en el mismo, en la forma y términos como la Fiscalía presentó la imputación, por manera que ***se declarará tal como se hace la legalización de este cargo con el delito de Concierto para Delinquir recogido en el artículo 340 del Código Penal, con el agravante contenido en el inciso segundo ejusdem.***

2.2. Patrón de macrocriminalidad de homicidios selectivos y múltiples.

Cargo No. 2[80]

Víctima	MARCOS PALACIO CARO
Postulado	JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA alias "El Ñato".
Fecha y lugar de los hechos.	27 de agosto de 2003, en Cartagena, (Bolívar).
Política: control social, territorial y de recursos. **Práctica:** homicidio selectivo. **Modus operandi:** sicariato.	
Imputación Fáctica.	
El día 27 de agosto de 2003, MARCOS PALACIO CARO se encontraba almorzando en un kiosco del mercado de Bazurto en la ciudad de Cartagena	

[79] Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia, decisión del 3 de agosto de 2011, rad. 36563, M.P. José Luís Barceló Camacho; criterio reiterado, entre otros, en la decisión del 31 de agosto de 2011, rad. 36125, M.P. Sigifredo Espinoza Pérez.

[80] Sesión de audiencia del 29 de junio de 2021, audio 08001225200320200000100_20210629_03, Rec. 5:45.

(Bolívar), cuando un sujeto le disparó por la espalda causándole la muerte de manera inmediata, relata la reportante TELZARIS PALACIO CARO hermana de la víctima directa que su hermano se dedicaba al comercio y que vivía con su familia en Cartagena, indicando, que según informaciones a su hermano lo mataron las Autodefensas Unidas de Colombia.

Manifiesta el postulado JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA en versión libre rendida por este el 9 de mayo de 2012, quien, además, aceptó su participación en el hecho que la víctima fue acusada por un ganadero del municipio de Villanueva de apellido NEGRETE de estarle robando ganado de su finca por lo que buscó la colaboración con las autodefensas para darle muerte a MARCOS PALACIO CARO.

Imputación jurídica

La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo expuso ante la Sala de Conocimiento en contra de **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** alias "El Ñato", en calidad de coautor, por el delito de **homicidio en persona protegida**, bajo la circunstancia de mayor punibilidad del numeral 5 del artículo 58 de la ley 599 del 2000.

Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física

1. Formato de órdenes a Policía Judicial de fecha 2 de octubre de 2017, con el fin de documentar el homicidio de MARCOS PALACIO CARO.
2. Acta de levantamiento de Cadáver No. 388 realizada al cuerpo de MARCOS PALACIO CARO.
3. Informe de Identificación Indiciaria No. 6 de fecha 29 de agosto de 2003, signado por la Médico Forense Dra. ANA MAGOLA MANGA CEDEÑO.
4. Orden de apertura investigación penal por homicidio de MARCOS PALACIO CARO proferido por la Fiscalía Novena Seccional de Cartagena (Bolívar).
5. Álbum fotográfico del cuerpo sin vida de MARCOS PALACIO CARO.
6. Análisis balístico realizado a las vainillas encontradas en escena del hecho en el que resultó muerto MARCOS PALACIO CARO.
7. Protocolo de necropsia No. 547 realizado al cuerpo de MARCOS PALACIO CARO.
8. Auto de fecha 17 de diciembre de 2004, en el que la Fiscalía Novena Seccional de Cartagena (Bolívar), se abstiene de iniciar investigación penal y ordena y archivo del expediente.
9. Cartilla biográfica de MARCOS PALACIO CARO.
10. Registro civil de defunción No. 04383330 en el que se inscribe la muerte de MARCOS PALACIO CARO.
11. Formato de Referencia del Hecho en Versión de fecha 9 de mayo de 2012, realizado por el postulado JUAN CARLOS REVOLLO PATERNITA, en la cual detalló lo siguiente: *"JUAN CARLOS REVOLLO LE SOLICITA LA COLABORACIÓN A ALIAS GEÑO URBANO DE CARTAGENA PARA QUE LO EJECUTE, COMO EFECTIVAMENTE SE HIZO ESE MISMO DÍA A LA UNA DE TARDE"*.
12. Recorte periodístico.

13. informe investigador de campo de fecha 25 de octubre de 2017 en el que se documenta el hecho de homicidio del señor MARCOS PALACIO CARO. 14. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley de AYDA CARO CARMONA. 15. Registro civil de nacimiento de DEIVIS PALACIO ANAYA. 16. Poder suscrito por AYDA CARO CARMONA. 17. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley de FREDIS PALACIO CARO. 18. Registro civil de nacimiento No. 52367635 de FREDIS PALACIO CARO. 19. Entrevista rendida por FREDIS PALACIO CARO. 20. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley de FREDIS PALACIO CARO. 21. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley de TELZARIS PALACIO CARO. 22. Copia cédula de ciudadanía de TELZARIS PALACIO CARO.
Análisis de la Sala.
Este cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía, de la descripción del hecho y de los elementos de convicción allegados, que permiten dar por demostrada la materialidad del delito imputado y la responsabilidad que claramente acepta el postulado en el mismo; además, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de homicidio, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley AUC, motivado por el control social y territorial que ejerció el postulado en sus zonas de injerencia, bajo el infundado señalamiento de haber sido la víctima responsable de cometer el delito de abigeato en una finca de Villanueva, lo cual no encontró sustento en algún elemento de convicción adicional al dicho del postulado, por lo que se deberá mantener incólumes la honra y buen nombre de quien respondió en vida a MARCOS PALACIO CARO. Ahora bien, en consideración a que JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA hizo mención a que fue un sujeto de apellido *"NEGRETE"* residente en la ciudad de Cartagena, quien directamente, instigó y solicitó la colaboración de las autodefensas para que se le cegara la vida al señor MARCOS PALACIO CARO, se insta al ente de persecución penal para que disponga lo pertinente si aún no lo ha hecho a efectos de establecer la plena identidad del individuo que ha sido señalado por el postulado, y, se proceda a efectuar los diligenciamientos correspondientes, compulsa de copias que pusiesen corresponder, etc., para que sea investigado por la Unidad competente por su presunta responsabilidad en el hecho.

Cargo No. 3[81]

[81] Sesión de audiencia del 29 de junio de 2021, audio 08001225200320200000100_20210629_03, Rec. 9:57.

Víctimas	ALEX GIOVANY BOTERO AGUDELO y ARNOL JOSÉ JULIO SILGADO.
Postulado	JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA alias "El Ñato".
Fecha y lugar de los hechos.	7 de agosto de 2001, en San Onofre (Sucre).
Política: control social, territorial y de recursos. **Práctica:** homicidio selectivo. **Modus operandi:** sicariato.	
Imputación Fáctica.	
Manifiesta el señor FREDIS PALACIO CARO, que su hijo ALEX GIOVANY BOTERO AGUDELO se dedicaba a negociar con ganado y que el día 7 de agosto de 2001, salió a trabajar como era costumbre y al ver que llegó la tarde y su hijo no aparecía le preguntó a su compañera permanente y a otro de sus hijos por este por lo que salieron a buscarlo, al día siguiente muy de madrugada llegó un señor a la casa con la noticia de que en el corregimiento de Pajonal habían dos muertos, de inmediato salió uno de sus otros hijos y efectivamente confirmó que se trataba de ALEX GIOVANY BOTERO AGUDELO quien se encontraba sin vida junto con un compañero de trabajo de nombre ARNOL JOSÉ JULIO SILGADO, indicando, además, que según información recibida en San Onofre a ellos los mataron los paramilitares y que hasta el momento se desconocen los motivos.	
Imputación jurídica	
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo expuso ante la Sala de Conocimiento en contra de **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** alias "El Ñato", en calidad de coautor, por el delito de **homicidio en persona protegida**, en concurso homogéneo y sucesivo bajo la circunstancia de mayor punibilidad del numeral 5 del artículo 58 de la ley 599 del 2000.	
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física	
1. Formato de órdenes a Policía Judicial de fecha 2 de octubre de 2017, con el fin de documentar el homicidio de ALEX GIOVANY BOTERO AGUDELO. 2. Acta de levantamiento de Cadáver realizada al cuerpo de ARNOL JOSÉ JULIO SILGADO. 3. Protocolo de necropsia realizado al cuerpo de ARNOL JOSÉ JULIO SILGADO. 4. Copia de la cedula de ciudadanía de ARNOL JOSÉ JULIO SILGADO. 5. Comprobante de registro civil de defunción con indicativo serial No. 1904695 de ARNOL JOSÉ JULIO SILGADO. 6. Escrito recomendación suscrita por el Teniente Coronel GERMAN MORANTES HERNÁNDEZ Comandante del Batallón No. 10 GIRARDOT de fecha 7 de noviembre de 1997, en la que hace constar que ARNOL JOSÉ JULIO SILGADO fue merecedor a la calificación de conducta EXCELENTE.	

7. Formato Único de Noticia Criminal de fecha 18 de octubre de 2017 de la denuncia interpuesta por los delitos de desplazamiento forzado y hurto por SINDY CATALINA BEDOYA RIVERA. 8. Formato Único de Noticia Criminal de fecha 18 de octubre de 2017 de la denuncia interpuesta por el delito de hurto de reses por ELOÍSA SILGADO DE JULIO. 9. Copia de abono de venta oficial de ganado No. 485451 de fecha junio 20 de 2001. 10. Informe de Investigador de Campo de fecha 31 de octubre de 2017, signado por el servidor de Policía Judicial OSWALDO RAFAEL BARRIOS LAMBRAÑO. 11. Acta de levantamiento de Cadáver realizada al cuerpo de ALEX GIOVANY BOTERO AGUDELO. 12. Protocolo de necropsia realizado al cuerpo de ALEX GIOVANY BOTERO AGUDELO 13. Copia de la cédula de ciudadanía de ALEX GIOVANY BOTERO AGUDELO. 14. Partida de defunción de la Diócesis de Sonsón – Rionegro Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Marinilla (Antioquia) a nombre de ALEX GIOVANY BOTERO AGUDELO. 15. Certificado de defunción No. A836700 de ALEX GIOVANY BOTERO AGUDELO. 16. Registro civil de nacimiento No. 8960016 de ALEX GIOVANY BOTERO AGUDELO. 17. Certificación de fecha 11 de mayo de 2017 suscrita por AQUILES JOSÉ HUERTAS CUMPLIDO Fiscal Sexto Seccional de la Dirección Seccional de Fiscalías de Sincelejo, Sucre, en el que hace constar que revisado el SIJUF se registra expediente radicado No. 17061 por el homicidio de ALEX GIOVANY BOTERO AGUDELO. 18. Formato de Referencia del Hecho en Versión de fecha 9 de mayo de 2012, realizado por el postulado JUAN CARLOS REVOLLO PATERNITA. 19. Formato de Referencia del Hecho en Versión de fecha 15 de marzo de 2012, realizado por el postulado YAIRSIÑO MEZA MERCADO. 20. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley y entrevista rendidos por SINDY CATALINA BEDOYA RIVERA. 21. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley y entrevista rendidos por ELOISA SILGADO DE JULIO. 22. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley de HERNANDO DE JESÚS BOTERO GIRALDO.
Análisis de la Sala.
Este cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía, de la descripción del hecho y de los elementos de convicción allegados, que permiten dar por demostrada la materialidad del delito imputado y la responsabilidad del postulado en el mismo; además, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de homicidio, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado

organizado al margen de la ley AUC, motivado por el control social y territorial que ejerció el postulado en sus zonas de injerencia, bajo el infundado señalamiento de ser las víctimas responsables de cometer el delito de hurto de unos equinos, lo cual no encontró sustento en algún elemento de convicción adicional al dicho del postulado, por lo que se deberá mantener incólumes la honra y buen nombre de quienes respondieron en vida a ALEX GIOVANY BOTERO AGUDELO y ARNOL JOSÉ JULIO SILGADO.

Cargo No. 4[82]

Víctima	DANIEL VARGAS BATISTA
Postulado	JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA alias "El Ñato".
Fecha y lugar de los hechos.	12 de abril de 2003, en Santa Rosa (Bolívar).
Política: control social, territorial y de recursos. **Práctica:** homicidio selectivo. **Modus operandi:** sicariato.	
Imputación Fáctica.	
Indica la señora CECILIA ISABEL VARGAS, que el día 12 de abril de 2003, su hermano DANIEL VARGAS BATISTA quien padecía una enfermedad mental y tenía el hábito de caminar de municipio en municipio, salió de la casa a eso de las 11:00 de la mañana del municipio de Villanueva (Bolívar), agregó, además, que algunas personas le manifestaron que cuando su hermano venia de Villanueva unos tipos lo abordaron, se lo llevaron y luego lo mataron, la familia empezó desesperadamente a buscarlo por todo el pueblo, sin tener razón de nada, hasta el día siguiente que la policía les informó, que habían llamado de una finca donde habían encontrado a un hombre muerto, cuando llegaron al sitio se percataron que era su hermano DANIEL VARGAS BATISTA, quien yacía muerto en la entrada del corregimiento El Cañaveral, en la puerta de una finca. Reitera la reportante que desconoce el motivo de su homicidio, ya que su hermano no tenía problemas con nadie.	
Imputación jurídica	
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo expuso ante la Sala de Conocimiento en contra de **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** alias "El Ñato", en calidad de coautor, por el delito de **homicidio en persona protegida**, bajo las circunstancias de mayor punibilidad de los numerales 5 y 8 del artículo 58 de la ley 599 del 2000.	
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física	

[82] Sesión de audiencia del 29 de junio de 2021, audio 08001225200320200000100_20210629_03, Rec. 15:06

.

1. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley de CECILIA ISABEL VARGAS BATISTA. 2. Copia de la cedula de ciudadanía de CECILIA ISABEL VARGAS BATISTA. 3. Copia de registro civil de nacimiento de CECILIA ISABEL VARGAS BATISTA. 4. Copia de la cédula de ciudadanía de DANIEL VARGAS BATISTA. 5. Copia de registro civil de nacimiento de DANIEL VARGAS BATISTA. 6. Formato de entrevista rendido por CECILIA ISABEL VARGAS BATISTA. 7. Informe de investigador de campo No. 0118 de fecha 26 de diciembre de 2012 suscrito por MARÍA BERNARDA DIAZ ARROYO Servidora de Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I. 8. Informe de investigador de campo No. 0011 de fecha 27 de febrero de 2013 suscrito por MARÍA BERNARDA DIAZ ARROYO Servidora de Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I. 9. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley de FIDEL RIGOBERTO VARGAS BATISTA. 10. Copia de la cédula de ciudadanía de FIDEL RIGOBERTO VARGAS BATISTA. 11. Acta de levantamiento de Cadáver realizada al cuerpo de DANIEL VARGAS BATISTA. 12. Recorte de periódico de fecha 15 de abril de 2003, con título de noticia "*Asesinan a bala a un hombre cerca a Cañaveral"* 13. Formato de Referencia del Hecho en Versión libre de fecha 8 de mayo de 2012, realizado por el postulado JUAN CARLOS REVOLLO PATERNITA, de la cual se extracta lo siguiente *"ALIAS EL ÑATO LE DISPARÓ EN DOS OPORTUNIDADES EN LA CABEZA SIN DECIRLE NADA. POSTERIORMENTE SE ENTERÓ POR MEDIO DE UN MIEMBRO DE LA POLICÍA QUE LA VICTIMA ERA LOCO Y EL MANIFESTÓ QUE EL MUCHACHO ESTABA MUERTO".*
Análisis de la Sala.
Este cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía, de la descripción del hecho y de los elementos de convicción allegados, que permiten dar por demostrada la materialidad del delito imputado y la responsabilidad del postulado en el mismo; además, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de homicidio, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley AUC, motivado por el control social y territorial que ejerció el postulado en sus zonas de injerencia, bajo el infundado señalamiento de ser integrante de la guerrilla, lo cual no encontró sustento en algún elemento de convicción adicional al dicho del postulado, dado que la víctima conforme al registro de los materiales de prueba aportados dan cuenta que se trataba de una persona con necesidades especiales al parecer con algunos problemas de orden mental, por todo ello se deberá mantener

incólumes la honra y buen nombre de quien respondía en vida a DANIEL VARGAS BATISTA.

Cargo No. 5[83]

Víctimas	EDILBERTO AGRESOTH MELÉNDEZ, ESTEBAN MANUEL SOLAR HERAZO, JAVID BLANCO HUERTAS y FREDY ANTONIO CUADRADO PAZO.
Postulado	JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA alias "El Ñato".
Fecha y lugar de los hechos.	13 de octubre de 2001, en San Onofre (Sucre).
Política: control social, territorial y de recursos. **Práctica:** homicidio múltiple. **Modus operandi:** sicariato.	
Imputación Fáctica.	
El día 13 de octubre de 2001 a la 1:00 de la mañana, un grupo de hombres armados y vestidos de civil, llegaron a la vivienda de EDILBERTO AGRESOTH MELÉNDEZ donde ingresaron a esta de manera violenta lo sacaron de la casa y se lo llevaron en una camioneta, además, se llevaron todos los víveres de la tienda que la víctima tenía en el lugar de su residencia en el barrio La Unión en San Onofre (Sucre); el día 14 de octubre de 2001, su familia fue avisada que el cuerpo de EDILBERTO AGRESOTH se encontraba tirado por los lados de Arroyo Seco, cerca de Toluviejo, junto a su cuerpo fueron encontrados los cadáveres de ESTEBAN MANUEL SOLAR HERAZO, JAVID BLANCO HUERTAS y FREDY ANTONIO CUADRADO PAZO, quienes también fueron sacados violentamente de sus viviendas, conforme lo reporta la Fiscalía los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia que participaron en este homicidio múltiple fueron los alias "El Ñato", "Macayepo", "Julio Paraco", "El Cachaco Edgar".	
Imputación jurídica	
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo expuso ante la Sala de Conocimiento en contra de **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** alias "El Ñato", en calidad de coautor, por el delito de **homicidio en persona protegida**, en concurso homogéneo y sucesivo bajo las circunstancias de mayor punibilidad de los numerales 5 y 8 del artículo 58 de la ley 599 del 2000.	
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física	
1. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley de ARELIS HUERTAS BAENA. 2. Copia de la cédula de ciudadanía de ARELIS HUERTAS BAENA.	

[83] Sesión de audiencia del 29 de junio de 2021, audio 08001225200320200000100_20210629_03, Rec. 21:45.

3. Copia de certificado del registro civil de nacimiento de JAVID BLANCO HUERTAS.
4. Comprobante del registro civil de defunción de JAVID BLANCO HUERTAS.
5. Certificación expedida por el Fiscal 10 de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz en la que se reconoce a la señora ARELIS HUERTAS BAENA como víctima indirecta de la muerte de su familiar JAVID BLANCO HUERTAS.
6. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley de ISMAEL AGRESOTH MELÉNDEZ.
7. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley de ELIECER JOSÉ CUADRADO ANGULO.
8. Certificación expedida por el Fiscal 10 de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz en la que se reconoce al señor ELIECER JOSÉ CUADRADO ANGULO como víctima y perjudicado de la acción de un grupo al margen de la ley correspondiéndole el registro SIJYP No. 276918.
9. Copia de cédula de ciudadanía de ELIECER JOSÉ CUADRADO ANGULO.
10. Copia de cédula de ciudadanía de FREDY ANTONIO CUADRADO PAZO.
11. Registro civil de defunción de FREDY ANTONIO CUADRADO PAZO.
12. Certificación expedida por el Fiscal Segundo Especializado de Sincelejo, en la que dan cuenta que en dicho despacho se adelantó investigación previa a causa del homicidio de FREDY ANTONIO CUADRADO PAZO.
13. Certificado de registro civil de nacimiento de FREDY ANTONIO CUADRADO PAZO, expedido por el Notario Único de San Onofre, Sucre.
14. Certificación expedida por el personero municipal de Toluviejo donde da cuenta del fallecimiento de manera violenta de EDILBERTO AGRESOTH MELÉNDEZ, ESTEBAN MANUEL SOLAR HERAZO, JAVID BLANCO HUERTAS y FREDY ANTONIO CUADRADO PAZO, el día 13 de octubre de 2001 en el sector de Arroyo Seco jurisdicción del municipio de Toluviejo, Sucre.
15. Declaración extraproceso rendida por NEVIS LUNA ARIAS y BELARMINA CARDILES CÁRDENAS el día 26 de agosto de 2002 ante el Notario Único del Circulo de San Onofre, en la que manifestaron que conocieron a FREDY ANTONIO CUADRADO PAZO y que al momento de su muerte era soltero que no vivía con ninguna mujer y que tenía 2 hijas con la señora AURISTELA DAZA PACHECO.
16. Protocolo de necropsia FREDY ANTONIO CUADRADO PAZO.
17. Acta de levantamiento de cadáver de FREDY ANTONIO CUADRADO PAZO.
18. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley de ISABEL HERAZO QUIROZ.
19. Registro civil de nacimiento de ESTEBAN MANUEL SOLAR HERAZO
20. Certificado de defunción de ESTEBAN MANUEL SOLAR HERAZO.
21. Certificación expedida por el Fiscal 80 Especializada de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz en la que se reconoce a la señora ISABEL

HERAZO QUIROZ como víctima y perjudicada de la acción de un grupo al margen de la ley correspondiéndole el registro SIJYP No. 21909.
22. copias de las cedulas de ciudadanía de ISABEL HERAZO QUIROZ y MARCOS SOLAR MELENDREZ.
23. Acta de levantamiento de cadáver de JAVID BLANCO HUERTAS.
24. Protocolo de necropsia de JAVID BLANCO HUERTAS.
25. Registro civil de defunción de JAVID BLANCO HUERTAS.
26. Registro civil de nacimiento de MARÍA ISABEL, ANYELA PATRICIA, CRISTIBEL y ANLLI PAOLA BLANCO BERRIO.
27. Informe departamento policía seccional Sincelejo en el que da cuenta del homicidio de los señores EDILBERTO AGRESOTT MELÉNDEZ, ESTEBAN MANUEL SOLAR HERAZO, JABITTH BLANCO HUERTAS y FREDY ANTONIO CUADRADO PAZO.
28. Formato de Referencia del Hecho en Versión de fecha 20 de octubre de 2011, realizado por el postulado JUAN CARLOS REVOLLO PATERNITA, en la cual se registra lo siguiente: *"EL 13 DE OCTUBRE DE 2001, EN SAN ONOFRE SUCRE, NOS REUNIMOS EN LA FINCA EL PALMAR CADENA, MACAYEPO, BERRUGUITA, EL LÁTIGO, SANGRE DE YUCA, ERA EL GRUPO LA TERRAZA, YO HICE PRESENCIA EN LA REUNIÓN, ESO FUE EN LA MAÑANA, EN LA TARDE BAJO EL GRUPO DE LA TERRAZA A LA FINCA DE ARROYO RICO, PARA PLANEAR A QUE HORA PODÍAMOS SALIR EN LA NOCHE, PARA CUADRAR CON LA POLICÍA, PARA QUE NO SALIERA HACER PATRULLAJE, AHÍ ESPERAMOS HASTA LAS 11 O 12 DE LA NOCHE, CUANDO YA LLEVAMOS LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS QUE ÍBAMOS A SACAR, EL PRIMERO QUE SACAMOS LO SACAMOS EN LA CALLE DE LA BALSA, ERA FREDY ANTONIO CUADRADO PASO, LO AMARRAMOS Y LO MONTAMOS A UNA CAMIONETA, DE AHÍ SALIMOS HACIA EL BARRIO SAN JOSE, DONDE SACAMOS AL SEÑOR EDILBERTO BERRIO, TENIA UNA TIENDECITA FUE DESPOJADA LA TIENDA, LOS VÍVERES FUERON MONTADOS A LA CAMIONETA, SE TENIA INFORMACIÓN DEL COMANDO DE POLICÍA QUE EL LE COLABORABA A LA POLICÍA, ESTA INFORMACIÓN LA LLEVO ROGELIO DIAZ, QUIEN ERA POLICÍA, EL PRIMERO QUE MENCIONE O SEA FREDY, LO MAL INFORMO CARMELINA BLANCO, SECRETARIA DE LA NOTARIA, ESE DIA SE SACARON EN TOTAL 4 PERSONAS, MAS ADELANTE SACAMOS A ALIAS PASTRANA, ESO FUE EN EL BARRIO SAN JOSE, AHÍ MISMO SACAMOS OTRO MUCHACHO NO SE COMO SE LLAMABA, TAMBIÉN EN EL BARRIO SAN JOSE, EL GUÍA ERA UN MUCHACHO QUE LE DECÍAN EL CAMPESINA, EL TRABAJABA COMO RADIO CHISPA, EN SAN JOSE, ESTA DETENIDO. DE AHÍ SALIMOS HACIA LAS MELENAS A BAJAR LOS VÍVERES, AHÍ SE QUEDA CADENA Y SUS ESCOLTAS, YO ME BAJE DE LA CAMIONETA Y LE DIJE QUE EDILBERTO ERA UNA PERSONA TRABAJADORA, EL SE MOLESTO, EL SEÑOR EDILBERTO GRITABA Y ME DIJO NATO TU SABES QUE NO SOY MALO, TU ME CONOCES, EL ME DIJO QUE EL QUE MANDABA ERA EL, NOS FUIMOS MACAYEPO, SANGRE DE YUCA, MI PERSONA Y ANTES DE LLEGAR A TOLÚ VIEJO SE MATO A*

PASTRANA Y AL MUCHACHO N.N., NOS REGRESAMOS POR CIENAGUITA AHÍ UNA ENTRADA Y SE BAJA FREDY Y EL EDILBERTO SE TIRO DE LA CAMIONETA, SE MATO A FREDY CON ARMA LARGA Y EDILBERTO SALIÓ CORRIENDO SE PUSIERON 4 FUSILES EN RÁFAGA Y SE LE DIO EL CAE Y SE MATA, DE AHÍ NOS VENIMOS A LAS MELENA, Y SE LE DIO PARTE A CADENA, AL DIA SIGUIENTE EL PUEBLO ESTABA ALARMADO, JULIO TAPIA ME FUE A BUSCAR Y ME TRAJO A SAN ONOFRE, EL SABIA LO QUE PASO. A FREDY LO INDISPUSO FUE MIGUELINA LA QUE ERA SECRETARIA DE LA NOTARIA, NOS DIO 500 MIL PESOS PARA LA GASOLINA, ESTE SEÑOR ERA VICIOSO Y ERA ENFERMO, Y QUE EL LA VEÍA CUANDO SE BAÑABA O SE CAMBIABA, EL ERA VECINO, AL SEÑOR EDILBERTO LO INDISPUSO EL POLICÍA ROGELIO DIAZ, EL DECÍA QUE EL LE VENDÍA VÍVERES A LA GUERRILLA, LOS OTROS 2 MUCHACHOS SE MATA POR VICIOSO Y RATERO, EL CAMPESINO ERA EL QUE TRABAJABA CERCA DEL BARRIO"

Análisis de la Sala.

Este cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como ha quedado expuesto por la Fiscalía General de la Nación, tanto al momento de las imputaciones fáctica y jurídica, como en su exposición posterior de acuerdo con esa sustentación la descripción que se hizo del hecho de los elementos materiales de convicción allegados, que permiten dar por demostrada la materialidad del delito imputado y la responsabilidad del postulado en el mismo de lo cual no le asalta duda a la Sala por la coherencia y concreción con que se describió el iter criminis; además, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de homicidio, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley AUC, motivado por el control social y territorial que creían tener ellos y que ejercieron con ese convencimiento dentro de ellos el postulado imputado en sus zonas de injerencia, bajo el infundado señalamiento en este caso también las víctimas de ser auxiliadores e informadores de la guerrilla, lo cual no encontró sustento en algún elemento de convicción de los aportados adicional al dicho del postulado, por lo que se deberá mantener incólumes la honra y buen nombre de quienes respondían en vida a EDILBERTO AGRESOTH MELÉNDEZ, ESTEBAN MANUEL SOLAR HERAZO, JAVID BLANCO HUERTAS y FREDY ANTONIO CUADRADO PAZO.

Ahora bien, en consideración a que JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA en esa diligencia de versión libre rendida por este el día 20 de octubre de 2011, ante la Fiscalía 11 de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz para ese entonces en cabeza del Dr. GIOVANNI ÁLVAREZ SANTOYO hizo mención a que integrante de la Policía Nacional de nombre *"ROGELIO DIAZ"* fue quien mal informó a la víctima EDILBERTO AGRESOTH MELÉNDEZ con los paramilitares de vender víveres a la guerrilla instó al delito, de análoga manera manifestó, que, a la víctima FREDY ANTONIO CUADRADO PAZO lo mal informó la señora "*CARMELINA BLANCO*" quien indicó era Secretaria de Notaría de San

Onofre, Sucre, acusándolo de que este la veía cuando ella se cambiaba y bañaba e incluso aportó $500.000 para la comisión del ilícito, por todo ello, se insta al ente de persecución penal para que disponga lo pertinente a efectos de establecer la plena identidad de estas personas que han sido señaladas por el postulado, y, si aún no se ha hecho, se proceda a efectuar los diligenciamientos correspondientes, compulsa de copias, etc., para evitar la impunidad, para que sean investigados por la Unidad competente por su presunta responsabilidad en estos hechos.

Cargo No. 6[84]

Víctima	FÉLIX ARROYO MATTOS
Postulado	JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA alias "El Ñato".
Fecha y lugar de los hechos.	7 de agosto de 2003, en Santa Rosa (Bolívar).
Política: control social, territorial y de recursos. **Práctica:** homicidio selectivo. **Modus operandi:** sicariato.	
Imputación Fáctica.	
El día 7 de agosto de 2003, el señor FÉLIX ARROYO MATTOS salió a eso de las 5:00 p.m. de la finca de su padre ubicada en la vereda Tabacal hacia Santa Rosa con destino final a la finca de una amiga de nombre DORELIA, cuando se marchó de ahí como a cien metros unos hombres le dispararon en dos oportunidades, según manifestaciones de personas de la zona el homicidio lo cometieron alias "El Ñato" y alias "Miguelito" quienes eran miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, a la familia le avisaron del hecho criminal indicándoles, además, que estas personas se llevaron la mula donde iba montado el señor ARROYO MATTOS.	
Imputación jurídica	
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo expuso ante la Sala de Conocimiento en contra de **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** alias "El Ñato", en calidad de coautor, por el delito de **homicidio en persona protegida**, bajo la circunstancia de mayor punibilidad del numeral 5 del artículo 58 de la ley 599 del 2000.	
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física	
1. Orden de Policía Judicial del 2 de octubre de 2017, en el cual se ordena documentar e investigar el homicidio de FÉLIX ARROYO MATTOS. 2. Acta de levantamiento de Cadáver realizada al cuerpo de quien en vida fue FÉLIX ARROYO MATTOS. 3. Copia de la cedula de ciudadanía de FÉLIX ARROYO MATTOS.	

[84] Sesión de audiencia del 29 de junio de 2021, audio 08001225200320200000100_20210629_03, Rec. 30:437.

4. Resolución inhibitoria de fecha 4 de junio de 2004, proferida por la Fiscalía 30 Seccional de Cartagena, (Bolívar).
5. Tarjeta de preparación de la cedula de ciudadanía de FÉLIX ARROYO MATTOS.
6. Registro civil de defunción de FÉLIX ARROYO MATTOS.
7. Recorte de noticia de periódico El Universal que titula *"a bala, matan a un comerciante"*.
8. Formato de Referencia del Hecho en Versión de fecha 8 de mayo de 2012, realizado por el postulado JUAN CARLOS REVOLLO PATERNITA, de la cual se extracta lo siguiente *"EL POSTULADO JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA ALIAS EL NATO POR EL TERMINO DE UNA HORA REALIZO VIGILANCIA AL INMUEBLE Y DE AHÍ SALIÓ UN MUCHACHO EN UNA MULA, EL CUAL ABORDARON, ESTE INTENTÓ HUIR Y FUE HERIDO POR REVOLLO PATERNINA CON UN CHANGÓN, EN EL SUELO LE DISPARO DOS VECES MÁS, CAUSÁNDOLE LA MUERTE Y LE QUITO UN REVOLVER 38 QUE LLEVABA LA VICTIMA."*
9. Formato de informe de investigador de campo de fecha 23 de octubre de 2017 la cual arrojó dentro de su investigación que el responsable del homicidio de FÉLIX ARROYO MATTOS lo fue el postulado JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA.
10. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley de HAIDA ROSA ARROYO MATOS.
11. Copia de la cédula de ciudadanía de HAIDA ROSA ARROYO MATOS.
12. Copia de registro civil de nacimiento de HAIDA ROSA ARROYO MATOS.
13. Copia de certificado de registro civil de nacimiento de FÉLIX ARROYO MATTOS.
14. Copia de la cédula de ciudadanía de MANUEL RAMON ARROYO SALTARÍN.
15. Declaración jurada rendida por los señores ELÍAS BELLO OVIEDO y JULIO CESAR ALTAMAR MENDOZA, el día 13 de enero de 2016 ante la Inspección de Policía Santa Rosa de Lima Norte, (Bolívar), en la que estas personas hacen constar bajo la gravedad de juramento que conocieron de manera directa al finado FÉLIX ARROYO MATTOS, que su estado civil era soltero, que no contrajo matrimonio ni convivió en unión libre con ninguna persona y que no dejó hijos reconocidos ni por reconocer.
16. Formato de entrevista de fecha 6 de octubre de 2017, rendida por HAIDA ROSA ARROYO MATOS, en la que da cuenta de cómo sucedieron los hechos donde resultó muerto su hermano FÉLIX ARROYO MATTOS.

Análisis de la Sala.

Este cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación que hizo la Fiscalía General de la Nación, de la descripción del hecho y de los elementos de convicción allegados, que permiten dar por demostrada la materialidad del delito imputado y la responsabilidad del postulado en el mismo; además, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de homicidio, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado

organizado al margen de la ley AUC, motivado por el control social y territorial que ejerció el postulado en sus zonas de injerencia, bajo el infundado señalamiento de ser la víctima integrante de la guerrilla, lo cual no encontró sustento en algún elemento de convicción adicional al dicho del postulado, por lo que se deberá mantener incólumes la honra y buen nombre de quien respondía en vida a FÉLIX ARROYO MATTOS.

Cargo No. 7[85]

Víctimas	JUAN CARLOS PEREA PÉREZ y ÁLVARO ALEJANDRO CASTILLO BENÍTEZ.
Postulado	JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA alias "El Ñato".
Fecha y lugar de los hechos.	14 de mayo de 2003, en Cartagena (Bolívar).
Política: control social, territorial y de recursos. **Práctica:** homicidio selectivo. **Modus operandi:** sicariato.	
Imputación Fáctica.	
Los jóvenes JUAN CARLOS PEREA PÉREZ y ÁLVARO ALEJANDRO CASTILLO BENÍTEZ, el día 14 de mayo de 2003, a eso de 4:00 de la tarde salieron para la cancha de futbol del barrio Ceballos frente el peaje de la ciudad de Cartagena departamento de (Bolívar), cuando al lugar llegaron unos hombres en una motocicleta negra quienes sin mediar palabra procedieron a dispararles causándoles la muerte en forma instantánea a JUAN CARLOS PEREA PÉREZ y heridas al joven ÁLVARO CASTILLO BENÍTEZ quien alcanzo a ser llevado a la clínica Enrique de la Vega pero horas después falleció a raíz de las heridas producidas por el arma de fuego, los comentarios de la población es que fueron los paramilitares que operaban en la zona quienes cometieron este hecho que fue confesado por el postulado JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA alias El Ñato.	
Imputación jurídica	
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo expuso ante la Sala de Conocimiento en contra de **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** alias "El Ñato", en calidad de coautor, por el delito de **homicidio en persona protegida**, en concurso homogéneo y sucesivo y bajo las circunstancias de mayor punibilidad del numeral 5 del artículo 58 de la ley 599 del 2000.	
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física	
1. Acta de levantamiento de cadáver de JUAN CARLOS PEREA PÉREZ. 2. Acta de levantamiento de cadáver de ÁLVARO ALEJANDRO CASTILLO BENÍTEZ.	

[85] Sesión de audiencia del 29 de junio de 2021, audio 08001225200320200000100_20210629_03, Rec. 36:35.

3. Copia de la cédula de ciudadanía de ÁLVARO ALEJANDRO CASTILLO BENÍTEZ.
4. Auto de apertura de investigación previa de fecha 15 de mayo de 2003, emanado por la Fiscalía 10 Seccional de Cartagena, Bolívar, con la finalidad de investigar el homicidio del que fueron víctimas JUAN CARLOS PEREA PÉREZ y ÁLVARO ALEJANDRO CASTILLO BENÍTEZ.
5. Copia de la cédula de ciudadanía de ÁLVARO CASTILLO LÓPEZ.
6. Álbum fotográfico de la diligencia de levantamiento de cadáver de JUAN CARLOS PEREA PÉREZ y ÁLVARO ALEJANDRO CASTILLO BENÍTEZ.
7. Protocolo de necropsia de JUAN CARLOS PEREA PÉREZ y ÁLVARO ALEJANDRO CASTILLO BENÍTEZ.
8. Registro civil de nacimiento de ÁLVARO CASTILLO LÓPEZ.
9. Certificación expedida por el Fiscal 10 Seccional de la ciudad de Cartagena expedida el 8 de junio de 2004, en la que hace constar que con radicado No. 118711 se encuentra asignada en esa Fiscalía investigación previa por el punible de homicidio de ÁLVARO ALEJANDRO CASTILLO BENÍTEZ.
10. Resolución inhibitoria en la que la Fiscalía 10 Seccional de Cartagena se abstiene de iniciar investigación penal en razón del homicidio de JUAN CARLOS PEREA PÉREZ y ÁLVARO ALEJANDRO CASTILLO BENÍTEZ.
11. Declaración jurada rendida por MARTIN PEREA FREYLE el día 13 de febrero de 2006 ante la Fiscalía Sexta Seccional de Cartagena, en la que esta persona señala como presunta responsable de la muerte de su hijo JUAN CARLOS PEREA PÉREZ al postulado JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA alias “El Ñato”.
12. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley reportado por MARTIN PEREA FREYLE.
13. Copia de la cédula de ciudadanía de MARTIN PEREA FREYLE y VEDA NURYS PÉREZ BOLÍVAR.
14. Certificado de registro civil de nacimiento de JUAN CARLOS PEREA PÉREZ.
15. Partida de bautismo de JUAN CARLOS PEREA PÉREZ.
16. Registro SIJYP No. 488969 de MARTIN PÉREZ FREYLE.
17. Entrevista realizada a MARTIN PEREA FREYLE el 14 de diciembre de 2012, en la Unidad Satélite de Justicia y Paz del Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I., en la que brinda aspectos que rodearon la muerte de su hijo JUAN CARLOS PEREA PÉREZ.
18. Informe de investigador de campo de fecha 26 de diciembre de 2012 en el que se brindan los resultados arrojados en razón a la investigación por el homicidio de JUAN CARLOS PEREA PÉREZ y ÁLVARO ALEJANDRO CASTILLO BENÍTEZ, informe suscrito por MARÍA BERNARDA DIAZ ARROYO del Cuerpo Técnico de Investigaciones C.T.I.
19. Informe sobre Consulta Web de la plena identidad de las víctimas JUAN CARLOS PEREA PÉREZ y ÁLVARO ALEJANDRO CASTILLO BENÍTEZ
20. Formato de Referencia del Hecho en Versión de fecha 21 de octubre de 2011, realizado por el postulado JUAN CARLOS REVOLLO PATERNITA,

de la cual se extracta lo siguiente *"VIVIENDO EN CEBALLOS ENTRE EL 14 Y 15 DE MAYO DE 2003, PASE LA CARRETERA DE MAMONAL, DONDE HABÍA UN MANGLAR AHÍ MATE A 2 MUCHACHOS, A UNO LE DECÍAN EL HIJO DEL MELLO, QUE TIENE UNA FERRETERÍA EN EL BARRIO CEBALLOS, CERCA DEL PUENTE ELEVADO Y EL OTRO VIVÍA EN EL NUEVO BOSQUE, A LOS 2 LE DI 2 TIROS, ELLOS ERAN VICIOSOS Y RATEROS, YO YA LOS TENIA VISTO…".*
Análisis de la Sala.
Este cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía, de la descripción del hecho y de los elementos de convicción allegados, que permiten dar por demostrada la materialidad del delito imputado y la responsabilidad del postulado JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA en el mismo; además, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de homicidio, que fue cometido en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley Autodefensas Unidas de Colombia, que pretendían ejercer un control social y territorial ejercido también por el postulado en sus zonas de injerencia, bajo el infundado señalamiento de ser las jóvenes víctimas de homicidio en este caso consumidores de alucinógenos y "*ladrones*", lo cual no encontró sustento en elemento probatorio alguno adicional al dicho del postulado, por lo que se deberá mantener incólumes la honra y buen nombre de quienes respondían en vida a JUAN CARLOS PEREA PÉREZ y ÁLVARO ALEJANDRO CASTILLO BENÍTEZ.

Cargo No. 8[86]

Víctima	JHON JAIRO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
Postulado	JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA alias "El Ñato".
Fecha y lugar de los hechos.	7 de abril de 2003, en Arjona (Bolívar).
Política: control social, territorial y de recursos. **Práctica:** homicidio selectivo. **Modus operandi:** sicariato.	
Imputación Fáctica.	
Manifiesta MARIANO HERNÁNDEZ PÁEZ, tío y padre de crianza de JHON JAIRO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, que el día 7 de abril de 2003, su sobrino se encontraba tomando licor en un bar del municipio de Arjona (Bolívar), llamado El Portón Rojo, cuando a ese lugar llegó un paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia conocido con el alias de "FREDY" con otras personas y que uno de estos acompañantes después de haber tomado una ronda de cervezas le disparó JHON JAIRO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ dejándolo muerto en ese establecimiento público, indica el tío de la víctima	

[86] Sesión de audiencia del 29 de junio de 2021, audio 08001225200320200000100_20210629_03, Rec. 44:11.

directa que al parecer los hechos se suscitaron por celos de alias "FREDY" por una mujer que era novia de su sobrino.
Imputación jurídica
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo expuso ante la Sala de Conocimiento en contra de **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** alias "El Ñato", en calidad de coautor, por el delito de **homicidio en persona protegida**, bajo las circunstancias de mayor punibilidad de los numerales 5 y 8 del artículo 58 de la ley 599 del 2000.
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física
1. Consulta web del documento de identidad de JHON JAIRO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ. 2. Acta de levantamiento de Cadáver realizada al cuerpo de JHON JAIRO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ. 3. Copia de registro civil de nacimiento de TANIA MILENA ÁLVAREZ CALZETAS. 4. Copia de contraseña del documento de identidad de TANIA MILENA ÁLVAREZ CALZETAS. 5. Registro civil de nacimiento de JHON JAIRO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ. 6. Denuncia rendida por MARIANO HERNÁNDEZ PÁEZ ante la Fiscalía General de la Nación. 7. Declaraciones extrajuicio rendidas por RAYMUNDO HERAZO BELTRÁN y DEIVIS HERNÁNDEZ MORALES el día 20 de febrero de 2009 ante la Notaría Única de Arjona, (Bolívar), en la que manifiestan bajo la gravedad del juramento que conocieron de vista y trato a JHON JAIRO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, que este era soltero y que no dejó hijos legítimos, ni extramatrimoniales, ni adoptivos, ni por reconocer y que al momento de su muerte convivía con su tío MARIANO HERNÁNDEZ PÁEZ. 8. Copia de la cedula de ciudadanía de JHON JAIRO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ. 9. Copia de la cédula de ciudadanía de MARIANO HERNÁNDEZ PÁEZ. 10. Informe de investigador de campo No. 9-9415719 de fecha 5 de marzo de 2021 suscrito por MARTA ALMENTERO ANAYA Servidora de Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I. 10. Formato de Referencia del Hecho en Versión de fecha 21 de octubre de 2011, realizado por el postulado JUAN CARLOS REVOLLO PATERNITA, de la cual se extracta lo siguiente: *"EL POSTULADO JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA, LOS DÍAS 6 O 7 DE ABRIL LLEGO NUEVAMENTE AL MUNICIPIO DE ARJONA EN COMPAÑÍA DE UN MUCHACHO CONOCIDO DE DAVID ORIUNDO DE MONTERÍA, SE CONSIGUIÓ CON FREDY QUIEN TENIA UNA MOTO HONDA NEGRA, LA PRESTO LA MOTO Y LLEGO AL BAR EL PORTÓN ROJO EN ARJONA Y SE ENCONTRÓ CON UN COMPAÑERO DE TRABAJADO CONOCIDO CON EL ALIAS EL PAISA, MANUEL ALIAS EDGAR LE DIO LA ORDEN PARA QUE MATARA A ALIAS EL PAISA, ERA MIEMBROS DE LAS AUC ERA URBANO, VIVÍA EN ARJONA, ERA DELGADO, JUAN CARLOS*

HABLO CON EL Y LE BRINDO UNAS CERVEZAS Y AL RATO DESENFUNDO UN REVOLVER CALIBRE 38 LE PROPINO DOS TIROS EN LA CABEZA Y QUEDO EN EL BAR. ALIAS EL NATO LE DEJO TIRADO SE FUE EN LA MOTO CON ALIAS DAVID. DE AHÍ SE FUE PARA TURBADO, SE REFUGIO EN EL MATADERO DE TURBACO, DE AHÍ LLAMO A MANUEL REPORTANDO EL HOMICIDIO. MANUEL LE COMENTO A ALIAS EL NATO, QUE ALIAS EL PAISA HABÍA COBRADO UNOS DINEROS EN TURBACO SIN AUTORIZACIÓN Y POR ESO FUE LA MUERTE…".
Análisis de la Sala.
Este cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como ha quedado sustentado en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la exposición efectuada por la Fiscalía, de la descripción del hecho y de los elementos de convicción aportados, que permiten dar por demostrada la materialidad del delito imputado y la responsabilidad del postulado en el mismo; además, este cargo aceptado hizo parte del patrón de macrocriminalidad de homicidio, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley Autodefensas Unidas de Colombia, motivado por el control social y territorial que ejerció el postulado en sus zonas de injerencia.

Cargo No. 9[87]

Víctima	VÍCTOR CASSIANI MALDONADO
Postulado	JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA alias "El Ñato".
Fecha y lugar de los hechos.	28 de octubre de 2003, en Cartagena (Bolívar).
Política: control social, territorial y de recursos. **Práctica:** homicidio selectivo. **Modus operandi:** sicariato.	
Imputación Fáctica.	
El día 28 de octubre de 2003, el joven VÍCTOR CASSIANI MALDONADO salió de su casa a las 6:45 pm, a hacer un mandado a la esquina y hablar con unos amigos a los segundos de haber salido fue interceptado por unos hombres que se desplazaban en una motocicleta, quienes le dispararon causándole la muerte de manera inmediata, indica la reportante que quienes mataron a su hijo era un grupo de limpieza de los paramilitares que operaban en la zona. VÍCTOR CASSIANI MALDONADO estaba estudiando el bachillerato en el colegio Salin Báchara de la ciudad de Cartagena y ayudaba a su progenitora en el sustento de la casa.	
Imputación jurídica	

[87] Sesión de audiencia del 29 de junio de 2021, audio 08001225200320200000100_20210629_03, Rec. 48:12.

La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo expuso ante la Sala de Conocimiento en contra de **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** alias "El Ñato", en calidad de coautor, por el delito de **homicidio en persona protegida**, bajo las circunstancias de mayor punibilidad de los numerales 5 y 8 del artículo 58 de la ley 599 del 2000.
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física
1. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley de PETRONA MALDONADO JULIO. 2. Formato de licencia de inhumación del DANE de VÍCTOR CASSIANI MALDONADO. 3. Orden de Policía Judicial de fecha 10 de octubre de 2016, en el cual se ordena documentar e investigar el homicidio de VÍCTOR CASSIANI MALDONADO. 4. Consulta web del documento de identidad de VÍCTOR CASSIANI MALDONADO. 5. Registro civil de defunción de VÍCTOR CASSIANI MALDONADO. 6. Protocolo de necropsia realizado al cuerpo sin vida de VÍCTOR CASSIANI MALDONADO. 7. acta de levantamiento de cadáver No. 481 realizada a VÍCTOR CASSIANI MALDONADO. 8. Informe de investigador de campo No. 11-132499 de fecha 9 de noviembre de 2016 suscrito por JOSE AGUSTÍN CAMACHO GARBIRAS Servidor de Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I. 9. Copia de la cédula de ciudadanía de VÍCTOR CASSIANI MALDONADO. 10. Copia de la cédula de ciudadanía de PETRONA MALDONADO JULIO. 11. Copia de registro civil de nacimiento VÍCTOR CASSIANI MALDONADO. 12. Ficha socioeconómica de justicia y paz – víctimas de la Dirección Nacional de Defensoría Pública. 13. Formato de Referencia del Hecho en Versión de fecha 21 de octubre de 2011, realizado por el postulado JUAN CARLOS REVOLLO PATERNITA, de la cual se extracta lo siguiente: "*EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, EN EL BARRIO ZARAGOCILLA SE REUNIERON MANUEL, VÍCTOR, ALIAS EL OREJA, EL PRIMO, ALIAS EL NATO. DE ESA REUNIÓN SALIÓ ALIAS EL PRIMO, EL OREJA Y ALIAS EL NATO HACIA EL BARRIO CEBALLOS EN HORAS DE LA TARDE Y ALIAS EL OREJA SE QUEDO EN UNA VENTA DE ABASTO ORGANIZANDO EL TRANSBORDO, ALIAS EL PRIMO Y EL NATO ENTRARON AL BARRIO CEBALLOS EN UNA MOTO, POR UN CALLEJÓN, DONDE SE ENCONTRABAN REUNIDO COMO CUATRO O CINCO MUCHACHOS, ALIAS EL NATO DESENFUNDO UNA PISTOLA MATO A DOS MUCHACHOS Y LOS DEJO TIRADO SE SUBIÓ EN LA MOTO Y MAS ADELANTE HICIERON TRANSBORDO EN UN TAXI.* *LA ORDEN ERA DE MATAR A UNO DE ELLOS, UN MUCHACHO MORENO QUE HABÍA SIDO MIEMBROS DE LAS AUC QUE HABÍA TRABAJADO CON ALIAS ZAMBRANO Y AL OTRO ERA VICIOSO Y FUE DADA POR MANUEL ESQUIVEL.*

PARTICIPARON EN EL HECHO MANUEL ESQUIVEL, ALIAS EL OREJA O GENO, EL PRIMO Y JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA ALIAS EL NATO SEGÚN COMENTARIOS DE MANUEL ESQUIVEL A ALIAS EL NATO QUIEN SOLICITO LA MUERTE DE LOS MUCHACHOS FUE EL MISMO EXPENDEDOR DE DROGA CONOCIDO COMO EL DOME, EL ESTA VIVO ANTES DE LA MUERTE DE LOS MUCHACHOS, ME HABÍAN DADO LA ORDEN DE ASESINAR A ALIAS EL DOME, PERO EL ARREGLO CON MANUEL ESQUIVEL, LE PAGO UNA SUMA DE DINERO".
Análisis de la Sala.
Este cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía, de la descripción del hecho y de los elementos de convicción allegados, estos permiten dar por demostrada la materialidad del delito imputado y la responsabilidad del postulado en el mismo; además, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de homicidio, que fue perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley Autodefensas Unidas de Colombia, motivado por el control social y territorial que ejerció el postulado en sus zonas de injerencia. Finalmente, dado que del mismo reporte y registro de elementos materiales probatorios ofrecidos por la Fiscalía en adelantamiento de este proceso se da cuenta de la existencia de un sujeto conocido como el "El Dome" quien al parecer se dedicada para el momento de los hechos al expendio de drogas y que fue autor intelectual ora instigador del homicidio de VÍCTOR CASSIANI MALDONADO y otros, se insta a dicho organismo investigador para que si aún no lo ha hecho se establezca la plena identidad de alias "El Dome" y su presunta responsabilidad en los aludidos crímenes.

Cargo No. 10[88]

Víctima	RANDOLF THERÁN DUKE
Postulado	JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA alias "El Ñato".
Fecha y lugar de los hechos.	29 de agosto de 2003, en Cartagena (Bolívar).
Política: control social, territorial y de recursos. **Práctica:** homicidio selectivo. **Modus operandi:** sicariato.	
Imputación Fáctica.	
El día 29 de agosto de 2003, el señor RANDOLF THERÁN DUKE se encontraba en la gallera de Santa Rosa y a raíz de un mal entendido debido a una apuesta de dinero en los gallos JUAN CARLOS REVOLLO	

[88] Sesión de audiencia del 29 de junio de 2021, audio 08001225200320200000100_20210629_03, Rec. 53:12.

PATERNINA alias "El Ñato" le disparó causándole la muerte en ese mismo lugar.
Imputación jurídica
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo expuso ante la Sala de Conocimiento en contra de **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** alias "El Ñato", en calidad de coautor, por el delito de **homicidio en persona protegida**, bajo las circunstancias de mayor punibilidad de los numerales 5 y 8 del artículo 58 de la ley 599 del 2000.
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física
1. Recorte de periódico de fecha 31 de agosto de 2003, con título de noticia "*En Santa Rosa Lima Riña en coliseo gallístico dejó un muerto y cinco heridos"* 2. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley de RANDOLF THERÁN ORTIZ. 3. Copia de la cedula de ciudadanía de RANDOLF THERÁN ORTIZ. 4. Copia de la cédula de ciudadanía de RANDOLF THERÁN DUKE. 5. Copia de la cédula de ciudadanía de CECILIA DUKE DYGRAVE. 6. Copia de la cedula de ciudadanía de JULIÁN THERÁN HERNÁNDEZ. 7. registro civil de nacimiento de DANIEL VARGAS BATISTA. 8. Certificado de registro civil de defunción de RANDOLF THERÁN DUKE. 9. Registro civil de nacimiento de RANDOLF THERÁN ORTIZ. 10. Certificación de fecha marzo 21 de 1997 expedida por la empresa de cruceros CARNIVAL suscrito por KAREN HARBIN Director, Crew Administration Carnival Cruise Lines (escrito en idioma ingles). 11. Certificado expedido por JUAN CARLOS PÁEZ LÓPEZ Contador Público en el que hace constar que RANDOLF THERÁN DUKE recibía ingresos promedios mensuales por el monto de $3.000.000,oo correspondiente a su actividad económica como distribuidor de implementos deportivos, además, por brindar asesorías y suministros de personal a empresas navieras a través de su firma INTERNATIONAL PERSONNEL SERVICES. 12. Copia de la tarjeta profesional de contador de público de JUAN CARLOS PÁEZ LÓPEZ. 13. Copia de la VISA de RANDOLF THERÁN DUKE. 14. Constancia suscrita por ROSARIO GARCÍA SAYAS Jefa de la División de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Cartagena de fecha 26 de febrero de 2003, en la que se hace constar que RANDOLF THERÁN DUKE laboró en la Rama Judicial desde el 8 de septiembre de 1985 hasta el 1º de mayo de 1995 desempeñándose en el cargo de citador grado 3º. 15. Formato de entrevista realizado por RANDOLF THERÁN ORTIZ hijo de la víctima directa donde da cuenta de lo sucedido el día de la muerte de su padre. 16. Formatos de Investigador de campo FPJ-11, de fecha 10 y 26 de diciembre de 2012, con el fin de adelantar investigaciones en punto al asesinato de RANDOLF THERÁN DUKE, informe suscrito por MARÍA BERNARDA

DIAZ ARROYO Servidora de Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I. 17. Formato de Referencia del Hecho en Versión de fecha 9 de mayo de 2012, realizado por el postulado JUAN CARLOS REVOLLO PATERNITA, de la cual se extracta lo siguiente *"JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA SE ENCONTRABA EN UNA GALLERA CON MANUEL ESQUIVEL Y VÍCTOR AVENDAÑO ALIAS EDGAR, TUVIERON UN CONTRA TIEMPO CON UNA PERSONA CON LA QUE ALIAS EL NATO HABÍA APOSTADO LA SUMA DE DOS MILLONES DE PESOS Y QUIEN HABÍA GANADO. EL PERDEDOR LE MANIFESTÓ A ALIAS EL NATO QUE HICIERA LO QUE SEA PORQUE NO LE IBA A PAGAR, ESTE SACÓ UN ARMA REVOLVER E HIZO UNOS TIROS AL AIRE, ENTONCES JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA Y SACARON LAS ARMAS Y LE DISPARARON, CAUSÁNDOLE LA MUERTE Y QUEDO TRIADO EN LA MITAD DE LA GALLERA."*.
Análisis de la Sala.
Este cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía, de la descripción del hecho y de los elementos de convicción allegados, estos permiten dar por demostrada la materialidad del delito imputado y la responsabilidad del postulado en el mismo; además, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de homicidio, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley Autodefensas Unidas de Colombia, motivado por el control social y territorial que ejerció el postulado JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA alias "El Ñato" en sus zonas de injerencia.

Cargo No. 11[89]

Víctima	RAFAEL ENRIQUE MERCADO VITOLA
Postulado	LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO alias "Daniel".
Fecha y lugar de los hechos.	12 de marzo de 2004, en Sincelejo (Sucre).
Política: control social, territorial y de recursos. **Práctica:** homicidio selectivo. **Modus operandi:** sicariato.	
Imputación Fáctica.	
RAFAEL ENRIQUE MERCADO VITOLA, quien se dedicaba al mototaxismo, el día 12 de marzo de 2004 a eso de las 11:00 de la mañana, le dijo a su esposa MILADYS SERNA RAMOS que iba a hacerle una carrera a LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO alias "Daniel" y que lo llevaría hasta donde su novia al corregimiento de Cerrito La Palma. Ese día el señor MERCADO VITOLA no regresó a dormir, y no fue sino hasta el día 14 de ese mes y año que fue encontrado su cuerpo desmembrado y enterrado en Cerro Bomba jurisdicción de Tuchín (Córdoba).	

[89] Sesión de audiencia del 30 de junio de 2021, audio 08001225200320200000100_20210630_01, Rec. 8:15.

Alias "Daniel" fue capturado en el mes de octubre del año 2004 por los referidos hechos.
Imputación jurídica
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo expuso ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** alias "Daniel", en calidad de coautor, por el delito de **homicidio en persona protegida**, en concurso heterogéneo sucesivo con **detención ilegal y privación del debido proceso**, bajo las circunstancias de mayor punibilidad de los numerales 5 y 8 del artículo 58 de la ley 599 del 2000.
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física
1. Formato de Investigador de campo FPJ-11, de fecha 10 de agosto de 2016, en el que se registran los resultados de la investigación que se adelantó con ocasión al homicidio de RAFAEL ENRIQUE MERCADO VITOLA, suscrito por el servidor de policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación C.T.I. JAIME ALBERTO MERCADO MARTÍNEZ. 2. Acta de levantamiento de cadáver (Diligencia de exhumación) fechada 14 de marzo de 2004 realizada al cuerpo de RAFAEL ENRIQUE MERCADO VITOLA, en el que se detallaron como heridas: *"se encuentra mutilado en sus partes posteriores y en avanzado estado de descomposición (...)"*. 3. Protocolo de necropsia No. 059/04 realizado al cuerpo de RAFAEL ENRIQUE MERCADO VITOLA, en el que se registra como causa de muerte: *"Shock Traumático producido por Laceraciones Cerebrales producidas por Heridas de Proyectil de Arma de Fuego de carga única y baja velocidad"*; así mismo, se detallaron como aspectos específicos relacionados con el hecho: *"Hay clara definición que las lesiones por proyectil de arma de fuego fueron antemortem. Las lesiones de amputación fueron postmortem. No hay signos de lucha o defensa"*. 4. Fotocopia de cédula de ciudadanía No. 92.500.275 correspondiente a quien en vida respondió al nombre de RAFAEL ENRIQUE MERCADO VITOLA. 5. Certificación expedida por la Personería de Sincelejo, en la que se hace constar que RAFAEL ENRIQUE MERCADO VITOLA falleció el día 12 de marzo de 2004, en la Finca Cerro Bomba del corregimiento Cruz del Beque jurisdicción de ese municipio. 6. Certificación expedida por la Asistente de Fiscal I de la Fiscalía Sexta Seccional de Sincelejo, en la que se hace constar que revisado el sistema SIJUF se registra que en la Fiscalía Séptima Seccional de esa ciudad se adelantó investigación preliminar por el homicidio de RAFAEL ENRIQUE MERCADO VITOLA, en donde aparecen como sindicados de tal hecho los señores MILADYS SERNA RAMOS, ARMIN MONTES FERNÁNDEZ y LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO. 7. Álbum fotográfico No. 0112 de la diligencia de levantamiento de cadáver de RAFAEL ENRIQUE MERCADO VITOLA. 8. Recorte de periódico en que se registra la noticia "Crimen Macabro", "Hallan fosa con cadáver de mototaxista".

9. Copia de resolución de acusación proferida por la Fiscalía Sexta Seccional de Sincelejo de fecha 28 de diciembre de 2004, en contra de LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO alias "Daniel" por el delito de homicidio agravado.
10. Copia de la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo (Sucre) el 4 de mayo de 2005 dentro del radicado 2005-00021-00, en contra de LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO, en la cual se le impuso como pena principal la de prisión de 25 años como autor responsable del delito de homicidio agravado cometido en la persona de RAFAEL ENRIQUE MERCADO VITOLA, así como la accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por un periodo de 20 años, al igual que el pago de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales.
11. Registro civil de defunción No. 04646338 de RAFAEL ENRIQUE MERCADO VITOLA.
12. Informe de consulta de web de la tarjeta de preparación de identificación de RAFAEL ENRIQUE MERCADO VITOLA; así como certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la que se hace constar que el documento de identidad del fallecido señor MERCADO VITOLA se encuentra cancelado por muerte.
13. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley No. 566575 y entrevista rendida por KELLY YOJANA MERCADO GUEVARA del 15 de septiembre de 2014, en donde narró las circunstancias en que aconteció el homicidio de su padre RAFAEL ENRIQUE MERCADO VITOLA.
14. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley No. 37991 rendido por HERNANDO ENRIQUE MERCADO OSORIO el 10 de julio del 2007, el cual relató las circunstancias que rodearon el homicidio del señor RAFAEL ENRIQUE MERCADO VITOLA.
15. Formato de Referencia del Hecho en Versión de fecha 8 de mayo de 2019, en el cual el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO indicó que por este mismo hecho ya había sido condenado, que él no tuvo participación en el mismo pero que supo que quién lo perpetró fue *"alias orión"*, que *"Jose Oswaldo Tavera"* es el llamado a explicar por qué se cometió el hecho, pero que, de todas manera, supo que el homicidio del señor RAFAEL ENRIQUE MERCADO VITOLA había sido por un motivo *"pasional"*.

Análisis de la Sala.

Este cargo fue objeto de imputación por parte del ente acusador[90] y presentado en audiencia pública ante la Sala de Conocimiento para efectos de legalización y sentencia[91].

Sin embargo, como claramente quedó registrado en el acápite de *"Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física"*, en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** alias "Daniel" el Juzgado Primero Penal del

[90] Conforme a Acta 116 de 2019 del 23 de octubre del 2019 del Despacho de Control de Garantías.
[91] Tal y como claramente quedó registrado en el auto del 15 de noviembre del 2022 con ponencia de la suscrita Magistrada ponente, en el cual se resolvió acceder a la solicitud de terminación anticipada del proceso por sentencia anticipada.

Circuito de Sincelejo profirió sentencia el 4 de mayo de 2005 dentro del radicado 2005-00021-00 en la cual lo condenó a la pena de prisión de 25 años como autor responsable del delito de homicidio agravado cometido en la persona de RAFAEL ENRIQUE MERCADO VITOLA, así como la accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por un periodo de 20 años, al igual que el pago de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de los perjuicios morales.

Inclusive, en comunicación dirigida el 10 de octubre del 2019 a la Fiscalía 267 de Apoyo a la Fiscalía 12 delegada ante el Tribunal, el Juzgado Tercero de Ejecución de penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla confirmó que se encontraba vigilando tres sentencias emitidas en contra del postulado **ESQUIVEL CASTILLO** entre las que se registra precisamente la emanada del Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo el 4 de mayo de 2005.

Aunado a lo anterior, la señora Fiscal titular del Despacho 12 en su oportunidad, en desarrollo de la vista pública elevó la solicitud encaminada a la acumulación de la pena impuesta en la referida sentencia por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo[92].

Al respecto, se hace necesario recordar que de tiempo atrás la máxima autoridad de la justicia ordinaria ha indicado, con relación al principio de *nom bis in idem* que:

> *"(…) abarca varias hipótesis, así:*
>
> *"Una. Nadie puede ser investigado o perseguido dos o más veces por el mismo hecho, por un mismo o por diferentes funcionarios. Se le suele decir principio de prohibición de doble o múltiple incriminación".*
>
> *"Dos. De una misma circunstancia no se pueden extractar dos o más consecuencias en contra del procesado o condenado. Se le conoce como prohibición de la doble o múltiple valoración". (Subraya la Sala en esta oportunidad.)*
>
> *"Tres. Ejecutoriada una sentencia dictada respecto de una persona, ésta no puede ser juzgada de nuevo por el mismo hecho que dio lugar al primer fallo. Es, en estricto sentido, el principio de cosa juzgada".*
>
> *"Cuatro. Impuesta a una persona la sanción que le corresponda por la comisión de una conducta delictiva, después no se le puede someter a pena por ese mismo comportamiento. Es el principio de prohibición de doble o múltiple punición".*

[92] Sesión de audiencia del primero de julio de 2021, Audio 08001225200320200000100_20210701_02 rec. 7:35

"Cinco. Nadie puede ser perseguido investigado o juzgado ni sancionado pluralmente por un hecho que en estricto sentido es único.
Se le denomina non bis in idem material"[93].

Así mismo, se ha considerado que el principio de *nom bis in idem* no es ajeno a los procesos que se surten bajo los lineamientos de la ley de Justicia y Paz *"porque el compendio normativo transicional no lo excluye y, por el contrario, se nutre de las garantías generales del ordenamiento jurídico nacional dentro del cual ocupa lugar preponderante la prohibición de doble juzgamiento. Incluso, considerando la especial protección de los derechos de las víctimas otorgada en la Ley de Justicia y Paz, no es posible desconocer, sin más, los efectos de la cosa juzgada, dados lo nocivos efectos que ello comportaría para la coherencia y legitimidad del sistema jurídico al propiciar la coexistencia de fallos de carácter contradictorio frente a un mismo supuesto fáctico."*[94].

Conforme a lo expuesto, dado que por este cargo ya se profirió condena en la justicia ordinaria por el mismo delito y mismo hecho imputado por el órgano de persecución penal en el proceso penal especial de Justicia y Paz, esto es, por homicidio agravado, el cual recayó en quien respondió en vida al nombre de RAFAEL ENRIQUE MERCADO VITOLA, sumado a que el ente acusador solicitó que con relación a la pena impuesta en ese fallo ordinario se procediera a su acumulación dentro del presente trámite transicional, lo cual será objeto de análisis más adelante en el acápite pertinente, la Sala ***no decreta la legalización de este cargo*** en tanto que el proferimiento de una nueva condena conforme a lo que viene expuesto por el mismo hecho devendría en la trasgresión del principio de *nom bis in ídem* material consagrado en el inciso cuarto del artículo 29 de la Constitución Política y en los artículos 8º del Código Penal, 19 de la Ley 600 de 2000 y 21 de la Ley 906 de 2004.

Cargo No. 12[95]

Víctima	FARID ANTONIO SALAZAR MONTES
Postulado	LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO alias "Daniel".
Fecha y lugar de los hechos.	22 de noviembre de 2003, en Sincelejo (Sucre).
Política: control social, territorial y de recursos. **Práctica:** homicidio selectivo. **Modus operandi:** sicariato.	
Imputación Fáctica.	

[93] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 12 de febrero de 2009, radicado 30998, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez. Decisión citada en providencia de segunda instancia del 26 de septiembre del 2012, rad. 39261, M.P. Jose Luis Barceló Camacho.
[94] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 5 de octubre del 2016, radicado 47209, M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa.
[95] Sesión de audiencia del 30 de junio de 2021, audio 08001225200320200000100_20210630_01, Rec. 18:58.

Está documentado que el día 22 de noviembre del año 2003, a eso de las 2:45 de la tarde, llegaron dos tipos a caballo al lugar donde estaba trabajando el señor FARID ANTONIO SALAZAR MONTES, haciendo albarcas en el taller de propiedad del señor DIÓGENES LASANTA, estas personas lo llamaron y estuvieron dialogando con él y posteriormente procedieron a asesinarlo en presencia de todos los que estaban allí en ese lugar, según información quienes lo asesinaron fueron personas pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia que operaban en esa zona, supuestamente algunos vecinos de San Antonio indispusieron al señor SALAZAR MONTES con los paramilitares y por eso lo asesinaron.
El señor FARID ANTONIO SALAZAR MONTES, vivía en el corregimiento de San Antonio jurisdicción de Sincelejo, Sucre, con su mujer y seis hijos.

Imputación jurídica

La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo expuso ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** alias "Daniel", en calidad de coautor, por el delito de **homicidio en persona protegida**, bajo las circunstancias de mayor punibilidad de los numerales 5 y 8 del artículo 58 de la ley 599 del 2000.

Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física

1. Acta de levantamiento de cadáver (Diligencia de exhumación) realizada al cuerpo de FARID ANTONIO SALAZAR MONTES.
2. Auto de apertura de investigación previa en contra de desconocido en razón al homicidio de FARID ANTONIO SALAZAR MONTES proferido por la Fiscalía Sexta Seccional de Sincelejo, Sucre, de fecha 3 de diciembre de 2003.
3. Álbum fotográfico de la diligencia de levantamiento de cadáver de FARID ANTONIO SALAZAR MONTES.
4. Informe No. 37 de fecha 6 de enero de 2004, en que se rinde informe de policía judicial en razón a la muerte de FARID ANTONIO SALAZAR MONTES.
5. Protocolo de necropsia realizado al cuerpo sin vida de FARID ANTONIO SALAZAR MONTES.
6. Resolución inhibitoria de fecha 18 de agosto de 2004 proferida por la Fiscalía Sexta Seccional de Sincelejo, Sucre, en la investigación previa adelantada por el homicidio de FARID ANTONIO SALAZAR MONTES.
7. Informe de consulta web de la tarjeta de preparación de identificación de FARID ANTONIO SALAZAR MONTES.
8. Orden de policía judicial de fecha 11 de julio de 2016 con el fin de documentar el homicidio de FARID ANTONIO SALAZAR MONTES.
9. Formato de Referencia del Hecho en Versión de fecha 8 de mayo de 2019, realizado por el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO, de la cual se extracta lo siguiente: *"ESO FUE PARA EL AÑO DE 2003, CUANDO LLEGAMOS EN UNA CANCHA DE TEJO, CUANDO PASAMOS ESTABA EL SEÑOR FARID ALIAS EL LANZA, LE DISPARAMOS AL SEÑOR DÁNDOLE VARIOS DISPAROS EN EL PECHO, LA ORDEN LA DIO ALIAS COYARÁ, YO LE PEGUE DOS TIROS EN LA CABEZA, NOS FUIMOS DEL PUEBLO A CABALLO. MI COMANDANTE ERA ALIAS EL PAISA Y LE*

MANIFESTÉ EL HECHO DONDE COYARÁ HABÍA DADO LA ORDEN, LAS ARMAS QUE SE UTILIZARON REVOLVER CAL. 38, NOS FUIMOS PARA LOS PUESTO DE CONTROL".
Análisis de la Sala.
Este cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como fue expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía, con la descripción del hecho y de los elementos de convicción allegados que han sido puesto de presente, que permiten demostrar la materialidad del delito imputado la responsabilidad aceptada del postulado en el mismo; además, este cargo hace parte del patrón de macrocriminalidad de homicidio que es uno de los patrones previstos en esta sentencia, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley AUC, conforme al control social y territorial que ejerció entre ellos el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO en sus zonas de injerencia como miembro activo del otrora grupo armado ilegal.

Cargo No. 13[96]

Víctima	OSCAR ÁLVAREZ PASTOR
Postulado	LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO alias "Daniel".
Fecha y lugar de los hechos.	18 de enero de 2004, en Sincelejo (Sucre).
Política: control social, territorial y de recursos. **Práctica:** homicidio selectivo. **Modus operandi:** sicariato.	
Imputación Fáctica.	
El día 18 de enero de 2004, a eso de las 08:00 de la noche el señor OSCAR ÁLVAREZ PASTOR, se encontraba administrando su negocio que lo era una cancha de tejo ubicada en corregimiento Cerrito La Palma jurisdicción de Sincelejo, Sucre, cuando ingresaron a la cancha dos personas se le acercaron y le dispararon ocasionándole la muerte en ese lugar. Según informa la reportante MÓNICA MILET ÁLVAREZ FUENTES, compañera permanente de la víctima directa que la cusa de la muerte OSCAR ÁLVAREZ PASTOR al parecer fue por una discusión que este sostuvo tiempo atrás con un integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia conocido en esa organización criminal con el alias de "Coyará" y que entre los autores que participaron en dicho crimen se encuentra LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO alias "Daniel".	
Imputación jurídica	
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo expuso ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** alias "Daniel", en calidad de coautor, por el delito	

[96] Sesión de audiencia del 30 de junio de 2021, audio 08001225200320200000100_20210630_01, Rec. 23:00.

de **homicidio en persona protegida**, bajo las circunstancias de mayor punibilidad de los numerales 5 y 8 del artículo 58 de la ley 599 del 2000.
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física
1. Formato de órdenes a policía judicial de fecha 11 de julio de 2016, con el fin de documentar el homicidio de OSCAR ÁLVAREZ PASTOR. 2. Acta de levantamiento de cadáver realizada al cuerpo de OSCAR ÁLVAREZ PASTOR. 3. Protocolo de necropsia realizado al cuerpo sin vida de OSCAR ÁLVAREZ PASTOR. 4. Registro civil de defunción de OSCAR ÁLVAREZ PASTOR. 5. Recorte de periódico de fecha 20 de enero de 2004 en el que se titula la noticia "Lo asesinaron en su propia casa". 6. Informe de consulta web de plena identidad de OSCAR ÁLVAREZ PASTOR. 7. Informe de investigador de campo FPJ-11 de fecha 6 de agosto de 2016, en el que tiene como objeto documentar el hecho homicidio de OSCAR ÁLVAREZ PASTOR. 8. Entrevista realizada a MÓNICA MILET ÁLVAREZ FUENTES de fecha 28 de julio de 2016, en la queda cuenta aspectos personales de la víctima directa y las circunstancias que rodearon la muerte de la misma. 9. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley de DIANA ISABEL ÁLVAREZ ARRIETA. 10. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley de ELIECER ÁLVAREZ MARTÍNEZ. 11. Sentencia condenatoria Proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sincelejo, Sucre, de fecha 9 de junio de 2005, en contra de LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO a la pena principal de prisión de 13 años como autor responsable del delito de homicidio simple cometido en la persona de OSCAR ÁLVAREZ PASTOR. 12. Formato de Referencia del Hecho en Versión de fecha 8 de mayo de 2019, realizado por el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO, de la cual se extracta lo siguiente: *"LUIS MIGUEL ESQUIVEL: LOS MOTIVOS NO LOS SE, LA ORDEN LA DIO JOSE OSWALDO, LLEGAMOS A LA CASA DE EL, ALIAS LANZA ME DICE ENTRA Y LE DISPARA CUANDO LA MOTO SE ARREGLO CUANDO ALIAS LANZA LE DICE A ALIAS RAMIRO QUE ENTRA Y LE DISPARA ESO FUE COMO A LAS 7 DE LA NOCHE, ESO FUE EN CERRITO DE PALMA. UNA VEZ COMETIDO EL HECHO, ALIAS EL PANA, RAMIRO, LANZA Y YO SALIMOS DE AHÍ A PIE, QUIEN DISPARA ES RAMIRO. SE UTILIZO UN REVOLVER CAL. 38.".*
Análisis de la Sala.

Este cargo fue objeto de imputación por parte del ente acusador[97] y presentado en audiencia pública ante la Sala de Conocimiento para efectos de legalización y sentencia[98].

Sin embargo, como claramente quedó registrado en el acápite de *"Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física"*, en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** alias "Daniel" reposa sentencia condenatoria proferida dentro del radicado No. 2004-00257-00, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sincelejo, Sucre, de fecha 9 de junio de 2005, en contra de LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO a la pena principal de prisión de (13) años como coautor responsable del delito de homicidio simple cometido en la persona de OSCAR ELIECER ÁLVAREZ PASTOR.

Aunado a lo anterior, la señora Fiscal titular del Despacho 12 en desarrollo de la vista pública elevó la solicitud encaminada a la acumulación de la pena impuesta en la referida sentencia Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo[99].

Al respecto, se hace necesario recordar tal como viene advertido en el cuerpo de esta sentencia que de tiempo atrás la máxima autoridad de la justicia ordinaria ha indicado, con relación al principio de *nom bis in idem* que:

> *"(…) abarca varias hipótesis, así:*
>
> *"Una. Nadie puede ser investigado o perseguido dos o más veces por el mismo hecho, por un mismo o por diferentes funcionarios. Se le suele decir principio de prohibición de doble o múltiple incriminación".*
>
> *"Dos. De una misma circunstancia no se pueden extractar dos o más consecuencias en contra del procesado o condenado. Se le conoce como prohibición de la doble o múltiple valoración". (Subraya la Sala en esta oportunidad.)*
>
> *"Tres. Ejecutoriada una sentencia dictada respecto de una persona, ésta no puede ser juzgada de nuevo por el mismo hecho que dio lugar al primer fallo. Es, en estricto sentido, el principio de cosa juzgada".*
>
> *"Cuatro. Impuesta a una persona la sanción que le corresponda por la comisión de una conducta delictiva, después no se le puede someter a pena por ese mismo comportamiento. Es el principio de prohibición de doble o múltiple punición".*

[97] Conforme a Acta 116 de 2019 del 23 de octubre del 2019 del Despacho de Control de Garantías.
[98] Tal y como quedó registrado en el auto del 15 de noviembre del 2022 con ponencia de la suscrita Magistrada ponente Dra. CECILIA LEONOR OLIVELLA ARAUJO, en el cual se resolvió acceder a la solicitud de terminación anticipada del proceso por sentencia anticipada.
[99] Sesión de audiencia del primero de julio de 2021, Audio 08001225200320200000100_20210701_02 rec. 7:35

"Cinco. Nadie puede ser perseguido investigado o juzgado ni sancionado pluralmente por un hecho que en estricto sentido es único.
Se le denomina non bis in idem material"[100].

Así mismo, se ha considerado que este principio al que aludimos de *nom bis in idem* no es ajeno a los procesos que se surten bajo los lineamientos de la ley que aplicamos de Justicia y Paz *"porque el compendio normativo transicional no lo excluye y, por el contrario, se nutre de las garantías generales del ordenamiento jurídico nacional dentro del cual ocupa lugar preponderante la prohibición de doble juzgamiento. Incluso, considerando la especial protección de los derechos de las víctimas otorgada en la Ley de Justicia y Paz, no es posible desconocer, sin más, los efectos de la cosa juzgada, dados lo nocivos efectos que ello comportaría para la coherencia y legitimidad del sistema jurídico al propiciar la coexistencia de fallos de carácter contradictorio frente a un mismo supuesto fáctico."*[101].

Conforme a lo expuesto, dado que por este cargo ya se profirió una condena en la justicia ordinaria por el mismo delito imputado por el órgano de persecución penal en el proceso penal especial de Justicia y Paz, esto es, por homicidio simple, el cual recayó en quien respondió en vida al nombre de OSCAR ELIECER ÁLVAREZ PASTOR, sumado a que el ente acusador solicitó que con relación a la pena impuesta en ese fallo ordinario se procediera a su acumulación dentro del presente trámite transicional, lo cual nos ocuparemos más adelante en el acápite pertinente, la Sala ***no decreta la legalización de este cargo*** en tanto que como viene advertido el proferimiento de una nueva condena por el mismo hecho devendría en la trasgresión del principio de *nom bis in ídem* material consagrado en el inciso cuarto del artículo 29 de la Constitución Política y en los artículos 8º del Código Penal, 19 de la Ley 600 de 2000 y 21 de la Ley 906 de 2004.

Cargo No. 14[102]

Víctimas	NILSON MANUEL CAMPO PARRA y DAVID HERNANDO ROMERO PASSO.
Postulado	LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO alias "Daniel".
Fecha y lugar de los hechos.	13 de julio de 2003, en Sincelejo (Sucre).
Política: control social, territorial y de recursos. **Práctica:** homicidio selectivo.	

[100] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 12 de febrero de 2009, radicado 30998, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez. Decisión citada en providencia de segunda instancia del 26 de septiembre del 2012, rad. 39261, M.P. Jose Luis Barceló Camacho.
[101] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 5 de octubre del 2016, radicado 47209, M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa.
[102] Sesión de audiencia del 30 de junio de 2021, audio 08001225200320200000100_20210630_01, Rec. 29:28.

Modus operandi: sicariato.
Imputación Fáctica.
El ente investigador documenta que el día 13 de julio de 2003, los señores NILSON MANUEL CAMPO PARRA y DAVID HERNANDO ROMERO PASSO se encontraban en la celebración de un matrimonio en el corregimiento Cerrito de Palma Jurisdicción de Sincelejo, Sucre, lugar donde se encontraban los paramilitares que frecuentaban la zona como lo fueron alias Coyará, El Lanza, El Indio, entre otros, a eso de las 9:30 de la noche cuando DAVID HERNANDO ROMERO PASSO ya se iba de la fiesta los paramilitares querían que les dejara la moto en la que él se transportaba por lo que debido a esto se presentó un altercado en el cual terminaron disparándole y quitándole la vida a ROMERO PASSO, y en razón a la muerte de este NILSON MANUEL CAMPO PARRA comienza a gritar por los nervios que le atacaron y es cuando alias "Coyará" le da un tiro en la cabeza causándole la muerte de manera inmediata.
Imputación jurídica
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo expuso ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** alias "Daniel", en calidad de coautor, por el delito de **homicidio en persona protegida**, en concurso homogéneo y sucesivo, bajo las circunstancias de mayor punibilidad de los numerales 5 y 8 del artículo 58 de la ley 599 del 2000.
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física
1. Formato de órdenes a policía judicial de fecha 11 de julio de 2016, con el fin de documentar el homicidio de NILSON MANUEL CAMPO PARRA y DAVID HERNANDO ROMERO PASSO. 2. Acta de levantamiento de cadáver realizada al cuerpo de DAVID HERNANDO ROMERO PASSO. 3. Protocolo de necropsia realizado al cuerpo sin vida de DAVID HERNANDO ROMERO PASSO. 4. Informe de investigador de campo FPJ-11 de fecha 19 de agosto de 2016, en el que tiene como objeto documentar el hecho homicidio de NILSON MANUEL CAMPO PARRA y DAVID HERNANDO ROMERO PASSO. 5. Formato de Referencia del Hecho en Versión de fecha 7 de septiembre de 2011, realizado por el postulado JOSE OSWALDO TAVERA BLANCO, en la cual detalló lo siguiente: *"ESTE HECHO FUE COMETIDO POR LAS AUC - PERO NO SE PUEDE DAR LOS MÓVILES YA QUE SE ENCUENTRAN DETENIDO EN VALLEDUPAR UNO DE LOS AUTORES - EL SEÑOR DANIEL ESQUIVEL CASTILLO, ALIAS EL INDIO, PUEDE DAR INFORMACIÓN, YA QUE EL LANZA, (PRIMO DE CADENA - TENIA COMUNICACIÓN DIRECTA CON CADENA) Y COYARÁ ESTÁN MUERTOS. LO ACEPTA ES PORQUE EL GRUPO ES DE LAS AUC Y ESTABAN BAJO SU MANDO - ACEPTA SU RESPONSABILIDAD"*.

6. Certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la que se hace constar que el documento de identificación de NILSON MANUEL CAMPO PARRA fue cancelada por muerte.
7. Certificado de registro civil de nacimiento de NILSON MANUEL CAMPO PARRA.
8. Registro civil de defunción de NILSON MANUEL CAMPO PARRA.
9. Protocolo de necropsia de NILSON MANUEL CAMPO PARRA.
10. Diligencia de inspección judicial realizada en las instalaciones de la Fiscalía Sexta Seccional de Sincelejo, Sucre, el día 10 de septiembre de 2004.
11. Oficio No. 062/SIJIN-GEIH de fecha 1 de marzo de 2004, en que se rinde informe de los resultados adelantados en razón a las labores investigativas respecto de los homicidios de NILSON MANUEL CAMPO PARRA y DAVID HERNANDO ROMERO PASSO.
12. Certificado de defunción de NILSON MANUEL CAMPO PARRA.
13. Acta de levantamiento de cadáver de NILSON MANUEL CAMPO PARRA.
14. Formato único de noticia criminal de fecha 16 de agosto de 2016, rendido por YENIS MARÍA MERCADO PÉREZ en que da cuenta de los hechos que rodearon la muerte de su esposo DAVID HERNANDO ROMERO PASSO y que por consecuencia de los cuales se vio obligada de desplazarse forzadamente.
15. Certificado de defunción de DAVID HERNANDO ROMERO PASSO.
16. Registro civil de defunción de DAVID HERNANDO ROMERO PASSO.
17. Auto de apertura de investigación previa en contra de desconocido en razón al homicidio de NILSON MANUEL CAMPO PARRA y DAVID HERNANDO ROMERO PASSO, proferido por la Fiscalía Sexta Seccional de Sincelejo el día 16 de julio de 2003.
18. Copia de cédula de ciudadanía de DAVID HERNANDO ROMERO PASSO.
19. Recorte de periódico con el título de noticia "DOBLE CRIMEN".
20. Misión de Trabajo No. 009 de fecha 16 de julio de 2003, en la que se solicita al Jefe de la Unidad Investigativa del Cuerpo Técnico de Investigaciones C.T.I de Sincelejo, documentar e investigar todo lo relacionado con el doble homicidio de NILSON MANUEL CAMPO PARRA y DAVID HERNANDO ROMERO PASSO.
21. Resolución inhibitoria de fecha 13 de abril de 2004 proferida por la Fiscalía Sexta Seccional de Sincelejo, Sucre, en la investigación previa adelantada por el homicidio de NILSON MANUEL CAMPO PARRA y DAVID HERNANDO ROMERO PASSO.

Análisis de la Sala.

Este cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía, de la descripción hecha conforme a lo sucedido del hecho y de los elementos de convicción allegados, que permiten la demostración de la materialidad del delito imputado la responsabilidad que recae al postulado en el mismo; además, este cargo hizo parte de uno de los patrones de macrocriminalidad estudiado en este caso como el de homicidio, perpetrado

en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley AUC, motivado por el control social y territorial que ejerció el postulado en sus zonas de injerencia.

Cargo No. 15[103]

Víctima	RAFAEL EDUARDO VILORIA MÉNDEZ
Postulado	LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO alias "Daniel".
Fecha y lugar de los hechos.	11 de julio de 2003, en Sincelejo (Sucre).
Política: control social, territorial y de recursos. **Práctica:** homicidio selectivo. **Modus operandi:** sicariato.	
Imputación Fáctica.	
El día 11 de julio de 2003, a eso de las 5:30 de la tarde, RAFAEL EDUARDO VILORIA MÉNDEZ se dispuso a regresar a su casa en compañía de un sobrino ESTABAN MEDRANO VILORIA luego de trabajar como jornaleros en una finca de la zona de nombre Casa Blanca. Al llegar a la entrada del corregimiento de Cruz del Beque, jurisdicción de Sincelejo (Sucre), fueron interceptados por dos individuos que se movilizaban a pie vestidos de civil y portando armas cortas, quienes les pidieron que se detuvieran, seguidamente le dijeron a ESTABAN MEDRANO VILORIA que continuara su camino y mantuvieron con ellos a su tío RAFAEL EDUARDO VILORIA MÉNDEZ. A los pocos minutos se escucharon tres disparos que cegaron la vida del señor VILORIA MÉNDEZ, al parecer provenientes de paramilitares que permanecían en la referida finca Casa Blanca, en donde la víctima laboraba. El señor RAFAEL EDUARDO VILORIA MÉNDEZ era alguacil del cabildo indígena de Cruz del Beque, y comentaba que iba a denunciar a los paramilitares que merodeaban la zona, presuntamente ese fue el motivo por el cual lo asesinaron.	
Imputación jurídica	
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo expuso ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** alias "Daniel", en calidad de coautor, por el delito de **homicidio en persona protegida**, bajo las circunstancias de mayor punibilidad de los numerales 5 y 8 del artículo 58 de la ley 599 del 2000.	
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física	
1. Formato de órdenes a policía judicial de fecha 11 de julio de 2016, con el fin de documentar el homicidio de RAFAEL EDUARDO VILORIA MÉNDEZ.	

[103] Sesión de audiencia del 30 de junio de 2021, audio 08001225200320200000100_20210630_01, Rec. 36:15.

2. Acta de levantamiento de cadáver realizada al cuerpo de RAFAEL EDUARDO VILORIA MÉNDEZ el 11 de julio del 2003.
3. Protocolo de necropsia realizado al cuerpo sin vida de RAFAEL EDUARDO VILORIA MÉNDEZ, en el que se registra como causa de muerte: *"Shock Traumático producido por Laceración Cerebral producida por Herida de proyectil de Arma de Fuego de carga única y baja velocidad"*
4. Certificado de defunción de RAFAEL EDUARDO VILORIA MÉNDEZ.
5. Informe No. 1183 FGN-G.E.I.H. de fecha 11 de agosto de 2003, suscrito por los detectives del otrora Departamento Administrativo de Seguridad DAS, PABLO ORDUZ RÍOS y JHON JAIRO PALACIO CÓRDOBA, en el que se da cuenta de las labores adelantadas en razón del homicidio de RAFAEL EDUARDO VILORIA MÉNDEZ.
6. Formato de recepción de testimonio rendido por JONNY FRANCISCO MARTÍNEZ LÁZARO el día 23 de julio de 2003 ante el agente del DAS PABLO ORDUZ RÍOS.
7. Copia de la cédula de ciudadanía de IDALIDES MARGARITA ROMERO BERTEL.
8. Resolución inhibitoria de fecha 2 de enero de 2004, proferida por la Fiscalía Quinta Seccional de Sincelejo, en razón a la investigación previa adelantada por el homicidio de RAFAEL EDUARDO VILORIA MÉNDEZ.
9. Informe de consulta web de la plena identidad de RAFAEL EDUARDO VILORIA MÉNDEZ.
10. Informe de investigador de campo de fecha 25 de agosto de 2016, en el que se dan conocer algunas labores adelantadas en razón del homicidio de RAFAEL EDUARDO VILORIA MÉNDEZ.
11. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley No. 637977 del 25 de agosto del 2016, en el cual la señora IDALIDES MARGARITA ROMERO BERTEL expuso las circunstancias en que aconteció la muerte de su esposo RAFAEL EDUARDO VILORIA MÉNDEZ, indicando que quienes cometieron el hecho fueron *"los paramilitares que estaban allí en la finca Casa Blanca donde él estaba trabajando, se [oyó] mencionar un alias Juancho, Gafitas, El Patilla y el Paisa. Él era alguacil del cabildo indígena de Cruz de Beque y él a veces se ponía a decir que iba a denunciar a esa gente armada de los paracos que estaban en los alrededores del pueblo. Nosotros creemos que por eso lo mataron".*
12. En Formato de Referencia del Hecho en Versión de fecha 8 de mayo de 2019, quedó registrado que el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO, expresó haber tenido conocimiento del hecho en el que resultó muerto el señor RAFAEL EDUARDO VILORIA MÉNDEZ.

Análisis de la Sala.

Este cargo **se legaliza** conforme a los términos que fueron expuestos en las imputaciones fáctica y jurídica por la Fiscalía, de acuerdo con la sustentación que esta hizo, de la descripción del hecho y de los elementos materiales probatorios allegados, que permiten dar por demostrada la materialidad del delito imputado; así mismo, se encuentra que se ha acreditado la responsabilidad de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO**, teniendo en cuenta que, de la aceptación libre y espontánea que del cargo hiciera en la

audiencia pública de sustentación de la terminación anticipada del proceso por sentencia anticipada, para la época de ocurrencia del hecho, esto es, 11 de julio del 2003, tal y como quedó registrado en el acápite "1.6. Permanencia de los postulados en el Bloque Héroes de los Montes de María", él hizo parte, en calidad de radio chispa, de la estructura comandada por alias "El Paisa" del Bloque Héroes de los Montes de María, seudónimo este que, tal y como quedó antes referenciado, coincidencialmente fue referido por la señora IDALIDES MARGARITA ROMERO BERTEL como uno de los paramilitares que permanecían en la finca en donde laboraba la víctima y quien podría haber tenido responsabilidad, junto con otros, en la ejecución del homicidio del señor VILORIA MÉNDEZ.

El cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de homicidio, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley, motivado por el control social y territorial ejercido en las zonas de injerencia. Así mismo, el punible fue cometido bajo la práctica de homicidio selectivo y bajo el modus operandi de sicariato, que resultó coincidente con el actuar de la organización armada ilegal a la cual perteneció el postulado, tal y como aconteció en otros casos analizados en el cuerpo de esta sentencia.

Cargo No. 16[104]

Víctimas	MANUEL GREGORIO HERAZO ALVIZ y ADALBERTO JOSÉ NAIZZIR ÁLVAREZ.
Postulado	LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO alias "Daniel".
Fecha y lugar de los hechos.	4 de mayo de 2003, en Sincelejo (Sucre).
Política: control social, territorial y de recursos. **Práctica:** homicidio selectivo. **Modus operandi:** sicariato.	
Imputación Fáctica.	
Registra la Fiscalía que la víctima ADALBERTO JOSÉ NAIZZIR ÁLVAREZ, se dedicaba al transporte de pasajeros en un vehículo de su propiedad y que la víctima MANUEL GREGORIO HERAZO ALVIZ era su ayudante, el día 4 de mayo de 2003, salieron como de costumbre a la vereda Cerrito de la Palma jurisdicción del municipio de Sincelejo, Sucre, donde había fiestas de corraleja lugar en el que NAIZZIR ÁLVAREZ tuvo un altercado en una cantina de la población con un integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia conocido en esa organización criminal con el alias de "Coyará" por supuestamente haber enamorado a una joven que lo acompañaba motivo por el cual fue asesinado, cuando esto sucedió MANUEL GREGORIO HERAZO ALVIZ quiso coger el carro para salir a avisar a los familiares pero	

[104] Sesión de audiencia del 30 de junio de 2021, audio 08001225200320200000100_20210630_02, Rec. 5:50.

fue interceptado por los paramilitares que lo estaban esperando para dispararle y causarle la muerte.
Imputación jurídica
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo expuso ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** alias "Daniel", en calidad de coautor, por el delito de **homicidio en persona protegida**, en concurso homogéneo y sucesivo, bajo las circunstancias de mayor punibilidad de los numerales 5 y 8 del artículo 58 de la ley 599 del 2000.
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física
1. Formato de órdenes a policía judicial de fecha 11 de julio de 2016, con el fin de documentar el homicidio de MANUEL GREGORIO HERAZO ALVIZ. 2. Acta de levantamiento de cadáver realizada al cuerpo de MANUEL GREGORIO HERAZO ALVIZ. 3. Protocolo de necropsia realizado al cuerpo sin vida de MANUEL GREGORIO HERAZO ALVIZ. 4. Registro civil de defunción de MANUEL GREGORIO HERAZO ALVIZ. 5. Recorte de noticia de fecha 6 de mayo de 2003 en el que se titula "*Con asesinatos cerraron las fiestas en El Cerrito"* 6. Registro civil de nacimiento de MANUEL GREGORIO HERAZO ALVIZ 7. Informe sobre consulta web de la plena identidad de MANUEL GREGORIO HERAZO ALVIZ. 8. Copia de auto de apertura de investigación previa de fecha 6 de mayo de 2003 proferido por la Fiscalía Primera Seccional de Sincelejo, Sucre, en razón del homicidio de MANUEL GREGORIO HERAZO ALVIZ. 9. Copia de declaración jurada rendida por FILADELFO RAFAEL HERAZO ALVIZ, ante la Fiscalía Primera Seccional de Sincelejo, Sucre, el día 7 de mayo de 2003. 10. Copia de declaración jurada rendida por JUAN BAUTISTA VERGARA MÉNDEZ, ante la Seccional de Policía e Investigación de Sincelejo, Sucre, el día 15 de mayo de 2003. 11. Copia de declaración jurada rendida por FILADELFO RAFAEL HERAZO ALVIZ, ante la Seccional de Policía e Investigación de Sincelejo, Sucre, el día 23 de mayo de 2003. 12. Informe de inteligencia de la SIPOL carácter reservado de fecha 27 de mayo de 2003, en el que entre otros aspectos se registra que alias "Coyará" es el autor material del homicidio ocurrido en el Cerito de las Palmas en el que fue ultimado MANUEL GREGORIO HERAZO ALVIZ, en ese mismo informe se refieren a la muerte de ADALBERTO JOSÉ NAIZZIR ÁLVAREZ quien según lo manifestado en dicho documento fue asesinado en una cantina ubicada en el corregimiento de Cerrito de las Palmas de propiedad de alias "Coyará" por negarse a pagar una cerveza. 13. Copia de resolución inhibitoria de fecha 13 de mayo de 2004 proferida por la Fiscalía Primera Seccional de Sincelejo, Sucre, investigación preliminar adelantada por la muerte de MANUEL GREGORIO HERAZO ALVIZ.

14. Certificación expedida por la Personería Municipal de Sincelejo, Sucre, de fecha 25 de agosto de 2003, en la que se hace constar que el señor MANUEL GREGORIO HERAZO ALVIZ fue asesinado el día 4 de mayo de 2003 en el corregimiento de Cerrito de las Palmas por motivos ideológicos y políticos en el marco del conflicto armado interno.
15. Informe de investigador de campo de fecha 11 de agosto de 2016, en el que se dan conocer algunas labores adelantadas en razón del homicidio de MANUEL GREGORIO HERAZO ALVIZ.
16. Formato de órdenes a policía judicial de fecha 11 de julio de 2016, con el fin de documentar el homicidio de ADALBERTO JOSÉ NAIZZIR ÁLVAREZ.
17. Informe de investigador de campo de fecha 6 de agosto de 2016, en el que se dan conocer algunas labores adelantadas en razón del homicidio de ADALBERTO JOSÉ NAIZZIR ÁLVAREZ
18. Acta de levantamiento de cadáver realizada al cuerpo sin vida de ADALBERTO JOSÉ NAIZZIR ÁLVAREZ.
19. Protocolo de necropsia realizado al cuerpo de ADALBERTO JOSÉ NAIZZIR ÁLVAREZ.
20. Copia de auto de apertura de investigación previa de fecha 6 de mayo de 2003 proferido por la Fiscalía Sexta Seccional de Sincelejo, Sucre, en razón del homicidio de ADALBERTO JOSÉ NAIZZIR ÁLVAREZ.
21. Declaración jurada rendida por BIBIANA DEL ROSARIO NAIZZIR ÁLVAREZ, en la que da cuenta algunas circunstancias que rodearon la muerte de su hermano ADALBERTO JOSÉ NAIZZIR ÁLVAREZ.
22. Testimonio rendido el día 20 de mayo de 2004 por ANA DOLORES VÁSQUEZ DE TAPIAS ante la Seccional de Policía Judicial e Investigación de Sincelejo, Sucre.
23. Auto de apertura de instrucción penal preferido por la Fiscalía Sexta Seccional de Sincelejo, Sucre, de fecha 4 de junio de 2004, en el que se vincula a través de indagatoria a GREGORIO ENRIQUE MARTÍNEZ VELILLA como presunto responsable de la muerte de ADALBERTO JOSÉ NAIZZIR ÁLVAREZ.
24. Diligencia de indagatoria rendida por GREGORIO ENRIQUE MARTÍNEZ VELILLA ante la Fiscalía Sexta Seccional de Sincelejo, Sucre, de fecha 10 de junio de 2004.
25. Auto de fecha 16 de junio de 2004 en el que la Fiscalía Sexta Seccional de Sincelejo, Sucre, se abstiene de proferir medida de aseguramiento en contra del procesado GREGORIO ENRIQUE MARTÍNEZ VELILLA
26. Resolución de preclusión de la instrucción de fecha 18 de noviembre de 2004, a favor del sindicado GREGORIO ENRIQUE MARTÍNEZ VELILLA proferida por la Fiscalía Sexta Seccional de Sincelejo, Sucre.
27. Registro civil de defunción de ADALBERTO JOSÉ NAIZZIR ÁLVAREZ.
28. Informe sobre consulta web de la plena identidad de ADALBERTO JOSÉ NAIZZIR ÁLVAREZ.
29. Formato de Referencia del Hecho en Versión de fecha 8 de mayo de 2019, realizado por el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO, de la cual

se extracta lo siguiente: *"EN CERRITO LA PALMA, CREO QUE FUE EN MAYO DE 2003, FUERON ASESINAR DOS SEÑORES, YO ESTUVE EN LA FIESTA, PERO ME FUI, DESPUÉS ME ENTERE QUE ALIAS COYARÁ HABÍA ASESINADO A ESTOS DOS SEÑORES, ERA EN UNA FIESTA DE UNAS CORRALEJAS. YO NO ESTUVE EN LOS HECHOS, LO SE PORQUE ME LO CONTO ALIAS COYARÁ, ACEPTO EL HECHO POR ESTAR EN LA ORGANIZACIÓN."*
Análisis de la Sala.
Este cargo ***se legaliza*** teniendo en cuenta la forma y términos como fue expuesto por la Fiscalía General de la Nación, conforme a las imputaciones fáctica y jurídica del caso, como se describe el hecho y los elementos de convicción allegados, que permiten dar por demostrada la materialidad del delito imputado y la responsabilidad del postulado en el mismo; teniendo en cuenta, además, que fue cometido efectivamente tal como lo registra el diligenciamiento por el grupo armado ilegal que operaba en la zona Autodefensas Unidas de Colombia, además, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de homicidio, perpetrado en cumplimiento de políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley AUC, motivado por el control social y territorial que decían ejercer y que lo hizo igualmente el postulado en sus zonas de injerencia.

Cargo No. 17[105]

Víctima	HÉCTOR ELIO DIAZ MARTÍNEZ Alias "Cachete", presunto miembro del GAOML Autodefensas Unidas de Colombia.
Postulado	LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO alias "Daniel".
Fecha y lugar de los hechos.	1 de enero de 2004, en Sincelejo (Sucre).
Política: control social, territorial y de recursos. **Práctica:** homicidio selectivo. **Modus operandi:** sicariato.	
Imputación Fáctica.	
El primero de enero de 2004, en la finca El Pajarito de propiedad del señor EMIRO MERCADO, lugar que era destinado como puesto de control donde se encontraban los paramilitares, llegó allí alias "Lanza" quien le indicó a LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO alias "Daniel", que tomara descuidado a HÉCTOR ELIO DIAZ MARTÍNEZ conocido con el alias de "Cachete" quien para la época de los hechos era integrante de la Autodefensas Unidas de Colombia, para asesinarlo, luego fue llevado a unos 500 metros de la finca y es cuando alias "Lanza" procede a asesinarlo con un machete luego le disparó en la cabeza con un revolver calibre 38 y posteriormente lo desmembró, manifiesta además el postulado que él se encontraba en ese lugar	

[105] Sesión de audiencia del 30 de junio de 2021, audio 08001225200320200000100_20210630_02, Rec. 13:35.

y le dieron la orden para que enterrara el cuerpo sin vida y desmembrado de alias "Cachete". En desarrollo del a vista pública de solicitud de terminación anticipada del proceso por sentencia anticipada el postulado ESQUIVEL CASTILLO manifestó que el cuerpo de alias "Cachete" ya había sido exhumado de la fosa en la que se encontraba que se enteró por comunicaciones que sostiene con otros exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia que militaron con él en dicha organización criminal, además, indicó, no saber el nombre exacto de esta persona.
Imputación jurídica
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo expuso ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** alias "Daniel", en calidad de coautor, por el delito de **homicidio en persona protegida**, bajo las circunstancias de mayor punibilidad de los numerales 5 y 8 del artículo 58 de la ley 599 del 2000.
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física
1. Informes de investigador de campo FPJ-11 de fechas 28 de octubre de 2016 y 28 de julio de 2021, con el objeto de documentar y verificar el homicidio del que fue víctimas HÉCTOR ELIO DIAZ MARTÍNEZ alias Cachete. 2. Formato de órdenes a policía judicial de fecha 5 de septiembre de 2016, suscrito por OSWALDO RAFAEL BARRIOS LAMBRAÑO servidor de Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigaciones de Sincelejo. 3. Denuncia presentada el día 4 de agosto de 2005 por ROSA ISABEL MARTÍNEZ GUEVARA quien da cuenta los hechos que rodearon la desaparición forzada y posterior muerte de hijo a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC. 4. Informe No. 1042 FGN-G.E.I.H. de fecha 4 de agosto de 2005, emanado por el grupo elite investigación de homicidios del C.T.I., el que tuvo como objeto verificar información relacionada con la existencia de una fosa común en la vereda EL Cerrito La Palma jurisdicción de Sincelejo, Sucre. 5. Acta de diligencia de exhumación realizada el 27 de julio de 2005, en la vereda EL Cerrito La Palma jurisdicción de Sincelejo, Sucre, en la que funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación de las Seccionales de Cartagena, Sincelejo y Barranquilla, con el fin de verificar información obtenida previamente referente a la presencia de una fosa común que al parecer contiene los restos mortales de N.N. masculino alias "Cachete". 6. Álbum fotográfico de la diligencia de exhumación realizada el 27 de julio de 2005, en la vereda EL Cerrito La Palma jurisdicción de Sincelejo, Sucre, donde funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación hallaron los restos mortales de HÉCTOR ELIO DIAZ MARTÍNEZ alias "Cachete". 7. Auto de apertura de investigación previa de fecha 22 de agosto de 2005, proferido por la Fiscalía Segunda Seccional Especializada de Sincelejo, Sucre, en razón de la desaparición forzada de HÉCTOR ELIO DIAZ MARTÍNEZ. 8. Resolución inhibitoria de fecha 19 de abril de 2006, proferida por la Fiscalía Segunda Seccional Especializada de Sincelejo, Sucre, en la que abstuvo de

iniciar instrucción en razón de la desaparición forzada de HÉCTOR ELIO DIAZ MARTÍNEZ.
9. Consentimiento informado y acta de toma de muestra para estudios genéticos forenses realizado a la señora ROSA ISABEL MARTÍNEZ GUEVARA madre de HÉCTOR ELIO DIAZ MARTÍNEZ.
10. Informe No. 165 FGN-CTI/SAG, de fecha 12 de diciembre de 2006, en el que rinde información de los presunto responsables de la desaparición y muerte de HÉCTOR ELIO DIAZ MARTÍNEZ.
11. Informe No. 292959 de tipificación molecular de ADN y cotejo en el que se finaliza indicando que la probabilidad de maternidad de las pruebas tomadas a la señora ROSA ISABEL MARTÍNEZ GUEVARA madre del desaparecido HÉCTOR ELIO DIAZ MARTÍNEZ son del 99.999%.
12. Tarjeta de preparación de documento de identidad de HÉCTOR ELIO DIAZ MARTÍNEZ.
13. Certificado de defunción de HÉCTOR ELIO DIAZ MARTÍNEZ.
14. Entrevista rendida por MARITZA DEL CARMEN VILLALOBOS PATERNINA el día 27 de octubre de 2016, quien era esposa HÉCTOR ELIO DIAZ MARTÍNEZ.
15. Registro civil de defunción de HÉCTOR ELIO DIAZ MARTÍNEZ.
16. Registro civil de nacimiento de HÉCTOR ELIO DIAZ MARTÍNEZ.
17. Copia de la cédula de ciudadanía de ROSA ISABEL MARTÍNEZ.
18. Formato de Referencia del Hecho en Versión de fecha 8 de mayo de 2019, realizado por el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO, de la cual se extracta lo siguiente: *"LUIS MIGUEL ESQUIVEL: HOMICIDIO DE ALIAS CACHETE, PARTICIPE PORQUE YO LO ENTERRÉ CUANDO FUE ASESINADO POR ALIAS EL LANZA, LO QUE TENGO ENTENDIDO CREO QUE LA FISCALÍA LO EXHUMO EN LA FINCA EL PAJARITO DE EMIRO MERCADO, QUE ERA EL PUESTO DE CONTROL DONDE NOS ENCONTRÁBAMOS. ESE DIA LLEGO EL LANZA EN UN CABALLO Y ME DIJO QUE COGIERA A CACHETE DESCUIDADO PORQUE LO ÍBAMOS ASESINAR, LO COGIMOS Y LO LLEVAMOS A 500 MTS DE LA FINCA Y PREGUNTO QUE, PORQUE LO IBAN A ASESINAR, QUE EL TENIA UNA HIJA, LANZA ME MANIFESTÓ QUE EL CUMPLÍA ORDENES Y ESTE PROCEDE A ASESINAR CON UN MACHETE. LE DISPARO CON UN REVOLVER CAL. 38 EN LA CABEZA, YO ESTABA AHÍ. LANZA FUE QUIEN LE DISPARA Y DESMEMBRÓ, ME DA LA ORDEN PARA QUE LO ENTERRARA."*

Análisis de la Sala.

Este cargo ***se legaliza*** por la forma y términos como quedó expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía adjunto a los elementos de prueba que se insertan a esta diligencia, de la descripción del hecho y de los elementos de convicción allegados estos permiten demostrar la materialidad del delito imputado y la responsabilidad del postulado quien acepta el mismo y describe en detalle lo sucedido; además, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de homicidio, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley AUC, motivado por el control social y

territorial que ejerció el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO como miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia en las zonas en las tenía injerencia.

2.2.1. Cuestión final.

Con relación a los cargos que han sido legalizados por la Sala, de conformidad como han quedado previamente expuestos, y que conformaron el patrón de macrocriminalidad de homicidios selectivos y múltiples, se encontró responsable a los postulados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** por los delitos en concurso de homicidio en persona protegida, artículo 135 y detención ilegal y privación del debido proceso, artículo 149, bajo las circunstancias de mayor punibilidad de los numerales 5 y 8 del artículo 58, todos de la ley 599 del 2000 y al postulado **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA**, por el delito de homicidio en persona protegida, artículo 135 bajo las circunstancias de mayor punibilidad de los numerales 5 y 8 del artículo 58, de la ley 599 del 2000.

Reiteramos acá que con relación a aquellos señalamientos que se hicieron de personas de la población civil frente a los cuales la Fiscalía General de la Nación no demostró dentro del adelantamiento del proceso que efectivamente estos hubiesen hecho parte de grupos armados organizados al margen de la ley o de criminalidad manifiesta, la Sala no tendrá por probada dicha circunstancia y a ello se ha remitido.

2.3. Patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado.

Cargo No. 18[106]

Víctima	ALFREDO JOSÉ ÁVILA LUNA
Postulado	JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA alias “El Ñato”.
Fecha y lugar de los hechos.	21 de julio de 2001, en San Onofre, (Sucre).
Política: Control territorial, social y de recursos. **Práctica:** Presencia armada, temor e inseguridad. **Modus operandi:** Amenazas.	
Imputación Fáctica.	
Relata el señor ALFREDO JOSÉ ÁVILA LUNA, que para el año 2001 trabajaba en la empresa CODEGAN en el municipio de San Onofre, Sucre, en el cargo de auxiliar de laboratorio, actividad que alternaba con sus estudios, en esos tiempos se enteró que un paramilitar conocido con el alias	

[106] Sesión de audiencia del 29 de junio del 2021, Audio 08001225200320200000100_20210629_03 rec. 1:36:30.

de "Manuel" empezó a averiguar por su vida, llegaba a su trabajo y estaba pendiente de él, se ponía un revolver en la pierna y se lo mostraba, por estas intimidaciones es como el día 21 de julio de 2001, resolvió salir desplazado para Tolú, Coveñas y luego a Cartagena, al parecer alias "Manuel" lo intimidaba porque sentía celos de él, porque la victima reportante estudiaba con su novia y por eso le hizo la vida imposible, cuando llegó a Cartagena se desempeñó como mesero y vigilante, finalmente, unos familiares en el año 2012 lo convencen de volver a San Onofre.

Imputación jurídica

La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo presentó ante la Sala de Conocimiento en contra de **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** alias "El Ñato", en calidad de coautor, por el punibles de **deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil**, artículo 159 del Código Penal.

Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física

1. Informe de investigador de campo FPJ-11 de fecha 10 de diciembre de 2016, en el que se documenta el desplazamiento forzado padecido por ALFREDO JOSÉ ÁVILA LUNA informe realizado por parte de la investigadora MARTA ALMENTERO ANAYA.
2. Oficio de fecha 5 de diciembre de 2016, signado por la Técnico Investigador II MARTA ALMENTERO ANAYA en el que comunican a la víctima reportante que fue recepcionado en la oficina asignaciones investigación para judicializar el hecho desplazamiento forzado padecido por ALFREDO JOSE ÁVILA LUNA.
3. Formato de referencia del hecho en versión libre de fecha 17 de abril de 2017, rendido por postulado EDWAR COBOS TÉLLEZ, en el que se registra lo siguiente: "*REVOLLO PATERNINA DICE LO QUE MANIFIESTA LA VICTIMA ES CIERTO ESO FUE MANUEL, A ESE MUCHACHO YO TENGO CONOCIMIENTO ACEPTA RESPONSABILIDAD POR ESE HECHO Y PIDE PERDÓN, EL ERA MANUEL ESQUIVEL LE DECÍAN BLANCANIEVES EN LA ORGANIZACIÓN, ERA URBANO EN SAN ONOFRE SUCRE, PIDE PERDÓN; YA ESTA MUERTO. EDWAR COBOS DICE SOBRE ESTE HECHO DESPLAZAMIENTO FORZADO POR CONTEXTO DE TIEMPO MODO Y LUGAR ES RESPONSABILIDAD DE LAS AUC; EFECTIVAMENTE MANUEL FUE DE LA ORGANIZACIÓN, ACEPTO EL HECHO POR AUTORÍA MEDIATA, EL DESPLAZAMIENTO DE ALFREDO ÁVILA LUNA Y SU NÚCLEO FAMILIAR*.

Análisis de la Sala.

Al respecto vemos como el comandante general de este Bloque EDWAR COBOS TÉLLEZ hace unas manifestaciones lo que indicaría que la persona a la cual hace referencia se encuentra muerto, es decir, falleció, circunstancia que no fue probada por la Fiscalía ni se hizo mención en avance de este proceso al respecto, lo que para los efectos de la sentencia en lo que hace en contra de los postulados en contra de quien se está profiriendo LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO Y JUAN CARLOS

REVOLLO PATERNINA, están vivos, es más, como hemos visto en el diligenciamiento ellos se han hecho presentes en esta diligencia e igualmente en algunas sesiones del avance del proceso, el cargo ***se legaliza*** por parte de la Sala, conforme a los términos como los expuso la señora Fiscal en su momento en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación efectuada, de la descripción del hecho y de los elementos de convicción allegados, todo ello permiten a la Sala tener por demostrada la materialidad del desplazamiento forzado que recayera en cabeza de ALFREDO JOSÉ ÁVILA LUNA, y la responsabilidad de JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA, teniendo en cuenta que, para la época de ocurrencia del hecho, tal y como quedó registrado en el acápite *"1.6. Permanencia de los postulados en el Bloque Héroes de los Montes de María"*, este postulado estuvo bajo la comandancia de RODRIGO MERCADO PELUFFO alias "Cadena", grupo en el que el segundo comandante era UBER BANQUÉZ MARTÍNEZ alias "Juancho Dique", del Bloque Héroes de los Montes de María, en donde desempeñó los roles de puesto de radio, urbano y segundo comandante de la urbana tal y como lo ha dejado reseñado la Fiscalía General de la Nación y se encuentra previamente registrado en esta sentencia. Este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley Autodefensas Unidas de Colombia, motivados por ese control que ellos ejercían de manera social, territorial y de recursos en sus zonas de injerencia, así como por la lucha antisubversiva. Así mismo, el punible fue cometido bajo la práctica de presencia armada, temor e inseguridad, mediante amenazas e intimidaciones.

Cargo No. 19[107]

Víctima	MARTHA ISABEL SILGADO DE MATOS
Postulado	JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA alias "El Ñato".
Fecha y lugar de los hechos.	13 de enero de 2002, en San Onofre, (Sucre).
Política: Control territorial, social y de recursos. **Práctica:** Presencia armada, temor e inseguridad. **Modus operandi:** Amenazas.	
Imputación Fáctica.	
El día 13 de enero de 2002 a las 8:00 p.m., se encontraba MARTHA ISABEL SILGADO DE MATOS en su casa sentada en la terraza cuando vio a tres hombres vestidos de civil y de ellos sacó un arma de fuego apuntándole a su hijo YOEL PASSO SILGADO quien venía de la casa de su tía MARLENIS por lo que al percatarse de lo sucedido debido a que su	

[107] Sesión de audiencia del 29 de junio del 2021, Audio 08001225200320200000100_20210629_03 rec. 1:40:05.

sobrino empezó a gritar llamándola, salió con su marido MIGUEL AGRESOT y les dijo " *que van a hacer si nosotros somos trabajadores*" , el paramilitar que tenía el arma dijo " *me equivoqué* " y el otro dijo " *ese no es*" y se fueron caminando, a raíz de este hecho y por el temor decidió irse para Riohacha, (Guajira), con sus 10 hijos.

Agrega, además, que para la época de los hechos su hijo YOEL tenía solo 16 años y que, debido a ese desplazamiento forzado y al temor de lo que había sucedido dejó su casa con 4 camas, 1 nevera, 1 televisor, 2 mesas, 6 sillas, 2 mecedoras, 2 escaparates, la ropa, utensilios de cocina, 5 puercos, una puerca preñada, 10 patos y una burra.

Imputación jurídica

La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo presentó ante la Sala de Conocimiento en contra de **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** alias "El Ñato", en calidad de coautor, por el punible de **deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil**, artículo 159 del Código Penal.

Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física

1. Formato de entrevista rendida por LUZ ESTELA MATOS SILGADO de fecha 24 de noviembre de 2016, en la que da cuenta del desplazamiento forzado padecido por todo su núcleo familiar.
2. Copia de las cédulas de ciudadanía de: MARTHA ISABEL SILGADO DE MATOS, LUZ ESTELA, ALFREDO JAVIER MATOS SILGADO, MARTHA URFELINA, DAYANA ISABEL SANTOS MATOS y YOEL, JOSE DARÍO PASSO SILGADO.
3. Certificado de registro civil de nacimiento de LUIS CARLOS y ELIANA MATTOS SILGADO.
4. Registro civil de nacimiento de MARÍA ALEJANDRA, ALFREDO JAVIER, MARÍA DIMA MATOS SILGADO, YOEL PASSO SILGADO, DAYANA ISABEL, MARTHA URFELINA SANTOS MATTOS. VÍCTOR MIGUEL VALERO MATOS.
6. Formato de órdenes a policía judicial de fecha 8 de noviembre de 2016, con la finalidad de investigar y documentar el desplazamiento forzado padecido por MARTHA ISABEL SILGADO DE MATOS y su núcleo familiar.
7. Informe de investigador de campo FPJ-11 de fecha 10 de diciembre de 2016, en el que se documenta el desplazamiento forzado padecido por MARTHA ISABEL SILGADO DE MATOS informe realizado por parte de la investigadora MARTA ALMENTERO ANAYA.
8. Formato de referencia del hecho en versión libre de fecha 17 de abril de 2017, rendido por postulado PEDRO SEGUNDO VALENCIA GÓMEZ, en el que se registra lo siguiente: *"JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA DICE ESE HECHO ES CIERTO ACEPTO EL HECHO, PEDRO SEGUNDO VALENCIA ACEPTA EL HECHO, REVOLLO PATERNINA DICE ALLA SE FORMABAN MUCHAS PELEAS DE BARRIO"*.

Análisis de la Sala.
Este cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía, de la descripción del hecho y de los elementos de convicción allegados, que permiten dar por demostrada la materialidad del delito imputado; así mismo, se encuentra acreditada la responsabilidad de JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA, teniendo en cuenta que conforme se da cuenta el postulado aceptó el hecho y que para la época de ocurrencia del mismo, tal y como quedó registrado en el acápite *"1.6. Permanencia de los postulados en el Bloque Héroes de los Montes de María"*, este postulado estuvo bajo la comandancia de RODRIGO MERCADO PELUFFO alias "Cadena", grupo en el que el segundo comandante era UBER BANQUÉZ MARTÍNEZ alias "Juancho Dique", del Bloque Héroes de los Montes de María, en donde desempeñó los roles que ya vienen referenciados como lo son de puesto de radio, urbano y segundo comandante de la urbana tal y como lo ha dejado reseñado la Fiscalía General de la Nación. Además, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley AUC, motivado por el control social, territorial y de recursos que ejerció el postulado en sus zonas de injerencia, así como por la lucha antisubversiva. Así mismo, el punible fue cometido bajo la práctica de presencia armada, temor e inseguridad y mediante amenazas.

Cargo No. 20[108]

Víctima	LUZ ESTELA MATTOS SILGADO
Postulado	JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA alias "El Ñato".
Fecha y lugar de los hechos.	29 de diciembre de 2000, en San Onofre, (Sucre).
Política: Control territorial, social y de recursos. **Práctica:** Presencia armada, temor e inseguridad. **Modus operandi:** Amenazas.	
Imputación Fáctica.	
El 29 de diciembre de 2001, a la parcela ubicada en la vereda El Peñón jurisdicción del municipio de San Onofre, Sucre, donde vivía LUZ ESTELA MATTOS SILGADO junto con su compañero MANUEL DIONISIO MONTERROZA FERIA y sus 5 hijos, VÍCTOR MIGUEL, MARTHA URFELINA, DAYANA ISABEL, JOSE ANDRÉS y MARÍA DIMA, llegaron aproximadamente 6 hombres vestidos de camuflados y portando armas largas quienes les dijeron que tenían que desocupar, no se identificaron tenían el rostro cubierto, por lo cual y debido al temor se	

[108] Sesión de audiencia del 29 de junio del 2021, Audio 08001225200320200000100_20210629_03 rec. 1:44:25.

vieron obligados a salir desplazados hacía Riohacha, (Guajira), dejando abandonado, 10 puercos, 1 puerca parida con 6 cerditos, 26 gallinas, 6 pavos, un equipo de sonido, una nevera, un televisor 3 camas, 8 sillas, 2 mesas, una licuadora, los calderos y la ropa de vestir.
Imputación jurídica
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo presentó ante la Sala de Conocimiento en contra de **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** alias "El Ñato", en calidad de coautor, por el punible de **deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil**, artículo 159 del Código Penal.
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física
1. Denuncia penal presentada por LUZ ESTELA MATTOS SILGADO por el delito de desplazamiento forzado ante la Fiscalía 13 Delegada de la Unidad Especializada de Justicia Transicional de Sincelejo. 2. Formato de referencia del hecho en versión libre de fecha 17 de abril de 2017, rendido por postulado JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA, en el que se registra lo siguiente: *"REVOLLO PATERNINA DICE ESE HECHO ES CIERTO ACEPTO EL HECHO, DICE ALLA SE FORMABAN MUCHAS PELEAS DE BARRIO CON BARRIO Y NOSOTROS HACÍAMOS PRESENCIA PARA QUE ESO SE ACABARA, ESE MUCHACHO SE COGIÓ POR EQUIVOCACIÓN, PERO NO RECUERDO EL NOMBRE DEL QUE ESTÁBAMOS BUSCANDO, SI SE LE MOCHO EL CABELLO Y SE LE CORTO EL CUERO CABELLUDO AL MUCHACHO Y HUBO VARIAS PERSONAS, ESO LO VEÍA TODO EL MUNDO Y SE DESPLAZARON LOS FAMILIARES".*
Análisis de la Sala.
Este cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación que del hecho efectuó la Fiscalía, describiéndolo con los elementos de convicción allegados; así mismo, se encuentra acreditada la responsabilidad de JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA, teniendo en cuenta que el postulado aceptó su participación en el hecho en detalle, además, que para la época de ocurrencia del hecho, tal y como quedó registrado en el acápite *"1.6. Permanencia de los postulados en el Bloque Héroes de los Montes de María"*, este postulado estuvo bajo la comandancia de RODRIGO MERCADO PELUFFO alias "Cadena", grupo en el que el segundo comandante era UBER BANQUÉZ MARTÍNEZ alias "Juancho Dique", del Bloque Héroes de los Montes de María, en donde como viene registrado desempeñó los roles de puesto de radio, urbano y segundo comandante de la urbana tal y como lo ha dejado reseñado la Fiscalía General de la Nación. Además, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley AUC, motivado por el control social, territorial y de recursos que ejerció el

postulado en sus zonas de injerencia, así como por la lucha antisubversiva. Así mismo, el punible fue cometido bajo la práctica de presencia armada, temor e inseguridad y amenazas.

Cargo No. 21[109]

Víctima	YADIRA ESTHER MENDOZA PUCHE
Postulado	LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (alias "Daniel").
Fecha y lugar de los hechos.	28 de febrero de 2003, Sincelejo, (Sucre).
Política: control territorial y social. **Práctica:** presencia armada, temor e inseguridad. **Modus operandi:** Amenazas.	
Imputación Fáctica.	
El día 28 de febrero de 2003, la señora YADIRA ESTHER MENDOZA PUCHE y sus hijos LUIS EMILIO, CARLOS MICHAEL, SALIMA y FUAD YIBRAN DAJUD MENDOZA, quienes residían en el barrio La Ford del municipio de Sincelejo, (Sucre), se desplazaron a la ciudad de Montería en razón a que la señora MENDOZA PUCHE estaba siendo extorsionada y amenazada de muerte a raíz del asesinato de su esposo CARLOS EMILIO DAJUD CASAS hechos que ocurrieron el día 25 de diciembre del año 2002 a manos de los paramilitares, agrega la reportante que estos hechos les ocasionaron depresión, desconfianza, trauma psicológico tanto a ella como a sus hijos.	
Imputación jurídica	
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo presentó ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** (alias "Daniel"), en calidad de coautor, por el punible de **deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil**, artículo 159 del Código Penal.	
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física	
1. Poder otorgado por YADIRA ESTHER MENDOZA PUCHE a la doctora IRMA SOFIA DE LA OSSA SALCEDO. 2. Poder otorgado por YADIRA ESTHER MENDOZA PUCHE al doctor AUSBERTO BRUGES DAZA. 3. Recorte periodístico que da cuenta del homicidio de dos personas en navidad y varios hechos más violentos ocurridos en la zona. 4. Sustitución de poder otorgado por el Dr. AUSBERTO BRUGES DAZA al Dr. EMERSON ROCHA OSORIO. 5. Reconocimiento como víctima de desplazamiento forzado a la señora YADIRA ESTHER MENDOZA PUCHE por parta de la Fiscalía 10 Delegada de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz.	

[109] Sesión de audiencia del 30 de junio del 2021, Audio 08001225200320200000100_20210630_02 rec. 27:10.

6. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley No. 326189 realizado por YADIRA ESTHER MENDOZA PUCHE.
7. Certificado de registro civil de nacimiento de SALIMA, FUAD YIBRAN DAJUD MENDOZA.
8. Certificado de registro de matrimonio celebrado entre YADIRA ESTHER MENDOZA PUCHE y CARLOS EMILIO DAJUD CASAS.
9. Copia de las cédulas de ciudadanía de YADIRA ESTHER MENDOZA PUCHE y CARLOS EMILIO DAJUD CASAS.
10. Documento emanado de la Fiscalía denominado "*referencia de hecho a imputar cargos*", en el cual se consigna el reporte efectuado por la víctima YADIRA ESTHER MENDOZA PUCHE.
11. Formato denominado "referencia de hecho en versión", de fecha 8 de mayo de 2019, en el cual se consigna *"SE IMPUTA POR PERTENENCIA AL GRUPO Y POR LÍNEA DE TIEMPO, ZONA DE INJERENCIA DEL POSTULADO (CORREGIMIENTO CERRITO LA PALMA A 5 MINUTOS SINCELEJO- OPERO DESDE FEBRERO DE 2003 AL 29 OCTUBRE DE 2004)"* hecho confesado por el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO.

Análisis de la Sala.

Este cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía General de la Nación, de la descripción del hecho y de los elementos de convicción allegados, que permiten dar por demostrada la materialidad del delito imputado; así mismo, se encuentra acreditada la responsabilidad de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO**, teniendo en cuenta que, para la época de ocurrencia del hecho, tal y como quedó registrado en el acápite *"1.6. Permanencia del postulado en el Bloque Héroes de los Montes de María"*, este postulado perteneció a dicho Bloque bajo la comandancia general de EDWAR COBOS TÉLLEZ alias "Diego Vecino" y como comandante militar RODRIGO MERCADO PELUFFO alias "Cadena", en donde desempeñó los roles de radio chispa y patrullero tal y como lo ha dejado reseñado la Fiscalía General de la Nación.

Además, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley AUC, motivado por el control social, territorial y de recursos que ejerció el postulado en sus zonas de injerencia en este caso en el departamento de Sucre y su capital Sincelejo, así como por la lucha antisubversiva. Así mismo, el punible fue cometido bajo la práctica de presencia armada, temor e inseguridad y amenazas.

Cargo No. 22[110]

[110] Sesión de audiencia del 30 de junio del 2021, Audio 08001225200320200000100_20210630_02 rec. 29:55.
.

Víctima	JULIA BERRIO TERÁN
Postulado	**LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel").
Fecha y lugar de los hechos.	12 de agosto de 2003, vereda San Jorge, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre).

Política: control territorial y social.

Práctica: presencia armada, temor e inseguridad.

Modus operandi: amenazas.

Imputación Fáctica.

JULIA BERRIO TERÁN indica que a raíz de la masacre ocurrida en el corregimiento La Peñata ocurrida día 8 de agosto de 2003, en la que los paramilitares asesinaron a cinco personas, se vio obligada a abandonar el lugar donde ella vivía con su familia a raíz del gran temor generado por estos homicidios ocurridos en su comunidad por lo que decidieron salir desplazados el día 12 de agosto de 2003 para la ciudad de Sincelejo dejando todo abandonado.

Imputación jurídica

La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo presentó ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel"), en calidad de coautor, por el punible de **deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil**, artículo 159 del Código Penal.

Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física

1. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley No. 640452 presentado por JULIA BERRIO TERÁN, en el cual quedaron expuestas las circunstancias en que aconteció el hecho victimizante.
2. Documento emanado de la Fiscalía denominado "referencia de hecho a imputar cargos", en el cual se consigna el reporte efectuado por la víctima JULIA BERRIO TERÁN.
3. Formato denominado "referencia de hecho en versión", de fecha 8 de mayo de 2019, en el cual se consigna *"SE IMPUTA POR PERTENENCIA AL GRUPO Y POR LÍNEA DE TIEMPO, ZONA DE INJERENCIA DEL POSTULADO (CORREGIMIENTO CERRITO LA PALMA A 5 MINUTOS SINCELEJO- OPERO DESDE FEBRERO DE 2003 AL 29 OCTUBRE DE 2004)"* confesado por el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO.

Análisis de la Sala.

Este cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía General de la Nación, de la descripción del hecho y de los elementos de convicción allegados, que permiten dar por demostrada la materialidad del delito imputado; así mismo, se encuentra acreditada la responsabilidad de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO**, quien lo aceptó, teniendo en cuenta que, para la época de

ocurrencia del hecho, igualmente, y tal y como quedó registrado en el acápite *"1.6. Permanencia de los postulados en el Bloque Héroes de los Montes de María"*, este postulado perteneció a dicho Bloque bajo la comandancia general de EDWAR COBOS TÉLLEZ alias "Diego Vecino" y como comandante militar RODRIGO MERCADO PELUFFO alias "Cadena", en donde desempeñó los roles de radio chispa y patrullero tal y como lo ha dejado reseñado la Fiscalía General de la Nación en todo el curso del proceso. Además, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley AUC, motivado por el control social, territorial y de recursos que ejerció el postulado en sus zonas de injerencia, así como por la lucha antisubversiva. Así mismo, el punible fue cometido bajo la práctica de presencia armada, temor e inseguridad y mediante amenazas.

Cargo No. 23[111]

Víctima	DAMITH CONTRERAS BERTEL
Postulado	**LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel").
Fecha y lugar de los hechos.	12 de agosto de 2003, vereda San Jorge, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre).
Política: control territorial y social. **Práctica:** presencia armada, temor e inseguridad. **Modus operandi:** amenazas.	
Imputación Fáctica.	
Relata la reportante DAMITH CONTRERAS BERTEL, que ella vivía en la vereda Arroyo Arena del corregimiento La Peñata de Sincelejo, Sucre, y que, para la fecha del 12 de agosto de 2003, salió desplazada junto con su familia después de que los paramilitares realizaron la masacre de San Jorge o de los piscicultores, además, agregó, que tuvo que dejar todo abandonado sin poderse llevar nada con ellos, dejando cerdos, gallinas, dos vacas, cultivos sembrados de maíz y ñame.	
Imputación jurídica	
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo presentó ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel"), en calidad de coautor, por el punible de **deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil**, artículo 159 del Código Penal.	
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física	

[111] Sesión de audiencia del 30 de junio del 2021, Audio 08001225200320200000100_20210630_02 rec. 32:05.

1. Certificado de registro civil de nacimiento de JOHANNA PAOLA CANOLE CONTRERAS.
2. Certificación signada por DENIS ROMERO Capitana Encargada del Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento Córdoba – Sucre, Cabildo Menor de la Peñata Sección Municipio Sincelejo, en la que hace constar que DAMITH CONTRERAS BERTEL es indígena, vive y que hace parte de ese resguardo y que además es desplazada por la violencia desde el 8 de diciembre de 2003.
3. Registro civil de nacimiento de FERNANDO JOSE CONTRERAS RÍOS.
4. Copia de la cédula de ciudadanía de DAMITH CONTRERAS BERTEL.
5. Copia de la tarjeta de identidad de JOHANNA PAOLA CANOLE CONTRERAS.
6. Registro civil de nacimiento de HAIFER CONTRERAS RÍOS.
7. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley de DAMITH CONTRERAS BERTEL.
8. Formato denominado "referencia de hecho en versión", de fecha 8 de mayo de 2019, en el cual se consigna *"SE IMPUTA POR PERTENENCIA AL GRUPO Y POR LÍNEA DE TIEMPO, ZONA DE INJERENCIA DEL POSTULADO (CORREGIMIENTO CERRITO LA PALMA A 5 MINUTOS SINCELEJO- OPERO DESDE FEBRERO DE 2003 AL 29 OCTUBRE DE 2004)"* aceptado por el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO.

Análisis de la Sala.

Este cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía, de la descripción del hecho y de los elementos de convicción aportados, que permiten dar por demostrada la materialidad del delito imputado; así mismo, se encuentra acreditada la responsabilidad de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO**, quien como venimos registrando, para la época de ocurrencia del hecho, tal y como quedó registrado en el acápite *"1.6. Permanencia del postulado en el Bloque Héroes de los Montes de María"*, este postulado perteneció a dicho Bloque bajo la comandancia general de EDWAR COBOS TÉLLEZ alias "Diego Vecino" y como comandante militar RODRIGO MERCADO PELUFFO alias "Cadena", en donde desempeñó los roles de radio chispa y patrullero tal y como lo ha dejado reseñado la Fiscalía General de la Nación.

Además, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad del mencionado desplazamiento forzado, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley AUC, motivado por el control social, territorial y de recursos que ejerció el postulado en sus zonas de injerencia, así como por la lucha antisubversiva. Así mismo, el punible fue cometido bajo la práctica de presencia armada, temor e inseguridad y mediante amenazas.

Cargo No. 24[112]

Víctima	JULIO CESAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ
Postulado	**LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel").
Fecha y lugar de los hechos.	12 de agosto de 2003, vereda San Jorge, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre).
Política: control territorial y social. **Práctica:** presencia armada, temor e inseguridad. **Modus operandi:** amenazas.	
Imputación Fáctica.	
Manifiesta en su relato el señor JULIO CESAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ que el día 12 de agosto de 2003, a las 6:30 de la mañana, un grupo de paramilitares ingresaron a la vereda San Jorge, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre), y mataron a cinco de sus compañeros piscicultores, agregó, que por miedo abandonó la vereda y se fue hasta Sincelejo, y que cuando salió dejó la casa abandonada con 30 gallinas y 4 marranos, indicó que regresó a la vereda San Jorge en el año 2005 y que un proyecto de 14.000 peses que había para esa época se perdió completamente por el abandono que tuvo que realizar.	
Imputación jurídica	
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo presentó ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel"), en calidad de coautor, por el punible de **deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil**, artículo 159 del Código Penal.	
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física	
1. Formato de Programa Metodológico de fecha 12 de agosto de 2003, suscrito por el Dr. VICENTE GUZMÁN HERRERA. 2. Certificación de fecha 25 de agosto de 2003, expedida por el Defensor del Pueblo Seccional Sucre, en la que se hace constar que JULIO CESAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ y su grupo familiar son desplazados por la violencia de la vereda San Jorge, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre). 3. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley No. 448604 del 30 de noviembre del 2011, en el cual el señor JULIO CESAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ expuso las circunstancias que rodearon el hecho que generó su desplazamiento forzado. 4. Copia de cédula de ciudadanía de JULIO CESAR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ. 5. Formato denominado "referencia de hecho en versión", de fecha 8 de mayo de 2019, en el cual se consigna *"SE IMPUTA POR PERTENENCIA AL GRUPO Y POR LÍNEA DE TIEMPO, ZONA DE INJERENCIA DEL*	

[112] Sesión de audiencia del 30 de junio del 2021, Audio 08001225200320200000100_20210630_02 rec. 34:00.

POSTULADO (CORREGIMIENTO CERRITO LA PALMA A 5 MINUTOS SINCELEJO- OPERO DESDE FEBRERO DE 2003 AL 29 OCTUBRE DE 2004)" aceptado por el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO.
Análisis de la Sala.
Este cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía, de la descripción del hecho y de los elementos de convicción allegados, que permiten dar por demostrada la materialidad del delito imputado; así mismo, se encuentra acreditada la responsabilidad aceptada de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO**, teniendo en cuenta que, para la época de ocurrencia del hecho, tal y como quedó registrado en el acápite *"1.6. Permanencia de los postulados en el Bloque Héroes de los Montes de María"*, este postulado efectivamente perteneció a dicho Bloque bajo la comandancia general de EDWAR COBOS TÉLLEZ alias "Diego Vecino" y como comandante militar RODRIGO MERCADO PELUFFO alias "Cadena", en donde desempeñó los roles de radio chispa y patrullero tal y como lo ha dejado reseñado la Fiscalía General de la Nación. Además, tenemos que este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley AUC, motivado por el control social, territorial y de recursos que ejerció el postulado en sus zonas de injerencia, así como por la lucha antisubversiva. Así mismo, el punible fue cometido bajo la práctica de presencia armada, temor e inseguridad y mediante amenazas.

Cargo No. 25[113]

Víctima	LUIS ALBERTO MARTÍNEZ HERAZO
Postulado	**LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel").
Fecha y lugar de los hechos.	12 de agosto de 2003, vereda San Jorge, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre).
Política: control territorial y social. **Práctica:** presencia armada, temor e inseguridad. **Modus operandi:** Amenazas.	
Imputación Fáctica.	
El señor LUIS ALBERTO MARTÍNEZ HERAZO vivía con unos sobrinos y su hermano RAFAEL AUGUSTO MARTÍNEZ HERAZO en la vereda San Jorge, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre), lugar donde se dedicaban a la agricultura en una parcela	

[113] Sesión de audiencia del 30 de junio del 2021, Audio 08001225200320200000100_20210630_02 rec. 35:55.

de propiedad de unos profesores apellido MERLANO, el día 12 de agosto de 2003, a eso de las 5:45 de la mañana llegaron los paramilitares a bordo de una camioneta a la vereda y asesinaron a 5 personas entre ellos a un hermano del reportante los paramilitares manifestaron que regresarían motivo por el cual el señor MARTÍNEZ HERAZO se vio compelido a desplazarse para la ciudad de Sincelejo dejando todo abandonado.
Imputación jurídica
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo presentó ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel"), en calidad de coautor, por el punible de **deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil**, artículo 159 del Código Penal.
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física
1. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley No. 432710 adiado 11 de enero del 2011, en el cual el señor LUIS ALBERTO MARTÍNEZ HERAZO expuso las circunstancias que rodearon su desplazamiento junto con su núcleo familiar, por cuenta de integrantes de las autodefensas. 2. Documento emanado de la Fiscalía denominado "referencia de hecho a imputar cargos", en el cual se consigna el reporte efectuado por la víctima LUIS ALBERTO MARTÍNEZ HERAZO. 3. Formato denominado "referencia de hecho en versión", de fecha 8 de mayo de 2019, en el cual se consigna *"SE IMPUTA POR PERTENENCIA AL GRUPO Y POR LÍNEA DE TIEMPO, ZONA DE INJERENCIA DEL POSTULADO (CORREGIMIENTO CERRITO LA PALMA A 5 MINUTOS SINCELEJO- OPERO DESDE FEBRERO DE 2003 AL 29 OCTUBRE DE 2004)"* aceptado por el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO.
Análisis de la Sala.
El cargo ***se legaliza*** conforme ha quedado expuesto en el diligenciamiento en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía, de la descripción del hecho y de los elementos de convicción allegados, que permiten dar por demostrada la materialidad del delito imputado; así mismo, se encuentra acreditada la responsabilidad de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO**, teniendo en cuenta que, para la época de ocurrencia del hecho, tal y como quedó registrado en el acápite *"1.6. Permanencia de los postulados en el Bloque Héroes de los Montes de María"*, este postulado perteneció a dicho Bloque bajo la comandancia general de EDWAR COBOS TÉLLEZ alias "Diego Vecino" y como comandante militar RODRIGO MERCADO PELUFFO alias "Cadena", en donde desempeñó los roles de radio chispa y patrullero tal y como lo ha dejado reseñado la Fiscalía General de la Nación. Además, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley

AUC, motivado por el control social, territorial y de recursos que ejerció el postulado en sus zonas de injerencia, así como por la lucha antisubversiva. Así mismo, el punible fue cometido bajo la práctica de presencia armada, temor e inseguridad y mediante las amenazas.

Cargo No. 26[114]

Víctima	NEILA MARÍA CÁRDENAS PATERNINA
Postulado	**LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel").
Fecha y lugar de los hechos.	15 de agosto de 2003, vereda San Jorge, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre).
Política: control territorial y social. **Práctica:** presencia armada, temor e inseguridad. **Modus operandi:** amenazas.	
Imputación Fáctica.	
Narra la reportante NEILA MARÍA CÁRDENAS PATERNINA que vivía en la finca Paraíso Terrenal de propiedad de ALFONSO MARTÍNEZ, ubicada en la vereda San Jorge del municipio de Sincelejo – Sucre, con su núcleo familiar conformado por su compañero sentimental de nombre HUGO RAFAEL GAMARRA ANAYA, sus cuatro hijos JORGE ELÍAS CÁRDENAS PATERNINA, LINA MARCELA, MAYERLIS y HUGO ALFONSO GAMARRA CÁRDENAS, lugar en donde se dedicaban a la agricultura y a la cría de animales de patio, el 12 de agosto de 2003 como a las 6:30 de la mañana cuando la señora NEILA MARÍA se desplazaba por un camino hacia Sincelejo a cumplir una cita médica y de control porque estaba embarazada, fue abordada por unas personas que se movilizaban en una camioneta, quienes le preguntaron que si el lago estaba cerca presumiendo ella que eran los señores que le llevaban la comida a los peces que se estaban criando en el lago, indica además, que algunas de la personas en ese vehículo estaban encapuchados y que le advirtieron no decir nada y mucho menos denunciar nada, al regresar a la finca se enteró que habían asesinado a cinco personas (cuatro en el lago y una en el camino por donde esta se encontró la camioneta, al día siguiente en la madrugada su esposo encontró en la mesa de un quiosco un letrero que decía que a los cuidanderos les daban tres días para que desalojar las fincas, en razón a esto decidieron desplazarse el 15 de agosto de 2003, para Galeras, Sucre, a donde la suegra de la reportante, dejando todo abandonado 100 gallinas, 10 coclá (Gallinetas o Gallinas de Guinea), 12 patos, 10 pavos y 8 cerdos; cultivos: yuca, maíz y ñame en 2 hectáreas; enseres de la casa: televisor, nevera y lavadora.	
Imputación jurídica	

[114] Sesión de audiencia del 30 de junio del 2021, Audio 08001225200320200000100_20210630_02 rec. 38:14.

La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo presentó ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel"), en calidad de coautor, por el punible de **deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil**, artículo 159 del Código Penal.
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física
1. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley No. 640343 adiado 19 de septiembre del 2016, en el cual la señora NEILA MARÍA CÁRDENAS PATERNINA expuso las circunstancias que rodearon su desplazamiento junto con su núcleo familiar, por cuenta de integrantes de las autodefensas. 2. Formato denominado "referencia de hecho en versión", de fecha 8 de mayo de 2019, en el cual se consigna *"SE IMPUTA POR PERTENENCIA AL GRUPO Y POR LÍNEA DE TIEMPO, ZONA DE INJERENCIA DEL POSTULADO (CORREGIMIENTO CERRITO LA PALMA A 5 MINUTOS SINCELEJO- OPERO DESDE FEBRERO DE 2003 AL 29 OCTUBRE DE 2004)"* hecho aceptado por el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO.
Análisis de la Sala.
El cargo ***se legaliza*** conforme a los términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica presentada por la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con la sustentación, la descripción del hecho y de los elementos de convicción allegados, la aceptación de LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO, que demuestran tanto la materialidad del delito imputado como la responsabilidad de dicho postulado y registrando aquí reiteradamente teniendo en cuenta que, para la época de ocurrencia del hecho, tal y como quedó registrado en el acápite *"1.6. Permanencia del postulado en el Bloque Héroes de los Montes de María"*, este postulado perteneció a dicho Bloque bajo la comandancia general de EDWAR COBOS TÉLLEZ alias "Diego Vecino" y como comandante militar RODRIGO MERCADO PELUFFO alias "Cadena", en donde desempeñó los roles como lo hemos venido anotando de radio chispa y patrullero tal y como lo ha dejado reseñado la Fiscalía General de la Nación. Además, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad en mención de desplazamiento forzado, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley AUC, motivado por el control social, territorial y de recursos que dentro de lo cual ejerció su actividad delictiva el postulado en sus zonas de injerencia.

Cargo No. 27[115]

Víctima	EDILMA GUERRA CLEMENTE
Postulado	**LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel").

[115] Sesión de audiencia del 30 de junio del 2021, Audio 08001225200320200000100_20210630_02 rec. 42:55.

Fecha y lugar de los hechos.	15 de agosto de 2003, vereda San Jorge, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre).

Política: control territorial y social.

Práctica: presencia armada, temor e inseguridad.

Modus operandi: amenazas.

Imputación Fáctica.

La señora EDILMA GUERRA CLEMENTE vivía con sus hijos en una parcela en la vereda San Jorge, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre), empero, debido a que armados ilegales acabaron con la vida de cinco personas en dicha vereda el día 12 agosto de 2003, y por el gran temor que ese hecho les generó, se vieron obligados a desplazarse hacia el corregimiento de La Palmira dejando todo abandonado.

Agrega, además, la reportante, que en esa fecha los armados ilegales cometieron múltiples homicidios y causaron un desplazamiento masivo.

Imputación jurídica

La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo presentó ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel"), en calidad de coautor, por el punible de **deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil**, artículo 159 del Código Penal.

Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física

1. Documento emanado de la Fiscalía denominado "referencia de hecho a imputar cargos", en el cual se consigna el reporte efectuado por la víctima EDILMA GUERRA CLEMENTE y la aceptación del postulado.

2. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley No. 640367 de fecha 20 de septiembre del 2016, en el cual la víctima EDILMA GUERRA CLEMENTE dejó consignadas las circunstancias que rodearon el hecho victimizante.

3. Formato denominado "referencia de hecho en versión", de fecha 8 de mayo de 2019, en el cual se consigna *"SE IMPUTA POR PERTENENCIA AL GRUPO Y POR LÍNEA DE TIEMPO, ZONA DE INJERENCIA DEL POSTULADO (CORREGIMIENTO CERRITO LA PALMA A 5 MINUTOS SINCELEJO- OPERO DESDE FEBRERO DE 2003 AL 29 OCTUBRE DE 2004)"* el hecho es aceptado por el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO.

Análisis de la Sala.

Este cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía, de la descripción del hecho y de los elementos de convicción allegados, que permiten dar por demostrada la materialidad del delito imputado; así mismo, se encuentra acreditada la responsabilidad de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO**, teniendo en cuenta la

aceptación que de este hecho y demás desplazamientos forzados hizo el postulado y que para la época de ocurrencia del hecho, tal y como quedó registrado en el acápite *"1.6. Permanencia del postulado en el Bloque Héroes de los Montes de María"*, efectivamente, este postulado perteneció a dicho Bloque bajo la comandancia general de EDWAR COBOS TÉLLEZ alias "Diego Vecino" y como comandante militar RODRIGO MERCADO PELUFFO alias "Cadena", en donde desempeñó los roles de radio chispa y patrullero tal y como lo ha dejado reseñado la Fiscalía General de la Nación. Además, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley AUC, motivado por el control social, territorial y de recursos que ejerció el postulado en sus zonas de injerencia, así como por la lucha antisubversiva. Así mismo, el punible fue cometido bajo la práctica de presencia armada, temor e inseguridad y mediante amenazas.

Cargo No. 28[116]

Víctima	ANTONIO EDUARDO MORE HERNÁNDEZ
Postulado	**LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel").
Fecha y lugar de los hechos.	30 de agosto de 2003 en Sincelejo, (Sucre).
Política: control territorial y social. **Práctica:** presencia armada, temor e inseguridad. **Modus operandi:** amenazas.	
Imputación Fáctica.	
De acuerdo con lo registrado por la Fiscalía[117], el señor ANTONIO EDUARDO MORE HERNÁNDEZ el día 30 de agosto de 2003 se encontraba en el taller de su propiedad en compañía del señor DAVID PÉREZ alias "El Nano" quien estaba arreglando un carro de su propiedad, en ese momento un sujeto le comenzó a disparar al señor PÉREZ quien corrió al interior del taller hasta donde fue asesinado por desconocidos, a raíz de este hecho el señor MORE HERNÁNDEZ salió desplazado del taller por temor a que el sicario tomara represarías en su contra ya que fue llevado a la SIJIN a rendir testimonio y trasladó el taller a otro sitio durante un año lo cual le generó gastos y perdidas, además, consecuencias morales y psicológicas que este hecho le causó tanto al reportante como a su familia.	
Imputación jurídica	

[116] Sesión de audiencia del 30 de junio del 2021, Audio 08001225200320200000100_20210630_02 rec. 46:04.
[117] En archivo pdf., denominado *"IMPRIMIBLE IMPUTACIÓN"*, y que fue allegado con destino al expediente digital donde reposa.

La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo presentó ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel"), en calidad de coautor, por el punible de **deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil**, artículo 159 del Código Penal.

Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física

1. Documento emanado de la Fiscalía denominado "*referencia de hecho a imputar cargos*", en el cual se consigna el reporte efectuado por la víctima ANTONIO EDUARDO MORE HERNÁNDEZ y la aceptación del postulado.
2. Formato denominado "*referencia de hecho en versión*", de fecha 8 de mayo de 2019, en el cual se consigna *"SE IMPUTA POR PERTENENCIA AL GRUPO Y POR LÍNEA DE TIEMPO, ZONA DE INJERENCIA DEL POSTULADO (CORREGIMIENTO CERRITO LA PALMA A 5 MINUTOS SINCELEJO- OPERO DESDE FEBRERO DE 2003 AL 29 OCTUBRE DE 2004)"* aceptado por el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO.
3. Denuncia instaurada por ANTONIO EDUARDO MORE HERNÁNDEZ de fecha 29 de junio de 2016, ante la Fiscalía 12 Nacional especializada de Justicia Transicional, en la que el reportante da cuenta las circunstancia en que aconteció el desplazamiento padecido por este.
4. Formato de entrevista rendida por ANTONIO EDUARDO MORE HERNÁNDEZ de fecha 19 de septiembre de 2016, ante la Técnico Investigador IV MARÍA BERNARDA DIAZ ARROYO.
5. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley No. 452133 de fecha 20 de abril del 2012, en el cual la víctima ANTONIO EDUARDO MORE HERNÁNDEZ dejó consignadas las circunstancias que rodearon el hecho victimizante.
6. Informe de investigador de campo de fecha 26 de septiembre de 2016, en el que se documenta el hecho de desplazamiento forzado donde resultó víctima ANTONIO EDUARDO MORE HERNÁNDEZ.

Análisis de la Sala.

Este cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía, de la descripción del hecho y de los elementos de convicción allegados, que permiten dar por demostrada la materialidad del delito imputado; así mismo, se encuentra acreditada la responsabilidad de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO**, teniendo en cuenta que, para la época de ocurrencia del hecho, tal y como quedó registrado en el acápite *"1.6. Permanencia del postulado en el Bloque Héroes de los Montes de María"*, este postulado perteneció a dicho Bloque bajo la comandancia general de EDWAR COBOS TÉLLEZ alias "Diego Vecino" y como comandante militar RODRIGO MERCADO PELUFFO alias "Cadena", en donde desempeñó el postulado ESQUIVEL CASTILLO los roles de radio chispa y patrullero tal y como lo ha dejado reseñado la Fiscalía General de la Nación.

El cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley Autodefensas Unidas de Colombia, motivado por el control social, territorial y de recursos que ejerció el postulado en sus zonas de injerencia, así como por la lucha antisubversiva. Así mismo, el punible fue cometido bajo la práctica de presencia armada, temor e inseguridad y mediante amenazas.

Cargo No. 29[118]

Víctima	OROZMAN SEGUNDO PÉREZ GUZMÁN
Postulado	**LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel").
Fecha y lugar de los hechos.	11 de octubre de 2003, Sincelejo, (Sucre).
Política: control territorial y social. **Práctica:** presencia armada, temor e inseguridad. **Modus operandi:** amenazas.	
Imputación Fáctica.	
El señor OROZMAN SEGUNDO PÉREZ GUZMÁN narra que trabajaba vendiendo minutos, tarjetas prepagadas, chance y loterías en la puerta de las apuestas de Sucre, que el día 11 de octubre de 2003 se acercó una camioneta donde venia WILSON ANDERSON HERRERA ROJAS alias Gafas de donde se bajó un señor diciéndole que se tenía ir de Sincelejo porque lo señalaron como guerrillero y la orden era matarlo razón por la cual se vio compelido a desplazarse hasta la ciudad de Bogotá, donde trabajó como vigilante cuidando carros en un parqueadero.	
Imputación jurídica	
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo presentó ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel"), en calidad de coautor, por el punible de **deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil**, artículo 159 del Código Penal.	
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física	
1. Documento emanado de la Fiscalía denominado "referencia de hecho a imputar cargos", en el cual se consigna el reporte efectuado por la víctima OROZMAN SEGUNDO PÉREZ GUZMÁN. 2. Formato denominado "*referencia de hecho en versión*", de fecha 8 de mayo de 2019, en el cual se consigna *"SE IMPUTA POR PERTENENCIA AL GRUPO Y POR LÍNEA DE TIEMPO, ZONA DE INJERENCIA DEL POSTULADO (CORREGIMIENTO CERRITO LA PALMA A 5 MINUTOS SINCELEJO- OPERO DESDE FEBRERO DE 2003 AL 29 OCTUBRE DE 2004)"* hecho aceptado por el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO.	

[118] Sesión de audiencia del 30 de junio del 2021, Audio 08001225200320200000100_20210630_02 rec. 48:49.

3. Denuncia instaurada por OROZMAN SEGUNDO PÉREZ GUZMÁN de fecha 9 de octubre de 2017, en la que el reportante da cuenta las circunstancia en que aconteció el desplazamiento forzado padecido por este. 4. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley No. 592642 de fecha 13 de octubre de 2017, en el cual la víctima OROZMAN SEGUNDO PÉREZ GUZMÁN dejó consignadas las circunstancias que rodearon el hecho victimizante. 5. Informe de investigador de campo de fecha 8 de febrero de 2021, en el que se documenta el hecho de desplazamiento forzado donde resultó víctima OROZMAN SEGUNDO PÉREZ GUZMÁN.
Análisis de la Sala.
Este cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía, de la descripción del hecho y de los elementos de convicción allegados, que permiten dar por demostrada la materialidad del delito imputado; así mismo, se encuentra acreditada la responsabilidad de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO**, teniendo en cuenta que, para la época de ocurrencia del hecho, tal y como quedó registrado en el acápite *"1.6. Permanencia del postulado en el Bloque Héroes de los Montes de María"*, este postulado perteneció a dicho Bloque bajo la comandancia general de EDWAR COBOS TÉLLEZ alias "Diego Vecino" y como comandante militar RODRIGO MERCADO PELUFFO alias "Cadena", en donde desempeñó los roles de radio chispa y patrullero tal y como lo ha dejado reseñado la Fiscalía General de la Nación. El cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley AUC, motivado por el control social, territorial y de recursos que ejerció el postulado en sus zonas de injerencia, así como por la lucha antisubversiva. Así mismo, el punible fue cometido bajo la práctica de presencia armada, temor e inseguridad y mediante amenazas.

Cargo No. 30[119]

Víctima	MARGARITA ROMERO VILLALBA
Postulado	**LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel").
Fecha y lugar de los hechos.	6 de noviembre de 2003, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre).
Política: control territorial y social. **Práctica:** presencia armada, temor e inseguridad. **Modus operandi:** amenazas.	

[119] Sesión de audiencia del 30 de junio del 2021, Audio 08001225200320200000100_20210630_02 rec. 51:40.

Imputación Fáctica.
Manifiesta la señora MARGARITA ROMERO VILLALBA que vivía con su núcleo familiar en su casa en la vereda Arroyo Arena del corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre). Hasta ese lugar arribaron hombres armados pertenecientes a las autodefensas quienes la apuntaron con un fusil y le dijeron que tenía que salir de la zona, razón por la cual el día 6 de noviembre de 2003 se vio forzado a desplazarse dejando abandonado 4 cerdos que quedaron donde unos vecinos.
Imputación jurídica
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo presentó ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel"), en calidad de coautor, por el punible de **deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil**, artículo 159 del Código Penal.
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física
1. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley No. 427007 de fecha 30 de noviembre del 2011, en el cual la víctima MARGARITA ROMERO VILLALBA dejó consignadas las circunstancias que rodearon el hecho victimizante. 2. Copia de la cédula de ciudadanía de PEDRO MANUEL SANES ROMERO. 3. Certificación expedida por el Defensor del Pueblo de Sucre, de fecha 7 de noviembre de 2003, en la que se hace constar que MARGARITA ROMERO VILLALBA y su grupo familiar compuesto por esposo, hijos y nietos son desplazados por la violencia de la vereda Arroyo Arena del corregimiento de La Peñata. 4. Registro SIJYP No. 427007 de MARGARITA ROMERO VILLALBA. 5. Documento emanado de la Fiscalía denominado "referencia de hecho a imputar cargos", en el cual se consigna el reporte efectuado por la víctima MARGARITA ROMERO VILLALBA y la aceptación del postulado. 6. Formato denominado "*referencia de hecho en versión*", de fecha 8 de mayo de 2019, en el cual se consigna *"SE IMPUTA POR PERTENENCIA AL GRUPO Y POR LÍNEA DE TIEMPO, ZONA DE INJERENCIA DEL POSTULADO (CORREGIMIENTO CERRITO LA PALMA A 5 MINUTOS SINCELEJO- OPERO DESDE FEBRERO DE 2003 AL 29 OCTUBRE DE 2004)"* aceptado por el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO.
Análisis de la Sala.
Este cargo ***se legaliza*** al igual que el anterior No. 29, en la forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía, de la descripción del hecho y de los elementos de convicción allegados, que permiten dar por demostrada la materialidad del delito imputado; así mismo, se encuentra acreditada la responsabilidad de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO**, teniendo en cuenta que, para la época de ocurrencia del hecho, tal y como quedó registrado en el acápite *"1.6. Permanencia del*

postulado en el Bloque Héroes de los Montes de María", este postulado perteneció a dicho Bloque bajo la comandancia general de EDWAR COBOS TÉLLEZ alias "Diego Vecino" y como comandante militar RODRIGO MERCADO PELUFFO alias "Cadena", en donde el postulado ESQUIVEL CASTILLO desempeñó los roles de radio chispa y patrullero tal y como lo ha dejado reseñado la Fiscalía General de la Nación. El cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley AUC, motivado por el control social, territorial y de recursos que ejerció el postulado en sus zonas de injerencia, así como por la lucha antisubversiva. Así mismo, el punible fue cometido bajo la práctica de presencia armada, temor e inseguridad y mediante amenazas.

Cargo No. 31[120]

Víctima	ANA VIRGINIA BERTEL SOLAR
Postulado	**LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel").
Fecha y lugar de los hechos.	6 de noviembre de 2003, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre).
Política: control territorial y social. **Práctica:** presencia armada, temor e inseguridad. **Modus operandi:** amenazas.	
Imputación Fáctica.	
La señora ANA VIRGINIA BERTEL SOLAR, relata que el 6 de noviembre de 2003, vivía en la vereda La Primavera del corregimiento La Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre), cuando les avisaron que en la noche que los paramilitares habían matado a su tío PEDRO PABLO SOLAR ROMERO y a su primo FIDEL PATERNINA SOLAR, y que estos paramilitares habían dicho que tenían que desocupar en 24 horas, razón por la cual salió desplazada dejando abandonado todo como la cría de animales pavos, gallinas y 2 cerdos, además, indicó, que su marido arrendaba tierras.	
Imputación jurídica	
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo presentó ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel"), en calidad de coautor, por el punible de **deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil**, artículo 159 del Código Penal.	
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física	

[120] Sesión de audiencia del 30 de junio del 2021, Audio 08001225200320200000100_20210630_02 rec. 54:10.

1. Entrevista de fecha 6 de noviembre de 2020, rendida por ANA VIRGINIA BERTEL SOLAR en la que da cuenta ser víctima de los delitos de hurto y desplazamiento forzado cometidos por los paramilitares que permanecían en esa zona.
2. Certificado de defunción de DIGNA ROSA SOLAR ROMERO.
3. Copias de las cédulas de ciudadanía de DIGNA ROSA SOLAR ROMERO, ANA VIRGINIA, RUBY MARÍA, EDUARDO LUIS, YINA MARÍA, PAOLA, MARIANA BERTEL SOLAR, OSCAR ANTONIO HERMOSILLA BERTEL, DANIS DE HOYOS BERTEL, LINEY DEL SOCORRO GUERRERO BERTEL y LARRY DANIEL BERTEL BERTEL.
4. Formato de consulta VIVANTO de ANA VIRGINIA BERTEL SOLAR y su grupo familiar.
5. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley No. 427284 del 30 de noviembre del 2011, en el cual la señora ANA VIRGINIA BERTEL SOLAR dejó registradas las circunstancias en que aconteció el hecho victimizante.
6. Registro civil de nacimiento de DANIS DE HOYOS BERTEL y OSCAR ANTONIO HERMOSILLA BERTEL.
7. Formato denominado "*referencia de hecho en versión*", de fecha 8 de mayo de 2019, en el cual se consigna *"SE IMPUTA POR PERTENENCIA AL GRUPO Y POR LÍNEA DE TIEMPO, ZONA DE INJERENCIA DEL POSTULADO (CORREGIMIENTO CERRITO LA PALMA A 5 MINUTOS SINCELEJO- OPERO DESDE FEBRERO DE 2003 AL 29 OCTUBRE DE 2004)"* el hecho fue aceptado por el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO.

Análisis de la Sala.

Este cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía, de la descripción del hecho y de los elementos de convicción allegados, que permiten dar por demostrada la materialidad del delito imputado; así mismo, se encuentra acreditada la responsabilidad de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO**, teniendo en cuenta que, para la época de ocurrencia del hecho, tal y como se registra en el acápite *"1.6. Permanencia del postulado en el Bloque Héroes de los Montes de María"*, este postulado perteneció a dicho Bloque bajo la comandancia general de EDWAR COBOS TÉLLEZ alias "Diego Vecino" y como comandante militar RODRIGO MERCADO PELUFFO alias "Cadena", en donde desempeñó los roles de radio chispa y patrullero tal y como lo ha dejado reseñado la Fiscalía General de la Nación.

Además, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley AUC, motivado por el control social, territorial y de recursos que ejerció el postulado en sus zonas de injerencia, así como por la lucha antisubversiva.

Así mismo, el punible fue cometido bajo la práctica de presencia armada, temor e inseguridad y mediante amenazas.

Cargo No. 32[121]

Víctima	ENA LUZ CORRALES FALCO
Postulado	**LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel").
Fecha y lugar de los hechos.	6 de noviembre de 2003, vereda Arroyo Arena, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre).
Política: control territorial y social. **Práctica:** presencia armada, temor e inseguridad. **Modus operandi:** amenazas.	
Imputación Fáctica.	
La señora ENA LUZ CORRALES FALCO vivía con su compañero permanente HERNÁN SANES RODRÍGUEZ en la vereda Arroyo Arena, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre). Debido a que el 6 de noviembre de 2003 integrantes de las autodefensas dieron 24 horas para abandonar la vereda, por lo anterior, en la indicada fecha la señora ENA LUZ y su esposo se vieron obligados a desplazarse dejando cultivos y animales abandonados.	
Imputación jurídica	
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo presentó ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel"), en calidad de coautor, por el punible de **deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil**, artículo 159 del Código Penal.	
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física	
1. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley No. 446080 del 30 de noviembre del 2011, en el cual la señora ENA LUZ CORRALES FALCO dejó registradas las circunstancias en que aconteció el hecho victimizante. 2. Copia de la cédula de ciudadanía de ENA LUZ CORRALES FALCO. 3. Certificación expedida por el Defensor del Pueblo de Sucre, de fecha 7 de noviembre de 2003, en la que se hace constar que ENA LUZ CORRALES FALCO y su compañero permanente son desplazados por la violencia de la vereda Arroyo Arena del corregimiento de La Peñata. 4. Formato denominado "*referencia de hecho en versión*", de fecha 8 de mayo de 2019, en el cual se consigna *"SE IMPUTA POR PERTENENCIA AL GRUPO Y POR LÍNEA DE TIEMPO, ZONA DE INJERENCIA DEL POSTULADO (CORREGIMIENTO CERRITO LA PALMA A 5 MINUTOS*	

[121] Sesión de audiencia del 30 de junio del 2021, Audio 08001225200320200000100_20210630_02 rec. 57:50.

SINCELEJO- OPERO DESDE FEBRERO DE 2003 AL 29 OCTUBRE DE 2004)" aceptado por el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO.
Análisis de la Sala.
Este cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como quedó expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía, de la descripción del hecho y de los elementos de convicción que allegó, que permiten dar por demostrada la materialidad del delito imputado; así mismo, se encuentra acreditada la responsabilidad de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO**, teniendo en cuenta que, para la época de ocurrencia del hecho, tal y como quedó registrado en el acápite *"1.6. Permanencia del postulado en el Bloque Héroes de los Montes de María"*, este postulado perteneció a dicho Bloque bajo la comandancia general de EDWAR COBOS TÉLLEZ alias "Diego Vecino" y como comandante militar RODRIGO MERCADO PELUFFO alias "Cadena", en donde desempeñó los roles de radio chispa y patrullero tal y como lo ha dejado reseñado la Fiscalía General de la Nación. Además, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley AUC, motivado por el control social, territorial y de recursos que ejerció el postulado en sus zonas de injerencia, así como por la lucha antisubversiva. Así mismo, el punible fue cometido bajo la práctica de presencia armada, temor e inseguridad y mediante amenazas.

Cargo No. 33[122]

Víctima	ANA SOFÍA ROMERO CUELLO
Postulado	**LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel").
Fecha y lugar de los hechos.	6 de noviembre de 2003, vereda Arroyo Arena, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre).
Política: control territorial y social. **Práctica:** presencia armada, temor e inseguridad. **Modus operandi:** amenazas.	
Imputación Fáctica.	
La señora ANA SOFÍA ROMERO CUELLO vivía con sus dos hijos, su madre un hermano y un sobrino, en la vereda Arroyo Arena, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre). Registra el diligenciamiento, que el día 6 de noviembre de 2003, llegaron hasta ese lugar un grupo hombres de las autodefensas que asesinaron dos	

[122] Sesión de audiencia del 30 de junio del 2021, Audio 08001225200320200000100_20210630_02 rec. 1:00:40.
.

vecinos y manifestaron que les daban 24 horas para desocupar la vereda o de lo contrario acabarían con sus vidas, por lo que la reportante y su núcleo familiar salieron desplazados dejando abandonado 71 gallinas, 8 pavos, 25 patos, 8 marranos, media hectárea de ajonjolí, 300 matas de yuca y 3.000 matas de ñame, atribuyeron estos hechos a integrantes de las autodefensas.
Imputación jurídica
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo presentó ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel"), en calidad de coautor, por el punible de **deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil**, artículo 159 del Código Penal.
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física
1. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley No. 446108 del 7 de diciembre del 2011 presentado por ANA SOFÍA ROMERO CUELLO, en el cual quedaron expuestas las circunstancias en que aconteció el hecho victimizante. 2. Copia de la cedula de ciudadanía de ANA SOFÍA ROMERO CUELLO, INDULFO BAUTISTA YENERY, FABIAN CARRASCAL ARRIETA; copia de contraseña de la cédula de ciudadanía de JUAN CARLOS ROMERO y copia de la tarjeta de identidad de JULIET ANDREA ROMERO CUELLO. 3. Certificación expedida por el Defensor del Pueblo de Sucre, de fecha 7 de noviembre de 2003, en la que se hace constar que ANA SOFÍA ROMERO CUELLO y su núcleo familiar son desplazados por la violencia de la vereda Arroyo Arena del corregimiento de La Peñata. 4. Formato denominado "*referencia de hecho en versión*", de fecha 8 de mayo de 2019, en el cual se consigna *"SE IMPUTA POR PERTENENCIA AL GRUPO Y POR LÍNEA DE TIEMPO, ZONA DE INJERENCIA DEL POSTULADO (CORREGIMIENTO CERRITO LA PALMA A 5 MINUTOS SINCELEJO- OPERO DESDE FEBRERO DE 2003 AL 29 OCTUBRE DE 2004)"* hecho aceptado por el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO.
Análisis de la Sala.
Este cargo ***se legaliza*** teniendo en cuenta lo expuesto por la Fiscalía General de la Nación, tanto en imputaciones fáctica y jurídica e igualmente, ante esta Sala de Conocimiento, efectivamente revisado el diligenciamiento y la imputación hecha por el ente investigador en donde manifiesta que lo hace por la pertenencia del postulado al grupo armado ilegal por la línea de tiempo, la zona de injerencia de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía, de la descripción del postulado, de todo ello no queda duda que el postulado **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** militó en las otrora Autodefensas Unidas de Colombia en el Bloque Héroes de los Montes de María, postulado que perteneciendo a este grupo armado ilegal estuvo bajo la comandancia general de EDWAR COBOS TÉLLEZ alias "Diego Vecino" y como comandante militar RODRIGO MERCADO PELUFFO alias "Cadena", igualmente, registra el diligenciamiento que el

postulado desempeñó los roles de radio chispa y patrullero en sus zonas de injerencia. Igualmente, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley Autodefensas Unidas de Colombia en mención, motivado por el control social, territorial y de recursos que ejerció el postulado en sus zonas de injerencia, así como por la lucha antisubversiva. Así mismo, el punible fue cometido bajo la práctica de presencia armada, temor e inseguridad y mediante amenazas.

Cargo No. 34[123]

Víctima	PEDRO ANTONIO RAMÍREZ FUENTES
Postulado	**LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel").
Fecha y lugar de los hechos.	6 de noviembre de 2003, vereda Arroyo Arena, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre).
Política: control territorial y social. **Práctica:** presencia armada, temor e inseguridad. **Modus operandi:** amenazas.	
Imputación Fáctica.	
El señor PEDRO ANTONIO RAMÍREZ FUENTES vivía vereda Arroyo Arena, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre), lugar donde el día 6 de noviembre de 2003, llegaron los paramilitares y asesinaron a unas personas y le dieron al resto de los residentes de zona 24 horas para abandonar sus casas, por lo que tomaron lo que pudieron de sus pertenencias y estos salieron desplazados, al salir de la población indica el reportante que tuvo que dejar abandonadas 3 vacas, cultivo de yuca y maíz y distintas aves de corral.	
Imputación jurídica	
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo presentó ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel"), en calidad de coautor, por el punible de **deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil**, artículo 159 del Código Penal.	
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física	
1. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley No. 448601 del 2 de diciembre del 2011 presentado por PEDRO ANTONIO RAMÍREZ FUENTES, en el cual quedaron expuestas las circunstancias en que aconteció el hecho victimizante.	

[123] Sesión de audiencia del 30 de junio del 2021, Audio 08001225200320200000100_20210630_02 rec. 1:04:09.
.

2. Copia de la cedula de ciudadanía de PEDRO ANTONIO RAMÍREZ FUENTES y SENÉN ANTONIO RAMÍREZ FUENTES. 3. Copia de registro de hierro quemador dado por el señor alcalde del municipio de Toluviejo el día 28 de junio de 2011 al señor PEDRO ANTONIO RAMÍREZ FUENTES. 4. Certificación expedida por el Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba – Sucre, Cabildo Menor de la Peñata Sección municipio de Sincelejo, en la que certifican que PEDRO ANTONIO RAMÍREZ FUENTES es indígena y hace parte de ese resguardo y que es desplazado por la violencia el día 30 de noviembre de 2004, con su padre ya fallecido y un hermano. 5. Formato denominado "*referencia de hecho en versión*", de fecha 8 de mayo de 2019, en el cual se consigna *"SE IMPUTA POR PERTENENCIA AL GRUPO Y POR LÍNEA DE TIEMPO, ZONA DE INJERENCIA DEL POSTULADO (CORREGIMIENTO CERRITO LA PALMA A 5 MINUTOS SINCELEJO- OPERO DESDE FEBRERO DE 2003 AL 29 OCTUBRE DE 2004)"* aceptado por el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO.
Análisis de la Sala.
El cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía, de la descripción del hecho y de los elementos de convicción allegados, que permiten dar por demostrada la materialidad del delito imputado; así mismo, se encuentra acreditada la responsabilidad de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO**, teniendo en cuenta que, para la época de ocurrencia del hecho, tal y como quedó registrado en el acápite *"1.6. Permanencia del postulado en el Bloque Héroes de los Montes de María"*, este postulado perteneció a dicho Bloque bajo la comandancia general de EDWAR COBOS TÉLLEZ alias "Diego Vecino" y como comandante militar RODRIGO MERCADO PELUFFO alias "Cadena", en donde desempeñó los roles de radio chispa y patrullero tal y como viene reseñado por la Fiscalía General de la Nación. Además, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley AUC, motivado por el control social, territorial y de recursos que ejerció el postulado en sus zonas de injerencia, así como por la lucha antisubversiva. Así mismo, el punible fue cometido bajo la práctica de presencia armada, temor e inseguridad y mediante amenazas.

Cargo No. 35[124]

Víctima	JAIRO MIGUEL SEVILLA RAMÍREZ

[124] Sesión de audiencia del 30 de junio del 2021, Audio 08001225200320200000100_20210630_02 rec. 1:07:30.
.

Postulado	**LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel").
Fecha y lugar de los hechos.	7 de noviembre de 2003, vereda Arroyo Arena, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre).

Política: control territorial y social.

Práctica: presencia armada, temor e inseguridad.

Modus operandi: amenazas.

Imputación Fáctica.

El señor JAIRO MIGUEL SEVILLA RAMÍREZ vivía con su compañera permanente y sus dos hijos, en la vereda Arroyo Arena, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre).

El día 6 de noviembre de 2003, llegaron hasta ese lugar un grupo hombres de las autodefensas que asesinaron dos vecinos y manifestaron que les daban 24 horas para desocupar la vereda o de lo contrario acabarían con sus vidas, por lo que el reportante y su núcleo familiar salieron desplazados dejando abandonado 40 gallinas, 3 vacas, 3 cerdos, enceres de la casa y una hectárea de tierra cultivada, atribuyeron estos hechos a integrantes de las autodefensas.

Imputación jurídica

La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo presentó ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel"), en calidad de coautor, por el punible de **deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil**, artículo 159 del Código Penal.

Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física

1. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley No. 427422 del 30 de noviembre del 2011 presentado por JAIRO MIGUEL SEVILLA RAMÍREZ, en el cual quedaron expuestas las circunstancias en que aconteció el hecho victimizante.
2. Copia de la cedula de ciudadanía de JAIRO MIGUEL SEVILLA RAMÍREZ.
3. Certificación expedida por el Defensor del Pueblo de Sucre, de fecha 7 de noviembre de 2003, en la que se hace constar que YARLEIDA ATENCIA BARRIO y su núcleo familiar son desplazados por la violencia de la vereda Arroyo Arena del corregimiento de La Peñata.
4. Certificación expedida por el Defensor del Pueblo de Sucre, de fecha 7 de noviembre de 2003, en la que se hace constar que JAIRO MIGUEL SEVILLA RAMÍREZ es desplazados por la violencia de la vereda Arroyo Arena del corregimiento de La Peñata.
5. Formato denominado "*referencia de hecho en versión*", de fecha 8 de mayo de 2019, en el cual se consigna *"SE IMPUTA POR PERTENENCIA AL GRUPO Y POR LÍNEA DE TIEMPO, ZONA DE INJERENCIA DEL POSTULADO (CORREGIMIENTO CERRITO LA PALMA A 5 MINUTOS*

SINCELEJO- OPERO DESDE FEBRERO DE 2003 AL 29 OCTUBRE DE 2004)" aceptado por el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO.
Análisis de la Sala.
Este cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía, de la descripción del hecho, de los elementos de convicción allegados, que permiten dar por demostrada la materialidad del delito imputado; así mismo, se encuentra acreditada la responsabilidad de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO**, teniendo en cuenta que, para la época de ocurrencia del hecho, tal y como quedó registrado en el acápite *"1.6. Permanencia del postulado en el Bloque Héroes de los Montes de María"*, este postulado militó en dicho Bloque bajo la comandancia general de EDWAR COBOS TÉLLEZ alias "Diego Vecino" y como comandante militar RODRIGO MERCADO PELUFFO alias "Cadena", en donde desempeñó los roles de radio chispa y patrullero tal y como lo ha dejado reseñado la Fiscalía General de la Nación. Además, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley AUC, motivado por el control social, territorial y de recursos que ejerció el postulado en sus zonas de injerencia, así como por la lucha antisubversiva. Así mismo, el punible fue cometido bajo la práctica de presencia armada, temor e inseguridad y mediante amenazas.

Cargo No. 36[125]

Víctima	FRANCISCO GERMAN CARRASCAL ROMERO
Postulado	**LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel").
Fecha y lugar de los hechos.	6 de noviembre de 2003, vereda Arroyo Arena, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre).
Política: control territorial y social. **Práctica:** presencia armada, temor e inseguridad. **Modus operandi:** amenazas.	
Imputación Fáctica.	
El día 6 de noviembre del año 2003, se presentaron a la finca La Isla ubicada en la vereda Arroyo Arena del corregimiento de La Peñata jurisdicción del municipio de Sincelejo, Sucre, hombres armados los cuales amenazaron al señor FRANCISCO GERMAN CARRASCAL ROMERO, diciéndole que si no desalojaba en 24 horas su vivienda, ellos regresaban y los asesinaban, fue entonces cuando por miedo y con mucho dolor decidió	

[125] Sesión de audiencia del 30 de junio del 2021, Audio 08001225200320200000100_20210630_02 rec. 1:10:33.
.

irse a Sincelejo a buscar hospedaje donde una hija y como consecuencia abandonó en la finca 11 gallinas y 1 hectárea de cultivo de ñame y yuca, luego el 18 de enero del 2005 regresó a la finca arriesgándose a ser asesinado.
Imputación jurídica
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo presentó ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel"), en calidad de coautor, por el punible de **deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil**, artículo 159 del Código Penal.
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física
1. Formato denominado "*referencia de hecho en versión*", de fecha 8 de mayo de 2019, en el cual se consigna *"SE IMPUTA POR PERTENENCIA AL GRUPO Y POR LÍNEA DE TIEMPO, ZONA DE INJERENCIA DEL POSTULADO (CORREGIMIENTO CERRITO LA PALMA A 5 MINUTOS SINCELEJO- OPERO DESDE FEBRERO DE 2003 AL 29 OCTUBRE DE 2004)"* aceptado por el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO. 2. Formato de entrevista rendida por JAVIER ANTONIO CARRASCAL ARRIETA de fecha 24 de julio de 2021, ante el Técnico Investigador IV PEDRO FRANCISCO PATERNINA CHÁVEZ. 3. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley No. 427763 de fecha 2 de diciembre de 2011, en el cual la víctima FRANCISCO GERMAN CARRASCAL ROMERO dejó consignadas las circunstancias que rodearon el hecho victimizante. 4. Informes de investigador de campo de fechas 9 de julio de 2021 y 8 de febrero de 2021, en los que se documenta el hecho de desplazamiento forzado donde resultó víctima FRANCISCO GERMAN CARRASCAL ROMERO.
Análisis de la Sala.
El cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como quedó expuesto en las circunstancias fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía, de la descripción del hecho y de los elementos de convicción allegados, que permiten dar por demostrada la materialidad del delito imputado; así mismo, se encuentra acreditada la responsabilidad de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO**, teniendo en cuenta que, para la época de ocurrencia del hecho, tal y como quedó registrado en el acápite *"1.6. Permanencia del postulado en el Bloque Héroes de los Montes de María"*, este postulado perteneció a dicho Bloque bajo la comandancia general de EDWAR COBOS TÉLLEZ alias "Diego Vecino" y como comandante militar RODRIGO MERCADO PELUFFO alias "Cadena", en donde desempeñó los roles de radio chispa y patrullero tal y como lo ha dejado reseñado la Fiscalía General de la Nación. Además, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado, perpetrado en cumplimiento de las políticas

emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley AUC, motivado por el control social, territorial y de recursos que ejerció el postulado en sus zonas de injerencia, así como por la lucha antisubversiva. Así mismo, el punible fue cometido bajo la práctica de presencia armada, temor e inseguridad y mediante amenazas.

Cargo No. 37[126]

Víctima	JESÚS MARÍA SOLAR FUENTES
Postulado	**LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel").
Fecha y lugar de los hechos.	7 de noviembre de 2003, vereda Arroyo Arena, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre).
Política: control territorial y social. **Práctica:** presencia armada, temor e inseguridad. **Modus operandi:** amenazas.	
Imputación Fáctica.	
Reporta el señor JESÚS MARÍA SOLAR FUENTES, que vivía con su familia en la vereda Arroyo Arena, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre), cuando el día 7 de noviembre del año 2003, se vio obligado a salir desplazado forzadamente con toda familia para la ciudad de Sincelejo debido a la incursión y asesinatos perpetrados por paramilitares en la vereda donde residía, además, estos paramilitares habían dado 24 horas de plazo para salir de la región aduciendo que todos los habitan allí eran colaboradores de la guerrilla, el reportante manifiesta que abandonó una casa construida en bareque y una casa pequeña de material, media hectárea cultivada, una hectárea de maíz con yuca y plátano, 4 cerdos, 35 gallinas, 5 pavos, finalmente, agrega, que regresó al año cuando se había calmado la situación del orden público y que ese retorno lo fue con acompañamiento de acción social.	
Imputación jurídica	
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo presentó ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel"), en calidad de coautor, por el punible de **deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil**, artículo 159 del Código Penal.	
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física	
1. Certificación signada por DENIS ROMERO Capitana Encargada del Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento Córdoba – Sucre, Cabildo Menor de la Peñata Sección Municipio Sincelejo, en la que hace constar que JESÚS MARÍA SOLAR FUENTES es indígena, vive y que hace parte de ese resguardo y que además es desplazada por la violencia con su núcleo familiar el 7 de noviembre de 2003.	

[126] Sesión de audiencia del 30 de junio del 2021, Audio 08001225200320200000100_20210630_02 rec. 1:13:30.

.

2. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley No. 428094 del 14 de diciembre del 2011 presentado por JESÚS MARÍA SOLAR FUENTES, en el cual quedaron expuestas las circunstancias en que aconteció el hecho victimizante. 5. Formato denominado "*referencia de hecho en versión*", de fecha 8 de mayo de 2019, en el cual se consigna *"SE IMPUTA POR PERTENENCIA AL GRUPO Y POR LÍNEA DE TIEMPO, ZONA DE INJERENCIA DEL POSTULADO (CORREGIMIENTO CERRITO LA PALMA A 5 MINUTOS SINCELEJO- OPERO DESDE FEBRERO DE 2003 AL 29 OCTUBRE DE 2004)"* el hecho fue aceptado por el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO.
Análisis de la Sala.
Este cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía, al describir el hecho y los elementos de convicción allegados, que permiten dar por demostrada la materialidad del delito imputado; así mismo, la responsabilidad acreditada de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO**, teniendo en cuenta que, para la época de ocurrencia del hecho, efectivamente el postulado ESQUIVEL CASTILLO hacía parte del denominado Bloque Héroes de os Montes de María, en donde militó bajo la comandancia general de EDWAR COBOS TÉLLEZ alias "Diego Vecino" y la comandancia militar RODRIGO MERCADO PELUFFO alias "Cadena", en donde desempeñó los roles de radio chispa y patrullero tal y como lo ha dejado reseñado la Fiscalía General de la Nación, igualmente, observamos que el referido hecho fue aceptado por el postulado y este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley Autodefensas Unidas de Colombia, motivado por el control social, territorial y de recursos que ejerció el postulado en sus zonas de injerencia, así como por la lucha antisubversiva. Así mismo, el punible fue cometido bajo la práctica de presencia armada, temor e inseguridad y mediante amenazas.

Cargo No. 38[127]

Víctima	MARCO FIDEL ÁLVAREZ COBO
Postulado	**LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel").
Fecha y lugar de los hechos.	7 de noviembre de 2003, vereda Arroyo Arena, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre).
Política: control territorial y social. **Práctica:** presencia armada, temor e inseguridad.	

[127] Sesión de audiencia del 30 de junio del 2021, Audio 08001225200320200000100_20210630_02 rec. 1:17:20.
.

Modus operandi: amenazas.
Imputación Fáctica.
El día 7 de noviembre de 2003, a la vereda Arroyo Arena, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre), llegaron hasta ese lugar paramilitares y mataron a cinco personas quienes eran piscicultores, por miedo y amenazas de los perpetradores MARCO FIDEL ÁLVAREZ COBO salió desplazado con su familia habiendo observando lo que les pasó a sus compañeros, dejando abandonado dos vacas, 5 marranos, 30 gallinas y una hectárea de rosa cultivada.
Imputación jurídica
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo presentó ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel"), en calidad de coautor, por el punible de **deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil**, artículo 159 del Código Penal.
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física
1. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley No. 448598 del 2 de diciembre del 2011 presentado por MARCO FIDEL ÁLVAREZ COBO, en el cual quedaron expuestas las circunstancias en que aconteció el hecho victimizante. 2. Copia de la cédula de ciudadanía de MARCO FIDEL ÁLVAREZ COBO. 3. Comunicación mediante la cual la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz le informa al señor MARCO FIDEL ÁLVAREZ COBO que reúne las condiciones para acreditarse sumariamente en calidad de víctima. 4. Resolución No. 70001-0193 del 18 de abril de 2006, en la que el Asesor con Funciones de Coordinador de la Unidad Territorial de Sucre de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, en el uso de sus facultades revoca la Resolución No. 70001-0145 del 4 de diciembre de 2003, y ordena inscribir a MARCO FIDEL ÁLVAREZ COBO y a los miembros de su hogar en el Registro Único de Población Desplazada. 5. Formato de ficha Socioeconómica de la Dirección Nacional de la Defensoría del Pueblo realizado a MARCO FIDEL ÁLVAREZ COBO. 6. Formato denominado "*referencia de hecho en versión*", de fecha 8 de mayo de 2019, en el cual se consigna *"SE IMPUTA POR PERTENENCIA AL GRUPO Y POR LÍNEA DE TIEMPO, ZONA DE INJERENCIA DEL POSTULADO (CORREGIMIENTO CERRITO LA PALMA A 5 MINUTOS SINCELEJO- OPERO DESDE FEBRERO DE 2003 AL 29 OCTUBRE DE 2004)"* hecho aceptado por el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO.
Análisis de la Sala.
Este cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía General de la Nación, de la descripción del hecho

y de los elementos de convicción allegados, que permiten dar por demostrada la materialidad del delito imputado; así mismo, se encuentra acreditada la responsabilidad de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO**, teniendo en cuenta que, para la época de ocurrencia del hecho, tal y como quedó registrado en el acápite *"1.6. Permanencia del postulado en el Bloque Héroes de los Montes de María"*, este postulado perteneció a dicho Bloque bajo la comandancia general de EDWAR COBOS TÉLLEZ alias "Diego Vecino" y como comandante militar RODRIGO MERCADO PELUFFO alias "Cadena", en donde desempeñó los roles de radio chispa y patrullero tal y como lo ha dejado reseñado la Fiscalía General de la Nación. Además, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley AUC, motivado por el control social, territorial y de recursos que ejerció el postulado en sus zonas de injerencia, así como por la lucha antisubversiva. Así mismo, el punible fue cometido bajo la práctica de presencia armada, temor e inseguridad y mediante amenazas.

Cargo No. 39[128]

Víctima	DANIEL DE JESÚS TOSCANO FUENTES
Postulado	**LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel").
Fecha y lugar de los hechos.	7 de noviembre de 2003, vereda Arroyo Arena, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre).
Política: control territorial y social. **Práctica:** presencia armada, temor e inseguridad. **Modus operandi:** amenazas.	
Imputación Fáctica.	
Indica en su reporte el señor DANIEL DE JESÚS TOSCANO FUENTES, que para el 7 de noviembre de 2003, vivía en el corregimiento La Peñata, del municipio de Sincelejo, Sucre, que el día anterior 6 de noviembre de ese mismo año, llegaron los paramilitares y amenazaron a los residentes de la vereda diciéndoles que tenían 24 horas para abandonar sus casas, por lo que salió con su familia dejando abandonado 25 animales de corral, gallinas, patos y pavos, 2 reses paridas y dos hectáreas de tierras cultivadas que no pudieron recoger.	
Imputación jurídica	
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo presentó ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel"), en calidad de coautor, por el	

[128] Sesión de audiencia del 30 de junio del 2021, Audio 08001225200320200000100_20210630_02 rec. 1:19:40.
.

punible de **deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil**, artículo 159 del Código Penal.
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física
1. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley No. 448534 del 2 de diciembre del 2011 presentado por DANIEL DE JESÚS TOSCANO FUENTES, en el cual quedaron expuestas las circunstancias en que aconteció el hecho victimizante. 2. Copia de la cedula de ciudadanía de DANIEL DE JESÚS TOSCANO FUENTES 3. Certificación expedida por la Defensoría del Pueblo Seccional Sucre, en la cual se registró que DANIEL DE JESÚS TOSCANO FUENTES y su grupo familiar son desplazados en el marco de la violencia sociopolítica de la vereda La Peñata jurisdicción de Sincelejo, Sucre. 4. Formato Único de Noticia Criminal FPJ-2 del primero de diciembre 2011, presentada por DANIEL DE JESÚS TOSCANO FUENTES, en donde registró la manera en que él junto con su grupo familiar padecieron amenazas e intimidaciones por parte de integrantes de las autodefensas forzándolos a desplazarse, lo que conllevo a que tuvieran que dejar abandonados sus bienes. 5. Copia de las cédulas de ciudadanías de CARMEN CECILIA TOSCANO RÍOS y DANIEL DE JESÚS TOSCANO TOSCANO. 6. Registro de hierro quemador de fecha 10 de abril de 1985 emitido por el municipio de Toluviejo, Sucre, al señor DANIEL DE JESÚS TOSCANO FUENTES. 7. Formato denominado "*referencia de hecho en versión*", de fecha 8 de mayo de 2019, en el cual se consigna *"SE IMPUTA POR PERTENENCIA AL GRUPO Y POR LÍNEA DE TIEMPO, ZONA DE INJERENCIA DEL POSTULADO (CORREGIMIENTO CERRITO LA PALMA A 5 MINUTOS SINCELEJO- OPERO DESDE FEBRERO DE 2003 AL 29 OCTUBRE DE 2004)"* hecho aceptado por el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO.
Análisis de la Sala.
Este cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía, de la descripción del hecho y de los elementos de convicción allegados, que permiten dar por demostrada la materialidad del delito imputado; así mismo, se encuentra acreditada la responsabilidad de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO**, ya que además de la aceptación que de la comisión del hecho este hizo, igualmente, el diligenciamiento permite constatar que el postulado efectivamente perteneció al Bloque Monte de María bajo la comandancia general de EDWAR COBOS TÉLLEZ alias "Diego Vecino" y como comandante militar RODRIGO MERCADO PELUFFO alias "Cadena", en el tiempo de militancia y en la zona de injerencia que coinciden con la comisión del punible que lo fue cometido el día 7 de noviembre de 2003, en la vereda

Arroyo Arena, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre), y que la militancia del grupo armado ilegal Autodefensas Unidas de Colombia, conforme lo registra la Fiscalía en la zona aludida operó desde febrero de 2003 al 29 de octubre de 2004. Además, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley AUC, motivado por el control social, territorial y de recursos que ejerció el postulado en sus zonas de injerencia, así como por la lucha antisubversiva. Así mismo, el punible fue cometido bajo la práctica de presencia armada, temor e inseguridad y mediante amenazas.

Cargo No. 40[129]

Víctima	RAFAEL TOSCANO TOSCANO
Postulado	**LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel").
Fecha y lugar de los hechos.	6 de noviembre de 2003, vereda Arroyo Arena, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre).
Política: control territorial y social. **Práctica:** presencia armada, temor e inseguridad. **Modus operandi:** amenazas.	
Imputación Fáctica.	
El 6 de noviembre de 2003, a la vereda Arroyo Arena del corregimiento La Peñata perteneciente al municipio Sincelejo, Sucre, ingresaron paramilitares a las viviendas de sus pobladores y les dijeron que tenían que salir de la región, razón por la cual el señor RAFAEL TOSCANO TOSCANO se vio obligado a salir desplazado con su familia, dejando abandonado todos sus animales, marranos, patos, gallinas, un burro, perdió todo, relaciona la víctima en su reporte que lo único que no se llevaron fueron las casas.	
Imputación jurídica	
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo presentó ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel"), en calidad de coautor, por el punible de **deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil**, artículo 159 del Código Penal.	
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física	
1. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley No. 445880 del 30 de noviembre del 2011 presentado por RAFAEL TOSCANO TOSCANO, en el cual quedaron expuestas las circunstancias en que aconteció el hecho victimizante.	

[129] Sesión de audiencia del 30 de junio del 2021, Audio 08001225200320200000100_20210630_02 rec. 1:22:45.
.

2. Copia de la cedula de ciudadanía de RAFAEL TOSCANO TOSCANO. 3. Certificación expedida por la Defensoría del Pueblo Seccional Sucre, en la cual se registró que RAFAEL TOSCANO TOSCANO y su grupo familiar son desplazados en el marco de la violencia sociopolítica de la vereda La Peñata jurisdicción de Sincelejo, Sucre. 4. Formato denominado "*referencia de hecho en versión*", de fecha 8 de mayo de 2019, en el cual se consigna *"SE IMPUTA POR PERTENENCIA AL GRUPO Y POR LÍNEA DE TIEMPO, ZONA DE INJERENCIA DEL POSTULADO (CORREGIMIENTO CERRITO LA PALMA A 5 MINUTOS SINCELEJO- OPERO DESDE FEBRERO DE 2003 AL 29 OCTUBRE DE 2004)"* aceptado este cargo por el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO.
Análisis de la Sala.
Este cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica ante esta Sala de Conocimiento, de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía General de la Nación, de la descripción del hecho y de los elementos de convicción allegados, que permiten tener por demostrada la materialidad del delito imputado; así mismo, se encuentra acreditada la responsabilidad de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO**, teniendo en cuenta que, para la época de ocurrencia del hecho, tal y como quedó registrado en el acápite *"1.6. Permanencia del postulado en el Bloque Héroes de los Montes de María"*, este postulado perteneció a dicho Bloque bajo la comandancia general de EDWAR COBOS TÉLLEZ alias "Diego Vecino" y como comandante militar RODRIGO MERCADO PELUFFO alias "Cadena", en donde desempeñó los roles de radio chispa y patrullero tal y como lo ha dejado reseñado la Fiscalía General de la Nación. Además, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley AUC, motivado por el control social, territorial y de recursos que ejerció el postulado en sus zonas de injerencia, así como por la lucha antisubversiva. Así mismo, el punible fue cometido bajo la práctica de presencia armada, temor e inseguridad y mediante amenazas.

Cargo No. 41[130]

Víctima	ARNEL MANUEL FLÓREZ BADEL
Postulado	**LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel").
Fecha y lugar de los hechos.	7 de noviembre de 2003, vereda Arroyo Arena, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre).

[130] Sesión de audiencia del 30 de junio del 2021, Audio 08001225200320200000100_20210630_02 rec. 1:25:40.
.

Política: control territorial y social. **Práctica:** presencia armada, temor e inseguridad. **Modus operandi:** amenazas.
Imputación Fáctica.
Relata el señor ARNEL MANUEL FLÓREZ BADEL, que los paramilitares llegaron el día 7 de noviembre de 2003, a la vereda Arroyo Arena, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre), y los obligaron a salir desplazamos de la población hacia el colegio en el casco urbano del corregimiento de La Peñata, que por motivos de ese desplazamiento dejó abandonado una vaca, 30 gallinas, 2 cerdos, media hectárea de tierra cultivada de yuca, ñame, maíz y un cultivo de 2.000 peces.
Imputación jurídica
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo presentó ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel"), en calidad de coautor, por el punible de **deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil**, artículo 159 del Código Penal.
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física
1. Informe de investigador de campo FPJ-11- de fecha 26 de septiembre de 2016, con el objetivo de documentar el desplazamiento forzado padecido por ARNEL MANUEL FLÓREZ BADEL. 2. Formato de órdenes a policía judicial de fecha 5 de mayo de 2016, impartido al Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI, con el objetivo de documentar el desplazamiento forzado padecido por ARNEL MANUEL FLÓREZ BADEL. 3. Denuncia instaura por ARNEL MANUEL FLÓREZ BADEL ante la Fiscalía 12 Delegada de la Unidad Nacional Especializada de Justicia Transicional el día 22 de septiembre de 2016, en la cual quedaron expuestas las circunstancias en que aconteció el hecho victimizante. 4. Formato denominado "*referencia de hecho en versión*", de fecha 8 de mayo de 2019, en el cual se consigna *"SE IMPUTA POR PERTENENCIA AL GRUPO Y POR LÍNEA DE TIEMPO, ZONA DE INJERENCIA DEL POSTULADO (CORREGIMIENTO CERRITO LA PALMA A 5 MINUTOS SINCELEJO- OPERO DESDE FEBRERO DE 2003 AL 29 OCTUBRE DE 2004)"* hecho aceptado por el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO.
Análisis de la Sala.
Este cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía, de la descripción del hecho y de los elementos de convicción allegados, que permiten dar por demostrada la materialidad del delito imputado; así mismo, se encuentra acreditada la responsabilidad de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO**, teniendo en cuenta que, para la época de ocurrencia del hecho, tal y como quedó registrado en el acápite *"1.6. Permanencia del postulado en el Bloque Héroes de los Montes de*

María", este postulado perteneció a dicho Bloque bajo la comandancia general de EDWAR COBOS TÉLLEZ alias "Diego Vecino" y como comandante militar RODRIGO MERCADO PELUFFO alias "Cadena", en donde desempeñó los roles de radio chispa y patrullero tal y como lo ha dejado reseñado la Fiscalía General de la Nación. Además, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley AUC, motivado por el control social, territorial y de recursos que ejerció el postulado en sus zonas de injerencia, así como por la lucha antisubversiva. Así mismo, el punible fue cometido bajo la práctica de presencia armada, temor e inseguridad y mediante amenazas.

Cargo No. 42[131]

Víctima	LUZ MILA BELLO CAMPO
Postulado	**LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel").
Fecha y lugar de los hechos.	7 de noviembre de 2003, vereda Arroyo Arena, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre).
Política: control territorial y social. **Práctica:** presencia armada, temor e inseguridad. **Modus operandi:** amenazas.	
Imputación Fáctica.	
Reporta la señora LUZ MILA BELLO CAMPO, que el día 6 de noviembre de 2003, a la vereda Arroyo Arena del corregimiento La Peñata, de Sincelejo, Sucre, llegaron unos paramilitares en horas de la noche quienes amenazaron la población manifestándoles que les daban 24 horas para desocupar esa vereda, por lo que el día siguiente 7 de noviembre de 2003, la reportante tomó a su hijo y salió desplazada dejando todo lo que tenía perdió por ello 12 gallinas, 4 pavos y 2 cerdos.	
Imputación jurídica	
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo presentó ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel"), en calidad de coautor, por el punible de **deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil**, artículo 159 del Código Penal.	
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física	
1. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley No. 427395 del 30 de noviembre del 2011 presentado por LUZ MILA	

[131] Sesión de audiencia del 30 de junio del 2021, Audio 08001225200320200000100_20210630_02 rec. 1:28:39.
.

BELLO CAMPO, en el cual quedaron expuestas las circunstancias en que aconteció el hecho victimizante.
2. Copia de la cedula de ciudadanía de LUZ MILA BELLO CAMPO y EVER EDUARDO MÉNDEZ PATERNINA; copia de la tarjeta de identidad de: ESTEBAN DAVID MÉNDEZ BELLO.
3. Certificación expedida por la Defensoría del Pueblo Seccional Sucre, en la cual se registró que LUZ MILA BELLO CAMPO y su grupo familiar son desplazados en el marco de la violencia sociopolítica de la vereda La Peñata jurisdicción de Sincelejo, Sucre.
4. Formato de ficha Socioeconómica de la Dirección Nacional de la Defensoría del Pueblo realizado a LUZ MILA BELLO CAMPO.
5. Formato denominado "*referencia de hecho en versión*", de fecha 8 de mayo de 2019, en el cual se consigna *"SE IMPUTA POR PERTENENCIA AL GRUPO Y POR LÍNEA DE TIEMPO, ZONA DE INJERENCIA DEL POSTULADO (CORREGIMIENTO CERRITO LA PALMA A 5 MINUTOS SINCELEJO- OPERO DESDE FEBRERO DE 2003 AL 29 OCTUBRE DE 2004)"* el hecho fue aceptado por el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO.

Análisis de la Sala.

El cargo ***se legaliza*** teniendo en cuenta la forma y términos como lo expuso la Fiscalía General de la Nación, las imputaciones fáctica y jurídica, la sustentación hecha por dicho organismo investigador ante esta Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, donde se describió el hecho y de los elementos de convicción allegados, todo ello permite comprobar la materialidad del delito imputado y la responsabilidad que le cabe en el mismo a **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO**, se tiene en cuenta que, además, de la aceptación que hizo dicho postulado, efectivamente, para la época de la ocurrencia del hecho, esto es, en el año 2003 mes de noviembre el postulado ESQUIVEL CASTILLO hacía parte como militante de las otrora Autodefensas Unidas de Colombia, bajo la comandancia general de EDWAR COBOS TÉLLEZ alias "Diego Vecino" y como comandante militar RODRIGO MERCADO PELUFFO alias "Cadena", en donde desempeñó los roles de radio chispa y patrullero tal y como lo ha dejado reseñado la Fiscalía General de la Nación.

Además, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley AUC, motivado por el control social, territorial y de recursos que ejerció el postulado en sus zonas de injerencia, tal como lo hemos reseñado, así como por la lucha antisubversiva. Así mismo, el punible fue cometido bajo la práctica de presencia armada, temor e inseguridad y mediante amenazas.

Cargo No. 43[132]

[132] Sesión de audiencia del 30 de junio del 2021, Audio 08001225200320200000100_20210630_02 rec. 1:31:40.
.

Víctima	ELIECER BERTEL RÍOS
Postulado	**LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel").
Fecha y lugar de los hechos.	7 de noviembre de 2003, vereda Arroyo Arena, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre).
Política: control territorial y social. **Práctica:** presencia armada, temor e inseguridad. **Modus operandi:** amenazas.	
Imputación Fáctica.	
ELIECER BERTEL RÍOS narra que el 7 de noviembre de 2003, en la vereda Arroyo Arena, corregimiento de la Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, (Sucre), llegaron unos paramilitares e hicieron desocupar a la población, que ese día mataron dos señores en la vereda Primavera, que como consecuencia a estos hechos se vio obligado a desplazarse junto con su familia y por este abandono de su vivienda perdió una hectárea de tierra cultivada de ñame, arroz y yuca, aves de corral como gallinas y cerdos de cría.	
Imputación jurídica	
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo presentó ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel"), en calidad de coautor, por el punible de **deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil**, artículo 159 del Código Penal.	
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física	
1. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley No. 427438 del 30 de noviembre del 2011 presentado por ELIECER BERTEL RÍOS, en el cual quedaron expuestas las circunstancias en que aconteció el hecho victimizante. 2. Copia de la cedula de ciudadanía de ELIECER BERTEL RÍOS, FRANCIA ELENA HUERTAS FUENTES y RODRIGO ANDRÉS BERTEL HUERTAS y dos copias de tarjetas de identidad ilegibles. 3. Certificación expedida por la Defensoría del Pueblo Seccional Sucre, en la cual se registró que ELIECER BERTEL RÍOS y su grupo familiar son desplazados en el marco de la violencia sociopolítica de la vereda La Peñata jurisdicción de Sincelejo, Sucre. 4. Formato de ficha Socioeconómica de la Dirección Nacional de la Defensoría del Pueblo realizado a ELIECER BERTEL RÍOS. 5. Formato denominado "*referencia de hecho en versión*", de fecha 8 de mayo de 2019, en el cual se consigna *"SE IMPUTA POR PERTENENCIA AL GRUPO Y POR LÍNEA DE TIEMPO, ZONA DE INJERENCIA DEL POSTULADO (CORREGIMIENTO CERRITO LA PALMA A 5 MINUTOS SINCELEJO- OPERO DESDE FEBRERO DE 2003 AL 29 OCTUBRE DE*	

2004)" hecho aceptado por el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO.
Análisis de la Sala.
El cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía General de la Nación, ante esta Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, donde se describió el hecho y de los elementos de convicción allegados, que permite comprobar la materialidad del delito imputado y la responsabilidad que le cabe en el mismo a **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO**, se tiene en cuenta que, además, de la aceptación que hizo dicho postulado, efectivamente, para la época de la ocurrencia del hecho, esto es, en el año 2003 mes de noviembre el postulado ESQUIVEL CASTILLO hacía parte como militante de las otrora Autodefensas Unidas de Colombia, bajo la comandancia general de EDWAR COBOS TÉLLEZ alias "Diego Vecino" y como comandante militar RODRIGO MERCADO PELUFFO alias "Cadena", en donde desempeñó los roles de radio chispa y patrullero tal y como lo ha dejado reseñado la Fiscalía General de la Nación. Además, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley AUC, motivado por el control social, territorial y de recursos que ejerció el postulado en las zonas de injerencia, así como por la lucha antisubversiva. Así mismo, el punible fue cometido bajo la práctica de presencia armada, temor e inseguridad y mediante amenazas.

Cargo No. 44[133]

Víctima	ANA MARÍA REVOLLO TEHERÁN
Postulado	**LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel").
Fecha y lugar de los hechos.	15 de mayo de 2004, Sincelejo, (Sucre).
Política: control territorial y social. **Práctica:** presencia armada, temor e inseguridad. **Modus operandi:** amenazas.	
Imputación Fáctica.	
Relata la señora ANA MARÍA REVOLLO TEHERÁN, que el 15 de mayo de 2004, se vio obligada a salir desplazada con sus hijos del barrio Paraíso San Carlos de la ciudad de Sincelejo, debido a la muerte de su esposo FERNANDO HERMÓGENES TUIRÁN GARCÍA hecho que ocurrió el mes de abril de 2004, su esposo se dedicaba a comercializar ganado para ser sacrificado en el frigorífico, también vendía ganado en el mercado, tiendas y otras personas, agrega la reportante que la situación económica	

[133] Sesión de audiencia del 30 de junio del 2021, Audio 08001225200320200000100_20210630_02 rec. 1:34:30.
.

marchaba bien, hasta que alias "Cadena" ordenó asesinar a los vendedores de carnes, entre ellos a su esposo, motivo por el cual tuvo que salir desplazada hacia San Onofre, donde vivían sus padres de crianza, situación que desmejoró su estado emocional y económico.
Imputación jurídica
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo presentó ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (**alias "Daniel"), en calidad de coautor, por el punible de **deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil**, artículo 159 del Código Penal.
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física
1. Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley No. 51181 del 12 de junio del 2007 presentado por ANA MARÍA REVOLLO TEHERÁN, en el cual quedaron expuestas las circunstancias en que aconteció el hecho victimizante. 2. Entrevista rendida el día 24 de marzo de 2010 por ANA MARÍA REVOLLO TEHERÁN ante el Fiscal Decimo Delegado ante este Tribunal, en el que la declarante da cuenta de cómo acontecieron los hechos que generaron su desplazamiento forzado. 3. Declaración jurada rendida el día 7 de marzo de 2012 por ANA MARÍA REVOLLO TEHERÁN ante el Fiscal Decimo Delegado ante este Tribunal, en el que la declarante da cuenta de cómo acontecieron los hechos que generaron su desplazamiento forzado. 4. Copia de la cedula de ciudadanía de ANA MARÍA REVOLLO TEHERÁN y FERNANDO HERMÓGENES TUIRÁN GARCÍA. 5. Partida de matrimonio celebrado entre ANA MARÍA REVOLLO TEHERÁN y FERNANDO HERMÓGENES TUIRÁN GARCÍA en la Parroquia de San Onofre, Sucre, el día 16 de septiembre de 2000. 6. Declaración juramentada rendida por ANA ISABEL RODRÍGUEZ BARRIOS en la que manifiesta haber conocido a los señores ANA MARÍA REVOLLO TEHERÁN y FERNANDO HERMÓGENES TUIRÁN GARCÍA, y sus calidades humanas, que se dedicaba a la comercialización de carne de ganado y que los paramilitares que le quitaban dinero para dejarlo desempeñar dicha actividad económica hasta que le causaron la muerte. 7. Registro civil de matrimonio entre ANA MARÍA REVOLLO TEHERÁN y FERNANDO HERMÓGENES TUIRÁN GARCÍA. 8. Registro civil de nacimiento de MARÍA BELÉN TUIRÁN REVOLLO. 9. Declaraciones juradas rendidas por MARÍA DE LA OSSA, MATILDE GUERRERO, GUSTAVO BELTRÁN, ANA ÁVILA PADILLA y ANA RODRÍGUEZ, en la que manifestaron que el señor FERNANDO HERMÓGENES TUIRÁN GARCÍA fue asesinado el día 20 de abril de 2004 en la ciudad de Sincelejo, a manos de los grupos de Autodefensas Unidas de Colombia que operaban en la zona. 10. Certificado de registro civil de nacimiento de FERNANDO HERMÓGENES TUIRÁN GARCÍA.

11. Formato denominado "*referencia de hecho en versión*", de fecha 8 de mayo de 2019, en el cual se consigna *"SE IMPUTA POR PERTENENCIA AL GRUPO Y POR LÍNEA DE TIEMPO, ZONA DE INJERENCIA DEL POSTULADO (CORREGIMIENTO CERRITO LA PALMA A 5 MINUTOS SINCELEJO- OPERO DESDE FEBRERO DE 2003 AL 29 OCTUBRE DE 2004)"* hecho aceptado por el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO.
Análisis de la Sala.
El cargo ***se legaliza*** en la forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica, de acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía, de la descripción del hecho y de los elementos de convicción allegados, que permiten dar por demostrada la materialidad del delito imputado; así mismo, se encuentra acreditada la responsabilidad de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO**, teniendo en cuenta que, para la época de ocurrencia del hecho, tal y como quedó registrado en el acápite *"1.6. Permanencia del postulado en el Bloque Héroes de los Montes de María"*, este postulado perteneció a dicho Bloque bajo la comandancia general de EDWAR COBOS TÉLLEZ alias "Diego Vecino" y como comandante militar RODRIGO MERCADO PELUFFO alias "Cadena", en donde le correspondió desempeñar roles como radio chispa y patrullero, el hecho presentado como cargo No. 44 hizo parte del patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley AUC, motivado por el control social, territorial y de recursos que ejerció el postulado en sus zonas de injerencia, así como por la lucha antisubversiva. Así mismo, el punible fue cometido bajo la práctica de presencia armada, temor e inseguridad y mediante amenazas.

2.3.1. Cuestión final.

Con relación a los cargos que han sido legalizados por la Sala, de conformidad como quedaron previamente expuestos, y que conformaron el patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado, se encontraron responsables a los postulados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** (alias "Daniel") y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** (alias "El Ñato"), del delito en concurso de deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, artículo 159 del Código Penal.

2.4. Patrón de macrocriminalidad de desaparición forzada.

Cargo No. 45[134]

Víctima	ANDRÉS BERRIO PRIMERA

[134] Sesión de audiencia del 29 de junio de 2021, audio 08001225200320200000100_20210629_03, Rec. 1:02:30.

Postulado	**JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** (alias "El Ñato").
Fecha y lugar de los hechos.	1 de enero de 2001, San Onofre, (Sucre).

Política: vínculo con el grupo enemigo.

Práctica: sustracción del lugar de residencia.

Modus operandi: amenazas o intimidaciones utilizando la fuerza.

Imputación Fáctica.

Manifiesta la reportante madre de la víctima directa, que el primero de enero de 2001 cuando su hijo ANDRÉS BERRIO PRIMERA, se encontraba en el barrio Palito en la plaza de toros de San Onofre, Sucre, lo estaban esperando los paramilitares, el trató de correr , pero alias El Ñato lo alcanzó y le dio dos tiros en la mano y se lo llevó consigo, su progenitora quien estaba en el lugar de los hechos le pidió al paramilitar JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA, que no se lo llevara que tomaran el dinero y las prendas que él tenía, pero este manifestó que no, porque era una orden de alias "Cadena", en ese momento se presentó una camioneta roja donde lo embarcaron y nunca más se volvió a saber de su paradero, ni tener conocimiento de donde lo sepultaron.

Además, se conoce que quienes participaron en este hecho fueron JUAN CARLOS REVOLLO PATERNITA, alias El Ñato, SANTANDER ROJANO ALTAMIRANDA alias El Santa y ANSELMO PACHECO AYALA, este último fue la persona que informó a los paramilitares que se encontraban al mando de alias "Cadena", que la víctima directa ANDRÉS BERRIO PRIMERA era guerrillero, esto solo con el fin de robarle las prendas que tenía puestas.

Imputación jurídica

La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo expuso ante la Sala de Conocimiento en contra de **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** alias "El Ñato", en calidad de coautor, por el punible de **desaparición forzada**, artículo 165 de la ley 599 del 2000.

Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física

1. Copia sentencia condenatoria emitida dentro del radicado No. 2011-00038-00, por Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo, Sucre, el día 29 de diciembre de 2011, en la que se declara penalmente responsable como autor del delito de desaparición forzada agravada que recayera en la persona de ANDRÉS BERRIO PRIMERA en contra del postulado JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA y es condenado a la pena principal de prisión de 19 años 6 meses y al pago de una multa de (1.650) smlmv para el año 2003 a favor del Tesoro Nacional, fallo este que fue susceptible de recurso de apelación interpuesto por el defensor del postulado REVOLLO PATERNINA y en el que la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, Sucre, mediante proveído de fecha 25 de abril de 2012, confirmó la sentencia apelada, con las siguientes modificaciones JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA

purgará una pena de prisión de (11) años y (3) meses por el delito de desaparición forzada y pagará una multa equivalente a (750) smlmv.
2. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley No. 476950 del 25 de septiembre del 2012, correspondiente al señor FIDENCIO BERRIO TORRES, en donde expuso las circunstancias en que aconteció el hecho victimizante que recayó en su hijo ANDRÉS BERRIO PRIMERA.
3. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley No. 35515 del 18 de marzo de 2009, correspondiente a HONAIDA DEL CARMEN LÓPEZ GASPAR, en donde expuso las circunstancias en que aconteció el hecho victimizante que recayó en su compañero permanente ANDRÉS BERRIO PRIMERA.
4. Registro civil de nacimiento de DIANA CRISTINA y JONATHAN BERRIO LÓPEZ.
5. Copa de la cédula de ciudadanía de HONAIDA DEL CARMEN LÓPEZ GASPAR
6. Certificación expedida por el Fiscal Segundo Especializado de Sincelejo, Sucre, en la que se hace consta que en esa unidad delegada se adelantó investigación previa bajo el radicado No. 71310 en la que se registra la víctima ANDRÉS BERRIO PRIMERA por el punible de desaparición forzada.
7. Certificación emanada por el Registrador Municipal del Estado Civil de San Marcos, Sucre, en la que se hace constar la plena identidad de ANDRÉS BERRIO PRIMERA.
8. Declaración juramentada rendida ante la Notaría Única de San Marcos, Sucre, el día 17 de enero de 2009, por los señores JAIME FABIO SAGRA PÉREZ y JOSE GREGORIO VERGARA ARCIA, en la que unísono indican bajo la gravedad del juramento que conocen de vista y trato a la señora HONAIDA DEL CARMEN LÓPEZ GASPAR que convivió en unión libre con ANDRÉS BERRIO PRIMERA quien se encuentra desaparecido, que de dicha unión nacieron dos hijos DIANA CRISTINA y JONATHAN BERRIO LÓPEZ que tanto estos y su madre dependían económicamente de ANDRÉS BERRIO PRIMERA .
9. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley No. 499483 del 6 de marzo de 2013 y entrevista de la misma fecha, correspondiente a INÉS PRIMERA BERRIO, en donde expuso las circunstancias en que aconteció el hecho victimizante que recayó en su hijo ANDRÉS BERRIO PRIMERA.
10. Cédula de ciudadanía de INÉS PRIMERA BERRIO.

Análisis de la Sala.

El cargo ***no se legaliza,*** toda vez que a la actuación se allegó por parte del ente acusador la sentencia condenatoria emitida dentro del radicado No. 2011-00038-00, por Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo, Sucre, el día 29 de diciembre de 2011, en la que se declara penalmente responsable como autor del delito de desaparición forzada agravada que recayera en la persona de ANDRÉS BERRIO PRIMERA en contra del postulado JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA, esta sentencia

permite comprobar que dicho postulado fue condenado a la pena principal de 19 años y 6 meses de prisión.

Como vemos en los documentos referidos anteriormente y la formulación de imputación elevada ante el Magistrado con Funciones de Control Garantías en este caso abarca el delito de desaparición forzada recogido en el artículo 165 del Código Penal que recayó en ANDRÉS BERRIO PRIMERA y en aras de no trasgredir la garantía fundamental del principio de *nom bis in ídem*, por cuanto, tal y como quedó consignado precedentemente, y fue demostrado en este proceso por ese punible ya fue condenado el postulado REVOLLO PATERNINA (alias "El Ñato") en calidad de autor por parte del Juzgado Penal del Circuito Especializado de la ciudad de Sincelejo (Sucre), mediante sentencia anticipada ya ejecutoriada[135].

De análoga manera, acorde con la sustentación realizada por la Fiscalía, de la descripción del hecho y de los elementos de convicción allegados, se tiene además de haber quedado demostrada la materialidad del delito de desaparición forzada y la responsabilidad de JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA en el mismo, también se acreditó que este hecho hizo parte de un patrón de macrocriminalidad, perpetrado en cumplimiento de las políticas a la cuales venimos haciendo referencia.

Por lo anterior, si bien el cargo no es legalizado, conforme a las argumentaciones que quedaron expuestas, y teniendo en cuenta que en este caso: *i)* la víctima se encuentra debidamente identificada, *ii)* la materialidad de la conducta punible está acreditada, y *iii)* está probado que el victimario del hecho punible hizo parte de la estructura del otrora Bloque Héroes de los Montes de María, de ello hacemos registro para que quede en el diligenciamiento constancia y para la historia los punibles desplegados por las Autodefensas Unidas de Colombia, que el hecho existió y fue cometido por un miembro de este grupo armado ilegal ya condenado JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA .

Cargo No. 46[136]

Víctima	RAFAEL ANTONIO BERRIO MELÉNDEZ
Postulado	**JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** (alias "El Ñato").
Fecha y lugar de los hechos.	9 de octubre de 2002, San Onofre, (Sucre).
Política: control social, territorial y de recursos. **Práctica:** sustracción del lugar de residencia.	

[135] Decisión que quedó registrada también en el acápite *"2. Antecedentes y requerimientos por la justicia ordinaria"* de esta sentencia.
[136] Sesión de audiencia del 29 de junio de 2021, audio 08001225200320200000100_20210629_03, Rec. 1:15:20.

Modus operandi: amenazas o intimidaciones utilizando la fuerza.
Imputación Fáctica.
El día 9 de octubre de 2002, como a eso de las 9:00 de la mañana, cuando el señor RAFAEL ANTONIO BERRIO MELÉNDEZ se encontraba durmiendo en su vivienda, llegó hasta allí alias "El Ñato" preguntó por este y salieron juntos de la casa y a pocos metros de la casa lo estaban esperando otro paramilitar llamado YONIS RODRÍGUEZ TAPIA en una moto, lo subieron en medio de las dos personas y se lo llevaron, cuando pasaron dos horas empezaron a preocuparse porque sabían que estos señores eran paramilitares y desconocían sus intenciones, pasadas tres horas familiares a buscar al señor BERRIO MELÉNDEZ y en la búsqueda se encontraron a alias "El Ñato" quien les pidió dinero para devolverlo, estando recolectando el dinero ese mismo día llegó un paramilitar de nombre JULIO TAPIAS y les advirtió que no buscaran más porque RAFAEL ANTONIO ya estaba muerto, que ellos mismos se habían encargado de enterrarlo y que si denunciaban el hecho correrían la misma suerte, que solo les quedaba resignarse.
Imputación jurídica
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo expuso ante la Sala de Conocimiento en contra de **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** alias "El Ñato", en calidad de coautor, por el punible de **desaparición forzada**, artículo 165 de la ley 599 del 2000.
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física
1. Copia de sentencia anticipada emitida dentro del radicado No. 2008-00031-00, por Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo, Sucre, el día 30 de diciembre de 2008, mediante la cual se declaró penalmente responsable, en calidad de autor, a JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA por los delitos de secuestro agravado y homicidio agravado que recayeron en la víctima RAFAEL ANTONIO BERRIO, imponiéndole la pena principal de prisión de 18 años 11 meses y multa de 2600 smlmv. 2. Informe de investigador de campo de fecha 12 de marzo de 2013, en el cual quedaron registradas las labores de documentación y acreditación de la materialidad del hecho de desaparición forzada de quien respondió en vida al nombre de RAFAEL ANTONIO BERRIO MELÉNDEZ. 3. Declaración jurada y registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley No. 22318 del 15 de noviembre del 2006, rendido por EDGAR ENRIQUE BERRIO MELÉNDEZ, en el cual relató las circunstancias en que aconteció el hecho en el que resultó víctima su hermano RAFAEL ANTONIO BERRIO MELÉNDEZ. 4. Certificado de registro civil de nacimiento de RAFAEL BERRIO MELÉNDEZ.

5. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley No. 499601 del 6 de marzo de 2013, correspondientes a JOAQUÍN ANTONIO BERRIO MELÉNDEZ, en donde expuso las circunstancias en que aconteció el hecho victimizante que recayó en su hermano RAFAEL ANTONIO BERRIO MELÉNDEZ.
6. Entrevista y registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley No. 68764 del 22 de junio de 2007 y entrevista de la misma fecha, correspondientes a VILMA ROSA MELÉNDEZ DOMÍNGUEZ, en donde expuso las circunstancias en que aconteció el hecho victimizante que recayó en su hijo RAFAEL ANTONIO BERRIO MELÉNDEZ.
7. Certificado de registro civil de nacimiento de EDGAR ENRIQUE, JOAQUÍN ANTONIO, JAIRO, YOLANDA BERRIO MELÉNDEZ, sí como de VILMA ROSA MELÉNDEZ DOMÍNGUEZ.
8. Registro civil de defunción del pare de la víctima, señor ANDRÉS BERRIO MELÉNDEZ.
9. Formato denominado "*referencia de hecho en versión*", de fecha 11 de marzo de 2011, en el cual YONIS RODRÍGUEZ TAPIA relató las circunstancias en que tuvo ocurrencia el hecho, aceptando su participación en el mismo, encargándose, junto con alias "El Ñato", de llevar a la víctima hasta el lugar en donde finalmente fue ultimado.
10. Formato denominado "*referencia de hecho en versión*", adiado 20 de octubre de 2011, en el cual JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA alias "El Ñato", relató la ocurrencia del hecho y aceptó su responsabilidad en el mismo de la siguiente manera: *"HOMICIDIO RAFAEL ANTONIO BERRIO MELÉNDEZ, A ESE MUCHACHO ME ORDENÓ "CADENA", QUE LO FUERA A COGER, Y LO SACARA DE SU CASA, YO RECIBÍ UNA ORDEN DE RODRIGO MERCADO PELUFFO, PORQUE ÉL ME DIJO QUE ÉL ERA EL QUE HABÍA QUEMADO MI CASA, LO SAQUÉ CON EL SEÑOR JHONY RODRÍGUEZ TAPIAS, YO LO SAQUÉ A ÉL A LAS 9 Y MEDIA DE LA MAÑANA HACIA LA FINCA EL PALMAR, ESO FUE EN EL AÑO 2002 EL 9 DE OCTUBRE, AHÍ LLEGÓ CADENA Y ME ORDENÓ A QUE COGIERA EL SEÑOR Y LO MATARA, LUEGO CADENA ORDENÓ QUE LO MONTARAN EN UNA CAMIONETA, POR ESO NO SE DONDE LO ENTERRARON, NO TENGO CONOCIMIENTO. YO LO ASESINÉ CON UN REVOLVER CALIBRE 38, Y LE PEGUÉ 3 TIROS. ÉL ALCANZÓ A DECIRME QUE ÉL HABÍA QUEMADO MI CASA Y MENCIONÓ A OTROS AMIGOS MÁS, DE ESOS AMIGOS DE ÉL, TODITOS SE FUERON, SE DESPLAZARON DEL PUEBLO".*

Análisis de la Sala.

El cargo ***es legalizado*** en esta forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica.

Precisando que si bien reposa en la actuación la sentencia condenatoria proferida dentro del radicado No. 2008-00031-00, por Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo, Sucre, el día 30 de diciembre de 2008, en la que se declara penalmente responsable a **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** como autor de los delitos de secuestro agravado y homicidio agravado, que recayeran en la víctima RAFAEL ANTONIO BERRIO MELÉNDEZ, condenándolo a la pena principal de prisión de 18 años 11 meses, lo cierto es que este cargo fue objeto de imputación por parte de la Fiscalía[137] y presentado en audiencia pública ante la Sala de Conocimiento para efectos de legalización y sentencia,[138] únicamente por el delito de desaparición forzada en contra del postulado, en calidad de coautor.

De otra parte, los elementos suasorios aportados por el ente acusador no dejan duda sobre la ocurrencia del delito imputado en este caso el de desaparición forzada, así como la responsabilidad de **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** en el mismo en calidad de coautor, lo cual se puede predicar tanto de la confesión por él realizada, así como de lo indicado por el otro partícipe en el hecho, YONIS RODRÍGUEZ TAPIA, y de los relatos del hecho efectuados por los familiares de la víctima.

Así entonces, determinado por parte de la justicia ordinaria el compromiso penal de **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** en el homicidio agravado[139], y acreditada, como se vio, con grado de certeza la materialidad y responsabilidad del postulado en el delito de desaparición forzada, se insta a la Fiscalía para que, si no se ha hecho, proceda a efectuar el trámite dirigido al asentamiento del registro civil de defunción de quien respondió en vida al nombre RAFAEL ANTONIO BERRIO MELÉNDEZ, en aras de procurar por la garantía de memoria histórica y reparación para las víctimas[140].

Por último, quedó claramente establecido que este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de desaparición forzada, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley, motivado por el control social y territorial que ejerció el postulado **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA**

[137] Conforme a Acta 116 de 2019 del 23 de octubre del 2019 del Despacho de Control de Garantías.
[138] Tal y como quedó registrado en el auto del 15 de noviembre del 2022 con ponencia de la suscrita Magistrada ponente, en el cual se resolvió acceder a la solicitud de terminación anticipada del proceso por sentencia anticipada.
[139] Respecto de lo cual, la señora Fiscal titular del Despacho 12 en desarrollo de la vista pública elevó la solicitud encaminada a la acumulación de la pena impuesta en la referida sentencia por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo, Sucre, el día 30 de diciembre de 2008. Sesión de audiencia del primero de julio de 2021, Audio 08001225200320200000100_20210701_02 rec. 7:35
[140] Al respecto, ver el criterio sentado de tiempo atrás por la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en la decisión del 26 de mayo del 2011, rad. 36163, M.P. Alfredo Gómez Quintero.

durante su permanencia en el bloque Héroes de los Montes de María, en sus zonas de injerencia. Así mismo, el punible fue cometido bajo la práctica de sustracción del lugar de residencia, bajo amenazas e intimidaciones utilizando la fuerza.

Cargo No. 47[141]

Víctima	MAURICIO WILCHEZ BLANCO
Postulado	**JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** (alias "El Ñato").
Fecha y lugar de los hechos.	13 de octubre de 2002, San Onofre, (Sucre).
Política: limpieza social. **Práctica:** sustracción de sitio público. **Modus operandi:** amenazas o intimidaciones utilizando la fuerza.	
Imputación Fáctica.	
El 13 de octubre del 2002, el otrora comandante alias "Cadena" ordenó a JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA retener al señor MAURICIO WILCHEZ BLANCO. Para tal efecto, REVOLLO PATERNINA junto con alias "Alfonsito" se dirigieron en motocicleta hasta la cancha de fútbol ubicada al lado de Telecom en el municipio de San Onofre en donde se encontraba la víctima; acto seguido, procedieron a subir al señor WILCHEZ BLANCO a la moto, en medio de los dos, y se marcharon el lugar. A la altura del Banco Agrario, por la plaza de ese municipio, el señor MAURICIO WILCHEZ BLANCO en su desesperación decidió lanzarse del rodante y echar a correr, pero nuevamente fue retenido por los victimarios quienes lo sometieron con unas esposas colocando sus manos hacia atrás, de ahí se dirigieron hacia Arroyo Rico, vía al Rincón, y se lo entregaron a alias "Macayepo" y a alias "Berruguita", quienes se lo llevaron sin dejar rastro de su paradero. Según lo registró el postulado REVOLLO PATERNINA en sus salidas procesales, la ocurrencia del hecho estuvo motivada por la proclividad de la víctima al consumo de estupefaciente, y porque, además, había sido señalada de ser "ladrón".	
Imputación jurídica	
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo expuso ante la Sala de Conocimiento en contra de **JUAN CARLOS**	

[141] Sesión de audiencia del 29 de junio de 2021, audio 08001225200320200000100_20210629_03, Rec. 1:22:10.

REVOLLO PATERNINA alias "El Ñato", en calidad de coautor, por el punible de **desaparición forzada**, artículo 165 de la ley 599 del 2000.
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física
1. Informe de policía judicial FPJ-11 del 20 de noviembre del 2019 en el cual quedaron expuestas las labores de investigación y verificación del hecho, conforme a la orden de policía judicial No. 281 de fecha 16 de octubre de 2019, entre ellas: *i)* la entrevista telefónica efectuada a THOMAS ENRIQUE WILCHEZ ZARZA, quien mencionó que su hermano MAURICIO contaba con 19 años al momento de su desaparición, y que lo que se supo del hecho es que *"los paramilitares se lo llevaron en una motocicleta y no lo volvieron a ver"*, que *"posiblemente esté muerto e inhumado en la finca el Palmar donde tenían su campamento"*; *ii)* que conforme a los registros de la matriz CUVI, se tiene que le fueron tomadas muestras de mucosa bucal a LUIS CARLOS WILCHEZ BLANCO, hermano de la víctima el 28 de junio del año 2005; *iii)* que conforme a los casos de exhumados por la zona en la que desapareció la víctima, *"fue revisada la matriz allegada (...) por parte de la Coordinación de Justicia Transicional – Grube y NO se encontró coincidencias entre los cuerpos recuperados y la víctima directa de los hechos"*; y *iv)* que de acuerdo a los medios probatorios encontrados, *"no es viable adelantar diligencia de prospección y/o exhumación"*, por lo que se sugiere *"ordenar el cruce genético con las muestras de MUCOSA BUCAL tomada al señor LUIS CARLOS WILCHEZ BLANCO hermano del desaparecido (...) con el cuerpos exhumados en la finca el palmar".* 2. Formato denominado "*referencia de hecho en versión*", de fecha 20 de octubre de 2011, en el cual se consigna el relato del postulado JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA y su aceptación de responsabilidad de la siguiente manera: *"13 OCTUBRE DE 2002, CADENA ME ORDENA QUE VAYA A RETENER AL SEÑOR MAURICIO WILCHEZ SILGADO, YO SALGO CON EL SEÑOR ALFONSITO, EN UNA MOTO DE COLOR ROJA, BUSCÁNDOLO POR DONDE PERMANECÍA, FUIMOS A UNA CANCHA AL LADO DE TELECOM, POR AHÍ SE ENCONTRABA EL JUGANDO FÚTBOL, LO MONTAMOS EN EL MEDIO DE LA MOTO, YO CONDUCÍA, CUANDO ÍBAMOS POR EL BANCO AGRARIO POR LA PLAZA DE SAN ONOFRE SE TIRA DE LA MOTO, SALE CORRIENDO Y LO ALCANCE POR EL COLEGIO MANUEL ÁNGEL, NUEVAMENTE LO AGARRE LE PUSE LAS ESPOSAS CON LAS MANOS HACIA ATRÁS, NOS FUIMOS OTRA VEZ EN LA MOTO HACIA ARROYO RICO VÍA AL RINCÓN, SE LE ENTREGO A ALIAS MACAYEPO Y ALIAS BERRUGUITA, DE AHÍ ELLOS SE LO LLEVAN, NO SE QUE PASO CON DE AHÍ EN ADELANTE, YO ME REGRESE A MI CASA NUEVAMENTE, TOME EL RADIO Y LE DIJE AL PATRÓN*

QUE ME LLAMARA Y LE REPORTE QUE YA HABÍA COGIDO AL MAURICIO Y SE LO ENTREGUE A MACAYEPO. LE COMENTE COMO HABÍA SUCEDIDO LAS COSAS, CADENA ME INSULTO POR ESO, MAURICIO ERA VICIOSO Y RATERO, EL QUE LE DIJO A JULIO TAPIAS, FUE EL SEÑOR ELÍSEO BARBOSA DE SAN ONOFRE, QUIEN TIENE UN NEGOCIO A MEDIA CUADRA DE LA POLICÍA, AL LADO DE ELÍSEO VIVÍA MAURICIO, EL LE DIJO A JULIO, ELÍSEO COLABORABA CON UN SUELDO DE UN URBANO, EL LE DIJO QUE LO DESAPARECIERA O LO MATARA, SE LE DIJO A CADENA Y ESTE DIO LA ORDEN".

Análisis de la Sala.

Este cargo ***es legalizado*** en la forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica.

Los elementos suasorios incorporados por el ente acusador resultan suficientes para dar por acreditada la ocurrencia del hecho punible de desaparición forzada que recayó en MAURICIO WILCHEZ BLANCO; así mismo, se encontró claramente establecida la responsabilidad penal en cabeza de **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA**, conforme a la confesión que él mismo hiciera del hecho, así como a lo descrito por el hermano de la víctima.

Ahora bien, se insta a la Fiscalía General de la Nación para que prosiga con las labores de búsqueda de los restos mortales de MAURICIO WILCHEZ BLANCO; y, de considerarse pertinente, se efectúe en una próxima oportunidad procesal la imputación del punible de homicidio en persona protegida, con el correspondiente trámite de asentamiento del registro civil de defunción de la víctima, en garantía de la memoria histórica y en satisfacción al derecho de reparación de las víctimas indirectas[142].

Adicionalmente, se encontró claramente establecido que este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de desaparición forzada, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley, motivado por el control social y territorial que ejerció el postulado **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** durante su permanencia en el bloque Héroes de los Montes de María, en sus zonas de injerencia. Así mismo, el punible fue cometido bajo la práctica de sustracción de sitio público, bajo amenazas o intimidaciones utilizando la fuerza.

Por último, de la actuación no emergen elementos de convicción adicionales que soporten el dicho del postulado con relación al

[142] Al respecto, ver el criterio sentado de tiempo atrás por la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en la decisión que viene citada del 26 de mayo del 2011, rad. 36163, M.P. Alfredo Gómez Quintero.

comportamiento en sociedad de la víctima, lo cual convoca a mantener incólumes el buen nombre y honra de quien respondió en vida a OSCAR DAVID PADILLA PÉREZ.

Cargo No. 48[143]

Víctima	JESÚS ALBERTO MENDOZA FLÓREZ y JAVIER ANTONIO BLANCO MENDOZA.
Postulado	**JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** (alias "El Ñato").
Fecha y lugar de los hechos.	15 de julio de 2002, San Onofre, (Sucre).
Política: control social, territorial y de recursos. **Práctica:** sustracción de residencia. **Modus operandi:** amenazas o intimidaciones utilizando la fuerza.	
Imputación Fáctica.	
El 14 de julio de 2002, el señor JAVIER ANTONIO BLANCO MENDOZA, se trasladó de la ciudad de Sincelejo para el municipio de San Onofre (Sucre), para dedicarse a su negocio de arreglo ollas a presión y licuadoras a domicilio. Al día siguiente, encontrándose en San Onofre, el señor JAVIER ANTONIO se dirigió en compañía de su hermano JESÚS ALBERTO MENDOZA FLÓREZ hasta la casa de una persona apodada "el viejo mono". Hasta ese lugar llegaron unos individuos que se movilizaban en una camioneta negra con vidrios polarizados, quienes procedieron a sacar a la fuerza a los dos hermanos y a embarcarlos en ese automotor rumbo a Rincón del Mar, desconociéndose desde ese momento su paradero.	
Imputación jurídica	
La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo expuso ante la Sala de Conocimiento en contra de **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** alias "El Ñato", en calidad de coautor, por el punible de **desaparición forzada**, artículos 165 de la ley 599 del 2000, en concurso homogéneo y sucesivo.	
Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física	
1. Formato de órdenes a policía judicial de fecha 5 de septiembre de 2016, impartida al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía con el fin de documentar de la desaparición forzada de JESÚS ALBERTO MENDOZA FLÓREZ y JAVIER ANTONIO BLANCO MENDOZA. 2. Informe de policía judicial FPJ-11 del 30 de septiembre del 2016 en el cual se exponen las labores de investigación y verificación del hecho	

[143] Sesión de audiencia del 29 de junio de 2021, audio 08001225200320200000100_20210629_03, Rec. 1:29:10.

adelantadas en razón a la desaparición forzada de JESÚS ALBERTO MENDOZA FLÓREZ y JAVIER ANTONIO BLANCO MENDOZA.
3. Certificación expedida el día primero de junio de 2007, signada por EDUARDO ARROYO CONTRERAS, Asistente de Fiscal III, de la Unidad de Fiscalía Tercera Especializada de Sincelejo, Sucre, en la que hace constar que en esa seccional se les asignó investigación por los hechos sucedidos el 15 de julio de 2002, en jurisdicción del municipio de San Onofre, relacionados con la desaparición de JESÚS ALBERTO MENDOZA FLÓREZ y JAVIER ANTONIO BLANCO MENDOZA.
4. Informes sobre consulta web de la plena identidad de JESÚS ALBERTO MENDOZA FLÓREZ y JAVIER ANTONIO BLANCO MENDOZA.
5. Formato Nacional para Búsqueda de Personas Desparecidas, en el que se describe el seguimiento realizado en razón a la desaparición de JESÚS ALBERTO MENDOZA FLÓREZ y JAVIER ANTONIO BLANCO MENDOZA.
6. Registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley No. 220811 del 15 de octubre del 2008 y entrevista FPJ-14 del 19 de septiembre del 2016, correspondientes a la señora PETRONA ISABEL BLANCO MENDOZA, en donde expuso las circunstancias en que aconteció el hecho victimizante que recayó en sus hermanos JESÚS ALBERTO MENDOZA FLÓREZ y JAVIER ANTONIO BLANCO MENDOZA.
7. Copia de las cédulas de ciudadanía de PETRONA ISABEL, JOSE MANUEL, ORLANDO JOSÉ, ANTONIO SEGUNDO, YANETH PATRICIA, SOL MARÍA, AIDÉ DE LAS MERCEDES y JAVIER ANTONIO BLANCO MENDOZA.
8. Registro civil de nacimiento de JAVIER ANTONIO BLANCO MENDOZA y certificado de registro civil de nacimiento de JESÚS ALBERTO MENDOZA FLÓREZ.
9. Formato denominado "*referencia de hecho en versión*", de fecha 20 de noviembre de 2016, en el cual se registró la narración del hecho por parte del postulado JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA, así como su aceptación de responsabilidad, en los siguientes términos: *"...ESOS MUCHACHOS ARREGLABAN ABANICO, LICUADORA, ESO FUE EN LA SALIDA DE BERRUGA Y FUERON DESAPARECIDOS YO LO ACEPTO POR QUE YO FUI QUIEN LOS ENVIÉ A LA FINCA EL PALMAR PIDO PERDÓN A LOS FAMILIARES POR LOS DAÑOS CAUSADOS, ACEPTO POR PARTICIPAR Y POR CONOCIMIENTO."*

Análisis de la Sala.

Este cargo ***es legalizado*** en la forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica.

Los elementos de convicción aportados por el ente acusador permiten acreditar la materialidad del punible de desaparición forzada que recayó en

JESÚS ALBERTO MENDOZA FLÓREZ y JAVIER ANTONIO BLANCO MENDOZA; así mismo, se encontró demostrado el compromiso penal de **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA**, de acuerdo a la aceptación del cargo que hiciera el postulado en versión libre, así como por las manifestaciones que realizaran las víctimas indirectas en las respectivas declaraciones y registros de hechos atribuibles, a lo cual se suman las labores de policía judicial de confirmación y verificación del hecho.

Se hace necesario, como ha ocurrido en los cargos anteriores, instar a la Fiscalía General de la Nación para que prosiga con las labores de búsqueda de los restos mortales de los hermanos JESÚS ALBERTO MENDOZA FLÓREZ y JAVIER ANTONIO BLANCO MENDOZA; y, de encontrar mérito para ello, proceda en una próxima oportunidad a imputar el punible de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo, con el correspondiente trámite de asentamiento del registro civil de defunción de las víctimas, en garantía de la memoria histórica y en satisfacción al derecho de reparación de las víctimas indirectas[144].

Finalmente, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de desaparición forzada, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley, motivado por el control social y territorial que ejerció el postulado **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** durante su permanencia en el bloque Héroes de los Montes de María, en sus zonas de injerencia. Así mismo, el punible fue cometido bajo amenazas o intimidaciones utilizando la fuerza.

Cargo No. 49[145]

Víctima	JUAN CARLOS FLÓREZ MÉNDEZ
Postulado	**LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** (alias "Daniel").
Fecha y lugar de los hechos.	26 de febrero de 2003 en Sincelejo, (Sucre).
Política: control social, territorial y de recursos. **Práctica:** inhumación o fosa clandestina. **Modus operandi:** amenazas o intimidaciones utilizando la fuerza.	
Imputación Fáctica.	

[144] Al respecto, ver el criterio sentado de tiempo atrás por la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en la decisión del 26 de mayo del 2011, rad. 36163, M.P. Alfredo Gómez Quintero.
[145] Sesión de audiencia del 30 de junio de 2021, audio 08001225200320200000100_20210630_02, Rec. 21:15.

El día 26 de febrero de 2003, se encontraba el señor JUAN CARLOS FLÓREZ MÉNDEZ en la casa de su madre, ubicada en el corregimiento Cerrito de Palma de Sincelejo (Sucre).

Aproximadamente, a las 9:00 de la noche, llegaron hasta ese lugar cuatro hombres armados, vestidos de civil, quienes procedieron a extraer a JUAN CARLOS de la vivienda, luego de lo cual lo embarcaron en una camioneta de color verde sin que hasta la fecha se conozca de su paradero.

Según información recolectada por la familia, en la finca de un señor conocido con el nombre de EMIRO GONZÁLEZ, se encontraron unas fosas comunes y, al parecer, el cuerpo de su familiar se encuentra enterrado en ese lugar.

Imputación jurídica

La Fiscalía imputó el cargo ante el Despacho de Control de Garantías y lo expuso ante la Sala de Conocimiento en contra de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** alias "Daniel", en calidad de coautor, por el punible de **desaparición forzada**, artículo 165 de la ley 599 del 2000.

Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física

1. Denuncia No. 231 de fecha 27 de febrero de 2003, presentada por ALEJANDRO DE JESÚS FLÓREZ MÉNDEZ en la que relató lo acontecido con relación a la desaparición forzada de su hermano JUAN CARLOS FLÓREZ MÉNDEZ.
2. Formatos Nacional para Búsqueda de Personas Desparecidas, en el que se describe el seguimiento realizado en razón a la desaparición de JUAN CARLOS FLÓREZ MÉNDEZ.
3. Auto de apertura de investigación preliminar de fecha 4 de marzo de 2003, emanado por la Fiscalía Tercera Seccional de Sincelejo, Sucre, con base en la denuncia instaurada en razón a la desaparición de JUAN CARLOS FLÓREZ MÉNDEZ.
4. Diligencia de ampliación de denuncia de fecha 24 de noviembre de 2003, presentada por ALEJANDRO DE JESÚS FLÓREZ MÉNDEZ.
5. Copia de la cédula de ciudadano, certificado de registro civil de nacimiento y del formato de consulta web de la plena identidad JUAN CARLOS FLÓREZ MÉNDEZ.
6. Formato denominado "*referencia de hecho en versión*", de fecha 8 de mayo de 2019, en el cual se consigna el relato efectuado por el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO y la aceptación de responsabilidad del hecho, en los siguientes términos: "*EL SEÑOR FUE SACADO DE LA CASA POR ALIAS OMERO, COYARÁ Y RAMIRO. YO LO ACEPTO POR CONOCIMIENTO, POR ESTAR EN LA ZONA Y PERTENECER AL GRUPO. YO NO ESTUVE CON ELLOS, ESTO ME LO COMENTO ALIAS COYARÁ, PORQUE ESTABA EN EL PUESTO CON*

EL, ME COMENTO QUE SE LO LLEVARON EN UN VEHÍCULO HACIA LA FINCA POTOSÍ, DE AHÍ NO SE MAS…”.
Análisis de la Sala.
Este cargo ***es legalizado*** en la forma y términos como ha quedado expuesto en las imputaciones fáctica y jurídica. De acuerdo con la sustentación efectuada por la Fiscalía, de la descripción fáctica expuesta y de los elementos de convicción allegados, se tiene que, por un lado, quedó demostrada la materialidad del delito formulado y la responsabilidad del postulado en los mismos. En efecto, además de la forma y términos en que el señor ALEJANDRO DE JESÚS FLÓREZ MÉNDEZ efectuó la denuncia acerca de la desaparición de su hermano, sumado a la confesión que del hecho hiciera el postulado en versión libre, no puede perderse de vista que, conforme al registro efectuado en el acápite *“1.6. Permanencia del postulado en el Bloque Héroes de los Montes de María”*, quedó claramente establecido que, para la época de ocurrencia del hecho, esto es, 26 de febrero de 2003, LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO integraba el grupo armado organizado al margen de la ley que comandaron alias “El Paisa” y alias “Cadena” del Bloque Héroes de los Montes de María, desempeñándose como “radio chispa” en el engranaje de la estructura armada ilegal, lo que le permitía estar al tanto de la comisión de los hechos acaecidos conforme a las políticas del grupo, así como de sus perpetradores. Se insta al ente acusador para que prosiga con las labores de búsqueda de los restos mortales de JUAN CARLOS FLÓREZ MÉNDEZ; y, de encontrar mérito para ello, proceda en una próxima oportunidad a imputar el punible de homicidio en persona protegida, con el correspondiente trámite de asentamiento del registro civil de defunción de la víctima, en garantía de la memoria histórica y en satisfacción al derecho de reparación de las víctimas indirectas[146]. Por último, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de desaparición forzada, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley, motivado por el control social y territorial que ejerció el bloque Héroes de los Montes de María en sus zonas de injerencia. Así mismo, el punible fue cometido bajo la práctica de sustracción del lugar de residencia, bajo amenazas o intimidaciones utilizando la fuerza.

2.4.1. Cuestión final.

[146] Al respecto, ver el criterio sentado de tiempo atrás por la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en la decisión del 26 de mayo del 2011, rad. 36163, M.P. Alfredo Gómez Quintero.

Como viene de advertirse en el presente acápite *"2. De los cargos en particular"* y el correspondiente *"2.2 Patrón de macrocriminalidad de homicidios selectivos y múltiples."*, se efectuó el análisis del cargo No. 11 imputado y formulado al postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO alias Daniel, víctima RAFAEL ENRIQUE MERCADO VITOLA, declarando la no legalización de homicidio agravado que recayó en la referida víctima debido a como quedó expuesto por este mismo hecho se profirió condena en la justicia ordinaria, sumado a que el ente acusador solicitó con relación a la pena impuesta en el fallo ordinario se proceda a su acumulación dentro del presente tramite,

No obstante, lo anterior, al observarse que la Fiscalía General de la Nación en su imputación jurídica también hizo referencia como cargo imputado y formulado a LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO con relaciona esta víctima RAFAEL ENRIQUE MERCADO VITOLA, al delito de detención ilegal y privación del debido proceso, la Sala procede a ***legalizar este cargo*** únicamente con relación a este delito atentatorio del bien jurídico tutelado de la libertad. Para tal efecto, se considera necesario proceder a la variación de la calificación jurídica del punible de detención ilegal y privación del debido proceso, del artículo 149 de la Ley 599 de 2000, por el de *secuestro simple*, contenido en el canon 168 *ejusdem*, por los motivos que se pasan a explicar a continuación[147].

La detención ilegal y privación del debido proceso, además, de tener ocurrencia con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, supone, *i)* que se retenga o prive ilegalmente de la libertad a una persona, y *ii)* que se la sustraiga del derecho a ser juzgada por un Tribunal independiente e imparcial y con arreglo al debido proceso.

[147] Huelga recordar que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, a propósito de la variación de la imputación jurídica por parte de las Salas de conocimiento de Justicia y Paz, ha hecho expresa la facultad para tal modificación, con fundamento en el ejercicio del control material de los cargos imputados y formulados por la Fiscalía. En efecto, en decisión del 11 de marzo de 2010, rad. 33301, M.P. Alfredo Gómez Quintero, esa Alta Corporación sostuvo, refiriéndose a la intervención de la Sala de Justicia y Paz, que: "*[e]stá en la obligación de verificar, ya sea por iniciativa propia o en virtud de la controversia que planteen los intervinientes, en especial las víctimas y el Ministerio Público, no sólo que los estándares mínimos de verdad, dentro del contexto del grupo armado, se han respetado, sino que lo definido típicamente se corresponde con la realidad".*
Así mismo, la máxima autoridad de la justicia ordinaria ha sido enfática en señalar que, atendiendo a los más altos intereses de verdad, justicia y de reparación, y en aras de que las decisiones judiciales sean congruentes con los estándares internacionales de administración de justicia, la intervención de los magistrados de conocimiento *"no puede limitarse a la de simple avalista de los cargos presentados por la fiscalía y aceptados por el postulado"*, en tanto que el control a realizar sobre los cargos formulados no sólo es formal, sino también material, lo que implica para el Magistrado de Conocimiento *"controlar la legalidad de la aceptación de cargos en lo relativo a la calificación jurídica de los hechos, en el sentido que aquella debe efectivamente corresponder a los hechos que obran en el expediente"*, de acuerdo con la *"garantía de efectividad de los derechos de las víctimas a la justicia y a la verdad"*, tal y como lo dejó precisado la Corte Constitucional sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y otros.

En el caso en concreto, no obstante que se encuentra acreditada la retención y posterior ocultamiento del señor RAFAEL ENRIQUE MERCADO VITOLA, elementos estructurales del punible de secuestro, no existe algún medio de convicción que permita inferir razonablemente el ingrediente normativo adicional que reclama el tipo penal del artículo 149, esto es, que con dicha retención se hubiese sustraído a la víctima del derecho a ser juzgada legítimamente, ni tampoco tal aspecto se deduce de la imputación fáctica efectuada por el ente acusador. En otras palabras, no se encuentra acreditado que sobre la víctima pesara alguna sindicación de índole judicial o que haya sido señalada socialmente de cometer algún delito, y que los victimarios se hubiesen arrogado la potestad de investigarla y sancionarla sustituyendo al Estado en su función constitucional de administrar justicia.

Ahora, en cuanto a la responsabilidad de LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO en ese reato, se encuentra claramente demostrada porque, además de la aceptación que hiciera del mismo ante la Sala de Conocimiento de manera libre, voluntaria y espontánea, conforme a la imputación realizada por el ente acusador[148], los elementos probatorios aportados por el ente acusador dan cuenta, más allá de toda duda razonable, que el postulado brindó una contribución esencial, de acuerdo a un plan y con distribución de funciones, en la retención y posterior ocultamiento de la víctima, tal y como lo manifestaron en las respectivas declaraciones y registros de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley KELLY YOJANA MERCADO GUEVARA y HERNANDO ENRIQUE MERCADO OSORIO, quienes, coincidentemente, narraron cómo fue que el 12 de marzo de 2004 ESQUIVEL CASTILLO llegó hasta donde se encontraba RAFAEL ENRIQUE MERCADO VITOLA a quien le pidió que lo trasladara hasta *"donde [su] novia al Corregimiento Cerrito La Palma"*, sin que se supiera en adelante más de su paradero, apareciendo el cuerpo de la víctima desmembrado dos días después. Evidentemente, sin el aporte del postulado, dadas las circunstancias modales en que aconteció, no hubiera sido posible la ejecución posterior del punible de homicidio que recayó sobre el señor MERCADO VITOLA.

Por otro lado, si bien el ente acusador imputó[149] y presentó en audiencia pública ante la Sala de Conocimiento para efectos de legalización y sentencia el cargo con

[148] Tal y como quedó registrado en el auto del 15 de noviembre del 2022 con ponencia de la suscrita Magistrada ponente CECILIA LEONOR OLIVELLA ARAUJO, en el cual se resolvió acceder a la solicitud de terminación anticipada del proceso por sentencia anticipada.
[149] Conforme a Acta 116 de 2019 del 23 de octubre del 2019 del Despacho de Control de Garantías.

el concurso de delitos de homicidio en persona protegida y detención ilegal y privación del debido proceso, lo cierto es que, como claramente quedó registrado en el acápite de *"Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física"*, y lo reiteramos más adelante, en contra de LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO alias "Daniel" el Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo profirió sentencia el 4 de mayo de 2005 dentro del radicado 2005-00021-00 en la cual lo condenó a la pena de prisión de 25 años como autor responsable del delito de *homicidio agravado* cometido en la persona de RAFAEL ENRIQUE MERCADO VITOLA, así como la accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por un periodo de 20 años, al igual que el pago de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales.

Inclusive, en comunicación dirigida el 10 de octubre del 2019 a la Fiscalía 267 de Apoyo a la Fiscalía 12 delegada ante el Tribunal, el Juzgado Tercero de Ejecución de penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla confirmó que se encontraba vigilando tres sentencias emitidas en contra del postulado **ESQUIVEL CASTILLO** entre las que se registra precisamente la emanada del Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo el 4 de mayo de 2005.

Aunado a lo anterior, la señora Fiscal titular del Despacho 12 en desarrollo de la vista pública elevó la solicitud encaminada a la acumulación de la pena impuesta en la referida sentencia por Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo[150].

Así entonces, reiteramos aquí, que dado que por el delito de homicidio imputado por el órgano de persecución penal en el proceso penal especial de Justicia y Paz, que recayó en quien respondió en vida al nombre de RAFAEL ENRIQUE MERCADO VITOLA, ya se profirió sentencia en la justicia ordinaria, sumado a que el ente acusador solicitó que con relación a la pena impuesta en ese fallo ordinario se procediera a su acumulación dentro del presente trámite transicional, lo cual será objeto de análisis más adelante en el acápite pertinente, no le es posible a la Sala decretar la legalización del punible atentatorio del bien jurídico tutelado de la vida, tal como lo registráramos al momento de presentar el hecho, en tanto que el proferimiento de una nueva condena por el mismo punible devendría en la trasgresión del principio de *nom bis in ídem* consagrado en el inciso cuarto del artículo 29 de la Constitución Política y en los artículos 8º del Código Penal, 19 de la Ley 600 de 2000 y 21 de la Ley 906 de 2004.

[150] Sesión de audiencia del primero de julio de 2021, Audio 08001225200320200000100_20210701_02 rec. 7:35

Al respecto, se hace necesario recordar para que quede bien claro que de tiempo atrás la máxima autoridad de la justicia ordinaria ha indicado, con relación a este mentado principio de *nom bis in idem* que:

"(…) abarca varias hipótesis, así:

"Una. Nadie puede ser investigado o perseguido dos o más veces por el mismo hecho, por un mismo o por diferentes funcionarios. Se le suele decir principio de prohibición de doble o múltiple incriminación".

"Dos. De una misma circunstancia no se pueden extractar dos o más consecuencias en contra del procesado o condenado. Se le conoce como prohibición de la doble o múltiple valoración". (Subraya la Sala en esta oportunidad.)

"Tres. Ejecutoriada una sentencia dictada respecto de una persona, ésta no puede ser juzgada de nuevo por el mismo hecho que dio lugar al primer fallo. Es, en estricto sentido, el principio de cosa juzgada".

"Cuatro. Impuesta a una persona la sanción que le corresponda por la comisión de una conducta delictiva, después no se le puede someter a pena por ese mismo comportamiento. Es el principio de prohibición de doble o múltiple punición".

"Cinco. Nadie puede ser perseguido investigado o juzgado ni sancionado pluralmente por un hecho que en estricto sentido es único. Se le denomina non bis in idem material"[151].

Así mismo, se ha considerado que el principio de *nom bis in idem* no es ajeno a los procesos que se surten bajo los lineamientos de la ley de Justicia y Paz *"porque el compendio normativo transicional no lo excluye y, por el contrario, se nutre de las garantías generales del ordenamiento jurídico nacional dentro del cual ocupa lugar preponderante la prohibición de doble juzgamiento. Incluso, considerando la especial protección de los derechos de las víctimas otorgada en la Ley de Justicia y Paz, no es posible desconocer, sin más, los efectos de la cosa juzgada,*

[151] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 12 de febrero de 2009, radicado 30998, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez. Decisión citada en providencia de segunda instancia del 26 de septiembre del 2012, rad. 39261, M.P. Jose Luis Barceló Camacho.

dados lo nocivos efectos que ello comportaría para la coherencia y legitimidad del sistema jurídico al propiciar la coexistencia de fallos de carácter contradictorio frente a un mismo supuesto fáctico."[152]

En conclusión, conforme a los argumentos que han quedado expuestos, la legalización del presente cargo se da exclusivamente por el delito de secuestro simple recogido en el artículo 168 de la normativa sustantiva penal, tras estar acreditada la responsabilidad del postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO alias "Daniel" en la retención y posterior ocultamiento del señor RAFAEL ENRIQUE MERCADO VITOLA, además se tiene que conforme al registro efectuado en el acápite *"1.6. Permanencia del postulado en el Bloque Héroes de los Montes de María"* para la época de ocurrencia del hecho, el postulado integraba la estructura armada del Bloque Héroes de los Montes de María, comandada por alias "El Paisa" en calidad de radio chispa.

Así mismo, este cargo hizo parte del patrón de macrocriminalidad de homicidio, perpetrado en cumplimiento de las políticas emanadas de la cúpula del grupo armado organizado al margen de la ley AUC, motivado por el control social, territorial y de recursos que ejerció el postulado en sus zonas de injerencia.

Finalmente, en cuanto hace a todos los cargos respecto de los cuales hemos impartido legalización y que conformaron el patrón de macrocriminalidad de desaparición forzada, se encontró responsable a los postulados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** (alias "Daniel") y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** (alias "El Ñato"), del delito de desaparición forzada, artículo 165 del Código Penal.

3. Alegatos de conclusión.

3.1. Fiscalía General de la Nación[153].

El señor Fiscal Doce (e) de la Dirección de Fiscalía Delegada Nacional Especializada de Justicia Transicional para el momento de la diligencia, Dr. FARE ARMANDO ARREGOCÉS ARIÑO, indicó que, dándole cumplimiento al debido proceso en cuanto a las alegaciones finales establecidas en el artículo 447 de la ley

[152] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 5 de octubre del 2016, radicado 47209, M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa.
[153] Audio "08001225200320208498600_20230323_01", Rec. 2:12:20, sesión de audiencia del 23 de marzo de 2023.

906 de 2004, solicita se imparta legalidad formal y material a los cargos formulados por el ente acusador a los postulados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** (alias "Daniel") y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** (alias "El Ñato") y, con ello, el reconocimiento y responsabilidad de todos los hechos que fueron objeto de imputación y formulación, lo que consecuentemente impone a la Fiscalía solicitar a la Sala se emita la sentencia condenatoria en contra de los mencionados postulados **ESQUIVEL CASTILLO** y **REVOLLO PATERNINA**, y que la pena a imponer sea la máxima que establece el código penal colombiano, esto, de acuerdo a los delitos que les fueron imputados a los referidos postulados y la gravedad de los mismos tales como homicidio, desaparición forzada y desplazamiento forzado, empero, al entrar al análisis y discurrir de este proceso especial de Justicia y Paz, y como los postulados han venido cumpliendo los compromisos adquiridos al desmovilizarse y luego postularse al procedimiento especial de esta ley de justicia transicional, solicita a la Magistratura de conformidad a lo señalado en el artículo 3 de la ley 975 de 2005, se les otorgue los beneficios que consagra esa misma disposición sobre la alternatividad, beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, derivada de su responsabilidad por las violaciones a los derechos fundamentales y que dicha pena alternativa, igualmente, sea la máxima impuesta como lo establece la ley esto es 8 años de prisión.

3.2. Defensa de los postulados[154].

La apoderada judicial del postulado **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** para el momento de la intervención, en cabeza ese día en la señora abogada ANDREA RODRÍGUEZ MALDONADO, indicó que los hechos imputados y formulados dentro del presente proceso fueron aceptados por su poderdante, además, que REVOLLO PATERNINA ha cumplido a cabalidad con lo establecido en la normativa transicional, colaborando en el transcurso de las audiencias con el esclarecimiento de los hechos, es por lo que esa defensa solicita se emita una sentencia condenatoria y a la vez se considere la imposición de la pena alternativa consagrada en la ley 975 de 2005.

Por su parte la defensa judicial del postulado **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** en cabeza de la señora abogada Doctora LORENA DEL CARMEN

[154] Audio "08001225200320208498600_20230323_01", Rec. 2:19:20 y 2:22:30, sesión de audiencia del 23 de marzo de 2023.

BUSTOS FIGUEROA, sostuvo que amparada en el artículo 443 de la ley 906 de 2004, y por complementariedad del artículo 62 que aplica la ley 975 de 2005, por lo que una vez legalizada la aceptación de cargos frente a la formulación de imputaciones solicita a esta Sala tener en cuenta que su representado ha venido aceptando su responsabilidad en estos hechos de manera voluntaria, igualmente, a ha venido cumpliendo con las obligaciones impuestas por la ley de Justicia y Paz como son el aporte a la verdad, justicia y reparación, para que acorde con ello se considere la imposición de la pena alternativa consagrada en la ley 975 de 2005, puesto que, reitera, el postulado ha cooperado a lo largo del proceso transicional, además, pidiendo perdón a las víctimas y su compromiso de no repetición.

3.3. Representantes de víctimas.

Hizo uso la palabra el profesional del derecho Dr. EMERSON RAFAEL ROCHA OSORIO[155], abogado representante de víctimas adscritos a la Defensoría del Pueblo Regional Atlántico, expresó que analizando el proceso especial de justicia y paz consagrado en la ley 975 de 2005 y sus reformas como la ley 1592 de 2012, que establecen unas rutas para este diligenciamiento como los son la versiones libres, las audiencias de imputaciones, las audiencias concentradas de formulación y aceptación de cargos, el incidente de reparación integral a las víctimas y con las modificaciones de la presente ley la figura de la sentencia anticipada con la que se busca economía procesal para lograr obtener un fallo en el menor tiempo posible en este proceso de justicia transicional, en lo que hace con este caso en concreto se evidencia que se han cumplido con todas las ritualidades que establece la ley de Justicia y Paz para proceder a ello, por lo que solo le resta solicitar se considere para sus víctimas representadas tener en cuenta las pretensiones indemnizatorias por él reclamadas en su condición de representante de víctimas para que sean reconocidas y reparadas íntegramente.

Por su parte el Dr. RAFAEL ENRIQUE ARTETA ARTETA[156] abogado representante de víctimas adscritos a la Defensoría del Pueblo Regional Atlántico, indicó, que, una vez desarrolladas todas las etapas procesales del proceso de Justicia y Paz respecto de los postulados LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (alias “Daniel”) y JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA (alias “El Ñato”), y cumplidas a cabalidad hasta el momento por los mencionados postulados, solicita a la Magistratura que las víctimas por él representadas sean tenidas en

[155]Audio 08001225200320198066500_20082020_01 rec. 01:46:46. Sesión de audiencia del 20 de agosto de 2020.
[156] Audio “08001225200320208498600_20230323_01”, Rec. 2:26:06, sesión de audiencia del 23 de marzo de 2023.

cuenta y se les otorgue las pretensiones reparatorias solicitadas en su favor, finalmente, exhortó a la Sala a considerar la imposición de la pena máxima alternativa consagrada en la ley 975 de 2005.

3.4. Procuraduría General de la Nación[157].

El señor Procurador 6 Judicial II de Apoyo a Víctimas de Barranquilla, Dr. GERMAN CURE CELIS, sostuvo, que, como es de conocimiento pleno los postulados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA**, rindieron versiones libres donde hicieron relación de los hechos ejecutados como integrantes del Bloque Montes María de las Autodefensas Unidas de Colombia, relatos que fueron aceptados por el ente acusador y a los cuales posteriormente se les impartió legalidad como hechos imputados ante la Magistratura con Funciones de Control de Garantías, consecutivamente en las diligencias adelantadas en la Sala de Conocimiento, los referidos postulados ratificaron su aceptación de los cargos formulados pidiendo perdón por los hechos cometidos, lo que para el agente del Ministerio Publico señor Procurador en cita, denota el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los postulados ESQUIVEL CASTILLO y REVOLLO PATERNINA ante su sometimiento a la ley de justicia y paz, por lo que pide a la Magistratura considerar la imposición a los citados postulados de la pena alternativa de acuerdo a lo contemplado en el artículo 29 de la ley 975 de 2005.

VI. DOSIFICACIÓN PUNITIVA.

Una vez realizado el análisis en particular de los cargos que fueron imputados, formulados y expuestos por la Fiscalía en la audiencia de sustentación de la solicitud de terminación anticipada del proceso por sentencia anticipada ante esta Sala de Conocimiento, y que se corresponden con: el delito de concierto para delinquir[158], cargos que hacen parte de los patrones de macrocriminalidad de homicidios selectivos y múltiples, desplazamiento forzado y desaparición forzada, se concluye que se efectúa la dosificación punitiva a los postulados **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** (alias "El Ñato") y **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** (alias "Daniel"), por los siguientes cargos y delitos:

[157] Audio "08001225200320208498600_20230323_01", Rec. 2:16:56, sesión de audiencia del 23 de marzo de 2023.
[158] Solo respecto del postulado JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA.

POSTULADO.	PATRÓN.	CARGOS.	DELITOS.
JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA (alias "El Ñato").	**Concierto para delinquir.**	**1.**	Concierto para delinquir, artículo 340 del Código Penal, con el agravante contenido en el inciso segundo *ejusdem*.
	Homicidios selectivos y múltiples.	**2.**	Homicidio en persona protegida, artículo 135, con las circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58 numeral 5 del Código Penal.
		3.	Homicidio en persona protegida, artículo 135, con las circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58 numeral 5 del Código Penal.
		4.	Homicidio en persona protegida, artículo 135, con las circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58 numerales 5 y 8 del Código Penal.
		5.	Homicidio en persona protegida, artículo 135, con las circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58 numerales 5 y 8 del Código Penal.
		6.	Homicidio en persona protegida, artículo 135, con las circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58 numeral 5 del Código Penal.
		7.	Homicidio en persona protegida, artículo 135, con las circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58 numeral 5 del Código Penal.
		8.	Homicidio en persona protegida, artículo 135, con las circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58 numerales 5 y 8 del Código Penal.
		9.	Homicidio en persona protegida, artículo 135, con las circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58 numerales 5 y 8 del Código Penal.
		10.	Homicidio en persona protegida, artículo 135, con las circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58 numerales 5 y 8 del Código Penal.
	Desplazamiento forzado.	**18.**	Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, artículo 159 del Código Penal.
		19.	Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, artículo 159 del Código Penal.
		20.	Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, artículo 159 del Código Penal.
	Desaparición forzada	**46.**	Desaparición forzada, artículo 165 del Código Penal.
		47.	Desaparición forzada, artículo 165 del Código Penal.
		48.	Desaparición forzada, artículo 165 del Código Penal, en concurso homogéneo y sucesivo.

POSTULADO.	PATRÓN.	CARGOS.	DELITOS.
LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO (alias "Daniel").	**Homicidios selectivos y múltiples.**	**11**	Secuestro simple, artículo 168 del Código Penal.
		12.	Homicidio en persona protegida, artículo 135, con las circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58 numerales 5 y 8 del Código Penal.
		14.	Homicidio en persona protegida, artículo 135, en concurso homogéneo y sucesivo, con las circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58 numerales 5 y 8 del Código Penal.
		15.	Homicidio en persona protegida, artículo 135, con las circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58 numerales 5 y 8 del Código Penal.
		16.	Homicidio en persona protegida, artículo 135, con las circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58 numerales 5 y 8 del Código Penal.
		17.	Homicidio en persona protegida, artículo 135, con las circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58 numerales 5 y 8 del Código Penal.
	Desplazamiento forzado.	**21.**	Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, artículo 159 del Código Penal.
		22.	Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, artículo 159 del Código Penal.
		23.	Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, artículo 159 del Código Penal.
		24.	Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, artículo 159 del Código Penal.
		25.	Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, artículo 159 del Código Penal.
		26.	Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, artículo 159 del Código Penal.
		27.	Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, artículo 159 del Código Penal.
		28.	Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, artículo 159 del Código Penal.
		29.	Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, artículo 159 del Código Penal.
		30.	Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, artículo 159 del Código Penal.
		31.	Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, artículo 159 del Código Penal.
		32.	Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, artículo 159 del Código Penal.
		33.	Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, artículo 159 del Código Penal.

POSTULADO.	PATRÓN.	CARGOS.	DELITOS.
		34.	Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, artículo 159 del Código Penal.
		35.	Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, artículo 159 del Código Penal.
		36.	Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, artículo 159 del Código Penal.
		37.	Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, artículo 159 del Código Penal.
		38.	Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, artículo 159 del Código Penal.
		39.	Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, artículo 159 del Código Penal.
		40.	Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, artículo 159 del Código Penal.
		41.	Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, artículo 159 del Código Penal.
		42.	Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, artículo 159 del Código Penal.
		43.	Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, artículo 159 del Código Penal.
		44.	Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, artículo 159 del Código Penal.
	Desaparición forzada.	**49.**	Desaparición forzada, artículo 165 del Código Penal.

Generalidades.

En el presente apartado de la decisión, se procede a realizar la correspondiente dosificación punitiva y el señalamiento de las penas acorde con las garantías de legalidad y favorabilidad conforme a la normativa vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos; empero, con relación a los hechos que tuvieron ocurrencia antes de la entrada en vigencia de la Ley 599 de 2000[159] si así se advirtiera, que introdujo el título II, capítulo único, de los *"Delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario"*, es dable en todas las sentencias que se emitan en Justicia y Paz, por esta Sala considerar como se ha venido haciendo la variación de la tipificación de los hechos atribuidos a los postulados de los delitos comunes a aquellos contra bienes y personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, debido a su grave connotación por su carácter de crímenes de guerra y lesa humanidad, lo que

[159] 24 de julio de 2001.

comportó, de contera, graves afectaciones al DIH y a los DDHH, atendiendo, para tal efecto, al criterio de legalidad extendida[160], conforme a los compromisos internacionales asumidos por Colombia, de sancionar los delitos más atroces contra los derechos humanos.

Como lineamientos generales frente a las sentencias proferidas por esta Sala de Justicia y Paz, hemos encontrado como importante directriz que nuestra máxima autoridad de justicia Corte Suprema en su Sala de Casación Penal ha indicado que:

"sin importar el momento de la comisión del delito de guerra el mismo debe ser juzgado, pero a la vez que el Estado en que se cometió tiene derecho a investigarlo y en dado caso a imponer las condenas de rigor (…) En este orden, en tratándose de crímenes internacionales la legalidad supone la integración de los tratados internacionales a los sistemas jurídicos domésticos con plenos efectos como la ley previa para hacer viable su sanción, ***así los mismos no estuvieran formalmente tipificados en la legislación nacional al momento de su comisión****, tal como se ha concluido en procesos adelantados por las Cortes Supremas de Justicia de Uruguay[161], Argentina[162], Chile[163] y Perú, entre otros.*

(…)

Hay que ser enfáticos en señalar que dicha flexibilidad al principio de legalidad ***es atendible exclusivamente a las cuatro categorías de los llamados delitos internacionales, vale decir a los crímenes de genocidio, agresión, de lesa humanidad y contra el derecho internacional humanitario****.*

La Sala recientemente se ocupó del asunto reconociendo calidad de fuente de derecho penal a los tratados internacionales suscritos por nuestro Estado con indiferencia de ley interna que los concrete y viabilice; y por tal razón, desde su entrada en vigencia se legitima la punibilidad de las conductas descritas en tales instrumentos y por tanto se entienden incorporadas al ordenamiento jurídico nacional[164].

---

[160] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 16 de diciembre de 2010, rad. 33.039, M.P. José Leónidas Bustos Martínez.
[161] Cita de la Corte *"Caso "Plan Cóndor " en Uruguay, sentencia contra José Niño Gavazzo Pereira y otros; en el mismo sentido la sentencia contra Juan María Bordaberry de 10 de febrero de 2010".*
[162] Cita de la Corte *"Recurso promovido en representación del Gobierno de Chile (Enrique Lautaro Arancibia Clavel).*
[163] Cita de la Corte *"Cas o Molco de Choshuenco (Paulin o Flore s Riva s y otros); también Sentencia contra Alberto Fujimori, de 19 de abril de 2009".*
[164] Cita de la Corte *"Auto de 13 de mayo de 2010, radicado 3311".*

Así, siendo que las conductas contra el llamado Derecho Internacional Humanitario contenidas en los cuatro convenios ginebrinos de 1949 y sus dos protocolos adicionales, tienen rango de Tratado Internacional de Derechos Humanos, son incorporadas automáticamente a la legislación interna desde que se surtieron en nuestro país todos los pasos para que tal calidad pudiera ser predicada de los mencionados acuerdos internacionales"[165].

Conforme lo advertido, atendiendo al criterio de flexibilización de la garantía de legalidad, con relación a los hechos que revistan características de delitos internacionales que no estuvieren formalmente tipificados en la legislación interna al momento de su comisión, resulta procedente su juzgamiento como tales.

En el caso que nos ocupa vemos como los cargos y delitos imputados y formulados que se encuadran los patrones de macrocriminalidad de concierto para delinquir, homicidio selectivos y múltiples, desplazamiento forzado y desaparición forzada, que acabamos de reseñar uno a uno como aquellos respecto de los cuales se efectuará la correspondiente dosificación punitiva a los postulados **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** (alias "El Ñato") y **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** (alias "Daniel"), se encuentran tipificados como conductas punibles en la ley 599 de 2000, por la cual conforme al diario oficial No. 44.097 de julio 24 de 2000, se expidió el código penal colombiano el cual prevé en su artículo 1º como norma rectora la dignidad humana, previendo que el derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana y en su artículo 2º la integración conforme a lo cual las normas y postulados que sobre derechos humanos se encuentran consignadas en la constitución nacional en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia hacen parte integral de este código teniendo prelación lo establecido en los tratados y convenios internacionales que traten sobre DDHH y que prohíban su limitación durante los estados de excepción por formar parte del bloque de constitucionalidad, en este orden, tenemos que el delito de concierto para delinquir está previsto como conducta punible en el ordenamiento interno en el artículo 340 de la Ley 599 de 2000, que a su tenor contempla que este se comete "*Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada,…"*, en el presente caso el delito se imputó con el agravante contenido en el inciso segundo de dicho artículo que prevé un aumento de la pena imponible cuando el concierto

[165] Decisión ya citada, del 16 de diciembre de 2010, rad. 33.039, M.P. José Leónidas Bustos Martínez; tesis reiterada, entre otras, en la decisión del 27 de enero de 2016, rad. 44462, M.P. Luis Guillermo Salazar Otero.

sea para cometer delitos de *genocidios*, *desaparición forzada de personas*, *tortura*, *desplazamiento forzado*, *homicidio*, *terrorismo*, trafico, fabricación o porte de estupefacientes, *secuestro simple, secuestro extorsivo, extorsión, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y la administración de recursos relacionada con actividades terroristas y de la delincuencia organizada entre otros,* e igualmente, se aumenta hasta en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir, en texto anterior este artículo 340 del código penal, aparece modificado por el artículo 8º de la ley 733 de 2002, contemplando una pena por esa sola conducta de prisión de tres (3) hasta seis (6) años, y el inciso segundo 2º modificado por el artículo 19 de la ley 1121 de 2006, que refiere al aumento de la pena cuando se incurra en las conductas y circunstancias allí previstas y que refieren a la concertación para cometer los ilícitos citados en precedencia y para quienes concurran los comportamientos de organización, fomento, promoción, dirección, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir, en cuanto al delito de homicidio en persona protegida este se encuentra previsto en el artículo 135 del código penal, que en la actualidad contempla penas aumentadas por el artículo 14 de la ley 890 de 2004, *(lo comete quien con ocasión y en desarrollo de conflicto armado ocasione la muerte de persona protegida conforme a los convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia),* previendo un segundo inciso adicionado por el artículo 27 de la ley 257 de 2008, que contempla un aumento de la pena de una tercera parte a la mitad cuando se cometiere contra una mujer por el hecho de ser mujer, en su texto original o primario el artículo 135 numeral 1º prescribía una pena de prisión hasta de *cuarenta (40) años, multa de dos mil (2.000) a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años*, para los efectos del artículo 135 y las demás normas del título 2º de los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario se entiende por persona protegida conforme a este derecho internacional humanitario:

1. Los integrantes de la población civil.

2. Las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa.

3. Los heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate.

4. El personal sanitario o religioso.

5. Los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados.

> *6. **Los combatientes que hayan depuesto las armas por captura, rendición u otra causa análoga**. (la subraya es por cuanto esta expresión fue declara exequible por los cargos analizados por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-291-07 Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa).*[166]
>
> *7. Quienes antes del comienzo de las hostilidades fueren considerados como apátridas o refugiados.*
>
> *8. Cualquier otra persona que tenga aquella condición en virtud de los Convenios I, II, III y IV de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales I y II de 1977 y otros que llegaren a ratificarse.*

Para la Sala estos numerales del artículo 135 del código penal, no son taxativos, pues la misma disposición deja abierta la posibilidad para la adición de nuevas categorizaciones de personas protegidas por el derecho internacional humanitario mediante convenios ratificados eventualmente.

Igualmente, a de advertirse que las personas en la citada norma categorizadas, no solo se predican respecto del tipo penal de homicidio en persona protegida, sino que se extienden a las demás disposiciones que comprenden el título II de la parte especial del Código Penal, lo cual se desprende del parágrafo del artículo 135 en mención aplicable como hemos visto conforme a los cargos imputados y legalizados en este proceso a este caso en particular.
aplicados ya citado.

Así lo expuesto, el termino de persona protegida es aplicable a toda persona que tenga derecho a protección en virtud de uno o más de los convenios de Ginebra o Derecho Internacional Humanitario dentro de los cuales están la población civil que siendo miembros de esta no participan activamente de las hostilidades o que caen en manos de la parte adversa en conflicto, el personal militar puesto fuera de combate por enfermedad, heridas, detención, los náufragos y el personal combatiente que haya depuesto las armas o rendición o que haya sido capturado u otra circunstancia análoga, el personal médico, religioso y los corresponsales de guerra y los periodistas acreditados.

Recurriendo a los convenios I, II, III y IV de Ginebra del año 1949, junto con sus protocolos adicionales son personas protegidas, aquellas a las que se aplica un tratado humanitario particular, esto es, aquellas que en tiempo de conflicto para el caso de Colombia interno son favorecidas o asistidas por normas tanto nacionales como internacionales, privilegiando el concepto de dignidad humana.

---

[166] Ver también Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal Proceso No. 40005 del 8 de mayo de 2019.

Definido el concepto de persona protegida podría decirse de manera simple y comprensible, respetando la definición que de ello hace el artículo 135 del Código Penal, que el homicidio en persona protegida se configura cuando se le causa la muerte a persona que ostenta el estatus de persona protegida en desarrollo y con ocasión de un conflicto armado, conforme a todo lo que viene expuesto, vemos como el Derecho Internacional Humanitario protege a una amplia gama de personas y bienes durante los conflictos armados, en efecto, los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales protegen a los enfermos, a los heridos, a los náufragos que no participan en las hostilidades, a los prisioneros de guerra y otros detenidos, a los civiles y a los bienes de carácter civil.

La Corte Constitucional Colombiana a definido el Derecho Internacional Humanitario como: *"la codificación del núcleo inderogable de normas mínimas de humanidad que rigen en los conflictos armados y que, como tales, constituyen un valioso instrumento jurídico para lograr la efectividad plena del principio de la dignidad humana, aun en las más difíciles y hostiles circunstancias y sus disposiciones se aplican independientemente de si los países se han comprometido o no jurídicamente en la adopción de tales disposiciones, por tratarse de prácticas consuetudinarias de carácter imperativo, que responden a presupuestos éticos mínimos y exigibles a todas las partes del conflicto, se trate de un conflicto nacional o internacional",* en tratándose de conflicto armado interno en Colombia, es indudable que nos encontramos ante un fenómeno que ha perdurado por décadas y que se extiende a la actualidad, los historiadores remontan sus antecedentes y causas a la etapa conocida como la violencia, ello, "*que enfrentó a los partidos liberal y conservador, aproximadamente entre los años 1928 y 1958, avanzados los años y más recientemente, se reconocen como los principales actores del conflicto armado interno en Colombia, a las guerrillas de estrena izquierda o grupos subversivos, los grupos paramilitares de extrema derecha, los grupos de autodefensas, de los cuales tomaron el nombre, los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, y a esto se le suman los carteles del narcotráfico, las llamadas bandas criminales y los demás grupos armados organizados al margen de la ley, que cumplan con las características sometidas a los análisis legales, constitucionales y jurisprudenciales*"

Finalmente, el Estado Colombiano, conflicto armado que ha desencadenado una ostensible violencia directa, con graves violaciones a los derechos humanos y de los postulados del Derecho Internacional Humanitario, ha sido un enfrentamiento armado prolongado entre fuerzas armadas gubernamentales y uno o más de los mencionados grupos armados ilegales o estos entre sí, en el territorio del estado con graves afectaciones a las prescripciones del Derecho Internacional Humanitario extendido a la población civil a los no combatientes que se han visto

abocados a sufrir las inclemencias de estas olas de violencia y afectaciones a sus derechos humanos dentro de los cuales está su honra, su bueno nombres y sus bienes que han adquirido el estatus todas estas de personas protegidas respeto de las cuales el legislador en concordancia con los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia ha estructurado algunos tipos penales autónomos y específicos para su especial protección dentro de los cuales se encuentra el referido homicidio en persona protegida descrito en el también referido artículo 135 del Código Penal, fue a partir de la Constitución de 1991, cuando Colombia confirió la necesaria importancia a la normatividad y postulados internacionales sobre derechos humanos, los cuales hacen parte integral del Código Penal, que tal como viene advertido estos tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia tienen prelación y hacen parte del bloque de constitucionalidad.

En el cargo No. 11, que se atribuye como delito imputado y formulado de homicidio en persona protegida, observamos que se encuentra concursando de manera homogénea y sucesiva con el de secuestro simple, conforme a la variación hecha por la Sala por los motivos claramente expuestos en precedencia en el cuerpo de esta sentencia, delito que se encuentra tipificado como conducta punible en el artículo 168 del Código Penal, modificado por el artículo primero de la Ley 733 de 2000, penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, e incurren en el quien con propósitos distintos a los previstos en el artículo 169 del Código Penal, arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, siendo estos propósitos contemplados en el mencionado artículo 169, los de exigir por la libertad del secuestrado en cualquiera de sus verbos rectores cualquier provecho o cualquier utilidad o para que se haga u omita algo o con fines publicitarios o de carácter político.

Así la definición legal de este delito permite realizar o advertir la diferencia que existe entre una y otra conducta en la modalidad simple y la modalidad agravada, y ellos se encuentra en el propósito de obtener un provecho o utilidad ilícitos como elemento subjetivo, su agotamiento se perfecciona entonces cuando se obtiene efectivamente el provecho, no obstante, no se requiere para su consumación, pues es suficiente con que el infractor actúe motivado intencionalmente con el propósito tal como lo ha direccionado la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación radicado No. 45.795.

Sobre la distinción entre la modalidad simple y la extorsiva, la jurisprudencia de la Corte ha dilucidado en decisión, por ejemplo, la fechada 11 de marzo de 2004, radicado 28.563, que el delito de secuestro ha tenido tradicionalmente como bien jurídico protegido la libertad individual en el sentido básico que involucra privar

a otro del derecho de locomoción, esto es, de aquella posibilidad de disponer según su voluntad del lugar en el que quiere permanecer o ir, dos, han sido entonces las modalidades de este atentado a la libertad individual de las que se ha ocupado la doctrina y que a su turno el legislador ha erigido en hechos punibles el secuestro simple que es el que atañe a nuestra decisión y el secuestro extorsivo al cual remite la primera norma que define el secuestro simple empleándose en una y otra descripción típica exactamente los mismos verbos o núcleos rectores delimitadores del ámbito de la conducta, está en curso en el relato de secuestro, quien arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona se trata por ende de una descripción típica, compuesta y alternativa, común a ambas especies, emergiendo como elemento diferenciador de una y otra modalidad la introducción de ingredientes subjetivos específicos para el secuestro extorsivo, esto es, que el delito se cometa con el propósito de exigir por la libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga humita algo o con fines publicitarios o de carácter político, en tanto que el secuestro simple en este proceso endilgado obedece a *"propósitos distintos a los enunciados".*

Hay tipos penales en lo que el aspecto subjetivo se agota en el dolo como voluntad consciente de la realización del hecho, pero hay otros en los cuales dicho componente requiere un plus subjetivo, esto es, una finalidad que persigue un objeto que se encuentra más allá de la realización del tipo objetivo y que permite concebir en abstracto dos momentos distintos: el primero que se ejecuta al actualizar el tipo penal, en tanto que el otro, si bien depende del primero como su presupuesto, no requiere una concreta realización, pero sí la exteriorización de una particular intención o tendencia que se procura alcanzar con el hecho, por tanto, los denominados elementos subjetivos del tipo distintos del dolo son propósitos definidos o destacar las finalidades que van más allá de la realización del tipo objetivo y que suponen en el autor un determinado cometido o intención que se pone de presente en la forma como actualiza el tipo objetivo, en el punible de secuestro simple se diferencia el extorsivo por la dirección finalista de la voluntad del agente que se dirige hacia la obtención de algunos de los propósitos con el hecho que el tipo penal ha señalado, esto es, que a cambio de la liberación se hace una exigencia.

Ha dicho la Honorable Corte Suprema de Justicia: *"que dicha exigencia está expresamente enunciada en el tipo penal a través de diversas alternativas y variables, en tanto que en el secuestro simple no es precisado el objeto que motiva la realización de la conducta, pues no se enuncia coerción particular y concreta alguna como finalidad destacada, dejando abierta la misma a la dirección de la voluntad hacia propósitos diversos de aquellos delimitados para el modelo extorsivo del secuestro, sin que ello signifique que dicho atentado a la libertad*

carezca de una finalidad, sino que obedece a un cometido diferente, no otro puede ser el entendimiento de la expresión "con propósitos distintos" a los señalados para el secuestro extorsivo por el artículo 169 del Código Penal, a que alude el artículo 168, ejusdem, de manera que tal y como es destacado, se puede afirmar que dada la utilización de un ingrediente subjetivo indeterminado y de condición residual, podría pensarse que el legislador colombiano, frente al secuestro simple en realidad no utilizó este instrumento de precisión típica refiriéndose solo al propósito distinto del extorsivo, con la única finalidad de distinguir la hipótesis del secuestro extorsivo, que exige constatación del propósito expresamente señalado en la descripción típica del secuestro simple, que parecería no requiere constatación concreta de intención, bastando solo la precisión de que la actuación del actor no está motivada por el propósito requerido".

Este último acierto lo encuentra la Corte Suprema de Justicia, equivocado por cuanto en realidad la presencia típica de un ingrediente subjetivo y residual en caso del secuestro simple exige una averiguación en el caso concreto sobre la finalidad delictiva del actor para excluir racionalmente la modalidad delictiva del secuestro extorsivo y, además, para constatar el motivo ilícito del secuestro, pues si no fuera así en forma equivocada llamaríamos conducta típica de secuestro la retención contra su voluntad, por ejemplo, de un menor hecha con el propósito de que no atraviese un río caudaloso o el ocultamiento, también contra su voluntad de una persona de quien se sabe sus enemigos la acechan para eliminarla, es entendible así, por ende, que tanto el delito de secuestro extorsivo que contempla un elemento subjetivo fijo delimitado en el propósito que señala la ley como el delito de secuestro simple de carácter residual, también nuestro legislador ha previsto como lógico presupuesto el acto de coartar la libertad de una persona que la conducta esté motivada en una finalidad concreta verificable en cada caso diversa, según el mandato de la ley de aquella que motiva y direcciona el designio criminal en la exigencia del secuestro en este caso último predicable no respecto del secuestro simple sino la exigencia extorsiva.

Aunado a lo que ya viene expuesto y conforme viene advertido en el cuerpo de esta sentencia, hacen parte, igualmente, de los patrones de macrocriminalidad analizados en esta sentencia, el desplazamiento forzado y la desaparición forzada cometidos con ocasión y en razón del conflicto armado interno, al igual que la tortura y otras conductas que en Colombia son reconocidos como delitos de lesa humanidad, estos por primera vez fueron reconocidos en la Ley 589 de 2000, que modificó el Código Penal de 1980 y recogidos en la Ley 599 de 2000 en diversos títulos, según el bien jurídico lesionado.

Así lo reatos de desaparición forzada, desplazamiento forzado, tortura se consagraron en los artículos 165, 178 y 180 del Código Penal, respectivamente, en el título de los delitos contra la libertad individual y otras garantías, y el injusto de genocidio que también lo encontramos en el canon 101 *ejusdem* en el título de las infracciones contra la vida y la integridad personal, en efecto, el artículo 165 que a la fecha tiene unas penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, define la conducta de desaparición forzada como hecho punible, frente: *"al particular que someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación de dar información sobre su paradero sustrayéndola del amparo de la ley"*, por su parte el artículo 180 define el delito de desplazamiento forzado corregido por el artículo primero del Decreto 2667 de 2001, y penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, indicando que incurre en esta conducta punible: "*el que de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población, ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de residencia"* y aunque no aparezca en nuestro ordenamiento interno una norma que en estricto sentido defina los delitos de lesa humanidad, ello no impide su reconocimiento porque teniendo en cuenta el principio de integración que viene referido conforme al artículo 93 de la constitución nacional, debe acudirse a los instrumentos internacionales que en virtud del bloque de constitucionalidad, obligan en la interpretación y aplicación de las normas.

Con todo, los delitos de lesa humanidad no lo son, tal por el hecho de que de manera concreta y expresa así lo tipifique un código penal, sino que su reconocimiento se predica de la constitución de afrentas a la dignidad humana y en ese sentido extendida éstas a la humanidad como tal, ha señalado la jurisprudencia nacional que con la ejecución de los delitos de lesa humanidad no sólo se vulneran los bienes jurídicos de las víctimas, sino que afectan a todo el género humano en su conjunto por desconocer el respeto universal de los derechos humanos que se les da ese nombre porque agravian, lastiman y ofenden a la universalidad de los hombres, caracterizándose por que ofenden la conciencia ética de la humanidad y niegan la vigencia de las normas indispensables para la coexistencia humana.

Los tratados y convenios de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, ratificados por Colombia, en especial la convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1948, y aprobada mediante la Ley 28 de 1959, la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes adoptada por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 3946

del 10 de diciembre de 1984, aprobada por la Ley 70 de 1986 y ratificada el 8 de diciembre de 1987, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura aprobada mediante la Ley 408 del 28 de octubre de 1997, la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de junio 1994 y aprobada internamente por la Ley 707 de 2001, entre otros, prevalecen en el orden interno conforme al varias veces referido principio de integración, acudiendo al igualmente citado bloque de constitucionalidad, cláusula descrita en el artículo 93 de la carta política.

Para los delitos que siendo de lesa humanidad, hubieran sido ejecutados con anterioridad a la incorporación del delito de genocidio, la desaparición forzada y desplazamiento forzado en este asunto analizado también encontramos la tortura en el estatuto sustantivo penal colombiano o en los tratados que integran el bloque de constitucionalidad, se ha precisado que es el derecho consuetudinario internacional *ius cogens* el llamado a regular tales actos violentos, existen características en este orden que permiten diferenciar los delitos de lesa humanidad del resto de categorías de crímenes internacionales y de los delitos comunes, dentro de lo cual ha de destacarse en cita de la Corte Suprema de Justicia, los siguientes:

1. Corresponden a ultrajes especialmente lesivos de la dignidad humana, que degradan de forma grave los más caros intereses del ser humano, como la vida, la libertad, la integridad física, la honra, entre otros.

2. Se trata de eventos sistemáticos y generalizados, no aislados o esporádicos, que representan una política deliberada del Estado ejecutada por sus agentes o una práctica inhumana tolerada por el mismo desplegada por actores no estatales, que el ataque se ha generalizado significa que puede ser un acto a gran escala o múltiples actos que involucran un número importante de víctimas, por su parte, las sistematicidad resulta de que la conducta sea el resultado de una planificación metódica, inmersa en una política común.

3. Pueden ser cometidos en tiempo de guerra o en tiempo de paz.

4. El sujeto pasivo primario de las conductas es fundamentalmente la población civil y en un plano abstracto, pero con natural a la ofensiva contra la individualidad del ser humano y su sociabilidad la humanidad en general.

5. El móvil debe descansar en criterios discriminatorios por razón de raza, condición, religión, ideología política, etc.

En este sentido, la alta corporación de Justicia en nuestro país ha precisado que: *"el crimen de lesa humanidad se distingue de otros crímenes porque: a. no puede tratarse de un acto aislado o esporádico de violencia, sino que debe hacer parte de un ataque generalizado, lo que quiere decir que está dirigido contra una multitud de personas; b. el sistemático porque se inscribe en un plan criminal cuidadosamente orquestado que pone en marcha medios, tanto públicos como privados, sin que necesariamente se trate de la ejecución de una política de Estado; c. las conductas deben implicar la comisión de actos inhumanos, de acuerdo con la lista que provee el mismo estado; d. el ataque debe ser dirigido exclusivamente contra la población civil; y, e. el acto debe tener un móvil discriminatorio, bien que se trate de motivos políticos, ideológicos, religiosos, étnicos o nacionales"*[167].

De ahí que la Corte haya definido a tales delitos como aquellas infracciones graves al Derecho Internacional de los derechos humanos que ofenden la conciencia ética de la humanidad y niegan la vigencia de las normas indispensables para la coexistencia humana[168].

1. De los delitos en particular.

Acreditada la certeza de las conductas delictivas y la responsabilidad de los postulados aquí sentenciados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** (alias "Daniel") y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** (alias "El Ñato"), se procede a dosificar la pena que corresponda imponer, para lo cual se tendrán en cuenta las previsiones consagradas en los artículos 60, 61 y siguientes del Código Penal Ley 599 de 2000, el artículo 60, en referencia, consagra lo concerniente a los parámetros para la determinación de los mínimos y máximos aplicables previendo que para efectuar el proceso de individualización de la pena, el sentenciador deberá fijar en primer término los límites mínimos y máximos en los que se ha de mover para ello, y cuando hubiere circunstancias modificadoras de dichos límites, deben aplicarse las siguientes reglas:

1. Si la pena se aumenta o disminuye en una proporción determinada, esta se aplicará al mínimo y al máximo de la infracción básica.

2. Si la pena se aumenta hasta en una proporción, esta se aplicará al máximo de la infracción básica.

[167] Corte Suprema de Justicia AP 13/05/2010 radicado No. 33.118.
[168] Corte Suprema de Justicia SP 21/09/2009 Radicado No. 32.022.

3. Si la pena se disminuye hasta en una proporción, esta se aplicará al mínimo de la infracción básica.

4. Si la pena se aumenta en dos proporciones, la menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo de la infracción básica.

5. Si la pena se disminuye en dos proporciones, la mayor se aplicará al mínimo y la menor al máximo de la infracción básica.

Por su parte el artículo 61 consagra los fundamentos para la individualización de la pena, modificado por el artículo 4º de la Ley 2098 de 2021, que nos enseña: "*Efectuado el procedimiento anterior, el sentenciador dividirá el ámbito punitivo de movilidad previsto en la ley en cuartos: uno mínimo, dos medios y uno máximo.*

El sentenciador solo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias de atenuación punitiva, dentro de los cuartos medios cuando concurran circunstancias de atenuación y de agravación punitiva, y dentro del cuarto máximo cuando únicamente concurran circunstancias de agravación punitiva.

Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá determinarse la pena, el sentenciador la impondrá ponderando los siguientes aspectos: la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrente, la necesidad de pena y la. función que ella ha de cumplir en el caso concreto.

Además de los fundamentos señalados en el inciso anterior, para efectos de la determinación de la pena, en la tentativa se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo y en la complicidad el mayor o menor grado de eficacia de la contribución o ayuda…".

En cuanto a los patrones de macrocriminalidad y los delitos que encierran estos iniciamos este caso con:

1.1. Concierto para delinquir.

Teniendo en cuenta la forma y términos en que se efectuó la legalización del cargo, y en consideración al periodo en el que se ejecutó el delito y que es objeto de sentencia en esta oportunidad, esto es, se recuerda, desde 25 septiembre 2004 al 14 Julio de 2005, deberá escogerse la norma vigente para esa época que

corresponde al artículo 340 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8 de la Ley 733 de 2002, que preveía *una pena de prisión que oscilaba entre seis (6) a doce (12) años y multa de dos mil (2.000) hasta veinte mil (20.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes*, porque el concierto se dio para cometer delitos de *desaparición forzada de personas, desplazamiento forzado* y *homicidio.*

Además, teniendo en cuenta el inciso segundo de ese artículo, esa pena privativa de la libertad se aumenta en la mitad ya que el postulado **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** *organizó, dirigió y promovió grupos al margen de la ley*, por lo que, de acuerdo a las previsiones contenidas en el numeral 2 del artículo 60 del Código Penal[169], la pena definitiva queda establecida entre *nueve (9) a dieciocho (18) años* y *multa de tres mil (3000) hasta treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes*, de tal manera que los cuartos punitivos quedarán así[170]:

Prisión

ÁMBITO PUNITIVO 27 meses	216 meses – 108 meses = 108 meses / 4 = 27 meses.	

Cuarto Mínimo	**Cuartos Medios**		**Cuarto Máximo**
108 meses a 135 meses	135 meses a 162 meses	162 meses a 189 meses	189 meses a 216 meses

Multa

ÁMBITO 6.750 smlmv	30.000 smlmv – 3.000 smlmv = 27.000 smlmv/4 = 6.750 smlmv.		
Cuarto Mínimo	**Cuartos Medios**		**Cuarto Máximo**
3000 a 9750 smlmv	9750 a 16500 smlmv	16500 a 23250 smlmv	23250 a 30000 smlmv

En los términos de las disposiciones sustantivas que hacen referencia a la determinación e individualización de la pena, artículos 60 y 61 del Código Penal, hemos visto como el operador jurídico por mandato legal solo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente causales de atenuación punitiva[171]; este artículo 53 del Código Penal,

[169] *"Si la pena se aumenta o disminuye en una proporción determinada, ésta se aplicará al mínimo y al máximo de la infracción básica".*
[170] El artículo 60 del Código Penal, establece que una vez determinados los límites, se debe proceder conforme a lo determinado en el canon 61 de la misma Ley, por lo que se dividirá el ámbito punitivo de movilidad en cuartos, uno mínimo, dos medios y uno máximo.
[171] No sobra precisar que cuando la norma alude a atenuantes y agravantes en el proceso de dosificación, para tal efecto debe entenderse las circunstancias de menor y mayor punibilidad contenidas en los cánones 55 y 58

nos enseña que como circunstancias de menor punibilidad siempre que no hayan sido previstas de otra manera, la carencia de antecedentes penales, el obrar por motivos nobles o altruistas, el obrar en estado de emoción, pasión excusables o de temor intenso, la influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en la ejecución de la conducta punible, procurar voluntariamente después de cometida la conducta, anular o disminuir sus consecuencias, reparar voluntariamente el daño ocasionado, aunque no sea en forma total, así mismo, si se ha procedido a indemnizar a las personas afectadas con el hecho punible presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la conducta punible o evitar la injusta sindicación de terceros, la indigencia o la falta de ilustración en cuanto hayan influido en la ejecución de la conducta punible, las condiciones de inferioridad síquica determinadas por la edad o por circunstancias orgánicas en cuanto hayan influido en la ejecución de la conducta punible y cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores.

Por su parte el artículo 58 del Código Penal referido, consagra lo concerniente a las circunstancias de mayor punibilidad, modificado por el artículo 7 de la Ley 2197 de 2022, indicando que lo son siempre que no hayan sido previstas de otra manera:

1. Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad.

2. Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria.

3. Que la ejecución de la conducta punible este inspirada en móviles de intolerancia y discriminación, referidos a la raza, la etnia, la ideología, la religión, o las creencias, sexo u orientación sexual, o alguna enfermedad o minusvalía de la víctima.

4. Emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso pueda resultar peligro común.

5. Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la condición de superioridad sobre la víctima, o aprovechando circunstancias de tiempo, modo, lugar que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor o participe.

---

respectivamente del Código Penal. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 4 de febrero de 2003, rad. 16481 M.P. Yesid Ramírez Bastidas; decisión del 31 de agosto de 1995, rad. 8866, M.P. Ricardo Calvete Rangel, entre otras.

6. Hacer más nocivas las consecuencias de la conducta punible.

7. Ejecutar la conducta punible con quebrantamiento de los deberes que las relaciones sociales o de parentesco impongan al sentenciado respecto de la víctima.

8. Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a estos padecimientos innecesarios para la ejecución del delito.

9. La posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad, por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio.

10. Obrar en coparticipación criminal.

11. Ejecutar la conducta punible valiéndose de un inimputable.

12. Cuando la conducta punible fuere cometida contra servidor público por razón del ejercicio de sus funciones o de su cargo, salvo que tal calidad haya sido prevista como elemento o circunstancia del tipo penal.

13. Cuando la conducta punible fuere dirigida o cometida total o parcialmente desde et interior de un lugar de reclusión por quien estuviere privado de su libertad, o total o parcialmente fuera del territorio nacional.

14. Cuando se produjere un daño ambiental grave, una irreversible modificación del equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales o se cause la extinción de una especie biológica.

15. Cuando para la realización de la conducta punible se hubieren utilizado explosivos, venenos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva.

16. Cuando la conducta punible se realice sobre áreas de especial importancia ecológica o en ecosistemas estratégicos definidos por la ley o los reglamentos.

17. Numeral adicionado por el Art. 2 de la Ley 1273 de 2009. Cuando para la realización de las conductas punibles se utilicen medios informáticos, electrónicos o telemáticos.

18. Numeral adicionado por el Art. 3 de la Ley 1356 de 2009. Cuando la conducta punible fuere cometida total o parcialmente en el interior d un

escenario deportivo, o en sus alrededores, o con ocasión de un evento deportivo, antes, durante o con posterioridad a su celebración.

19. Numeral adicionado por el Art. 7 de la Ley 2197 de 2022. Corregido por el Art. 4 del Decreto 207 de 2022. Cuando el procesado, dentro de los sesenta (60) meses anteriores a la comisión de la conducta punible, haya sido condenado mediante sentencia en firme por delito doloso.

20. Numeral adicionado por el Art. 7 de la Ley 2197 de 2022. Corregido por el Art. del Decreto 207 de 2022. Cuando para la realización de la conducta punible se hubiere utilizado arma blanca, de fuego, armas, elementos y dispositivos menos letales.

21. Numeral adicionado por el Art. 7 de la Ley 2197 de 2022. Corregido por el Art. 4 del Decreto 207 de 2022. Cuando las armas, elementos, dispositivos o municiones menos letales hayan sido modificadas en sus características de fabricación u origen, que aumenten su letalidad.

22. Cuando con la conducta punible se dirija o tenga por propósito impedir, obstaculizar, represaliar o desincentivar la labor de las mujeres cuya actividad, de forma permanente o transitoria, sea la búsqueda de víctimas de desaparición forzada y esclarecimiento de la verdad.

El parágrafo de dicho artículo consagra que se entiende como arma blanca un elemento punzante, cortante, cortopunzante o cortocontundente.

La Fiscalía General de la nación, en este caso la Fiscalía Delegada que ha actuado dentro del presente proceso imputó a los postulados en algunos de los hechos punibles atribuidos a los postulados aquí sentenciado los numerales 5º y 8º de este artículo que se acaba de poner de presente 58 del Código Penal como circunstancias de mayor punibilidad, a los cuales más adelante y a medida que vayamos imponiendo las penas en concreto aludiremos.

Aquí dentro de los cuartos medios, cuando se encuentren circunstancias de atenuación y de agravación; y dentro del cuarto máximo cuando únicamente se presenten eventos de agravación punitiva[172].

[172] Reglas que es necesario tener en cuenta en la labor de dosificación punitiva que adelante la Sala con relación a todos los delitos que fueron encontrados demostrados y respecto de los cuales se predica responsabilidad del aquí postulado.

Reglas que es necesario tener en cuenta en la labor de dosificación punitiva que adelanta la Sala con relación a todos los delitos que fueron encontrados demostrados y respecto de los cuales se predica la responsabilidad de los postulados.

Se procede a determinar la sanción dentro del **cuarto mínimo**, atendido a que, tal y como quedó reseñado en el apartado en donde se analizó el delito de concierto para delinquir, la Fiscalía no realizó imputación de circunstancias de mayor punibilidad establecidas como *numerus clausus* en el artículo 58 *ibidem* que acabamos de reseñar.

Determinado el cuarto de movilidad, se entra a establecer la sanción que finalmente se impone, para lo cual se deben considerar factores que implican sin duda una valoración subjetiva, pero que quedaron evidenciadas, probadas debidamente en la actuación, tales como: la mayor o menor gravedad del hecho, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la necesidad de la pena y el daño real o potencial causado. En el evento *sub judice*, tratándose de un delito como el que se censura, resulta evidente que la conducta desplegada por el acriminado fue altamente lesiva, conllevó a socavar caros derechos de la sociedad, alterando el tejido social, y los mandatos constitucionales de convivencia pacífica y orden justo; además, como quedó visto, el postulado cumplió un papel preeminente en la organización delictiva, actuó en mancomún con otros integrantes de la organización ilegal Autodefensas Unidas de Colombia otrora para asegurar el éxito de sus actividades ilegales, y, en otros casos, determinó el actuar de hombres que estuvieron con él en el actuar ilegal.

Precisamente se predica un alto desvalor en los comportamientos criminales desplegados por **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** a quien se le imputó y formuló el cargo correspondiente a este delito y qué fue conocido para efectos de la historia con el alias de “El Ñato”, dentro de la organización al margen de la ley Autodefensas Unidas de Colombia, durante su permanencia en el Bloque Héroes de los Montes de María, por la calidad de los múltiples delitos que le han sido enrostrados, los cuales se enmarcaron en los patrones de macrocriminalidad de homicidios selectivos y múltiples desplazamiento forzado y desaparición forzada.

Como ha quedado precisado en esta sentencia, el postulado **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** (alias "El Ñato"), se desempeñó en el puesto de radio, urbano y segundo comandante de la urbana, lo que le implicó tener hombres a su mando, por manera que su rol en el grupo armado organizado al margen de la ley fue importante, y, prevalido de dicha posición, perpetró una cantidad considerable de delitos, pero además, tal y como quedó precisado en esta sentencia, el postulado ejerció roles de importancia dentro de la organización armada ilegal, pues no se le puede restar mérito a la importancia que tiene un puesto de radio dentro de una organización armada ilegal, el sicariato y el ser segundo comandante de una urbana, lo que le implicó tener varios hombres a su mando y prevalido de dicha posición, perpetró los luctuosos hechos que involucra esta sentencia.

De otro lado, con relación a la gravedad y a las implicaciones que tiene el punible de concierto para delinquir con fines de paramilitarismo, resulta pertinente traer a referencia que la Sala Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia dentro del radicado 29472[173] ha sostenido que debe considerarse como un delito de lesa humanidad, pues si la empresa criminal se organiza con el propósito de ejecutar delitos como desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos forzados, homicidios por razones políticas, etc., punibles que se entienden comprendidos dentro de la calificación de delitos de lesa humanidad, tal valoración debe extenderse al denominado concierto para delinquir agravado.

Teniendo en cuenta lo expuesto en precedencia, el juicio de reproche en contra del postulado **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** conlleva a que se le imponga la pena máxima de prisión del cuarto mínimo, esto es, ***ciento treinta y cinco (135) meses de prisión,*** **y** ***multa equivalente a nueve mil setecientos cincuenta (9750) salarios mínimos legales mensuales vigentes***.

1.2. Homicidio en persona protegida.

Para efectos de la dosificación punitiva, se recuerda que se encontró responsable a **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** del delito de homicidio en persona protegida en los cargos número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10; y a **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** en los cargos 11, 12, 14, 15, 16 y 17 constitutivos *del patrón de macrocriminalidad de homicidios selectivos y múltiples* en consideración a la fecha en que acontecieron los delitos se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 135 original de la normativa sustantiva penal, que

[173] En providencia de fecha 10 de abril de 2.008, M.P. Dr. YESID RAMÍREZ BASTIDAS

prescribía una pena de prisión de *treinta (30) a cuarenta (40) años, multa de dos mil (2.000) a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años*, de tal manera que los cuartos punitivos quedan de la siguiente manera:

Prisión

	ÁMBITO PUNITIVO **30 meses**	480 meses – 360 meses = 120 meses / 4 = 30 meses.	
Cuarto Mínimo	**Cuartos Medios**		**Cuarto Máximo**
360 meses a 390 meses	390 meses a 420 meses	420 meses a 450 meses	450 meses a 480 meses.

Multa

ÁMBITO **750 smlmv**	5.000 smlmv – 2.000 smlmv = 3.000 smlmv/4 = 750 smlmv.		
Cuarto Mínimo	**Cuartos Medios**		**Cuarto Máximo**
2000 a 2750 smlmv	2750 a 3500 smlmv	3500 a 4250 smlmv	4250 a 5000 smlmv

Inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas

ÁMBITO **15 meses**	240 meses – 180 meses = 60 meses /4 = 15.		
Cuarto Mínimo	**Cuartos Medios**		**Cuarto Máximo**
180 meses a 195 meses	195 meses a 210 meses	210 meses a 225 meses	225 meses a 240 meses

En el presente asunto se determinará la sanción respecto de los postulados referidos y sentenciados acá dentro del **cuarto máximo**, atendido a que la Fiscalía efectuó la imputación de circunstancias de mayor punibilidad, concretamente las consagradas en los numerales 5 y 8 del artículo 58 del Código Penal, que como se lo habíamos enunciado corresponde a la descripción normativa que puntualmente hemos puesto de presente en el cuerpo de esta sentencia en precedencia, advertido, además, que los cargos fueron aceptados por los postulados de manera voluntaria, espontánea, y asistidos por sus abogadas defensoras.

Así las cosas, establecidos los máximos en que ha de moverse la Sala, se entra a determinar la sanción finalmente imponible, atendiendo a la mayor o menor gravedad del hecho, la naturaleza de las causales que agravan o atenúan la punibilidad, la necesidad de la pena y el daño real o potencial causado. Al respecto, la Sala encuentra que este delito se enmarcó en un patrón de macrocriminalidad desarrollado por el grupo armado ilegal, cometido de manera sistemática y generalizada bajo políticas de lucha antisubversiva y control social territorial y de la llamada por ellos *"limpieza social"*, de donde se derivaron las prácticas de homicidios múltiples y selectivos, los cuales, sin lugar a dudas, respondieron a una estrategia para asumir el poder y el control en los territorios, así como sembrar terror entre la población con ese propósito, valiéndose de un *modus operandi* que consistió, en la mayoría de los casos, en el aprovechamiento de las condiciones de indefensión de las víctimas, el factor sorpresa, la superioridad fundada en el número de victimarios y en las armas de fuego que portaban, bajo el deshonroso e infundado señalamiento de haber sido varias de estas víctimas auxiliadoras y/o simpatizantes de grupos subversivos o en otros casos por haber sido categorizadas como indeseables por consumir estupefacientes o por haber sido señaladas infundadamente de cometer hurtos, lo que permite considerar los casos, además, como crímenes de lesa humanidad, conforme a lo consagrado en el artículo 7 del Estatuto de Roma y las referencias concretas que en análisis se ha hecho de la lesa humanidad dentro del cuerpo de esta decisión judicial.

Así mismo, los hechos acontecieron en desarrollo del conflicto armado interno, en el que las víctimas fueron civiles ajenos a esa confrontación; y, por lo tanto, deben considerarse personas internacionalmente protegidas en los términos de los Convenios y Protocolos de Ginebra de 1949 a los cuales también hemos hecho referencia dentro de esta decisión judicial, de ahí que sean catalogados también como crímenes de guerra que a más de desestabilizar y degradar la sociedad, develaron un total desprecio por la vida humana, la ausencia de valores esenciales para la convivencia y un alto nivel de intolerancia y de discriminación.

Acorde con las consideraciones antes expuestas, se impone a los postulados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** la pena máxima del cuarto máximo equivalente a *cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión*; e, igualmente, *multa igual a cinco mil (5000) salarios mínimos legales mensuales vigentes*.

De otra parte, verificado que el punible de homicidio en persona protegida fue cometido en concurso homogéneo y sucesivo, acorde con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 599 de 2000, debería incrementarse la pena hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles, debidamente dosificadas cada una de ellas, sin embargo, dado que el citado artículo 31, en su texto original, *establecía una pena máxima de prisión de 40 años* en tratándose del concurso de delitos, *no es posible hacer algún incremento punitivo*. Consideración diferente debe hacerse, en cuanto hace a la pena de multa contenida en el artículo 135 del Código Penal, en tato que, en tratándose del concurso de delitos resulta aplicable, inclusive, el límite máximo imponible, en concordancia con el artículo 39 *ejusdem*, que equivale a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En conclusión, se impone a los postulados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA,** la pena de ***cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión.*** En cuanto hace a la pena de multa, dada la magnitud del daño causado, debido a la cantidad significativa de víctimas que resultaron de los punibles de homicidio en persona protegida que se documentaron en los cargos legalizados, sumado a la intensidad de la culpabilidad de los acriminados y demás circunstancias puestas de presente en esta decisión concernientes al concurso de conductas punibles, se impone la pena de ***multa equivalente a veinte mil (20.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.***

Por último, en consonancia con lo expuesto, en concordancia con el artículo 52 del Código Penal, también se impone a los postulados ***la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas*** correspondiente al máximo, esto es, ***por un periodo igual a doscientos cuarenta (240) meses.***

1.3. Desaparición forzada.

En cuanto hace a la dosificación punitiva se tiene que a **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** se le encontró responsable en los cargos 46, 47 y 48 y el compromiso penal de **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** estuvo demostrado en el cargo No. 49 que conformaron el patrón de macrocriminalidad de desaparición forzada.

El delito de desaparición forzada aquí aplicable, se encuentra contenido en el artículo 165 del Código Penal, Ley 599 de 2000, en su texto original que establecía

una pena de prisión de veinte (20) a treinta (30) años, multa de mil (1.000) a tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes y de interdicción de derechos y funciones públicas de diez (10) a veinte (20) años, de donde se desprenden los cuartos punitivos que a continuación se expresan:

Prisión

	ÁMBITO PUNITIVO **30 meses**	240 meses – 120 meses = 120 meses / 4 = 30 meses.

Cuarto Mínimo	**Cuartos Medios**		**Cuarto Máximo**
120 meses a 150 meses	150 meses a 180 meses	180 meses a 210 meses	210 meses a 240 meses.

Multa

ÁMBITO **500 smlmv**	3000 smlmv – 1000 smlmv = 2000 smlmv/4 = 500 smlmv.

Cuarto Mínimo	**Cuartos Medios**		**Cuarto Máximo**
1000 a 1500 smlmv	1500 a 2000 smlmv	2000 a 2500 smlmv	2500 a 3000 smlmv

Inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas

ÁMBITO **30 meses**	240 meses – 120 meses = 120 meses /4 = 30.

Cuarto Mínimo	**Cuartos Medios**		**Cuarto Máximo**
120 meses a 150 meses	150 meses a 180 meses	180 meses a 210 meses	210 meses a 240 meses

De acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 60 y 61 del Código Penal, se fija la sanción dentro del **cuarto mínimo**, ya que el organismo de persecución penal no efectuó la imputación de circunstancias de mayor punibilidad específicamente para este delito.

Definido el cuarto en que ha de moverse la Sala, se determina la sanción finalmente imponible, teniendo en cuenta la mayor o menor gravedad del hecho, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la necesidad de la pena y el daño real o potencial causado.

Sobre el particular, es necesario señalar que este delito atentatorio de la personalidad jurídica, fue utilizado por el GAOML como un recurso para dejar en la impunidad sus actos criminales, con el cual se generó un estado de zozobra e incertidumbre en las víctimas indirectas acerca de la suerte que pudieron haber corrido sus familiares, documentándose como política el vínculo al grupo enemigo y como prácticas la inhumación en fosa clandestina y la sustracción del lugar de residencia o sitios públicos, y como *modus operandi* amenazas o intimidaciones utilizando la fuerza, tal y como quedó referenciado en el cuerpo de esta decisión. Además, este execrable delito constitutivo de un patrón de macrocriminalidad, es considerado como crimen de lesa humanidad, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Roma, artículo 7, ordinal 1, i)[174], expuesto lo anterior, la Sala considera, teniendo en cuenta los términos del ordinal 2, i) del mismo artículo[175].

Expuesto ello, la considera que la pena de prisión imponible a los postulados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA**, debe fijarse en el límite máximo del cuarto mínimo, esto es, ciento cincuenta (150) meses de prisión y multa equivalente a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Sin embargo, dado que con relación al postulado **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA**, se verificó el punible de desaparición forzada en concurso a la luz del artículo 31 de la Ley 599 de 2000 que a la letra dice u ordena: *"frente al concurso de conductas punibles, modificado por el artículo primero de la Ley 2098 de 2021, que, el que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones, infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas. En los eventos de concurso, la pena privativa de la libertad no podrá exceder de sesenta (60) años, salvo cuando al menos una de las disposiciones de la ley penal infringidas contemple como pena hasta la prisión perpetua revisable, caso en el cual; de ser esta la condena impuesta, esta última será la única pena de prisión aplicable, sin perjuicio de las*

[174] Estatuto de Roma. Artículo 7, ordinal I, i. "A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: i. Desaparición forzada de personas".
[175] En los siguientes términos: *"la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado"*.

otra penas principales o accesorias que apliquen al caso. Cuando cualquiera de las conductas punibles concurrentes con la que tenga señalada la pena más grave contemplare sanciones distintas a las establecidas en esta, dichas consecuencias jurídicas se tendrán en cuenta a efectos de hacer la tasación de la pena correspondiente. PARÁGRAFO. En los eventos de los delitos continuados y masa se impondrá la pena correspondiente al tipo respectivo aumentada en una tercera parte".

Así ello, en este caso debe incrementarse la pena hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles, debidamente dosificadas cada una de ellas, así las cosas, se impone a LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO la ***pena de prisión equivalente a ciento cincuenta (150) meses y multa equivalente a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*** Así como ***la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo igual a ciento cincuenta (150) meses¸*** en concordancia con el artículo 52 del Código Penal.

Por su parte a JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA de acuerdo con lo indicado se le impone la ***pena de prisión equivalente a ciento ochenta (180) meses y multa equivalente a dos mil (2000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.*** Además, de ***la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo igual a ciento ochenta (180) meses¸*** *ejusdem.*

1.4. Deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil.

De acuerdo con las consideraciones que han quedado expuestas, se efectuó la legalización de los delitos de deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil en los cargos: 20 (29 de diciembre de 2000) y 18 (21 de julio de 2001) que se perpetraron con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 599 de 2000[176], que corresponden del *patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado*, de esos punibles se halló responsables a JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA.

[176] 24 de julio de 2001.

Así mismo, se constató la legalización de otros punibles de deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, que acaecieron en vigencia de la normativa sustantiva penal del 2000, y que corresponden a los siguientes cargos: cargo No. 19 atribuible a JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA; y los cargos No. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 respecto de los cuales se encontró responsable a LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO del *patrón de macrocriminalidad de desplazamiento forzado*.

Ahora, en cuanto hace particularmente a los referidos cargos acaecidos antes de la entrada en vigencia del código penal ley 599 de 2000, los mismos tuvieron ocurrencia en vigencia del artículo 284 a del decreto Ley 100 de 1980, adicionado por la Ley 589 de 2000, la cual entró en vigencia el 6 de julio del año 2000, que recogía el injusto de desplazamiento forzado pero como delito común con la asignación de una pena de prisión de 15 a 30 años, multa de 500 a 2000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas de 5 a 10 años.

Al respecto la Sala ha vendido sosteniendo el criterio según el cual, si bien el hecho pudo acontecer antes de la entrada en vigencia de la ley 599 de 2000, tal circunstancia no es óbice para que se emita condena bajo el *nomen iuris* de los tipos penales recogidos en el título segundo de esa normativa relativo a los delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario con la observancia del principio de favorabilidad.[177] Ello en consideración a que desde mucho antes del Código Penal del 2000, ya existían instrumentos internacionales que abogaban por la protección de los bienes jurídicos, que actualmente aparecen recogidos en las normas sustantivas penales[178]-[179].

No obstante, lo anterior, al efectuar una comparación entre las sanciones que establecía el artículo 284A del Decreto Ley 100 de 1980 con el artículo 159 de la

[177] Ver, sentencia del 28 de junio de 2019, proferida en contra de Wilfredo Manuel Beleño Jaramillo y otros, rad. 08001- 22- 52- 003- 2018- 83097; sentencia del 14 de diciembre del 2020, proferida en contra de Edelmiro Alberto Anaya González y otros, rad. 08-001-22-52-003-2016-83155, M.P. Dra. Cecilia Leonor Olivella Araujo.
[178] Entre otros: el Pacto internacional de derechos civiles y políticos; los principios Deng (1996); protocolo II adicional a los convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional; la declaración de Cartagena sobre los refugiados (ACNUR 1984), Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados (1951).
[179] Sobre el particular, ver lo conceptuado por la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, en auto del 13 de mayo de 2010, rad. 33118, M.P. María del Rosario González de Lemos.

Ley 599 de 2000, se encuentra que esta última se erige como la más favorable para efectos del proceso de dosificación punitiva de todos los cargos.

En efecto, el texto original del artículo 159 de la Ley 599 de 2000 contemplaba para el delito de deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, la pena de prisión de *diez (10) a veinte (20) años, multa de mil (1000) a dos mil (2000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de diez (10) a veinte (20) años*, de tal manera que los cuartos punitivos quedan de la siguiente manera:

Prisión

	ÁMBITO PUNITIVO **30 meses**	240 meses – 120 meses = 120 meses / 4 = 30 meses.

Cuarto Mínimo	**Cuartos Medios**		**Cuarto Máximo**
120 meses a 150 meses	150 meses a 180 meses	180 meses a 210 meses	210 meses a 240 meses.

Multa

ÁMBITO **250 smlmv**	2.000 smlmv – 1.000 smlmv = 1000 smlmv/4 = 250 smlmv.

Cuarto Mínimo	**Cuartos Medios**		**Cuarto Máximo**
1000 a 1250 smlmv	1250 a 1500 smlmv	1500 a 1750 smlmv	1750 a 2000 smlmv

Inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas

ÁMBITO **30 meses**	240 meses – 120 meses = 120 meses /4 = 30.

Cuarto Mínimo	**Cuartos Medios**		**Cuarto Máximo**
120 meses a 150 meses	150 meses a 180 meses	180 meses a 210 meses	210 meses a 240 meses

Teniendo en cuenta las reglas de dosificación punitiva contenidas en los artículos 60 y 61 del Código penal antes referidas, la Sala fijará la sanción dentro del **cuarto mínimo**, atendiendo a que la Fiscalía no efectuó la imputación de circunstancias de mayor punibilidad en estos casos.

Por lo anterior, la Sala determina la sanción finalmente imponible atendiendo a la gravedad del hecho, la necesidad de la pena y el daño real causado, respecto de lo cual se dirá que el desplazamiento forzado implicó para las víctimas el abandono de los vínculos materiales y afectivos que los ataban con su original entorno, el cual se dio a consecuencia de hechos extremadamente violentos, y con el que se generaron hondas y negativas repercusiones en los territorios, en los entornos familiares y en la vida de cada uno de los afectados, registrándose execrables prácticas llevadas a cabo por el Bloque Héroes de los Montes de María, en el que militaron los postulados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA**, como el temor, la inseguridad, la amenaza y la presencia armada ilegal dentro de las zonas de asentamiento de civiles.

Lo anterior, demanda para los postulados la imposición de la pena máxima del cuarto mínimo; sin embargo, dado que se verificó la comisión en concurso homogéneo del delito de deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, conforme al artículo 31 de la Ley 599 de 2000 puesto de presente en precedencia, resulta necesario incrementar la pena hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles, debidamente dosificadas cada una de ellas, de tal manera que se impone finalmente a los postulados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** la ***pena de prisión equivalente a ciento ochenta (180) meses y multa equivalente a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.***

También, teniendo en cuenta los argumentos antes expuestos, se impone al postulado ***la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas*** correspondiente al máximo del cuarto mínimo, esto es, ***por un periodo igual a ciento cincuenta (150) meses***¸ en concordancia con el artículo 52 del Código Penal.

1.5. Secuestro simple.

Se tiene que el delito de secuestro simple se dio por demostrado en el cargo 11 (12 de marzo de 2004) del patrón de macrocriminalidad de *homicidios selectivos y múltiples*, siendo responsable **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO**, la norma aplicable que conforme a la época de ocurrencia del hecho es el artículo 168 de la Ley 599 de 2000, modificado por la Ley 733 de 2002, que señalaba *una pena de prisión de doce (12) a veinte (20) años y multa de seiscientos (600) a mil*

(1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, resultando los cuartos punitivos de la siguiente manera:

Prisión

	ÁMBITO PUNITIVO **24 meses**	240 meses – 144 meses = 96 meses / 4 = 24 meses.

Cuarto Mínimo	**Cuartos Medios**		**Cuarto Máximo**
144 meses a 168 meses	168 meses a 192 meses	192 meses a 216 meses	216 meses a 240 meses.

Multa

ÁMBITO **100 smlmv**	1.000 smlmv – 600 smlmv = 400 smlmv/4 = 100 smlmv.

Cuarto Mínimo	**Cuartos Medios**		**Cuarto Máximo**
600 a 700 smlmv	700 a 800 smlmv	800 a 900 smlmv	900 a 1000 smlmv

En consideración a las reglas de dosificación punitiva contenidas en los artículos 60 y 61 del Código penal que se han venido refiriendo, la Sala determinará la sanción dentro del **cuarto mínimo**, atendiendo a que no se concretaron circunstancias de mayor punibilidad.

Por lo anterior, la Sala, atendiendo a la gravedad del hecho, la necesidad de la pena y el daño causado, lo cual se develó principalmente en el contexto en el que tuvieron ocurrencia los execrables delitos de secuestro para el cual el postulado LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO tal y como quedó registrado, prestó su concurso para la retención y posterior ocultamiento de la víctima a quien finalmente le segaron la vida de una manera atroz con el desmembramiento de sus extremidades generando un gran impacto, temor y zozobra en la sociedad, por lo expuesto la pena deberá corresponder a la establecida en el máximo del cuarto mínimo, en consecuencia, se impone a **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO**, ***la pena de prisión de ciento sesenta y ocho (168) meses y multa de setecientos (700) salarios mínimos legales mensuales vigentes***.

2. Conclusión acerca de la pena ordinaria.

Para la determinación final de las penas que ordinariamente les correspondería a los postulados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA**[180], en consideración a que resultó evidente el concurso heterogéneo de diferentes delitos de los cuales se los declara responsables, ha de observarse los derroteros plasmados en el artículo 31 de la Ley 599 de 2000 ya expuestos[181], así como el límite máximo establecido por el legislador de cuarenta (40) años de prisión[182]. Así las cosas, dado que se verificó respecto de los postulados que el delito más gravoso por el cual se declaró su responsabilidad, dadas sus características, fue el de homicidio en persona protegida, coincidiendo la pena de prisión impuesta para ese tipo penal con el monto máximo permitido por la normativa, se mantiene como pena privativa de la libertad la establecida en ***cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión***.

En cuanto hace a la pena de multa, su determinación se hace de manera diferenciada, por cuanto, como quedó visto, los postulados fueron responsables en algunos casos de la comisión de diferentes punibles, por manera que se fija de la siguiente manera, respetando el límite y directrices establecidas en el artículo 39 del Código Penal que viene citado:

Para **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO**, se toma como base la pena de multa establecida para el delito de homicidio en persona protegida, esto es, veinte mil (20.000) smlmv, que se incrementa en: quinientos (500) smlmv por el delito de desaparición forzada, quinientos (500) smlmv por el delito de deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, cuatrocientos (400) smlmv por el delito de secuestro simple, para un total de pena de multa de

---

[180] Teniendo en cuenta que el artículo 24 de la Ley 975 de 2005, modificado por la Ley 1592 de 2012, alude a que, entre otros aspectos, *"en la sentencia condenatoria se fijarán la pena principal y las accesorias"*.

[181] Norma que resulta ser la más favorable para determinar el monto máximo de pena de prisión en el caso de concurso de conductas punibles en lugar de lo que preveía el Decreto 100 de 1980 por cuanto, tal y como se indicó al momento de la dosificación punitiva del delito de toma de rehenes, con *"la Ley 40 de 1993, con la cual se elevaron drásticamente las penas para determinados delitos de lesividad social, como por ejemplo para el secuestro y el homicidio, aumentó en el artículo 28 el quantum máximo de la pena de prisión al fijarla en sesenta (60) años, cifra que luego se mantuvo en el artículo 3º de la Ley 365 de 1997"*. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 28 de mayo de 2008, rad. 29341, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca.

[182] Conforme lo establecía el texto original del artículo 31 Código Penal. En consideración a que, como lo ha dejado sostenido la Sala Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, en el proceso penal especial de Justicia y Paz no operan los incrementos punitivos que estableció la Ley 890 de 2004, entre ellos el del artículo 31, toda vez que *"ese incremento general de penas se halla inescindiblemente atado al instituto de justicia premial que consagra la Ley 906 de 2004, a la manera de entender que ese aumento sustancial del quantum punitivo se justifica únicamente en razón a las generosas rebajas que relaciona la ley en referencia, en punto de los acuerdos y allanamientos a cargos (…) A ese efecto, como no surge duda respecto a que la justicia transicional consagra no un tipo de justicia premial sino una pena alternativa que obedece a criterios completamente diferentes de aquellos que modulan la justicia premial de la Ley 906 de 2004, resulta imposible equiparar naturaleza o finalidades de las instituciones en cita para efectos de aplicar el incremento"*. Decisión del 13 de abril de 2013, rad. 40559, M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández.

veintiún mil cuatrocientos (21.400) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA,** se toma como base la pena de multa establecida para el delito de homicidio en persona protegida, esto es, veinte mil (20.000) smlmv, que se incrementa en: setecientos (700) smlmv por el delito de desaparición forzada, quinientos (500) smlmv por el delito de deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, cuatrocientos (4000) smlmv por el delito de concierto para delinquir, para un total de pena de multa de ***veinticinco mil doscientos (25.200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.***

Determinadas las penas de prisión y multa, adicionalmente se impone a los postulados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA,** la ***inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas***, la cual fue establecida para los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil; ahora, teniendo en cuenta que el monto de la pena por el delito más gravoso, que lo fue el de homicidio en persona protegida, resultó siendo el máximo permitido por la normativa penal, acorde con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 599 de 2000, se mantiene en ***doscientos cuarenta (240) meses.***

De otra parte, se impone a los postulados la ***privación del derecho a la tenencia y porte de armas por el término de quince (15) años***, de conformidad con el inciso 6 del artículo 51 *ejusdem*, debido a que, precisamente, los postulados se valieron de este mortal elemento para cometer muchos de los execrables crímenes por los que se profiere esta sentencia, los cuales resultaron constitutivos de patrones de macrocriminalidad, perpetrados de manera sistemática y generalizada bajo la égida de una estructura organizada de poder ilegal al margen de la ley.

VII. DE LA ACUMULACIÓN JURÍDICA DE PENAS.

El artículo 2.2.5.1.2.2.12 del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015, en consonancia con lo preceptuado en el artículo 20 de la Ley 975 de 2005 se refiere a la acumulación jurídica de procesos y penas, evento en el cual se aplicará lo

dispuesto sobre la materia por el Código de Procedimiento Penal[183], en este orden encontramos que la mencionada normativa directamente dispuesta para la aplicación de la ley de Justicia y Paz, consagra en su artículo 460 de la ley 906 de 2004, que sobre este instituto de la acumulación jurídica de las penas prevé qué: *"Las normas que regulan la dosificación de la pena, en caso de concurso de conductas punibles, se aplicarán también cuando los delitos conexos se hubieren fallado independientemente. Igualmente, cuando se hubieren proferido varias sentencias en diferentes procesos. En estos casos la pena impuesta en la primera decisión se tendrá como parte de la sanción a imponer.*
No podrán acumularse penas por delitos cometidos con posterioridad al proferimiento de sentencia de primera o única instancia en cualquiera de los procesos, ni penas ya ejecutadas, ni las impuestas por delitos cometidos durante el tiempo que la persona estuviere privada de la libertad". En este orden, la mencionada normativa dispuesta para la aplicación de la ley de Justicia y Paz consagra:

> *"(…) para efectos procesales, se acumularán todos los procesos que se hallen en curso y las penas contenidas en sentencias ejecutoriadas por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado a un grupo armado organizado al margen de la ley. En ningún caso procederá la acumulación por conductas punibles cometidas antes o después de la pertenencia del postulado al grupo armado organizado al margen de la ley.*
>
> *Admitida la aceptación de los cargos por la Sala en la sentencia, las actuaciones procesales suspendidas se acumularán definitivamente al proceso penal especial de justicia y paz, respecto del postulado. Mientras el proceso judicial ordinario se encuentre suspendido no correrán los términos de prescripción de la acción penal. En caso de que el imputado no acepte los cargos o se retracte de los admitidos, inmediatamente se avisará al funcionario judicial competente para la reanudación del proceso suspendido".*

A su turno, el artículo 22 de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 22 de la Ley 1592 de 2012, con relación a la suspensión de investigaciones, dispone:

> *"Una vez en firme la medida de aseguramiento y hasta antes de proferir sentencia en la justicia ordinaria contra un postulado al proceso de justicia y*

[183] Artículo 460 de la Ley 906 de 2004.

paz, respecto de un hecho cometido durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley, el fiscal que estuviere conociendo el caso en la jurisdicción ordinaria suspenderá la investigación. Si el proceso en la jurisdicción ordinaria estuviere en etapa de juicio, el juez respectivo ordenará la suspensión. La investigación o el juicio únicamente serán suspendidos respecto de la persona vinculada y del hecho que fundamentó su vinculación. El fiscal o el juez de la justicia ordinaria informarán a la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz enviando copia de la decisión de fondo adoptada y de la suspensión.

PARÁGRAFO. *La suspensión del proceso en la jurisdicción ordinaria será provisional hasta la terminación de la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos realizada ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial correspondiente, y será definitiva, para efectos de acumulación, si el postulado acepta los cargos. Para estos efectos, también se suspenderá el término de prescripción del ejercicio de la acción penal en la jurisdicción ordinaria, hasta la terminación de la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos".*

Por su parte, la Corte Constitucional al analizar la constitucionalidad del artículo 20 de la Ley 975 de 2005 sobre acumulación de procesos y penas explica que:

"No se produce una desproporcionada afectación del valor justicia en razón a que la acumulación jurídica de penas, determinada conforme a las reglas que para el efecto establece el código penal, opera en relación con las penas principales imponibles o impuestas, respecto de los diferentes delitos perpetrados durante y con ocasión de la pertenencia del sentenciado al respectivo grupo, que son objeto de la acumulación. Lo anterior no significa que en estos casos dejen de ser beneficiados por lo que la ley ha denominado alternatividad penal. De tal forma que si el desmovilizado condenado con anterioridad, por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley, se acoge a la Ley 975 de 2005, y cumple los requisitos correspondientes, dicha condena previa se acumulará jurídicamente a la nueva condena que se llegare a imponer como resultado de su versión libre y de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía. Después de efectuada dicha acumulación jurídica, el juez fijará la condena ordinaria (pena principal y accesorias), cuya ejecución se suspenderá y se concederá el beneficio de la pena alternativa de 5 a 8 años en relación con

la pena acumulada, si se cumplen los requisitos de la Ley 975 de 2005. Si transcurrido el tiempo de la pena alternativa y el período de prueba, el sentenciado ha cumplido a cabalidad con las obligaciones establecidas en la ley, la pena inicialmente determinada en la sentencia como resultado de la acumulación jurídica se declarará extinguida. En caso contrario, se revocará y el sentenciado deberá cumplir la pena acumulada, inicialmente determinada en la sentencia (artículos 24 y 29).[184]

Además, con relación a la importancia que tiene la institución jurídica de la acumulación en el proceso transicional de Justicia y Paz, se ha indicado que:

"La posibilidad de acumular procesos y penas no solo es necesaria para evitar un desgaste innecesario de la administración de justicia, sino para garantizar el debido proceso de los postulados y asegurar que todas las acciones cometidas como parte del grupo armado ilegal puedan ser susceptibles del beneficio de la pena alternativa. De igual manera, una correcta acumulación de procesos y penas y, en consecuencia, el tener claridad sobre todos los procesos que se adelantan en contra del postulado, su estado y la autoridad que tiene competencia sobre ellos, también es requisito indispensable para la recuperación de la libertad en el régimen de Justicia y Paz"[185].

Al respecto, la Sala encuentra que en contra de los postulados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** se han proferido sentencias por parte de despachos judiciales de la justicia ordinaria, tal y como quedó registrado en el acápite intitulado *"2. Antecedentes y requerimientos por la justicia ordinaria"* de esta decisión. A continuación, se detallan los fallos condenatorios respecto de los cuales el órgano de persecución penal solicitó la acumulación jurídica de penas en favor de los postulados[186]:

LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO					
FECHA DECISIÓN	**RADICADO**	**AUTORIDAD**	**DELITO Y VÍCTIMA**	**PENAS**	**FECHA HECHO Y LUGAR**
9 de junio de 2005	2004-00257-00	Juzgado Segundo Penal del	Delito: homicidio Simple. Art. 103 del CP.	- 13 años de prisión. - Pena accesoria de 10 años de interdicción de	- 18 de enero del 2004 - Corregimiento de Cerrito de la

[184] Corte Constitucional, Sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, Dr. Jaime Córdoba Triviño, Dr. Rodrigo Escobar Gil, Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, Dr. Álvaro Tafur Galvis, y Dra. Clara Inés Vargas Hernández.
[185] Ministerio de Justicia y del Derecho, *"La Ley de Justicia y Paz y el regreso a la vida civil: régimen de libertades, resocialización y reintegración de personas postuladas"*, Bogotá, 2015.
[186] Sesión de audiencia del primero de julio de 2021, Audio 08001225200320200000100_20210701_02 rec. 7:35

		Circuito de Sincelejo	Víctima: Oscar Eliecer Álvarez Pastor	derechos y funciones públicas. - El equivalente a 300 gramos oro por concepto de perjuicios morales en favor de los familiares de la víctima.	Palma, de Sincelejo (Sucre)
4 de mayo de 2005	2005-00021	Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo	Delito: homicidio agravado. Arts. 103 y 104, numeral 6 del CP. Víctima: Rafael Enrique Mercado Vitola.	- 25 años de prisión. - Pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por 20 años. - El equivalente a 50 smlmv por concepto de perjuicios morales.	- 12 de marzo del 2004. - Corregimiento Las Huertas, del municipio de Sampués (Sucre)
11 de agosto de 2015	041-2013	Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Cartagena	Delito: concierto para delinquir agravado. Art. 340 inciso 2 del CP.	- 3 años y 8 meses de prisión. - Multa equivalente a 3250 smlmv. - Pena de interdicción de derechos y funciones públicas por un término igual al de la pena principal.	- A partir del año 2001.

JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA					
FECHA DECISIÓN	**RADICADO**	**AUTORIDAD**	**DELITO Y VÍCTIMA**	**PENAS**	**FECHA HECHO Y LUGAR**
29 de diciembre de 2011	2011-00038-00	Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo	Delito: desaparición forzada agravada. Art. 165 del CP. Víctima: Juan Carlos Revollo Paternina.	- 11 años y 3 meses de prisión. - Multa equivalente a 750 smlmv. - Pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena privativa de la libertad. [187]	- 1° de enero del 2003. - San Onofre (Sucre)
30 de diciembre de 2008	2008-00031-00	Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo	Delitos: secuestro agravado en concurso con homicidio agravado. Arts. 103, 104, 168 y 170 del CP. Víctima: Rafael Antonio Berrio Meléndez	- 18 años 11 meses de prisión. - Multa de 2600 smlmv.	- 9 de octubre de 2002. San Onofre.
31 de marzo de 2005	2004-00045-00	Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo	Delitos: concierto para delinquir en concurso con violación ilícita de comunicaciones.	- 6 años y 6 meses de prisión[188].	- 7 de mayo del 2004. - Vía que de San Onofre conduce al corregimiento de El Rincón (Sucre).

[187] Pena modificada en segunda instancia por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo (Sucre) mediante proveído de fecha 25 de abril de 2012.
[188] Decisión confirmada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo, mediante proveído de fecha 5 de mayo de 2009.

			Arts. 340 y 192 del CP		

Así las cosas, teniendo en cuenta que se logró acreditar: *i)* que las actuaciones suspendidas se relacionan con los cargos 13, 11 y 6 del patrón de homicidios selectivos y múltiples, y 46 del patrón de desaparición forzada reconocidos dentro de esta sentencia, que fueron objeto de legalización en consecuencia dentro del presente trámite; *ii)* que, como ha quedado expuesto en el cuerpo de esta decisión, las conductas criminales endilgadas a los postulados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA**, por su comprobada participación en esos hechos, tuvieron ocurrencia durante y con ocasión de su pertenencia al Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia; y *iii)* los postulados cumplen con los presupuestos establecidos para obtener los beneficios contenidos en la Ley 975 de 2005, la Sala considera que resulta procedente acceder a la acumulación de las referidas actuaciones.

Ahora, en cuanto hace a la pena de prisión que viene tasada, la misma no podrá ser incrementada por expresa disposición del texto original del inciso 2º del artículo 31 del Código Penal, Ley 599 de 2000, vigente para la época de ocurrencia de los hechos, que señalaba que: *"En ningún caso la pena privativa de la libertad podrá exceder de cuarenta (40) años"*, por manera que mantendrá la pena de prisión equivalente a ***cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión***, para los postulados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA.**

En cuanto a la pena de multa, se mantiene las establecidas por esta Sala con relación a cada uno de los postulados y conforme al proceso de dosificación punitiva ya efectuado en la sección *"2. Conclusión acerca de la pena ordinaria"* de esta providencia.

Finalmente, la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por encontrarse en el límite previsto por el artículo 51 del Código Penal, ***se mantiene en veinte (20) años*** para los postulados de marras; al igual que acontece con relación a la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, cuyo máximo previsto corresponde a ***quince (15) años*** de acuerdo con el artículo 51 *ejusdem*, inciso 6.

En firme esta determinación, se dispondrá que, por la Secretaría de la Sala, se comunique a los juzgados falladores de la jurisdicción ordinaria y a los juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que vigilan las penas impuestas, la decisión de acumulación aquí adoptada para los fines legales pertinentes.

VIII. DE LA PENA ALTERNATIVA.

La Ley 975 de 2005 en su artículo tercero alude al beneficio de la alternatividad que consiste *"en suspender la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización"*; indicando además la norma que: *"[l]a concesión del beneficio se otorga según las condiciones establecidas en la presente ley".*

Al respecto, la Corte Constitucional en la mencionada Sentencia C-370 de 2006, explicó que el instituto que la ley denomina alternatividad es un beneficio que incorpora una rebaja punitiva significativa, a la cual pueden acceder los miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley que se sometan a un proceso de reincorporación a la vida civil, y que hayan sido autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, cuya concesión está condicionada al cumplimiento de unos requisitos establecidos en la ley, orientados a satisfacer a cabalidad los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. A partir del examen de las disposiciones legales que regulan la materia, la Corte Constitucional destacó los siguientes elementos esenciales de la pena alternativa:

> *"(i) Es un beneficio punitivo que conlleva suspensión condicional de la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, el cual responde a características y propósitos específicos.*
> *(ii) Es judicial y sustitutiva de la pena ordinaria: la autoridad judicial competente impondrá en la sentencia la pena principal y las accesorias que correspondan de ordinario al delito conforme a los criterios establecidos en la ley penal. Esta comprensión se deriva explícita y sistemáticamente de los artículos 3º, 19, 20, 24 y 29.*
> *(iii) Es alternativa: la pena que de ordinario le correspondería cumplir al condenado es reemplazada por una pena inferior de tal forma que el condenado debe pagar la pena alternativa, no la pena ordinaria inicialmente impuesta.*

(iv) Es condicionada: su imposición está condicionada a que concurran los presupuestos específicos previstos en la presente ley. Verificado su cumplimiento, el Tribunal impondrá lo que la ley denomina pena alternativa.
(v) Constituye pena privativa de la libertad de 5 a 8 años, que deberá cumplirse efectivamente sin que pueda ser afectada por otros subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias, adicionales a la pena alternativa misma. (Par. Art. 29).
(vi) Su mantenimiento depende de la libertad a prueba: una vez cumplida efectivamente la pena alternativa, así como las condiciones impuestas en la sentencia según la ley (artículo 24), se concederá la libertad a prueba por un término igual a la mitad de la pena alternativa impuesta, período en el cual el sentenciado debe cumplir determinados compromisos: no reincidir en ciertas actividades delictivas, presentaciones periódicas e información de cambio de residencia (artículo 29).
(vii) Extinción de la pena ordinaria inicialmente determinada: Cumplidas las obligaciones impuestas en la sentencia o establecidas en la ley, y transcurrido el período de prueba, se declarará extinguida la pena ordinaria inicialmente determinada.
(viii) Revocatoria de la pena alternativa y ejecución de la pena inicialmente determinada: si durante la ejecución de la pena alternativa o del período de libertad a prueba, se establece que el beneficiario ha incumplido alguna de las obligaciones impuestas en la sentencia o previstas en la ley, para el goce del beneficio, se revocará la pena alternativa y se harán efectivas las penas principales y accesorias inicialmente impuestas en la sentencia".

Concluyó la citada Corporación que la configuración de la pena alternativa, como medida encaminada al logro de la paz, resulta acorde con la Constitución *"[…] en cuanto, tal como se deriva de los artículos 3° y 24, no entraña una desproporcionada afectación del valor justicia, el cual aparece preservado por la imposición de una pena originaria (principal y accesoria), dentro de los límites establecidos en el Código Penal, proporcional al delito por el que se ha condenado, y que debe ser cumplida si el desmovilizado sentenciado, incumple los compromisos bajo los cuales se le otorgó el beneficio de la suspensión de la condena". Sin embargo, la Corte estimó pertinente declarar la exequibilidad condicionada del artículo 3º de la Ley 975, en el entendido que la "colaboración con la justicia", como presupuesto de la suspensión de la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, debe estar encaminada al logro efectivo*

de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición".

En consonancia con lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 2.2.5.1.1.1., del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015, en tratándose de una suspensión de la ejecución de la pena ordinaria, la pena alternativa está supeditada a que los beneficiarios[189] contribuyan a la consecución de la paz nacional, a su adecuada resocialización, a la verdad, a la reparación integral a las víctimas y a la no repetición; igualmente, acarrea la imposición de una medida privativa de la libertad por todos los delitos confesados y respecto a los cuales acepte su responsabilidad, por un periodo mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8).

Así mismo, en punto de dosificación de la pena alternativa, conforme al artículo 29 de la Ley 975 de 2005, deberán tenerse en cuenta: *"(i) la gravedad de los delitos y (ii) la colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos, a los cuales se impone sujetarse de manera irrestricta el funcionario judicial, según se advierte de los incisos 2 y 3, de la mentada disposición"*[190], sin que deban observarse pautas diferentes *"tales como rango del postulado o grado de participación en la conducta punible, ya que dichas condiciones no aparecen instituidas en la normatividad aplicable al caso"*[191].

Además, la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia ha enfatizado en que: *"La fijación del castigo, tanto principal como alternativo, el juez no puede supeditarla exclusivamente (…) a la colaboración efectiva del postulado con el esclarecimiento de la verdad (lo cual, se repite, es una carga suya para hacerse acreedor a los beneficios), sino que se le impone tener en cuenta la gravedad de los delitos"*[192], y en el caso que de considerarse la imposición de una misma sanción para los acriminados *"en modo alguno comportaría lesión para unos u otros, como que ello obedece al sistema de dosificación punitiva que exige que no puedan superarse los topes máximos previstos por el legislador. Por mejor decir, por más delitos que se acumulen en un caso la sanción principal no puede superar*

[189] Que lo serán los miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley que se hubiere sometido a un proceso de reincorporación a la vida civil y que hayan sido autores o partícipes de hechos delictivos por ellos confesados, cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a ese grupo.
[190] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 25 de octubre de 2017, rad. 49025, M.P. Luis Guillermo Salazar Otero,
[191] *Ibidem.*
[192] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 24 de febrero de 2016, rad. 46.789, M.P. José Luis Barceló Camacho.

los 60 años de prisión [40 años para nuestro caso, en atención al principio de favorabilidad], en tanto que la alterativa no puede exceder de 8 años"[193].

El artículo 24 de la ley 975 de 2005, modificado por el artículo 25 de la Ley 1592 del 2012, reza; *"Contenido de la sentencia. De acuerdo con los criterios establecidos en la ley, en la sentencia condenatoria se fijarán la pena principal y las accesorias. Adicionalmente se incluirán la pena alternativa prevista en la presente ley, los compromisos de comportamiento por el término que disponga el Tribunal, las obligaciones de reparación moral y económica a las víctimas y la extinción del dominio de los bienes que se destinarán a la reparación.*
La Sala correspondiente se ocupará de evaluar el cumplimiento de los requisitos previstos en esta ley para acceder a la pena alternativa.".

Teniendo en cuenta las anteriores precisiones, en el presente asunto, encuentra la Sala que los aquí postulados LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO y JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA cumplen a cabalidad con los requisitos de elegibilidad y los presupuestos para optar por la pena alternativa. En efecto, han cumplido a la consecución de la paz nacional con el acto de dejación de las armas y la manifestación de su voluntad de reinserción a la vida civil; han acudido a los llamados de las autoridades para el adelantamiento de las diversas diligencias judiciales; también, han acatado su compromiso con la verdad, conforme quedó demostrado en las distintas versiones libres y confesando las conductas por estos cometidas durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley Bloque Héroes de los Montes de María, en las condiciones que lo hicieron y que la Sala ha puesto de presente en el contenido de esta decisión judicial que han merecido las consideraciones que también ya vienen insertas en esta providencia; igualmente, expresaron su voluntad de terminar anticipadamente el proceso, contribuyendo al fin que persigue esta institución jurídica, que lo es imprimirle celeridad a la actuación. Todo lo cual no obsta para que continúen cumpliendo con los compromisos y las obligaciones que impone este especial proceso transicional recordándole que estas obligaciones están vigentes en todo momento del curso procesal.

De otra parte, si bien la Sala reconoce los aportes de los postulados para la satisfacción de los derechos de las víctimas y, de acuerdo con los elementos de prueba aportados por el ente acusador, han cumplido con lo requerido para acceder

[193] *Ibidem.*

a los beneficios de la justicia transicional, no se puede soslayar que, tal y como ha quedado expuesto, a los precitados postulados se les atribuyó responsabilidad por la comisión de delitos que atentaron contra los más altos valores esenciales para la convivencia pacífica, los cuales, además, tienen una grave connotación por su carácter de crímenes de guerra y de lesa humanidad, lo que comporta graves afectaciones al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos, tal y como quedó visto, mismos que se ejecutaron bajo unas políticas del grupo ilegal y que conformaron los patrones de macrocriminalidad de homicidios selectivos y múltiples, desplazamiento forzado y desaparición forzada. Sumado a ello, no puede pasarse por alto que los enjuiciados no desempeñaron roles secundarios o de poca importancia, sino que cumplieron funciones determinantes en la ejecución de los delitos conforme a las finalidades y los roles asignados dentro de la organización armada ilegal Autodefensas Unidas de Colombia, como quedó demostrado en el análisis de los cargos, y, en particular, en la sección *"1.6. Permanencia de los postulados en Bloque Héroes de los Montes de María"*, de esta providencia.

Aunado a lo expuesto, se precisa que, tal y como se encuentra descrito en el parágrafo del artículo 18 de la Ley 975 de 2005, modificado por la Ley 1592 de 2012, la terminación anticipada del proceso no supone, *"en ningún caso, el acceso a beneficios penales adicionales a la pena alternativa"*; es decir, la privación de la libertad será efectiva por el tiempo que determine el Tribunal *"sin que pueda ser afectada por otros subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias, adicionales a la pena alternativa misma"*[194].

Por lo antes expuesto, resulta más que razonable imponer a los postulados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA**, como pena alternativa, el tope máximo establecido en la Ley, correspondiente a la privación de la libertad por un periodo de ***ocho (8) años, o, lo que es lo mismo, noventa y seis (96) meses de prisión***, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Justicia y Paz[195], por lo cual se procede a suspender la ejecución de la pena ordinaria (principal y accesorias) establecida en esta

[194] Sentencia C-370 de 2006, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, Dr. Jaime Córdoba Triviño, Dr. Rodrigo Escobar Gil, Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, Dr. Álvaro Tafur Galvis, y Dra. Clara Inés Vargas Hernández.

[195] Enseña: *"La Sala competente del Tribunal Superior de Distrito Judicial determinará la pena que corresponda por los delitos cometidos, de acuerdo con las reglas del Código Penal".*
En caso que el condenado haya cumplido las condiciones previstas en esta ley, la Sala le impondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos (…)".

sentencia, referida en el acápite precedente, y se reemplaza por la alternativa, sin que puedan ser beneficiarios, se itera, de subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias a la pena alternativa, restricción que se explica cuando se constata que esta pena alternativa presupone una muy significativa reducción de la sanción privativa de la libertad que ordinariamente ameritarían los punibles confesados[196].

De todas maneras, destaca la Sala, de acuerdo a lo normado en el artículo 2.2.5.1.2.2.20 del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015, que la pena ordinaria impuesta en la sentencia condenatoria **conserva su vigencia durante el cumplimiento de la pena alternativa y el período de libertad a prueba**, y únicamente podrá declararse extinguida cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones legales que sirvieron de base para su imposición, las señaladas en esta sentencia y las relativas al período de la libertad a prueba. En consecuencia, la inobservancia de cualquiera de tales obligaciones conlleva la revocatoria de la pena alternativa y, en su lugar, el cumplimiento de la pena ordinaria inicialmente determinada en esta decisión.

También, se resalta que el beneficio de la pena alternativa se revoca en los siguientes casos:

1. Si durante la ejecución de la pena alternativa o del período de libertad a prueba se establece que el beneficiario incurrió dolosamente en conductas delictivas con posterioridad a su desmovilización;

2. Si durante la ejecución de la pena alternativa o del período de libertad a prueba se establece que el postulado ha incumplido injustificadamente alguna de las obligaciones impuestas en la sentencia o previstas en la ley para el goce del beneficio;

3. Si durante la ejecución de la pena alternativa o del periodo de libertad a prueba se establece que el postulado no entregó, no ofreció o no denunció todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley al que perteneció.

[196] Así también lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, auto de 23 de marzo de 2011, rad. 36051, M.P. José Luís Barceló Camacho. Criterio reiterado en el auto del 24 de junio de 2010, rad. 34170, M.P. Yesid Ramírez Bastidas, y en la decisión del 23 de mayo de 2012, rad. 38710, M.P. Luis Guillermo Salazar Otero.

En los eventos señalados, se revocará la pena alternativa y en su lugar se harán efectivas las penas principales y accesorias ordinarias inicialmente determinadas en la sentencia, sin perjuicio de los subrogados previstos en el procedimiento penal que corresponda[197].

Por lo anterior, los postulados deberán suscribir un acta en la que se comprometan a contribuir con su resocialización y a promover actividades orientadas a la desmovilización del grupo armado al margen de la ley; de lo contrario, les será revocado el beneficio de la pena alternativa que es fijada en esta decisión en su favor.

Se advierte que si con posterioridad a la presente sentencia y hasta el término de la condena ordinaria aquí señalada, la autoridad judicial competente determina que los postulados, no entregaron, no ofrecieron, o no denunciaron todos los bienes adquiridos por éstos o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona, perderán el beneficio de la pena alternativa, tal como lo establece el inciso 2º del artículo 26 de la Ley 1592 de 2012, que modificó el artículo 25 de la Ley 975 de 2005, el cual contempla que como hemos visto como pena posterior a esta pena alternativa y los bienes encontrados con posterioridad, el cual quedará así: *"Condenas posteriores a la pena alternativa y bienes encontrados con posterioridad. Si a los beneficiarios de la pena alternativa de conformidad con esta ley, con posterioridad a la concesión de la pena alternativa se les llegare a imputar delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a los grupos armados organizados al margen de la ley y antes de su desmovilización, y que no hubieren sido reconocidos o aceptados por el postulado en el marco del proceso especial de que trata la presente ley, estas conductas serán investigadas y juzgadas por las autoridades competentes y las leyes vigentes al momento de la comisión de las mismas.*

Adicionalmente, si con posterioridad a la sentencia emitida como consecuencia del procedimiento excepcional de que trata la presente ley, y hasta el término de la condena ordinaria allí establecida, la autoridad judicial competente determinará que el beneficiario de la pena alternativa no entregó, no ofreció o no denunció todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al

[197] Artículo 2.2.5.1.2.2.23 del Decreto 1069 de 2015.

margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona, perderá el beneficio de la pena alternativa.

Cuando la autoridad judicial competente compruebe cualquiera de los incumplimientos que se refiere el presente artículo, procederá a la revocatoria de los beneficios jurídicos y ordenará la ejecución de la pena principal contenida en la sentencia de Justicia y Paz.

Parágrafo 1°. Las causales de revocatoria de la pena alternativa contenidas en el presente artículo, se darán a conocer al desmovilizado postulado durante el proceso y estarán contenidas en la sentencia.

Parágrafo 2°. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará siempre y cuando no se trate de procedimientos parciales de imputación, terminación anticipada del proceso, formulación y aceptación de cargos, o de sentencias parciales proferidas en el marco de los procedimientos de Justicia y Paz."

Se insiste en que si los postulados, incumplen cualquiera de las obligaciones impuestas dentro de la presente sentencia, **les deviene la revocatoria de la pena alternativa concedida, y, en consecuencia, deberán cumplir la sanción principal y las accesorias que les fueron impuestas en los términos señalados en el artículo 29 de la ley 975 de 2005,** el cual dispone: *"La Sala competente del Tribunal Superior de Distrito Judicial determinará la pena que corresponda por los delitos cometidos, de acuerdo con las reglas del Código Penal.*
En caso que el condenado haya cumplido las condiciones previstas en esta ley, la Sala le impondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos.
Para tener derecho a la pena alternativa se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que permanezca privado de la libertad, y a promover actividades orientadas a la desmovilización del grupo armado al margen de la ley al cual perteneció.
Cumplida la pena alternativa y las condiciones impuestas en la sentencia se le concederá la libertad a prueba por un término igual a la mitad de la pena alternativa impuesta, período durante el cual el beneficiado se compromete a no reincidir en los delitos por los cuales fue condenado en el marco de la presente

ley, a presentarse periódicamente ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial que corresponda y a informar cualquier cambio de residencia.
Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el periodo de prueba, se declarará extinguida la pena principal. En caso contrario, se revocará la libertad a prueba y se deberá cumplir la pena inicialmente determinada, sin perjuicio de los subrogados previstos en el Código Penal que correspondan[198]
Parágrafo. En ningún caso se aplicarán subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias a la pena alternativa." Tal como se ha reseñado en precedencia en el cuerpo de esta decisión judicial.

IX. DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO.

Como lo ha venido sosteniendo esta Sala, la propiedad privada adquirida legítimamente es un derecho fundamental protegido por la Constitución, la ley y el derecho internacional. Su reconocimiento está sujeto al cumplimiento de su función social, al orden público y al bienestar general. En consecuencia, este derecho no puede ser reconocido cuando se trate de bienes obtenidos de actividades ilícitas, ni gozarán de protección constitucional ni legal cuando sean destinados a ellas. Las actividades ilícitas, en especial las manifestaciones de criminalidad organizada, afectan gravemente los derechos fundamentales y constituyen una amenaza para el desarrollo sostenible y la convivencia pacífica. Por lo tanto, existe la imperiosa necesidad de fortalecer la lucha contra la delincuencia, a través de un mecanismo legal que permita al Estado proceder sobre los bienes.[199]

Con relación al deber que tienen los postulados de entregar, ofrecer o denunciar los bienes adquiridos, directamente o por interpuesta persona, a título personal o por el grupo armado organizado al margen de la ley al que pertenecieron, de conformidad con lo establecido en el artículo 11D de la Ley 975 de 2005, que dispone: *"Artículo 11D. Deber de los postulados de contribuir a la reparación integral de las víctimas. Para efectos del cumplimiento de los requisitos contemplados en los literales 10.2 y 11.5 de los artículos 10 y 11 respectivamente de la presente ley, los desmovilizados deberán entregar, ofrecer o denunciar todos los bienes adquiridos por ellos o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por*

[198] Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-370 de 2006, en el entendido de que también se revocará el beneficio cuando haya ocultado en la versión libre su participación como miembro del grupo en la comisión de un delito relacionado directamente con su pertenencia al grupo.
[199] Ley Modelo para la Extinción de Dominio. UNODC – Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe - LAPLAC

interpuesta persona. Estos bienes serán puestos a disposición de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución Tierras Despojadas para que sean destinados a los programas de reparación integral y de restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011, según corresponda. Las víctimas que sean acreditadas en los procedimientos penales especiales de justicia y paz, tendrán acceso preferente a estos programas.

La Fiscalía General de la Nación tomará todas las medidas necesarias para perseguir los bienes a los que se refiere el presente artículo, que no hayan sido entregados, ofrecidos o denunciados por el postulado. El postulado que no entregue, ofrezca o denuncie todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por inter-puesta persona, será excluido del proceso de justicia y paz o perderá el beneficio de la pena alternativa, según corresponda.

Parágrafo. En ningún caso se afectarán los bienes de los postulados adquiridos como resultado del proceso de reintegración, los frutos de los mismos, ni aquellos adquiridos de forma lícita con posterioridad a la desmovilización."

La Sala Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia con relación a lo inmediatamente anterior, ha indicado que:

> *"(…) si no cumplen con dicha exigencia serán excluidos del proceso transicional y perderán el beneficio a la pena alternativa.*
>
> *De ahí que el desmovilizado deba entregar todos los bienes producto de su actividad ilegal, sin excepciones, como primer llamado a cumplir con esa obligación, incluso proveyendo al Fondo de Reparación los bienes lícitos e ilícitos, so pena de ser excluido de la lista.*
>
> *Lo anterior, en tanto el ofrecimiento de bienes debe ser un acto de plena responsabilidad, lleva a que el postulado asuma todas las consecuencias que se puedan derivar de la entrega de aquellos que no puedan ingresar finalmente al Fondo para la Reparación de Víctimas, porque se encuentren sometidos a otros gravámenes o limitaciones a la propiedad (hipoteca, prenda, suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro, afectación de inenajenabilidad, comiso, etc.), se trate de bienes baldíos o sean reclamados exitosamente por*

terceros de buena fe, por ejemplo, supuestos en los cuales el postulado asume la consecuencia de la expulsión de los beneficios que le ofrece la Ley de Justicia y Paz por haberse resistido a brindar una confesión completa y veraz, y porque con tal conducta está demostrando renuencia a la entrega de sus bienes con el propósito de indemnizar a las víctimas, amén de la posible responsabilidad por el delito de fraude procesal.

En tales condiciones, si el postulado que hace entrega u ofrecimiento de bienes debe asumir todas las consecuencias que se puedan derivar de tal acto, mal se haría en que, mientras se encuentre vinculado al trámite de Justicia y Paz, éste continúe por un camino diferente al de los bienes entregados con fines de reparación.

Adicionalmente, no se puede perder de vista que las decisiones definitivas sobre los bienes objeto de medidas cautelares, como lo ordena el artículo 24 de la Ley 975 de 2005, modificado por el 25 de la Ley 1592 de 2012, sólo pueden adoptarse en la respectiva sentencia, en cuanto lo que procede sobre ellos es la extinción de dominio para que ingresen en forma definitiva al Fondo de Reparación de Víctimas''[200].

Así mismo, la Ley 1592 de 2012, incluyó mediante su artículo 15 el artículo 17A a la Ley 975 de 2005, definiendo los bienes que pueden y deben ingresar al trámite de esta Ley, de la siguiente manera:

Artículo 17A. Bienes objeto de extinción de dominio. Los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados para contribuir a la reparación integral de las víctimas, así como aquellos identificados por la Fiscalía General de la Nación en el curso de las investigaciones, podrán ser cautelados de conformidad con el procedimiento dispuesto en el artículo 17B de la presente ley, para efectos de extinción de dominio.

Parágrafo 1º. Se podrá extinguir el derecho de dominio de los bienes, aunque sean objeto de sucesión por causa de muerte o su titularidad esté en cabeza de los herederos de los postulados.

[200] Decisión del 8 de octubre de 2014, rad. 44635, M.P. Dr. Luis Guillermo Salazar Otero.

Parágrafo 2º. La extinción de dominio recaerá sobre los derechos reales principales y accesorios que tengan bien, así como sobre sus frutos y rendimientos.

Así lo expuesto, están destinados a la extinción de dominio dentro del trámite de Justicia y Paz: *i)* Los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados para contribuir a la reparación integral de las víctimas y, *ii)* los bienes identificados por la Fiscalía General de la Nación en el curso de las investigaciones que tengan la vocación de contribuir a la reparación de las víctimas y puedan ser objeto de extinción de dominio en la sentencia de justicia transicional[201].

Como se reseñó al momento de analizar el requisito de elegibilidad relacionado con *"2.2. Bienes entregados producto de la actividad ilegal"*, la Fiscalía introdujo en desarrollo de la audiencia de terminación anticipada del proceso un informe de fecha 9 de marzo de 2023 emanado del despacho de la Dra. LIZ MARY JURADO PORTO, Fiscal 64 Especializada de apoyo a la Fiscalía Treinta y cinco del Grupo Interno de Trabajo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional, en el cual se indicó la situación de los postulados respecto de este proceso así, que **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** *"FECHA DE VERSIÓN LIBRE: 9 de septiembre de 2016, el postulado manifestó no tener bienes para entregar, ofrecer o denunciar. En esta diligencia manifestó su voluntad de dar por terminada el ciclo de versiones libres sobre el tema específico de bienes."*; por su parte, el postulado **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** *"... rindió versión el día 8 de septiembre de 2016, sobre el tema específico de bienes y manifestó dar por cerrado el ciclo de versiones en el tema de bienes, además indicó no tener bienes para ENTREGAR u OFRECER y DENUNCIÓ los siguientes bienes: "1.1. UNA CABAÑA EN RINCÓN DEL MAR. ACTIVIDAD PROCESAL DESARROLLADA: Se dio apertura al carpetario con ID 60189, mediante orden de cumplimiento 0115 del 28 -06-2019 se ordenó su archivo, tratándose de un bien que fue despojado transitoriamente, el que luego por la presencia de la Armada Nacional en la zona, su propietaria fue restablecida en el ejercicio pleno del derecho de dominio. 1.2. UNA GALLERA EN VERRUGAS SUCRE. ACTIVIDAD PROCESAL DESARROLLADA: Se dio apertura al carpetario con ID 60186, enviado a la UAEGRTD mediante orden de cumplimiento 029 del 20 -04-2018. 1.3. UNA FINCA DE CADENA EN AGUAS NEGRAS. ACTIVIDAD PROCESAL DESARROLLADA: Se dio apertura al*

[201] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 10 de abril de 2013, rad. No. 40617, M.P. María del Rosario González Muñoz.

carpetario con ID 102184, mediante orden de cumplimiento 0398 de fecha 14-11-2019 se ordena su archivo por duplicidad con el carpetario ID 60202 (con solicitud de medida cautelar). 1.4. UNA FINCA A LA ENTRADA DE LA ARENA. ACTIVIDAD PROCESAL DESARROLLADA: Se dio apertura al carpetario con ID 102185 actualmente se encuentra en estado de investigación. 1.5. FINCA LA 70. ACTIVIDAD PROCESAL DESARROLLADA: Se dio apertura al carpetario con ID 60185, archivado mediante orden de cumplimiento No 081/2018, el derecho de dominio regreso a los primigenios propietarios razón por la cual no tiene objeto, por inexistencia de materia la continuación de la presente investigación cuya suerte no puede ser otra que su archivo definitivo."

En desarrollo de la audiencia de sustentación de solicitud de terminación anticipada del proceso por sentencia anticipada, el Fiscal 35 delegado del grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia y Paz el día 2 de julio de 2021, Dr. FRANCISCO ÁLVAREZ CÓRDOBA, presentó una relación de los bienes ofrecidos, entregados o denunciados por postulados del otrora Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia para la reparación de las víctimas, los cuales aparecen registrados en el informe fechado 30 de junio de 2021, con referencia *"INFORME DE BIENES SOLICITUD EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO BIENES BLOQUE MONTES DE MARÍA"*, con solicitudes de extinción de dominio.

Se trata de bienes entregados en desarrollo del trámite transicional por los postulados UBER ENRIQUE BANQUÉZ MARTÍNEZ, EDWAR COBOS TÉLLEZ y CARLOS ENRIQUE VERBEL VITOLA, todos miembros del Bloque Héroes de los Montes de María de las AUC, para efectos de decretar la extinción del derecho de dominio sobre los derechos principales y accesorios que recaigan sobre los mismos, así como sobre sus frutos y rendimientos a favor del Fondo de Reparación para las Víctimas, con el fin de ser monetizados, y, de ese modo, reparar individual o colectivamente a las víctimas. El delegado de la Fiscalía, efectuó la presentación de los siguientes bienes con pretensión de extinción de dominio en la forma y términos que se pasan a exponer a continuación:

1. Casa de UBER ENRIQUE BANQUÉZ MARTÍNEZ, Ubicada En El Conjunto Villa Carolina - El Edén, Lote No. 9, Cartagena (Bolívar). ID 60001 BMM.
2. Finca VERAKA (ASOJUVENTUD). ID 60175 BMM.

3. Apartamento y garaje No. 10 de NELSON STANP BERRIO. ID 60210 BMM.
4. Finca CIENAGUITA 1. ID 60172 BMM.
5. Finca CIENEGUITA 2. ID 60173 BMM.
6. Finca LOS PAJAROS. ID 60174 BMM.

1. Casa de UBER ENRIQUE BANQUÉZ MARTÍNEZ, Ubicada En El Conjunto Villa Carolina - El Edén, Lote No. 9, Cartagena (Bolívar). ID 60001 BMM.

1.1. Origen: este bien fue ofrecido por el postulado UBER ENRIQUE BANQUÉZ MARTÍNEZ conocido al interior de la organización Autodefensas Unidas de Colombia con el alias de "Juancho Dique", identificado con la cédula de ciudadanía número 78.586.156 de Puerto Libertador – Córdoba, en diligencia de versión libre sobre el tema específico de bienes, realizada el 15 de agosto de 2013, ante la Fiscalía 35 delegada ante Tribunal, adscrita al Grupo Interno de Persecución de bienes en el marco de Justicia Transicional, en cuya acta se lee *"…que no conoce el bien pero lo adquirió con dinero de la organización mientras delinquía en el norte de Bolívar, lo colocó a nombre de dos de sus hijos, y lo adquirió a través de un remate de un banco, cuya negociación hizo a través de su primera esposa señora TERESA ARROYO ARROYO".*

1.2. Identificación del bien: se trata de un bien con Matricula Inmobiliaria Nro.: 060-162107**.** Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena - Bolívar. Código Catastral Nro.: 13001010500300124000 – Código anterior: 010500300124000. Escritura Pública 3664 del 2004-10-22, Notaría 3 de Cartagena. Tipo de Bien: Predio Urbano.

Ubicación: Inmueble urbano ubicado en la Carrera 82 Nro. 31-139 Sector El Edén Calle del FIRE, Urbanización Villa Carolina, Casa Lote número 9, en el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Cartagena departamento de (Bolívar).

Características del bien: área aproximada de 71.50 mts2 de terreno y 116.70 mts. Se trata de una casa de dos plantas, en la primera planta se encuentra un garaje abierto de tres metros por cuatro metros y medio, una sala comedor de tres por cinco y medio metros, un patio de tres por dos metros y medio, una cocina y cuarto de servicio de dos y medio por tres metros, una escalera de acceso al segundo piso, en el cual hay tres cuartos o habitaciones y dos baños, un principal que tiene baño y las otras dos habitaciones comparten el otro baño.

Fecha de alistamiento: mediante informe de investigador de campo No. 8-46910 DEL 23-09-2013.

Avalúo Catastral: valor estimado del bien inmueble (Según Informe de Alistamiento FGN) tiene un de valor de $87.635.000. Y avalúo comercial (Según acta versión postulado) por valor de $150.000.000.

1.3. Medidas cautelares: Audiencia reservada de imposición de medida cautelar de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo mediante acta 050-2013 del 16-10-2013 del Tribunal Superior Distrito Judicial de Barranquilla Sala de Justicia y Paz. Decisión ejecutoriada toda vez que no se interpusieron recursos contra la misma. Radicado de Sala: 08001-55-52-00 I-20 13-80077.

Según consulta del 30-06-2021 a la Ventanilla Única de Registro (VUR) de la Superintendencia de Notariado y Registro, se verifican como últimas anotaciones del folio de matrícula inmobiliaria de este inmueble: Anotación Nro. 11, Fecha: 29-10- 2013, radicación 2013-060-6-23541, Doc. oficio 15986 del 2013-10-21 00:00:00 Tribunal Superior Distrito Judicial de Barranquilla. Valor acto: $0. Especificación: 0440 embargo penal y suspensión del poder dispositivo de bienes con fines de extinción de dominio (Medida Cautelar). Personas que intervienen en el acto (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto). De: Tribunal Superior Distrito Judicial de Barranquilla, A: BANQUÉZ MARTÍNEZ UBER ENRIQUE.

1.4. Fecha de secuestro y entrega al Fondo para Reparación de Víctimas: acta de secuestro y entrega de inmueble al Fondo De Reparación de Victimas de fecha 17 de febrero de 2014 – Fiscalía 35 Unidad Nacional para la Justicia y la Paz.

1.5. Solicitud de restitución ante la UAEGRTD: Se remitió correo con formato anexo de fecha 10-02-2021, respondido mediante oficio URT-DTBCB-00563 del 03-03-2021, Dra. MILETH JOHANA AGAMEZ LÓPEZ Directora Territorial Bolívar – Sucre UAEGRTD, en el que se informa que realizada la búsqueda en el Sistema de Registro el día 03-03-2021 bajo el criterio de nombres de los titulares de derecho y el folio de matrícula inmobiliaria No. 060-162107 NO se encuentra resultado. El 02-07-2021 se remitió nuevamente correo a la UAEGRTD con el fin de actualizar tal información, la que es respondida a través del oficio URT-0ABS-00510 del 25-06-2021 firmado por la Dra. MILETH JOHANA AGAMEZ – Directora Territorial Bolívar UAEGRTD en el que se permiten informar que una vez se realizó el cruce de la información enviada, y consultado el Sistema de Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (SRTDAF), así

como la base de datos espacial con fecha de corte al día 21 de junio de 2021, No existen solicitudes de restitución de tierras ni solicitudes de inscripción o cancelación de medida de protección en el Registro de Predios y Territorios Abandonados RUPTA sobre los predios consultados.

1.6. Radicación de solicitud de audiencia de incidente de oposición de terceros a la medida cautelar: se emitió en tal sentido oficio de fecha 10-02-2021 radicado a través del correo electrónico de la Secretaría del Tribunal Superior de Barranquilla del que se obtuvo respuesta mediante oficio número 0883 el 16-02-2021 - Dra. URSULA DEL PILAR ISAZA RIVERA, Secretaria Sala de Justicia y Paz Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a través del cual se certifica que con respecto al inmueble con matrícula inmobiliaria número 060-162107. NO se ha radicado ninguna solicitud de Incidente de Oposición. El 02-07-2021 se remitió nuevamente solicitud a la Secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla con el fin de actualizar tal información, obteniéndose respuesta a través del oficio Nro. 1611 del 29-06-2021 expedido por la Dra. IRMA LUCY VANEGAS GÓMEZ, Secretaria Sala Justicia y Paz del Tribunal Superior Barranquilla Atlántico, en el que se indicó que NO se encontró solicitud de incidente de oposición alguna.

2. Finca VERAKA (ASOJUVENTUD). ID 60175 BMM.

2.1. Origen. Este bien fue ofrecido por el postulado EDWAR COBOS TELLEZ conocido al interior de la organización armada al margen de la ley con el alias de "Diego Vecino", identificado con la cédula de ciudadanía número 91.262.291 de Bucaramanga (Santander), en diligencia de versión libre sobre el tema específico de bienes, realizada el 10 de agosto de 2013 y posteriormente ampliada el 24 de octubre de 2013 ante la Fiscalía 35 delegada ante Tribunal adscrita al Grupo Interno de Persecución de bienes en el marco de Justicia Transicional, de cuya acta inicial se lee *"…casa finca con una extensión de dos hectáreas y media, ubicada en Sincelejo, es un predio urbanizable, por su cercanía con este municipio, este predio fue comprado en el año 2004 o 2005, a cuarenta millones de pesos la hectárea y su valor total fue de cien millones de pesos, pero que está dentro de los predios que hacen parte del actual crecimiento de la ciudad para los estratos 4 y 5 de Sincelejo, este predio se le compro a ASOJUVENTUD, a la mamá de la señora LUCY GONZALEZ, la esposa de EDUARDITO MENDEZ, miembro de la sociedad Sucreña, el señor JADER CASTILLA CUELLO, era el representante legal de ASOJUVENTUD, siempre estuvo a su nombre. Esta tierra se compró inicialmente para llevar a cabo programas de atención a muchachos con*

problemas de drogadicción, allí se construyó una marranera, la adecuación de un lago para cultivo de Cachama, para que los internos tuvieran un sitio donde laborar en su paso por el programa de rehabilitación".

2.2. Identificación del bien: Matricula Inmobiliaria Nro. 340-45370 Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo - Sucre. Código Catastral No. 70001000200060101000, Código Catastral Anterior 00-02-0006-0101-000. Escritura 1180 del 2005-10-18 Notaria Tercera de Sincelejo. Tipo de bien: predio urbano. Ubicación: Finca Veraka (antes llamada Pradera del Picotazo), ubicada en el Corregimiento El Cinco, frente al parque Cementerio "Los Ángeles", km 2 de la vía que conduce de Sincelejo a Sampués departamento de (Sucre).

Características del bien: El predio se encuentra conformado por tres (3) cabañas, tres (3) estanques para cría de peces, uno de los cuales se encuentra seco, cuenta con varias enramadas para la crianza en pequeña escala de animales domésticos, un (1) gallinero, un (1) kiosco, una (1) cancha de futbol sin mantenimiento, zona de árboles frutales, zona de parqueadero, un callejón de entrada y una (1) caseta en material de construcción al ingreso a la finca con publicidad de venta y distribución de alimentos y productos lácteos bajo el nombre "Lácteos Atoyabuey". La finca se encuentra delimitada con árboles frutales de la región y cercado de 2 y 3 hiladas de alambre de púas, con postes rudimentarios de madera.

Fecha de alistamiento: informe de investigador de campo No. 8-70625 del 16-06-2014.

Valor comercial: el valor estimado del bien inmueble (Según Acta de Secuestro del 26-03-2015) es de $370.000.000.

2.3. Medidas cautelares: audiencia reservada de imposición de medida cautelar de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo mediante acta 065-2014 del 30-10-2014 del Tribunal Superior Distrito Judicial de Barranquilla Sala de Justicia y Paz. Decisión ejecutoriada toda vez que no se interpusieron recursos contra la misma. Radicado de Sala: 11001-60-00253-2006-82285.

Según consulta del 30-06-2021 a la Ventanilla Única de Registro (VUR) de la Superintendencia de Notariado y Registro, se verifican anotaciones del folio de matrícula inmobiliaria del inmueble: anotación Nro. 15 Fecha: 20-11-2014, radicación: 2014-340-6-10763, Doc: oficio 29254 del 2014-11-05, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. Valor Acto: $0. Especificación: 0440 embargo penal embargo y suspensión del poder dispositivo - rad nro. 11001-60-00253-2006-82285 (medida cautelar) personas que intervienen en el acto (X-

titular de derecho real de dominio- I titular de dominio incompleto) de: Tribunal Superior Distrito Judicial de Barranquilla- Secretaría Justicia y Paz.

Anotación Nro. 16 Fecha: 15-06-2016, radicación: 2016-340-6-6004, Doc: oficio 0557 DEL 2016-05-02, Juzgado Sexto Civil del Circuito de Sincelejo. Especificación: 0450 iniciación procedimiento de expropiación por vía administrativa radicado 2016-00091-00 (medida cautelar). Personas que intervienen en el acto (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto) DE: Instituto Nacional de Concesiones Nit. 8301259969 A: Sarmiento Monterroza Miguel Arturo CC 92526734 X A: Banco Central Hipotecario NIT. 8600066379 A: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla NIT. 8000165799.

2.4. Fecha de secuestro y entrega al fondo para reparación de víctimas: acta de secuestro y entrega de inmueble al Fondo de Reparación de Víctimas de fecha 26-03-2015 – Fiscalía 11 Grupo de Trabajo Interno de Persecución de Bienes en el marco de Justicia Transicional.

2.5. Solicitud de restitución ante LA UAEGRTD: Se remitió correo con formato anexo de fecha 10-02-2021 respondido mediante oficio URT-DTBCB-00563 del 03-03-2021 Dra. MILETH JOHANA AGAMEZ LÓPEZ Directora Territorial Bolívar – Sucre UAEGRTD, en el que se informa que realizada la búsqueda en el Sistema de Registro el día 03-03-2021 bajo el criterio de nombres de los titulares de derecho y el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 340-45370 NO se encuentra resultado. El 02-07-2021 se remitió nuevamente correo a la UAEGRTD con el fin de actualizar tal información, la que es respondida a través del oficio URT-0ABS-00510 del 25-06-2021 firmado por la Dra. MILETH JOHANA AGAMEZ – Directora Territorial Bolívar UAEGRTD en el que se permiten informar que una vez se realizó el cruce de la información enviada, y consultado el Sistema de Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (SRTDAF), así como la base de datos espacial con fecha de corte al día 21 de junio de 2021, No existen solicitudes de restitución de tierras ni solicitudes de inscripción o cancelación de medida de protección en el Registro de Predios y Territorios Abandonados RUPTA sobre los predios consultados.

2.6. Radicación solicitud de audiencia incidente de oposición de terceros a la medida cautelar: Se emitió en tal sentido el oficio de fecha 10-02-2021, radicado a través del correo electrónico de la Secretaría del Tribunal Superior de Barranquilla del que se obtuvo respuesta mediante oficio número 0883 del 16-02-

2021 - Dra. ÚRSULA DEL PILAR ISAZA RIVERA, Secretaria de Sala de Justicia y Paz Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a través del cual se certifica que con respecto al inmueble con matrícula inmobiliaria número 340-45370 NO se ha radicado ninguna solicitud de Incidente de Oposición. El 02-07-2021 se remitió nuevamente solicitud a la Secretaría del Tribunal Superior de Barranquilla con el fin de actualizar tal información, obteniéndose respuesta a través del oficio Nro. 1611 del 29-06-2021 expedido por la Dra. Irma Lucy Vanegas Gómez – Secretaría – Sala Justicia y Paz Tribunal Superior Barranquilla Atlántico, NO se encontró solicitud de incidente de oposición alguna.

3. Apartamento y garaje No. 10 de NELSON STANP BERRIO. ID 60210 BMM.

3.1. Origen: este bien fue ofrecido por el postulado CARLOS ENRIQUE VERBEL VITOLA conocido al interior de la organización armada al margen de la ley Autodefensas Unidas de Colombia con el alias de "Caliche" o "Carlos Tous", identificado con la cédula de ciudadanía número 92.518.477 de Sincelejo (Sucre), en diligencia de versión libre sobre el tema específico de bienes realizada el 28 de octubre de 2013 ante la Fiscalía 35 delegada ante Tribunal adscrita al Grupo Interno de Persecución de Bienes en el marco de Justicia Transicional, de cuya acta inicial se lee *"…Hay un apartamento de NELSON STANP, diputado de RODRIGO MERCADO PELUFFO, a la entrada del barrio Venecia, por la parte del SENA, frente a GOOD YEAR, es un conjunto cerrado, hay un palo de pino, en el tercer piso, lo compró NELSON STANP con dinero de RODRIGO MERCADO PELUFFO, el cual se lo regaló CADENA por haber ganado las elecciones, ya que si perdía la orden era que se lo llevaran a CADENA al CAUCHO amarrado, por la plata que CADENA habla invertido en su campaña, STANP vivía en el Hotel Ancor, por el sector de LAS PEÑITAS…"*.

3.2. Identificación del bien: Matricula Inmobiliaria Nro.: 340-63696, Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sincelejo (Sucre). Código Catastral Nro.: 700010101000003060902900000042. Escritura Pública 1330 del 2004-12-29 Notaria Tercera de Sincelejo. Tipo De Bien: Predio Urbano. Ubicación: Calle 32 Número 36 B - 29 apartamento 402 Edificio Camino Real Propiedad Horizontal en la ciudad de Sincelejo (Sucre).

Características del bien: se trata del apartamento 402, ubicado en el cuarto piso del edificio Camino Real, construido en un área privada de setenta y dos metros cuadrados con treinta y seis centímetros (72.36 m2), el cual consta de sala pantry, terraza, una (1) alcoba con closet, de dos (2) baños, cocina integral con despensa

y patio de labores, este apartamento tiene además para su uso exclusivo una terraza de 42.55 metros cuadrados y el garaje número 10.

Fecha de alistamiento: informe de investigador de campo No. 11-58724 del 03-11-2015. Valor comercial estimado (Según informe técnico de alistamiento) en $103.509.000.

3.3. Medidas cautelares: audiencia reservada con imposición de medida cautelar de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo mediante acta 088-2018 del 05-07-2018, Tribunal Superior Distrito Judicial de Barranquilla Sala de Justicia y Paz. Decisión ejecutoriada toda vez que no se interpusieron recursos contra la misma. Radicado de la Sala: 1100160002532008-83628. Según consulta Ventanilla Única de Registro (VUR) de la Superintendencia de Notariado y Registro, se verifican anotaciones del folio de matrícula inmobiliaria del inmueble: anotación Nro. 21, Fecha 16-08-2018, radicación: 2018-340-6-7690, Doc: oficio 155 del 2018-07-19 00:00:00, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla Sala de Justicia y Paz. Especificación: 0485 embargo en proceso de Justicia y Paz - Ley 1592 de 2012, que por oficio Nro. 155 de julio 19 de 2018 el Consejo Superior De La Judicatura – Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico - Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla - Sala de Justicia y Paz mediante auto del 19 de julio de 2018, por la cual impone embargo, secuestro y suspensión e inscripción en el respectivo folio de matrícula la medida de embargo ordenadas sobre el bien inmueble identificado con número de matrícula 340-63696 y referencia catastral anterior No. 70001010030600429O2 y la actual 70001010100000306090290000042, ubicado en la Calle 32 Nro. 36B-29, apartamento 402 del edificio Camino Real del barrio Venecia, de Sincelejo (sucre), (medida cautelar) personas que intervienen en el acto (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto) De: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla Sala de Justicia y Paz, A: STANP BERRIO NELSON CC 9040567.

3.4. Fecha de secuestro: acta de medida de secuestro y entrega de inmueble al Fondo de Reparación de Victimas de fecha 10-07-2019 – Fiscalía 64 Especializada de apoyo a la Fiscalía 35 adscrita al Grupo Interno de Trabajo de Persecución de Bienes en el marco de Justicia Transicional.

3.5. Solicitud de restitución ante la UAEGRTD: se remitió correo con formato anexo de fecha 10-02-2021 respondido mediante oficio URT-DTBCB-00563 del 03-03-2021 Dra. MILETH JOHANA AGAMEZ LÓPEZ Directora Territorial Bolívar – Sucre UAEGRTD, en el que se informa que realizada la búsqueda en el

Sistema de Registro el día 03-03-2021 bajo el criterio de nombres de los titulares de derecho y el folio de matrícula inmobiliaria nro. 340-63696 NO se encuentra resultado. El 02-07-2021 se remitió nuevamente correo a la UAEGRTD con el fin de actualizar tal información, la que es respondida a través del oficio URT-0ABS-00510 del 25-06-2021 firmado por la Dra. MILETH JOHANA AGAMEZ – Directora Territorial Bolívar UAEGRTD en el que se permiten informar que una vez realizado el cruce de la información enviada, y consultado el Sistema de Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (SRTDAF), así como la base de datos espacial con fecha de corte al día 21 de junio de 2021, No existen solicitudes de restitución de tierras ni solicitudes de inscripción o cancelación de medida de protección en el Registro de Predios y Territorios Abandonados RUPTA sobre los predios consultados.

3.6. Radicación solicitud de audiencia incidente de oposición de terceros a la medida cautelar: se emitió en tal sentido oficio de fecha 10-02-2021 radicado a través del correo electrónico de la Secretaría del Tribunal Superior de Barranquilla del que se obtuvo respuesta mediante oficio número 0883 del 16-02-2021, Dra. ÚRSULA DEL PILAR ISAZA RIVERA, Secretaria Sala de Justicia y Paz Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a través del cual se certifica que con respecto al inmueble con matrícula inmobiliaria número 340-63696 NO se ha radicado ninguna solicitud de Incidente de Oposición. El 02-07-2021 se remitió nuevamente solicitud a la Secretaría del Tribunal Superior de Barranquilla con el fin de actualizar tal información, obteniéndose respuesta a través del oficio Nro. 1611 del 29-06-2021 expedido por la Dra. IRMA LUCY VANEGAS GÓMEZ – secretaria para la época de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Atlántico, NO se encontró solicitud de incidente de oposición alguna.

4. Finca CIENAGUITA 1. ID 60172 BMM.

4.1. Origen: este bien fue ofrecido por el postulado EDWAR COBOS TÉLLEZ conocido al interior de la organización con el alias de "Diego Vecino", identificado con la cédula de ciudadanía número 91.262.291 de Bucaramanga – Santander, en diligencia de versión libre sobre el tema específico de bienes realizada el 10 de agosto de 2013 ante la Fiscalía 35 delegada ante Tribunal, adscrita al Grupo Interno de Persecución de bienes en el marco de Justicia Transicional de esta ciudad, de cuya acta inicial se lee *"…compré tres predios denominados: Cienaguita 1 y Cieneguita 2, de 20 hectáreas cada una, también compré la Finca LOS PÁJAROS, con una extensión de 218 hectáreas, a JOSE MÉNDEZ ROMERO, cuya negociación no se ha podido legalizar por diferencias*

con los hijos de JOSE MÉNDEZ ROMERO, cuya promesa de venta no se hizo de manera inmediata debido a la confianza depositada por el versionado en los hermanos MÉNDEZ ROMERO, debido a que en esa tierra había un ganado de estas personas que le vendieron, la promesa de venta se hizo a nombre de JORGE LUIS PRETELT PARDO, desmovilizado de las autodefensas, pero no recuerda donde se hizo dicho documento, en la cual actuó como comisionista de la negociación, un piloto de aviación para fumigación conocido como EL CAPI HERNÁNDEZ, pero al caer detenido el versionado, pierde el contacto con los hombres que le vendieron estas fincas, es así como muere don JOSE MÉNDEZ de una penosa enfermedad, pero don EDUARDO MÉNDEZ, le dijo a COBOS TÉLLEZ, que estaba dispuesto a legalizar la documentación de la compraventa, pero los hijos de JOSE MÉNDEZ, dicen que el negocio debe replantearse ya que la tierra valía más y es así como accede a pagarles cien mil pesos más por hectáreas, luego de tres años de haber hecho un negocio con los señores MÉNDEZ, es así como el versionado menciona que hizo un documento privado a través del cual reconocen que se hace un reajuste en el valor de la tierra, el cual firman voluntariamente, es así como aparece en el escenario un empresario Antioqueño de nombre ÁLVARO ECHEVERRIA, quien según el versionado, le propone la compra de las tierras por un valor de dos millones de pesos por hectárea, y que les reconociera a los hijos del señor JOSE MÉNDEZ, un millón de pesos por hectárea, lo cual no aceptó; ya que dichas tierras podrían estar costando el día de hoy unos cuatro mil ochocientos millones de pesos aproximadamente…"

4.2. Identificación del bien: matricula Inmobiliaria Nro.: 062-9471 Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de El Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar. Código Catastral Nro.: 00-1-002-006. Tipo de bien: predio rural. Ubicación: vereda La Sierra, jurisdicción del municipio de Córdoba Tetón departamento de (Bolívar).

Características del Bien: se trata de un predio de mayor extensión cuya área ha sido calculada aproximadamente en veinte (20) hectáreas**.**

Fecha de alistamiento: informe de investigador de campo No. 9-125562 del 12-12-2017. Valor comercial estimado (Según Acta de Secuestro del 26-03-2015) por valor de $67.842.500.

4.3. Medidas cautelares: audiencia reservada de imposición de medida cautelar de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo mediante acta 106-2018

del 23-07-2018 del Tribunal Superior Distrito Judicial de Barranquilla Sala de Justicia y Paz. Decisión ejecutoriada toda vez que no se interpusieron recursos contra la misma. Radicado de la Sala: 11001-60-00253-2006-82285. Según consulta del 30-06-2021 la Ventanilla Única de Registro (VUR) de la Superintendencia de Notariado y Registro, se verifican anotaciones del folio de matrícula inmobiliaria del inmueble: anotación Nro. 13, fecha 17-09-2018, radicación 2018-062-6-1976, Doc: oficio 1464 del 2018-09-05, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla Sala de Justicia y Paz. Especificación: 0485 embargo en proceso de Justicia y Paz - Ley 1592 de 2012 suspensión del poder dispositivo con fines de extinción de dominio (medida cautelar), personas que intervienen en el acto (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto) De: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla Sala De Justicia Y Paz, A: COBO TÉLLEZ EDWAR.

4.4. Fecha de secuestro y entrega al fondo para reparación de víctimas: acta de secuestro y entrega de inmueble al Fondo de reparación de víctimas de fecha 09-07-2019 – Fiscalía 64 Especializada de apoyo a la Fiscalía 35 adscrita al Grupo Interno de Trabajo de Persecución de Bienes en el marco de Justicia Transicional.

4.5. Solicitud de restitución ante la UAEGRTD: se remitió correo con formato anexo de fecha 10-02-2021 respondido mediante oficio URT-DTBCB-00563 del 03-03-2021 Dra. MILETH JOHANA AGAMEZ LÓPEZ Directora Territorial Bolívar – Sucre UAEGRTD, en el que se informa que realizada la búsqueda en el Sistema de Registro el día 03-03-2021 bajo el criterio de nombres de los titulares de derecho y el folio de matrícula inmobiliaria No. 062-9471 NO se encuentra resultado. En tal sentido el 02-07-2021 se remitió nuevamente correo a la UAEGRTD con el fin de actualizar tal información, la que es respondida a través del oficio URT-0ABS-00510 del 25-06-2021 firmado por la Dra. MILETH JOHANA AGAMEZ – Directora Territorial Bolívar UAEGRTD en el que se permiten informar que una vez se realizó el cruce de la información enviada, y consultado el Sistema de Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (SRTDAF), así como la base de datos espacial con fecha de corte al día 21 de junio de 2021, No existen solicitudes de restitución de tierras ni solicitudes de inscripción o cancelación de medida de protección en el Registro de Predios y Territorios Abandonados RUPTA sobre los predios consultados.

4.6. Radicación solicitud de audiencia incidente de oposición de terceros a la medida cautelar: se emitió en tal sentido y a efectos de acudir a la audiencia, solicitud el 02-07-2021 a la Secretaría del Tribunal Superior de Barranquilla, obteniéndose respuesta a través del oficio Nro. 1611 del 29-06-2021 expedido por la Dra. IRMA LUCY VANEGAS GÓMEZ – Secretaria de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, Atlántico, en donde se informa SI se ha tramitado incidente de oposición, el cual fuera INADMITIDO mediante Acta 84-2019 y RECHAZADO mediante Acta 125-2019.

5. Finca CIENEGUITA 2. ID 60173 BMM.

5.1. Origen: Bien ofrecido por el postulado EDWAR COBOS TÉLLEZ conocido al interior de la organización con el alias de DIEGO VECINO, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.262.291 de Bucaramanga – Santander, en diligencia de versión libre sobre el tema específico de bienes realizada el 10 de agosto de 2013 ante la Fiscalía 35 delegada ante Tribunal adscrita al Grupo Interno de Persecución de Bienes en el marco de Justicia Transicional de esta ciudad, de cuya acta inicial se lee *"...compre tres predios denominados: Cienaguita 1 y Cieneguita 2, de 20 hectáreas cada una, también compré la Finca LOS PÁJAROS, con una extensión de 218 hectáreas, a JOSE MÉNDEZ ROMERO, cuya negociación no se ha podido legalizar por diferencias con los hijos de JOSE MÉNDEZ ROMERO, cuya promesa de venta no se hizo de manera inmediata debido a la confianza depositada por el versionado en los hermanos MÉNDEZ ROMERO, debido a que en esa tierra había un ganado de estas personas que le vendieron, la promesa de venta se hizo a nombre de JORGE LUIS PRETELT PARDO, desmovilizado de las autodefensas, pero no recuerda donde se hizo dicho documento, en la cual actuó como comisionista de la negociación, un piloto de aviación para fumigación conocido como EL CAPI HERNÁNDEZ, pero al caer detenido el versionado, pierde el contacto con los hombres que le vendieron estas fincas, es así como muere don JOSE MÉNDEZ de una penosa enfermedad, pero don EDUARDO MÉNDEZ, le dijo a COBOS TÉLLEZ, que estaba dispuesto a legalizar la documentación de la compraventa, pero los hijos de JOSE MÉNDEZ, dicen que el negocio debe replantearse ya que la tierra valía más y es así como accede a pagarles cien mil pesos más por hectáreas, luego de tres años de haber hecho un negocio con los señores MÉNDEZ, es así como el versionado menciona que hizo un documento privado a través del cual reconocen que se hace un reajuste en el valor de la tierra, el cual firman voluntariamente, es así como aparece en el escenario un empresario Antioqueño de nombre ÁLVARO*

ECHEVERRIA, quien según el versionado, le propone la compra de las tierras por un valor de dos millones de pesos por hectárea, y que les reconociera a los hijos del señor JOSE MÉNDEZ, un millón de pesos por hectárea, lo cual no aceptó; ya que dichas tierras podrían estar costando el día de hoy unos cuatro mil ochocientos millones de pesos aproximadamente…".

5.2. Identificación del bien: matricula inmobiliaria Nro.: 062-1662 Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de El Carmen de Bolívar departamento de Bolívar. Código catastral Nro.: 00-1-002-006. Tipo de bien: Predio rural. Ubicación: Vereda La Sierra jurisdicción del municipio de Córdoba Tetón en el departamento de Bolívar.

Características del bien: se trata de un predio de mayor extensión cuya área ha sido calculada aproximadamente en veinte (20) hectáreas.

Fecha de alistamiento: informe de investigador de campo No. 9-125561 del 11-12-2017.

Valor Comercial: el valor estimado del bien inmueble (Según informe de alistamiento) por valor de $73.260.000.

5.3. Medidas cautelares: audiencia reservada imposición de medida cautelar de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo mediante acta 106-2018 del 23-07-2018 Tribunal Superior Distrito Judicial de Barranquilla Sala de Justicia y Paz. Decisión ejecutoriada toda vez que no se interpusieron recursos contra la misma. Radicado de Sala: 11001-60-00253-2006-82285.

5.4. Fecha de secuestro y entrega al fondo para reparación de víctimas: según consulta del 30-06-2021 a la Ventanilla Única de Registro (VUR) de la Superintendencia de Notariado y Registro, se verificaron las anotaciones del folio de matrícula inmobiliaria del inmueble: Anotación Nro. 14, fecha: 17-09-2018, radicación: 2018-062-6-1976, Doc: oficio 1464 del 2018-09-05 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla Sala de Justicia y Paz. Especificación: 0485 embargo en proceso de Justicia y Paz - Ley 1592 de 2012, suspensión del poder dispositivo con fines de extinción de dominio (medida cautelar) personas que intervienen en el acto (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto) De: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla Sala de Justicia y Paz A: COBOS TÉLLEZ EDWAR.

Acta de secuestro y entrega de inmueble al Fondo de Reparación de Víctimas de fecha 09-07-2019 – Fiscalía 64 Especializada de apoyo a la Fiscalía 35 adscrita al Grupo Interno de Trabajo de Persecución de Bienes en el marco de Justicia Transicional.

5.5. Solicitud de restitución ante la UAEGRTD: Se remitió correo con formato anexo de fecha 10-02-2021 respondido mediante oficio URT-DTBCB-00563 del 03-03-2021 Dra. MILETH JOHANA AGAMEZ LÓPEZ Directora Territorial Bolívar – Sucre UAEGRTD, en el que se informa que realizada la búsqueda en el Sistema de Registro el día 03-03-2021 bajo el criterio de nombres de los titulares de derecho y el folio de matrícula inmobiliaria Nro. 062-1662, NO se encuentra resultado. El 02-07-2021 se remitió nuevamente correo a la UAEGRTD con el fin de actualizar tal información, la que es respondida a través del oficio URT-0ABS-00510 del 25-06-2021 firmado por la Dra. MILETH JOHANA AGAMEZ – Directora Territorial Bolívar - Sucre UAEGRTD en el que se permiten informar que una vez se realizó el cruce de la información enviada, y consultado el Sistema de Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (SRTDAF), así como la base de datos espacial con fecha de corte al día 21 de junio de 2021, No existen solicitudes de restitución de tierras ni solicitudes de inscripción o cancelación de medida de protección en el Registro de Predios y Territorios Abandonados RUPTA sobre los predios consultados.

5.6. Radicación solicitud de audiencia de incidente de oposición de terceros a la medida cautelar: se emitió en tal sentido solicitud a la Secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 02-07-2021, obteniéndose respuesta a través del oficio Nro. 1611 del 29-06-2021 expedido por la Dra. IRMA LUCY VANEGAS GÓMEZ – Secretaria para la época de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Atlántico, en donde se informa que SI se ha tramitado incidente de oposición, el cual fuera inadmitido mediante Acta 84-2019 y rechazado mediante Acta 125-2019.

6. Finca LOS PÁJAROS. ID 60174 BMM.

6.1. Origen: este bien ofrecido por el postulado EDWAR COBOS TÉLLEZ conocido al interior de la organización armada ilegal con el alias de DIEGO VECINO identificado con la cédula de ciudadanía número 91.262.291 de Bucaramanga – Santander, en diligencia de versión libre sobre el tema específico de bienes realizada el 10 de agosto de 2013 ante la Fiscalía 35 delegada ante Tribunal adscrita al Grupo Interno de Persecución de Bienes en el marco de Justicia Transicional, de cuya acta inicial se lee *"…compre tres predios denominados: Cienaguita 1 y Cieneguita 2, de 20 hectáreas cada una, también compré la Finca LOS PÁJAROS, con una extensión de 218 hectáreas, a JOSE MÉNDEZ ROMERO, cuya negociación no se ha podido legalizar por diferencias con los hijos de JOSE MÉNDEZ ROMERO, cuya promesa de venta no se hizo de manera inmediata debido a la confianza depositada por el versionado en los*

hermanos MÉNDEZ ROMERO, debido a que en esa tierra había un ganado de estas personas que le vendieron, la promesa de venta se hizo a nombre de JORGE LUIS PRETELT PARDO, desmovilizado de las autodefensas, pero no recuerda donde se hizo dicho documento, en la cual actuó como comisionista de la negociación, un piloto de aviación para fumigación conocido como EL CAPI HERNÁNDEZ, pero al caer detenido el versionado, pierde el contacto con los hombres que le vendieron estas fincas, es así como muere don JOSE MÉNDEZ de una penosa enfermedad, pero don EDUARDO MÉNDEZ, le dijo a COBOS TÉLLEZ, que estaba dispuesto a legalizar la documentación de la compraventa, pero los hijos de JOSE MÉNDEZ, dicen que el negocio debe replantearse ya que la tierra valía más y es así como accede a pagarles cien mil pesos más por hectáreas, luego de tres años de haber hecho un negocio con los señores MÉNDEZ, es así como el versionado menciona que hizo un documento privado a través del cual reconocen que se hace un reajuste en el valor de la tierra, el cual firman voluntariamente, es así como aparece en el escenario un empresario Antioqueño de nombre ÁLVARO ECHEVERRIA, quien según el versionado, le propone la compra de las tierras por un valor de dos millones de pesos por hectárea, y que les reconociera a los hijos del señor JOSE MÉNDEZ, un millón de pesos por hectárea, lo cual no aceptó; ya que dichas tierras podrían estar costando el día de hoy unos cuatro mil ochocientos millones de pesos aproximadamente…".

6.2. Identificación del bien: Matricula Inmobiliaria Nro.: 062-1384 - Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de El Carmen de Bolívar departamento de Bolívar. Código catastral Nro.: 13212000100000002000700000000. Referencia catastral anterior: 13212000100020007000. Tipo de bien: predio rural. Ubicación: Vereda La Sierra jurisdicción del municipio de Córdoba Tetón en el departamento de Bolívar.

Características del bien: Se trata de un predio de mayor extensión de 218 hectáreas denominado Finca Los Pájaros, en la actualidad el predio se encuentra deshabitado, no hay construcciones levantadas, está totalmente enmontado y no está siendo explotado económicamente. De acuerdo con el plan de ordenamiento territorial el predio se encuentra en una zona catalogada como de uso del suelo agrícola y agrosilvopastoril.

Fecha de alistamiento: informe de investigador de campo No. 125560 del 10-12-2017 e Informe Técnico Investigador de campo correspondiente a la OPJ 291 del 16-11-2017.

Valor comercial: valor estimado del bien inmueble según informe de alistamiento por la suma de seiscientos ochenta y siete millones setecientos setenta y ocho mil doscientos pesos $687.778.200.

6.3. Medidas cautelares: Audiencia reservada de imposición de medida cautelar de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo mediante acta 106-2018 del 23-07-2018 Tribunal Superior Distrito Judicial de Barranquilla Sala de Justicia y Paz. Decisión ejecutoriada toda vez que no se interpusieron recursos contra la misma. Radicado de la Sala: 11001-60-00253-2006-82285.

6.4. Fecha de secuestro y entrega al fondo para la reparación de víctimas: según consulta del 30-06-2021 a la Ventanilla Única de Registro (VUR) de la Superintendencia de Notariado y Registro, le aparecen anotaciones en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble: anotación: Nro. 24. Fecha: 17-09-2018. Radicación: 2018-062-6-1976. Doc: oficio 1464 del 2018-09-05 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla Sala de Justicia y Paz. Especificación: 0485 embargo en proceso de Justicia y Paz - Ley 1592 de 2012 suspensión del poder dispositivo con fines de extinción de dominio (medida cautelar) personas que intervienen en el acto (X-Titular de derecho real de dominio, I-Titular de dominio incompleto) De: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla Sala de Justicia y Paz A: COBO TÉLLEZ EDWAR.

Fecha de secuestro y entrega al Fondo para reparación de Victimas: conforme acta de secuestro y entrega de inmueble al Fondo de reparación de víctimas de fecha 09-07-2019 – Fiscalía 64 Especializada de apoyo a la Fiscalía 35 adscrita al Grupo Interno de Trabajo de Persecución de Bienes en el marco de Justicia Transicional.

6.5. Solicitud de restitución ante la UAEGRTD: Se remitió correo con formato anexo de fecha 10-02-2021 respondido mediante oficio URT-DTBCB-00563 del 03-03-2021 Dra. MILETH JOHANA AGAMEZ LÓPEZ Directora Territorial Bolívar – Sucre UAEGRTD, en el que se informa que realizada la búsqueda en el Sistema de Registro el día 03-03-2021 bajo el criterio de nombres de los titulares de derecho y el folio de matrícula inmobiliaria nro. 062-1384, NO se encuentra resultado. El 02-07-2021 se remitió nuevamente correo a la UAEGRTD con el fin de actualizar tal información, la que es respondida a través del oficio URT-0ABS-00510 del 25-06-2021 firmado por la Dra. MILETH JOHANA AGAMEZ – Directora Territorial Bolívar UAEGRTD en el que se permiten informar que una vez se realizó el cruce de la información enviada, y consultado el Sistema de Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (SRTDAF), así como la base de datos espacial con fecha de corte al día 21 de junio de 2021, No

existen solicitudes de restitución de tierras ni solicitudes de inscripción o cancelación de medida de protección en el Registro de Predios y Territorios Abandonados RUPTA sobre los predios consultados.

6.6. Radicación de solicitud de audiencia incidente de oposición de terceros a la medida cautelar: Se emitió en tal sentido el 02-07-2021 solicitud a la Secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, obteniéndose respuesta a través del oficio Nro. 1611 del 29-06-2021 expedido por la Dra. IRMA LUCY VANEGAS GÓMEZ, para entonces Secretaria de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, Atlántico, en donde se informa que se ha tramitado incidente de oposición, el cual fue INADMITIDO mediante Acta 84-2019 y rechazado mediante Acta 125-2019.

Análisis y conclusión.

En consideración a los inmuebles que quedaron claramente detallados en precedencia, que aparecen registrados en el informe del 30 de junio del 2021, que fue introducido al expediente en desarrollo de la vista pública por parte de la Fiscalía 35 del Grupo Interno de Trabajo de Persecución de Bienes, sobre los cuales se precisó su situación jurídica, la Sala encuentra que: *i)* se efectuó su plena individualización e identificación; *ii)* que se trata de bienes que fueron entregados, ofrecidos o denunciados por postulados del otrora Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, al cual pertenecieron los postulados aquí sentenciados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA**, con el fin de reparar a las víctimas, y que el ente acusador estableció su nexo esa organización armada ilegal; *iii)* esos bienes tienen vocación reparadora, al tenor de lo señalado por el artículo 11C de la Ley 975 de 2005, adicionado por el artículo 7º de la ley 1592 de 2012; *iv)* que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17B de la Ley 975 de 2005, adicionado por el artículo 16 de la ley 1592 de 2012, se constató la existencia de medidas cautelares de embargo, secuestro o suspensión del poder dispositivo sobre esos bienes, y que tales medidas fueron inscritas en los correspondientes folios de matrícula inmobiliaria y que los mismos fueron entregados al Fondo de Reparación para su administración en calidad de secuestre; y *v)* la inexistencia de solicitudes de restitución o trámites de oposición presentados ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en su Sala de Justicia y Paz, Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras o ante la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, o litigios que limiten la vocación de reparación del bien, hay inexistencia

de esas solicitudes de restitución o trámite de oposición presentado ante las referidas entidades.

Los mencionados artículos 11C adicionado por el artículo 7º de la ley 1592 de 2012 y el artículo 17B de la Ley 975 de 2005, adicionado por el artículo 16 de la ley 1592 de 2012, contemplan que: *"Artículo 7°. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 11C del siguiente tenor. Artículo 11C. Vocación reparadora de los bienes entregados, ofrecidos o denunciados. Los bienes entregados, ofrecidos o denunciados para su entrega por los postulados de que trata la presente ley, deben tener vocación reparadora. Se entiende por vocación reparadora la aptitud que deben tener todos los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados en el marco de la presente ley para reparar de manen efectiva a las víctimas.*

Se entienden como bienes sin vocación reparadora, los que no puedan ser identificados e individualizados, así como aquellos cuya administración o saneamiento resulte en perjuicio del derecho de las víctimas a la reparación integral.

El magistrado con funciones de control de garantías de las Salas de Justicia y Paz al decidir la adopción de medidas cautelares, deberá determinar si el bien tiene o no vocación reparadora, con fundamento en la información suministrada por el fiscal delegado del caso y por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –Fondo para la Reparación de las Víctimas–. Cuando el magistrado con funciones de control de garantías considere que el bien no tiene vocación reparadora, el bien no podrá ingresar al Fondo para la Reparación de las Víctimas bajo ningún concepto. Excepcionalmente, la Fiscalía entregará en forma provisional al Fondo para la Reparación de las Víctimas los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados que deban ser administrados en forma inmediata por esa entidad para evitar su deterioro, mientras se surte la audiencia preliminar de imposición de medidas cautelares.

La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – Fondo para la Reparación de las Víctimas–, previo al proceso de recepción del bien para su administración, adelantará de manera conjunta con la Fiscalía General de la Nación y con las demás entidades que posean información relevante, una actualización del alistamiento del bien objeto de administración que permita establecer sus condiciones físicas, jurídicas, sociales y económicas.

Parágrafo. Cuando el bien ofrecido o denunciado por el postulado no pueda ser efectivamente entregado por inexistencia de vocación reparadora, y se demuestre que el postulado no dispone de ningún otro bien con vocación reparadora, no se afectará la evaluación del requisito de elegibilidad ni la condición para acceder a la sustitución de la medida de aseguramiento de que trata el artículo 18A de la presente ley."

En cuanto al *"Artículo 16. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 17B del siguiente tenor: Artículo 17B. Imposición de medidas cautelares sobre bienes para efectos de extinción de dominio. Cuando el postulado haya ofrecido bienes de su titularidad real o aparente o denunciado aquellos del grupo armado organizado al margen de la ley al que perteneció, o la Fiscalía haya identificado bienes no ofrecidos o denunciados por los postulados, el fiscal delegado dispondrá la realización de las labores investigativas pertinentes para la identificación plena de esos bienes y la documentación de las circunstancias relacionadas con la posesión, adquisición y titularidad de los mismos. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – Fondo para la Reparación de las Víctimas – participará en las labores de alistamiento de los bienes susceptibles de ser cautelados, de conformidad con lo establecido en el artículo 11C, y suministrará toda la información disponible sobre los mismos. Esta información será soportada ante el magistrado con función de control de garantías en la respectiva audiencia para la decisión sobre la imposición de medidas cautelares.*

Cuando de los elementos materiales probatorios recaudados o de la información legalmente obtenida por la Fiscalía, sea posible inferir la titularidad real o aparente del postulado o del grupo armado organizado al margen de la ley, respecto de los bienes objeto de persecución, el fiscal delegado solicitará al magistrado con funciones de control de garantías la programación de una audiencia preliminar para la solicitud y decisión de medidas cautelares, a la cual deberá convocarse a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –Fondo para la Reparación de las Víctimas–.

En esta audiencia reservada, el fiscal delegado solicitará sin dilación al magistrado la adopción de medidas cautelares de embargo, secuestro o suspensión del poder dispositivo sobre los bienes; igualmente, procederá la medida sobre depósitos en entidades financieras, en el interior y en el exterior del

país de conformidad con los acuerdos de cooperación judicial en vigor. En el caso de bienes muebles como títulos valores y sus rendimientos, el fiscal delegado solicitará la orden de no pagarlos, cuando fuere imposible su aprehensión física. En el caso de personas jurídicas, el magistrado al momento de decretar la medida cautelar ordenará que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas como administradora del Fondo para la Reparación de las Víctimas ejerza los derechos sociales que correspondan a las acciones, cuotas o partes de interés social objeto de la misma hasta que se produzca decisión judicial definitiva y mientras tanto quienes aparezcan inscritos como socios, miembros de los órganos sociales y demás órganos de administración, representante legal o revisor fiscal, no podrán ejercer ningún acto de disposición, administración o gestión sobre aquellas. Si el magistrado con función de control de garantías acepta la solicitud, las medidas cautelares serán adoptadas de manera inmediata.

Los bienes afectados con medida cautelar serán puestos a disposición de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –Fondo para la Reparación de las Víctimas–, que tendrá la calidad de secuestre y estará a cargo de la administración provisional de los bienes, mientras se profiere sentencia de extinción de dominio.

Como podemos ver conforme a la normativa que se pone de presente en el cuerpo de esta sentencia, se han aplicado a los casos de los bienes que hacen parte de la solicitud de extinción de dominio por parta de la Fiscalía General de la Nación, en el trámite del presente proceso y al cual nos estamos refiriendo en esta sentencia, acorde a esta última norma trae la misma 6 parágrafos sobre procedimientos ha desarrollar frente a los bienes con medidas cautelares por parte de la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Fondo para la Reparación de las Víctimas, Dirección Nacional de Estupefacientes, Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, etc. Para los efectos de este acápite referido a la figura de la extinción de dominio destacamos el parágrafo 4º directamente relacionado con lo que refiere esta sentencia el cual contempla lo siguiente: "*Parágrafo 4°. Cuando los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados estén involucrados en un trámite de extinción del derecho de dominio adelantado en el marco de la Ley 793 de 2002, el fiscal delegado de Justicia y Paz solicitará la medida cautelar sobre el bien. Una vez decretada la medida, el fiscal que conozca del trámite de extinción de dominio declarará la*

improcedencia de la acción de extinción de dominio sobre este bien y ordenará a la Dirección Nacional de Estupefacientes, o quien haga sus veces, que ponga de manera inmediata el bien a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas. En este caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 11C, los bienes sin vocación reparadora no podrán ingresar al Fondo para la Reparación de las Víctimas.

En consecuencia, de todo lo precisado con anterioridad esta Sala de Justicia y Paz **declara la extinción del dominio de los bienes concretamente referidos en precedencia**, a favor del Fondo de Reparación para las Víctimas, con el fin de ser monetizados o, en su defecto, asignarlos a una persona natural o jurídica determinada en cumplimiento de la obligación que le asiste para reparar individual o colectivamente a las víctimas. Dichos bienes, en sus generalidades, como quedó visto, corresponden a:

Nombre del bien	**Matricula inmobiliaria o cédula catastral**	**Avalúo catastral/comercial**	**Ofrecido por el Postulado**
CASA EN CONJUNTO VILLAS DE CAROLINA EN LA URBANIZACIÓN EL EDÉN LOTE NUMERO 9 CARTAGENA.	060-162107	$ 150.000.000.	UBER ENRIQUE BANQUÉZ MARTÍNEZ.
FINCA VERAKA – SINCELEJO.	340-45370	$ 370.000.000.	EDWAR COBOS TÉLLEZ
CALLE 32 #36 B 29 URBANIZACIÓN VENECIA – SINCELEJO.	340-63696	$ 103.509.000.	CARLOS ENRIQUE VERBEL VITOLA
LA CIENAGUITA 1 – VEREDA LA SIERRA MUNICIPIO DE CÓRDOBA TETÓN DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	062-9471	$ 67.842.500.	EDWAR COBOS TÉLLEZ
LA CIENAGUITA 2 – VEREDA LA SIERRA MUNICIPIO DE CÓRDOBA TETÓN	062-1662	$ 73.260.000.	EDWAR COBOS TÉLLEZ

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.			
LOS PÁJAROS VEREDA LA SIERRA MUNICIPIO DE CÓRDOBA TETÓN DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	062-1384	$ 687.778.200.	EDWAR COBOS TÉLLEZ

La anterior decisión se adopta en razón a que, además de haberse acreditado los presupuestos exigidos por la normativa, no existe impedimento alguno para extinguir el derecho de propiedad de los activos que han sido objeto de solicitud por parte de la Fiscalía General de la Nación, por lo que, se itera, deberán ser puestos a disposición del Fondo para la Reparación a víctimas, de acuerdo con los artículos 11C adicionado por el artículo 7º de la ley 1592 de 2012 y el artículo 17B de la Ley 975 de 2005, adicionado por el artículo 16 de la ley 1592 de 2012, para efectos de que efectivamente aporten a la reparación integral de las víctimas afectadas con el accionar de las Autodefensas Unidas de Colombia, en particular aquellas que lo fueron del Bloque Montes de María.

Aunado a lo anterior, y no obstante ello, la Sala exhorta a la Fiscalía General de la Nación, a fin de que se continúen concretando las labores de persecución de los activos y demás actividades pertinentes al seguimiento de los bienes entregados, ofrecidos, denunciados o que pertenecieron al extinto Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, con el propósito que se incremente la proporción de predios informados en la audiencia como aquellos de los cuales se tenga o llegare a tener conocimiento para que se adelanten los diligenciamientos pertinentes y hagan parte de la reparaciones a las víctimas de los procesos que se adelantan en esta jurisdicción especial, máxime cuando por el mismo ente acusador se da cuenta del gran número de bienes muebles e inmuebles con los que contaba dicho grupo armado ilegal al margen de la ley.

X. DEL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE CARÁCTER EXCEPCIONAL A LAS VÍCTIMAS.

La aplicación de la ley de la ley de Justicia y Paz, trae consigo un trámite de vital importancia de naturaleza incidental el cual constituye un instrumento valioso y efectivo dirigido a reparar de manera integral a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, igualmente, al Derecho Internacional Humanitario y

demás normas internacionales de Derechos Humanos, en un esfuerzo del estado colombiano para tratar de mitigar en la medida de lo posible el dolor de estas víctimas, restablecer su dignidad, conocer y difundir la verdad de lo acontecido y propender por la no repetición de estos crímenes, bajo presupuesto de respeto y la satisfacción de los derechos de todas estas víctimas.

La reparación hace parte del derecho internacional como principio general, además de hacer parte de las normas consuetudinarias de mayor arraigo. Especialmente la Resolución 60/147 que recoge los "*Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones"*[202]-[203], se ha constituido en un instrumento relevante en materia de reparación integral de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario como lo hemos advertido, el cual ha sido acogido por *"la Corte Interamericana de Derechos Humanos*[204]*, la jurisprudencia de la Corte Constitucional*[205] *y del Consejo de Estado*[206]*"*[207]. Particularmente, ese instrumento reconoce que: *"al hacer valer el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones, la comunidad internacional hace honor a su palabra respecto del sufrimiento de las víctimas, los supervivientes y las generaciones futuras y reafirma los principios jurídicos internacionales de responsabilidad, justicia y Estado de derecho"*, es por lo que, en el título VII relacionado con el *"Derecho de las víctimas a disponer de recursos"*, principio 11, insta a los Estados parte para que: brinden *"[a]cceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación"*; así mismo, de acuerdo con el título VIII sobre

---

[202] Ver artículo 2.2.5.1.2.15 del decreto 1069 de 2015 y articulo 139 de la ley 1448 de 2011.
[203] ONU, E-CN_4-RES-2005-35. En: http://ap.ohchr.org/documents/S/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2005-35.doc.
[204] Cita del Consejo de Estado. Corte Interamericana de Derecho Humanos, Caso de la "Panela Blanca" (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala, Reparaciones y Costas, sentencia de 25 de mayo de 2001, Serie C No. 76, párr. 119; Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 12 de septiembre del 2005, Serie C No. 132, párr. 77; Caso Tibi vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 7 de septiembre de 2004, Serie C No. 114; Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 2 de julio de 2004, Serie C No. 107; Caso 19 comerciantes Vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 5 de julio de 2004, Serie C No. 109; Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010, Serie C No. 213.
[205] Cita del Consejo de Estado. Al respecto se remite a las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: sentencias C-578 de 2002; C-872 de 2003; T-025 de 2004; C-979 de 2005; T-188 de 2007; T-821 de 2007; T-458 de 2010.
[206] Cita del Consejo de Estado. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de febrero del 2011, rad. 34387, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia del 20 de febrero del 2008, rad. 16996, M.P. Enrique Gil Botero; sentencia del 19 de octubre del 2007, rad 29.273, M.P. Enrique Gil Botero.
[207] Consejo de Estado, Sección Tercera. "Referentes para la reparación de perjuicios inmateriales", documento final aprobado mediante acta del agosto de 2014.

acceso a la justicia, principio 13, para que se procure el establecimiento de *"procedimientos para que grupos de víctimas puedan presentar demandas de reparación y obtener reparación, según proceda"*, bajo el entendido que:

> *"15. Una reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario. Cuando se determine que una persona física o jurídica u otra entidad está obligada a dar reparación a una víctima, la parte responsable deberá conceder reparación a la víctima o indemnizar al Estado si éste hubiera ya dado reparación a la víctima.*
>
> *16. Los Estados han de procurar establecer programas nacionales de reparación y otra asistencia a las víctimas cuando el responsable de los daños sufridos no pueda o no quiera cumplir sus obligaciones.*
>
> *17. Los Estados ejecutarán, con respecto a las reclamaciones de las víctimas, las sentencias de sus tribunales que impongan reparaciones a las personas o entidades responsables de los daños sufridos, y procurarán ejecutar las sentencias extranjeras válidas que impongan reparaciones con arreglo al derecho interno y a las obligaciones jurídicas internacionales. Con ese fin, los Estados deben establecer en su derecho interno mecanismos eficaces para la ejecución de las sentencias que obliguen a reparar daños.*
>
> *18. Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición".*

Ahora bien, de acuerdo a los mandatos internacionales sobre derechos humanos, tal y como se desprende de lo descrito en precedencia, surge el deber de garantía por parte del Estado de implementar mecanismos para procurar la reparación por la vía administrativa y judicial de las víctimas que lo han sido de violaciones flagrantes de derechos humanos, más aún en tratándose de contextos transicionales en donde *"tiene la obligación de hacer que sean los victimarios quienes en primer*

término reparen a las víctimas, y de asumir directamente su reparación en caso de renuencia de los victimarios o insuficiencia de la reparación procurada por éstos"[208], bajo la consideración que:

> *"La reparación es un derecho complejo, interrelacionado con la verdad y la justicia que tiene como fin proteger la dignidad e integridad de las víctimas y que consiste en la implementación de medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. El derecho a la reparación se considera afectado cuando no se reconoce la condición de víctima a las personas que han sufrido graves violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario con ocasión del conflicto, cuando se continúan vulnerando los derechos de las víctimas, o cuando estas son revictimizadas, cuando se desconocen, ocultan, minimizan o se justifican los crímenes cometidos, cuando la reparación no se ajusta al daño sufrido o es manifiestamente desproporcionada, o cuando se reduce o niega la posibilidad de las víctimas de sanarse de las heridas físicas y emocionales del conflicto. Con respecto al componente específico de la indemnización administrativa, este se considera afectado cuando no es reconocido, o cuando su valor no se corresponde absolutamente con el daño moral y material ocasionado a las víctimas, es decir cuando resulta desproporcionado y cuando su entrega no es oportuna. En otras palabras, la indemnización resulta afectada cuando no es suficiente, justa y adecuada, impidiendo a las víctimas restablecer su existencia en condiciones dignas y de normalidad"*[209].

En consonancia con lo anterior, la máxima autoridad de la jurisdicción contenciosa administrativa, conforme a lo conceptuado por la Corte Constitucional[210] y por la Corte Suprema de Justicia[211], han indicado que el derecho a la reparación comporta para la víctima los siguientes componentes:

> *a. La restitución o restitutio in integrum, es el restablecimiento de las cosas a su estado normal o anterior a la violación, producto del ilícito internacional, es la forma perfecta de reparación, y que sólo en la medida en que dicha restitución no resulte accesible procede acordar otras medidas reparatorias.*
> *b. La indemnización por los perjuicios materiales sufridos por las víctimas de un caso en particular, comprende el daño material (daño emergente, lucro cesante) y el daño inmaterial.*
> *c. Rehabilitación, comprende la financiación de la atención médica y psicológica o psiquiátrica o de los servicios sociales, jurídicos o de otra índole.*
> *d. Satisfacción, son medidas morales de carácter simbólico y colectivo, que comprende los perjuicios no materiales, como, por ejemplo, el reconocimiento*

[208] Sentencia C-753 de 2013, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo.
[209] *Ibídem.*
[210] Sentencia C-579 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, entre otras decisiones.
[211] Sala de Casación Penal, decisión del 27 de abril de 2011, rad. 34547, M.P. María Del Rosario González De Lemos, entre otras decisiones.

público del Estado de su responsabilidad, actos conmemorativos, bautizos de vías públicas, monumentos, etc.
e. Garantías de no repetición, son aquellas medidas idóneas, de carácter administrativo legislativo o judicial, tendientes a que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones a su dignidad, entre las cuales cabe mencionar aquellas encaminadas a disolver los grupos armados al margen de la ley, y la derogación de leyes, entre otras[212].

En Colombia el derecho a la reparación ha adquirido un carácter integral[213], pero, además, implica: *i)* la exigencia de conocer la verdad de lo ocurrido; *ii)* que se esclarezcan los delitos que afectan de manera masiva y sistemática los derechos humanos de la población; *iii)* que se investigue y sancione a los responsables de esos ilícitos; *iv)* que se procure por la reparación integral de quienes han resultado afectados. Igualmente, se ha destacado el deber de reconocimiento y protección de los derechos de las víctimas, artículo 250 de la Constitución Nacional, con base en el principio de dignidad humana como base fundante del Estado social de derecho, artículo 1º superior; el deber de las autoridades de proteger a todas las personas residentes en el país en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, como finalidad esencial del Estado, artículo 2 constitucional; y la aplicación del bloque de constitucionalidad, artículo 93 de la Carta Magna, para el reconocimiento y protección de los derechos a la reparación integral y su conexión con los derechos a la verdad, la justicia y garantía de no repetición[214].

En definitiva, siendo la reparación integral un derecho fundamental para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario que comprende todas las acciones encaminadas a hacer desaparecer, en la medida de lo posible, los efectos del delito, *"sin que el referido derecho se entienda agotado en su aspecto puramente económico, sino que se extiende a diversas manifestaciones tanto materiales como simbólicas"*[215], se erige además en *"un mecanismo de justicia restaurativa, a través del cual se busca devolverle a las víctimas su dignidad y condiciones de vida, reprochando públicamente las conductas que las afectaron, por lo que, además, (...) el referido derecho se relaciona íntimamente con la verdad y la justicia, que son los otros dos*

[212] Consejo de Estado, Sección Tercera, exp. 29273, decisión del 19 de octubre de 2007, M.P. Enrique Gil Botero.
[213] Sentencia T-130 el 14 de marzo de 2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[214] Entre otras, Sentencia C-715 de 2012 y Sentencia SU-254-13.
[215] Corte Constitucional sentencia T-702 del 13 de diciembre de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

componentes principales que identifican el modelo de justicia transicional acogido en la Ley 975 de 2005"[216].

1. Preliminares.

A continuación, se exponen los fundamentos que la Sala ha tenido en cuenta en cuenta para la liquidación en particular de las pretensiones en la forma y términos que fueron presentadas por los señores abogados representantes de víctimas en el Incidente de Reparación Integral de carácter excepcional.

1.1. Fundamentos de la responsabilidad civil extracontractual.

Como una de las variantes de la responsabilidad civil y antagónica a la responsabilidad civil contractual, también conocida como responsabilidad delictual o aquiliana, es una fuente de las obligaciones que conmina al autor de un ilícito, que a su vez causa daño patrimonial a otra persona, a reparar al afectado. Su origen es esencialmente por el "hecho jurídico"[217].

De acuerdo con profesor Jorge Pantoja Bravo[218], la responsabilidad extracontractual es: *"aquella que existe cuando una persona causa, ya por sí misma, ya por medio de otra de la que responde, ya por una cosa de su propiedad o de la que se sirve, un daño a otra persona, respecto de la cual no estaba ligada por un vínculo obligatorio anterior relacionado con el daño producido. Esta área del derecho civil también se conoce como delitos y cuasidelitos civiles (fuente de las obligaciones)".*

El fundamento normativo de la responsabilidad civil extracontractual lo estableció el legislador en el código civil colombiano, desde el artículo 2341 hasta el 2360. El primero de ellos enseña:

> *Art. 2341. El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido.*

Como se puede apreciar, la consagración de la responsabilidad civil es precisa en determinar que todo aquel que produce (por comisión u omisión) un daño a otro,

---

[216] Ibídem.
[217] Entiéndase por este un delito o también un ilícito civil.
[218] Pantoja Bravo, Jorge. *Derecho de daños.* Bogotá D.C.: Leyer, 2015. T. I

es obligado a repararlo mediante indemnización, con independencia de la pena o las penas que le sean imponibles al autor por el delito cometido.

Según la Corte Suprema de Justicia, *"[l]a responsabilidad civil, concebida lato sensu como la obligación de reparar, resarcir o indemnizar un daño causado injustamente, encuentra venero en la eterna búsqueda de la justicia, equidad y solidaridad para restablecer el equilibrio alterado con la conculcación de la esfera jurídica protegida por la norma"*[219].

Es importante resaltar que, como su nombre lo indica, la responsabilidad civil extracontractual se genera a partir de los daños producidos por cualquier circunstancia que se origine al margen de un contrato.

Para que se forje tal responsabilidad, en lo que respecta a la derivada de la comisión de una conducta punible, se requiere:

1.2. El hecho victimizante.

En todo proceso en el que se reclame el pago de perjuicios, debe existir una acción humana voluntaria, que para el caso del derecho penal debe ser típica, antijurídica y culpable, que dé origen a un perjuicio en otra persona, bien sea porque, por ejemplo, dicha acción dañe o menoscabe la salud, la integridad o la vida de esa persona victimizada o porque afecte sus bienes o familiares.

En este orden, el hecho victimizante, en términos generales: *i)* es aquella acción que realiza una persona con voluntad y con un fin determinado, que se encuadra dentro de una de las conductas tipificadas por la ley penal como delito; *ii)* el cual resulta también antijurídico, pues, además de lesionar o poner en peligro bienes jurídicos tutelados, no hay norma en el ordenamiento jurídico que respalde la acción, lo que en esta justicia especializada se infiere dada la ilicitud del comportamiento criminal, como quedó visto en acápite preliminar en donde se analizaron los cargos en concreto, del cual se derivan detrimentos (perjuicios) materiales e inmateriales en las personas que los padecieron, de manera directa o indirecta; *iii)* de igual forma, debe quedar probado en el proceso que existió un nexo de causalidad entre el hecho y el daño; y *iv)*, por último, culpable, esto es, que el sujeto activo de tal conducta haya podido actuar de otra manera pero aun así optó por trasgredir la ley penal.

[219] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 24 de agosto de 2009, radicado 11001-3103-038-2001-01054-01, M.P. William Namén Vargas.

La acción generadora del hecho victimizante es la piedra angular de la responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito, pues es, igualmente, eje gravitacional de la teoría del delito.

Con todo, para esta justicia penal especial es menester que tal hecho victimizante sea ejecutado por miembros de grupos armados organizados al margen de la ley[220], pues es una condición *sine qua non* para que las víctimas puedan concurrir al proceso transicional.

Precisamente, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha referido en el sentido de no reconocer perjuicios por un delito que no ha sido probado ni sentenciado, lo cual no obsta para que, con relación a ese delito, se haga una nueva imputación y se intente un nuevo incidente. En efecto, con relación a un caso en el cual se alegó que la primera instancia no reconoció *"daño emergente ni perjuicio moral por el desplazamiento forzado"*, que presuntamente tuvo que padecer una víctima, la Alta Corporación indicó:

> *"No hay lugar a reconocer perjuicios morales en razón del desplazamiento, en tanto el caso presente fue fijado exclusivamente como homicidio, de donde deriva que, al no haberse imputado el desplazamiento ni emitido condena por el mismo, mal puede derivarse una consecuencia de este, como sería la reparación. Lo que se impone al respecto es que se acuse y condene por esa conducta y, logrado ello, se reclamen los daños respectivos"*[221].

Lo anterior, permite también a esta Sala precisar que la fijación de las pretensiones por parte de los abogados representantes de víctimas debe estar inescindiblemente vinculada a los delitos que hacen parte de los cargos; en otras palabras, si la reparación se pretende por un delito que no hizo parte de la imputación, ni de la solicitud de terminación anticipada del proceso por sentencia anticipada y consecuencialmente no ha sido objeto de legalización, será despachada desfavorablemente.

1.3. El daño

Como ya se anticipó, el daño es un elemento esencial de la responsabilidad civil, que es lo que se reclama en esta oportunidad. En palabras del profesor Juan Carlos

[220] Art. 5º, inciso primero, Ley 975 de 2005.
[221] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 24 de octubre de 2016, Rad. 46.075, M.P. José Luis Barceló Camacho.

Henao, el daño es la causa de la reparación, la finalidad misma de la responsabilidad civil[222]. Se trata, en concreto, de la consecuencia que debe acompañar el hecho victimizante.

La Corte Suprema de Justicia[223], respecto del daño ha dicho:

> *"El daño, entendido en sentido icástico, o sea, la lesión, detrimento o menoscabo de un derecho, interés o, incluso, un valor tutelado por el ordenamiento jurídico, es el primer elemento o presupuesto de la responsabilidad civil. En tal virtud, el artículo 1494 del Código Civil, dentro de las fuentes de la relación obligatoria, entre otras, enuncia, el "hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos" y, en consecuencia, la obligación de repararlo, parte de su existencia real u objetiva –presente o futura-, sin la cual, por elementales razones lógicas, el mencionado deber de prestación no surge".*

El daño debe ser real, concreto y específico, pues debe ser objetivamente verificable y determinable; en este sentido la Corte Constitucional ha establecido, con carácter de precedente que, "*son titulares de los derechos a la justicia, la verdad y la reparación las víctimas y perjudicados con el delito que hubiesen sufrido un daño real, concreto y específico, cualquiera que sea la naturaleza de éste*"[224].

En ese mismo sentido el profesor Pantoja Bravo sostiene que el daño *"tiene como característica que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable, anormal y que se trate de una situación jurídicamente protegida"*[225]. Para la Alta Corporación Judicial, víctima es *i)* quien ha resultado perjudicado o afectado con el delito *ii)* siempre que hubiese sufrido un daño real, concreto y específico, *iii)* no necesariamente de contenido patrimonial.

1.3.1. Daño individual y colectivo.

La violencia no solo afecta las dimensiones subjetivas e individuales de las personas, sino que también tiene expresiones colectivas, de ahí que sea dable

---

[222] Henao, Juan Carlos. *El daño*. Bogotá D.C. U. Externado de Colombia. 2007, p. 37.
[223] Decisión del 24 de agosto de 2009, exp. expediente 11001-3103-038-2001-01054-01, M.P. William Namén Vargas.
[224] Sentencias Corte Constitucional: C-516 de 11 de julio de 2007, C-370 de 2006, C-228 de 2002, C-578 de 2002, etc.
[225] Pantoja Bravo, ob. Cit.

considerar que los individuos, familias y comunidades sean sujetos de daño y reparación[226]. Bajo esa comprensión, los daños individuales *"son aquellos causados a la víctima, a sus familiares o personas cercanas. Se refieren a las afectaciones que la violencia produce en términos materiales e inmateriales, daños a la moral, el buen nombre, al proyecto de vida, las lesiones físicas, emocionales y mentales. De este modo, "el reconocimiento del daño debe […] entender los significados subjetivos que las víctimas han atribuido a lo perdido durante la guerra"*[227]; por su parte, *"Los daños colectivos son aquellos ocasionados a comunidades, grupos poblacionales y sectores sociales que se han configurado como sujetos colectivos, es decir que comparten una identidad colectiva*[228]*. El daño entonces concierne a la forma en que la violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, impactaron su identidad y proyecto colectivo, y cómo perjudicaron la calidad de vida y el goce efectivo de los derechos civiles y políticos de la comunidad o grupo social".*

1.4. Relación de causalidad entre el hecho y el daño

Este elemento de la responsabilidad civil extracontractual hace referencia a la relación que debe existir entre el hecho cometido y el daño alegado, es decir, que debe haber una conexidad causal en el que el hecho victimizante se muestre como real generador del daño causado. De ahí que, el hecho victimizante representado en el delito perpetrado por el postulado exintegrante del otrora Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia en este caso los postulados sentenciados LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO y JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA, debe guardar consonancia con el daño inferido y, en consecuencia, con las pretensiones reparatorias que se hubiesen invocado en el Incidente de Reparación Integral a Víctimas de carácter excepcional.

1.5. Del deber general de reparación.

---

[226] Centro Nacional de Memoria Histórica. Aportes teóricos y metodológicos para la valoración de los daños causados por la violencia. Bogotá: CNMH, 2014.

[227] Cita ibidem, Olga Rebolledo y Lina Rendón, "Reflexiones y aproximaciones al trabajo psicosocial con víctimas individuales y colectivas en el marco del proceso de reparación". *Revista de Estudios Sociales* 36 (2010): 40-50, consultado el 23 de febrero de 2014, http://res.uniandes.edu.co/view.php/648/view.php

[228] Ibidem, "La identidad colectiva de estos sujetos puede ser delimitada a partir de un reconocimiento jurídico, político o social que se haga del colectivo, o puede estar determinada en razón a la cultura, el territorio y un propósito común. Otros elementos que permiten definir la identidad colectiva son: la certeza compartida de pertenencia real a una red social, organización, comunidad o grupo que pueda distinguirse en el espacio, el tiempo o mediante la enumeración de sus integrantes, toda vez que haya permanecido en el tiempo mediante procesos de enseñanza, mecanismos de aprendizaje, reglas compartidas y lazos de compromiso y confianza". Olga Rebolledo y Lina Rendón, "Reflexiones y aproximaciones al trabajo psicosocial", 44.

Sobre el particular, la máxima autoridad de la justicia ordinaria en lo penal ha precisado que:

> *"de conformidad con el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, «la condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible». Idéntica disposición contiene el artículo 5º de la Ley 975 de 2005.*
>
> *De otro lado, y si bien es cierto que de acuerdo con el numeral 3º del artículo 37 de la Ley 975 de 2005, las víctimas tienen derecho a «una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del delito», también lo es que la Corte Constitucional, en sentencia C – 575 de 2006, estableció que «todos y cada uno de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, responden con su propio patrimonio para indemnizar a cada una de las víctimas de los actos violatorios de la ley penal por los que fueren condenados; y también responderán solidariamente por los daños ocasionados a las víctimas por otros miembros del grupo armado al cual pertenecieron», **de lo cual se sigue como conclusión clara que no resulta necesaria la condena para efectos de disponer la reparación**.*
>
> *Por su parte, el artículo 42 ibídem prevé que «cuando no se haya logrado individualizar al sujeto activo pero se compruebe el daño y el nexo causal con las actividades del Grupo Armado Ilegal Beneficiario por las disposiciones de la presente ley, el Tribunal directamente o por remisión de la Unidad de Fiscalía, ordenará la reparación a cargo del Fondo de Reparación»; norma que fue derogada por el artículo 41 de la Ley 1592 de 2012, pero que recobró vigencia con ocasión de la declaratoria de inconstitucionalidad de este último dispuesta en sentencia C – 286 de 2014, en la que expresamente se expresó su reviviscencia"*[229] (negrillas fuera del texto original).

De lo anterior se colige que, conforme al artículo 42 de la Ley 975 de 2005 que recoge el deber general de reparación y de la normativa concordante antes expuesta, en el evento de no haber sido posible atribuirle responsabilidad al

[229] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 5 de diciembre de 2018, Rad. 50236, M.P. Eugenio Fernández Carlier.

postulado en un determinado cargo, con la consecuencia de no haberse efectuado la legalización del mismo, pero: *i)* la víctima se encuentre debidamente identificada, *ii)* la materialidad de la conducta punible esté acreditada, y *iii)* esté probado que los victimarios del hecho punible hacían parte de la estructura paramilitar, existiendo una relación causal entre el concierto para delinquir del grupo y el daño producido, es posible disponer la reparación siempre y cuando estén dados los presupuestos para ello.

1.6. Las víctimas

Antes de entrar a considerar y resolver lo atinente a la acreditación de la condición de víctimas indirectas y la identificación de las afectaciones sufridas por estas, resulta necesario precisar quiénes ostentan esa calidad de conformidad con la Ley 1448 de 2011 de cara a la eventual reparación judicial:

> *Artículo 3°. Víctimas. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.*
>
> *También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente.*
>
> *De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.*
>
> *La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.*
>
> *Parágrafo 1°. Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los términos del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo concepto a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y garantías de no repetición señaladas en la presente ley.*
>
> *Parágrafo 2°. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad.*
>
> *Para los efectos de la presente ley, el o la cónyuge, compañero o compañera permanente, o los parientes de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley serán considerados como víctimas directas por el daño sufrido en sus derechos en los términos del presente artículo, pero no como víctimas indirectas por el daño sufrido por los miembros de dichos grupos.*

Parágrafo 3°. Para los efectos de la definición contenida en el presente artículo, no serán consideradas como víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común.

Parágrafo 4º. Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1° de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la presente ley, como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas.

Parágrafo 5º. La definición de víctima contemplada en el presente artículo, en ningún caso podrá interpretarse o presumir reconocimiento alguno de carácter político sobre los grupos terroristas y/o armados ilegales, que hayan ocasionado el daño al que se refiere como hecho victimizante la presente ley, en el marco del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, de manera particular de lo establecido por el artículo tercero (3º) común a los Convenios de Ginebra de 1949. El ejercicio de las competencias y funciones que le corresponden en virtud de la Constitución, la ley y los reglamentos a las Fuerzas Armadas de combatir otros actores criminales, no se afectará en absoluto por las disposiciones contenidas en la presente ley.

El precitado artículo 3º señala de manera clara y concreta como vemos los derroteros que permiten establecer los destinatarios de dicha ley, en la medida en que define quiénes son víctimas para efectos de la misma. En efecto, dicho precepto normativo, además de consagrar la definición de víctima, establece como vimos el tipo de infracción que dará lugar a la indemnización contenida en dicha ley para quienes sean tenidos como destinatarios de la misma, y un marco temporal que fija la época a partir de la cual la comisión del hecho generador del daño en el contexto señalado da lugar al acceso preferente a las medidas de reparación administrativa.

En ese orden se tiene que, tal como lo señaló la Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia C-052 de 2012[230], el inciso primero de la norma en cita, consagra al daño como el factor que determina el reconocimiento de la condición de víctima, pues de la ocurrencia del mismo, en el contexto fáctico y temporal fijado por la normativa, *"depende que las personas interesadas logren ser reconocidas como víctimas y accedan a los importantes beneficios establecidos…"*; en ese sentido, resulta claro que para efectos de la Ley 1448 de 2011, es víctima toda persona que haya sufrido un daño como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario y/o a las normas internacionales de Derechos Humanos por hechos cometidos con ocasión del conflicto armado interno después del 1º de enero de 1985.

[230] M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla

Adicionalmente, debe precisarse que el concepto de "persona" a que alude la normativa de Justicia y Paz para establecer quién debe considerarse víctima en el contexto del conflicto armado, que excluye la consideración de persona jurídica para esos efectos, no descarta, como se precisó líneas arriba, la existencia de víctimas colectivas a quienes se les ocasiona un daño colectivo y deben ser reparadas conforme a la ley. Así, tanto la Ley 975 de 2005, en su artículo 5, modificado por la Ley 1592 de 2012, como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en su artículo 3, definen el concepto de víctima como la persona que "*individual o colectivamente haya sufrido daños directos"*, como parámetro para acreditar esta calidad dentro de los referidos sistemas transicionales.

1.6.1. Víctimas directas.

Como se puede advertir del inciso primero de la norma citada en precedencia, las víctimas se pueden clasificar en dos: *i)* víctimas directas, y; *ii)* víctimas indirectas.

En lo atinente a las víctimas directas, se tiene que son las personas que han sufrido el ataque por parte de los grupos armados al margen de la ley, que tuvieron que soportar en sí mismos la injusta vulneración a sus bienes jurídicos, o sea, las personas sobre las que recayeron los delitos.

Es importante para los fines del proceso de liquidación de perjuicios que aquí se hace precisar que jurisprudencialmente solo pueden ser tenidas como víctimas las personas naturales, esto es, a los seres humanos, las personas físicas.

El código civil colombiano precisa este concepto indicando que *"[s]on personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición"*[231].

1.6.2. Víctimas indirectas.

Ahora bien, señala la Corte Constitucional en la sentencia que viene citada[232] que la noción de daño resulta aplicable no solo a los eventos en los que quien reclama resulta ser aquel sobre en el cual recayó el hecho generador del daño, sino que, además, se extiende a los casos en los que una persona se ve afectada por los hechos que recayeron de manera directa sobre otra, como resulta ser el caso de los familiares de la víctima directa, cuando se han afectado de manera jurídicamente

[231] Código civil colombiano, Art. 74.
[232] C-052 de 2012

desfavorable por el hecho generador del daño del cual resultó victimizado su familiar.

Es por eso que el inciso segundo del artículo 3º de la llamada Ley de Víctimas establece que *"también son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a este se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecido"*; y a falta de las personas que se encuentren en los grados de parentescos señalados, *"lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente".*

El análisis sistemático del inciso primero y segundo del artículo citado, permite concluir que aquellos que no hayan sufrido un daño de manera directa en términos del inciso primero, también son víctimas en la medida en que se encuentren en los grados de relación y parentesco fijados en el inciso segundo, por los hechos generadores que allí se establecen, esto es muerte y desaparición forzada, lo que no necesariamente implica que los familiares que no se encuentren en tales grados de relación y parentesco no puedan ser reconocidos como víctimas, puesto que lo serían en la medida en que prueben una afectación directa sufrida por el hecho del que resultó afectado su familiar, caso en el cual, el reconocimiento de la condición de víctima se da bajo los presupuestos señalados en el inciso primero.

1.6.3. Acreditación de la calidad de víctima.

Para la acreditación de las víctimas, la Sala tiene en cuenta los elementos materiales probatorios que ellas o sus representantes judiciales hubiesen introducido oportunamente en la etapa procesal pertinente –desarrollo de la audiencia pública y oral del incidente de reparación integral-, de los que sea posible inferir el daño directamente sufrido, mismo que debe estar relacionado necesariamente, como ya se ha indicado, con alguno de los delitos que hacen parte de los cargos por los cuales se va a condenar al postulado.

Las víctimas indirectas, como ya ha quedado claro en precedencia, no solo deben demostrar el daño sufrido por su familiar sino también el que, por conexidad, se ha generado en ellas, además de demostrar el parentesco entre aquella y quien reclame como su familiar. Es decir, acreditado que el hecho existió y que el autor responsable de tal conducta fue el postulado, a la víctima indirecta le compete

demostrar que ella sufrió un menoscabo material o inmaterial, detrimento último que en ciertas condiciones de parentesco la ley presume.

Del mismo modo, a esa víctima indirecta le asiste la carga probatoria de demostrar, con elementos de prueba idóneos, que efectivamente ostenta el grado de parentesco que alega.

Ahora bien, especial consideración merecen las víctimas de desplazamiento forzado, respecto de quienes, conforme a los postulados de favorabilidad, buena fe y principio *pro personae*, deberán tenerse por ciertas sus afirmaciones acerca de su especial condición *"[d]e manera que, al presumirse la buena fe, la carga de la prueba se invierte, correspondiéndole a las autoridades demostrar que la persona que manifiesta tener la calidad de víctima por desplazamiento forzado no ostenta tal condición"*[233]; inclusive, en el evento en el que se esté ante un caso de duda *"se deberán tener por ciertas las afirmaciones que realicen las víctimas del conflicto armado"*[234].

1.6.4. Representación judicial de las víctimas.

Para el caso de las personas que sufrieron el daño, directo o indirecto, mientras ya eran mayores de edad, su reconocimiento sigue los parámetros generales que se deben cumplir en todo proceso judicial, es decir, acudir al proceso mediante representación judicial adecuada a las formas legales[235], a menos que sea la misma víctima profesional del derecho y quiera asumir su propia representación.

En cuanto a la víctima que para la fecha de consumación del hecho era menor de edad, y respecto de quien su representante legal o quien asumió su cuidado, sostenimiento y atención, otorgó poder a un abogado en ejercicio para que lo representara judicialmente en el proceso de justicia y paz, se derivan dos situaciones: *i)* quienes en el trascurso del proceso y antes de la presentación de las solicitudes indemnizatorias cumplieron la mayoría de edad; y *ii)* quienes a pesar de lo largo del proceso se mantienen como menores de edad hasta la fecha de presentación del incidente de reparación integral.

---

[233] Corte Constitucional sentencia SU599 del 11 de diciembre de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[234] Ibídem.
[235] Al respecto el artículo 2.2.5.1.2.6.4. del Decreto 1069 del 2015 enseña: *"Poder con presentación personal. Las víctimas que deleguen su representación para los efectos del presente capítulo, deberán otorgar poder especial con nota de presentación personal ante cualquier autoridad judicial".*

En el primero de los casos ya la Sala, siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia, ha sentado posición indicando que en esas circunstancias es menester que la víctima actualice el poder que su representante legal haya otorgado al profesional del derecho[236], por cuanto al adquirir una persona la mayoría de edad asume así mismo la autonomía de su voluntad lo cual implica a su vez que debe manifestar su querer frente a la jurisdicción respecto de reclamar indemnización por los perjuicios causados con el accionar delictivo de los aquí postulados.

En la segunda hipótesis no se presenta dificultad, pues siempre las víctimas menores de edad estarán representadas por un abogado, a quien previamente su representante legal o quien asumió su cuidado, sostenimiento y atención, le haya otorgado poder especial para actuar. Al respecto, es de resaltar que, tal y como lo ha dejado sentado la máxima autoridad de la justicia ordinaria, en tratándose de menores de edad víctimas, su representación legal y judicial les será reconocida si acuden al proceso de Justicia y Paz por intermedio de un familiar, inclusive, diferente a su representante legal[237].

Así entonces, la Sala en los casos que involucren a menores víctimas, privilegiará su condición y les brindará un tratamiento preferencial, en garantía de su interés superior, con base en los Convenios Internacionales ratificados por Colombia, en la Constitución Política y en la Ley de la Infancia y la Adolescencia.

1.6.5. Acreditación del parentesco de la víctima indirecta con la víctima directa.

En cuanto a este aspecto, la Magistratura, conforme a lo sostenido por la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en la decisión de segunda instancia del 24 de octubre de 2016, rad. 46.075, M.P. José Luis Barceló Camacho, a la cual se ha venido aludiendo en el cuerpo de esta sentencia, ha considerado la posibilidad de acreditar el parentesco mediante elementos probatorios diversos al registro civil de nacimiento con base en el principio de libertad probatoria. Efectivamente, con relación a un caso en particular la máxima Corporación de la justicia ordinaria señaló lo siguiente:

---

[236] Radicados No. 38222 de fecha 12 de diciembre de 2012, y No. 38508 de fecha 6 de junio de 2012, M. P. José Leónidas Bustos Martínez.
[237] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 10 de diciembre de 2015, rad. 46672, M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández.

"(…) el Tribunal dijo no reconocer indemnización alguna a los hermanos, porque "no acreditan tal parentesco, comoquiera que no aportan copia del registro civil de nacimiento de E.L.C., único documento idóneo para demostrar tal condición".

La Corte revocará tal decisión. Si bien el asunto de que se trata apunta a la regulación de daños y perjuicios propios de la legislación civil, no debe olvidarse que el procedimiento que rige el asunto se enmarca dentro de los lineamientos de la Ley 906 del 2004 y el Código de Procedimiento Penal y en estos no opera la tarifa probatoria señalada por el Tribunal. Por el contrario, rige el principio de libertad probatoria, en razón del cual el juzgador puede lograr su convencimiento con cualquier medio probatorio.

En esas condiciones, si bien el documento señalado por el Tribunal surge como el más expedito para acreditar el hecho, esa convicción puede lograrse por otras vías, como las aportadas por el apoderado. Así, desde los registros civiles de nacimiento de los reclamantes y sus cédulas de ciudadanía, deriva que tienen los mismos progenitores, esto es, que son hermanos entre sí, lo cual permite inferir que, por unidad de apellidos igual lo son de E., como así, al unísono, lo declaran todos en sus pretensiones.

Igual se hará respecto de L. del C.L.L., en tanto, por oposición a la afirmación del Tribunal de que no acreditó el nexo, en el incidente respectivo se allegaron los testimonios de L.M.M.L., J.R.F.C. y M.A.G. de C., quienes bajo la gravedad del juramento manifestaron que por percepción directa les constaba que desde doce años atrás aquella y el desaparecido hacían vida marital e, incluso, señalaron con nombres propios los hijos habidos dentro de tal unión.

En tales versiones, la Corte no encuentra elementos de confabulación para faltar a la verdad, además de que no fueron negadas por ninguna de las partes e intervinientes.

Por tanto, la decisión del Tribunal será revocada para en su lugar ordenar el reconocimiento de los daños y perjuicios en los montos siguientes, que siguen los criterios del Tribunal (…) (Destacado por la Sala)"[238].

Al analizar otro asunto en esa decisión señaló la Alta Corporación Judicial:

"La queja del recurrente apunta al no reconocimiento de daños morales a C.T.R., que el Tribunal fundamentó en que no se aportó medio de prueba idóneo que demostrara que era la hermana de aquel.

Parece que el a quo es del criterio, que dejó expreso en otros eventos, de que en este evento se aplica una especie de tarifa probatoria, en virtud de la cual la única prueba que demuestra el nexo es el registro civil de nacimiento.

Obrando como criterio la libertad probatoria, los elementos aportados en el incidente acreditan más allá de duda razonable que la reclamante es hermana de quien falleciera. Se aportaron declaraciones en ese sentido, así como su cédula de ciudadanía, unido a lo cual se tiene que la unidad de apellidos permite concluir en el mismo sentido.

Por tanto, se revocará parcialmente el fallo cuestionado, para disponer que a C.T.R. le sea cancelada la suma de (…) por los daños morales sufridos a raíz del homicidio de su hermano" (Resaltas nuestras)".

Más adelante reiteró:

[238] Ibídem.

En contra de lo afirmado por el Tribunal, los documentos allegados acreditan el nexo familiar.

Aparte del registro civil de nacimiento, obran documentos allegados dentro de la investigación de la Fiscalía: los hechos fueron fijados como desaparición y homicidio de aquel y desplazamiento de su familia (…) y por ellos se emitió el fallo de condena, esto es, que desde un comienzo en la narración del acontecer fáctico se demuestra que la peticionaria es familiar del occiso, lo cual se corrobora con el reporte de varios informes y documentos en donde la mujer da cuenta del suceso y se especifica su condición de pariente.

Por los hechos así fijados se formularon cargos a los postulados, los cuales los aceptaron y así se emitió fallo de condena, en el entendido de la desaparición y homicidio de aquel y el desplazamiento que ello generó en su familia, específicamente en su hermana, de tal forma que si esto se encontró probado para poder proferir fallo, las consecuencias deben admitirse respecto de la reparación reclamada, porque si el parentesco fue suficiente para condenar, igual debe serlo para las consecuencias civiles que de allí derivan (subrayado fuera del texto original)[239].

Finalmente enfatizó:

en el sistema procesal penal no existe la tarifa que [se] pregona respecto de que el registro civil es el único medio para probar el nexo (…)[240].

Con base en lo antes expuesto, se itera, que en aquellos casos en los que no se hubiese allegado a la actuación el registro civil de nacimiento por cualquier factor que se alegue y que se erige como el documento con mayor aptitud probatoria para demostrar el parentesco, la Sala aprecia otros elementos demostrativos aportados debidamente y oportunamente en desarrollo del trámite incidental y que lleven al convencimiento acerca de la acreditación de dicha relación, cuando así se reclame, apelando al principio de libertad probatoria que rige en las actuaciones de carácter penal.

1.7. La reparación integral

Como lo ha precisado en varias oportunidades la Corte Constitucional, *"[e]ste derecho se apoya en el principio general según el cual el responsable de un daño o agravio debe repararlo o compensarlo. Sobre el derecho de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a obtener una adecuada reparación versan los artículos 14 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, 9 de la Convención Interamericana para Prevenir y*

[239] Ídem.
[240] Ídem.

Sancionar la Tortura, el artículo o 75 del Estatuto de Roma[241] *y el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos*[242]*, relacionado con el deber de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de disponer "el pago de una justa indemnización a la parte lesionada", cuando se ha establecido la violación de un derecho o libertad protegido por la Convención".*

Ese derecho a la reparación integral, tal y como quedó visto en acápite preliminar, tiene componentes particulares, tales como rehabilitación, restitución, indemnización, satisfacción y garantía de no repetición[243], según corresponda al hecho victimizante.

1.7.1. Restitución.

Implica devolver a la víctima a su *statu quo ante*. El artículo 46 de la Ley 975 de 2005, al concretar el deber de restitución advierte que: *"La restitución implica la realización de los actos que propendan por la devolución a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos. Incluye el restablecimiento de la libertad, el retorno a su lugar de residencia y la devolución de sus propiedades"*.

Una manifestación de este derecho es que a las víctimas se les devuelva su predio cuando éste fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado, independientemente de si quien reclama tiene títulos o no. Para ello, la Ley de Víctimas no sólo busca devolver la tierra con su respectivo título de propiedad, sino también mejorar sus condiciones socioeconómicas para una vida más digna.

La restitución de tierras es una parte de la reparación integral de la Ley de Víctimas, "*por lo cual si una persona fue afectada por otro tipo de delitos podrá reclamar la indemnización, la rehabilitación, garantías de satisfacción y garantías de no repetición"*[244].

---

[241] La Corte Penal Internacional "establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación, que ha de otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes"

[242] "1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada."

[243] En los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la materia es un tema pacífico. Entre otras, sentencia C-286 de 2014.

[244] Ministerio de Agricultura: https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/preguntas-frecuentes/Paginas/Restitucion-de-Tierras.aspx.

1.7.2. La indemnización.

En cumplimiento de las normas constitucionales, se resuelven en derecho las distintas solicitudes de indemnizaciones, atendiendo a lo reglado por el artículo 230 de la Constitución Política[245], en tanto que se ha descartado el criterio de equidad como fundamento base para resolver las indemnizaciones pedidas por los perjuicios derivados de los ilícitos cometidos por el postulado, por considerarse que resulta discriminatorio y que no consultaba criterios de igualdad, en contraste con la obligación prioritaria constitucional del sometimiento de los operadores judiciales a la Constitución y a la ley conforme criterios judiciales de acreditación probatoria[246].

En esa medida, la ley 975 de 2005 en su artículo 8º contempla la indemnización como una acción reparatoria consistente en *"compensar los perjuicios causados por el delito"*, que, de acuerdo a lo precisado por la máxima autoridad de la justicia ordinaria, *"los obligados a reparar los daños ocasionados con la actividad criminal son los postulados declarados penalmente responsables por cuanto el Estado sólo acude en forma subsidiaria a sufragar el "monto establecido en el reglamento correspondiente para la indemnización individual por vía administrativa", según establece el artículo 10 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia C-160 de 2016»"*[247].

1.7.2.1. Conceptos a indemnizar.

Entre los conceptos a indemnizar se encuentran los perjuicios materiales y los perjuicios inmateriales. Los primeros, hacen relación a aquellos perjuicios que son tangibles u objetivamente verificables, así sea de aquellos que no existiendo se tenga la posibilidad real de que llegarían a existir. En cuanto a los inmateriales, se trata de aquellos que no son palpables en el mundo fenomenológico pero que hacen parte de la integridad personal.

1.7.2.1.1. Perjuicios inmateriales.

---

[245] Conforme al cual *"Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial."*

[246] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 27 de abril de 2011, Rad. 34547, M.P.: Dra. María del Rosario González de Lemos. Criterio reiterado decisión del 31 de agosto de 2016, rad. 47510, M.P. José Luis Barceló Camacho.

[247] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 5 de octubre de 2016, rad. 47209, M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa.

Este tipo de perjuicios, también conocidos como perjuicios extrapatrimoniales, están integrados por una amalgama de categorías, donde el daño moral es por excelencia el de mayor aceptación entre la comunidad académica, doctrinal y la jurisprudencial.

También dentro de esta clase de perjuicios se tienen el daño al proyecto de vida, el daño a la vida de relación o alteración de las condiciones de existencia, daño a la salud, y a la afectación de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, entre otros.

A continuación, se hace referencia a los conceptos arriba señalados, con base en las solicitudes que, en concreto, fueron presentadas por los señores representantes judiciales de víctimas que hacen parte de este proceso en desarrollo del incidente de reparación integral a las víctimas de carácter excepcional.

1.7.2.1.1.1. Daño moral.

Para la definición de esta clase de daño, la Sala considera de fundamental importancia referir lo expuesto por el Consejo de Estado, órgano jurisdiccional que ha decantado ampliamente el tema, en los siguientes términos[248]:

> Cuando se hace referencia al daño moral, se alude al generado en "el plano psíquico interno del individuo, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a consecuencia de la lesión a un bien". Este daño tiene existencia autónoma y se configura una vez satisfechos los criterios generales del daño: que sea particular, determinado o determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con un bien jurídicamente tutelado. El daño moral producto de lesiones puede configurarse tanto en la persona que sufre la lesión, a la que se conoce como víctima directa, como también en sus parientes o personas cercanas, víctimas indirectas.

Con relación a ese mismo tópico, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil[249], en reiterada jurisprudencia, además, ha indicado:

> Con relación a la usual definición del daño moral, esta Corte ha ratificado que "está circunscrito a la lesión de la esfera sentimental y afectiva del sujeto, 'que corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del individuo' (sentencia de 13 de mayo de 2008), de ordinario explicitado material u objetivamente por el dolor, la pesadumbre, perturbación de ánimo, el sufrimiento espiritual, el pesar, la congoja, aflicción, sufrimiento, pena, angustia, zozobra, desolación, impotencia u otros signos expresivos", que se concretan "en el menoscabo de los sentimientos, de los afectos de la víctima y, por lo tanto, en el sufrimiento

[248] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de junio de 2011, rad. 19836, M.P. Danilo Rojas Betancourt.
[249] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. SC10297-2014, M.P. Ariel Salazar Ramírez.

moral, en el dolor que la persona tiene que soportar por cierto evento dañoso[250].

Por su parte, la Sala Penal de la referida Honorable Corte Suprema de Justicia ha considerado que el daño moral tiene dos modalidades: *"el daño moral subjetivado consistente en el dolor, la tristeza, la desazón, la angustia o el temor padecidos por la víctima en su esfera interior como consecuencia de la lesión, supresión o mengua de su bien o derecho. Se trata, entonces, del sufrimiento experimentado por la víctima, el cual afecta su sensibilidad espiritual y se refleja en la dignidad del ser humano; y el daño moral objetivado, manifestado en las repercusiones económicas que tales sentimientos pueden generarle, menoscabo cuya cuantía debe ser demostrada por quien lo alega"*[251]; sin embargo, un sector doctrinario ha considerado que el único daño moral es el subjetivo, en tanto que el daño moral objetivado corresponde en verdad a un perjuicio material, en la modalidad de lucro cesante, siendo que se ha entendido como la pérdida de ingresos motivada en la difícil situación anímica de la víctima[252].

Así las cosas, basta con señalar que por daño moral debe entenderse como la aflicción, el sufrimiento, el miedo, la tristeza, la angustia, la congoja, la desazón que desde el punto de vista anímico tiene una persona por un daño causado por otra[253]. Se trata de una afectación directa a la parte afectiva del ser humano[254].

1.7.2.1.1.1.1. Presunción.

Como lo ha dejado claro la jurisprudencia nacional, siguiendo los presupuestos contenidos en el artículo 5 inciso 2º de la Ley 975 de 2005, los perjuicios morales, que afectan a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo, es presumible en los casos de los cónyuges o compañeros permanentes y familiar en primer grado de consanguinidad o primero civil de la víctima directa cuando a esta se le hubiere dado muerte o desaparecido, requiriéndose para los demás casos la acreditación de la afectación sufrida.

---

[250] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, decisión del 18 de septiembre de 2009, exp. 2005-406-01, M.P. William Namén Vargas.
[251] Decisión del 27 de abril de 2011, rad. 34547, M.P. María del Rosario González de Lemos.
[252] Cooperación Técnica Alemana ProFis. "Daño y reparación judicial en el ámbito de la Ley de Justicia y Paz". También, Fernando Hinestrosa en: "Apreciación del daño moral (Aclaración de voto en la Sentencia de 25 de febrero de 1982 de la Sección 3.ª del Consejo de Estado)", en ÍD. Escritos varios, Bogotá, 1983, 722.
[253] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 12 de noviembre de 2014, rad. 43.484, M. P. María del Rosario González Muñoz.
[254] Corte Suprema de Justicia, sentencia del 4 de febrero de 2009, rad. 28085, M.P. Yesid Ramírez B.

La presunción del perjuicio moral no releva la demostración del parentesco, es decir, a los familiares arriba señalados les asiste la carga de demostrar el estado civil y la convivencia, según el caso[255].

En tratándose del delito de desplazamiento forzado, que constituye uno de los patrones de macrocriminalidad en esta sentencia analizado, el Consejo de Estado ha reconocido como un hecho notorio el padecimiento de un daño moral por el dolor, la angustia y la desolación por quienes son víctimas de ese flagelo, de ahí que hubiese considerado que: *"[n]o es necesario acreditar el dolor, la angustia y la desolación que sufren quienes se ven obligados a emigrar del sitio que han elegido como residencia o asiento de su actividad económica, abandonando todo cuanto poseen, como única alternativa para salvar sus vidas, conservar su integridad física o su libertad, sufriendo todo tipo de carencias y sin la certeza del retorno, pero sí de ver aún más menguada su precaria condición económica, social y cultural. Quienes se desplazan forzadamente experimentan, sin ninguna duda, un gran sufrimiento, por la vulneración múltiple, masiva y continua de los derechos fundamentales, como lo ha señalado reiteradamente la Corte Constitucional"*[256], criterio que es tenido en cuenta por la Sala al momento de valorar las pretensiones que por daño moral se expusieron en el trámite incidental

1.7.2.1.1.1.2. Montos a indemnizar por concepto de daño moral.

La Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia[257], ha concretado los montos a indemnizar por concepto de daño moral o no patrimonial con relación a los delitos de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y secuestro o detención ilegal y toma de rehenes, de la siguiente manera:

---

[255] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 23 de septiembre de 2015, rad. 44595, M.P. Dr. Eugenio Fernández Carlier. También, decisión del 5 de febrero del 2020, rad. 50100, M.P. Dr. Eyder Patiño Cabrera. Última decisión en la que, sobre el particular enfáticamente indicó: *"Ahora, esta Sala también ha señalado con insistencia, con fundamento en las disposiciones reseñadas, que el daño moral se presume en relación con el cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad o primero civil de la víctima directa de los delitos de homicidio o desaparición forzada, y que los parientes que pretendan ser indemnizados en el proceso transicional de Justicia y Paz, ubicados en grados diferentes a los mencionados -hermanos, sobrinos y nietos, por ejemplo-, deben demostrar su parentesco, el perjuicio sufrido y su monto, sin que ello signifique que pierdan la condición de víctimas (CSJ SP, 6 jun. 2012, rad. 35637; CSJ SP, 23 sep. 2015, rad 44595; CSJ SP, 16 dic. 2015, rad. 45321; CSJ SP, 21 feb. 2018, rad. 49170; CSJ SP, 23 ene. 2019, rad. 48348 entre otras); postura pacífica y reiterada (…)".*

[256] Sentencia SI 00213-01 de 2006 S3, Acción de grupo adelantada por el desplazamiento causado por la toma del corregimiento La Gabarra del municipio de Tibú. Citada por la Corte Constitucional en la sentencia SU 254 del 24 de abril de 2013, M.P. Luis Eduardo Vargas Silva.

[257] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 5 de diciembre de 2018, rad. 50236, M.P, Eugenio Fernández Carlier; también, decisión del 5 de octubre de 2016, rad. 47209, M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa.

Homicidio y desaparición forzada	**Desplazamiento Forzado**	**Secuestro o detención ilegal o toma de rehenes[258].**	**Tentativa de homicidio.**
100 SMLMV para familiares en primer grado (padres, hijos, cónyuge, esposa (o) o compañera (o)) y 50 SMLMV para familiares en segundo grado (Abuelos, hermanos, nietos).	50 SMLMV para cada víctima directa sin superar 224 SMLMV por grupo familiar	30 SMLMV para víctima directa, así como para familiares en primer grado (padres, hijos, esposa (o) o compañera (o)).	30 SMLMV para la víctima directa, 15 SMLMV para familiares en primer grado (padres, hijos, esposa (o) o compañera (o)) y 5 SMLMV para familiares en segundo grado (Abuelos, hermanos, nietos).

Además, la alta Corporación, en tratándose de perjuicios morales, ha establecido los siguientes montos conforme a la naturaleza y la magnitud del daño causado por los crímenes juzgados en el trámite transicional[259]:

	Homicidio	Desplazamiento forzado	Secuestro o Detención Ilegal
1er grado (padres, hijos, esposa/o o compañera/o)	100 smlmv	50 smlmv para cada víctima directa sin superar 224 smlmv por grupo familiar	30 smlmv para la victima directa.
2º grado (Abuelos, hermanos, nietos)	50 smlmv		

En cuanto hace al punible de destrucción y apropiación de bienes protegidos, recogido en el artículo 154 del Código Penal, la Sala ha considerado razonable el reconocimiento de 50 smlmv por concepto de daño moral, monto que ha sido tenido en cuenta en otra decisión para casos análogos[260].

Precisado lo anterior, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, ha reconocido que existen casos de excepción referidos a graves violaciones a los derechos humanos, en los cuales se puede otorgar una indemnización mayor a la señalada cuando existan circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño moral sin que en tales casos el monto de la indemnización pueda superar el triple de los ya señalados[261]; de todas maneras, *"la aplicación de ese criterio – como se desprende del texto mismo de la providencia reseñada – requiere que el interesado acredite aquellas*

[258] Con relación al monto a indemnizar por el delito de toma de rehenes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha considerado que resulta *"equiparable (…) al que surgiría para quien resulte víctima de secuestro o detención ilegal conforme se ha explicado en CSJ SP, 27 abr. 2011, rad. 34547; CSJ SP12969-2015 y CSJ SP2045-2017".* Decisión del 3 de octubre de 2018, rad. 48579, M.P. Fernando Alberto Castro Caballero.
[259] Decisión del 5 de octubre de 2016, rad. 47209, M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa.
[260] Por ejemplo, decisión del 29 de agosto del 2017, rad. 08-001-22-52-002-2014-81105, M.P. José Haxel d ela Pava Marulanda.
[261] Sección Tercera, *"documento final aprobado mediante acta del 28 de agosto de 2014 referentes para la reparación de perjuicios inmateriales".*

circunstancias fácticas por razón de las cuales los hechos victimizantes causaron, en el caso concreto, una mayor perjuicio al que, de ordinario, entrañan conductas similares"[262].

Por último, la Sala aclara que no es dable predicar varias indemnizaciones por daño moral, en tanto que esa situación podría devenir en un indeseado enriquecimiento sin justa causa. Al respecto el profesor Juan Carlos Henao, al distinguir entre formas de reparación y tipología de daños, ha precisado:

> Las formas de reparación se aplican a los rubros del daño, pero formas de reparación y daño no son conceptos sinónimos. Una cosa es admitir la presencia de un determinado daño, como pueden ser, para citar algunos ejemplos, el moral, el lucro cesante o el daño a la vida de relación, y otra cosa es estudiar cómo la jurisprudencia de un determinado país busca su reparación. **El gran debate en este punto se orienta a impedir que las diversas formas de reparación resarzan idéntico daño**, **y la respuesta exitosa consistirá en que cualquier clasificación de rubros del daño determine con claridad qué y cómo se repara, para no violentar la regla de la prohibición de indemnizar dos veces el mismo daño**[263]. El tema es fácil de resolver en lo que tiene que ver con los daños pecuniarios o materiales, puesto que su medición en dinero permite que, ya sea in natura o en equivalente pecuniario, la reparación se otorgue por este medio (…) **El problema se presenta cuando se conjugan varios daños no pecuniarios, donde el operador jurídico habrá de tener sumo cuidado en no reparar dos veces el mismo daño**. Es decir, en lo relacionado con los daños no pecuniarios, no se trata de afirmar que cada rubro tiene una forma específica de ser reparado, porque todo dependerá del caso concreto, en el cual pueden darse varias de sus formas[264].

De ahí entonces que, se itera, sean despachadas desfavorablemente las pretensiones en una sentencia cuando versen sobre el reconocimiento de varias indemnizaciones por concepto de daño moral respecto de una misma víctima

---

[262] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 5 de diciembre de 2018, Rad. 50236, M.P. Eugenio Fernández Carlier.

[263] Nota del autor Sobre esta temática remite a dos obras de su autoría, complementarias a lo que aquí se escribe: "De las distintas formas de concebir la tipología de perjuicios", en *Responsabilidad civil, derecho de seguros y filosofía del derecho. Homenaje al profesor Javier Tamayo Jaramillo,* t. I, Bogotá, Diké, 2011, pp. 139-167, y *El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés,* Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, cap. segundo.

[264] Henao, Juan Carlos. "Formas de Reparación en la Responsabilidad del Estado: Hacia su Unificación Sustancial en Todas las Acciones contra el Estado, Las." *Rev. Derecho Privado* 28 (2015): 277.

(excepto para los casos en los cuales concurra en una misma persona las calidades de víctima directa e indirecta) y de un mismo hecho, lo cual se corresponde, igualmente, con el criterio que ha venido sosteniendo el Consejo de Estado en el sentido de que *"Ningún daño o perjuicio inmaterial podrá ser indemnizado doblemente"*[265]. En otras palabras, en criterio de la Sala, en tratándose de un hecho en el cual se hubiese logrado verificar la ocurrencia de varias conductas punibles, no es posible reconocer en favor de una misma víctima (sea directa o indirecta) varios montos indemnizatorios por cada delito, para lo cual se escogerá el mayor, diferente a lo acontecido en el caso en el que una persona ostente la doble calidad de víctima directa e indirecta (ejemplo, víctima indirecta de homicidio y directa de desplazamiento forzado), evento en el cual sí sería posible como se hace en algunos casos reconocer indemnización por concepto de daño moral por cada delito[266].

1.7.2.1.2. Perjuicios materiales o patrimoniales.

Otra variante de los perjuicios, como consecuencia de un daño, son los perjuicios materiales, es decir, aquellos que representan una merma patrimonial, bien sea porque afectan el patrimonio actual de la víctima o los perjudicados, ora porque impide que una expectativa razonable de ingreso no se materialice.

El daño material o patrimonial implica la destrucción o menoscabo de algunos derechos patrimoniales de una persona ya sea en forma directa, o de manera indirecta.

Dentro de esta clase o vertiente de perjuicios se encuentran dos categorías: daño emergente y el lucro cesante.

De acuerdo con los lineamientos expuestos por la Honorable Sala Penal de Corte Suprema de Justicia, en la decisión del 24 de octubre de 2016[267], la representación de los valores a indemnizar se hará inicialmente en pesos y teniendo en cuenta, en este caso, como fecha de liquidación el 31 de enero del 2024[268], pero también se

[265] Consejo de Estado, Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Documento Final Aprobado Mediante Acta del 28 de agosto de 2014. Referentes para la Reparación de Perjuicios Inmateriales. En: http://bu.com.co/sites/default/files/documentos/consejo-de-estado-sala-de-lo-contencioso-administrativo-seccion-tercera-documento-final-aprobado-mediante-acta-de-28-de-agosto-de-2014.pdf
[266] Criterio tenido en cuenta por la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en casos de determinación de indemnización por daño moral en tratándose del concurso de conductas punibles, por ejemplo, en la decisión del 5 de octubre de 2016, rad. 47209, M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa.
[267] Rad. 46.075, M.P. José Luis Barceló Camacho.
[268] Que corresponde a la fecha de liquidación de esta sentencia.

efectuará en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para permitir su constante actualización.

1.7.2.1.2.1. Daño emergente.

El código civil colombiano[269] enseña que el daño emergente es *"…el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento…"*

El daño emergente entonces consiste en una pérdida patrimonial sufrida que necesariamente determina que algún bien económico salió o saldrá del patrimonio de la víctima como consecuencia principalísima del hecho dañoso, es decir, debe existir una relación directa de causalidad entre este y el detrimento o disminución patrimonial que se alega.

En este orden, se entiende que el daño emergente lo constituyen las pérdidas efectivamente sufridas, la lesión que realmente se produce al patrimonio del perjudicado, es la pérdida efectiva de bienes que ya estaban en el patrimonio de la víctima, en otras palabras, se trata de un empobrecimiento patrimonial, algo que sale del patrimonio (sea por pérdida o detrimento)[270].

1.7.2.1.2.1.1. Actualización o indexación de valores.

La actualización de los valores que dicen haber perdido las víctimas y/o los perjudicados serán actualizados conforme a la fórmula de indexación y el procedimiento que ha dispuesto el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

Por lo tanto, la fórmula es la siguiente:

Vr = Vh (I.P.C. actual/I.P.C. inicial)
Vr: Valor real, corresponde al valor a reintegrar o actualizado.
Vh: Valor histórico, que corresponde al monto perdido o sufragado.
I.P.C: Índice de Precios al Consumidor

El IPC inicial corresponde al del mes y año en que se adquirió el bien o servicio motivo de reclamación, mientras que el IPC final hace referencia al índice señalado para la fecha en que se liquida la sentencia.

[269] Art. 1614.
[270] Pantoja Bravo, Ob. Cit.

Es importante señalar que dada la complejidad de esta clase de decisiones y que la elaboración de esta sentencia tomó varios meses, el IPC final que se ha tomado como referencia ha sido el establecido al 31 de enero del 2024, en todos los casos.

1.7.2.1.2.2. Lucro cesante.

Otra de las categorías del perjuicio material o patrimonial es el denominado lucro cesante, el cual consiste en el patrimonio que dejó de ingresar al peculio de la víctima o perjudicado.

Dice el artículo 1614 del Código Civil Colombiano: *"Entiéndase por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento."*

La doctrina ha dicho[271] que el lucro cesante está constituido por todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se recibirán luego, con el mismo fundamento de hecho; está representado por la cantidad que el acreedor efectivamente dejó de recibir, es decir, la ganancia dejada de obtener al no cumplirse el crédito o ventaja económica que representaba para él la obligación.

El lucro cesante hace referencia a la ganancia frustrada a todo bien económico que, si los acontecimientos hubieran seguido su curso normal, habría ingresado o lo haría en el futuro al patrimonio de la víctima. Sin embargo, vale señalar que este perjuicio corresponde a una consecuencia accesoria del hecho dañoso, por cuanto no es causado de manera directa con su ocurrencia sino que está sujeto a la condición de que se afecte la percepción de un ingreso, lo cual puede que ocurra en algunos casos, sin que ello implique que pueda predicarse categóricamente como una consecuencia necesaria.

Así entonces, los titulares de este derecho son todas aquellas víctimas y/o perjudicados que logren probar su condición de tal y la consumación del daño. Se trata de una pretensión enteramente rogada que debe quedar expresamente delimitada por la víctima, indicando los fundamentos fácticos y probatorios en que se finca la misma.

1.7.2.1.2.2.1. Acreditación.

[271] Pantoja Bravo, Ob. Cit.

En lo que tiene que ver con la acreditación de los perjuicios materiales, la legislación penal colombiana, como viene citado, establece que: *"Los daños materiales deben probarse en el proceso"*.

Si bien la normativa de justicia y paz prevé criterios de flexibilización probatoria, conforme lo ha dejado sentando en su jurisprudencia la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, debe entenderse que esa flexibilización se orienta hacia la evidencia con la que han de soportarse las afectaciones o perjuicios cuya reparación se muestre procedente, *"permitiendo la verificación del daño a partir de hechos notorios, modelos baremos, presunciones y reglas de la experiencia, sin embargo, ello de ninguna manera significa que haya desaparecido la necesidad de demostrar la condición de víctima y el menoscabo padecido con el accionar criminal"*, por manera que, tal criterio no implica ausencia de prueba[272].

Así entonces, quien pretenda su reconocimiento como víctima y el reconocimiento de una pretensión indemnizatoria, tiene la carga de aportar los elementos mínimos que demuestren su condición y los daños causados por el accionar delictivo, los cuales han de ser valorados con mayor indulgencia que en la justicia ordinaria, sin que, por ello, se itera, se elimine la obligación de presentar algún soporte.

Consideración especial merecen las víctimas del punible de desplazamiento forzado, respecto de quienes, no obstante para el reconocimiento en su favor de lucro cesante sería necesario que hubiesen brindado información y acreditado la actividad desarrollada por cada integrante del grupo familiar, su nivel de ingresos, el interregno en el que estuvieron cesantes, la fecha de reanudación de su actividad, entre otros factores indispensables para establecer los elementos de ese daño material, lo cierto es que, a falta de esos elementos de convicción, se reconocerá en su favor el tiempo que razonablemente que debieron requerir para lograr su estabilización socioeconómica, autosostenimiento y asentamiento equivalente a un (1) año, periodo ponderado bajo el criterio de *"justa indemnización"* y como un término lo suficientemente amplio *"para compensar, en la medida de lo posible, la pérdida sufrida"*[273], en los eventos en que se hubiese esgrimido pretensión indemnizatoria por concepto de lucro cesante por estas

[272] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisión del 15 de noviembre de 2017, rad. 49067, M.P. Fernando León Bolaños Palacios.
[273] Caso Velásquez Rodríguez, Interpretación de la sentencia de indemnización compensatoria, Sentencia de 17 de agosto de 1990, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 9 (1990). Párr. 27.

particulares circunstancias; bajo el entendido, además, que toda persona laboralmente activa en Colombia debe obtener un salario mínimo legal mensual vigente, y en aquellos casos en que dicha renta sea inferior a éste, para la liquidación se deberá aplicar el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de la sentencia[274]-[275].

Adicional a lo anterior, se tiene en cuenta para los fines de la responsabilidad civil derivada de la conducta punible los siguientes parámetros:

1. Bajo el entendido que el daño material (lucro cesante y daño emergente) debe estar probado, se verificará la existencia de los perjuicios con las pruebas incorporadas al expediente, las introducidas en desarrollo del incidente de reparación integral por las víctimas y/o sus apoderados y ante la ausencia de éstas, se tendrá en cuenta *el juramento estimatorio*, aclarando que de estas evidencias se corrió el pertinente traslado al postulado.

   Sobre el particular, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha indicado lo siguiente:[276]

   > *"b) También es importante acudir al instituto del juramento estimatorio reglado en la normativa procesal civil, en aplicación del principio de integración establecido en el estatuto procesal, en concordancia con la*

[274] La Sala Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia en decisión del 13 de abril de 2013, rad. 40559, M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández, tuvo en cuenta este criterio al señalar: *"(…) la Sala acogiendo los planteamientos que vienen siendo reiterados por la jurisprudencia del Consejo de Estado, frente a la actualización de la renta, es decir el valor del salario devengado por la víctima al momento de los hechos, utilizará el valor del salario mínimo actual, si al momento de realizar la correspondiente actualización de la renta, con la fórmula que para ello existe, el valor que se obtiene está por debajo del salario mínimo legalmente para el año 2012; en aplicación del artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y de los principios de reparación integral y equidad allí contenidos (…)"*.

[275] Este criterio y el término establecido fueron tenidos en cuenta por la Sala homóloga del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en la decisión del 20 de noviembre de 2014, rad. 1100122 52000201400027, postulados Salvatore Mancuso Gómez y otros, M.P. Léster M. González R., la cual sirvió de base en el presente asunto para sustentar la terminación anticipada del proceso por sentencia anticipada por la Fiscalía General de la Nación. En efecto, al respecto se indicó: *"12 meses, que será el periodo con el cual se liquidará el lucro cesante de la víctima, en tanto que la Sala, razonablemente presume que en dicho tiempo, la víctima y su núcleo familiar se han provisto de medios laborales para procurar su sustento"*.
Luego, al desatarse los recursos de apelación de esa providencia, la Sala Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia con relación al cuestionamiento efectuado por un apoderado de víctimas respecto al tiempo de 12 meses estimado por el *a quo* para el cálculo del lucro cesante en los casos de desplazamiento, porque, en su criterio, la Sala había desconocido *"que la situación de desplazado se sufre en la actualidad"*, la máxima autoridad indicó que el Tribunal *"acudió a una presunción que se muestra razonada y, desde ella, asignó un cuantía por [lucro cesante]"*, así mismo que *"el lapso reconocido por el Tribunal obedece a los lineamientos genéricos establecidos con antelación y a los patrones baremo"*. Decisión del 24 de octubre de 2016, rad. 46.075, M.P. José Luis Barceló Camacho.
Aunado a lo anterior, en pasadas oportunidades la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla ha considerado el término de 12 meses para el cálculo del lucro cesante en los casos de desplazamiento forzado, entre otras, las sentencias del 29 de agosto de 2017 rad. 08-001-22-52-002-2014-81105, y del 18 de diciembre del 2018 rad. 08-001-22-52-002-2013-80003.

[276] Decisión del 27 de abril de 2011, rad. 34547, M.P. María Del Rosario González De Lemos.

norma que sobre complementariedad contiene el artículo 62 de la Ley 975 de 2005.
(…)

"Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. El juez, de oficio, podrá ordenar la regulación cuando considere que la estimación es notoriamente injusta o sospeche fraude o colusión.

(…) esta figura procesal se funda en el principio constitucional de la buena fe del artículo 83 Superior y busca otorgar agilidad a las actuaciones procesales permitiendo a las partes participar activamente en la solución de sus conflictos de índole pecuniario. Por ello, como se expuso ampliamente en acápites anteriores, se tendrá como prueba de la cuantía del perjuicio material, la manifestación jurada de la víctima, siempre que el material probatorio acopiado no la desvirtúe.

(…)

No sobra indicar que la valoración del juramento estimativo debe sujetarse a las reglas de apreciación del mismo, en virtud de las cuales, no basta con las afirmaciones del demandante, pues es menester de una parte, que las sumas se encuentren señaladas de manera razonada, y de otra, que de conformidad con la sustancialidad de las formas debe mediar un principio de acreditación, siquiera precario, de cuanto se expresa en él, sin olvidar, que corresponde en el trámite de la Ley de Justicia y Paz al postulado pronunciarse al respecto y formular las objeciones u observaciones a que haya lugar, o por el contrario, asumir una actitud pasiva, denotando con ello que se allana al pedimento en tales condiciones presentado." (Destacado por la Sala).

Igualmente, la máxima autoridad de la justicia ordinaria, respecto al juramento estimatorio ha considerado que no es *"(…) prueba suficiente de la acreditación del daño sufrido o pueda equipararse a un elemento de convicción de naturaleza sumaria, pues tal apreciación subjetiva no permite establecer la existencia y valor de bienes y/o afectaciones reclamadas"*; además, que si bien *"la jurisprudencia ha llamado a la flexibilidad probatoria en este tipo de asuntos solventados bajo criterios de justicia transicional,*

también ha aclarado que ello no puede equipararse a total y absoluta ausencia de prueba, pues al implicar pagos considerables, que el Estado asume de manera subsidiaria, los aspectos pecuniarios que pretenden ser reconocidos deben estar acreditados con suficiencia (…)", por tal manera que *"el juramento estimatorio como única prueba aportada para acreditar las pérdidas de bienes muebles e inmuebles con ocasión del desplazamiento forzado no es suficiente para acceder al reconocimiento y pago de la indemnización"* (Destaca la Sala)[277].

2. De igual forma para los fines del Daño Emergente derivado de *pérdidas materiales* consistentes en muebles y enseres domésticos, aves de corral, ganado vacuno, porcino, ovino y caprino, cultivos para su comercialización y de pan coger, la Sala demanda en cuanto se trate de comercialización de animales y de productos agrícolas, soportes probatorios idóneos que muestren verosímiles tales actividades: registros de hierro vigente para la época de ocurrencia de los hechos, certificados de vacunación, documentos contables o facturas de los que se pueda inferir tales actividades, así como la posesión o tenencia proporcional de tierras para la crianza y sostenimiento de los semovientes declarados como abandonados, etc.

3. Por el contrario, cuando se trate de reconocimiento de perjuicios por daño emergente derivado de *pérdidas materiales* consistentes en muebles y enseres domésticos, aves de corral, ganado vacuno, porcino, caprino y ovino, cultivos de pan coger, que se hubieren tenido para el sostenimiento de la economía familiar básica, la sala atenderá los testimonios aportados por las víctimas y los juramentos estimatorios, siempre que las cantidades declaradas sean razonables y no permitan suponer una actividad comercial para lo cual se tendrán en cuenta los criterios del numeral anterior.

4. Así mismo, se analizará a partir de lo declarado por las víctimas, el valor de sus bienes y de los cánones de arrendamiento en que incurrieron con ocasión del desplazamiento, para lo cual se atendrá a lo establecido en la tabla elaborada por la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal en el fallo de segunda instancia dentro del expediente 34547 Justicia y Paz, contra los postulados Edwar Cobos Téllez y Uber Enrique Banquéz Martínez, donde se señaló el valor promedio de tales elementos, a partir de modelos baremo o diferenciados,

[277] Decisión del 5 de febrero del 2020, rad. 50100, M.P. Dr. Eyder Patiño Cabrera.

comunes a la mayoría, a fin de ajustar las declaraciones juradas, superiores a esos valores, con el único propósito de evitar abusos en la tasación de los perjuicios ocasionados y, especialmente, preservar el principio de igualdad.

De todas maneras, con relación a las víctimas de desplazamiento forzado, en aquellos eventos en los que se hubiere pedido indemnización por este concepto pero no se hubiese aportado algún elemento probatorio sobre los cánones de arrendamiento sufragados, se reconocerá, como ya se dijo, el valor establecido en la tabla baremo que se ilustra a continuación, hasta por un tiempo máximo de un (1) año, que es el periodo que, conforme viene advertido, razonablemente requieren las víctimas para su restablecimiento socioeconómico.

Así las cosas, el valor reconocido por la Sala a título de daño emergente se ceñirá de acuerdo con los criterios del modelo baremo fijado en la precitada sentencia. En los eventos en que proceda su reconocimiento se actualizará multiplicando la cifra correspondiente a los bienes perdidos por la constante (1.856532193) resultante de dividir el IPC del 31 de enero del 2024 (fecha de liquidación de esta sentencia) por el IPC de abril del 2011 (fecha de la sentencia que contiene el modelo baremo que se toma como referencia). Los valores indexados como ya se explicaron quedan de la siguiente forma:

CANTIDAD	CLASE DE BIEN	VALOR PROMEDIO	VALOR ACTUALIZADO
	Casa bahareque	2.000.000	3.713.064
	Casa Material	4.000.000	7.426.129
	Hectáreas Cultivadas	3.000.000	5.569.597
	Hectáreas Preparadas	500.000	928.266
	Arriendos (Mensual)	60.000	111.392
	Reces (c/u)	1.000.000	1.856.532
	Terneros (c/u)	400.000	742.613
	Caballos (c/u)	500.000	928.266
	Ganado Mular (c/u)	600.000	1.113.919
	Ganado Porcino (c/u)	100.000	185.653
	Ganado Asnar (c/u)	250.000	464.133
	Gallinas (c/u)	5.000	9.283
	Patos (c/u)	10.000	18.565
	Pavos (c/u)	25.000	46.413

Además, con relación a otros bienes que no se relacionan en la tabla antes descrita pero que resultan comunes a varias de las víctimas, como son el ganado ovino (carneros y ovejos) y el caprino (cabras y chivos), se calcula su valor promedio de

acuerdo a lo declarado por las víctimas y sus representantes judiciales, resultando lo siguiente:

CLASE DE BIEN	VALOR PROMEDIO DECLARADO	VALOR ACTUALIZADO
Ganado Ovino (c/u)	70.000	129.957
Ganado Caprino (c/u)	150.000	278.480

5. De todas maneras, para el reconocimiento de los bienes y valores determinados en la tabla baremo se acude a las reglas de la experiencia y a la sana crítica para establecer con razonabilidad, en los casos en que haya lugar, que, en efecto, los bienes manifestados como perdidos o abandonados a causa del hecho victimizante, pudieron estar en cabeza de la víctima o del núcleo familiar.

6. En cuanto a la perdida de maquinaria, motores, joyas, dinero en efectivo, etc., que se aleguen bajo el concepto de daño emergente, se demanda la acreditación de su propiedad.

1.7.2.1.2.2.2. Clases de lucro cesante.

1.7.2.1.2.2.2.1. Lucro cesante causado, debido o consolidado.

Esta clase de perjuicios materiales o patrimoniales hacen referencia a la ganancia que dejó de obtener el reclamante desde el momento del hecho hasta el día de liquidación de la sentencia, que, para el caso, como ya se ha dicho, se ha tomado el 31 de enero de 2024.

La fórmula para calcular este concepto será la que de antaño ha establecido la jurisprudencia contenciosa administrativa, esto es, la que se explica a continuación:

$$S = RA\ \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

S: corresponde a la indemnización debida o consolidada, es la suma resultante del período a indemnizar;
Ra: es la renta actualizada, es decir, el monto mensual actualizado;
i: es la tasa de interés puro mensual (0,004867)[278];
n: es el número de meses que comprende al periodo a indemnizar, esto es, el número de meses transcurrido entre la fecha del hecho dañino y el momento de la liquidación en la sentencia; y
1: es una constante matemática.

[278] La tasa de interés parte del límite legal del 6% anual de acuerdo al artículo 2232 del Código Civil, invertido financieramente a mensuales así:
i= (1+ip) ^{n} -1
i= $(1+0.06)^{1/12} - 1$
i= 0.004867

1.7.2.1.2.2.2.2. Lucro cesante futuro o anticipado

Se conoce como tal a la ganancia o incremento que por causa del hecho victimizante ya no se podrá verificar.

Ese perjuicio se calcula desde el día siguiente a la fecha de emisión de la sentencia hasta la fecha en que se extinguiría el crédito u obligación.

Señala el profesor Pantoja Bravo[279] que *"[e]xistirá daño futuro si éste aparece como una previsible prolongación o agravación de un daño actual, según las circunstancias del caso o la experiencia de la vida, o si se presenta como una razonable probabilidad objetiva, de acuerdo con el curso normal y ordinario de las cosas. Asimismo, si dichos daños pueden llegar a producirse de acuerdo con un grado de probabilidad objetiva suficiente según las circunstancias del caso, si es indudable que sucederán, o si su causa generadora ya existe aunque estos aún no se hayan producido"*.

La fórmula para calcular el perjuicio de lucro cesante futuro o anticipado es la que se describe a continuación:

$$S = RA\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$$

S: corresponde a la indemnización debida o consolidada, es la suma resultante del período a indemnizar;
Ra: es la renta actualizada, es decir, el monto mensual actualizado;
i: es la tasa de interés puro o técnico mensual (0.004867);
n: es el número de meses que transcurrirán entre la fecha de la sentencia hasta terminar el período indemnizatorio o vida probable.
1: es una constante matemática

1.7.3. Rehabilitación

En lo atinente a este componente de la reparación integral, se tiene que la ley 975 de 2005 se encargó de precisar el término, indicando que *"[l]a rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito*" [280].

En el artículo 47 de la misma ley advierte:

[279] Pantoja Bravo, Ob. Cit.
[280] Ley 975 de 2005, inciso 4º del Art. 8º.

La rehabilitación deberá incluir la atención médica y psicológica para las víctimas o sus parientes en primer grado de consanguinidad de conformidad con el Presupuesto del Fondo para la Reparación de las Víctimas.[281]

Esa rehabilitación será reconocida por la Sala bajo parámetros concretos y con fundamento en experticias presentadas por los apoderados de las víctimas.

1.7.4. Satisfacción y garantías de no repetición.

A su turno, en lo referente a la satisfacción o compensación moral, como componente de la reparación integral, la Ley de Justicia y Paz ha precisado que esta *"consiste en realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido"*[282].

Se trata entonces de acciones que buscan restablecer el honor, la dignidad, la honra, de aquellas personas que resultaron víctimas del conflicto armado; mientras tanto, las garantías de no repetición son aquellas que *"comprenden, entre otras, la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley"*[283]

Tanto las medidas de satisfacción como las medidas de no repetición tienen unos componentes que la misma ley prescribe de la siguiente manera[284]:

Las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición, adoptadas por las distintas autoridades directamente comprometidas en el proceso de reconciliación nacional, deberán incluir:

*49.1 *Apartes subrayados CONDICIONALMENTE exequibles* La verificación de los hechos y la difusión pública y completa de la verdad judicial, en la medida en que no provoque más daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni cree un peligro para su seguridad.*

49.2 La búsqueda de los desaparecidos o de las personas muertas y la ayuda para identificarlas y volverlas a inhumar según las tradiciones familiares y comunitarias. Esta tarea se encuentra principalmente a cargo de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz.

---

[281] Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-370 de 2006, en el entendido que no excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados organizados al margen de la ley.
[282] Inciso 5º, ibídem.
[283] Inciso 6º, ídem.
[284] Art. 48 de la Ley 975 de 2005.

*49.3 *Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible* La decisión judicial que restablezca la dignidad, reputación y derechos de la víctima y las de sus parientes en primer grado de consanguinidad.*

49.4 La disculpa, que incluya el reconocimiento público de los hechos y la aceptación de responsabilidades.

49.5 La aplicación de sanciones a los responsables de las violaciones, todo lo cual estará a cargo de los órganos judiciales que intervengan en los procesos de qué trata la presente ley.

49.6 La Sala competente del Tribunal Superior de Distrito judicial podrá ordenar conmemoraciones, homenajes y reconocimiento a las víctimas de los grupos armados al margen de la ley. Adicionalmente, la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparaciones podrá recomendar a los órganos políticos o de gobierno de los distintos niveles, la adopción de este tipo de medidas.

49.7 La prevención de violaciones de derechos humanos.

49.8 La asistencia a cursos de capacitación en materia de derechos humanos a los responsables de las violaciones. Esta medida podrá ser impuesta a los condenados por la Sala competente del Tribunal Superior de Distrito Judicial".

Estas medidas serán decretadas por esta Sala conforme se muestren necesarias, pertinentes y adecuadas para la integral reparación a las víctimas, siempre que los sujetos procesales hayan aportado elementos de prueba que lleven a esta Corporación a esa conclusión.

De esta manera la Sala da por expuestos los componentes de la reparación integral.

Cuestión final.

Se finaliza el presente acápite indicando que las medidas de reparación que se solicitan de manera individual deben estar debidamente concretadas en cada persona y tener un soporte probatorio que le permita a la Sala establecer la necesidad, conducencia y pertinencia de la medida solicitada, pues mal podría la judicatura ordenar, por ejemplo, una medida de atención psicológica a una persona cuando un profesional de esa área no lo ha recomendado.

No obstante ello, los derechos de cada una de las personas que han sufrido los embates del conflicto armado en Colombia no dejan de tener efectividad por el hecho de que no sean reconocidos en una sentencia judicial, pues la reparación

integral es de rango constitucional y, por lo tanto, todas las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas –SNARIV- siguen con la obligación general de atender a quien solicite ayuda o acompañamiento de las mismas, previo sometimiento a los procedimientos establecidos para tal fin.

1.8. La prueba

1.8.1. Necesidad de la prueba.

Como en todo proceso judicial, la prueba es el elemento *sine qua non* para tomar la decisión, por lo tanto, ella debe estar presente y tener el poder suasorio suficiente para llevar al convencimiento del operador judicial sobre la ocurrencia del hecho alegado, la responsabilidad del actor y la consecuencia jurídica que ello conlleve.

El proceso especial de Justicia y Paz no escapa de esa exigencia, de ahí que en el artículo 23 de la Ley 975 de 2005 alude, con relación al incidente de reparación, que la *"audiencia se iniciará con la intervención de la víctima o de su representante legal o abogado de oficio, para que exprese de manera concreta la forma de reparación que pretende, e indique las pruebas que hará valer para fundamentar sus pretensiones"* (Se destaca).

Del mismo modo, la Ley 906 de 2004, que por integración se aplica al procedimiento especial de Justicia y Paz, dispone, en el Título IV, Capítulo III, Parte I, lo atinente a los fines, libertad, oportunidad, pertinencia, entre otros aspectos del régimen probatorio penal colombiano, del que se puede extraer que la prueba es la base fundamental para la toma de la decisión.

En relación con los fines de la prueba, señala el artículo 372 de la normativa procesal penal que: *"[l]as pruebas tienen por fin llevar al conocimiento del juez, más allá de duda razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio y los de la responsabilidad penal del acusado, como autor o partícipe."*; mientras tanto, el artículo 381 de la misma codificación dispone: *"Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio."*

Los hechos objeto de debate y, en el caso del incidente de reparación integral, los perjuicios que sufrieron las víctimas y perjudicados, pueden ser demostrados con cualquiera de los medios establecidos por la ley *o por cualquier otro medio*

técnico o científico, que no viole los derechos humanos[285], teniendo en cuenta lo advertido por la Sala en precedencia sobre el punto.

1.8.2. El dictamen pericial.

El dictamen pericial, o informe pericial, es el resultado de la experticia técnica, científica o artística que una persona con expresos y profundos conocimientos en el tema ofrece al operador judicial con el fin de coadyuvar en la toma de la decisión.

En relación con el dictamen pericial la Honorable Corte Constitucional ha explicado lo siguiente:

> *La doctrina tradicional en materia probatoria confiere al dictamen pericial una doble condición: Es, en primer término, un instrumento para que el juez pueda comprender aspectos fácticos del asunto que, al tener carácter técnico, científico o artístico, requieren ser interpretados a través del dictamen de un experto sobre la materia de que se trate. En segundo lugar, el experticio es un medio de prueba en sí mismo considerado, puesto que permite comprobar, a través de valoraciones técnicas o científicas, hechos materia de debate en un proceso. Es por esta última razón que los ordenamientos procedimentales como el colombiano, prevén que el dictamen pericial, en su condición de prueba dentro del proceso correspondiente, debe ser sometido a la posibilidad de contradicción de las partes, mediante mecanismos como las aclaraciones, complementaciones u objeciones por error grave. Este carácter dual es confirmado por autores como Silva Melero, quien sostiene que el dictamen pericial cumple una doble función. De un lado "... llevar al proceso conocimientos científicos o prácticos que el juez podría conocer, pero que no está obligado a ello, y que son precisos para adoptar la decisión." Por otro lado, el dictamen también opera como "concepto de pericia de constatación de hechos", o lo que es lo mismo "... constataciones objetivas, que pueden ser independientes la persona del inculpado." A idéntica conclusión arriba la jurisprudencia constitucional. Sobre el particular, en la sentencia T-796/06 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), se pone de presente cómo el dictamen pericial responde a una naturaleza jurídica dual. De un lado, es comprendido como "...un verdadero medio de prueba, debido a que el dictamen pericial se dirige a provocar la convicción en un determinado sentido, esto es, la actividad que realiza el perito tiene finalidad probatoria, ya que tiende a la fijación de la certeza positiva o negativa de unos hechos.". De otro, la experticia también es comprendida como "...un mecanismo auxiliar del juez, ya que mediante el dictamen pericial no se aportan hechos distintos de los discutidos en el proceso sino que se complementan los conocimientos necesarios para su valoración por parte del juez. Mientras los medios de prueba introducen en el proceso afirmaciones fácticas relacionadas con las afirmaciones iniciales de las partes,*

[285] Art. 373 de la Ley 906 de 2004.

con interés exclusivo para el proceso concreto, la pericia introduce máximas de experiencia técnica especializadas de validez universal para cualquier tipo de proceso.[286]

Como se puede advertir, el informe pericial no es cualquier documento dentro del andamiaje probatorio procesal, se trata de una importante actuación en la que es indispensable apreciar todos los requisitos que, por complementariedad, determina la normativa procesal penal contenida en la Ley 906 de 2000 y en la Ley 600 de 2000.[287]

En la medida en que los informes periciales presentados en la etapa probatoria del incidente cumplan con los requisitos legales y se sometan a la posibilidad de contradicción por la contraparte, serán documentos idóneos para tenerlos en cuenta al momento de efectuar los pronunciamientos en materia de reparación integral.

1.8.2.1. De los peritajes psicosociales.

La doctrina especializada ha venido considerando que existe una diferencia entre *"daño psicosocial y daño psicológico"*, entendiéndose el primero como *"Los daños causados por violaciones a los derechos humanos [que] generalmente trascienden la individualidad del sujeto o sujetos directamente afectados, alcanzando, por lo general, al grupo familiar, a la comunidad u organización social e, incluso, a toda la sociedad". Este concepto difiere del daño psicológico, pues éste último corresponde a un perjuicio únicamente individual"*[288].

En cuanto hace al contenido de la valoración sobre afectaciones psicosociales y a la importancia que tiene en el proceso judicial de justicia y paz, la Honorable Corte Constitucional ha señalado[289]:

Como bien lo indican los intervinientes y los estándares internacionales en la materia como el Protocolo de Estambul, las valoraciones psicosociales trascienden el ámbito individual de la persona, al contexto del grupo familiar, la comunidad y la sociedad. Se reconoce al ser humano, no solamente desde su subjetividad y sufrimiento, sino desde sus distintas dimensiones y contexto.

[286] Sentencia C-124 del primero de marzo de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[287] Artículo 62 de la ley 975 de 2005, *"Complementariedad.* Para todo lo no dispuesto en la presente ley se aplicará la Ley 782 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal". Además, el Decreto 4760 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 975 de 2005, estableció que en lo no previsto por esta ley, se aplicarán las normas de procedimiento penal de la Ley 906 de 2004, y en lo compatible con su estructura, la Ley 600 de 2000.
[288] Concepto emitido por el grupo docente de la Maestría en Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás, al interior del trámite de la tutela T-702 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[289] Sentencia T-702 del 13 de diciembre de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez

Estas tienen tres objetivos principales. Primero, identificar el sufrimiento de la víctima y daños psicosociales en contraste con el entorno social, político, económico y cultural en el que habita. Segundo, mediante el peritaje, convertir la valoración del daño en un elemento de prueba que sirva para el proceso judicial. Y tercero, la creación de una propuesta de reparación integral donde se procure reparar el daño valorado.

Realizar una valoración psicosocial debe comprender un estudio completo y detallado sobre el contexto social, económico y cultural en el que ocurrieron los hechos violentos y su relación con los daños ocasionados a las víctimas. Estas valoraciones resultan fundamentales en contextos de conflicto armado debido a que se enfocan en los casos donde la víctima no manifiesta daños físicos o patologías mentales evidentes, que resultan ser en la mayoría de personas.

La valoración psicosocial debe ser comprendida, más que como una prueba del proceso judicial, como un proceso en sí mismo. Este tipo de valoraciones requieren un peritaje continuo, desde la información del caso y el contexto, la planeación y el análisis de las condiciones en que la evaluación se llevará a cabo, hasta los mecanismos de seguimiento y posterior proceso terapéutico o de acompañamiento, finalizadas las diligencias judiciales. En otras palabras, el peritaje como un proceso que contiene un elemento y un valor probatorio relevante que aporta nuevos hechos al proceso y da nuevos argumentos al juez para soportar su decisión, debe tener elementos esenciales como el acompañamiento a las víctimas durante todas las diligencias judiciales. Esto genera un mayor conocimiento y confianza por parte de las mismas.

Respecto al profesional perito encargado de hacer la valoración psicosocial, *"que si bien no tiene que ser un psicólogo forense, debe contar con suficiente experiencia en el trato de daños psicosociales a víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos. Sus competencias cognitivas, praxiológicas, axiológicas y comunicativas deben conocer profundamente el contexto del conflicto colombiano, sus consecuencias y dinámicas"*, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos al momento de rendir su dictamen:

(i)Los daños psicosociales son determinables como un proceso que consta de un origen y una evolución. Su análisis debe comprender todos los elementos que lo rodean y lo particularizan, como la intencionalidad, la duración, el lugar y la identidad de los victimarios;

(ii) La determinación de los daños debe tener un enfoque diferencial, es decir, tener en cuenta factores que muestran características particulares de las personas como el género, la edad, el contexto cultural y socioeconómico.

(iii) Debido a los diversos factores que inciden en la generación y duración del daño, es necesario concebir distintos métodos de investigación y herramientas investigativas que se adecúen a las particularidades de los contextos e historias de cada una de las personas y grupos que se pretende valorar. De esa forma, podrá determinarse el daño de manera integral;

(iv) Finalmente, la valoración del daño debe sustentarse bajo principios éticos consagrados en documentos como el Protocolo de Estambul, que consideran a la dignidad humana y el bienestar como eje central de la valoración[290].

El contenido de las valoraciones psicosociales debe tener como propósitos: *"Primero, identificar el sufrimiento de la víctima y daños psicosociales en contraste con el entorno social, político, económico y cultural en el que habita. Segundo, mediante el peritaje, convertir la valoración del daño en un elemento de prueba que sirva para el proceso judicial. Y tercero, la creación de una propuesta de reparación integral donde se procure reparar el daño valorado"*, y debe comprender *"un estudio completo y detallado sobre el contexto social, económico y cultural en el que ocurrieron los hechos violentos y su relación con los daños ocasionados a las víctimas. Estas valoraciones resultan fundamentales en contextos de conflicto armado debido a que se enfocan en los casos donde la víctima no manifiesta daños físicos o patologías mentales evidentes, que resultan ser en la mayoría de personas"*, contemplándose como metodología y protocolo especial para la valoración de los daños con las siguientes etapas: *"la etapa previa a la evaluación, la evaluación, la elaboración del informe pericial, la presentación oral del peritaje y el seguimiento"*[291].

2. Trámite incidental.

El incidente de reparación integral a las víctimas fue instituido por el legislador del 2005 como un componente necesario para el proceso de reconciliación y dejación de armas por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley –GAOML-, no solo en aras de cumplir con exigencias internacionales sino de lograr la efectiva convivencia pacífica sin sacrificar por completo los derechos de quienes fueron los sujetos pasivos de las conductas punibles del accionar de dichas organizaciones criminales y con el ánimo de cumplir con el propósito primordial de resguardar las garantías de las víctimas dirigidas a una reparación integral de los daños causados, se procuró inicialmente en la Ley 975 de 2005 un trámite Incidental para tal efecto dispuesto en el artículo 23.

[290] Ibidem.
[291] Sentencia T-702 del 13 de diciembre de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez

Con posterioridad, se promulgó la Ley 1592 de 2012 con el fin de imprimirle celeridad al proceso y, entre otras cosas, la expedición de esa normativa implicó la supresión del incidente de reparación integral como inicialmente fue concebido para, en su lugar, establecer otro incidente pero de "identificación de afectaciones causadas"; sin embargo, mediante las sentencias C-180 y C-286 de 2014, la Corte Constitucional declaró inexequibles todas las modificaciones que se hicieron por la ley 1592 de 2012 a la ley 975 de 2005, en lo referente al incidente de reparación integral, esto es, los artículos 23, 24, 25, la expresión "*y contra el fallo del incidente de identificación de las afectaciones causadas*" contenida en el inciso 3° del artículo 27, y los artículos 33, 40 y 41 de esa normativa, por considerar, en términos generales, que al suprimirse el "Incidente de Reparación Integral" y en consecuencia la reparación por la vía judicial penal del régimen de transición de justicia y paz, como inicialmente estuvo establecido en la Ley 975 de 2005, se vulneró a las víctimas el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y a un recurso judicial efectivo, además de desconocer el principio de juez natural, correspondiéndole nuevamente a la Sala de Justicia y Paz efectuar la cuantificación de los daños causados y velar porque la reparación de las víctimas se haga de manera integral.

Por su parte, la institución jurídica de la terminación anticipada como las que nos ocupa del proceso por sentencia anticipada estatuida en el parágrafo del artículo 18 de la Ley 975 de 2005 y en el artículo 36 del Decreto Reglamentario 3011 de 2013, compilado por el artículo 2.2.5.1.2.3.2 del Decreto 1069 de 2015, aparejó la realización de un incidente de Reparación Integral de carácter excepcional en aquellos casos *"en los que se (…) identifiquen víctimas que no hubiesen sido incluidas en la sentencia que previamente hubiese esclarecido un contexto o un patrón de macrocriminalidad"*, para lo cual *"la Fiscalía General de la Nación deberá allegar la información necesaria que permita demostrar que las víctimas han sido acreditadas y que en efecto los hechos de los que fueron víctimas hacen parte del patrón de macrocriminalidad o contexto previamente establecido"*, con observancia del trámite comúnmente dispuesto para el Incidente de Reparación Integral a las Víctimas.

El trámite incidental en el presente asunto se adecuó y desarrolló con observancia de las previsiones contenidas en la Ley 975 de 2005 y en el artículo 2.2.5.1.2.2.15 del Decreto 1069 de 2015, y, en consecuencia, en acápite subsiguiente, se adoptarán las determinaciones a que haya lugar, de acuerdo a los elementos de

prueba y las alegaciones expuestas por las partes e intervinientes, aplicando para cada caso en concreto y para cada petición en particular, de resultar pertinentes, los parámetros de la jurisprudencia constitucional, contenciosa, de la justicia común u ordinaria, de la especializada de Justicia y Paz, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además, las concordantes con el bloque de constitucionalidad conforme a criterios que vienen expuestos en el acápite preliminar y en los precedentes.

3. De las liquidaciones en concreto.

A continuación, la Sala pasa a resolver las solicitudes de reparación en la forma y términos que fueron presentadas por los representantes judiciales de las víctimas que hacen parte de este proceso con relación a los casos objeto de sentencia dentro de este asunto, teniendo en cuenta, además, que, tal y como se registró en desarrollo del trámite incidental, la Fiscalía efectuó la acreditación sumaria y provisional de quienes fueron presentadas como víctimas de los hechos legalizados cometidos por los aquí postulados exintegrantes del extinto Bloque Héroes de los Montes de María, **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA**, según ha correspondido a cada uno de ellos.

En aras de preservar los intereses superiores de los menores que resultaren víctimas, la Sala en el caso de registrar víctimas menores se referirá únicamente a las iniciales de los nombres de quienes al momento de la liquidación de la sentencia aún registraban minoría de edad; así mismo se hará con relación a aquellas víctimas que pudieren resultar de delitos sexuales.

3.1-ABOGADO: Dr. EMERSON RAFAEL ROCHA OSORIO

HECHO NÚMERO 5[292]

Víctimas:	ESTEBAN MANUEL SOLAR HERAZO
Fecha de Nacimiento:	22 de julio de 1979
Fecha de los Hechos:	13 de octubre de 2001
Edad de muerte:	22 años
Expectativa de vida:	58 años (696 meses)
Tiempo entre hecho y sent:	267.60 meses
Delitos Legalizados:	Homicidio en persona protegida
Salario devengado:	Salario mínimo

DE LO SOLICITADO

VÍCTIMAS	DOCUMENTOS APORTADOS	DAÑOS INMATERIALES	DAÑOS MATERIALES	
		DAÑO MORAL	LUCRO CESANTE PRESENTE	LUCRO CESANTE FUTURO
Nombre ISABEL HERAZO QUIROZ Identificación C.C. No. 64.516.432 Fecha de nacimiento 7 de marzo de 1956 Madre	- Solicitud de incidente de reparación integral - Sustitución de poder otorgado por la señora Isabel Herazo Quiroz al doctor Alfonso Enrique Pérez Guzmán y este sustituye al doctor Emerson Rocha Osorio. - Copia de poder suscrito por Isabel Herazo Quiroz al doctor Alfonso Enrique Pérez Guzmán -Copia de la cédula de ciudadanía de Isabel Herazo Quiroz. - Copia del certificado de defunción No. 832588 a nombre de Esteban Manuel Solar Herazo. - Copia del Registro Civil de nacimiento expedido por el Notario Único del Círculo de San Onofre, Sucre, No. 23912845 a nombre de Esteban Manuel Solar Herazo. - Copia expedida por la Unidad Nacional de Fiscalías Para La Justicia y la Paz de Cartagena, quien atendió a la señora Isabel Herazo, quien manifiesta carecer de apoderado y es remitida a la	100 smlmv	$275.489.610.00	$215.008.183.00

[292] Audio I de marzo de 2023 - Tarde rec. 01:02:30, sesión de audiencia del día 15 de marzo de 2023.

	Defensoría del Pueblo de Cartagena, para que se le asigne un defensor que la represente en el proceso de Justicia y Paz. - Hoja de Vida del Perito Financiero Álvaro Parra Hernández. - Manual, Instructivo o Formato: Liquidaciones Materiales de Daños y Perjuicios en delitos de homicidio y desaparición forzada, realizada por el Perito Financiero, Álvaro Parra Hernández de la Defensoría del Pueblo.			

DE LO RESUELTO POR LA SALA

VÍCTIMA	**DAÑOS INMATERIALES**	**DAÑOS MATERIALES**	
	DAÑO MORAL	**LUCRO CESANTE PRESENTE**	**LUCRO CESANTE FUTURO**
Nombre ISABEL HERAZO QUIROZ Identificación C.C. No. 64.516.432	La Sala, teniendo en cuenta lo descrito en el acápite *"1.7.2.1.1.1.2. Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, reconoce por concepto de daño moral a favor de la señora Isabel Herazo Quiroz, en calidad de Madre de quien en vida fuera Esteban Manuel Solar Herazo, la suma equivalente a 100 smlmv, monto que se reconoce respecto del delito de homicidio en persona protegida.	En razón, de que en ninguno de los elementos de convicción aportados por el señor representante de víctimas en la carpeta incidental, ni de los elementos probatorios aportados por el ente acusador, existe alguna expresión acerca de la dependencia económica entre la señora Isabel Herazo Quiroz y su hijo fallecido Esteban Manuel Solar Herazo, ni de ningún otro aspecto de donde se pueda inferir la afectación económica deprecada, la cual no puede la Sala por presunción afirmar y definir que existió, además, que no se allegaron elementos demostrativos de actividad económica alguna en concreto que hubiese desempeñado la víctima directa al momento de la ocurrencia del hecho, lo cual se advierte, no es posible el reconocimiento reparatorio por concepto diferente al daño moral en este caso.	

HECHO NÚMERO 11[293] (cargo legalizado parcialmente)

Víctimas:	RAFAEL ENRIQUE MERCADO VITOLA
Fecha de Nacimiento:	27 de noviembre de 1955
Fecha de los Hechos:	14 de marzo de 2004
Edad de muerte:	49 años
Expectativa de vida:	32,5 años (390 meses)
Tiempo entre hecho y sent:	238,57 meses
Delito Legalizado:	Secuestro simple.
Salario devengado:	Salario mínimo

[293] Audio I de marzo de 2023 - Tarde rec. 01:20:51, sesión de audiencia del día 15 de marzo de 2023.

DE LO SOLICITADO

VÍCTIMA	DOCUMENTOS APORTADOS	DAÑOS INMATERIALES	DAÑOS MATERIALES
		DAÑO MORAL	LUCRO CESANTE PRESENTE
Nombre KELLY YOJANA MERCADO GUEVARA Identificación C.C. No. 23.030.460 Fecha de nacimiento 7 de julio de 1982 Hija	- Solicitud de incidente de reparación integral. - Copia de poder suscrito por Kelly Yojana Mercado Guevara al doctor Emerson Rocha Osorio. - Copia de la cédula de ciudadanía de Kelly Yojana Mercado Guevara. - Copia expedida por el Grupo de Atención e Información Ciudadana de la Registraduría Nacional en el que se certifica que en el archivo nacional el documento de identificación No. 92.500.275 a nombre del señor Rafael Enrique Mercado Vitola, registra cancelado por muerte. - Copia del certificado de defunción No. 04646338 expedido de la Registraduría de Sincelejo, Sucre, a nombre de Rafael Enrique Mercado Vitola. -Copia de la exhumación realizada por la Unidad de Fiscalía de Reacción Inmediata, al cuerpo del señor Rafael Enrique Mercado Vitola. -Copia del protocolo necropsia realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses al señor Rafael Enrique Mercado Vitola. - Copia del Registro Civil de nacimiento No. 3904998 a nombre de Kelly Yojana Mercado Guevara. - Copia expedida por la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional Unidad Satélite de Sincelejo, quien atendió a la señora Kelly Yojana Mercado Guevara, reportándose como víctima quien manifestó carecer de los medios económicos para adquisición de un apoderado por lo que fue remitida a la Defensoría del Pueblo Regional de Sucre, para que se le asignara un defensor que la representase en el proceso de Justicia y Paz. - Copia de la certificación expedida por la Fiscalía Sexta Seccional Unidad Delitos contra la Vida e Integridad Personal y Otros, Dirección Seccional de Fiscalía de Sincelejo – Sucre, donde certifica que la Fiscalía Séptima Seccional adelantó investigación preliminar bajo el Radicado No. 43389 por el delito de Homicidio como sindicados Miladys Serna Ramos, Armin Montes Fernández y Luis Miguel Esquivel Castillo, en el que aparece como víctima Rafael Enrique Mercado Vitola quien murió el 14 de marzo de 2004. - Manual, Instructivo o Formato: Liquidaciones Materiales de Daños y Perjuicios en delitos de homicidio y desaparición forzada, realizada por el Perito Financiero, Álvaro Parra Hernández de la Defensoría del Pueblo.	100 smlmv	$218.404.711.00

DE LO RESUELTO POR LA SALA

VÍCTIMA	DAÑOS INMATERIALES	DAÑOS MATERIALES
	DAÑO MORAL	**LUCRO CESANTE PRESENTE**
Nombre KELLY YOJANA MERCADO GUEVARA Identificación C.C. No. 23.030.460	En el presente caso encontramos, que tal como quedó expuesto en el cuerpo de esta decisión al momento de desarrollar el cargo No. 11 el cual fue imputado por la Fiscalía ante el Despacho de Control de Garantías y expuesto ante esta Sala de Conocimiento en contra de LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO conocido en sus tiempos de militancia en las extintas Autodefensas Unidas de Colombia con el alias de "Daniel", en calidad de coautor, por los delitos de homicidio en persona protegida, en concurso heterogéneo sucesivo con detención ilegal y privación del debido proceso, bajo las circunstancias de mayor punibilidad de los numerales 5 y 8 del artículo 58 de la ley 599 del 2000; emergen dos situaciones: 1. Respecto del delito de homicidio de persona protegida, claramente quedó registrado en el acápite de *"Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física"*, que en contra de LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO alias "Daniel" el Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo profirió sentencia el 4 de mayo de 2005 dentro del radicado 2005-00021-00 en la cual lo condenó a la pena de prisión de 25 años como autor responsable del delito de *homicidio agravado* cometido en la persona de RAFAEL ENRIQUE MERCADO VITOLA, así como la accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por un periodo de 20 años, al igual que el pago de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales. 2. En punto al delito de detención ilegal y privación del debido proceso, este sufrió una variación de la calificación jurídica por el delito de *secuestro simple*, por los motivos dados a conocer precedentemente en el acápite *"Análisis de la Sala"* del cuerpo de esta sentencia. Al suscitarse las situaciones o problemas jurídicos antes mencionados, a de determinarse que, tal y como se dejó registrado en el acápite *"Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física"*, efectivamente en contra de LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO alias "Daniel" el Juzgado Primero Penal del Circuito de Sincelejo profirió sentencia fechada 4 de mayo de 2005 dentro del radicado 2005-00021-00 en la cual se le condenó a la pena de prisión de 25 años como autor responsable del delito de *homicidio agravado* cometido en la persona de RAFAEL ENRIQUE MERCADO VITOLA, así como la accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por un periodo de 20 años, al igual que el pago de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes como reparación por los perjuicios causados, morales. Ahora bien, así lo expuesto, dado que por este cargo ya se profirió condena en la justicia ordinaria por el mismo delito y por el mismo hecho imputado en este proceso penal especial de Justicia y Paz, por el órgano de persecución penal, esto es, por el homicidio agravado de cuya víctima lo fue RAFAEL ENRIQUE MERCADO VITOLA, no fue posible proceder aquí a la legalización de este cargo en tato que como viene advertido al analizar el cargo, el proferimiento de una nueva condena devendría en la transgresión flagrante del principio del *"non bis in idem"* consagrado en el inciso cuarto del artículo 29 de la constitución nacional y en los artículos 8 del Código Penal 19 de la Ley 600 de 2000 y 21 de la Ley 906 de 2004, y en este orden, advertido que A. de acuerdo a lo que viene analizado frente a este cargo no fue posible su legalización, B. que la reparación aquí pretendida responde a un delito, en consecuencia, no susceptible para el caso de ser legalizado, y, C. los obligados a reparar los daños ocasionados con la actividad criminal, son los postulados declarados penalmente	

	responsables y el señor Abogado Representante de Víctimas al momento de hacer su solicitud de pretensiones indemnizatorias en favor de Kelly Yojana Mercado Guevara, este se concentró en deprecar dichos montos con base únicamente al delito de homicidio en persona protegida, que recayó en el padre de la víctima solicitante, es decir, nada dijo este, respeto del delito de detención ilegal y privación del debido proceso inicialmente imputado por la fiscalía y que posteriormente sufrió variación de la calificación jurídica por el delito de secuestro simple por parte de esta sala de Justicia y Paz. Por todo ello, las Sala no despacha favorablemente lo pretendido en este caso.

HECHO NÚMERO 12[294]

Víctimas:	FARID ANTONIO SALAZAR MONTES
Fecha de Nacimiento:	4 de marzo de 1957
Fecha de los Hechos:	22 de noviembre de 2003
Edad de muerte:	46 años
Delitos Legalizados:	Homicidio en persona protegida
Salario devengado:	Salario mínimo

DE LO SOLICITADO

VÍCTIMAS	**DOCUMENTOS APORTADOS**	**DAÑOS INMATERIALES** **DAÑO MORAL**
Nombre WALBERTO ANTONIO SALAZAR MURILLO Identificación C.C. No. 92.540.628 Fecha de nacimiento 3 de marzo de 1979 Hijo	- Solicitud de incidente de reparación integral. - Copia del Poder suscrito por Walberto Antonio Salazar Murillo al doctor Emerson Rafael Rocha Osorio. - Copia del poder suscrito por Walberto Antonio Salazar Murillo al doctor Bladimir Jose Gómez Quintero. -Copia del poder otorgado por el señor Walberto Antonio Salazar Murillo al doctor Alfonso Enrique Pérez Guzmán y este sustituye al doctor Bladimir Jose Gómez Quintero. - Copia del poder otorgado por el señor Walberto Antonio Salazar Murillo al doctor Alfonso Enrique Pérez Guzmán y este sustituye al doctor Emerson Rocha Osorio. - Copia de la cédula de ciudadanía de Walberto Antonio Salazar Murillo. - Copia del Registro Civil de Nacimiento No. 28324911 de Walberto Antonio Salazar Murillo - Copia expedida por la Fiscal Sexta Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Sincelejo, donde certifica que se encuentra un trámite de indagación previa por el presunto punible de homicidio donde figura como víctima del derecho a la vida el señor Farid Antonio Salazar Montes y contra imputados desconocidos según hechos ocurridos el 22 de noviembre de 2003.	100 smlmv

[294] Audio I de marzo de 2023 - Tarde rec. 01:25:50, sesión de audiencia del día 15 de marzo de 2023.

	- Copia expedida por la Unidad Nacional de Fiscalías de Sincelejo, quien atendió al señor Walberto Antonio Salazar Murillo, reportándose como víctima ante la Unidad de Justicia y Paz donde manifiesta carecer de apoderado y es remitido a la Defensoría del Pueblo Regional de Sucre, para que se le asigne un defensor que lo represente en el proceso de Justicia y Paz - Copia del Registro de Hechos Atribuibles realizado por la Defensoría del Pueblo al señor Walberto Antonio Salazar Murillo. - Copia de un recorte de periódico de la noticia de la muerte del señor Salazar Montes.	

DE LO RESUELTO POR LA SALA

VÍCTIMAS	**DAÑOS INMATERIALES**
	DAÑO MORAL
Nombre WALBERTO ANTONIO SALAZAR MURILLO Identificación C.C. No. 92.540.628	La Sala, teniendo en cuenta lo descrito en el acápite *"1.7.2.1.1.1.2. Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, reconoce por concepto de daño moral a Walberto Antonio Salazar Murillo, en calidad de hijo de Farid Antonio Salazar Montes, la suma equivalente a 100 smlmv, monto que se reconoce respecto del delito de homicidio en persona protegida.

HECHO NÚMERO 13[295] (cargo no legalizado)

Víctimas:	OSCAR ÁLVAREZ PASTOR
Fecha de Nacimiento:	23 de Julio de 1970
Fecha de los Hechos:	18 de enero de 2004
Edad de muerte:	34 años
Expectativa de vida:	46.5 años (558 meses)
Tiempo entre hecho y sent:	240,43 meses
Salario devengado:	Salario mínimo

DE LO SOLICITADO

VÍCTIMAS	**DOCUMENTOS APORTADOS**	**DAÑOS INMATERIALES**	**DAÑO MATERIALES**	
		DAÑO MORAL	**LUCRO CESANTE PRESENTE**	**LUCRO CESANTE FUTURO**
Nombre	- Solicitud de incidente de reparación integral. - Copia del poder suscrito por Mónica Milet Álvarez Fuentes al doctor Alfonso Enrique Pérez Guzmán.	100 smlmv	$ 248.221.334.00	$222.448.440.00

[295] Audio I de marzo de 2023 - Tarde rec. 01:30:45, sesión de audiencia del día 15 de marzo de 2023.

MÓNICA MILET ÁLVAREZ FUENTES Identificación C.C. No. 64.583.849 Fecha de nacimiento 10 de marzo de 1978 Compañera Permanente	- Copia del poder otorgado por la señora Mónica Milet Álvarez Fuentes al doctor Alfonso Enrique Pérez Guzmán y este sustituye al doctor Emerson Rocha Osorio - Copia de la cédula de ciudadanía de Mónica Milet Álvarez Fuentes. - Copia de la cédula de ciudadanía del señor Oscar Álvarez Pastor. - Copia del registro civil de defunción No. 06421243 a nombre de Oscar Álvarez Pastor. - Copia del certificado de defunción a nombre de Oscar Álvarez Pastor. - Copia del acta de Inspección y Levantamiento de Cadáver de Oscar Álvarez Pastor realizado por la Unidad de Fiscalía de Reacción Inmediata de Sincelejo, Sucre. - Copia del Oficio No. 010 de enero de 2004 de entrega de cadáver, expedida por la Unidad de Fiscalía de Reacción Inmediata de Sincelejo. - Copia de la necropsia realizada al señor Oscar Álvarez Pastor por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Seccional Sucre. - Copia de la declaración juramentada realizada en la Notaría Segunda de Sincelejo, por los señores Emilce del Carmen Toscano Pérez y Bladimir Antonio Murillo Carmona, en la que dan cuenta que conocieron de vista trato y comunicación al señor Oscar Álvarez Pastor, que les consta que vivía en unión libre con la señora Mónica Milet Álvarez Fuentes y de esta unión nacieron 3 hijos Rafael Santos, Luis Ángel y María Isabel Álvarez Álvarez, además, que les consta que los únicos hijos son los antes mencionados y la señora Mónica también la única mujer con quien vivía, y que ellos dependían económicamente en todas sus necesidades del señor Oscar Álvarez Pastor, hasta el momento de su fallecimiento por muerte violenta en el corregimiento El Cerrito de La Palma, Sincelejo, el día 18 de enero de 2004.			

	- Copia de Certificación expedida por el Secretario del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sincelejo, en el que hace constar que en ese despacho cursa proceso por el delito de homicidio siendo víctima directa Oscar Álvarez Pastor, en contra del señor Luis Miguel Esquivel Castillo, a quien, en junio 9 de 2005, condenó a la pena principal de 13 años de prisión como autor responsable del aludido punible. - Copia del Formato de Registro de Información Sobre Victimas en el Marco de la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz, realizado por la señora Mónica Milet Álvarez Fuentes en la Defensoría del Pueblo. - Copia expedida por la Unidad Nacional de Fiscalías de Sincelejo, quien atendió a la señora Mónica Milet Álvarez Fuentes, reportándose como víctima ante la Unidad de Justicia y Paz quien manifestó carecer de apoderado y fue remitida a la Defensoría del Pueblo Regional de Sucre, para que se le asigne un defensor que la represente en el proceso de Justicia y Paz. - Copia del registro de hechos atribuibles realizado por la señora Mónica Milet Álvarez Fuentes. -Copia de un recorte de periódico de la noticia de la muerte del señor Oscar Álvarez Pastor. - Manual, Instructivo o Formato: Liquidaciones Materiales de Daños y Perjuicios en delitos de homicidio y desaparición forzada, realizada por el Perito Financiero, Álvaro Parra Hernández de la Defensoría del Pueblo			

DE LO RESUELTO POR LA SALA

VÍCTIMA	**DAÑOS INMATERIALES**	**DAÑO MATERIALES**	
	DAÑO MORAL	**LUCRO CESANTE PRESENTE**	**LUCRO CESANTE FUTURO**
Nombre MÓNICA MILET ÁLVAREZ FUENTES Identificación	Con relación a este caso, la Sala no reconoce las pretensiones indemnizatorias incoadas por el señor abogado representante de víctimas en favor de la señora Mónica Milet Álvarez Fuentes, en calidad de compañera permanente de Oscar Álvarez Pastor, en tanto que, como quedó analizado en el cuerpo de esta decisión al momento de desarrollar el cargo No. 13 imputado igualmente por la Fiscalía ante el Despacho de Control de Garantías y expuesto ante esta Sala de Conocimiento en contra de LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO alias “Daniel”, en calidad de coautor, por el delito de homicidio en persona protegida, bajo las circunstancias de mayor		

C.C. No. 64.583.849	punibilidad de los numerales 5 y 8 del artículo 58 de la ley 599 del 2000; en el caso presente, de igual manera, quedó registrado en el acápite de *"Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física"*, que en contra de LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO alias "Daniel" reposa sentencia condenatoria proferida dentro del radicado No. 2004-00257-00, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sincelejo, Sucre, de fecha 9 de junio de 2005, a la pena principal de prisión de (13) años como coautor responsable del delito de homicidio simple cometido en la persona de OSCAR ELIECER ÁLVAREZ PASTOR, sentencia además, fue condenado a pagar por concepto de reparación por los perjuicios morales la suma de trescientos (300) gramos oro a favor de los familiares de la víctima conforme a las disposiciones de ley. Al suscitarse la situación antes mencionada, tal y como se dejó registrado en el acápite introductorio del incidente de esta sentencia y en el caso similar al No. 13, para efectos de proceder al análisis de las pretensiones reparatorias resulta indispensable que el cargo hubiese sido objeto de legalización por parte de la Sala, en este caso el cargo no pudo ser legalizado debido a que como viene advertido el postulado había sido objeto de sentencia condenatoria por el mismo hecho y de procederse a una nueva condena se estaría ante la violación del principio del "*non bis in idem*" prohibición expresa que ha hecho la ley y la constitución nacional al respecto, de ahí que si la reparación se pretende por un delito que no fue susceptible de ser legalizado, será despachada desfavorablemente, advertido además que *"los obligados a reparar los daños ocasionados con la actividad criminal son los postulados declarados penalmente responsables en la administración de justicia por las Salas de Justicia y Paz en los casos que corresponda a dichos procesos"*.

HECHO NÚMERO 15[296]

Víctimas:	RAFAEL EDUARDO VILORIA MÉNDEZ
Fecha de Nacimiento:	7 de abril de 1940
Fecha de los Hechos:	11 de julio de 2003
Edad de muerte:	63 años
Expectativa de vida:	20.5 años (246 meses)
Tiempo entre hecho y sent:	246,67 meses
Delitos Legalizados:	Homicidio en persona protegida
Salario devengado:	Salario mínimo

DE LO SOLICITADO

VÍCTIMA	DOCUMENTOS APORTADOS	DAÑOS INMATERIALES	DAÑO MATERIALES	
		DAÑO MORAL	LUCRO CESANTE PRESENTE	LUCRO CESANTE FUTURO
	- Solicitud de incidente de reparación integral.	100 smlmv	$236.416.822	$162.695.441

[296] Audio I de marzo de 2023 - Tarde rec. 01:36:50, sesión de audiencia del día 15 de marzo de 2023.

Nombre IDALIDES MARGARITA ROMERO BERTEL Identificación C.C. No. 23.176.070 Fecha de nacimiento 6 de agosto de 1949 Compañera Permanente	- Copia de poder suscrito por Idalides Margarita Romero Bertel. - Copia de la cédula de ciudadanía de Idalides Margarita Romero Bertel. - Copia de la cédula de ciudadanía de Rafael Eduardo Viloria Méndez. -Copia del registro civil de defunción No. 04061641 a nombre de Rafael Eduardo Viloria Méndez. - Copia del acta de inspección y levantamiento de cadáver del señor Rafael Eduardo Viloria Méndez realizado por la Unidad de Fiscalía de Reacción Inmediata de Sincelejo, Sucre. - Copia del Oficio No. 010 de enero de 2004 de entrega de cadáver, expedida por la Unidad de Fiscalía de Reacción Inmediata de Sincelejo. - Copia de la Necropsia realizada al señor Rafael Eduardo Viloria Méndez por el Instituto Nacional de Medina Legal y Ciencias Forenses Seccional Sucre. - Copia de la declaración juramentada realizada en la Notaría Segunda de Sincelejo, por el señor Fernando Rangel Saucedo, quien manifiesta "*que hace aproximadamente 30 años que conocen de vista trato y comunicación a la señora Idalides Margarita Romero Bertel, y por este conocimiento se y les consta que desde que la conocí vivía en unión libre y bajo el mismo techo en forma permanente hasta el día de su fallecimiento el 11 de julio de 2003 con el señor Rafael Eduardo Viloria Méndez y de esa unión procrearon 6 hijos Vidal Antonio, David Rogelio, Marlenis Isabel, Aracelis del Carmen y Heris María Viloria Romero, y Reinaldo Rafael Romero Bertel (no registrado) , también declaro que el señor Rafael Eduardo tuvo dos hijos fuera del hogar de nombres Rafael Viloria Romero y María del Rosario Viloria Romero, y por ultimo manifiesto que la señora Idalides Margarita dependía económicamente de su compañero Rafael en todas*			

	sus necesidades ya que ella es ama de casa y nunca a trabajado". - Copia expedida por la Unidad Nacional de Fiscalías de Sincelejo, quien atendió a la señora Idalides Margarita Romero Bertel, como víctima quien manifestó carecer de apoderado por lo que fue remitida a la Defensoría del Pueblo Regional de Sucre, para que se le asignara un defensor que la representara en el proceso de Justicia y Paz. -Copia del expediente No. 35973 asignado al Fiscal 5 Seccional de Sincelejo por el delito homicidio del señor Rafael Eduardo Viloria Méndez -Sindicado del caso en averiguación. -Manual, Instructivo o Formato: Liquidaciones Materiales de Daños y Perjuicios en delitos de homicidio y desaparición forzada, realizada por el Perito Financiero, Álvaro Parra Hernández de la Defensoría del Pueblo			

DE LO RESUELTO POR LA SALA

<table>
<tr><th rowspan="2">VÍCTIMA</th><th>DAÑOS INMATERIALES</th><th colspan="2">DAÑO MATERIALES</th></tr>
<tr><th>DAÑO MORAL</th><th>LUCRO CESANTE PRESENTE</th><th>LUCRO CESANTE FUTURO</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Nombre
IDALIDES MARGARITA ROMERO BERTEL
Identificación
C.C. No. 23.176.070</td><td rowspan="2">La Sala, teniendo en cuenta lo descrito en el acápite "1.7.2.1.1.1.2. Montos a indemnizar por concepto de daño moral" de esta sentencia, reconoce por concepto de daño moral a la señora Idalides Margarita Romero Bertel, en calidad de compañera permanente de Rafael Eduardo Viloria Méndez, la suma equivalente a 100 smlmv, monto que se reconoce respecto</td><td>Teniendo en cuenta los criterios esbozados en el cuerpo de esta decisión, referidos a la dependencia económica y la expectativa de vida para efectos de calcular el lucro cesante causado, se reconoce en favor de la víctima Idalides Margarita Romero Bertel por este concepto $288.160.760.00 o 221.66 smlmv.</td><td>Al realizar el ejercicio liquidatorio por concepto de lucro cesante futuro y tomar la fecha de la liquidación de la sentencia (31 de enero de 2024), la fecha en que ocurrieron los hechos (11 de julio de 2003) y la fecha de nacimiento de la víctima directa Rafael Eduardo Viloria Méndez (7 de abril de 1940), éste ya había superado los años de vida esperados o probables por vivir que para este caso en concreto eran 20.5 años, tal como lo establece la Tabla de Mortalidad de Rentistas Hombres y Mujeres proferida por la Superintendencia Financiera de Colombia, Resolución No. 1555 de 2010, por lo cual no se reconoce la pretensión reparatoria por este caso en favor de la señora Idalides Margarita Romero Bertel.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Los cálculos indemnizatorios del lucro cesante reconocido se han hecho sobre la base del 50% del ingreso base de liquidación que le corresponde a la señora Idalides Margarita Romero Bertel en calidad de compañera permanente, toda vez que, conforme a la declaración juramentada realizada en la Notaría Segunda de Sincelejo, por el señor Fernando Rangel Saucedo, en la que da cuenta la dependencia económica de la señora Romero Bertel y su núcleo familiar, además se desprende que</td></tr>
</table>

	del delito de homicidio en persona protegida.	existen ocho hijos, por lo que el otro 50% debe quedar reservado para sus hijos para el momento en que estos hagan valer su derecho a la reparación en otro trámite incidental si así fuese su voluntad.

HECHO NÚMERO 16[297]

Víctimas: MANUEL GREGORIO HERAZO ALVIZ
Fecha de Nacimiento: 28 de agosto de 1959
Fecha de los Hechos: 4 de mayo de 2003
Edad de muerte: 44 años
Expectativa de vida: 37,1 años (445,20 meses)
Tiempo entre hecho y sent: 248.90 meses
Delitos Legalizados: Homicidio en persona protegida
Salario devengado: Salario mínimo

DE LO SOLICITADO

VÍCTIMAS	DOCUMENTOS APORTADOS	DAÑOS INMATERIALES	DAÑO MATERIALES	
		DAÑO MORAL	LUCRO CESANTE PRESENTE	LUCRO CESANTE FUTURO
Nombre ELIZABETH TAMARA GARAY Identificación C.C. No. 23.060.131 Fecha de nacimiento 24 de agosto de 1961 Compañera Permanente	- Solicitud de incidente de reparación integral. - Copia del Poder suscrito por Elizabeth Tamara Garay. - Copia del registro civil de defunción No. 04646183 a nombre de Manuel Gregorio Herazo Alviz. - Copia de la Inspección y Levantamiento de Cadáver del señor Manuel Gregorio Herazo Alviz, realizado por la Unidad de Fiscalía de Reacción Inmediata de Sincelejo, Sucre. - Copia del Protocolo de Necropsia realizada al señor Manuel Gregorio Herazo Alviz por el Instituto Nacional de Medina Legal y Ciencias Forenses Seccional Sucre.	100 smlmv	$ 253.857.783.00	$198.245.768.00

[297] Fecha en la que se expuso el cargo. Audio I de marzo de 2023 - Tarde rec. 01:42:30, sesión de audiencia del día 15 de marzo de 2023.

	- Copia de la declaración juramentada realizada en la Notaría Tercera de Sincelejo, por los señores Jorge Enrique Guzmán Martínez y Janny Yudis Gómez Romero, quienes manifestaron que conocen a Elizabeth Tamara Garay desde hace más de 20 años y de ese conocimiento que de ella tienen saben y les consta que convivió en unión libre y hasta el mismo día de su fallecimiento con Manuel Gregorio Herazo Alviz y de esa unión nació una hija de nombre Marinellya Herazo Tamara, además, indicaron que les consta que ella y su hija dependían económicamente del finado. - Copia de certificación expedida por la Fiscal Séptima Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Sincelejo, en la que se hace registra que a petición de la señora Elizabeth Tamara Garay, la Fiscalía Primera Seccional de Sincelejo, Sucre, inició investigación previa radicada bajo el No. 32.682 por el delito de homicidio agravado de que fue víctima el señor Manuel Gregorio Herazo Alvis, hechos ocurridos el día 4 de mayo de 2003 cuando salía del corregimiento el Cerrito de la Palma, jurisdicción de Sincelejo en el vehículo de propiedad del señor Juan Vergara, según informe de la Policía Judicial de la SIJIN, de fecha 11 de junio de 2003, los presuntos autores del hecho fueron miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC. - Copia expedida por la Unidad Nacional de Fiscalías de Sincelejo, quien atendió a la señora Elizabeth Tamara Garay, como víctima ante la Unidad de Justicia y Paz quien manifestó carecer de apoderado por lo que fue remitida a la Defensoría del Pueblo Regional de Sucre, para que se le asignase un defensor que la represente en el proceso de Justicia y Paz. - Copia de recorte del Periódico El Meridiano de Sincelejo, donde se registra la noticia del homicidio del señor Manuel Gregorio Herazo. -Manual, Instructivo o Formato: Liquidaciones Materiales de Daños y Perjuicios en delitos de homicidio y desaparición			

	forzada, realizada por el Perito Financiero, Álvaro Parra Hernández de la Defensoría del Pueblo			

DE LO RESUELTO POR LA SALA

VÍCTIMAS	**DAÑOS INMATERIALES**	**DAÑO MATERIALES**	
	DAÑO MORAL	**LUCRO CESANTE PRESENTE**	**LUCRO CESANTE FUTURO**
Nombre ELIZABETH TAMARA GARAY Identificación C.C. No. 23.060.131	La Sala, teniendo en cuenta lo descrito en el acápite *"1.7.2.1.1.1.2. Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, reconoce por concepto de daño moral a Elizabeth Tamara Garay, en calidad de compañera permanente de Manuel Gregorio Herazo Alviz, la suma equivalente a 100 smlmv, monto que se reconoce respecto del delito de homicidio en persona protegida.	Teniendo en cuenta los criterios esbozados en el cuerpo de esta decisión, referidos a la dependencia económica y la expectativa de vida para efectos de calcular el lucro cesante presente, se reconoce en favor de la víctima Elizabeth Tamara Garay por este concepto la suma de $294.022.150.00 o 226.17 smlmv.	Conforme a lo registrado en el acápite preliminar acerca de la forma en que se liquida el lucro cesante futuro y la respectiva fórmula para efectuar dicho cálculo, se reconoce en favor de la víctima Elizabeth Tamara Garay la suma de $81.990.666.00 o 63 smlmv.
		Los cálculos indemnizatorios del lucro cesante se hicieron sobre la base del 50% del ingreso base de liquidación que le corresponde a la señora Elizabeth Tamara Garay en calidad de compañera permanente, toda vez que, conforme a la declaración juramentada realizada en la Notaría Tercera de Sincelejo, por los señores Jorge Enrique Guzmán Martínez y Janny Yudis Gómez Romero, en la que dan cuenta la dependencia económica de la señora Tamara Garay y su núcleo familiar, además se desprende que existe una hija del víctima fallecida de nombre Marinellya Herazo Tamara, por lo que el otro 50% debe quedar reservado para su hija u otros que aparecieses para el momento en que esta haga valer su derecho a la reparación en otro trámite incidental si así fuese su voluntad.	

HECHO NÚMERO 16[298]

Víctimas:	ADALBERTO JOSÉ NAIZZIR ÁLVAREZ
Fecha de Nacimiento:	3 de julio de 1973
Fecha de los Hechos:	4 de mayo de 2003
Edad de muerte:	30 años
Expectativa de vida:	50,3 años (603,60 meses)
Tiempo entre hecho y sent:	248.90 meses
Delitos Legalizados:	Homicidio en persona protegida
Salario devengado:	Salario mínimo

[298] Fecha en la que se expuso el cargo. Audio I de 15 de marzo de 2023 - Tarde rec. 01:47:34, sesión de audiencia del día 15 de marzo de 2023.

DE LO SOLICITADO

VÍCTIMAS	DOCUMENTOS APORTADOS	DAÑOS INMATERIALES	DAÑO MATERIALES	
		DAÑO MORAL	LUCRO CESANTE PRESENTE	LUCRO CESANTE FUTURO
Nombre AURA DEL CARMEN ÁLVAREZ DE NAIZZIR Identificación C.C. No. 22.976.822 Fecha de nacimiento no registra. Madre (Fallecida)	- Solicitud de incidente de reparación integral. - Copia del Poder suscrito por Aura del Carmen Álvarez de Naizzir a la Doctora Rosalba Cañavera Zapata. - Copia de la sustitución de Poder de la Doctora Rosalba Cañavera Zapata al doctor Alfonso Pérez Guzmán. - Documento en el que el doctor Alfonso Pérez Guzmán quien sustituye poder conferido por la señora Aura del Carmen Álvarez de Naizzir al doctor Emerson Rocha Osorio. - Copia del registro civil de nacimiento No. 1793027 de la víctima directa Adalberto Jose Naizzir Álvarez. - Copia del registro civil de defunción No. 04061601 a nombre de Adalberto Jose Naizzir Álvarez. - Copia del acta de Inspección y Levantamiento de Cadáver del señor Adalberto Jose Naizzir Álvarez realizado por la Unidad de Fiscalía de Reacción Inmediata de Sincelejo, Sucre. - Copia expedida por la Unidad Nacional de Fiscalías de Sincelejo, quien atendió a la señora Aura del Carmen Álvarez de Naizzir, como víctima ante la Unidad de Justicia y Paz quien manifestó carecer de apoderado por lo que fue remitida a la Defensoría del Pueblo Regional de Sucre, para que se le asignase un defensor que la represente en el proceso de Justicia y Paz. -Copia del Registro de Orientación y Asesorías a las Victimas en el Proceso de Justicia y Paz, realizado por la Defensoría del Pueblo a la señora Aura del Carmen Álvarez de Naizzir. - Manual, Instructivo o Formato: Liquidaciones Materiales de Daños y Perjuicios en delitos de homicidio y desaparición forzada, realizada por el Perito Financiero Álvaro Parra Hernández de la Defensoría del Pueblo	100 smlmv	$ 253.857.783.00	$191.419.249.00
Nombre	- Copia del Poder suscrito por Bilma Estela Naizzir Álvarez.	50 smlmv		

BILMA ESTELA NAIZZIR ÁLVAREZ Identificación C.C. No. 22.977.970 Fecha de nacimiento 6 de enero 1967 Hermana	- Copia de la cedula de ciudadanía a nombre de Bilma Estela Naizzir Álvarez. - Copia del registro civil de nacimiento No. 1786951 a nombre de Bilma Estela Naizzir Álvarez. - Certificación expedida por el Grupo Interno de Trabajo de Orientación Registro y Asignación de Casos de Victimas en el Marco de Justicia Transicional, en la que se registra que la señora Bilma Estela Naizzir Álvarez, quien reportó un hecho por el delito de homicidio, siendo víctima directa Adalberto Jose Naizzir Álvarez sucedido el 4 de mayo de 2003 en el corregimiento Cerrito de La Palma en Sincelejo, Sucre, le correspondió el registro SIJYP No. 633301, asignado a la Fiscalía 12 de Apoyo Unidad Nacional para la Justicia y la Paz en la ciudad de Barranquilla. - Copia del acta de la declaración juramentada presentada en la Notaría Segunda de Sincelejo, por la señora Bilma Estela Naizzir Álvarez, quien manifestó que el 4 de mayo de 2003, su hermano Adalberto Jose Naizzir Álvarez fue asesinado en Cerrito de la Palma jurisdicción, del municipio de Sincelejo, Sucre, por miembro de las AUC, asesinato selectivo en el marco del conflicto armado, situación que le trajo sufrimiento a toda la familia a su madre y hermanos Giovanna Naizzir, Bibiana Naizzir, Juan Carlos Naizzir y a ella, que el duelo les ha causado un trauma por la forma como ocurrieron los hechos dolor y angustias que se han visto reflejados a lo largo del tiempo al punto que su señora madre falleció a causa de ese dolor por haber caído en depresión lo que se hizo extenso a todos, que han tratado de ser resilientes para ir superando en este suceso dialogar con psicólogos el cual ha sido lenta la recuperación a este trauma.		El abogado representante de víctima no presentó solicitudes indemnizatorias por estos conceptos.
Nombre BIBIANA DEL ROSARIO NAIZZIR ÁLVAREZ	- Copia del Poder suscrito por Bibiana del Rosario Naizzir Álvarez. - Copia de la cedula de ciudadanía a nombre de Bibiana del Rosario Naizzir Álvarez.	50 smlmv	

Identificación C.C. No. 22.977.771 Fecha de nacimiento 27 de mayo de 1964 Hermana	- Copia del Registro Civil de Nacimiento No. 1793026 a nombre de Bibiana del Rosario Naizzir Álvarez. - Copia de documento expedido por el Grupo Interno de Trabajo de Orientación Registro y Asignación de Casos de Victimas en el Marco de Justicia Transicional, en el que certifica que la señora Bibiana Del Rosario Naizzir Álvarez, quien registró un hecho por el delito de homicidio, siendo víctima directa Adalberto José Naizzir Álvarez sucedido el 4 de mayo de 2003 en el corregimiento Cerrito de La Palma en Sincelejo, Sucre, que le correspondió el registro SIJYP No. 633299, asignado a la Fiscalía 12 de Apoyo Unidad Nacional para la Justicia y la Paz en la ciudad de Barranquilla. - Copia del acta de la declaración juramentada presentada en la Notaría Segunda de Sincelejo, por la señora Bibiana del Rosario Naizzir Álvarez, quien manifestó que el 4 de mayo de 2003, su hermano Adalberto Jose Naizzir Álvarez fue asesinado en Cerrito de la Palma jurisdicción, del municipio de Sincelejo, Sucre, por miembro de las AUC, asesinato selectivo en el marco del conflicto armado, situación que le trajo sufrimiento a toda la familia a su madre y hermanos Giovanna Naizzir, Bibiana Naizzir, Juan Carlos Naizzir y a ella, que el duelo les ha causado un trauma por la forma como ocurrieron los hechos dolor y angustias que se han visto reflejados a lo largo del tiempo al punto que su señora madre falleció a causa de ese dolor por haber caído en depresión lo que se hizo extenso a todos, que han tratado de ser resilientes para ir superando en este suceso dialogar con psicólogos el cual ha sido lenta la recuperación a este trauma.		
Nombre JUAN CARLOS NAIZZIR ÁLVAREZ Identificación C.C. No .92.127.792 Fecha de nacimiento	- Copia del Poder suscrito por Juan Carlos Naizzir Álvarez. - Copia de la cedula de ciudadanía a nombre de Juan Carlos Naizzir Álvarez. - Copia del registro civil de nacimiento No. 10705208 a nombre de Juan Carlos Naizzir Álvarez.	50 smlmv	

9 de enero de 1972 Hermano	- Copia de escrito expedido por el Grupo Interno de Trabajo de Orientación Registro y Asignación de Casos de Victimas en el Marco de Justicia Transicional, Certifica que la señora Juan Carlos Naizzir Álvarez, quien registró un hecho por el delito de homicidio, siendo víctima directa Adalberto Jose Naizzir Álvarez hecho sucedido el 4 de mayo de 2003 en el corregimiento Cerrito de La Palma en Sincelejo, Sucre, que le correspondió el registro SIJYP 65455, asignado a la Fiscalía 12 de Apoyo Unidad Nacional para la Justicia y la Paz en la ciudad de Barranquilla. - Copia de declaración jurada extraprocesal No. 0000754 presentada en la Notaría Única del Circulo de Maicao, Guajira, por el señor Juan Carlos Naizzir Álvarez, quien manifestó que el 4 de mayo de 2003, su hermano Adalberto Jose Naizzir Álvarez fue asesinado en Cerrito de la Palma jurisdicción, del municipio de Sincelejo, Sucre, por miembro de las AUC, asesinato selectivo en el marco del conflicto armado, situación que le trajo sufrimiento a toda la familia a su madre y hermanos Giovanna Naizzir, Bibiana Naizzir, Juan Carlos Naizzir y a este, que el duelo les ha causado un trauma por la forma como ocurrieron los hechos dolor y angustias que se han visto reflejados a lo largo del tiempo al punto que su señora madre falleció a causa de ese dolor por haber caído en depresión lo que se hizo extenso a todos, que han tratado de ser resilientes para ir superando en este suceso dialogar con psicólogos el cual ha sido lenta la recuperación a este trauma.		
Nombre GIOVANNA ELAINES NAIZZIR ÁLVAREZ Identificación C.C. No .22.978.127 Fecha de nacimiento 12 de julio de 1968 Hermana	- Copia del Poder suscrito por Giovanna Elaines Naizzir Álvarez. - Copia de la cedula de ciudadanía a nombre de Giovanna Elaines Naizzir Álvarez. - Copia del Registro Civil de Nacimiento No. 5372620 a nombre de Giovanna Elaines Naizzir Álvarez. - Documento expedido por el Grupo Interno de Trabajo de Orientación Registro y Asignación de Casos de Victimas en el	50 smlmv	

	Marco de Justicia Transicional, Certifica que la señora Giovanna Elaines Naizzir Álvarez, quien registró un hecho por el delito de homicidio, siendo víctima directa Adalberto Jose Naizzir Álvarez hecho ocurrido el 4 de mayo de 2003 en el corregimiento Cerrito de La Palma en Sincelejo, Sucre, que le correspondió el registro SIJYP No. 724122, asignado a la Fiscalía 12 de Apoyo Unidad Nacional para la Justicia y la Paz en la ciudad de Barranquilla. - Escrito expedido por el Grupo Interno de Trabajo de Orientación Registro y Asignación de Casos de Victimas en el Marco de la Justicia Transicional, quienes atendieron a la señora Giovanna Elaines Naizzir Álvarez quien les manifestó carecer de apoderado por lo que fue remitida a la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Barranquilla, para que se le asignase un defensor que la represente en el proceso de Justicia y Paz. - Copia de declaración juramentada para fines extraprocesales No. 1471 rendida ante la Notaría Primera de Soledad, Atlántico, por la señora Giovanna Elaines Naizzir Álvarez quien manifestó que el 4 de mayo de 2003, su hermano Adalberto Jose Naizzir Álvarez fue asesinado en Cerrito de la Palma jurisdicción, del municipio de Sincelejo, Sucre, por miembro de las AUC, asesinato selectivo en el marco del conflicto armado, situación que le trajo sufrimiento a toda la familia a su madre y hermanos Giovanna Naizzir, Bibiana Naizzir, Juan Carlos Naizzir y a ella, que el duelo les ha causado un trauma por la forma como ocurrieron los hechos dolor y angustias que se han visto reflejados a lo largo del tiempo al punto que su señora madre falleció a causa de ese dolor por haber caído en depresión lo que se hizo extenso a todos, que han tratado de ser resilientes para ir superando en este suceso dialogar con psicólogos el cual ha sido lenta la recuperación a este trauma.		

DE LO RESUELTO POR LA SALA

VÍCTIMAS	DAÑOS INMATERIALES	DAÑO MATERIALES	
	DAÑO MORAL	LUCRO CESANTE PRESENTE	LUCRO CESANTE FUTURO
Nombre AURA DEL CARMEN ÁLVAREZ DE NAIZZIR[299] Identificación C.C. No. 22.976.822	La Sala, teniendo en cuenta lo descrito en el acápite *"1.7.2.1.1.1.2. Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, reconoce por concepto de daño moral a Aura del Carmen Álvarez de Naizzir en calidad de madre de Adalberto José Naizzir Álvarez, la suma equivalente a 100 smlmv. Ahora bien, en desarrollo del incidente de reparación integral, el señor abogado representante de víctimas no adujo en ningún momento que la madre de Adalberto José Naizzir Álvarez, señora Aura del Carmen Álvarez de Naizzir, se encontraba fallecida, pero lo cierto es que en la carpeta del trámite incidental que se allegó a este diligenciamiento reposan las declaraciones juramentadas vertidas por los señores Bilma Estela Naizzir Álvarez, Bibiana del Rosario Naizzir Álvarez, Juan Carlos Naizzir Álvarez y Giovanna Elaines Naizzir Álvarez hermanos de la víctima directa e hijos de la señora Aura del Carmen Álvarez de Nizzir, quienes manifestaron que su señora madre había fallecido	Advertido lo anterior, por una parte, la Sala no reconoce las indemnizaciones por los daños materiales solicitados por el abogado en favor de Aura del Carmen Álvarez de Naizzir, en tanto que no se demostró por absolutamente ningún medio probatorio que esta tuvieran alguna relación de dependencia económica con su hijo fallecido Adalberto José Naizzir Álvarez, a razón, por ejemplo, de un caso de necesidad o invalidez que no le permitiera valerse por sus propios medios o ejercer alguna actividad económica, y ni siquiera a manera de expresiones se dio cuenta de ello ni por ella misma ni por terceros sin que le esté dado a la Sala acudir a especulaciones o meras suposiciones al respecto para suplir las falencias probatorias y tampoco que la víctima directa fuera su único hijo, lo que en principio descarta la existencia de una dependencia económica absoluta de la madre con relación a su hijo fallecido. El abogado representante de víctimas no brindó a la Magistratura la fundamentación correspondiente dirigida a determinar en qué consistieron los daños materiales alegados, y a pesar de remitir al respectivo informe contable a efectos de precisar las sumas correspondientes a los lucros cesantes, lo cierto es que en ese documento únicamente se esgrimen unos determinados valores sin que ahí se indique cuáles fueron los criterios que se tuvieron en cuenta para efectuar el cálculo, hay un desconocimiento total en este diligenciamiento de actividad económica comprobada a la cual se pudo haber dedicado en vida para cubrir siquiera su propio sustento la víctima directa, desconoce la Sala en que datos específicos respecto de daños materiales en concreto causados pudo haberse basado el señor Perito Financiero Álvaro Parra Hernández de la Defensoría del Pueblo, allegado al diligenciamiento el cual por sí solo no puede constituir la prueba de que el daño se causó, sino que ello remite al ejercicio contable de cuantías que se estiman pero sin la determinación previa o especificación de los daños en concreto por cualquier medio probatorio, así lo hemos reiterado pues no existe tarifa legal de prueba ni siquiera frente a estos conceptos.	

[299] En desarrollo de la audiencia del trámite incidental el señor Fiscal del caso indicó que una vez consultado el sistema de información de la Dirección Nacional de Justicia Transicional para efecto de establecer cuáles son las víctimas que se encuentran reportando el hecho del homicidio de Adalberto José Naizzir Álvarez en dicho registro no se encuentra reportada la señora Aura del Carmen Álvarez de Naizzir, por lo que dejó a la Sala establecer si acepta a esta persona o no como víctima en el presente incidente de reparación integral, en razón a las manifestaciones del representante del ente acusador esta Sala encuentra que están dados los presupuestos mínimos para que la señora Aura del Carmen Álvarez de Naizzir funja como víctima indirecta del presente diligenciamiento pues obra con claridad en este el registro civil de nacimiento de la víctima directa Adalberto José Naizzir Álvarez en el que se puede constatar que su madre es la referida señora Aura del Carmen Álvarez de Naizzir, además, reposa documento expedido por la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz de Sincelejo, quienes atendieron directamente la señora Aura del Carmen Álvarez de Naizzir, quien manifestó carecer de apoderado por lo cual fue remitida a la Defensoría del Pueblo Regional de Sucre, para que se le asignara
un defensor que la represente en el proceso de Justicia y Paz e indican su número de registro SIJYP No. 65455, también obra copia del Registro de Orientación y Asesorías a las Victimas en el Proceso de Justicia y Paz, realizado por la Defensoría del Pueblo a la señora Aura del Carmen Álvarez de Naizzir.

	producto de la depresión que le causó la muerte de su hijo, empero, no obra en el diligenciamiento elemento de prueba que permita confirmar dicho suceso, realmente a la Sala le hubiese presentado o advertido por parte de la representación de víctimas o por cualquier medio también por parte del ente investigador que se presentase algún elemento material de prueba de la muerte de esta señora, por lo que no obstante las declaraciones que hay al respecto subsiste la duda respecto de que ello haya sido evidentemente así, lo que se advierte no es que se esté afirmando que la señora no haya fallecido solo que no milita ningún elemento material probatorio como registro de defunción u otro análogo que permita establecer el hecho muerte como tal, lo cual no obsta para que, de ser así, como presuntamente al parecer lo fue el reconocimiento indemnizatorio que ha efectuado la Sala en su favor este reconocimiento haga parte del respectivo patrimonio herencial que deba ser definido en un proceso de sucesión, por eso se dejan a salvo los derechos que puedan devenirse en este caso hasta que sea aclarada la situación y conforme corresponda en derecho.	Las pérdidas materiales deben especificarse de lo contrario la afectación no aparece acreditada con claridad porque aquí con solo el peritazgo, se reitera no está demostrada la afectación material sino la cuantía con base en cálculos y formulas contables lo que no suple la necesidad de especificar en qué consistieron esos daños y para el caso específico las pérdidas materiales, sino por qué se consideran causadas, cómo se demuestran, lo cual no aparecen demostrados en el incidente. En consecuencia, ha de indicarse que cualquier tipo de perjuicio de esta índole debe acompañarse de la prueba o pruebas a si sean mínimas pues aún bajo parámetros de flexibilidad e indulgencias, ello no elimina a la obligación de presentar algún soporte frente al reconocimiento pretendido.
Nombre BILMA ESTELA NAIZZIR ÁLVAREZ Identificación C.C. No. 22.977.970	La Sala, teniendo en cuenta lo descrito en el acápite *"1.7.2.1.1.1.2. Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, reconoce por concepto de daño moral a Bilma Estela Naizzir Álvarez, Bibiana Del Rosario Naizzir Álvarez, Juan Carlos Naizzir Álvarez y Giovanna Elaines Naizzir Álvarez, en calidad de hermanos de Adalberto José Naizzir Álvarez, la suma equivalente a 50 smlmv para cada uno de	n/a
Nombre BIBIANA DEL ROSARIO NAIZZIR ÁLVAREZ Identificación C.C. No. 22.977.771		

Nombre JUAN CARLOS NAIZZIR ÁLVAREZ Identificación C.C. No. 92.127.792	ellos, monto que se reconoce respecto del delito de homicidio en persona protegida.	
Nombre GIOVANNA ELAINES NAIZZIR ÁLVAREZ Identificación C.C. No. 22.978.127		

HECHO NÚMERO 21[300]

Víctimas: YADIRA ESTHER MENDOZA PUCHE
Fecha de Nacimiento: 16 de septiembre de 1954
Fecha de los Hechos: 28 de febrero de 2003
Delitos Legalizados: Deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil.
Salario devengado: Salario mínimo

DE LO SOLICITADO

VÍCTIMAS	**DOCUMENTOS APORTADOS**	**DAÑOS INMATERIALES** **DAÑO MORAL**
Nombre YADIRA ESTHER MENDOZA PUCHE Identificación C.C. No. 34.975.047 Fecha de nacimiento 16 de septiembre de 1954 Reportante	- Solicitud de incidente de reparación integral. - Copia del Poder suscrito por Yadira Esther Mendoza Puche. - Copia de la Cedula de Ciudadanía de la señora Yadira Esther Mendoza Puche. - Registro de hechos atribuibles a grupos organizados al margen de la ley de Yadira Esther Mendoza Puche.	50 smlmv

DE LO RESUELTO POR LA SALA

[300] Fecha en la que se expuso el cargo. Audio I de marzo 16 de 2023 – Mañana de rec. 00:11:20, sesión de audiencia del día 16 de marzo de 2023.

VÍCTIMAS	DAÑOS INMATERIALES DAÑO MORAL
Nombre YADIRA ESTHER MENDOZA PUCHE Identificación C.C. No. 34.975.047	La Sala, teniendo en cuenta lo descrito en el acápite "*1.7.2.1.1.1.2. Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, reconoce por concepto de daño moral a Yadira Esther Mendoza Puche, la suma equivalente a 50 smlmv, monto que se reconoce en calidad de víctima directa reportante del delito de desplazamiento forzado padecido en razón al homicidio de su esposo Carlos Emilio Dajud Casas.

HECHO NÚMERO 22[301]

Víctimas: JULIA BERRIO TERÁN
Fecha de Nacimiento: 5 de enero de 1967
Fecha de los Hechos: 12 de agosto de 2003
Delitos Legalizados: Deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil.
Salario devengado: Salario mínimo

DE LO SOLICITADO

VÍCTIMAS	DOCUMENTOS APORTADOS	DAÑOS INMATERIALES	DAÑO MATERIALES	
		DAÑO MORAL	DAÑO EMERGENTE	LUCRO CESANTE PRESENTE
Nombre JULIA BERRIO TERÁN Identificación C.C. No. 64.518.260 Fecha de nacimiento 5 de enero de 1967 Reportante	- Solicitud de incidente de reparación integral. - Copia del poder suscrito por Julia Berrio Terán. - Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Julia Berrio Terán. - Copia de escrito expedido por la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia Transicional con sede en la ciudad de Sincelejo, Sucre, los cuales atendieron a la señora Julia Berrio Terán, quien les manifestó no encontrarse en condiciones económicas de contratar un apoderado para que la represente, en razón de lo anterior expuesto fue remitida a la Defensoría del Pueblo de Sincelejo, para que se le asignase un defensor público que la representara en el proceso de Justicia Transicional por el delito de desplazamiento forzado. - Copia de declaración juramentada presentada ante el Notario Tercero de la ciudad de Sincelejo, Sucre, por la señora Julia Berrio	50 smlmv	$7.644.197	$ 6.733.949

[301] Fecha en la que se expuso el cargo. Audio I de marzo 16 de 2023 – Mañana de rec. 00:18:55, sesión de audiencia del día 16 de marzo de 2023.

	Terán en la que indicó: "*Manifiesta bajo la gravedad del juramento que en el mes de agosto del año 2003 junto con mi núcleo familiar fuimos desplazados víctima de la violencia desde la vereda San Jorge corregimiento La Peñate hacia la ciudad de Sincelejo, dejando todas nuestras pertenencias: como una hectárea de tierra con cultivo de yuca, ñame y ajíes, animales de corral, dos cerdos gallinas ponedoras, un burro."* - Manual, Instructivo o Formato: Liquidaciones Materiales de Daños y Perjuicios en delitos de Desplazamiento, Hurto y Secuestro, realizada por el Perito Financiero, Álvaro Parra Hernández de la Defensoría del Pueblo			

DE LO RESUELTO POR LA SALA

VÍCTIMA	**DAÑOS INMATERIALES**	**DAÑOS MATERIALES**	
	DAÑO MORAL	**DAÑO EMERGENTE**	**LUCRO CESANTE PRESENTE**
Nombre JULIA BERRIO TERÁN Identificación C.C. No. 64.518.260	La Sala, teniendo en cuenta lo descrito en el acápite "*1.7.2.1.1.1.2. Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, reconoce por concepto de daño moral a Julia Berrio Terán, la suma equivalente a 50 smlmv, monto que se reconoce en calidad de víctima directa reportante del delito de desplazamiento forzado.	La Sala tiene en cuenta como bienes objeto de indemnización por concepto de daño emergente: 1 hectárea cultivada de yuca, ñame y ají, 2 cerdos y un burro, teniendo en cuenta para tal efecto la declaración juramentada presentada ante el Notario Tercero de la ciudad de Sincelejo, Sucre, por la señora Julia Berrio Terán aportada en la carpeta del trámite incidental, por manera que, en consideración a la tabla baremo establecida jurisprudencialmente, el monto reconocido por este concepto es por valor de $6.405.036.00 o 4.93 smlmv.	La Sala reconoce el valor de $14.625.000.00 o 11,25 smlmv, en razón a lo indicado en el acápite "*1.6.2.1.2.2.1. Acreditación*" de esta decisión, bajo el entendido que las víctimas de desplazamiento forzado han requerido contar con un periodo razonable de hasta un (1) año para reestablecer sus condiciones socioeconómicas, considerando para tal efecto que una persona en el territorio colombiano devenga por lo menos un salario mínimo legal mensual vigente para su congrua subsistencia, sin que la representación judicial hubiese demostrado que la víctima dejó de percibir ingresos adicionales a causa del hecho victimizante. Lo anterior teniendo en cuenta, además, que en el trámite incidental no se demostró actividad económica concreta alguna que hubiese desempeñado la víctima al momento de la afectación y que los ingresos que hubiesen dejado de percibir correspondan a la suma pretendida.

HECHO NÚMERO 26[302]

Víctimas: NEILA MARÍA CÁRDENAS PATERNINA
Fecha de Nacimiento: 18 de diciembre de 1970
Fecha de los Hechos: 15 de agosto de 2003
Delitos Legalizados: Deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil.
Salario devengado: Salario mínimo

DE LO SOLICITADO

VÍCTIMAS	DOCUMENTOS APORTADOS	DAÑOS INMATERIALES	DAÑO MATERIALES	
		DAÑO MORAL	DAÑO EMERGENTE	LUCRO CESANTE PRESENTE
Nombre NEILA MARÍA CÁRDENAS PATERNINA Identificación C.C. No. 64.567.672 Fecha de nacimiento 18 de diciembre de 1970 Reportante	- Solicitud de incidente de reparación integral. - Copia del poder suscrito por Neila María Cárdenas Paternina. - Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Neila María Cárdenas Paternina. - Copia de la declaración presentada ante el Notario Segunda de la ciudad de Sincelejo, Sucre, por la señora Neila María Cárdenas Paternina. "*Manifiesta bajo la gravedad del juramento que salí desplazada de Sincelejo, Sucre de la Vereda San Jorge corregimiento La Peñate el 15 de mes de agosto de 2003 dejando abandonado muebles y enseres de la casa, también animales (menos vaca). Así lo manifiesto bajo la gravedad del juramento."* - Copia expedida el 19 de septiembre de 2016 por la Unidad Nacional para la Justicia Transicional con sede en la ciudad de Sincelejo, Sucre, atendió a la señora Neila María Cárdenas Paternina, quien manifestó no encontrarse en condiciones económicas de contratar un apoderado para que la represente. En razón de lo anterior expuesto fue remitida a la Defensoría del Pueblo Regional Sucre, para que se le asignase su defensor público en el proceso de Justicia Transicional por el delito de Desplazamiento Forzado.	50 smlmv	$3.483.836.00	$ 6.797.817.00

[302] Fecha en la que se expuso el cargo. Audio I de marzo 16 de 2023 – Mañana de rec. 00:23:59, sesión de audiencia del día 16 de marzo de 2023.

	- Copia de la denuncia presentada ante la Policía Judicial por la señora Neila María Cárdenas Paternina, que relata los hechos de su desplazamiento el día 12 de agosto de 2003. - Manual, Instructivo o Formato: Liquidaciones Materiales de Daños y Perjuicios en delitos de desplazamiento, Hurto y Secuestro, realizada por el Perito Financiero, Álvaro Parra Hernández de la Defensoría del Pueblo			

DE LO RESUELTO POR LA SALA

VÍCTIMAS	**DAÑOS INMATERIALES**	**DAÑOS MATERIALES**	
	DAÑO MORAL	**DAÑO EMERGENTE**	**LUCRO CESANTE PRESENTE**
Nombre NEILA MARÍA CÁRDENAS PATERNINA Identificación C.C. No. 64.567.672	La Sala, teniendo en cuenta lo descrito en el acápite "*1.7.2.1.1.1.2. Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, reconoce por concepto de daño moral a Neila María Cárdenas Paternina, la suma equivalente a 50 smlmv, monto que se reconoce en calidad de víctima directa reportante del delito de desplazamiento forzado.	La Sala tiene en cuenta como bienes objeto de indemnización por concepto de daño emergente: 2 hectáreas cultivadas, 8 cerdos, 110 gallinas, 12 patos y 10 pavos, teniendo en cuenta para tal efecto el reporte realizado por Neila María Cárdenas Paternina en el formato de registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley, de fecha 19 de septiembre de 2016, por manera que, en consideración a la tabla baremo establecida jurisprudencialmente[303], el monto reconocido por este concepto es por valor de $13.032.864 o 10,03 smlmv.	La Sala reconoce el valor de $14.625.000.00 o 11,25 smlmv, en razón a lo indicado en el acápite *"1.6.2.1.2.2.1. Acreditación"* de esta decisión, bajo el entendido que las víctimas de desplazamiento forzado han requerido contar con un periodo razonable de hasta un (1) año para reestablecer sus condiciones socioeconómicas, considerando para tal efecto que una persona en el territorio colombiano devenga por lo menos un salario mínimo legal mensual vigente para su congrua subsistencia, sin que la representación judicial hubiese demostrado que la víctima dejó de percibir ingresos adicionales a causa del hecho victimizante.

HECHO NÚMERO 27[304]

Víctimas: EDILMA GUERRA CLEMENTE
Fecha de Nacimiento: 28 de diciembre de 1965
Fecha de los Hechos: 15 de agosto de 2003
Delitos Legalizados: Deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil.

[303] Tabla elaborada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, fallo de segunda instancia, radicado 34547.
[304] Fecha en la que se expuso el cargo. Audio I de marzo 16 de 2023 – Mañana de rec. 00:28:13, sesión de audiencia del día 16 de marzo de 2023.

Salario devengado: Salario mínimo

DE LO SOLICITADO

VÍCTIMAS	DOCUMENTOS APORTADOS	DAÑOS INMATERIALES DAÑO MORAL
Nombre EDILMA GUERRA CLEMENTE Identificación C.C. No. 23.220.301 Fecha de nacimiento 28 de diciembre de 1965 Reportante	- Solicitud de incidente de reparación integral. - Copia del poder suscrito por Edilma Guerra Clemente. - Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Edilma Guerra Clemente. - Copia expedida el 20 de septiembre de 2016 por la Unidad Nacional para la Justicia Transicional con sede en la ciudad de Sincelejo, Sucre, en la que se registra que atendieron a la señora Edilma Guerra Clemente, quien manifestó no encontrarse en condiciones económicas de contratar un apoderado para que la represente, en razón de lo anterior expuesto fue remitida a la Defensoría del Pueblo de Sincelejo, para que se le asignase su defensor público que la representara en el proceso de Justicia Transicional por el delito de desplazamiento forzado.	50 smlmv

DE LO RESUELTO POR LA SALA

VÍCTIMAS	DAÑOS INMATERIALES DAÑO MORAL
Nombre EDILMA GUERRA CLEMENTE Identificación C.C. No. 23.220.301	La Sala, teniendo en cuenta lo descrito en el acápite "*1.7.2.1.1.1.2. Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, reconoce por concepto de daño moral a Edilma Guerra Clemente, la suma equivalente a 50 smlmv, monto que se reconoce en calidad de víctima directa reportante del delito de desplazamiento forzado.

HECHO NÚMERO 29[305]

Víctimas: OROZMAN SEGUNDO PÉREZ GUZMÁN
Fecha de Nacimiento: 14 de junio de 1975
Fecha de los Hechos: 11 de octubre de 2003
Delitos Legalizados: Deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil.
Salario devengado: Salario mínimo

[305] Fecha en la que se expuso el cargo. Audio I de marzo 16 de 2023 – Mañana de rec. 00:31:03, sesión de audiencia del día 16 de marzo de 2023.

DE LO SOLICITADO

VÍCTIMAS	DOCUMENTOS APORTADOS	DAÑOS INMATERIALES	DAÑO MATERIALES	
		DAÑO MORAL	DAÑO EMERGENTE	LUCRO CESANTE PRESENTE
Nombre OROZMAN SEGUNDO PÉREZ GUZMÁN Identificación C.C. No. 92.189.942 Fecha de nacimiento 14 de junio de 1975 Reportante	- Solicitud de incidente de reparación integral. - Copia del poder suscrito por Orozman Segundo Pérez Guzmán. - Copia de la cedula de ciudadanía del señor Orozman Segundo Pérez Guzmán. - Copia de la declaración presentada ante el Notario Primero de la ciudad de Sincelejo, Sucre, por el señor Orozman Segundo Pérez Guzmán. "*Manifiesta bajo la gravedad del juramento. Que el 11 de octubre de 2003 que en el mes de agosto del año 2003, fui amenazado de muerte y desplazado de esta ciudad de Sincelejo en la cual laboraba como vendedor de planes telefónicos y teléfonos que tuve que abandonar la ciudad dejando todas mis pertenencias personales que son: 10 teléfonos móviles avaluados en $3.000.000.00 a la fecha más electrodomésticos como nevera, televisor, computador, estufa, muebles con camas avaluadas en $ 6.000.000.00 a la fecha más un efectivo de $ 3.000.000.00 ."* - Copia expedida por la Unidad Nacional para la Justicia Transicional con sede en la ciudad de Sincelejo, Sucre, que atendió al señor Orozman Segundo Pérez Guzmán, quien manifestó no encontrarse en condiciones económicas de contratar un apoderado para que la represente. En razón de lo anterior expuesto fue remido a la Defensoría del Pueblo de Sincelejo, para que se le asignase un defensor público en el proceso de Justicia Transicional por el Delito de Desplazamiento Forzado. -Manual, Instructivo o Formato: Liquidaciones Materiales de Daños y Perjuicios en delitos de Desplazamiento, Hurto y Secuestro, realiza da por el Perito Financiero, Álvaro Parra Hernández de la Defensoría del Pueblo	50 smlmv	$7.644.197	$ 6.733.949

DE LO RESUELTO POR LA SALA

VÍCTIMAS	DAÑOS INMATERIALES	DAÑOS MATERIALES	
	DAÑO MORAL	DAÑO EMERGENTE	LUCRO CESANTE PRESENTE
Nombre OROZMAN SEGUNDO PÉREZ GUZMÁN Identificación C.C. No. 92.189.942	La Sala, teniendo en cuenta lo descrito en el acápite "*1.7.2.1.1.1.2. Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, reconoce por concepto de daño moral a Orozman Segundo Pérez Guzmán, la suma equivalente a 50 smlmv, monto que se reconoce en calidad de víctima directa reportante del delito de desplazamiento forzado.	La Sala tiene en cuenta como bienes objeto de indemnización por concepto de daño emergente los enceres, artículos y dinero en efectivo a continuación relacionados por la víctima como lo fueron: 10 teléfonos móviles avaluados en $3.000.000.oo, electrodomésticos avaluados en $6.000.000.oo y dinero en efectivo por un monto de $3.000.000.oo, teniendo en cuenta para tal efecto la declaración jurada vertida por Orozman Segundo Pérez Guzmán ante la Notaría Primera de Sincelejo el día 3 de marzo de 2023, donde además indicó que laboraba en la venta de planes telefónicos y teléfonos en la ciudad de Sincelejo. Así las cosas, una vez indexado el monto anterior, se reconoce en favor del señor Orozman Segundo Pérez Guzmán como daño emergente la suma de $31.730.594.00 o 24.41 smlmv.	La Sala reconoce el valor de $14.625.000.00 o 11,25 smlmv, en razón a lo indicado en el acápite *"1.6.2.1.2.2.1. Acreditación"* de esta decisión, bajo el entendido que las víctimas de desplazamiento forzado han requerido contar con un periodo razonable de hasta un (1) año para reestablecer sus condiciones socioeconómicas, considerando para tal efecto que una persona en el territorio colombiano devenga por lo menos un salario mínimo legal mensual vigente para su congrua subsistencia, sin que la representación judicial hubiese demostrado que la víctima dejó de percibir ingresos adicionales a causa del hecho victimizante. Lo anterior teniendo en cuenta, además, que en el tramite incidental no se demostró actividad económica concreta alguna que hubiese desempeñado la víctima al momento de la afectación y que los ingresos que hubiesen dejado de percibir correspondan a la suma pretendida.

HECHO NÚMERO 33[306]

Víctimas: ANA SOFIA ROMERO CUELLO
Fecha de Nacimiento: 15 de diciembre de 1949
Fecha de los Hechos: 6 de noviembre de 2003
Delitos Legalizados: Deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil.
Salario devengado: Salario mínimo

DE LO SOLICITADO

VÍCTIMAS	DOCUMENTOS APORTADOS	DAÑOS INMATERIALES
		DAÑO MORAL

[306] Fecha en la que se expuso el cargo. Audio I de marzo 16 de 2023 – Mañana de rec. 00:35:30 sesión de audiencia del día 16 de marzo de 2023.

Nombre ANA SOFIA ROMERO CUELLO Identificación C.C. No. 33.169.982 Fecha de nacimiento 15 de diciembre de 1949 Reportante	- Solicitud de incidente de reparación integral. - Copia del poder suscrito por Ana Sofia Romero Cuello. - Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Ana Sofia Romero Cuello. - Copia de certificación expedida el 5 de febrero de 2013 por la Unidad Nacional para la Justicia Transicional con sede en la ciudad de Sincelejo, Sucre, en la que indican que se atendió a la señora Ana Sofia Romero Cuello, quien manifestó no encontrarse en condiciones económicas de contratar un apoderado para que la represente, en razón de lo anterior expuesto fue remitida a la Defensoría del Pueblo Regional Seccional Sucre, para que le fuese asignado un defensor público que la represente en el proceso de Justicia Transicional, por el delito de desplazamiento forzado. - Copia de certificación expedida del Defensor del Pueblo Seccional Sucre, en la que hace constar que en este despacho cursa una intervención radicada bajo el No. 7001803 por la señora Ana Sofia Romero Cuello, quien manifestó ser persona desplazada por la violencia socio política proveniente de Arroyo Arena La Peñata, jurisdicción del municipio de Sincelejo, Sucre, con su núcleo familiar Juan Carlos y Yuli Andrea Romero Cuello, su madre Ana Mercedes Cuello, su hermano Indulfo Bautista Yeneris y su sobrino Fabian Carrascal Arrieta.	50 smlmv

DE LO RESUELTO POR LA SALA

VÍCTIMAS	**DAÑOS INMATERIALES** **DAÑO MORAL**
Nombre ANA SOFIA ROMERO CUELLO Identificación C.C. No. 33.169.982	La Sala, teniendo en cuenta lo descrito en el acápite "*1.7.2.1.1.1.2. Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, reconoce por concepto de daño moral a Ana Sofia Romero Cuello, la suma equivalente a 50 smlmv, monto que se reconoce en calidad de víctima directa reportante del delito de desplazamiento forzado.

HECHO NÚMERO 35[307]

Víctimas:	JAIRO MIGUEL SEVILLA RAMÍREZ
Fecha de Nacimiento:	24 de diciembre de 1971
Fecha de los Hechos:	7 de noviembre de 2003
Delitos Legalizados:	Deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil.
Salario devengado:	Salario mínimo

[307] Fecha en la que se expuso el cargo. Audio I de marzo 16 de 2023 – Mañana de rec. 00:39:27, sesión de audiencia del día 16 de marzo de 2023.

DE LO SOLICITADO

VÍCTIMAS	DOCUMENTOS APORTADOS	DAÑOS INMATERIALES DAÑO MORAL
Nombre JAIRO MIGUEL SEVILLA RAMÍREZ Identificación C.C. No. 92.517.750 Fecha de nacimiento 24 de diciembre de 1971 Reportante	- Solicitud de incidente de reparación integral. - Copia del poder suscrito por Jairo Miguel Sevilla Ramírez. - Copia de la cédula de ciudadanía de Jairo Miguel Sevilla Ramírez. - Copia de escrito de fecha 28 de enero de 2013 expedido por la Unidad Nacional para la Justicia Transicional con sede en la ciudad de Sincelejo, Sucre, en el que se registra que atendió al señor Jairo Miguel Sevilla Ramírez, quien manifestó no encontrarse en condiciones económicas de contratar un apoderado para que la represente, por lo que fue remitido a la Defensoría del Pueblo Regional Sucre, para que le sea asignado un defensor público en el proceso de Justicia Transicional, por el delito de desplazamiento forzado.	50 smlmv

DE LO RESUELTO POR LA SALA

VÍCTIMAS	DAÑOS INMATERIALES DAÑO MORAL
Nombre JAIRO MIGUEL SEVILLA RAMÍREZ Identificación C.C. No. 92.517.750	La Sala, teniendo en cuenta lo descrito en el acápite "*1.7.2.1.1.1.2. Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, reconoce por concepto de daño moral a Jairo Miguel Sevilla Ramírez, la suma equivalente a 50 smlmv, monto que se reconoce en calidad de víctima directa reportante del delito de desplazamiento forzado.

HECHO NÚMERO 37[308]

Víctimas:	JESÚS MARÍA SOLAR FUENTES
Fecha de Nacimiento:	17 de octubre de 1949
Fecha de los Hechos:	7 de noviembre de 2003
Delitos Legalizados:	Deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil.
Salario devengado:	Salario mínimo

DE LO SOLICITADO

[308] Fecha en la que se expuso el cargo. Audio I de marzo 16 de 2023 – Mañana de rec. 00:18:55, sesión de audiencia del día 16 de marzo de 2023.

VÍCTIMAS	DOCUMENTOS APORTADOS	DAÑOS INMATERIALES	DAÑO MATERIALES	
		DAÑO MORAL	DAÑO EMERGENTE	LUCRO CESANTE PRESENTE
Nombre JESÚS MARÍA SOLAR FUENTES Identificación C.C. No. 6.815.429 fecha de nacimiento 17 de octubre de 1949 Reportante	- Solicitud de incidente de reparación integral. - Copia del poder suscrito por Jesús María Solar Fuentes. - Copia de la cédula de ciudadanía del señor Jesús María Solar Fuentes. - Copia expedida por la Unidad Nacional de Fiscalías el 14 de diciembre en la ciudad de Sincelejo, Sucre, que atendió al señor Jesús María Solar Fuentes, el cual se encuentra reportado como víctima indirecta ante la Unidad de Justicia y Paz y manifiesta carecer de apoderado, por lo que fue remitido a la Defensoría del Pueblo Regional Sucre, para que se le fuese asignado su defensor que lo representase dentro del proceso de Justicia y Paz en razón al delito de desplazamiento forzado. - Copia de la denuncia presentada ante la Policía Judicial donde el señor Jesús María Solar Fuentes relata los hechos " *Para el año 2003 yo vivía en el Corregimiento La Peñata, perteneciente al municipio de Sincelejo, departamento de Sucre, donde vivía junto con mi señora Cenaida Romero Ramírez, con cuatro hijos llamados, Jesús, Leidis, y Margarita Solar Romero; además Enrique Carlos Solar Romero (Q.E.P.D,) en donde nos dedicábamos a la agricultura (Yuca, Maíz y Ñame) que sembraba en una finca de propiedad de mi padre y de sus hermanos. También tenía gallinas y marranos. Pero el día 6 de noviembre a las 8 de la noche mataron a un tío llamado Pedro Solar, y a un primo llamado Fidel Paternina Solar, a quienes sacaron de sus casas, y los mataron; después de esto dos sujetos a donde los vecinos, diciéndoles que nos daban 24 horas, para salir del pueblo. Todo esto me lo dijeron varios vecinos. Por todo esto tuvimos que salir del pueblo dejando todo lo que teníamos, lo cual todo se perdió; los vecinos que teníamos también se fueron, toda esta región quedo sola...vivimos en la casa de mi padre en Sincelejo ...y después de un año retornamos a la Peñata y cuando retornamos no encontramos casi nada…"* - Manual, Instructivo o Formato: Liquidaciones Materiales de Daños y Perjuicios en delitos de Desplazamiento, Hurto y Secuestro, realizada	50 smlmv	$7.357.503.00	$ 6.787.842.00

	por el Perito Financiero, Álvaro Parra Hernández de la Defensoría del Pueblo			

DE LO RESUELTO POR LA SALA

VÍCTIMA	DAÑOS INMATERIALES	DAÑOS MATERIALES	
	DAÑO MORAL	**DAÑO EMERGENTE**	**LUCRO CESANTE CAUSADO**
Nombre JESÚS MARÍA SOLAR FUENTES Identificación C.C. No. 6.815.429	La Sala, teniendo en cuenta lo descrito en el acápite "*1.7.2.1.1.1.2. Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, reconoce por concepto de daño moral a Jesús María Solar Fuentes, la suma equivalente a 50 smlmv, monto que se reconoce en calidad de víctima directa reportante del delito de desplazamiento forzado.	La Sala tiene en cuenta como bienes objeto de indemnización por concepto de daño emergente: 1 casa de bahareque, 1 casa de material, 1 hectárea de tierra cultivada con yuca, maíz y plátano, 4 cerdos, 35 gallinas y 5 pavos, teniendo en cuenta para tal efecto el reporte realizado por Jesús María Solar Fuentes en el formato de registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley, de fecha 7 de mayo de 2018, por manera que, en consideración a la tabla baremo establecida jurisprudencialmente[309], el monto reconocido por este concepto es por valor de $18.008.362.00 o 13,85 smlmv.	La Sala reconoce el valor de $14.625.000.00 o 11,25 smlmv, en razón a lo indicado en el acápite *"1.6.2.1.2.2.1. Acreditación"* de esta decisión, bajo el entendido que las víctimas de desplazamiento forzado han requerido contar con un periodo razonable de hasta un (1) año para reestablecer sus condiciones socioeconómicas, considerando para tal efecto que una persona en el territorio colombiano devenga por lo menos un salario mínimo legal mensual vigente para su congrua subsistencia, sin que la representación judicial hubiese demostrado que la víctima dejó de percibir ingresos adicionales a causa del hecho victimizante. Lo anterior teniendo en cuenta, además, que en el tramite incidental no se demostró actividad económica concreta alguna que hubiese desempeñado la víctima al momento de la afectación y que los ingresos que hubiesen dejado de percibir correspondan a la suma pretendida.

HECHO NÚMERO 39[310]

Víctimas: DANIEL DE JESÚS TOSCANO FUENTES
Fecha de Nacimiento: 18 de agosto de 1941
Fecha de los Hechos: 7 de noviembre de 2003
Delitos Legalizados: Deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil.
Salario devengado: Salario mínimo

[309] Tabla elaborada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, fallo de segunda instancia, radicado 34547.
[310] Fecha en la que se expuso el cargo. Audio I de marzo 16 de 2023 – Mañana de rec. 00:46:50, sesión de audiencia del día 16 de marzo de 2023.

DE LO SOLICITADO

VÍCTIMA	DOCUMENTOS APORTADOS	DAÑOS INMATERIALES	DAÑO MATERIALES	
		DAÑO MORAL	DAÑO EMERGENTE	LUCRO CESANTE PRESENTE
Nombre DANIEL DE JESÚS TOSCANO FUENTES Identificación C.C. No. 3.995.710 fecha de nacimiento 18 de agosto de 1941 Reportante	- Solicitud de incidente de reparación integral. - Copia del poder suscrito por Daniel de Jesús Toscano Fuentes. - Copia de la cédula de ciudadanía del señor Daniel de Jesús Toscano Fuentes. - Copia expedida por la Unidad Nacional de Fiscalías para La Justicia y La Paz, Unidad Satélite de Sincelejo, quien atendió al señor Daniel De Jesús Toscano Fuentes, el cual se encuentra reportado como víctima ante la UNFJYP y manifiesta carecer de los medios económicos para la adquisición de un defensor, por lo que fue remitido a la Defensoría del Pueblo Regional Sucre, para que se le asignase un defensor que lo representase dentro del proceso de Justicia y Paz. Por el Delito de Desplazamiento Forzado. - Manual, Instructivo o Formato: Liquidaciones Materiales de Daños y Perjuicios en delitos de Desplazamiento, Hurto y Secuestro, realizada por el Perito Financiero Álvaro Parra Hernández de la Defensoría del Pueblo	50 smlmv	$13.175.670.00	$ 6.787.842.00

DE LO RESUELTO POR LA SALA

VÍCTIMAS	DAÑOS INMATERIALES	DAÑOS MATERIALES	
	DAÑO MORAL	DAÑO EMERGENTE	LUCRO CESANTE CAUSADO
Nombre DANIEL DE JESÚS TOSCANO FUENTES Identificación C.C. No. 3.995.710	La Sala, teniendo en cuenta lo descrito en el acápite "*1.7.2.1.1.1.2. Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, reconoce por concepto de daño moral a Daniel de Jesús Toscano Fuentes, la suma equivalente a 50 smlmv, monto que se	La Sala tiene en cuenta como bienes objeto de indemnización por concepto de daño emergente: 2 hectáreas de tierra cultivadas, 15 gallinas, 5 pavos, 5 patos y 2 reses, teniendo en cuenta para tal efecto el reporte realizado por Daniel de Jesús Toscano Fuentes en el formato de registro de hechos atribuibles a grupos armados organizados al margen de la ley, de fecha 2 de diciembre de 2011, por manera que, en consideración a	La Sala reconoce el valor de $14.625.000.00 o 11,25 smlmv, en razón a lo indicado en el acápite *"1.6.2.1.2.2.1. Acreditación"* de esta decisión, bajo el entendido que las víctimas de desplazamiento forzado han requerido contar con un periodo razonable de hasta un (1) año para reestablecer sus condiciones socioeconómicas, considerando para tal efecto que una persona en el territorio colombiano devenga por lo menos un salario mínimo legal mensual vigente para su congrua subsistencia, sin que la representante judicial hubiese demostrado que la víctima

	reconoce en calidad de víctima directa reportante del delito de desplazamiento forzado.	la tabla baremo establecida jurisprudencialmente[311], el monto reconocido por este concepto es por valor de $15.316.391 o 11.78 smlmv.	dejó de percibir ingresos adicionales a causa del hecho victimizante.

HECHO NÚMERO 44[312]

Víctimas: ANA MARÍA REVOLLO TEHERÁN
Fecha de Nacimiento: 6 de abril de 1973
Fecha de los Hechos: 15 de mayo de 2004
Delitos Legalizados: Deportación, expulsión, traslado, desplazamiento forzado de población civil.
Salario devengado: Salario mínimo

DE LO SOLICITADO

VÍCTIMA	DOCUMENTOS APORTADOS	DAÑOS INMATERIALES DAÑO MORAL
Nombre ANA MARÍA REVOLLO TEHERÁN Identificación C.C. No. 64.521.137 fecha de nacimiento 6 de abril de 1973 Reportante	- Solicitud de incidente de reparación integral. - Copia del poder suscrito por Ana María Revollo Teherán al doctor Alfonso Pérez Guzmán. - Sustitución de poder del doctor Alfonso Pérez Guzmán al doctor Emerson Rocha Osorio - Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Ana María Revollo Teherán. - Copia de la denuncia presentada ante la Policía Judicial Ley 600 por la señora Ana María Revollo Teherán, quien relata la versión de los hechos "*En el año 2004, vivía con mi esposo y con mi hija, aquí en Sincelejo en el barrio Paraíso San Carlos, a raíz de la muerte de mi esposo por muerte violenta, temí por mi seguridad y por la de mi hija, y decidí desplazarme a San Onofre, a casa de mis familiares donde mis primos Estefanía Balseiro de Revollo Torrente. Me establecí ahí, porque a mi esposo de nombre Fernando Tuirán García, lo asesinaron en la avenida Ocala, las AUC, al mando de Rodrigo Cadena. Donde mis familiares duré viviendo 2 años, y después me fui a vivir donde mi hermano Jorge Revollo, y hace 6 años me vine a vivir aquí en Sincelejo. Donde trabajo como vendedora de productos de revista y hago pasabocas. Perdí a mi esposo del cual dependía económicamente y al quitarme las AUC, pasé muchos trabajos, y no fue fácil sobrevivir a todo esto, y psicológicamente aun me siento afectada.*".	50 smlmv

DE LO RESUELTO POR LA SALA

[311] Tabla elaborada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, fallo de segunda instancia, radicado 34547.
[312] Fecha en la que se expuso el cargo. Audio I de marzo 16 de 2023 – Mañana de rec. 00:50:51, sesión de audiencia del día 16 de marzo de 2023.

VÍCTIMA	DAÑOS INMATERIALES DAÑO MORAL
Nombre ANA MARÍA REVOLLO TEHERÁN Identificación C.C. No. 64.521.137	La Sala, teniendo en cuenta lo descrito en el acápite "*1.7.2.1.1.1.2. Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, reconoce por concepto de daño moral a Ana María Revollo Teherán, la suma equivalente a 50 smlmv, monto que se reconoce en calidad de víctima directa reportante del delito de desplazamiento forzado.

3.2-ABOGADA: Dra. NOHEMÍ BENÍTEZ RIBERO

HECHO NÚMERO 4[313]

Víctimas: DANIEL VARGAS BATISTA
Fecha de Nacimiento: 7 de enero de 1955
Fecha de los Hechos: 12 de abril de 2003
Delitos Legalizados: Homicidio en persona protegida
Salario devengado: Salario mínimo

DE LO SOLICITADO

VÍCTIMAS	DOCUMENTOS APORTADOS	DAÑOS INMATERIALES DAÑO MORAL
Nombre CECILIA ISABEL VARGAS BATISTA Identificación C.C. No. 23.144.076 fecha de nacimiento 5 de abril de 1953 Hermana	- Solicitud de incidente de reparación integral. - Copia del poder suscrito por Cecilia Isabel Vargas Batista. - Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Cecilia Isabel Vargas Batista. - Copia de la cédula de ciudadanía de la víctima directa Daniel Vargas Batista. - Copia del registro civil de nacimiento a nombre de Cecilia Isabel Vargas Batista. - Copia del registro civil de nacimiento de la víctima directa Daniel Vargas Batista. - Copia de declaración juramentada de fecha 28 de febrero de 2023, realizada ante la Notaría Quinta de Cartagena, por la señora Cecilia Isabel Vargas Batista quien declaró: " *Que soy hermano del hoy finado Daniel Vargas Batista, asesinado el 12 de abril de 2003, de forma violenta por arma de fuego, en Santa Rosa en una finca ubicada en la jurisdicción de cañaveral, a raíz del asesinato de nuestro hermano, toda la familia conformada por Rafael Dionisio Vargas Batista, Diluvina Vargas Batista, Jesús Vargas Batista, Fidel Vargas Batista, y yo sufrimos mucho, esta tragedia, nos ocasiono Angustia, Tristeza, Depresión, Zozobra,*	50 smlmv

[313] Fecha en la que se expuso el cargo. Audio I de marzo 16 de 2023 – Mañana de rec. 01:03:24, sesión de audiencia del día 16 de marzo de 2023.

	miedo, aflicción y mucho dolor, por la muerte prematura de mi hermano, quien gozaba de buena salud al momento de su asesinato, tanto que tuvimos que abandonar nuestra vivienda y dejarlo todo, por miedo a lo sucedido. Mi padre Pedro Vargas Mercado, (fallecido) también sufrió todo lo acontecido."	
Nombre FIDEL RIGOBERTO VARGAS BATISTA Identificación C.C. No. 73.539.010 fecha de nacimiento 28 de octubre de 1958. Hermano	- Copia del poder suscrito por Fidel Rigoberto Vargas Batista. - Registro civil de nacimiento No. 51863696 a nombre de Fidel Rigoberto Vargas Batista. - Copia de la cédula de Ciudadanía del señor Fidel Rigoberto Vargas Batista. - Copia del registro civil de nacimiento de la víctima directa Daniel Vargas Batista. - Copia de la declaración jurada realizada ante la Notaria Quinta de Cartagena, por la señora Cecilia Isabel Vargas Batista quien declaró: " *Que soy hermano del hoy finado Daniel Vargas Batista, asesinado el 12 de abril de 2003, de forma violenta por arma de fuego, en Santa Rosa en una finca ubicada en la jurisdicción de cañaveral, a raíz del asesinato de nuestro hermano, toda la familia conformada por Rafael Dionisio Vargas Batista, Diluvina Vargas Batista, Jesús Vargas Batista, Fidel Vargas Batista, y yo sufrimos mucho, esta tragedia, nos ocasiono Angustia, Tristeza, Depresión, Zozobra, miedo, aflicción y mucho dolor, por la muerte prematura de mi hermano, quien gozaba de buena salud al momento de su asesinato, tanto que tuvimos que abandonar nuestra vivienda y dejarlo todo, por miedo a lo sucedido. Mi padre Pedro Vargas Mercado, (fallecido) también sufrió todo lo acontecido."* - Copia de documento expedido por la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, de Cartagena en la que se registra que se atendió al señor Fidel Rigoberto Vargas Batista, el cual se encuentra reportado como víctima ante la Unidad de Justicia y Paz y fue remitido a la Defensoría del Pueblo Regional Cartagena, para que se le asignase un abogado defensor que lo represente dentro del proceso de Justicia y Paz.	50 smlmv

DE LO RESUELTO POR LA SALA

VÍCTIMAS	**DAÑOS INMATERIALES** **DAÑO MORAL**
Nombre CECILIA ISABEL VARGAS BATISTA Identificación C.C. No. 23.144.076	La Sala, teniendo en cuenta lo descrito en el acápite "*1.7.2.1.1.1.2. Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, reconoce por concepto de daño moral a Cecilia Isabel Vargas Batista y Fidel Rigoberto Vargas Batista en calidad de hermanos de la víctima directa de homicidio Daniel Vargas Batista, la suma equivalente a 50 smlmv para cada uno.
Nombre FIDEL RIGOBERTO VARGAS BATISTA Identificación C.C. No. 73.539.010	

HECHO NÚMERO 7[314]

Víctimas: JUAN CARLOS PEREA PÉREZ
Fecha de Nacimiento: 27 de noviembre de 1982
Fecha de los Hechos: 14 de mayo de 2003
Edad de muerte: 21 años
Expectativa de vida: 59 años (708 meses)
Tiempo entre hecho y sent: 248,57 meses
Delitos Legalizados: Homicidio en persona protegida.
Salario devengado: Salario mínimo

DE LO SOLICITADO

VÍCTIMA	DOCUMENTOS APORTADOS	DAÑOS INMATERIALES	DAÑOS MATERIALES	
		DAÑO MORAL	LUCRO CESANTE PRESENTE	LUCRO CESANTE FUTURO
Nombre MARTIN PEREA FREYLE Identificación C.C. No. 9.067.089 fecha de nacimiento 11 de noviembre de 1948 Padre	- Solicitud de incidente de reparación integral. - Copia del poder suscrito por el señor Martin Perea Freyle. - Copia de la cédula de ciudadanía del señor Martin Perea Freyle. - Copia del registro civil de nacimiento No. 7102724 de la víctima directa Juan Carlos Perea Pérez. - Copia de documento expedido por la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz, de Cartagena quien atendió al señor Martin Perea Freyle, por encontrarse reportado como víctima ante la Unidad de Justicia y Paz y fue remitido a la Defensoría del Pueblo Regional Cartagena, para que le fuese asignado un abogado defensor que lo represente dentro del proceso de Justicia y Paz. - Manual, Instructivo o Formato: Liquidaciones Materiales de Daños y Perjuicios en delitos de Homicidio y desaparición forzada, realizada por el Perito Financiero, Álvaro Parra Hernández de la Defensoría del Pueblo.	100 smlmv	$259.521.125.00	$77.833.551.00

[314] Audio I de marzo 16 de 2023 – Mañana de rec. 01:16:00, sesión de audiencia del día 16 de marzo de 2023.

	- Informe de las Actividades Periciales Forenses Grupo de Representación Judicial de Victimas, realizado por el perito financiero de la Defensoría del Pueblo Álvaro Parra Hernández.			

DE LO RESUELTO POR LA SALA

VÍCTIMA	**DAÑOS INMATERIALES**	**DAÑOS MATERIALES**	
	DAÑO MORAL	**LUCRO CESANTE PRESENTE**	**LUCRO CESANTE FUTURO**
Nombre MARTIN PEREA FREYLE Identificación C.C. No. 9.067.089	La Sala, teniendo en cuenta lo descrito en el acápite *"1.7.2.1.1.1.2. Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, reconoce por concepto de daño moral a Martin Perea Freyle, en calidad de padre de Juan Carlos Perea Pérez, la suma equivalente a 100 smlmv, monto que se reconoce respecto del delito de homicidio en persona protegida.	La Sala no reconoce las indemnizaciones por los daños materiales solicitadas por la abogada en favor de Martin Perea Freyle, en tanto que no se demostró por absolutamente ningún medio probatorio que este tuvieran alguna relación de dependencia con su hijo fallecido Juan Carlos Perea Pérez, a razón, por ejemplo, de un caso de necesidad o invalidez que no le permitiera valerse por sus propios medios o ejercer alguna actividad económica, y ni siquiera a manera de expresiones se dio cuenta de ello ni por el mismo ni por terceros sin que le esté dado a la Sala acudir a especulaciones o meras suposiciones para suplir las falencias probatorias y tampoco que la víctima directa fuera su único hijo, lo que descarta la existencia en principio de una dependencia económica absoluta del padre con relación a su hijo fallecido. La abogada representante de víctimas no pudo brindare en esta oportunidad a la Magistratura la fundamentación correspondiente dirigida a determinar en qué consistieron los daños materiales alegados de manera concreta, y a pesar de remitir al respectivo informe contable a efectos de precisar las sumas correspondientes a los lucros cesantes, lo cierto es que en ese documento únicamente se esgrimen unos determinados valores sin que ahí se indique cuáles fueron los criterios que se tuvieron en cuenta para efectuar su cálculo, hay un desconocimiento total en este diligenciamiento de actividad económica comprobada a la cual se pudo haber dedicado en vida la víctima para cubrir siquiera su propio sustento la víctima directa, desconoce la Sala en que datos específicos respecto de daños materiales en concreto causados pudo haberse basado el Perito Financiero Álvaro Parra Hernández de la Defensoría del Pueblo, allegado al diligenciamiento el cual por sí solo no puede constituir la prueba de que el daño se causó, sino en el ejercicio contable de cuantías que se estiman pero sin la determinación previa o especificación de los daños en concreto por cualquier medio probatorio, así lo hemos reiterado pues no existe tarifa legal de prueba ni siquiera frente a estos conceptos. Las pérdidas materiales deben especificarse de lo contrario la afectación no aparece acreditada con claridad porque aquí con solo el peritazgo, no está demostrada la afectación material sino la cuantía con base en cálculos y formulas contables lo que suple la necesidad especificar en qué consistieron esos daños y para el caso específico las pérdidas materiales, sino por qué se consideran causadas, cómo se demuestran, lo cual no aparecen demostrados en el incidente. En consecuencia, ha de indicarse que cualquier tipo de perjuicio de esta índole debe acompañarse de la prueba o pruebas a si sean mínimas pues aún bajo parámetros de flexibilidad e indulgencia, que aquellos aplicados a la justicia ordinaria, ello no elimina a la obligación de presentar algún soporte frente al reconocimiento pretendido.	

3.3-ABOGADO: Dr. RAFAEL ENRIQUE ARTETA ARTETA

HECHO NÚMERO 10[315]

Víctimas:	RANDOLF THERÁN DUKE
Fecha de Nacimiento:	28 de junio de 1960
Fecha de los Hechos:	29 de agosto de 2003
Edad de muerte:	43 años
Expectativa de vida:	38 años (456 meses)
Tiempo entre hecho y sent:	245,07 meses
Delitos Legalizados:	Homicidio en persona protegida
Salario devengado:	salario mínimo

DE LO SOLICITADO

VÍCTIMAS	DOCUMENTOS APORTADOS	DAÑOS INMATERIALES	DAÑOS MATERIALES
		DAÑO MORAL	LUCRO CESANTE PRESENTE
Nombre RANDOLF THERÁN ORTIZ Identificación C.C. No. 73.210.603 fecha de nacimiento 19 de julio de 1984 Hijo	- Solicitud de incidente de reparación integral. - Copia del poder suscrito por el señor Randolf Therán Ortiz -Certificación expedida por el Grupo Interno de Trabajo de Orientación Registro y Asignación de Casos de Víctimas en el Marco de Justicia Transicional de fecha 6 de julio de 2021, en el que se registra que se encontró que el señor Randolf Therán Ortiz como víctima indirecta por el delito de homicidio de su padre Randolf Therán Duke, hecho ocurrido el 29 de agosto de 2003 en Santa Rosa, Bolívar, atribuible presuntamente a un grupo armado al margen de la ley, Bloques Montes de María, el cual le correspondió al registro SIJYP No. 351373, por declaración presentada ante esa unidad el 28 de enero de 2010, asignada a la Fiscalía Doce (12) Delegada, ubicada en la ciudad de Barranquilla. - Copia de la cédula de ciudadanía del señor Randolf Therán Ortiz. - Copia del registro civil de nacimiento No. 10890381 a nombre de Randolf Therán Ortiz. - Copia de la cédula de ciudadanía del victima directa Randolf Therán Duke.	100 smlmv	$236.408.234.00

[315] Audio I de marzo 16 de 2023 – Mañana de rec. 01:35:10, sesión de audiencia del día 16 de marzo de 2023.

	- Manual, Instructivo o Formato: Liquidaciones Materiales de Daños y Perjuicios en delitos de Homicidio y desaparición forzada, realizada por el Perito Financiero, Álvaro Parra Hernández de la Defensoría del Pueblo.		

DE LO RESUELTO POR LA SALA

VÍCTIMA	**DAÑOS INMATERIALES**	**DAÑOS MATERIALES**
	DAÑO MORAL	**LUCRO CESANTE PRESENTE**
Nombre RANDOLF THERÁN ORTIZ Identificación C.C. No. 73.210.603	La Sala, teniendo en cuenta lo descrito en el acápite *"1.7.2.1.1.1.2. Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, reconoce por concepto de daño moral a Randolf Therán Ortiz, en calidad de hijo de Randolf Therán Duke, la suma equivalente a 100 smlmv, monto que se reconoce respecto del delito de homicidio en persona protegida.	Teniendo en cuenta los criterios esbozados en el cuerpo de esta decisión, referidos a la dependencia económica y a la expectativa de vida para efectos de calcular el lucro cesante presente, se reconoce en favor de la víctima Randolf Therán Ortiz por este concepto y teniendo en cuenta que este es el único reclamante que dependía económicamente de la víctima directa y que en consecuencia le corresponde a este el 100% del valor a reparar lo es por la suma de $102.495.763.00 o 78,84 smlmv. Huelga aclarar, que el cálculo indemnizatorio concedido precedentemente, es otorgado a Randolf Therán Ortiz, en calidad de único hijo reconocido por Randolf Therán Duke, gracias a los elementos materiales probatorios que obran en el diligenciamiento allegados por el ente acusador para la demostración de la materialidad del hecho, responsabilidad del postulado y eventual legalización del mismo, allí obra formato de entrevista rendida por Randolf Therán Ortiz el día 10 de diciembre de 2012, ante la Investigador Criminalístico UNJYP Consuelo Hernández Álvarez, en la que la víctima indirecta indica claramente que su difunto padre era su apoyo económico y que dependía en un cien por ciento de él, además, refirió de que todos sus planes y proyecto de vida se vinieron al traste a consecuencia de la muerte violente de su padre, empero, el abogado representante de víctimas únicamente se limitó a esgrimir una cuantía a modo de indemnización por este concepto con el mero calculo contable de los montos indemnizatorios arrojados por el Perito Financiero Dr. Álvaro Parra Hernández, profesional adscrito de la Defensoría del Pueblo, prescindiendo de una adecuada justificación y fundamentación, pues no existe alguna expresión acerca de la dependencia económica, ni de ningún otro aspecto de donde se pueda inferir la afectación económica deprecada en ninguno de los elementos de convicción introducidos por este en la carpeta incidental, se aclara igualmente, para todos los efectos que las víctimas que son representadas en este incidente de reparación integral a las víctimas que la Sala aplica igual consideración y procedimiento respecto de todas y cada una de las víctimas.

HECHO NÚMERO 6[316]

Víctimas: FÉLIX ARROYO MATTOS
Fecha de Nacimiento: 31 de enero de 1958

[316] Fecha en la que se expuso el cargo. Audio I de marzo 16 de 2023 – Mañana de rec. 01:43:26, sesión de audiencia del día 16 de marzo de 2023.

Fecha de los Hechos: 7 de agosto de 2003
Edad de muerte: 45 años
Expectativa de vida: 36,2 años (434,40 meses)
Tiempo entre hecho y sent: 245,80 meses
Delitos Legalizados: Homicidio en persona protegida.
Salario devengado: Salario mínimo

DE LO SOLICITADO

VÍCTIMAS	DOCUMENTOS APORTADOS	DAÑOS INMATERIALES DAÑO MORAL
Nombre HAIDA ROSA ARROYO MATOS Identificación C.C. No 23.145.614 fecha de nacimiento 29 de agosto de 1960 Hermana	- Solicitud de incidente de reparación integral. - Copia del poder suscrito por Haida Rosa Arroyo Matos - Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Haida Rosa Arroyo Matos. - Copia del registro civil de nacimiento No. 12089649 a nombre de Haida Rosa Arroyo Matos. - Copia del registro civil de nacimiento de la víctima directa Félix Arroyo Matos. - Certificación expedida por la Fiscalía General de la Nación, donde informa que se encontró que la señora Haida Rosa Arroyo Matos, registró un hecho por el delito de homicidio, siendo víctima directa Félix Arroyo Matos, ocurrido el 7 de agosto de 2003 en Santa Rosa, Bolívar, atribuible presuntamente a un grupo armado al margen de la ley, Bloques Montes de María, el cual correspondió al registro SIJYP No. 488915, declaración presentada ante esa entidad el 12 de diciembre de 2012, asignada a la Fiscalía Doce (12) Delegada, ubicada en la ciudad de Barranquilla. - Copia registro civil de defunción No. 043667026 a nombre de la víctima directa Félix Arroyo Matos. - Certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Santa Rosa de Lima, Bolívar, en la que hacen constar que la copia del registro civil de defunción de quien en vida respondía al nombre de Félix Arroyo Matos fue tomada del original que reposa en los archivos de esa Registraduría Municipal. - Copia de la declaración extraprocesal presentada en la Notaría Quinta de Cartagena, por los señores Jaime Rodríguez Chávez y Gonzalo Maranto Romero, en la que declaran que el 7 de agosto de 2003, siendo aproximadamente las 6:00 de la tarde, el señor Félix Arroyo Matos venia de la finca del papá que queda en jurisdicción del municipio de Santa Rosa Norte, cuando estaba entrando al pueblo en una mula bajando la Loma Matia, se encontró con un grupo de hombre de una organización armada al margen de la ley, quienes, le dispararon en varias ocasiones causándole la muerte, por esos hechos indican ser testigos que desde entonces, es decir, hace más de 19 años su hermana Haida Rosa Arroyo Matos, ha venido sintiendo mucho dolor y tristeza, además, que Félix siempre fue un sustento para su familia la ayudaba económicamente a Haida Rosa Arroyo Matos.	50 smlmv
Nombre	- Copia del poder suscrito por Maritza Esther Arroyo Matos. - Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Maritza Esther Arroyo Matos.	50 smlmv

MARITZA ESTHER ARROYO MATOS Identificación C.C. No 33.104.923 fecha de nacimiento 20 de agosto de 1956 Hermana	- Copia del registro civil de nacimiento No. 26478034 de la Maritza Esther Arroyo Matos. - Copia de documento de presentación ante la Fiscalía como presunta víctima e información de sus derechos en el proceso de Justicia y Paz.	
Nombre NERIS JOSE ARROYO MATOS Identificación C.C. No 73.539.948 fecha de nacimiento 27 de agosto de 1967 Hermano	- Copia del Poder suscrito por Neris Jose Arroyo Matos. - Copia de la cédula de ciudadanía del señor Neris Jose Arroyo Matos. - Copia del registro civil de nacimiento a nombre de la señora Neris Jose Arroyo Matos. - Copia de documento de presentación ante la Fiscalía como presunta víctima e información de sus derechos en el proceso de Justicia y Paz.	50 smlmv
Nombre JOSE ISABEL ARROYO MATTOS Identificación C.C. No 73.540.168 fecha de nacimiento 16 de septiembre de 1967 Hermano	- Copia del Poder suscrito por Jose Isabel Arroyo Mattos. - Copia de la cédula de ciudadanía del señor Jose Isabel Arroyo Mattos. - Copia del registro civil de nacimiento No. 12089675 a nombre del señor Jose Isabel Arroyo Mattos. - Copia de documento de presentación ante la Fiscalía como presunta víctima e información de sus derechos en el proceso de Justicia y Paz.	50 smlmv

DE LO RESUELTO POR LA SALA

VÍCTIMAS	**DAÑOS INMATERIALES** **DAÑO MORAL**
Nombre HAIDA ROSA ARROYO MATOS Identificación C.C. No 23.145.614	La Sala, teniendo en cuenta lo descrito en el acápite *"1.7.2.1.1.1.2. Montos a indemnizar por concepto de daño moral"* de esta sentencia, reconoce por concepto de daño moral a Haida Rosa Arroyo Matos, en calidad de hermana de Félix Arroyo Mattos, la suma equivalente a 50 smlmv, monto que se reconoce respecto del delito de homicidio en persona protegida.

Nombre MARITZA ESTHER ARROYO MATOS Identificación C.C. No 33.104.923	La Sala no reconoce la indemnización deprecada en favor de Maritza Esther Arroyo Matos, Neris José Arroyo Matos y José Isabel Arroyo Mattos, toda vez que, con relación a ellos siendo hermanos, no se aportó algún elemento de convicción que demuestre que padecieron algún daño moral como consecuencia de la muerte violenta de su hermano Félix Arroyo Mattos, sin que sea posible predicar la presunción de esta afectación inmaterial que está reservada conforme a la ley para *"los cónyuges o compañeros permanentes y familiar en primer grado de consanguinidad o primero civil de la víctima directa cuando a esta se le hubiere dado muerte o desaparecido"*, tal y como lo ha dejado claro de manera pacífica la jurisprudencia nacional[317], siguiendo los presupuestos contenidos en el artículo 5 inciso 2º de la Ley 975 de 2005, modificado por el artículo 2 de la Ley 1592 de 2012. Dentro del marco del proceso de justicia y paz no se aplica la presunción de daño moral que por vía jurisprudencial el Consejo de Estado ha reconocido a los parientes en segundo grado de consanguinidad, tal y como lo ha dejado precisado la máxima autoridad de la justicia ordinaria[318], así como la máxima autoridad guardiana de la Constitución nacional[319], por estas razones, reiteramos, no es posible el reconocimiento pedido por el señor representante de víctimas respecto de estas víctimas indirectas.
Nombre NERIS JOSE ARROYO MATOS Identificación C.C. No 73.539.948	
Nombre JOSE ISABEL ARROYO MATTOS Identificación C.C. No 73.540.168	

3.4-ABOGADA: Dra. IRMA SOFIA DE LA OSSA SALCEDO

HECHO NÚMERO 12[320]

Víctimas:	FARID ANTONIO SALAZAR MONTES
Fecha de Nacimiento:	22 de marzo de 1957
Fecha de los Hechos:	22 de noviembre de 2003
Edad de muerte:	46 años
Expectativa de vida:	35,3 años (423,60 meses)
Tiempo entre hecho y sent:	242,30 meses
Delitos Legalizados:	Homicidio en persona protegida
Salario devengado:	Salario mínimo

[317] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 23 de septiembre de 2015, rad. 44595, M.P. Dr. Eugenio Fernández Carlier. También, decisión del 5 de febrero del 2020, rad. 50100, M.P. Dr. Eyder Patiño Cabrera.
[318] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicados 42534 de 30 de abril de 2014, 44595 del 23 de septiembre de 2015, y 46672 del 10 de diciembre del 2015, entre otros.
[319] C-370 de 2006 y C-052 de 2012
[320] Fecha en la que se expuso el cargo. Audio I de marzo 23 de 2023 – Mañana de rec. 01:48:24, sesión de audiencia del día 23 de marzo de 2023.

DE LO SOLICITADO

VÍCTIMAS	DOCUMENTOS APORTADOS	DAÑOS INMATERIALES	DAÑOS MATERIALES
		DAÑO MORAL	LUCRO CESANTE PRESENTE Y DAÑO EMERGENTE
Nombre ELVIRA ROSA SALAS TERÁN Identificación C.C. No. 64.584.077 fecha de nacimiento 24 de junio de 1960 Compañera	- Solicitud de incidente de reparación integral. - Copia del poder suscrito por la señora Elvira Rosa Salas Terán. - Copia de la partida de bautismo de la víctima directa Farid Antonio Salazar Montes. - Copia de escrito expedido por la Unidad de Justicia Transicional, grupo Satélite de Sincelejo, Sucre, en el que indican que atendieron a la señora Elvira Rosa Salas Terán, quien manifestó carecer de abogado y no poseer los medios económicos para contratar los servicios profesionales de uno particular, por lo fue remitida a la Defensoría del Pueblo Regional Sucre, para que le fuese asignado un defensor que la represente dentro del proceso de Justicia Transicional. - Copia de la cédula de ciudadanía de Elvira Rosa Salas Terán. - Copia de la certificación expedida por la Personería de Sincelejo, en la que indican que Farid Antonio Salazar Montes, falleció el 22 de noviembre de 2003, en el corregimiento de San Antonio, jurisdicción de ese municipio, víctima de asesinato selectivo por motivos ideológicos y políticos, en el marco del conflicto armado interno. - Copia de escrito emanado por la Fiscal Sexta Delegada en la hace saber que en ese despacho se adelanta una investigación por la conducta punible de homicidio, radicada bajo el número 40272, donde figura como víctima quien en vida respondía el nombre de Farid Antonio Salazar Montes, por hechos sucedidos el día 22 de noviembre de 2003, en el corregimiento de San Antonio, jurisdicción de Sincelejo, Sucre. - Copia de la certificación expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la que hace constar que en el archivo nacional de identificación el documento la cédula de ciudadanía No. 4.006.733 a nombre de Farid Antonio Salazar Montes presenta un estado de cancelada por muerte. - Copia de certificado civil de defunción del señor Farid Antonio Salazar Montes. - Copia del registro civil de defunción No. 04061746 a nombre de Farid Antonio Salazar Montes.	200 smlmv	$401.851.138[321]

[321] Es de resaltar que este monto indemnizatorio lo realizó la representante judicial a víctimas Dra. Irma Sofia de la Ossa Salcedo de manera general, es decir, en desarrollo del trámite incidental la profesional en derecho esgrime esta pretensión mencionando los nombres de todas las víctimas reportantes en ese caso, además, dicho monto lo hace amparada en una certificación expedida por contadora publica con base en el monto que recibía la víctima directa como producto de sus actividades agrícolas y comerciales y las ganancias que dejó de percibir de estas, la aludida certificación a la hizo mención la abogada de víctimas no fue aportada a la carpeta del trámite incidental, igualmente, se observa que el monto deprecado lo hace conjuntamente por los concepto de lucro cesante presente y daño emergente.

	- Copia del acta de declaración juramentada realizada ante Notaría Tercera de Sincelejo, Sucre, por las señoras Enalba Judith Mejía Sierra y Natalia Isabel Solorzano Robinson. quienes manifestaron conocer a la señora Elvira Rosa Salas Terán desde hace más de 8 años, que de este conocimiento saben y les consta que vivió en unión libre por más de 20 años con el señor Farid Antonio Salazar Montes, que de esa unión se procrearon tres hijos Elkin David, Daniela Patricia y Jaidiber Antonio Salazar Salas. - Copia de recorte de periódico de la noticia del asesinato de Farid Antonio Salazar Montes.		
Nombre ELKIN DAVID SALAZAR SALAS Identificación C.C. No. 1.102.811.478 fecha de nacimiento 16 de enero de 1986 Hijo	- Copia del poder suscrito por el señor Elkin David Salazar Salas. - Documento expedido por la Unidad de Fiscalías de Justicia Transicional, grupo satélite de Sincelejo, Sucre, en el que indican que atendieron al señor Elkin David Salazar Salas, quien manifestó carecer de abogado y no poseer los medios económicos para contratar los servicios profesionales de uno particular, por lo que fue remitido a la Defensoría del Pueblo Regional Sucre, para que se le asigne un defensor que lo represente dentro del proceso de Justicia Transicional. - Copia del certificado de registro civil de nacimiento No. 24860939 a nombre de Elkin David Salazar Salas. - Copia de la cédula de ciudadanía de Elkin David Salazar Salas.	200 smlmv	
Nombre WALBERTO ANTONIO SALAZAR MURILLO Identificación C.C. No. 92.540.628 fecha de nacimiento 3 de marzo de 1979 Hijo	- Copia del poder suscrito por el señor Walberto Antonio Salazar Murillo. - Escrito expedido por la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia Transicional de Sincelejo, Sucre, quienes atendieron a Walberto Antonio Salazar Murillo, quien se reportó como víctima ante la Unidad de Justicia y Paz y manifestó carecer de apoderado, por lo que fue remitido a la Defensoría del Pueblo Regional Sucre, para que le fuese asignado un defensor que lo represente dentro del proceso de Justicia y Paz. - Copia de cédula de ciudadanía a nombre de Walberto Antonio Salazar Murillo. - Copia del certificado de registro civil de nacimiento No. 28324911 a nombre de Walberto Antonio Salazar Murillo. - Copia de la declaración estimatoria bajo la gravedad del juramento con valores de los bienes perdidos del actuar delictivo de los grupos al margen de la ley .realizado por Walberto Antonio Salazar Murillo donde relaciona los Bienes muebles e inmuebles que dejo el núcleo familiar abandonado en el Corregimiento de San Antonio, Jurisdicción del Municipio de Sincelejo, Sucre, como consecuencia del Homicidio de nuestro padre Farid Antonio Salazar Montes, ocurrida el 22 de noviembre de 2003, por grupos al margen de la ley: los cuales detallo en aproximaciones de la siguiente manera: 20 gallinas por valor de $10.000.00 cada una …$200.000	200 smlmv	

	16 cerdos grandes por valor de $200.000 cada uno $3.200.00. Una marrana con valor de $300.000. Dos Burros $300.000. 6 patos a 15 mil cada uno $90.000. 2 hectáreas de Yuca $2.000.000. Total, Perdidas $6.090.000.		
Nombre DANIELA PATRICIA SALAZAR SALAS Identificación C.C. No. 1.102.846.876 fecha de nacimiento 29 de enero de 1992 Hija	- Copia del Poder suscrito por la señora Daniela Patricia Salazar Salas. - Copia expedida por la Unidad de Justicia Transicional, grupo satélite de Sincelejo, Sucre, que atendió a la señora Daniela Patricia Salazar Salas, quien manifiesta carecer de abogado y no poseer los medios económicos para contratar los servicios profesionales de un abogado particular. Se remite a la Defensoría del Pueblo Regional Sucre, para que se le asigne defensor que lo represente dentro del proceso de Justicia Transicional. Por el delito de Homicidio. - Copia del Certificado de Registro Civil de Nacimiento No. 24860940 a nombre de Daniela Patricia Salazar Salas. - Copia de la cedula de ciudadanía a nombre de Daniela Patricia Salazar Salas.	200 smlmv	
Nombre JAIDIBER ANTONIO SALAZAR SALAS Identificación C.C. No. 1.005.661.012 fecha de nacimiento 14 de marzo de 1993 Hijo	- Copia del Poder suscrito por el señor Jaidiber Antonio Salazar Salas. - Copia del Registro Civil de Nacimiento No. 33753823 a nombre de Jaidiber Antonio Salazar Salas. - Copia de la cedula de ciudadanía a nombre de Jaidiber Antonio Salazar Salas.	200 smlmv	

DE LO RESUELTO POR LA SALA

VÍCTIMAS	**DAÑOS INMATERIALES**	**DAÑOS MATERIALES**
	DAÑO MORAL	**LUCRO CESANTE PRESENTE Y DAÑO EMERGENTE**
Nombre ELVIRA ROSA SALAS TERÁN Identificación C.C. No. 64.584.077	La Sala, teniendo en cuenta lo descrito en el acápite "*1.7.2.1.1.1.2. Montos a indemnizar por concepto de daño moral"*	Además de lo que ya viene advertido, la Sala no reconoce las indemnizaciones por los daños materiales solicitadas por la abogada en favor de Elvira Rosa Salas Terán, Elkin David Salazar Salas, Walberto Antonio Salazar Murillo, Daniela Patricia Salazar Salas y Jaidiber Antonio Salazar Salas, en tanto que no se demostró por absolutamente ningún medio probatorio que estas tuvieran alguna relación de dependencia con su compañero permanente y padre fallecido Farid Antonio Salazar Montes, a razón, por ejemplo, de un caso de necesidad o invalidez que no le permitiera valerse por sus propios medios o ejercer alguna actividad económica, y ni

Nombre ELKIN DAVID SALAZAR SALAS Identificación C.C. No. 1.102.811.478 Nombre WALBERTO ANTONIO SALAZAR MURILLO Identificación C.C. No. 92.540.628 Nombre DANIELA PATRICIA SALAZAR SALAS Identificación C.C. No. 1.102.846.876 Nombre JAIDIBER ANTONIO SALAZAR SALAS Identificación C.C. No. 1.005.661.012	de esta sentencia, reconoce por concepto de daño moral a Elvira Rosa Salas Terán, Elkin David Salazar Salas, Walberto Antonio Salazar Murillo, Daniela Patricia Salazar Salas y Jaidiber Antonio Salazar Salas en calidad de compañera permanente e hijos, respectivamente, de la víctima directa de homicidio Farid Antonio Salazar Montes, la suma equivalente a 100 smlmv para cada uno de ellos.	siquiera a manera de expresiones se dio cuenta de ello ni por ella misma ni por terceros sin que le esté dado a la Sala acudir a especulaciones o meras suposiciones para suplir las falencias probatorias y tampoco que la víctima directa fuera su único sustento, pues, como se puede observar le sobreviven a la Elvira Rosa tres hijos, lo que descarta la existencia de una dependencia económica. La abogada representante de víctimas no brindó a la Magistratura la fundamentación correspondiente dirigida a determinar en qué consistieron los daños materiales alegados, y a pesar de hacer mención un supuesto informe contable a efectos de precisar las sumas correspondientes a los lucros cesantes y daño emergente, lo cierto es que únicamente se esgrime un determinado valor sin que ahí se indique cuáles fueron los criterios que se tuvieron en cuenta para efectuar su cálculo, hay un desconocimiento total en este diligenciamiento de actividad económica comprobada a la cual se pudo haber dedicado en vida para cubrir siquiera su propio sustento la víctima directa, desconoce la Sala en que datos específicos respecto de daños materiales en concreto causados pudo haberse basado el contador público, citado en el diligenciamiento el cual por sí solo no puede constituir la prueba de que el daño se causó, sino en el ejercicio contable de cuantías que se estiman pero sin la determinación previa o especificación de los daños en concreto por cualquier medio probatorio, así lo hemos reiterado pues no existe tarifa legal de prueba ni siquiera frente a estos conceptos. Las pérdidas materiales deben especificarse de lo contrario la afectación no aparece acreditada con claridad porque aquí con la solo mención de informe contable, no está demostrada la afectación material sino la cuantía con base en cálculos y formulas contables lo que suple la necesidad especificar en qué consistieron esos daños y para el caso específico las pérdidas materiales, sino por qué se consideran causadas, cómo se demuestran, lo cual no aparecen demostrados en el incidente. En consecuencia, ha de indicarse que cualquier tipo de perjuicio de esta índole debe acompañarse de la prueba o pruebas a si sean mínimas pues aún bajo parámetros de flexibilidad e indulgencia, que aquellos aplicados a la justicia ordinaria, ello no elimina a la obligación de presentar algún soporte frente al reconocimiento pretendido.

3.5- OTRAS MEDIDAS DE REPARACIÓN.

Los abogados representantes de víctimas, Dres. **EMERSON RAFAEL ROCHA OSORIO, NOHEMÍ BENÍTEZ RIBERO**, **RAFAEL ENRIQUE ARTETA ARTETA e IRMA SOFIA DE LA OSSA SALCEDO,** además de las solicitudes en particular antes referidas, requirieron para sus víctimas representadas lo siguiente:

MEDIDAS SOLICITADAS	DE LO RESUELTO POR LA SALA
1. Medidas de rehabilitación para las víctimas encaminadas a su atención médica y psicológica, con provisión de los servicios, respuestas urgentes y asistencia a largo plazo; igualmente, la intervención psicológica, el acceso gratuito para la atención de su salud mental, de los tratamientos psicológicos necesarios y de los medicamentos, para que la atención sea integral, lo cual debe realizarse a través de una institución de salud especializada.	**1.** La Sala, sin perjuicio de las órdenes que disponen en relación a la totalidad de las víctimas en el cuerpo de esta sentencia, no encuentra objeción alguna a las medidas solicitadas por los representantes judiciales de víctimas, de tal manera que dispone: ordenar por conducto de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y en coordinación con el Ministerio de Salud, y demás a que haya lugar, se dispongan de los mecanismos necesarios, ordenes, etc., para que, en beneficio de los grupos familiares representados por los señores abogados Emerson Rafael Rocha

2. Adicionalmente, que se disponga para los postulados Luis Miguel Esquivel Castillo y Juan Carlos Revollo Paternina; *i)* actos de contribución a la reparación integral con el fin de que se restablezca la dignidad de las víctimas, en especial en un acto público de reconocimiento de responsabilidad en desagravio y en memoria de las víctimas del bloque "Montes de María" de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. *ii)* También, que los postulados restablezcan en favor de sus representados la dignidad y la reputación a través de disculpas públicas con participación en los actos simbólicos de resarcimiento y redignificación de las víctimas a que haya lugar, pero ante todo "*EL RECONOCIMIENTO PUBLICO DEL SUFRIMIENTO QUE HAN CAUSADO*"; también, que reconozcan públicamente el daño al buen nombre de cada una de las víctimas directas de delitos atroces a la humanidad tal como lo manifiesta la Corte Constitucional en su Sentencia T-228 de 1994 en la que se señala: "*el buen nombre alude al concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales, antecedentes y ejecutarlas. Representa una de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social de la persona y constituye factor indispensable de la dignidad que a cada uno debe ser reconocida*". Nadie puede privar a otro de su vida. Y *iii)* que los aquí postulados declaren su arrepentimiento y compromiso de no volver a cometer delitos que sean violatorios y atentatorios del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, ni alguna conducta punible.	Osorio, Nohemí Benítez Ribero, Rafael Enrique Arteta Arteta e Irma Sofia de la Ossa Salcedo, se ejecute todo un plan orientado a la valoración, tratamiento y rehabilitación psicológica deprecadas conforme a sus solicitudes. **2.** Igualmente, la Sala ordena, que bajo la coordinación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se organice, con las medidas de seguridad que el caso amerite, un acto público en el que se convoque y se garantice la asistencia de las víctimas representadas por los señores representantes de estas víctimas antes referidos, en el que los postulados ofrezcan disculpas públicas por los actos de violencia cometidos durante su permanencia en el Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, y, de igual manera, expresen su arrepentimiento y su compromiso de no volver a cometer actos atentatorios a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario u otra conducta punible restableciéndose la reputación y la dignidad de las víctimas que hacen parte de este proceso. **3.** Esta sentencia deberá publicarse en la página de la Rama Judicial, Sala de Justicia y Paz, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, igualmente, en los boletines de la Sala, como parte de la memoria histórica, y se dará aviso a la prensa escrita regional y nacional. Adicionalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 56A de la Ley 975 de 2005, adicionado por la Ley 1592 de 2012, se dispone que la secretaría de la Sala organice, sistematice y conserve los archivos de todas las actuaciones llevadas a cabo durante el diligenciamiento de la presente actuación, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y preservar la memoria judicial.

4. Dimensión colectiva del daño.

4.1. Intervención de la Procuraduría General de la Nación[322].

El señor Procurador 06 Judicial II Penal y de Apoyo a Víctimas[323] una vez culminado el incidente de reparación integral a las víctimas de carácter excepcional, realizó su intervención con la presentación de su concepto destacando el marco normativo pertinente; luego, procedió a referirse a las acciones desplegadas por el Ministerio Publico en otros procesos haciendo referencia a los diligenciamientos adelantados por esta Sala de Justicia y Paz con ponencia de la suscrita Magistrada, como lo fueron:

a) Proceso identificado con radicado 08-001-22-52-003-2016-83155 seguido en contra de los postulados a la Ley de Justicia y Paz: EDELMIRO ALBERTO ANAYA GONZÁLEZ (alias "El Chino Anaya"), LUIS ALFREDO ARGEL ARGEL (alias "Mano de Trinche"), LUIS FERNANDO BARRETO MARTÍNEZ (alias "Barretico"), ÁNGEL MIGUEL BERROCAL DORIA (alias "El Cocha"), MANUEL DE JESÚS CONTRERAS BALDOVINO (alias "El Pana" o "Peluca"), SAMUEL ENRIQUE DORADO JIMÉNEZ (alias "El Flaco Roger"), LEONARDO FLÓREZ ROJAS (alias "Chichi", "Beto", Barbitas" o "Montoya"), WILSON ANDERSON HERRERA ROJAS (alias "Gafas"), JOSÉ HERIBERTO NAVARRO MARTÍNEZ (alias "Mano Quemá"), CRISTÓBAL MANUEL MERCADO MARMOLEJO (alias "El Profe"), JUAN ALBERTO RAMOS ESPINEL (alias "Coveñas"), JOSÉ DAVID RÍOS GÓMEZ (alias "Félix" o "Abelito"), YONIS RODRÍGUEZ TAPIA (alias "Yonis Casetas"), SALVADOR ANTONIO SANTOS SANTIS (alias "El Pana"), JOSÉ OSWALDO TAVERA BLANCO (alias "El Paisa"), PEDRO SEGUNDO VALENCIA GÓMEZ (alias "Verruga"), y OSCAR DAVID VILLADIEGO TORDECILLA (alias "Never"), quienes

[322] Audio "08001225200320208498600_20230323_01", Rec. 1:12:00, sesión de audiencia del 23 de marzo de 2023.
[323] Doctor GERMAN CURE CELIS.

formaron parte del extinto Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, con incidencia en la mencionada región de los Montes de María, indicando, que la entonces agente del Ministerio Publico, representado por la Procuradora 46 Judicial II en Asuntos Penales Dra. María Isabel Arango Henao, presentó ante esta Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de esta ciudad, informe y concepto en el que se relacionaban los daños sufridos y formulaba solicitudes y propuestas de reparación, en favor de las comunidad del corregimiento de "El Salado" jurisdicción del municipio de Córdoba, en el departamento de Bolívar, como respuesta a la solicitud que hiciera la Magistratura en el aludido proceso, además, señaló que en ese sentido, ya se había tomado decisión por parte de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia de la Magistrada Dra. Lester María González, en Macrosentencia del 23 de mayo de 2018, que por orden de la Corte Suprema de justicia, recomponía la decisión adoptada el 20 de noviembre de 2014 dictada en contra los postulados: SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, EDGAR IGNACIO FIERRO FLORES, JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA, UBER ENRIQUE BANQUÉZ MARTÍNEZ, JOSÉ GREGORIO MANGONES LUGO, JOSÉ BERNARDO LOZADA ORTIZ, LEONARDO ENRIQUE SÁNCHEZ BARBOSA, SERGIO MANUEL CÓRDOBA ÁVILA, MIGUEL RAMÓN POSADA CASTILLO, JULIO MANUEL ARGUMEDO GARCÍA, OSCAR JOSÉ OSPINO PACHECO y HERNANDO DE JESÚS FONTALVO SÁNCHEZ, fallo en el que se reconoció a las comunidades de "El salado" y de "Alta Montaña" como sujetos de reparación colectiva, ordenando la implementación de una serie de mecanismos o medidas para materializar dicha reparación, por lo que la Sala de Justicia y Paz de esta ciudad, se abstuvo de pronunciarse sobre las solicitudes de la Procuradora 46, toda vez que otro despacho judicial ya había hecho lo propio con anterioridad, expresando lo siguiente: *"a esta Sala no le está dado en estos momentos pronunciarse en esta decisión emitida por la vía anticipada sobre aspectos que ya fueron debatidos y*

resueltos en la sentencia macro, por manera que téngase como judicialmente reconocidos y cumplidos estos aspectos de reparación colectiva a que alude el Ministerio Público."

b) El otro proceso al que hizo referencia el señor Procurador lo fue el identificado con radicado de Sala 11-001-60-00253-2006-80665, seguido en contra del postulado LUIS PEDRO BELTRÁN y en el que su sentencia anticipada el agente del Ministerio rindió concepto acerca de la pertinencia de obtener el reconocimiento como sujeto de reparación colectiva, en favor de la comunidad del corregimiento de Chengue, jurisdicción del municipio de Ovejas, Sucre, representado a través de la Asociación de Víctimas de Chengue, ASOVICHE, por el cual ese agente solicitó en favor de dicha víctima colectiva, una serie de medidas para materializar la reparación de la misma.

Resaltó, igualmente, que el Misterio Público con lo anterior acredita que, a través de sus delegados en cuanto a las víctimas colectivas e indeterminadas del autodenominado Bloque Héroes de Montes de María de las AUC, ha venido conceptuando y formulando oportunamente solicitudes de reparaciones colectivas.

Por otra parte, indica, que en la precitada sentencia anticipada de fecha 14 de diciembre de 2020, proferida por esta Sala de Justicia y Paz en el proceso radicado No. 08-001-22-52-003-2016-83155 en contra de los postulados EDELMIRO ANAYA GONZALES y otros, resolvió en el numeral ***VIGÉSIMO PRIMERO:*** *"de acuerdo con lo indicado en el acápite "4.2. Consideraciones de la Sala sobre la dimensión colectiva del daño" de esta sentencia, SE INSTA a la Procuraduría Delegada para que, si no se ha hecho, en una próxima actuación de Justicia y Paz que se tramite en contra de postulados del Bloque Héroes de los Montes de María proceda a presentar en la etapa procesal pertinente las afectaciones causadas al sujeto de reparación colectiva Zona Rural de Ovejas, veredas: Villa Colombia, Medellín, La Coquera, El Palmar, San Francisco y Borrachera, e introduzca los*

correspondientes soportes que ameriten un pronunciamiento al respecto por parte de la Sala."

Por lo que, atendiendo a lo dispuesto en dicha decisión, el señor Procurador 6º. Judicial de Apoyo a Víctimas, ofició a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV, a fin de obtener información acerca de los enunciados sujetos de reparación colectiva, de donde a través de oficio de fecha octubre 14 de 2022 suscrito por CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES en su calidad de Directora Técnica de Reparación, se obtuvo la siguiente información: *"El proceso de Reparación Colectiva trata de un programa administrativo dirigido al reconocimiento, dignificación y reparación integral de comunidades (campesinas, barriales o étnicas), organizaciones sociales, movimientos políticos o grupos que han sufrido daños colectivos en el marco del conflicto armado. El proceso es ampliamente participativo y concertado con el sujeto colectivo y se lleva a cabo mediante una Ruta de Reparación Colectiva, la cual inicia desde el momento mismo en que se ha decidido sobre la inclusión del colectivo en el Registro Único de Víctimas (RUV), y la posterior notificación del acto administrativo, y finaliza con el cierre de la implementación de la ruta, una vez se ha cumplido con la totalidad de medidas acordadas con el sujeto. Mediante la Resolución 03143 del 23 de julio de 2018, se adopta el modelo operativo de Reparación Colectiva de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y en su anexo técnico, se evidencia la Ruta de Reparación Colectiva, la cual se materializa en las siguientes cinco fases:*

1. ***Identificación*** *La Ruta de Reparación colectiva inicia cuando la Resolución de Inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV) es notificada al colectivo. En el desarrollo de esta fase, se realiza una revisión de la información respecto a violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que hayan podido producir daños colectivos, que contribuyeron a la identificación del Sujeto de Reparación Colectiva.*

La existencia del Colectivo se establece desde una cosmovisión y valores propios de la cultura desde la vivencia comunitaria, ancestral e histórica. Los elementos de los colectivos étnicos, para el programa de reparación colectiva, también están dados desde sus prácticas colectivas, formas de organización y relacionamiento, proyecto colectivo, organización, y relacionamiento y territorio.

2. ***Alistamiento*** *El objetivo de esta fase, como su nombre lo indica, es alistar al Sujeto Colectivo y a las instituciones del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) territorial y nacional relacionadas con el mismo, para el proceso de reparación que inicia. Para ello, con el colectivo se acuerdan espacios para socializar las características del modelo de reparación colectiva, sus objetivos, componentes, mecanismos, alcances y responsabilidades en el mismo. Así mismo, se conforman espacios de participación e interlocución del Sujeto de Reparación Colectiva (SRC) con las instituciones para dinamizar el proceso y mantener el diálogo con la Unidad para las Víctimas y las instituciones del SNARIV, cuando sea el caso.*

3. ***Caracterización del daño*** *De conformidad con el Convenio 169 de la OIT, la Ley 21 de 1991 y el Bloque de constitucionalidad, es obligación de los Estados consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados, en particular, a través de sus instituciones representativas, cada vez que prevea medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. Por tanto, para las fases de Caracterización del Daño y Formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva, se desarrolla la consulta previa, con la coordinación del Ministerio del Interior y conforme a lo establecido en los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011.*

   Esta fase representa la columna vertebral del modelo de reparación colectiva, ya que su objetivo consiste en identificar los daños ocasionados

a los atributos colectivos a causa del conflicto armado, buscando establecer como estaban estos antes del conflicto armado, que pasó con ellos durante los hechos de violencia y como se encuentran en la actualidad.

De esta manera, los daños colectivos son entendidos como la afectación o el impacto negativo que generó el conflicto armado sobre alguno o la totalidad de los atributos ocasionado por la violación de los derechos colectivos, la violación grave y/o manifiesta de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o el impacto colectivo de la violación de derechos individuales.

4. ***Formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC)*** *La formulación del plan de reparación colectiva se desarrolla en el marco del derecho fundamental de la Consulta Previa, como se expresa en los Decretos Ley 4633 y 4635 de 2011, se garantiza la concertación a través de escenarios de participación y reflexión acerca del alcance del programa donde los planes de vida, planes etno-culturales y planes de largo y buen camino se constituyen en el eje articulador de las medidas de reparación.*

El objetivo de esta fase es definir las acciones acordadas entre la Unidad y el sujeto colectivo como contribución a su reparación integral. En esta, se organiza la información recolectada durante la fase de Diagnóstico del Daño, con el fin de determinar: a. la situación esperada; b. las alternativas de solución; y c. el curso de acción para reparar el daño a los atributos del sujeto colectivo. Esto se realiza con el fin de formular objetivos, productos, actividades, costos, indicadores y un cronograma, acordado con el colectivo, para la implementación de las acciones que deben encontrarse asociadas a las afectaciones que sufrieron los atributos del sujeto como consecuencia del conflicto armado.

5. ***Implementación*** *En esta última fase, las medidas de reparación identificadas en los PIRC deben ser implementadas en concordancia con los principios de gradualidad y complementariedad enmarcados en la Ley 1448 de 2011, mediante la ejecución de las actividades y acciones contempladas en el PIRC y en los plazos establecidos. Durante esta fase, la Unidad para las Víctimas debe ejecutar las medidas que le son propias, coordinar la ejecución de aquellas en relación con las entidades territoriales y entidades del SNARIV, y apoyar la gestión de los recursos técnicos y financieros para la implementación del PIRC en su conjunto.*

   Dicho esto, desde la Dirección de Reparación, se confirma que, revisados los sistemas de información de esta entidad, se evidencia que mediante Resolución No. 2015-254775 del 05 de noviembre de 2015 se incluye en el Registro Único de Víctimas a la Comunidad de la zona rural de Ovejas, veredas Villa Colombia, Medellín, El Palmar, Borrachera, La Coquera y San Francisco. Asimismo, se permitió allegar el diagnóstico del daño del sujeto de reparación colectiva zona rural de ovejas que se encuentra en fase de implementación:"

Finalmente, manifestó el Ministerio Publico, que tal y como se puede apreciar en la información suministrada por la Unidad de Atención a Víctimas, el Plan Integral de Reparación Colectiva en favor de las Comunidades de la zona rural de Ovejas: veredas Villa Colombia, Medellín, El Palmar, Borrachera, La Coquera y San Francisco, se encuentra en su fase final, es decir en "Implementación", con una ejecución de más del 75% a fecha 31 de agosto de 2022, por lo que se hace innecesario que por parte de la Procuraduría General de la Nación y previa consulta de la Coordinación de Justicia y Paz de la entidad, se formulen solicitudes de reparación en favor de las citadas víctimas colectivas, toda vez que sus derechos no han sido desconocidos ni sus garantías fundamentales se encuentran amenazadas, dado que el Estado, a través de la UARIV está implementando las medidas necesarias para satisfacer sus derechos como víctimas.

No obstante, lo anterior, concluyó indicando que ese despacho continuará atento al seguimiento de la culminación del PIRC, en dichas comunidades y adicionalmente se analizará la posibilidad de rendir concepto y formular solicitudes en favor de otras víctimas colectivas, en los sucesivos incidentes de reparación que se presenten[324].

4.2. Consideraciones de la Sala sobre la dimensión colectiva del daño.

4.2.1. Preliminares.

Tal y como lo ha indicado la honorable Corte Constitucional[325]: *"El derecho a la reparación integral se deriva del artículo 1 (dignidad y Estado Social de Derecho)[326], del artículo 2 (protección de las personas, la efectividad de los derechos y el aseguramiento del orden justo)[327], del artículo 13 (protección de las personas se encuentren en debilidad manifiesta)[328], del artículo 93 (tratados que hacen parte del bloque de constitucionalidad)[329], del artículo 229 (acceso a la administración de justicia)[330] y del artículo 230 (el principio general del derecho*

[324] Además del anterior informe o intervención del señor Procurador anexó al mismo:
1. RESOLUCIÓN No. 2015-254775 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2015 FSC- GK000000219 "Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 2.2.2.3.11 del Decreto 1084 de 2015 y el artículo 37 del Decreto 4800 de 2014"
2. Diagnóstico del daño del sujeto de reparación colectiva zona rural de ovejas - 6 veredas: villa Colombia, Medellín, La Coquera, El Palmar, San Francisco y Borrachera, municipio Ovejas, departamento Sucre.

[325] Sentencia T-718 del 11 de diciembre de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

[326] Cita de la Corte. Artículo 1 de la Constitución Política: "Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general".

[327] Cita de la Corte. Artículo 2 de la Constitución Política: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares".

[328] Cita de la Corte. Artículo 13 de la Constitución Política: "…El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan".

[329] Cita de la Corte. Artículo 93 de la Constitución Política: "Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia".

[330] Cita de la Corte. Artículo 229 de la Constitución Política: "Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia…".

de daños, según el cual quien comete un daño, debe indemnizarlo)[331] *y de los numerales 6 y 7 del artículo 250 (reparación integral y los mecanismos de justicia restaurativa)*[332]*, todos ellos de la Constitución Política*".

En cuanto a la dimensión colectiva de la reparación, el alto Tribunal Constitucional ha señalado que se materializa *"en medidas orientadas a reparar ya no los daños individuales, pues para ello existe la reparación individual, sino aquellos daños sufridos por un sujeto colectivo. Por esa razón, las medidas que pretendan la reparación de los sujetos colectivos deben proyectarse a la comunidad, tener un carácter simbólico o consistir en medidas de satisfacción"*[333].

En cuanto hace a la normativa transicional, el artículo 8 de la Ley 975 de 2005 prevé que la reparación colectiva *"debe orientarse a la reconstrucción psico-social de las poblaciones afectadas por la violencia, para lo cual debía tenerse en cuenta y adoptar medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar, la dignidad y la vida privada de las víctimas, en especial si se trataba de actos de violencia sexual*[334]*. Posteriormente, la Ley 1488 de 2011 profundizó el desarrollo normativo de las reparaciones colectivas y la forma como deben implementarse*[335]*. En todo caso, desde los inicios de los programas de reparación colectiva se reconoció que dicha reparación exigía unas medidas especiales y diferenciadas acorde con el tipo del delito para proteger la dignidad de las víctimas"*[336]; así entonces, *"La reparación colectiva puede llevarse a cabo de tres maneras: a través de medidas de satisfacción, medidas de carácter simbólico y medidas que se proyecten en la comunidad"*[337].

A su turno, el artículo 152 de la Ley 1448 del 2011 determina como sujetos de reparación colectiva: *"(i) los grupos sociales y políticos, (ii) organizaciones sociales y políticas, y (iii) las comunidades determinadas que, por la cultura, la zona, el territorio o el propósito común, son consideradas sujetos colectivos"*;

---

[331] Cita de la Corte. Artículo 230 de la Constitución Política.
[332] Cita de la Corte. Numerales 6 y 7 del artículo 250: "6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito. 7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa".
[333] Sentencia T-718 del 11 de diciembre de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[334] Cita de la Corte. Ver artículos 8 y 38 de la Ley 975 de 2005.
[335] Cita de la Corte. Ver artículo 151 de la Ley 1448 de 2011.
[336] Sentencia T-718.
[337] Ibídem.

correspondiéndole a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas *"implementar los programa de reparación colectiva en los términos del artículo 151 y 152 de la Ley 1448 de 2011".*

La definición y alcance de la reparación colectiva se desprende del artículo 222 del Decreto 4800 de 2011, de la siguiente manera:

> *"el conjunto de medidas a que tienen derecho los sujetos colectivos que hayan sufrido alguno de los eventos definidos en el artículo 151 de la Ley 1448 de 2011, las cuales comprenderán medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en los componentes político, material y simbólico.*
>
> *La reparación colectiva estará dirigida al reconocimiento y dignificación de los sujetos de reparación colectiva, la recuperación psicosocial, a la inclusión ciudadana como sujetos plenos de derecho, a la reconstrucción del tejido social, a la reconstrucción de confianza de la sociedad en el Estado en las zonas y territorios afectados por el conflicto armado, a la recuperación y/o fortalecimiento de la institucionalidad del Estado Social de Derecho para la consecución de la reconciliación nacional y la convivencia pacífica.*
>
> *Parágrafo. La reparación colectiva tendrá un enfoque transformador y diferencial en tanto propenda por eliminar los esquemas de discriminación y marginación de los sujetos colectivos, que pudieron contribuir a la ocurrencia de los hechos victimizantes (…)".*

De acuerdo con todo lo anterior, aunado a lo establecido en el artículo 225 del Decreto 4800 de 2011, *"la reparación tiene como fines el reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos, la reconstrucción del proyecto de vida, la recuperación psicofísica de los grupos afectados, a la inclusión ciudadana y a la reconstrucción del tejido social. En adición a estos propósitos, la reparación colectiva debe estar orientada siempre con un enfoque transformador y diferencial que excluya cualquier forma de discriminación"*[338].

Por su parte, conforme se encuentra establecido en el artículo 227 y subsiguientes del Decreto 4800 de 2011, la *identificación* de los sujetos de reparación colectiva radica en cabeza de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por oferta del Estado o por solicitud de aquellos, luego de lo cual devienen las fases de: *alistamiento* para iniciar la construcción de los planes integrales de reparación colectiva; *identificación y diagnóstico* de los daños

[338] Ídem.

colectivos; *diseño y formulación* concertada del plan integral de reparación colectiva; *implementación* del plan diseñado y formulado en los tiempos convenidos; y *seguimiento, evaluación y monitoreo* periódico del cumplimiento de lo fijado.

4.2.2. Del caso en concreto.

Sobre el particular, sea lo primero indicar que, de acuerdo a los documentos aportados por el señor Procurador y conforme a lo advertido durante su intervención, se tiene que las comunidades de El Salado, la Alta Montaña y Chengue comunidades de la región de los Montes de María, ya han sido identificadas por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a Víctimas UARIV como sujetos de reparación colectiva y sus planes integrales de reparación se encuentran en la fase de implementación; inclusive, mediante Resolución No. 2015-253099 del 03 de noviembre de 2015, se observa que se dispuso por esa entidad, entre otras cosas: *"INCLUIR en el Registro Único de Víctimas a la Comunidad Chengue del municipio de Ovejas (...).* Así mismo, mediante Resolución No. 2015-254775 de fecha 5 de noviembre de 2015, asimismo dispuso esa entidad, entre otras cosas *"INCLUIR en el Registro Único de Víctimas a la Comunidad de la zona rural de Ovejas, veredas Villa Colombia, Medellín, El Palmar, Borrachera, La Coquera y San Francisco".* Sin embargo, a la fecha de la emisión de esta sentencia, no se ha tenido conocimiento que ya se hubiese llevado a cabo efectivamente la formulación del plan integral de reparación colectiva PIRC, así como las subsiguientes etapas a la de implementación, como lo son las de seguimiento, evaluación y monitoreo, conforme a lo previsto en la normativa transicional.

Ahora bien, de acuerdo con lo registrado en esta decisión y teniendo en cuenta lo expuesto por el señor representante del Ministerio Público, se tiene que ya se ha hecho el reconocimiento de las comunidades de El Salado, la Alta Montaña y Chengue de los departamentos de Bolívar y Sucre, como sujetos de reparación colectiva, en el evento de que aún a la fecha de ejecutoria de esta sentencia no se hubiese estructurado con la comunidad el plan integral de reparación colectiva PIRC, se exhorta a la Subdirección de reparación colectiva de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV para que proceda a ello con la mayor prontitud, y durante su diseño y

formulación concertada se tengan en cuenta los importantes aportes expuestos por el Ministerio Público en esta actuación.

Conforme a lo expuesto en precedencia y dado que, como quedó visto, en la providencia del 23 de mayo de 2018, que recompuso la macrosentencia del 20 de noviembre de 2014 de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, los proveídos emitidos por esta Sala de Justicia y Paz con ponencia de la suscrita Magistrada que fueron relacionados por el agente del Ministerio Publico precedentemente, se identificaron como sujetos de reparación colectiva a las comunidades de El Salado, la Alta Montaña y Chengue, se establecieron allí los daños causados y se adoptaron las determinaciones encaminadas al cumplimiento de las medidas de reparación colectiva, por lo que en esta oportunidad esta Sala tenga nuevamente que volverse a pronunciarse en esta decisión emitida por la vía anticipada sobre aspectos que ya fueron debatidos y resueltos en las aludidas decisiones, por manera que téngase como judicialmente reconocidos y cumplidos estos aspectos de reparación colectiva a que se refiere el Ministerio Público.

No obstante, se exhorta a través de la presente sentencia a la Subdirección de reparación colectiva de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV para que dentro del próximo Procedimiento de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana presente a las comunidades de los Montes de María, en audiencia pública, un informe detallado acerca de cuáles compromisos adoptados en los planes de reparación colectiva han sido ya cumplidos en su totalidad, cuáles no y las razones por las que no se han hecho durante su implementación y qué articulaciones interinstitucionales se están adelantando con el propósito de llevar a cabo las acciones que aún se encuentran pendientes por cumplirse, respecto de las cuales esta Sala de Conocimiento exhorta a todas estas instituciones al cumplimiento del deber que les asista respecto a la efectividad de lo procurado.

Por último, en consideración a que el Ministerio Público no presentó conclusiones ni estudios sobre la dimensión colectiva del daño ocasionado por los postulados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** (alias “Daniel”) y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** (alias “El Ñato”), quienes formaron parte del extinto Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, a las comunidades afectadas por estos, sin que se hubiese dado lugar a

debate y pruebas sobre ese tópico en el incidente de reparación integral de carácter excepcional dentro de este proceso, tal situación releva a Sala de cualquier pronunciamiento en punto de reparación colectiva respecto de dicha zona; sin embargo, dado que de todas maneras se aportó información que da cuenta de la identificación como sujeto de reparación colectiva de la comunidad de Chengue del municipio de Ovejas y Zona Rural de Ovejas, veredas: Villa Colombia, Medellín, La Coquera, El Palmar, San Francisco y Borrachera, sin que se cuenten con elementos adicionales que permitan establecer qué ha pasado con las demás etapas de la ruta de reparación colectiva, teniendo en cuenta que la presente sentencia es parcial, se insta a la Procuraduría Delegada para que, si no se ha hecho, en una próxima actuación de Justicia y Paz que se tramite en contra de postulados del Bloque Héroes de los Montes de María proceda a presentar en la etapa procesal pertinente las afectaciones a ese sujeto de reparación colectiva e introduzca los soportes que ameriten un pronunciamiento al respecto conforme se encuentre correspondiente a derecho y corresponda a nuevas situaciones a las ya definidas .

5. Actos de Contribución a la Reparación Integral.

De acuerdo con los artículos 44 de la Ley 975 de 2005, modificado por la Ley 1592 de 2012, y 2.2.5.1.2.2.19 del Decreto 1069 de 2015, y en virtud de lo ordenado por esta Colegiatura en relación con las medidas de satisfacción y garantías de no repetición a lo largo de esta decisión, los postulados aquí condenados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA,** deberán comprometerse a realizar lo siguiente, en cuyo direccionamiento se les ordena:

- La divulgación de la verdad de los hechos acaecidos y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas, exaltando y restableciendo su honra y buen nombre, aclarando que las personas que se vieron afectadas con sus conductas criminales fueron injustamente señaladas y desacreditadas, y destacando la importancia de reconocer y practicar el respeto y la tolerancia por la libertad de pensamiento, ideologías, política, la diversidad, el culto o la religión y el comprometimiento de nunca más volver a cometer actos criminales como los padecidos por las víctimas de este proceso adelantado conforme a la ley de Justicia y Paz.

- El reconocimiento público y difundido a nivel regional, de su responsabilidad, la declaración pública de arrepentimiento y el compromiso reiteramos de no volver a incurrir en conductas punibles. Así mismo, presentar solicitud de perdón a todas las víctimas que voluntariamente deseen estar presentes y recibirlo, en el acto público que organice la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, conforme a lo que viene ordenado en el cuerpo de esta decisión, expresando a toda la sociedad que no es legítimo arrebatarle la vida, ni su libertad, ni su estabilidad social, familiar, económica ni emocional a algún ser humano.

- Participar en los demás actos simbólicos de resarcimiento y redignificación de las víctimas, a los que sea convocado dentro de su proceso de reintegración.

- Colaborar eficazmente para la localización de personas secuestradas o desaparecidas y la localización de los cadáveres y restos óseos de víctimas, de los que tengan conocimiento.

- Llevar a cabo acciones de servicio social a las que haya lugar como parte de su proceso de reintegración social, conforme sean convocados para ello.

Para el cumplimiento de todo esto se exhorta y se insta a la Fiscalía General de la Nación para hacer seguimiento al cumplimiento de lo aquí ordenado en lo que corresponda, igualmente, al Ministerio Publico, a quien como autoridad judicial haga seguimiento de lo ordenado en esta sentencia, así como a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas UARIV en lo que a dicho organismo corresponde.

Se reiteran aquí las consideraciones y ordenes determinadas en precedencia con relación a lo pedido por los señores representantes de víctimas que han hecho parte de este proceso en desarrollo del incidente de reparación integral a las víctimas de carácter excepcional y que como hemos visto corresponden a aspectos que aun tratándose en principio de atenciones individuales para cada una de las víctimas que representan y que así lo requieran, de todas maneras redundan en la colectividad debido a que las acciones criminales desarrolladas en contra de los habitantes de estas comunidades causaron la violación a múltiples derechos y garantías fundamentales que repercuten de manera negativa en toda la colectividad y agreden el tejido social.

6. Prohibición de la doble reparación.

Con relación a las víctimas a quienes se les ha reconocido indemnizaciones por los perjuicios y daños causados y han resultado beneficiadas por pagos realizados por la Unidad Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en ningún caso podrán recibir doble reparación, ya sea por el pronunciamiento de este fallo, por decisión de la jurisdicción ordinaria, por vía administrativa, o por fallo internacional en donde se hubiese declarado la responsabilidad del Estado Colombiano.

En consecuencia, dicha entidad, en los casos en que proceda, deberá descontar las cifras ya reconocidas, en virtud de la prohibición de la doble reparación y una vez en firme la presente decisión, con fundamento en lo dispuesto en la ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 del mismo año.

Las diligencias se remitirán de manera inmediata una vez cobre ejecutoria esta sentencia a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para que realice las gestiones pertinentes encaminadas al reconocimiento de todo lo establecido en esta sentencia.

En mérito de lo expuesto, ***la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,***

XI. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR que los postulados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** (alias "Daniel") y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** (alias "El Ñato"), identificados con las cédulas de ciudadanía No. 78.381.077 expedida en San Andrés de Sotavento (Córdoba) y la No. 92.447.350 expedida en San Onofre (Sucre), respectivamente, quienes formaron parte del extinto Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, son, hasta este momento, **elegibles para acceder a los beneficios contemplados en la Ley de Justicia y Paz**, tal y como se expuso en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: DECLARAR que el otrora Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia fue el responsable de los hechos por los

que en esta oportunidad se emite sentencia condenatoria, al cual pertenecieron los sentenciados postulados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** (alias "Daniel") y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** (alias "El Ñato"), con las responsabilidades que a cada uno de estos corresponde conforme al cuerpo de esta sentencia[339].

TERCERO: DECLARAR LEGALIZADOS los cargos, respecto de los cuales se emitió decisión en ese sentido, en la forma y términos en que quedaron expuestos detalladamente en la parte motiva de esta decisión y con las consideraciones contenidas en los acápites de *"cuestión final"* de cada uno de los patrones de macrocriminalidad, los cuales le fueron imputados y formulados a **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** (alias "Daniel") y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** (alias "El Ñato"), por parte de la Fiscalía General de la Nación, y que fueron aceptados de manera libre, voluntaria, espontánea y asistidos por sus defensoras; así mismo, **DECLARAR** que los hechos delictivos fueron cometidos por los postulados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA,** durante y con ocasión de su pertenencia al denominado Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia.

CUARTO: DECLARAR que los cargos legalizados con múltiples delitos en esta sentencia fueron constitutivos de los **PATRONES DE MACROCRIMINALIDAD** de homicidios selectivos o múltiples, desplazamiento forzado y desaparición forzada, que, a su vez, constituyeron graves, sistemáticas y generalizadas violaciones al Derecho Internacional Humanitario DIH como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

QUINTO: NO LEGALIZAR los cargos que se relacionan a continuación:

1. El cargo No. 11 del patrón de macrocriminalidad de homicidios selectivos y múltiples, en donde se registró como víctima a RAFAEL ENRIQUE MERCADO VITOLA, se legaliza parcialmente, esto es, solo por el delito de secuestro simple, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

[339] Es de aclarar que hubo cargos que hicieron parte de este proceso y que no obstante fueron legalizados no se presentaron solicitudes o reclamaciones reparatorias por parte de los representantes judiciales de víctimas respecto de los mismos en desarrollo del incidente de reparación integral a las víctimas de carácter excepcional.

2. El cargo No. 13 del patrón de macrocriminalidad de homicidios selectivos y múltiples, en el que se registró como víctima a OSCAR ÁLVAREZ PASTOR.

3. El cargo No. 45 del patrón de macrocriminalidad de desaparición forzada, en el que se registró como víctima a ANDRÉS BERRIO PRIMERA de acuerdo a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEXTO: CONDENAR al postulado **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** (alias "Daniel"), por la comisión de los delitos de: homicidio en persona protegida, artículo 135, bajo las circunstancias de mayor punibilidad de los numerales 5 y 8 del artículo 58; deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, artículo 159; desaparición forzada, artículo 165 y secuestro simple, artículo 168, todos del Código Penal Ley 599 del 2000, a la pena de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, y multa de veintiún mil cuatrocientos (21.400) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

SÉPTIMO: CONDENAR al postulado **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** (alias "El Ñato"), por la comisión de los delitos de: concierto para delinquir del artículo 340, con el agravante contenido en el inciso segundo *ejusdem*; homicidio en persona protegida, artículo 135, bajo las circunstancias de mayor punibilidad de los numerales 5 y 8 del artículo 58; deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, artículo 159 y desaparición forzada, artículo 165, todos del Código Penal Ley 599 del 2000, a la pena de cuatrocientos ochenta (480) meses de prisión, y multa de veinticinco mil doscientos (25.200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Adicionalmente, se les impone a los precitados postulados condenados las penas accesorias privativas de otros derechos como son: la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de doscientos cuarenta (240) meses, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un término de quince (15) años.

Lo anterior, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

OCTAVO: ORDENAR la acumulación jurídica de las penas impuestas a **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** (alias "Daniel") y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** (alias "El Ñato"), de acuerdo a las consideraciones

expuestas en el acápite intitulado *"VII. DE LA ACUMULACIÓN JURÍDICA DE PENAS"* de esta decisión.

NOVENO: CONCEDER a los postulados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** (alias "Daniel") y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** (alias "El Ñato"), el beneficio de la **pena alternativa, por un período de ocho (8) años de privación de la libertad**, como desmovilizados y postulados a la ley de Justicia y Paz, bajo las condiciones impuestas en la parte motiva de esta providencia. Consecuencia del otorgamiento del beneficio de la pena alternativa se suspende el cumplimiento de la pena ordinaria dispuesta en esta sentencia, en los términos del artículo 3 de la Ley 975 de 2005.

Parágrafo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.5.1.2.2.20 del Decreto 1069 de 2015, las penas ordinarias impuestas en el ordinal octavo de esta providencia conservarán su vigencia durante el cumplimiento de la pena alternativa y el período de libertad a prueba, y únicamente podrán declararse extinguidas cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones legales que sirvieron de base para su imposición, las señaladas en la sentencia y las relativas al período de la libertad a prueba conforme a los lineamientos legales. En consecuencia, la inobservancia de cualquiera de tales obligaciones conlleva a la revocatoria de la pena alternativa y en su lugar el cumplimiento de la pena ordinaria aquí determinada.

DÉCIMO: DECLARAR la extinción de dominio de los bienes señalados en el acápite *"IX. DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO"*, conforme a las previsiones en él consagradas.

UNDÉCIMO: además de los compromisos que se establecieron en el acápite *"X. DEL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS"*, que se entiende incluido a esta parte resolutiva de la sentencia, los postulados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** (alias "Daniel") y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** (alias "El Ñato"), suscribirán un acta en la que se comprometerán a promover la desmovilización de los grupos armados al margen de la ley y a garantizar la no repetición de los hechos criminales; así mismo, deberán vincularse y cumplir con el proceso de reintegración que para tal efecto disponga la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), conforme a los criterios dispuestos en el artículo 66 de la Ley 975 de 2005, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.5.1.6.1. del Decreto 1069 de 2015.

Así mismo, en consideración a lo dispuesto en los artículos 2.2.5.1.2.2.19 del Decreto 1069 de 2015 y 44 de la Ley 975 de 2005, modificado por la Ley 1592 de 2012, en aras de brindar su efectiva contribución a la reparación integral, los precitados postulados deberán comprometerse también a cumplir con lo dispuesto en el acápite intitulado *"5. Actos de contribución a la reparación integral"* de esta sentencia.

Parágrafo 1. Los anteriores compromisos serán tenidos en cuenta por el Juez que vigile la ejecución de la sentencia a efectos de determinar si, después del cumplimiento de la pena alternativa, procede en favor de los postulados el beneficio de libertad a prueba y, en el momento que se considere, su presentación ante tal funcionario judicial adquiridos los derechos, para lo cual, además, respecto de quien corresponda, deberá tener en cuenta en su favor el tiempo de permanencia de privación de la libertad por cuenta del proceso de justicia y paz, conforme a lo señalado en el artículo 2.2.5.1.2.2.21 del Decreto 1069 de 2015 y en todo caso teniendo en cuenta el estado particular y que corresponda a cada uno de estos postulados LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO y JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA, y a las facultades y competencias del despacho ejecutor de sentencias.

Parágrafo 2. Además, se advierte a los aquí condenados que, como la presente sentencia anticipada es parcial, deberán seguir cumpliendo con los requisitos de elegibilidad, establecidos en los artículos 10 y 11 de la Ley 975 de 2005, y deberán continuar concurriendo a las versiones libres y a todos los llamados que le hagan las autoridades judiciales, como la Fiscalía General de la Nación entre otros, so pena de verse incursos en alguna de las causales de exclusión previstas en el artículo 11A de la Ley 975 de 2005, adicionado por la Ley 1592 de 2012 y demás disposiciones legales por los incumplimientos.

DUODÉCIMO: si con posterioridad a la presente sentencia la autoridad judicial competente determina que alguno de los postulados aquí condenados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** (alias "Daniel") y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** (alias "El Ñato"), *i)* incurrió dolosamente en conductas delictivas con posterioridad a su desmovilización; o que *ii)* ha incumplido injustificadamente alguna de las obligaciones impuestas en esta sentencia o previstas en la ley para el goce del beneficio de la pena alternativa; o se establece que *iii)* no entregó, no ofreció o no denunció, en su condición de postulado condenado, todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado

organizado al margen de la ley al que perteneció, se revocará la pena alternativa y en su lugar se hará efectiva la pena principal y accesorias ordinarias inicialmente determinadas en la sentencia, sin perjuicio de los subrogados previstos en el procedimiento penal que corresponda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.2.2.23 del Decreto 1069 de 2015 y en el inciso 2º del artículo 26 de la Ley 1592 de 2012, que modificó el artículo 25 de la Ley 975 de 2005.

DECIMOTERCERO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que, con la suficiente antelación, convoque a las víctimas a los actos de desagravio a que se aluden en esta sentencia que deberán realizarse en alguna de las poblaciones que resultaron afectadas por el actuar criminal de los postulados aquí condenados, para lo cual se tendrá en cuenta, de todas maneras, la voluntad de las víctimas de asistir a dichos actos, y tenerse en cuenta que en aquellos actos donde se reconozca, acepte y repudie las graves y manifiestas violaciones a las normas internacionales de Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) realizará el acompañamiento previo y posterior cuando se trate de niños, niñas y adolescentes.

Para el cumplimiento de lo anterior, se exhorta a las autoridades departamentales, a la Policía y al Ejército Nacional para que bajo la Coordinación de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas y con la presencia de los señores abogados representantes de víctimas privados y de la Defensoría del Pueblo, se preste apoyo y se adelanten las gestiones necesarias para llevar a cabo los actos públicos de perdón y reconocimiento del buen nombre y dignidad de las víctimas de los hechos criminales cometidos por los aquí postulados condenados, conforme a las consideraciones, órdenes y disposiciones referidas en el cuerpo de esta sentencia.

DECIMOCUARTO: CONDENAR a los postulados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** (alias “Daniel”) y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** (alias “El Ñato”), de manera solidaria con los demás ex integrantes del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, al pago de todos los daños y perjuicios materiales e inmateriales, ocasionados con los punibles que fueron objeto de sentencia dentro del presente asunto, en los montos y condiciones establecidos en la parte motiva de esta providencia. Excepcionalmente se refiere igualmente la sentencia a lo que corresponda al Estado en subsidiariedad.

DECIMOQUINTO: RECONOCER como víctimas del otrora Bloque Héroes de los Montes de María de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia a las personas que acreditaron tal condición y que fueron relacionadas en el acápite *"X. DEL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE CARÁCTER EXCEPCIONAL A LAS VÍCTIMAS"* de esta providencia, quienes además probaron las afectaciones que tuvieron que soportar a causa del actuar de ese grupo armado organizado al margen de la ley; razón por la cual, se remitirá, por parte de la Secretaría de esta Sala de Justicia y Paz, la presente sentencia de manera inmediata, una vez se encuentre en firme, conjuntamente con un anexo reservado que contenga el listado de las víctimas con su información personal, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas, para que esa entidad proceda de manera inmediata a incluirlas en el Registro Único de Víctimas y se realicen las gestiones urgentes y pertinentes encaminadas al reconocimiento preferente de su reparación integral de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 del mismo año, así como lo señalado en los cánones 2.2.5.1.3.1, 2.2.5.1.3.2 y en el párrafo tercero del artículo 2.2.5.1.2.2.19 del Decreto 1069 de 2015, y demás normas que resulten concordantes.

DECIMOSEXTO: SOLICITAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-, que en aras de garantizar el derecho a la indemnización de quienes fueron reconocidos como víctimas dentro del presente proceso y que aún mantuvieren su condición de menores de edad, proceda a la constitución de encargos fiduciarios en una entidad bancaria autorizada de conformidad con lo descrito en el artículo 185 de la ley 1448 de 2011, y en el canon 2.2.7.3.16 del Decreto 1084 de 2015, que deberá encontrarse en el lugar más cercano del domicilio de las víctimas.

DECIMOSÉPTIMO: ORDENAR que las reparaciones administrativas canceladas por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV-, y las que a futuro se entreguen a quienes figuran como perjudicados dentro del presente asunto, sean tenidas en cuenta como parte de las sumas aquí reconocidas, por concepto de la indemnización de los perjuicios materiales e inmateriales, esto en virtud de la prohibición de doble reparación.

DECIMOCTAVO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-, y a las demás entidades que componen el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las

Víctimas –SNARIV-, e instituciones del Estado en esta sentencia determinadas, para que, teniendo en cuenta que los casos procesados por Justicia y Paz corresponden a graves violaciones a los derechos humanos como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y/o infracciones al DIH, proceda a dar cumplimiento a las medidas de reparación pedidas por los señores representantes de víctimas y dispuestas por la Magistratura, señaladas de manera particular en el acápite intitulado *"X. DEL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE CARÁCTER EXCEPCIONAL A LAS VÍCTIMAS"*, el cual se tiene como incorporado a la parte resolutiva de esta providencia judicial.

DECIMONOVENO: SE INSTA a la Fiscalía General de la Nación, para que, si aún no lo ha hecho y con relación a los cargos en donde se advierta mérito para ello, proceda a adelantar el trámite correspondiente a fin de lograr el asentamiento de los registros civiles de defunción de manera ágil y expedita; así mismo, se **INSTA** a la Sub Unidad de Exhumaciones de la Fiscalía, para que prosiga con las labores de búsqueda de las víctimas respecto de las cuales hasta la fecha no haya sido posible ubicar sus restos óseos.

VIGÉSIMO: EXHORTAR a la Agencia Colombiana para la Reincorporación y la Normalización ARN, para que, de manera mancomunada con el Ministerio de Salud y Protección Social, brinde atención especializada en salud también a los postulados **LUIS MIGUEL ESQUIVEL CASTILLO** (alias "Daniel") y **JUAN CARLOS REVOLLO PATERNINA** (alias "El Ñato"), en lo que corresponde a atención psicológica y médica, con el fin de identificar posibles traumas y secuelas psicológicas que posiblemente padezca como consecuencia de su permanencia en los grupos armados ilegales a los que pertenecieron; e, igualmente, se garantice y haga extensivos todos sus programas para hacer eficaz su reincorporación en la sociedad, a una vida sana y lícita, ello teniendo en cuenta que esto redunda igualmente en la protección de la comunidad y la convivencia pacífica de toda la sociedad la que tienen derechos todos como parte de la misma.

VIGESIMOPRIMERO: conforme a lo establecido en el parágrafo cuarto del artículo 2.2.5.1.2.3.2 del Decreto 1069 de 2015, **ADICIÓNESE** el listado de las víctimas que fueron reconocidas como tal y respecto de quienes se dispusieron medidas de reparación en esta sentencia conforme a lo solicitado en el incidente de carácter excepcional, a la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2014 por la Sala Homóloga del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con ponencia en ese entonces de la señora Magistrada Léster M. González R., rad. 11

001 22 52 000 2014 00027, la cual sirvió de base a la Fiscalía para coadyuvar la terminación del proceso por sentencia anticipada dentro del presente diligenciamiento, y en la que se precisaron y esclarecieron los patrones de macrocriminalidad y el contexto en los que se enmarcaron los cargos legalizados en esta providencia.

Infórmese la anterior determinación, para los efectos que resulten pertinentes, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-, Fondo para la Reparación de las Víctimas – FRV–, así como a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

VIGESIMOSEGUNDO: en firme esta sentencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 975 y 32 del Decreto 3011 de 2013, compilado por el Decreto 1069 de 2015, artículo 2.2.5.1.2.2.21, remítase la actuación al Juzgado Penal del Circuito con función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz del territorio nacional, para lo de su competencia.

VIGESIMOTERCERO: contra la presente decisión procede de manera exclusiva el recurso de apelación, que se surtirá ante la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, para los casos en que se invoque y se encuentre procedente.

En firme esta decisión, expídanse copias ante las autoridades correspondientes. Ejecútese lo demás de ley[340].

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

CECILIA LEONOR OLIVELLA ARAUJO
Magistrada

ROMEL DAVID ARÉVALO GONZÁLEZ
Magistrado

JOSÉ HAXEL DE LA PAVA MARULANDA
Magistrado

[340] La suscrita Magistrada Ponente fue debidamente comisionada por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla para dar lectura a la presente sentencia en la forma y términos en que ha sido puesta para conocimiento de todos.

Firmado Por:

Cecilia Leonor Olivella Araujo
Magistrada
Sala 3 Justicia Y Paz
Tribunal Superior De Barranquilla - Atlantico

Jose De La Pava Marulanda
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 2 Justicia Y Paz
Tribunal Superior De Barranquilla - Atlantico

Romel David Arevalo Gonzalez
Magistrado
Sala 004 Justicia Y Paz
Tribunal Superior De Barranquilla - Atlantico

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **e61ae7680d60c3e91ce1e23dc3ffa69e1a46b487b777f17a4c56a0a9a5012b3c**
Documento generado en 19/12/2024 02:55:40 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica